

# **UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA**

**Departamento de Sociología**



## **TESIS DOCTORAL**

La cultura política de la élite empresarial chilena. Un análisis comparado de los  
dirigentes gremiales de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento  
Fabril (2018–2019)

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR**

**PRESENTADA POR**

**Nelson Alejandro Osorio Rauld**

**Directoras**

**María Luz Morán Calvo–Sotelo**

**Leticia María Ruiz Rodríguez**

**Madrid**



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID

TESIS DOCTORAL

La cultura política de la élite empresarial chilena. Un análisis comparado de los  
dirigentes gremiales de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento  
Fabril (2018–2019)

Nelson Alejandro Osorio Rauld

Directoras de tesis

María Luz Morán Calvo–Sotelo  
Leticia María Ruiz Rodríguez

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  
2019



U N I V E R S I D A D  
**COMPLUTENSE**  
M A D R I D

## **DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LA TESIS PRESENTADA PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR**

D. Nelson Alejandro Osorio Rauld, estudiante en el Programa de Doctorado en Sociología y Antropología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, como autor/a de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor y titulada:

*La cultura política de la élite empresarial chilena. Un análisis comparado de los dirigentes gremiales de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril (2018–2019)*

y dirigida por: María Luz Morán Calvo-Sotelo y Leticia María Ruiz Rodríguez

### **DECLARO QUE:**

La tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones referidas al derecho de cita.

Del mismo modo, asumo frente a la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido de la tesis presentada de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

En Madrid, a 17 de julio de 2019

Fdo.: \_\_\_\_\_

Esta DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD debe ser insertada en la primera página de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor.

A mi compañera de vida Silvia y a mi hija Martina, que son la alegría de mi vida y quienes me dan la fuerza para nunca bajar los brazos.

Dedicada a mi abuela Betsabé Anglés Paredes, quien siempre está en mi corazón.

No podemos dejar que la UP vuelva a Chile. Fueron tiempos traumáticos que no podemos olvidar. Los empresarios que se esconden y los trabajadores que prefieren “lavarse las manos”, se arrepentirán. Recuerdo con rabia a los ‘pijes’ que en vez de votar siguieron esquiando mientras Allende ganaba por casi nada la elección del 70.

Después alegaban en contra de los “rojos y los demos”

*Andrés Montero, empresario.*

## **Reconocimientos**

Este trabajo de tesis es el resultado de un proyecto desarrollado en el marco del Concurso Becas de Doctorado en el Extranjero – Becas Chile convocatoria 2015, de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT.

Mis agradecimientos al Programa Becas de Doctorado en el Extranjero, BECAS CHILE, de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología –CONICYT– del gobierno de Chile, que hizo posible desarrollar esta investigación y perfeccionamiento académico.

Un reconocimiento especial y agradecido a mis directoras de tesis, María Luz Morán Calvo–Sotelo y Leticia María Ruiz Rodríguez, por todo su apoyo brindado durante estos años. Su confianza en mi trabajo y sus amables y rigurosos consejos fueron imprescindibles para poder hacer una mejor investigación.

No puedo dejar de mencionar a mi amigo Francisco Godoy, mi “coach”, que siempre me animó a seguir avanzando, nutriéndome con su energía positiva y conocimientos. También, a mis amigas y maestras, Inés Reca y Liliana Salazar, que desde la distancia me entregaron sus afectos y conocimientos para mejorar la calidad del trabajo.

Otras personas también contribuyeron de diversas maneras a lo largo de este viaje. Vaya mi gratitud también para los profesores Pepe Reig, Carlos Huneeus, José Ramón Montero, Octavio Avendaño, Manuel Antonio Garretón, Tomás Moulian, Cecilia Montero, José Ossandón, Rolando Álvarez, René Jara y Gonzalo Rojas, que me motivaron a seguir en el estudio de la cultura política de la élite empresarial, haciéndome saber lo importante que era avanzar en esta tarea.

Mi agradecimiento a todos los dirigentes empresariales que participaron en la investigación, por su inestimable aporte al desarrollo de este trabajo.

Finalmente, un reconocimiento especial a mi mujer y a mi hija, por todo el cariño y comprensión que han mostrado durante estos años. Ellas enriquecen mi vida.

# ÍNDICE GENERAL

<i>Resumen</i> .....	10
<i>Summary</i> .....	12
<b>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b> .....	<b>14</b>
1. <i>La cultura política de la élite empresarial</i> .....	14
2. <i>La formación de la cultura política de la élite empresarial</i> .....	23
3. <i>Justificación de la investigación</i> .....	25
4. <i>Pregunta, objetivos e hipótesis de investigación</i> .....	26
4.1. <i>Pregunta de investigación</i> .....	26
4.2. <i>Objetivo general</i> .....	27
4.3. <i>Objetivos específicos</i> .....	27
4.4. <i>Hipótesis general</i> .....	27
4.5. <i>Hipótesis auxiliar 1</i> .....	27
4.6. <i>Hipótesis auxiliar 2</i> .....	27
4.7. <i>Hipótesis auxiliar 3</i> .....	28
<b>METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN</b> .....	<b>29</b>
1. <i>Las entrevistas</i> .....	29
1.1. <i>Estrategias de acceso a la élite</i> .....	30
2. <i>El enfoque metodológico</i> .....	31
3. <i>La técnica de producción de información</i> .....	33
4. <i>El análisis de contenido como técnica de análisis de la información</i> .....	35
4.1. <i>Ficha de registro</i> .....	37
<b>CAPÍTULO III</b> .....	<b>39</b>
<b>REVISIÓN TEÓRICA Y MARCO OPERATIVO</b> .....	<b>39</b>
1. <i>El concepto de cultura política</i> .....	39
2. <i>Criterios de selección del enfoque</i> .....	42
3. <i>El concepto de socialización política</i> .....	46
3.1. <i>La socialización política de la élite empresarial</i> .....	50
4. <i>Conceptos operativos</i> .....	51
4.1. <i>La categoría socialización política</i> .....	51
4.2. <i>El concepto operativo de cultura política</i> .....	53
<b>CAPÍTULO IV</b> .....	<b>55</b>
<b>CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL DE LA ÉLITE EMPRESARIAL</b> .....	<b>55</b>
1. <i>Cargos, composición etaria y trayectoria dirigencial</i> .....	55
2. <i>Cargos dirigentes anteriores</i> .....	57
3. <i>Establecimientos educacionales: los colegios de élite</i> .....	59
4. <i>El tipo de educación: colegios elitistas confesionales o laicos</i> .....	61
5. <i>Escolaridad</i> .....	62
6. <i>Las universidades selectas</i> .....	63
7. <i>Las credenciales académicas</i> .....	65

8.	<i>La religión predominante</i> .....	67
9.	<i>Lectura de medios de comunicación</i> .....	68
10.	<i>Recapitulación</i> .....	69
<b>CAPÍTULO V</b> .....		<b>71</b>
<b>LA POSICIÓN SOCIAL DE LA ÉLITE EMPRESARIAL</b> .....		<b>71</b>
1.	<b><i>El contexto histórico</i></b> .....	<b>72</b>
1.1.	<i>La vieja democracia</i> .....	72
1.2.	<i>El gobierno de Frei y la “revolución en libertad”</i> .....	76
1.3.	<i>La Unidad Popular</i> .....	79
1.4.	<i>La dictadura militar</i> .....	81
2.	<b><i>La posición social de los entrevistados mayores de la élite empresarial</i></b> .....	<b>83</b>
2.1.	<i>Autoubicación en el espacio social</i> .....	86
2.2.	<i>Las ocupaciones de los padres</i> .....	87
3.	<b><i>La posición social de los entrevistados más jóvenes de la élite empresarial</i></b> .....	<b>92</b>
3.1.	<i>Autoubicación en el espacio social</i> .....	95
3.2.	<i>Las ocupaciones de los padres</i> .....	96
4.	<b><i>Recapitulación</i></b> .....	<b>99</b>
<b>CAPÍTULO VI</b> .....		<b>101</b>
<b>SOCIALIZACIÓN POLÍTICA FAMILIAR Y ESCOLAR EN LA ÉLITE EMPRESARIAL</b> .....		<b>101</b>
1.	<b><i>La socialización política familiar en los dirigentes mayores</i></b> .....	<b>103</b>
1.1.	<i>La “cuestión política” en los hogares</i> .....	103
1.2.	<i>Posición política de los padres</i> .....	104
1.3.	<i>La transmisión de valores</i> .....	106
1.4.	<i>Continuidad de afinidades políticas y “disentimiento político”</i> .....	108
2.	<b><i>La socialización política familiar en la generación más joven de la élite empresarial</i></b> .....	<b>110</b>
2.1.	<i>La “cuestión política” en los hogares</i> .....	110
2.2.	<i>Posición política de los padres</i> .....	112
2.3.	<i>La transmisión de valores</i> .....	116
2.4.	<i>La transmisión del “trauma sociopolítico”</i> .....	117
2.5.	<i>Continuidad de afinidades políticas y “disentimiento político”</i> .....	122
3.	<b><i>La socialización política escolar: educación cívica y participación política</i></b> .....	<b>126</b>
4.	<b><i>La formación cívica en los entrevistados mayores</i></b> .....	<b>127</b>
4.1.	<i>Aprendizajes políticos como dirigentes estudiantiles</i> .....	130
5.	<b><i>La formación cívica en los entrevistados menores</i></b> .....	<b>132</b>
4.1.	<i>Aprendizajes políticos como dirigentes estudiantiles</i> .....	136
<b>CAPÍTULO VII: LA ÉLITE EMPRESARIAL FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS DE LA UNIDAD POPULAR Y EL GOLPE MILITAR</b> .....		<b>139</b>
1.	<b><i>El concepto de memoria y cultura política</i></b> .....	<b>139</b>
2.	<b><i>Las memorias “traumáticas” en torno a la violencia política</i></b> .....	<b>141</b>
3.	<b><i>Memorias del desabastecimiento</i></b> .....	<b>147</b>
4.	<b><i>Memorias sobre la “polarización”</i></b> .....	<b>150</b>
5.	<b><i>Memorias en torno al golpe militar de 1973</i></b> .....	<b>152</b>
5.1.	<i>Las justificaciones del golpe militar</i> .....	154
6.	<b><i>La entrevistados más longevos y los Derechos Humanos</i></b> .....	<b>158</b>



7. Los entrevistados más jóvenes y los Derechos Humanos .....	166
<b>CAPÍTULO VIII .....</b>	<b>172</b>
<b>LA ÉLITE EMPRESARIAL Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA .....</b>	<b>172</b>
1. La élite empresarial frente al proceso de transición .....	172
2. El Sí y el No, asimétricos .....	179
3. La transición como motivo de orgullo cívico .....	183
<b>CAPÍTULO IX.....</b>	<b>188</b>
<b>LA ÉLITE EMPRESARIAL Y EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA .....</b>	<b>188</b>
1. El debate en torno al problema de la legitimidad de las instituciones.....	188
1.1. La élite empresarial y los senadores designados .....	193
2. Modernización y conducción de las élites .....	201
3.1. La élite empresarial, el malestar y las movilizaciones sociales .....	206
4. La élite empresarial y el cambio de sistema electoral .....	225
3.1. Discusiones en torno al sistema binominal.....	226
3.2. Las posturas de la élite empresarial frente al cambio de sistema electoral .....	229
5. La élite empresarial, los partidos y el Congreso Nacional.....	235
5.1. La élite empresarial y al reforma de inscripción automática y voto voluntario.....	247
6. La élite empresarial y el cambio en las reglas del juego institucional .....	250
6.1. ¿Crisis institucional o bajo desempeño de las instituciones políticas? .....	250
6.2. El debate en torno al cambio constitucional .....	253
6.3. La élite empresarial y el proceso constituyente para la Nueva Constitución.....	263
6.4. ¿Reforma constitucional o Nueva Constitución? .....	267
6.4.1. Fundamentos de la postura sobre un cambio en las reglas institucionales .....	269
<b>CAPÍTULO X .....</b>	<b>277</b>
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>277</b>
Problemas de la investigación y desafíos futuros .....	282
<b>Referencia bibliográfica .....</b>	<b>285</b>
Recursos electronicos.....	304
<b>Anexos.....</b>	<b>306</b>
1. Cuadro de códigos producido a partir del uso del ATLAS.ti .....	306
2. Carta formal de invitación para participar en el estudio.....	309

## Resumen

La presente investigación estudia la cultura política de los máximos dirigentes empresariales chilenos de dos organizaciones patronales del país: la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril.

En un contexto de ausencia de estudios sobre la cultura política del gran empresariado en el país andino, este trabajo buscó conocer y analizar el tipo de socialización política que tuvieron los miembros de la élite empresarial, poniendo especial énfasis tanto en la transmisión de valores y afinidades políticas emanadas desde sus familias de origen, como en las vivencias personales y/o familiares que experimentaron los líderes gremiales durante sus “años impresionables”; ambos fenómenos coinciden con períodos álgidos de la historia chilena, como fueron los “tiempos de la polarización” (1960–1973), la “experiencia socialista” (1970–1973) y el régimen militar (1973–1990).

Para afrontar este objetivo, se hizo uso de distintas fuentes de información, siendo novedosa la realización de entrevistas. Esta técnica fue complementada con una estrategia mixta que incluyó un análisis histórico, que sirvió para contextualizar las afirmaciones de los entrevistados, además de un conjunto de datos estadísticos y encuestas de opinión que permitieron, con fines comparativos, dar cuenta del clima de opinión pública en Chile durante los períodos analizados.

Los hallazgos en torno a este objetivo dan cuenta de una socialización política singular y distinta del resto de los chilenos, sobre todo por la posición social “favorecida” que tuvieron desde la infancia los protagonistas de este estudio. Así, en el caso de la generación de entrevistados mayores, su socialización política se encuentra marcada por una específica combinatoria entre valores liberales y posiciones políticas de derecha, muy propia de los sectores altos de la sociedad chilena de ese entonces. Sobre ese sustrato cultural actuaron una serie de experiencias familiares, que no hay inconveniente en tildar de “traumáticas”, que tienen que ver con algunas de las reformas emblemáticas emprendidas durante el gobierno del presidente Allende y que tienen un fuerte impacto emocional y sociopolítico en los individuos entrevistados, a juzgar por sus propias palabras. Ese particular proceso de socialización se deja ver claramente entre los entrevistados de la generación más joven, apenas niños por ese entonces, que revelan una transferencia ideológica familiar contemporánea de la transmisión de aquel “trauma sociopolítico”. Este proceso es también detectable entre los de más edad y, especialmente, en el empresariado agrícola enfrentado directamente a situaciones de violencia política. Todos ellos, en distintos grados, desarrollan una compleja amalgama de rasgos democráticos que se ven suspendidos por el reclamo urgente del “principio de autoridad”, que se verá concretado en el golpe militar de 1973 y el subsiguiente régimen autoritario.

Las entrevistas a la elite empresarial se habían planificado para que proporcionaran evidencias de esa fase que podemos llamar de “socialización primaria”, pero también sobre momentos posteriores de “maduración o adaptación” de aquellas actitudes. Así, una vez finalizada la tarea anterior, y tomando en consideración la literatura que matiza el carácter determinante de la socialización política en los “años impresionables”, se buscó conocer el impacto que ha tenido en los entrevistados el

proceso de “resocialización democrática” desde 1990 hasta la fecha. Para ello, se indagó en los posicionamientos que tienen los dirigentes frente a diversos hitos políticos, como fue el proceso de transición, la eliminación de los senadores designados, y otras reformas de gran significación democrática. Así, el análisis de las entrevistas permite dibujar los alineamientos actuales de la elite empresarial y rastrear los fundamentos de su visión de la “consolidación democrática”, con su gradual desmantelamiento del diseño institucional de “democracia protegida”, cuyo propósito, como es sabido, era mantener en democracia los recursos institucionales que aseguren que experiencias como la de la Unidad Popular no puedan repetirse.

Sobre este segundo objetivo, los hallazgos del trabajo muestran que la “experiencia autoritaria” no erradicó completamente la configuración ideológica democrática que había desarrollado la élite empresarial antes del “trauma”, el golpe y la dictadura, sino que ésta habría aflorado y renacido durante el transcurso de la democratización que ha vivido el país. Prueba de ello, son muchas de las posturas favorables a la eliminación de los “enclaves autoritarios”, con la salvedad de la Constitución de 1980, de la que el empresariado parece no querer prescindir. Así, finalmente la investigación muestra que la “resocialización democrática” presenta un límite: el recuerdo de aquel período, la naturaleza traumática de la socialización política, actúa como un resorte de legitimación de la Carta Fundamental, que sigue siendo vista como el principal recurso institucional para no volver al 10 de septiembre de 1973. Es esta interpretación una de las principales razones por la que el gran empresariado muestra dificultades para aceptar una “democracia plena”.

**Palabras clave:** élite empresarial, socialización política, Unidad Popular, Régimen militar, democracia, cultura política.

## Summary

This research focuses on the political culture of the foremost business leaders of two employer organizations in Chile: the Sociedad Nacional de Agricultura and the Sociedad de Fomento Fabril.

In a context of an absence of studies on the political culture of the most prominent businesses in the Andean country, this work sought to understand and analyze the type of political socialization that members of the business elite had, with an emphasis on both the transmission of values and political affinities emanating from their families of origin, as well as the personal and/or family experiences that leaders of these organizations has had during their “early years”. Both phenomena coincide with peak periods in Chilean history, such as the “period of polarization” (1960–1973), the “socialist experience” (1970-1973) and the military regime (1973-1990).

To address this objective, varied sources of information were used, including the introduction of interviews with business representatives. This technique was complemented by a mixed strategy that included historical analysis, which served to contextualize the interviewee statements, in addition to a set of statistics and opinion polls that helped to account for the climate of public opinion during the analyzed periods.

The findings around this objective account for a different political socialization for this particular group than the rest of the Chilean population, above all due to the “favored” social position that the protagonists of this study had since childhood. Thus, in the case of the generation of older respondents, political socialization is marked by a specific combination of liberal values and right-wing political positions, very typical of high sectors of Chilean society at the time before the breakdown democracy. Within that cultural substrata, there were a series of “traumatic” family experiences, which were related to some of the key reforms undertaken during the socialist government and which judging by their own words, have a strong emotional and socio-political impact on the interviewed individuals. This particular socialization process is clearly visible among those interviewed of the younger generation, just children back then, who reveal a contemporary family ideological transfer of that “sociopolitical trauma”. This process is also detectable among the oldest and, especially, in agricultural employers directly faced with situations of political violence. All of them, in varying degrees, develop a complex amalgamation of democratic features which are suspended by the urgent call of the “principle of authority”, which was made concrete in the 1973 military coup and the subsequent authoritarian regime.

After completing the previous task, and taking into consideration the literature that clarifies the determinism of political socialization in the “early years”, we sought to understand the impact that the “democratic resocialization” process has had on the interviewees from 1990 to date. To do this, the positions that leaders held about various political milestones, how the transition process went, the elimination of designated senators, and other major democratic reforms were investigated. Thus, the analysis of the interviews allows us to sketch out the current alignment of the business elite and trace the foundations of its vision of “democratic consolidation”, with its gradual dismantling of the institutional design of “protected democracy”, whose purpose, as it is known, was to

keep the institutional resources in democracy, that ensured that experiences such as that of Unidad Popular cannot be repeated.

With respect to the second objective, the findings of the work show that the “authoritarian experience” did not completely eradicate the democratic ideological mindset that the business elite had developed before the “trauma”, the coup and the dictatorship, but that it would have surfaced and was rebirthed during the course of the democratization that the country experienced. The proof of this, is that the majority of positions favorable towards the elimination of “authoritarian enclaves”, with the exception of the 1980 Constitution itself, from which the business elite seem not to want to dispense with.

Finally, the investigation shows that the “democratic resocialization” has a limit: the memory of that period (and the traumatic nature of political socialization), which supports the legitimization of the Fundamental Charter, which is still seen as the main institutional recourse to avoid going back to the 10<sup>th</sup> September 1973. This is one of the main reasons why the main businesses find it difficult to accept a “full democracy”.

**Word Key:** Business Elite, Political Socialization, Unidad Popular, Militar Regime, Democracy, Political Culture

## CAPÍTULO I

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

#### 1. La cultura política de la élite empresarial

Diversos rankings internacionales sitúan a Chile como un ejemplo de democracia en la región de América Latina, en los cuales se destaca, principalmente, su estabilidad y la calidad de sus procesos electorales<sup>1</sup>. Así, Chile goza junto a otros países como Uruguay y Costa Rica, de una imagen positiva en la comunidad internacional, por cuanto sus regímenes políticos parecen prosperar en una dirección adecuada hacia un horizonte democrático cada vez más avanzado.

Esta imagen de la democracia chilena –reconocida internacionalmente y sobre la que los medios de comunicación hacen eco en la opinión pública– contrasta notoriamente con la presencia de lo que algunos investigadores han denominado como una “crisis institucional” (Garretón, 2017; Fuentes & Joignant, 2015; LAPOP, 2016; cfr. CEP, 2017a)<sup>2</sup>, en la cual la legitimidad de las instituciones democráticas y su desempeño están fuertemente cuestionados por la ciudadanía.

En el contexto regional, desde los años ochenta hasta 2015, varios países que pasaron por experiencias autoritarias iniciaron gradualmente procesos de transición a la democracia y también vivieron el impulso de modernizaciones políticas y económicas importantes. Las experiencias fueron diversas, no existiendo una ruta única a seguir: en Argentina la experiencia de liberalización económica de la mano de Carlos Menem tuvo efectos significativos, ciclo que terminó dramáticamente con la situación del “corralito” en 2001, dando paso a una secuencia de gobiernos de centroizquierda liderados por los Kichner (Domínguez, 2005).

Por otra parte, se observó el ascenso de caudillismos presidencialistas con figuras, como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, bajo la retórica del socialismo del siglo XXI (Alcántara, 2014); los gobiernos de centroizquierda de Lula da Silva y Dilma Rousseff a través del Partido de los Trabajadores en Brasil (PT); la “revolución ciudadana” de Rafael Correa en Ecuador con su emblemática asamblea constituyente (Negretto, 2015), entre otras experiencias de orientación centroizquierdista que llevaron a algunos a analistas a calificar este proceso como un “ciclo progresista” (Katz, 2017, pág. 89; Garretón, 2012).

El mayor mérito que tuvieron la mayoría de estos gobiernos progresistas fue, sin lugar a dudas, la reducción de la pobreza en la región. Ciertamente, como indica el informe Latinobarómetro (2017), nunca antes se habían registrado tan pocos hogares (44%) en declarar que no les alcanzaba para llegar a fin de mes (Latinobarómetro, 2017,

---

<sup>1</sup> Al respecto, véase el índice de democracia de *The Economist* (2018) y también el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2016).

<sup>2</sup> Una perspectiva distinta la proporciona el Centro de Estudios Públicos (2017a), que refuta el diagnóstico de una “crisis institucional” en el país. Para esta entidad, el problema se produce por una mala evaluación ciudadana del desempeño de las instituciones, que se vería mejorada con reformas específicas para controlar la corrupción y el buen funcionamiento de la democracia.

pág. 52), cifra que ilustra una mejoría en el continente más desigual del planeta (LAPOP, 2012, pág. 40).

No obstante, reiterados casos de corrupción a nivel político (Gruenberg, 2007; Matamala, 2015; Ariño & Romero, 2016), pero sobre todo, los problemas de desigualdad socioeconómica en la región –ya a estas alturas endémicos– persistieron y mermaron el apoyo a estos gobiernos progresistas. Lo anterior, aunque siempre es materia de controversia académica, corrobora lo señalado por algunos expertos en materias de cultura política, quienes advierten que el mal desempeño económico de los regímenes democráticos tiene efectos negativos en las actitudes políticas de los ciudadanos (Almond, 1988, pág. 87; Diamond, Hartlyn, & Linz, 1999, págs. 17–18; Inglehart & Welzel, 2006, pág. 7).

Este descontento de los pueblos latinoamericanos con la democracia y con las instituciones representativas (Latinobarómetro, 2017; LAPOP, 2014) ha tenido una expresión política en algunos países con un giro hacia la derecha, marcando el fin del llamado ciclo “progresista”. Es así que, luego de más de una década de dominio político del centroizquierda, varios países han comenzado a optar por una vía alternativa más próxima al sector conservador (Svampa, 2017).

Este fenómeno de fin del ciclo progresista, auge de la derecha y crisis de las instituciones, también tiene lugar en Chile. De hecho, como se mencionó antes, en el país andino también se manifiesta una compleja relación entre ciudadanía y sistema político, que ha sido enfatizada por distintos investigadores, actores políticos y también informes internacionales.

Como bien es sabido, Chile gozó históricamente de un notable prestigio por el sólido desarrollo de su historia política, la que gran parte de la bibliografía destaca por su estabilidad política, como además, por la intensa articulación entre el mundo social y las instituciones representativas (Valenzuela, 1978; Ruiz, 2005; Moulian, 1994; Garretón, 2015; Luna & Rosenblatt, 2012). Así, muchos indican que a partir de 1932, el sistema de partidos funcionó como una “columna vertebral” de la sociedad chilena (Garretón, 1983, pág. 17), canalizando la mayoría de las demandas de democratización de la ciudadanía, afrontando con éxito profundas reformas democráticas durante gran parte del período señalado. Dicha imbricación entre política y sociedad incluso llevó al mismo Giovanni Sartori a resaltar al sistema de partidos chileno como uno de los más avanzados del mundo, después de Finlandia y Suiza (Sartori, 1976, pág. 313).

Sin embargo, en la actualidad, la situación sociopolítica es dramáticamente distante de la solidez de dicho prestigio. Esto es así porque la sociedad chilena, desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, muestra sistemáticamente una abrupta caída en distintos indicadores sobre la actividad política, donde, por ejemplo, la confianza en instituciones políticas no alcanza el 30%. Algo similar ocurre con la confianza interpersonal con bajas cifras en relación a otros países de la región, lo que también se puede apreciar en el declive en el apoyo a la democracia, que ha bajado aceleradamente entre 2015 y 2017, asimilándose cada vez más con el promedio de América Latina (Latinobarómetro, 2017).

Estas actitudes de desconfianza hacia actores e instituciones de la democracia son coherentes con la baja participación ciudadana en citas tales como elecciones

presidenciales, legislativas y de alcaldes, donde Chile se ubica dentro de los países con menor participación electoral dentro de América Latina (LAPOP, 2014, pág. 98).

En este contexto de cuestionamiento institucional (LAPOP, 2014) y/o de bajo desempeño de las instituciones políticas (CEP, 2017a), interesa enfocar los esfuerzos de investigación en uno de los principales actores del proceso de transición y consolidación del régimen democrático: me refiero a la élite empresarial, particularmente, a la *élite de dirigentes empresariales chilenos* que conducen a las dos organizaciones patronales históricamente más influyentes del país: la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) (Arriagada, 1970 y 2005; Campero, 1984; Rojas, 2000).

De este modo, parece ser que para comprender de mejor forma la “vida política” de los chilenos en este contexto de persistente cuestionamiento y desafección política, es importante seguir la recomendación de los célebres economistas Acemoglu & Robinson (2012), y poner el foco de la investigación en la “cultura política” de aquellos que ejercen el poder económico, puesto que este actor es decisivo en la disputa por la distribución del poder político y de los negocios, algo que también ocurre en el país andino (Tironi, 1999; Moulian, 1997; Solimano, 2012; Huneus, 2001).

A pesar de todas las dificultades teóricas (Osorio, 2018), prácticas y de acceso que implica estudiar a la “élite dirigente” (Hertz & Imber, 1995; Thomas, 1995; Moyser & Wagstaffe, 1987), existe un creciente interés en los investigadores por examinar al alto empresariado, lo que sin duda ha permitido avanzar en la cimentación de un campo cultural cada día más fructífero y nutrido, sobre todo por investigadores jóvenes con sensibilidad hacia las problemáticas sociales que aquejan al país.

Fenómenos como la alta concentración de la riqueza, la marcada situación de desigualdad, los repetidos casos de corrupción entre grandes empresarios y la clase política, la influencia de los grupos de presión sobre el campo político, entre otros temas de importancia pública, han suscitado una motivación en el mundo intelectual por adentrarse en el estudio de estos actores, entendidos como decisivos en el proceso de estructuración de la sociedad chilena (Ossandón & Tironi, 2012; Díez, 2011).

En tal sentido, los esfuerzos de los estudiosos se han orientado hacia distintos focos de análisis científico, entre los cuales destacan: el estudio de las redes de poder que tienen los grandes empresarios y que subyacen a toda la élite económica (Ossandón, 2012; Salvaj, 2012); la movilización de recursos materiales y simbólicos que realizan los empresarios y sus corporaciones hacia la ciudadanía a través de distintos medios como las universidades, *think tanks*, revistas especializadas, entre otros dispositivos (Undurraga, 2011); los análisis sobre la presencia de la religión católica en la élite económica (Thumala, 2007); o bien, algunos trabajos que buscan conocer la transformación de la empresa en las últimas décadas (Tironi, 2012; Ramos, 2009).

En todo caso, se trata de un conjunto de líneas de trabajo que han aportado en el desarrollo de un campo cultural que tiene una tradición en el país sudamericano. Esto es así porque el interés del mundo académico por la investigación empírica sobre la élite económica no es tan reciente (Ossandón, 2012). Efectivamente, autores provenientes de diversos campos disciplinarios han tenido desde hace varias décadas una inclinación por



analizar con mayor atención la formación y transformación de los grupos económicos chilenos en el contexto autoritario.

Entre muchos ensayos e investigaciones, destacan en esta línea, por ejemplo, los trabajos pioneros de fines de los años setenta de Fernando Dahse y su interés por construir un “mapa de la riqueza” en el contexto de los procesos de privatización de empresas estatales implementado por el régimen (Dahse, 1979); tradición socioeconomicista que luego fue continuada por Rozas & Marin (1989) y por el economista Hugo Fazio (2005). En una dirección no muy distinta, Cecilia Montero (1996 y 1997) ha contribuido al conocimiento del proceso de “modernización autoritaria” y las transformaciones en los grupos empresariales, indagando en la formación y origen de las empresas que componen a estos actores económicos.

Así, las contribuciones más actuales han sido lo suficientemente innovadoras en examinar con sustento empírico quiénes son estos miembros de la élite económica, cómo y con quiénes se relacionan, y cuáles son los mecanismos y/o recursos de poder que utilizan en el espacio público para mantener una posición privilegiada y decisiva en el mundo de los negocios (Ossandón & Tironi, 2012; Cárdenas, 2016; Undurraga, 2011).

En general, la literatura tradicional y la más reciente que han puesto la atención en la élite económica como objeto de análisis, han sido muy valiosas, sobre todo si se desea dimensionar la naturaleza de los cambios socioeconómicos implementados por la dictadura militar: transformaciones profundas que, por cierto, parafraseando a Pierre Bourdieu, han permitido la emergencia de nuevos agentes económicamente dominantes, muchos de los cuales se mantienen hasta el día de hoy.

Sin embargo, la acumulación de saberes sobre la élite económica a la que se hace mención, contrasta con el escaso, si no prácticamente nulo, interés que tiene el campo científico por indagar en el conocimiento de las actitudes políticas que tienen los grandes empresarios. Interés que ha sido particularmente deficiente en relación con quienes dirigen el sector industrial y el agrícola (Margheritis, 2003, pág. 103), actores que —como se verá en lo que sigue— han sido fundamentales en el proceso de modernización capitalista (Tironi, 1999 y 2005), el cambio de régimen político (Montero, 1993; Campero & Cortázar, 1988) y la consolidación del diseño institucional denominado por el propio general Pinochet como “democracia autoritaria y protegida” (Huneus, 2001, pág. 321; Campero, 2003; Álvarez, 2015).

En ese marco, se considera que uno de los grandes déficit del campo de la sociología y ciencia política chilena está relacionado con el estudio de la cultura política de los empresarios, específicamente de aquellos que, parafraseando al célebre sociólogo José Luis de Imaz (1977), son “*los que mandan*”. De hecho, es posible hacer esta afirmación puesto que desde la restauración de la democracia hasta la fecha, no existe una fuente de conocimientos científicamente validada acerca de las principales *actitudes políticas* de aquellas mujeres y hombres que representan a los grandes empresarios en Chile.

En verdad, se trata de una ausencia que atraviesa a todo el campo de la investigación sobre las “subculturas políticas” o “culturas de rol”, por utilizar la clásica expresión de Almond & Verba (1970), no obstante, en el caso de los dirigentes empresariales parece ser especialmente significativa, en la medida en que nos referimos

a un actor económico y político que parte importante de la literatura especializada define como decisivo en el diseño y mantenimiento de las instituciones posautoritarias del Chile actual (Montero, 1993 y 1996; Campero & Cortázar, 1988; Arriagada, 1971 y 2005; Tironi, 1999; Huneus, 2001 y 2014).

En virtud de lo anterior, es plausible sostener la existencia de un campo de investigación prometedor pero no explorado, y así lo confirma Carlos Huneus, quien describe el déficit de estudios en relación a los empresarios:

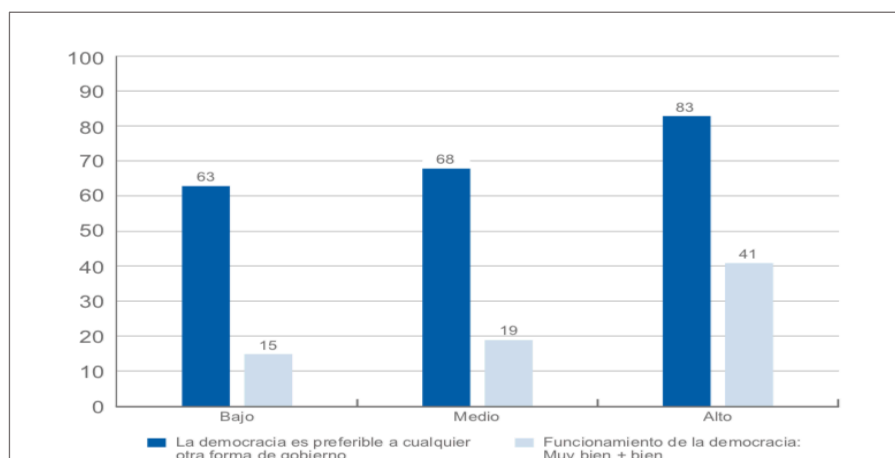
“La teoría democrática empírica que estudia el aporte del desarrollo económico en la democratización no examina el rol de los empresarios; tampoco lo han hecho los estudiosos de la transición del autoritarismo a la democracia, ni la bibliografía que analiza el rol de las elites en la transición y consolidación de la democracia en el sur de Europa y América Latina” (Huneus, 2001, pág. 318).

Es en este contexto del campo de la investigación que interesa *conocer las principales actitudes políticas* que tienen los máximos dirigentes empresariales de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). En efecto, se trata de una cultura política que “contraintuitivamente” evidenciaría un sustrato bastante democrático, cuyo vínculo con el sistema político chileno estaría funcionando con intensa implicación cívica.

Así lo indica la evidencia empírica más reciente sobre la cultura política de los ciudadanos con mayores ingresos y con altos niveles de educación, expuesta por investigadores como Díez (2011), Haye, Carvacho, Manzi, & Segovia (2009) e informes recientes como es el caso de la *Auditoría a la democracia* del PNUD (2014) y Latinobarómetro (2018); documentos que avalan esta supuesta tenencia de actitudes políticas más proclives al apoyo al régimen democrático en los grupos socialmente mejor posicionados.

Tal cual se puede apreciar en el gráfico que se presenta a continuación, los grupos socioeconómicos bajos y medios muestran una menor satisfacción con la democracia, en contraposición a los ciudadanos con rentas más altas, que parecen evaluar más positivamente el desempeño de la democracia.

*Gráfico 1: Porcentajes de apoyo y satisfacción con la democracia por nivel socioeconómico año 2012*



Fuente: PNUD (2014, pág. 56)

La lectura de estos datos muestra una dimensión de la compleja situación de la cultura política en Chile, en la que una parte importante de la ciudadanía manifiesta una alicaída satisfacción con la democracia (Luna & Altman, 2011). Sin embargo, se estima que dicha condición no necesariamente tendría que reflejarse en las actitudes políticas de la élite empresarial. Esto es así, básicamente, porque este grupo goza de una posición social favorecida, lo que teóricamente lo distingue respecto del resto de la población, lo cual aporta a la intuición de que existen importantes diferencias entre las subculturas de grupos particulares y las culturas políticas de la ciudadanía en general (Almond & Verba, 1970; Pye & Verba, 1965; Botella, 1997).

Pero a pesar de lo sugerente de los datos expuestos, también existen antecedentes históricos provenientes de la literatura sobre los empresarios y sus organizaciones, que de alguna manera matizarían este presupuesto teórico sobre la presencia de una cultura política “prístinamente” democrática de la élite empresarial (Scapini, 2006).

Se trata de un conjunto de trabajos basados en el comportamiento político de las cámaras empresariales en distintas “coyunturas críticas” (Collier & Collier, 2002), en los cuales se mostraría un comportamiento de apoyo cívico al régimen autoritario, tanto de las organizaciones como de sus máximos dirigentes a nivel individual, lo que demostraría las limitaciones de la cultura democrática de los líderes empresariales.

Existe consenso interpretativo en que históricamente las patronales han jugado un papel destacado en el modelo de desarrollo y en el régimen político chileno. Así, desde comienzos del siglo pasado, la gran mayoría de los investigadores reconocen que más allá de las diferencias ideológicas que se han asociado a ambos gremios<sup>3</sup>, estas organizaciones

<sup>3</sup> Conviene considerar la distinción que hace Michael Useem (1984) sobre el tipo de acción colectiva que realiza el empresariado en el sistema político. El primer tipo denominado “Upper-Class Principle”, es el comportamiento de las organizaciones empresariales frente al sistema político cuando una política determinada afecta sus intereses, mientras el segundo tipo denominado “Corporate Principle”, está asociado a una acción más bien de tipo particularista, favorable a las empresas de su sector, y no necesariamente contra el sistema político en cuanto tal (Useem, 1984, págs. 13-15). Según Arriagada

jugaron un papel estratégico, por ejemplo, en la creación de parte de la institucionalidad política: la invención del Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, el Ministerio de Fomento, entre otros organismos públicos, que fueron gestados mediante una activa participación del sector privado, a través de los gremios empresariales (Rojas, 2000; Avendaño & Escudero, 2016).

Por otra parte, también se ha enfatizado en la estrecha colaboración con algunos gobiernos del “Frente Popular” en sus políticas económicas, adquiriendo un rol participativo, tanto en la planificación como en la gestión gubernamental, a través de dirigentes que actuaban tanto en el mundo público como en el privado en cargos de conducción (Morris, 1967; Montero, 1993; Arriagada, 1971 y 2004).

En suma, y a juzgar por los antecedentes, es posible afirmar que la SOFOFA y la SNA fueron actores políticos y económicos distinguidos durante gran parte del siglo XX, cuyo apoyo político y técnico fue clave en la implementación de varias reformas durante la vigencia del “desarrollismo”, que tuvo vigencia en Chile hasta fines de los años sesenta (Larrañaga, 2001 y 2016; Meller, 1998).

Sin embargo, así como se ha celebrado el interés de las organizaciones empresariales por “cultivar las ciencias, la técnica y las artes” desde sus orígenes aristocráticos (Rojas, 2000), también se ha destacado su cometido como “grupo de presión” en momentos muy complejos de la historia de Chile (Correa, 2005; Arriagada, 1971; Campero, 1984; Avendaño & Cuevas, 2018).

En tal sentido, particular interés se ha puesto en el desempeño del empresariado a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964–1970), el que llevó a cabo reformas fundamentales del denominado “proceso de democratización”, tales como la reforma agraria y la reforma constitucional a la propiedad de 1967 (Moulian, 1982; Avendaño & Escudero, 2016; Cristi, 2011; Cristi & Ruiz–Tagle, 2014).

Estas reformas tenían una orientación crítica hacia el régimen de propiedad privada, y en opinión de algunos analistas, afectaron la rígida estructura social que existía en el país (Larrañaga, 2016; Montero, 1996), sostenida en una distribución altamente concentrada de la propiedad en muy pocos propietarios (Maddison, 1989). Esta situación detonó en las cámaras empresariales una posición antagónica al gobierno de la “revolución en libertad”, incluso cuando el presidente Eduardo Frei había sido apoyado electoralmente por la derecha, que era el sector político con el que las patronales tenían mayor relación (Correa, 2005, pág. 36; Escudero y Avendaño, 2016, pág. 56; Arriagada, 2004, pág. 120; cfr. Petras, 1967).

Durante el gobierno del presidente Allende, el proceso de reforma agraria se acentuó de forma importante, lo que llevó al empresariado a situarse en una fiera oposición y movilización social contra el gobierno, incluso aliándose con el sector del pequeño comercio y de transportes como parte de una estrategia de acción colectiva con fines de desestabilización del gobierno “popular” (Campero, 1984; Campero & Cortázar, 1988).

---

(2004), el empresariado chileno durante varias décadas del siglo pasado se movió entre estas dos lógicas de acción.

Como indica Arriagada (2004), la profundización de las reformas, la situación de las expropiaciones de terrenos y de empresas privadas, además de la “crisis política” en la que estaba sumergido el país, llevó a los empresarios y a quienes conducían las organizaciones patronales a abandonar su creencia en los partidos, las Fuerzas Armadas y la democracia como base de su cultura cívica “republicana” (Arriagada, 2004; Grossi, 1970), para en cambio, abrazar la “solución autoritaria” y promover el golpe militar de 1973.

De ahí en adelante, los gremios patronales perdieron su condición de “grupo de presión”, para subordinarse a los dictámenes del régimen militar, viendo en este gobierno, como menciona Campero (1984), *“la garantía de todas sus aspiraciones gremiales”* (pág. 74).

Asimismo, otros trabajos de la época demuestran que los dirigentes empresariales apoyaron formalmente la Constitución de 1980 y el modelo de “democracia protegida” que ésta establecía para su posterior vigencia en democracia (Campero, 1984, pág. 335); y en el campo de la economía, muchos se vieron beneficiados con las transformaciones económicas que implementó el gobierno militar: devolución de fincas a antiguos propietarios, política de liberalización económica, privatización de empresas públicas, apertura comercial, entre otros cambios que, según los entendidos, favorecieron en gran medida a los grandes empresarios y también a los grupos económicos (Larrañaga, 2016; Avendaño & Escudero, 2016). Bien lo expresan Torcal & Mainwaring (2003) en el siguiente comentario:

“El gobierno militar dividió políticamente, y de forma drástica, a la sociedad chilena. *Supuso la salvación para los grupos de élite amenazados por el gobierno de Allende*, restauró el orden político y económico basándose en una estrategia de política económica diferente y, por último (1985–89), fomentó el crecimiento económico” (pág. 77)<sup>4</sup>.

De esta manera, la literatura señala que se produjo una fuerte “identificación” entre la élite empresarial con el legado de Pinochet, sobre todo por la restauración del régimen de propiedad privada (CEPAL, 1988), el “principio de autoridad extraviado” durante la Unidad Popular (Valenzuela, 1978) y también por el establecimiento de una “democracia vigilada” que garantizaría la mantención de las reglas institucionales consagradas en la Constitución de 1980 una vez restaurado el nuevo régimen político (Arriagada, 2004; Rehren, 1995). Así lo indica Huneus, quien analiza el comportamiento político de los empresarios:

“Los alcances de la identificación de los empresarios con el régimen autoritario y la persona del general Pinochet se comprenden, porque sus reformas económicas no fueron neutrales políticamente, sino que buscaban colaborar al cumplimiento de sus objetivos, constituyéndose en un componente central de su estrategia de legitimación. Los nuevos gobernantes decidieron establecer un sistema político distinto a la democracia occidental, que consideraban fracasado

---

<sup>4</sup> Las cursivas son mías.

por su debilidad ante el comunismo, la democracia protegida y autoritaria” (Huneus, 2001, pág. 316).

En ese tenor, gran parte de los analistas confirman un cometido importante de los empresarios, tanto en el proceso de cambio de régimen, así como también de mantención de la democracia protegida diseñada durante el mandato del general Pinochet. Prueba de ello es que las organizaciones patronales se comportaron como un actor activo de oposición al plebiscito de 1988 (Arriagada, 2004, pág. 137; Huneus, 2001, pág. 323; Montero, 1993, pág. 52), sobre todo por la incertidumbre que generaba el cambio de régimen, acentuado por la desconfianza hacia las fuerzas de oposición, lo que unificaba la alianza entre empresarios y Fuerzas Armadas en defensa del régimen autoritario (Campero & Cortázar, 1988; Arriagada, 2004).

Pero por otra parte, otros indican que los gremios empresariales llegaron bastante fortalecidos al proceso de transición, transformándose en protagonistas en la toma de decisiones bajo el mandato de los gobiernos posautoritarios. En verdad, quienes sostienen esta participación activa de la élite empresarial, adscriben a la tesis de una visión “pactada” de la transición, en la que las decisiones estratégicas de la clase política eran consensuadas con los actores protagonistas del crecimiento económico. De hecho, estos últimos parecían tener mayor legitimación ciudadana, y ya no gozaban de una imagen tan negativa como fue durante todo el modelo sustitutivo de importaciones, sino que más bien ahora se enarbolaban como protagonistas de la “reconstrucción nacional” (Campero, 1984) y también como los principales agentes del proceso de modernización (Montero, 1993 y 1997; Undurraga, 2011; Scapini, 2006; Tironi, 2005; Rojas, 2000). Esto confiere una mayor legitimidad a su intervención en el proceso político.

En ese marco, los dirigentes empresariales y sus organizaciones, principalmente, a través de la CPC, la SOFOFA y la SNA, se establecieron como fieros defensores del diseño institucional de democracia protegida, mostrándose muy poco “flexibles” a modificar las reglas del juego político consagradas en la Constitución de 1980. Es más, varios dirigentes que habían sido activos durante la dictadura militar luego fueron candidatos en las elecciones de 1989, siendo varios de ellos popularmente electos, cumpliendo una extraordinaria tarea de defensa del legado de Pinochet (Correa, 2005).

Así fue como la élite empresarial participó en todos los canales institucionales abiertos por los gobiernos de la Concertación (lobby, financiamiento de campañas, asesorías técnicas, comisiones parlamentarias, diálogos en casa de gobierno, entre otras instancias formales) (Álvarez, 2015; Cortés Terzi, 2000), y además, se opuso públicamente a las reformas constitucionales que pretendían terminar con los “enclaves autoritarios”, mostrándose contraria a cualquier iniciativa que pudiese destruir el consenso en torno al “modelo de democracia” y de “desarrollo”. Esto último confirmaría la premisa “funcionalista”, que concibe el crecimiento económico como condición *sine qua non* de la consolidación democrática. En ese tenor, muy claro lo formula Cecilia Montero (1993):

“Los objetivos de crecimiento y estabilidad social comienzan a ser considerados por los empresarios y partidos de gobierno como indisociables y no

necesariamente como incompatibles. *Mediante su comportamiento el actor empresarial le otorgó legitimidad al proceso de restablecimiento de las instituciones democráticas y también a las iniciativas gubernamentales de democratización económica, a cambio de la continuidad en la mantención de las reglas del juego.* En este aspecto coincidió con la coalición de centroizquierda, que necesitaba mantener la inversión privada y –al mismo tiempo– legitimar social y políticamente sus primeros años de gobierno” (pág. 56)<sup>5</sup>.

Finalmente, este último punto podría ayudar a explicar –parcialmente– la prolongada duración de los “enclaves autoritarios” (y la vigencia del más significativo: la Constitución), las limitaciones a la participación ciudadana en las decisiones que incumben a toda la comunidad política (Garretón, 2015; Atria, 2013) y la prevalencia de una economía pura de mercado (Linz & Stepan, 1996). Ello ha tenido como consecuencia el descuido del histórico problema de la desigualdad, puesto que se ha privilegiado la estabilidad política y macroeconómica por sobre cambios orientados hacia una mejor redistribución, lo que finalmente, según distintos expertos, ha contribuido a acelerar el proceso de socavamiento de las bases culturales de la democracia chilena (Inglehart & Welzel, 2006; Huneus, 2014; PNUD, 2014; Segovia & Gamboa, 2015).

## **2. La formación de la cultura política de la élite empresarial**

De algún modo, los trabajos de cultura política y sociología que he exhibido, sugieren la presencia de rasgos “autoritarios” y “democráticos” en la cultura política de la élite empresarial (Altemeyer, 1981), sin embargo, también es verdad, que estos recursos no explican el modo por el cual los dirigentes empresariales han desarrollado esa determinada cultura política a nivel individual.

Pues bien, para dar respuesta a esta situación se considera fundamental incluir en esta investigación un análisis generacional del proceso de *socialización política* de los dirigentes empresariales, proceso que sostengo, ha impactado decididamente en la formación global de su cultura política (Lane, 1959; Percheron & Jennings, 1981; Mcdevitt & Chaffee, 2002; Trafimow & Wyer, 1993).

Es así que la historia, el peso de la memoria y el contexto político tienen una especial importancia en la formación de la cultura política de la élite empresarial (*history matter*) (Mannheim, 1958; Halbwachs, 2004; Pye, 1977), ya que las reformas políticas, sociales y económicas que se gestaron desde mediados de los sesenta, y su intensa agudización bajo el gobierno de Allende, afectaron su posición históricamente dominante (Arriagada, 2004; Garretón & Moulian, 1985; Grossi, 1970; Larrañaga, 2016).

Esta situación de transformaciones, no sólo tuvo un impacto sociológico en la distribución de poder en la sociedad (Manzi, y otros, 2004, pág. 161), sino también en las vidas personales y/o familiares de estos ciudadanos, sobre todo en los más longevos, constituyendo una situación muy próxima a un “trauma sociopolítico” (Páez & Basabe, 1993) o “trauma cultural” (Alexander, 2016), los que se producen cuando determinados

---

<sup>5</sup> Las cursivas son mías.

grupos sociales afrontan un acontecimiento histórico que marca su conciencia colectiva, sus memorias e identidades futuras (Alexander, 2016; Páez & Basabe, 1993; Guichard & Henriquez, 2011; Halbwachs, 2004). Al respecto, es muy ilustrativa la opinión de Pierre Bourdieu sobre este fenómeno entre cambios estructurales y biografías de los agentes, porque ilumina bien el fenómeno que se intenta investigar.

*“La historia estructural de un campo (ya se trate del campo de las clases sociales o de cualquier otro) constituye en periodos la biografía de los agentes que en él se encuentran comprometidos (de suerte que la historia individual de cada agente contiene la historia del grupo al que pertenece) (...) los cambios estructurales que afectan a ese campo poseen el poder de determinar la producción de generaciones diferentes, al transformar los modos de generación y al determinar la organización de las biografías individuales y la agregación de esas biografías en clases de biografías orquestadas y sometidas a un ritmo según el mismo tempo” (Bourdieu, 2000a, pág. 10)<sup>6</sup>.*

Otro supuesto, siguiendo el modelo de socialización política de Almond & Verba (1970), y de autores más contemporáneos como Trafimow & Wyer (1993) y Jaime (2000), es que los agentes de la socialización política como la “familia” y la “escuela” tendrían un rol especial en la transmisión generacional de este “trauma sociopolítico” al que hago mención (Haye, Manzi & González, 2013), sobre todo en aquellos dirigentes más jóvenes, que tuvieron su infancia y adolescencia en el transcurso de la dictadura militar (Huneus, 1987, pág.185). En palabras de Tironi & Agüero (1999):

*“(...) el período autoritario se constituyó en la experiencia común de toda una generación que construyó en esta etapa su “marco de referencia político”, el cual, una vez cristalizado, tiende a mantenerse en el tiempo. Dicho de otro modo, gran parte de la ciudadanía actual formó su conciencia política y construyó sus identidades y referencias en el marco de la polaridad autoritarismo/democracia que caracterizó ese período” (pág.157)<sup>7</sup>.*

En virtud de lo anterior, se sostiene que la clausura de las libertades cívicas y de la actividad política durante el régimen militar, tuvo como resultado una subordinación de los “asuntos públicos” al seno de la familia de los chilenos (Cornejo, y otros, 2013), lo que, en consecuencia, le otorgó un rol muy decisivo a esta estructura en la transmisión intergeneracional de valores y posiciones políticas, fenómeno que se dio con especial intensidad en los hogares de los dirigentes empresariales por las razones ya esgrimidas.

De esta manera, se habría configurado en la élite empresarial un conjunto de actitudes “cautelosas” hacia la democracia, bajo la creencia de que este régimen político, en determinadas circunstancias, no garantiza la seguridad física, las libertades individuales o los derechos fundamentales. Y que por esa misma razón, éste debe ser

---

<sup>6</sup> Las cursivas son mías.

<sup>7</sup> Las cursivas son mías.



vigilado por instituciones no sujetas a la soberanía popular a través de un diseño institucional orientado a neutralizar la voluntad política de las mayorías.

Es así que se produce la identificación política y cultural con el diseño de “democracia protegida” (Godoy, 2003), lo que de algún modo es coherente con lo planteado por Almond & Verba en *The Civic Culture* (1963), quienes le confirieron una valiosa causalidad al diseño institucional en la cultura política de los ciudadanos alemanes para explicar, por ejemplo, que “*las medidas constitucionales alemanas han asegurado que Bonn no sea una repetición de Weimar*” (Almond & Verba, 1970, pág. 87), situación no muy distinta al caso chileno –valga la analogía– en el cual el diseño institucional de “democracia protegida” ha evitado la posibilidad de volver a repetir la experiencia “traumática” de la Unidad popular (Tironi & Agüero, 1999).

### 3. Justificación de la investigación

Bajo la perspectiva de análisis propuesta, sería insuficiente y normativamente injusto mencionar que el comportamiento político de la élite empresarial, en distintas coyunturas críticas, se reduce únicamente a una defensa de sus intereses económicos, señalando, en esa misma dirección, a partir de una suerte de “sociología espontánea”, que estos actores no tienen valores ni creencias políticas, y que todas sus decisiones están orientadas por una racionalidad entre “costos” y “beneficios” (Barry, 1974; Downs, 2001). Si ese fuera el caso, bastaría con remitirse a la literatura sobre el comportamiento político de las patronales, las que según autores como Meynaud (1962) o Linz & de Miguel (1966), actúan la mayor parte del tiempo en calidad “grupo de presión” en contra del Estado y los intereses del bien común, por lo que *siempre* están en defensa de los intereses económicos privados.

Y aunque es cierto que el aporte de estos trabajos sobre el comportamiento de los gremios patronales ha sido valioso para el conocimiento público del actuar del empresariado, éste no ha sido suficiente para saber, en primer lugar, cómo y bajo qué circunstancias políticas e históricas se ha formado el pensamiento político de aquellos individuos que, por su posición privilegiada en la estructura de poder y por sus características “excepcionales”, pueden intervenir en los distintos ámbitos de la sociedad (Milner, 2016; Winters, 2011; Rothkopf, 2008). He ahí lo valioso de estudiar las actitudes políticas del gran empresariado, y así también lo reconocen Moyser & Wagstaffe (1987), quienes destacan la importancia del estudio de la cultura política de las élites:

“There is a recognition that, in addressing urgent issues about peace and war, human rights, poverty, etc, elites at national, international and local levels have a crucial role to play. Their perspectives, the quality of their leadership, *the immediate moral and political culture within which they operate and the social formations from which they are drawn are all part of the equation, and need to be taken into account in constructing policies that will be accepted and put into effect*” (pág. 3)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Las cursivas son mías.

En esa dirección, es sabido a partir de los aportes de las escuelas de la cultura política, pero particularmente gracias al enfoque más tradicional, que el comportamiento político no es de carácter improvisado o performático, y que éste está más bien orientado por diversos factores políticos e ideológicos, económicos, educativos y/o históricos (Verba, Nie & Kim, 1987; Tormos, 2012; Pye, 1977) que interactúan de manera compleja o en forma “multidimensional” (Morán & Benedicto, 1995). Dichos elementos influyen en el “*contenido político de las mentes de los ciudadanos*”, en el que las creencias, los valores y los sentimientos juegan un papel fundamental en la orientación de la acción (Almond, 1988, pág. 77).

He ahí la importancia de conocer las “actitudes políticas” que tienen los dirigentes empresariales sobre los distintos procesos históricos y políticos que han marcado y siguen definiendo la historia institucional del país: la breve “experiencia socialista”, la dictadura militar, la transición a la democracia (Manzi y otros, 2003) y las recientes reformas institucionales que han tenido lugar en Chile en los últimos años. Bajo esa tesitura, y siguiendo a Brown & Gray, lo que interesa conocer de la élite empresarial es su “*percepción subjetiva de la historia y la política, los valores y las creencias fundamentales, los focos de identificación y lealtad y los conocimientos y las esperanzas políticas que son producto de las experiencias históricas específicas de las naciones y los grupos*” (Brown & Gray, 1980, pág. 1).

A mi modo de ver, los elementos mencionados son extraordinariamente interesantes de examinar, sobre todo en un contexto de prolongado silencio del campo de la cultura política “comprensiva” en el país sudamericano. Esto se explica, no sólo por la ausencia de estudios sobre la subcultura política de las élites, sino también por las dificultades de acceso a este tipo de sujeto con características “excepcionales” (Winters, 2011; Lipset & Solari, 1967; Keller, 1971), que poseen agendas de trabajo muy estrechas, y que, en general, no manifiestan mucha disposición a conversar sobre temas políticos “sensibles” (Galaskiewicz, 1987), como lo es recordar experiencias “difíciles” del pasado, hablar sobre ellos mismos, sobre sus creencias más íntimas o hablar sobre otros actores decisivos en el país. En definitiva, mostrarse ante la sociedad como “ciudadanos” comunes y corrientes, alejados del rol de liderazgo que les compete en sus determinadas cámaras empresariales.

En virtud de todo lo antes mencionado, se formula la siguiente pregunta y objetivos de investigación.

#### **4. Pregunta, objetivos e hipótesis de investigación**

##### *4.1. Pregunta de investigación*

¿Qué tipo de cultura política tienen los dirigentes empresariales chilenos de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril (2017–2019)?

#### *4.2. Objetivo general*

Conocer, describir y analizar las principales diferencias y similitudes de la cultura política entre los dirigentes empresariales de la SNA y la SOFOFA (2018–2019).

#### *4.3. Objetivos específicos*

1. Caracterizar socioculturalmente a la actual élite empresarial.
2. Conocer, describir y analizar el proceso de socialización política de la actual élite empresarial.
3. Conocer, describir y analizar las principales actitudes políticas que expresan verbalmente los miembros de la actual élite empresarial.

#### *4.4. Hipótesis general*

De acuerdo con algunos análisis sociopolíticos expuestos, más la evidencia empírica aportada por algunos estudios de cultura política y también por la literatura relacionada con los empresarios y su comportamiento político, se sostiene la hipótesis de que la cultura política de la élite empresarial tiene rasgos democráticos y también autoritarios, en una específica combinación que esperamos sea revelada por el análisis de su discurso.

Los dirigentes empresariales de ambas organizaciones, en forma homogénea, tendrían un conjunto de valoraciones positivas de las instituciones democráticas, las que se encontrarían tensionadas por la mantención de una postura “inflexible” en torno a la introducción de reformas institucionales orientadas a cambiar las reglas del juego político. Esta “aversión al cambio”, los acerca a una posición conservadora del legado institucional del régimen autoritario.

#### *4.5. Hipótesis auxiliar 1*

Se afirma que la cultura política que tiene la élite empresarial, sobre todo de los miembros más jóvenes, se ha formado, fundamentalmente, a través de un proceso de socialización política singular que se caracteriza por la transmisión de lo que se ha denominado como un “trauma sociopolítico”. En esta transmisión, los agentes de socialización como la familia y la escuela en el contexto autoritario, han tenido un rol clave en la transferencia de posiciones políticas y valores con orientación democrática y autoritaria.

#### *4.6. Hipótesis auxiliar 2*

Han contribuido significativamente a la formación de la cultura política de la élite empresarial, las vivencias personales y/o familiares “traumáticas” que tuvieron los dirigentes empresariales durante el período de la Unidad Popular, especialmente en aquellos sujetos de más edad. Dichas experiencias de polarización, desabastecimiento de bienes y de violencia política, contribuyeron al establecimiento de un conjunto de actitudes desfavorables sobre la institucionalidad democrática, marcando la presencia de

rasgos autoritarios que tuvieron un fuerte proceso de identificación con la dictadura militar y su herencia institucional.

#### *4.7. Hipótesis auxiliar 3*

En base a algunos hallazgos de la literatura especializada en grupos sociales favorecidos, se puede decir que aquellos que detentan una alta posición social, en función precisamente de las capacidades electivas que conlleva, tienen mayores probabilidades de desarrollar individualmente valores democráticos, que posteriormente se verían reforzados en la “resocialización” política que se verifica en un contexto democrático.

## CAPÍTULO II

### METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

#### 1. Las entrevistas

Para el estudio de la élite empresarial chilena se realizaron 32 entrevistas en profundidad. De esta cifra, 6 dirigentes fueron entrevistados en al menos dos oportunidades, haciendo un total de 38 entrevistas. Prácticamente todos los encuentros se realizaron cara a cara en forma presencial conforme a la definición que se hizo de este instrumento, según los principios de Taylor & Bodgan (1995). Solamente dos personas fueron entrevistadas, en primera instancia por teléfono, y en segunda instancia, de forma personal. Estas se llevaron a cabo en las empresas o cámaras donde se desempeñaban laboralmente los protagonistas, aunque también algunas se hicieron en espacios públicos como cafeterías o bares ubicados en la zona oriente del gran Santiago. En el caso de los entrevistados fuera de la capital, las entrevistas se realizaron en las propias empresas.

El sujeto de estudio está compuesto mayoritariamente por presidentes y vicepresidentes de las federaciones y asociaciones gremiales que conforman la propia SNA y la SOFOFA. También fueron entrevistados unos pocos directores y un expresidente de la misma SOFOFA. El detalle de las entrevistas realizadas puede verse en el cuadro.

La cantidad de entrevistas se determinó sobre la base del “criterio de saturación” (Ibáñez, 2006, págs. 23–24; Taylor & Bodgan, 1995), lo que significa que una vez que la información producida comenzó a ser redundante sin agregar aspectos innovadores para su análisis posterior, se decidió no hacer más entrevistas y finalizar el trabajo de campo.

El trabajo en terreno se desarrolló entre el mes septiembre de 2017 y el mes de agosto de 2018. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de una hora y media por cada entrevistado, incluso, en algunos casos llegando a durar casi tres horas.

*Cuadro de cargos de entrevistados*

<i>Organización empresarial</i>	<b>Posición o cargos de los entrevistados</b>					<i>Total</i>
	<i>Presidentes</i>	<i>Vicepresidentes</i>	<i>Secretarios generales</i>	<i>Directores</i>	<i>ExPresi- dentes</i>	
SNA	6	6	1	3	0	16
SOFOFA	13	1	0	1	1	16

Fuente: elaboración propia.

El criterio de selección de la muestra está definido sobre la base de elección de las dos organizaciones empresariales más importantes del país, tanto por su antigüedad, así como también su relevancia política (Arriagada, 2004; Campero, 1984) y económica<sup>9</sup>

<sup>9</sup> La SOFOFA históricamente ha representado a importantes empresarios. Actualmente, en ésta tienen cabida dirigentes de los grupos empresariales más relevantes del país, tales como “los Matte”, “los Said”, “los Luksic”, el Grupo Saieh, entre otros con presencia nacional e internacional.

(Valenzuela, 1978, pág. 50; Rojas, 2000; Tironi, 1999). Efectivamente, es en la SOFOFA y la SNA donde se reúnen los empresarios chilenos más grandes (Petras, 1967), los que componen con sus empresas sectores claves de la economía (Rojas, 2000). Lo anterior, los sitúa como un actor económico fundamental en el desarrollo del país, con gran capacidad de orientar la modernización y, como ya se mencionó, con significativa influencia sobre el campo político y el curso de la democratización<sup>10</sup>.

Con una orientación más específica, el criterio de selección de los dirigentes se realizó en función de abarcar la mayor cantidad de rubros empresariales que componen tanto a la SNA como a la SOFOFA. En otras palabras, aun cuando este trabajo no pretende realizar una generalización a partir de una muestra estadísticamente representativa, como sí debiese suceder en un trabajo de índole cuantitativo, igualmente se intentó entrevistar por lo menos a un representante de cada sector o rubro empresarial, lo que se logró con “relativo” éxito, ya que faltaron muy pocos sectores por cubrir.

### *1.1. Estrategias de acceso a la élite*

Siguiendo de cerca las recomendaciones de autores expertos en entrevistas cualitativas a minorías selectas, se emplearon tres técnicas para conseguir entrevistas con miembros de la élite empresarial: a través de los canales institucionales, por la metodología de “bola de nieve” (Salamanca & Martín-Crespo, 2007) y por apoyo de contactos “ceranos” a la élite (Atria y otros, 2017).

En el caso de la vía formal, se procedió a hacer un registro de todas las planillas de autoridades empresariales ubicables en internet a través de las páginas oficiales de las cámaras que componen la SNA y la SOFOFA. En este registro, se rastrearon los nombres y correos electrónicos de los presidentes, vicepresidentes, secretarios generales y directores, pero además, los correos electrónicos y teléfonos de las secretarías y/o del personal administrativo vinculado directamente con los dirigentes en su contacto cotidiano. También, en algunos casos se realizó el contacto a través de las empresas en las que se desempeñaban laboralmente los posibles participantes.

En un primer contacto, se envió un correo electrónico formal solicitando la entrevista con el dirigente seleccionado (ver carta en anexos), en el que se adjuntaba una carta institucional de la Universidad Complutense que explicaba de qué se trataba la entrevista, garantizando el anonimato del participante. Al cabo de unos días, si no había respuesta, se procedía a llamar directamente por teléfono a sus secretarías para verificar la disposición de participación (Thomas, 1995). Bajo este mecanismo, es importante mencionar que las secretarías jugaron un papel fundamental, por cuanto gran parte de la gestión fue realizada directamente por éstas, tanto para motivar al dirigente de participar como para agendar en alguna fecha y hora la entrevista.

---

<sup>10</sup> Al respecto, véase este reportaje de EMOL (2017) que muestra la preocupación de la SOFOFA en las elecciones presidenciales de 2017. Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/11/23/884589/Larrain-Matte-Si-Guillier-abraza-las-ideas-del-Frente-Amplio-se-alejara-de-un-Chile-moderno.html>. Visitada el 3 de mayo de 2018.

Cabe señalar que uno de los elementos más importantes en esta parte de la investigación fue la disposición de tiempo y paciencia, puesto que en ocasiones los dirigentes mostraban intenciones de participar, pero lo estrecho de sus agendas dificultaba la concretización de la entrevista, lo que es coherente respecto a lo planteado por Thomas (1995) en relación al valor que le concede al tiempo la élite económica.

En muchos casos, luego de enviar los correos electrónicos con las cartas, no se obtenían respuestas inmediatas, lo que es recurrente en el contexto de la investigación sobre las élites (Dexter, 2006; Hertz & Imber, 1995), ya que en general, estas se muestran poco dispuestas a participar en estudios, más aún cuando se trata de hablar de política y de sus vidas personales.

En otros casos, una vez realizadas las entrevistas y habiendo obtenido un resultado satisfactorio, se procedió a solicitar al participante la vinculación con algún otro dirigente empresarial para entrevistarlos, lo que se conoce metodológicamente como “bola de nieve”. Y de hecho, esta estrategia fue fructífera para conseguir algunos encuentros, ya que en algunas ocasiones los entrevistados enviaban un correo electrónico personalmente a sus contactos, le pedían a la secretaría hacer de enlace, o bien, en más de una ocasión llamaban directamente a los teléfonos personales de sus congéneres para sugerirles su participación en el estudio.

Finalmente, y en mucha menor medida, se requirió la participación de algún contacto cercano a la élite para conseguir la entrevista, estrategia que sí resultó, y que fue utilizada, fundamentalmente, cuando todas las otras estrategias no tuvieron buen resultado (Atria y otros, 2017).

## **2. El enfoque metodológico**

El presupuesto teórico que orienta esta investigación doctoral es demostrar que los rasgos democráticos y autoritarios que tiene la élite empresarial chilena, fueron desarrollados, esencialmente, a través del proceso de socialización política experimentado por los dirigentes empresariales en sus “años impresionables”, proceso que coincide con los tiempos de la polarización, la Unidad Popular y la dictadura militar.

Se ha planteado como hipótesis, que en el caso de los dirigentes más jóvenes, tanto la familia como la escuela en el marco del régimen autoritario, ejercieron un rol relevante en la transmisión de una “configuración ideológica” con orientación democrática pero también autoritaria. De manera muy diferente, en la socialización de los dirigentes más longevos, las propias vivencias personales y familiares “traumáticas” originadas por las expropiaciones (Beyer, 1997, pág.15–16), el desabastecimiento y la polarización bajo el gobierno de la Unidad Popular (Valenzuela, 1978; Angell, 1993, pág. 61), tuvieron un peso determinante en la formación de rasgos autoritarios, que luego se vieron reforzados con el régimen militar durante la adolescencia y adultez temprana, estabilizándose hasta el día de hoy (Altemeyer, 1981; Inglehart, 1991; Huneus, 1987).

Esta diferencia planteada entre los procesos de “socialización política” de ambas generaciones, conlleva algunas consecuencias en cuanto a la orientación metodológica de este trabajo, dado que para poder conocer cómo se formó parte fundamental de su cultura política, es relevante prestar atención *al relato o narración* que hacen los dirigentes sobre

sus vivencias personales y familiares durante lo que la literatura denomina como “años impresionables” (*early years*) (Easton & Dennis, 1970; Halbwachs, 1995; Inglehart & Welzel, 2006; Jennings, 2007; Lane, 1959; McDevitt & Chaffee, 2002; Sears, 1990).

Para cumplir con esta tarea, se recurrió a incluir un “análisis de generaciones” de tipo cualitativo, a fin de comparar ambos procesos de socialización política. Es así que siguiendo a Karl Mannheim, para quien la vivencia de sucesos históricos significativos predisponen a los individuos a pensar y a vivir las experiencias de una manera determinada (Mannheim, 1958), se parte del supuesto de que lo que distingue a ambas generaciones de entrevistados en la forma de adquirir su cultura política, son las maneras en que cada grupo ha vivido y experimentado personal y familiarmente las experiencias de la Unidad Popular y de la dictadura militar. Se ha tomado en consideración que el grupo más joven sólo podrá tener una imagen o memoria de la “experiencia socialista” transmitida por sus padres (Aguilar, 2007), la que, por cierto, será comparada y analizada.

Antes bien, para realizar esta tarea, parece conveniente tomar en consideración el trabajo de quienes han estudiado en profundidad el análisis de generaciones a través de la investigación cualitativa. En ese sentido, por ejemplo, Cäis, Folguera, & Formoso (2014), resaltan la importancia de recoger a través del relato las “memorias” o experiencias pasadas de los individuos, bajo el supuesto de que las circunstancias individuales de la vida diaria de una persona son fundamentales para comprender la dimensión social del discurso<sup>11</sup>. Así, los autores recomiendan el análisis de generaciones por la posibilidad de entender la biografía y los procesos sociales que la constituyen:

“El análisis de generaciones permite capturar la relación entre los tiempos históricos, los familiares y los biográficos, y en segundo lugar, documentar las respuestas de las personas y de los grupos vinculándolas a los sucesos históricos acontecidos” (Cäis, Folguera & Formoso, 2014, pág. 48).

En una dirección similar al punto anterior, José María Maravall (1978), quien ha estudiado la socialización política de estudiantes de clase media “acomodada” y obreros españoles en el contexto del franquismo en España, también recomienda adentrarse en el relato de vida de los individuos a través de *life stories*, considerando esta herramienta útil para examinar las narraciones sobre experiencias vividas por los actores, entendidas como un elemento fundamental del proceso de socialización política.

En efecto, se trata de documentar una narración sobre la que no necesariamente interesa su grado de verosimilitud o de correspondencia con los “hechos” realmente ocurridos (Cornejo y otros, 2013; Aguilar, 2007), ya que lo *sociológicamente* relevante es el poder conocer la memorización que los miembros de la élite empresarial puedan hacer sobre sus experiencias vividas, vale decir, cómo estos interpretan su propia experiencia a partir de la memoria de las vivencias pasadas (de Miguel, Cäis, & Castilla, 1994; Cäis, Folguera & Formoso, 2014).

---

<sup>11</sup> Valles (2014), también concuerda en que el enfoque cualitativo es el más apropiado para el estudio de las generaciones, matizando la importancia que se le da a la división generacional a partir de las cohortes de edad (pág. 37).



Lo anterior, por supuesto, implica ceñirse a una mirada epistemológicamente “reflexiva” sobre el discurso del actor que interesa investigar, obligando a volver la vista sobre sus “producciones significativas” elaboradas en determinados contextos sociales.

En tal sentido, siguiendo a Alonso (1998), se considera que estas “producciones significativas” de la memoria no pueden ser examinadas con gran profundidad por las visiones cercanas al “individualismo metodológico”. Esto es así porque desde esta visión se concibe al individuo en forma “aislada” y escindida del contexto social, lo que se aleja en demasía de los presupuestos teóricos ya planteados, en los que la *historia* juega un papel fundamental en la formación de la cultura política (Pye, 1977; Pye & Verba, 1965; Halbwachs, 1995; Haye, Carvacho, Manzi, & Segovia, 2009; Aguilar, 2007). En palabras de Enrique Alonso (1998):

“(…) aparece una concepción social de los motivos; concepción que parte de la idea misma de que la explicación ordinaria de las acciones situadas de los sujetos, por los motivos, no es propiamente realizar una descripción de la experiencia personal de la acción, ni interpretar la acción y el discurso como manifestaciones externas de elementos subjetivos, sino buscar la forma en que los motivos socialmente construidos y las acciones tienen su origen en la situación en que los individuos particulares se encuentran” (pág. 55).

En vista de los antecedentes expuestos es que se sugiere privilegiar el enfoque cualitativo por sobre otros enfoques metodológicos como podría ser el de tipo cuantitativo y el uso de encuestas. Esta última técnica de producción de información, si bien es valiosa y recurrida para el estudio de la cultura política de las masas (Pye & Verba, 1965; Morán, 1995, pág. 102), se considera que no es la más óptima para *comprender* o *desentrañar* en profundidad las narraciones de los sujetos y sus producciones de sentido (Putnam, 1973). De hecho, de insistir con un instrumento de tipo cuantitativo, se podría correr el riesgo de claudicar de la posibilidad de examinar con mayor profundidad la significación que tuvo para la élite empresarial el “trauma sociopolítico” de la Unidad Popular, lo que, finalmente, no permitiría dar cuenta satisfactoriamente de los objetivos de investigación.

### **3. La técnica de producción de información**

Tal como Pierre Bourdieu sostenía en el *Oficio de sociólogo*, es la técnica de producción de información la que debe adecuarse a la construcción del objeto de investigación, y no al revés (2004). Bajo esta premisa se considera que la “entrevista en profundidad” es el instrumento más adecuado para conocer y comprender las producciones significativas de los miembros de la élite empresarial. Esta técnica se entiende, siguiendo a Taylor & Bodgan (1995) como: “*reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones*” (pág. 101).

Algunas recomendaciones provenientes tanto de la literatura especializada en cultura política como en el campo de la metodología, influyeron en la decisión de utilizar esta técnica de producción de información.

Así, en un plano epistemológico, una de las recurrentes críticas a los estudios más clásicos de cultura política (Welch, 2013), era la imposibilidad de profundizar cualitativamente en la comprensión multidimensional de los “universos políticos” que tienen los ciudadanos (Morán & Benedicto, 1995; Almond, 1988). Esto se debe, por lo general, por la aplicación de cuestionarios estandarizados, los que por su propia naturaleza apuntaban a diferentes objetivos, entre estos, privilegiar la medición universal por sobre la comprensión de la “singularidad” de las subculturas de grupos particulares.

A sabiendas de estas limitaciones, los autores pioneros le concedieron importancia a la “entrevista en profundidad” como técnica apropiada para el estudio de la subcultura política de las élites. De hecho, así lo hicieron Almond & Verba en *The Civic Culture* (1970), quienes profundizaron en su investigación a través de entrevistas; del mismo modo, Robert Putnam (1973), así como también Lucian Pye y el propio, Sidney Verba (1965), también reconocían que la forma de acercarse con profundidad al estudio de élites era mediante la entrevista y la *estrategia interpretativa*, fundamentalmente, porque estas minorías selectas tienen conocimientos complejos y especializados que no podrían ser aprehendidos o desentrañados por otras técnicas de análisis como los cuestionarios (Pye & Verba, 1965, pág. 16).

Fuera del campo de la cultura política, también existen trabajos cualitativos que se han centrado en el estudio de las élites. En éstos, sus autores también recomiendan analizar a través de la entrevista en profundidad a los grupos favorecidos, particularmente a las élites económicas (Dexter, 1970; Hertz & Imber, 1995; Thomas, 1995; Moyser & Wagstaffe, 1987; Galaskiewicz, 1987; Valles, 2014).

En la mayoría de estas investigaciones se habla de “entrevista a élites” (*Interviewing Elites*) como un tipo de investigación específica, tal vez más compleja que el análisis de otro tipo de sujeto de investigación. Sus especialistas advierten de algunas situaciones a considerar para “*dejar hablar a los poderosos*” (Alonso, 1998, pág. 70), tales como la necesidad de contar con un cierto *background* para abordar una entrevista, pues en caso de prescindir de éste, se corre el riesgo de condicionar negativamente las respuestas del entrevistado (Hertz & Imber, 1995). Asimismo, se sugiere la precaución de tomar resguardos en cuanto al lenguaje del instrumento, “*para evitar el rechazo del mismo por su superficialidad, por su nivel de complejidad, o por descuidos que pudieran restar seriedad o generar malinterpretaciones de los participantes*” (Atria y otros, 2017, pág. 26).

No obstante, dentro de los temas que la literatura más subraya, se encuentran las dificultades de entrevistar a las élites. Entre éstas destacan varios elementos, sobre los cuales se pueden mencionar la “distancia simbólica” o barreras que establecen las élites con la sociedad y con los mismos investigadores (Hertz & Imber, 1995, pág. 8); la preferencia por permanecer anónimas ante la opinión pública (Moyser & Wagstaffe, 1987); o el valor que las élites económicas le otorgan al “tiempo”, lo que hace extremadamente difícil ocupar un lugar en sus agendas, ya que el tiempo parece ser un recurso escaso y muy bien utilizado por este tipo de agentes: “(...) *the value of time is used to explain amenities like chauffeured limousines (so they can work while they ride), private jets (so they can avoid airport delays), and tightly controlled schedules (so they*

*are not interrupted unnecessarily*). As a top executive once told me, “I’m not paid \$ 2 million a year to answer the phone” (Thomas, 1995, pág. 8).

Lo anterior, como éste último autor señala, implica tener paciencia para intentar conseguir una entrevista con algún miembro de la élite, pero además aceptar que puede ser en el lugar que ellos te sugieran y acorde a sus tiempos y condiciones, algo que, por cierto, ocurrió siempre durante el proceso de esta investigación para conseguir las entrevistas.

En este punto, parece conveniente mencionar la crítica que Valles (2014) hace a quienes atribuyen a las entrevistas de élite una característica “especial”. En su opinión, ésta no es demasiado diferente a una “entrevista en profundidad” realizada a otros tipos de sujeto de estudio, identificando como única y gran diferencia, la *especialización* y el *capital cultural* del entrevistado. Justamente sobre éste punto radicaría la necesidad de abordar cualitativamente a las élites:

“Dicho de otro modo, en las entrevistas estandarizadas –y en muchas entrevistas aparentemente no estandarizadas también (por ejemplo, en la “entrevista focalizada de Merton en su forma pura)– el investigador define la pregunta y el problema; solamente busca respuestas dentro de los límites marcados por sus presuposiciones. Sin embargo, en las entrevistas a élites, tal como se definen aquí, *el investigador está gustoso y a menudo deseoso de permitir que el entrevistado le enseñe cuál es el problema, la pregunta, la situación...*” (Valles, citando a Dexter, 1970, pág. 5)<sup>12</sup>.

Finalmente, tomando en consideración las recomendaciones de los expertos citados, se considera conveniente el uso de la entrevista en profundidad en función de los objetivos planteados, en síntesis, porque esta herramienta permite adentrarse con mayor profundidad en el conocimiento de las emociones individuales, el revelamiento de sus memorias (Alonso, 1998; Cäis, Folguera & Formoso, 2014) y la exploración de sus posicionamientos políticos y valores “*manifestados mediante el discurso a través de sus expresiones verbales*” (Conde, 2010, pág. 36). Así, se permite capturar el carácter expresivo de las acciones humanas, que como bien indican Navarro y Díaz (1994), no sólo se componen de “actuación”, “*sino también de una expresión individual y social del sentido de esa acción*” (págs. 178–179).

#### **4. El análisis de contenido como técnica de análisis de la información**

Como es sabido, el “análisis de contenido” (AC) se ha caracterizado históricamente por ser una de las herramientas más utilizadas para el examen de las imágenes o representaciones sociales de los sujetos (Krippendorff, 1990; Bernete, 2013), sobre todo, por su carácter centrado en el análisis interno del texto. En esta técnica se busca, por un lado, *la comprensión de las causas del porqué un emisor produce un determinado tipo de comunicación*, mientras por otra parte, se intenta atender a los efectos que ésta produce en el receptor o audiencia (Lopez–Aranguren, 1986, págs. 7–8).

---

<sup>12</sup> Las cursivas son mías.

En tal sentido, la técnica del análisis de contenido cualitativo permite colocar un particular énfasis en la dimensión subjetiva de los autores del texto, a través del análisis de sus “expresiones verbales” (Bernete, 2013, pág. 222), buscando conocer sistemática y objetivamente las *posiciones* que los autores de la comunicación tienen, examinando sus sentimientos, intenciones, valores y/o actitudes (Navarro & Díaz, 1994).

Por otra parte, la selección del AC para el examen de las entrevistas también está relacionado con las propias características de esta técnica de investigación. Ello porque este instrumento toma bastante en consideración el *proceso sociopolítico* en el cual se ha generado la comunicación (Krippendorff, 1990; Navarro & Díaz, 1994), lo que obliga al investigador a elaborar un “metatexto” que construya un contexto social en el que primero se sitúan y luego se analizan las expresiones verbales de los autores de la comunicación. Esto permite la elaboración de *inferencias*, entendidas de acuerdo a Laurence Bardin (1986), como una “operación lógica por la que se admite una proposición en virtud de su relación con otras proposiciones admitidas ya como verdaderas” (pág. 29).

Así, y en conexión con el objetivo general de investigación, se busca *analizar las diferencias y similitudes de la cultura política de la élite empresarial*, lo que en consecuencia, orienta el AC hacia un criterio de afinidad y diferenciación en los discursos de los miembros de las patronales (Ruiz, 2004, pág. 50), buscando identificar los aspectos que se consideran más significativos para comprender los rasgos centrales de sus culturas políticas.

Para lograr lo anterior, se realizó un ordenamiento del material disponible para el análisis. Luego, se elaboró un *marco de codificación* que permitió segmentar la información, definiendo en este dos categorías principales: el “*proceso de socialización política*” y la “*cultura política*”, las que fueron construidas a partir de los objetivos de investigación y las hipótesis planteadas. Por otra parte, una vez terminada esta tarea, se procedió a realizar el análisis de la información y luego a su interpretación. Este proceso, además, fue complementado con la incorporación de literatura especializada en materia de cultura política, estudios de opinión pública y procesos sociopolíticos en Chile.

Finalmente, utilizando el programa ATLAS.ti, se generó un total de 2.443 citas (unidades de registro), con un informe de 893 páginas. Las citas, se agruparon en un total de 55 códigos, los que se exponen a continuación.

#### 4.1.Ficha de registro

<b>Categoría</b> <b>Proceso de socialización política</b>		
Dimensiones	Subdimensiones	Indicadores
Proceso de formación de cultura política	Socialización Escolar	Aprendizaje cívico en colegio
		Experiencia como dirigente estudiantil
	Socialización familiar	Sentimientos de lealtad política familiar
		Pertenencia social
Historia colectiva del sistema político	Experiencia individual/familiar vivida de procesos históricos y políticos	Vivencia personal/familiar período de la Unidad Popular
		Vivencia personal/familiar período autoritario
		Vivencia personal/familiar transición a la democracia

<b>Categoría Cultura Política</b>		
Dimensiones	Subdimensiones	Indicadores
Valores de autoexpresión	Valores societales	Valores de permanencia o cambio
		Valores de igualdad y/o libertad
		Valores de solidaridad social y/o individualismo
	Sentimientos de orientación política	identificación partidista
		Identificación con entorno ideológico
		Gremialismo
Actitudes políticas	Rol, implicación y competencia ciudadana	Modelos de democracia
		Razones de participación ciudadana
		Motivaciones para participar en política
	Percepciones y posicionamientos en torno a la evolución sociedad	Evolución económica de la sociedad
		Evolución sociocultural de la sociedad
	Concepciones relación Estado y sector privado	Relación Estado y mercado en sociedad
	Imagen de instituciones y actores políticos	Actitudes políticas hacia la clase política
		Actitudes políticas hacia el Congreso Nacional
		Actitudes políticas hacia los partidos políticos
	Imagen de los movimientos sociales	Actitudes políticas hacia las movilizaciones y movimientos sociales
	Imagen de los empresarios y la política	Actitudes políticas hacia las organizaciones empresariales y su relación con el sistema político

	Valoración de las reformas políticas	Actitudes políticas hacia la reforma de la inscripción automática y el voto voluntario
		Valoración del cambio de sistema electoral
		Valoración política del cambio hacia un financiamiento público de la política
		Valoración política de la Ley de cuotas
	Valoración de reformas constitucionales	Valoración política de la eliminación senadores designados
		Valoración política de las comisiones investigadoras e interpelación a ministros de gobierno
	Valoración de escenarios de cambios constitucionales o Nueva Constitución	Valoración política del proceso constituyente
		Posicionamientos frente a la Nueva Constitución o cambios constitucionales
		Percepciones sobre la relación entre Nueva Carta Fundamental y el derecho de propiedad

### CAPÍTULO III

## REVISIÓN TEÓRICA Y MARCO OPERATIVO

### 1. El concepto de cultura política

Como se ha afirmado en innumerables libros y artículos, el origen del concepto de cultura política se encuentra en el trabajo seminal de Gabriel Almond & Sidney Verba, quienes en 1963 presentaron su célebre trabajo *The Civic Culture*. Este libro, abrió una puerta al estudio de la política desde una perspectiva empírica y comparada, permitiendo a los investigadores, por primera vez, dejar a un lado los estudios más intuitivos sobre el “carácter nacional” para explicar la caída de los regímenes democráticos en los países europeos (Inglehart, 1988; Linz, 1978).

Es así que a través del estudio de las culturas políticas de cinco naciones (Estados Unidos, México, Italia, Alemania e Inglaterra), Almond & Verba, propusieron demostrar la importancia de la cultura política de los ciudadanos como soporte cultural del correcto funcionamiento de los sistemas democráticos occidentales, constituyendo en ese contexto una idea innovadora para los científicos sociales de la época (Llera, 1997).

En efecto, las motivaciones de los autores están dadas, especialmente, por las trágicas experiencias europeas del fascismo en la Italia de Mussolini, el nazismo en Alemania, y por la violencia política de los socialismos reales; experiencias en las que se desarrolló un alto nivel de inestabilidad social, de violación de los derechos humanos y de las libertades cívicas y políticas, entre otras situaciones de difícil explicación para los analistas de la época.

En ese contexto, ni el marxismo ni la teoría de la elección racional ofrecían marcos comprensivos adecuados para explicar la emergencia de estos fenómenos totalitarios, lo que motivó a Almond & Verba a preguntarse por las *condiciones culturales de la democracia* como elemento clave de su consolidación. Es así que el concepto de cultura política, posee en su génesis una motivación normativa ligada al horizonte utópico de la democracia liberal como alternativa al otro “lado de la moneda”: el totalitarismo.

Para cumplir esta tarea, los autores mencionados tomaron distancia con las interpretaciones marxistas y con la teoría de la elección racional (Barry, 1974; Almond, 1980). En el primer caso, porque se consideraba que el determinismo de la base económica sobre la superestructura político-ideológica, no tenía el suficiente poder explicativo para dar cuenta satisfactoriamente de las actitudes políticas de la ciudadanía. De hecho, el mismo Almond en la década de los ochenta, manifestaba que Niklas Poulantzas en *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, ya había superado este determinismo al concederle a la política una autonomía relativa de la base económica (Almond, 1980).

En forma no muy distinta, en el caso de la teoría de la elección racional, la crítica culturalista apuntaba a modelos matemáticos que pretendían explicar el comportamiento político de los ciudadanos, los que no contemplaban aspectos normativos de la agencia, salvo la lógica del costo y del beneficio (Barry, 1974; Downs, 2001).

En todo caso, tanto el marxismo como la teoría de la elección racional compartían el fundamento economicista de la explicación del comportamiento político, lo que

impulsó a los pensadores clásicos a elaborar un concepto teórico alternativo que incorporara las *actitudes políticas* como una parte fundamental de la cultura política (Almond & Verba, 1970). En palabras de los autores:

“Nuestra definición y clasificación de tipos de orientación política sigue a Parsons y Shils, como hemos indicado en otro lugar. La orientación se refiere a los aspectos internalizados de objetos y relaciones. Incluye primero una “orientación cognitiva”, es decir, conocimientos y creencias acerca del sistema político, de sus roles, y de los incumbentes de dichos roles, de sus aspectos políticos (“inputs”) y administrativos (“outputs”); segundo, una “orientación afectiva”, o sentimientos acerca del sistema político, sus roles, personal y logros; y tercero, una “orientación evaluativa”, los juicios y opiniones sobre objetos políticos que involucran típicamente la combinación de criterios de valor con la información y sentimientos” (Almond & Verba, 1970, pág. 31).

Así, el concepto de cultura política desarrollado por Almond & Verba buscaba producir una articulación entre la “dimensión subjetiva” de la política con el sistema político, tratando de identificar el tipo de relación que se establecía entre el nivel micropolítico (ciudadanía) y el nivel macropolítico (sistema). Con ese objetivo, los autores elaboraron tres tipos de cultura política: el *parroquial*, el *súbdito* y el *participante*, que incluso, como todo “tipo ideal”, se podían combinar (Almond & Verba, 1970).

También, en el marco del desarrollo del concepto de cultura política, Almond & Verba le concedieron gran importancia a la “socialización política” como proceso fundamental de la formación cívica, en el que los agentes socializadores como la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, los medios de comunicación y el trabajo, tienen un rol fundamental en la estructuración de las experiencias de los individuos en su infancia, adolescencia y adultez temprana (Almond & Verba, 1970; Botella, 1997; Benedicto, 1995).

Cabe mencionar que el trabajo de Almond & Verba, a pesar del increíble aporte que hacía al campo de la política y su estudio científico, recibió varias críticas tanto a nivel teórico como metodológico (Welch, 2013), lo que llevó a la revisión posterior del concepto y su aplicación (Almond, 1980). En tal sentido, como todo concepto pionero, tuvo aceptación pero también detractores, no obstante, lo fundamental es que este trabajo había abierto un campo inexplorado de investigación, orientado a conocer la cultura política de los ciudadanos desde una perspectiva empírica y comparada, lo que sin duda fue aprovechado por varios investigadores del campo de la sociología y la ciencia política.

Es así que a partir del trabajo seminal de Almond & Verba se ha desarrollado una gran cantidad de investigaciones orientadas a la comparación. Estudiosos de la cultura política han agrupado este tipo de trabajos bajo la clasificación de escuela “comparatista” (Llera, 1997; Heras, 2002) también conocida como escuela “Behaviorist” (Welch, 2013). Bajo este aporte se ha complejizado el estudio de la política, entendiendo esta dimensión con un carácter “multidimensional” (Moran & Benedicto, 1995), en el que interactúan diversos factores como la educación, la posición social, la historia, la memoria, entre otros componentes, además de otros saberes y aprendizajes producidos a raíz de nuevos contextos de democratización.



En este universo de trabajos de orientación más empírica, destacan autores interesados en comparar los “universos políticos” de los ciudadanos de diversas naciones, como son los trabajos de Ronald Inglehart (1991), que analizan el cambio de valores en forma periódica en distintos países del mundo desde la década del setenta hasta la fecha; los clásicos trabajos de Lipset (1970), Diamond (1993) y Przeworski (1994), orientados al estudio de la relación entre desarrollo y procesos de democratización; incluso, investigaciones en los países eurocomunistas y otros trabajos recientes (Chalmers, y otros, 1997; Montero, Gunther, & Torcal, 1998; Gabriel, 1990) por citar algunos, que continúan en la línea comparativa inaugurada por Almond & Verba.

En efecto, la mayoría de estos trabajos comparativos a nivel de países son tributarios de la metodología usada por Almond & Verba, sobre todo en lo referido a la concepción analítica de estudiar empíricamente la relación entre ciudadanía y democracia. En esta labor, las actitudes individuales promedio de los ciudadanos han sido utilizadas como medidas nacionales (Díez, 2006 y 2011), con grandes y extensas bases de datos elaboradas sobre la base de cuestionarios y con sofisticadas técnicas estadísticas, que han sido eficientes en mostrar el panorama general de los universos políticos de los distintos ciudadanos del mundo en determinados períodos de tiempo, y sobre todo, en el contexto de cambio de regímenes políticos (Montero, Gunther & Torcal, 1998).

Pero, a pesar de la enorme contribución que ha realizado la escuela comparativa, lo cierto es que a mediados de los años ochenta, persistían en el debate académico algunos cuestionamientos en relación al concepto de “cultura política”, en los que se criticaba un uso excesivamente “positivista” de esta noción y de su aplicación en la investigación.

Como es sabido, esta crítica emerge particularmente con el “giro cultural” que se produce en los años ochenta, el que se inicia de la mano del antropólogo Clifford Geertz (1973). A partir de este movimiento fenomenológico, se elabora una crítica al positivismo de los estudios sobre la cultura, cuyo impacto en las escuelas comparatistas fue el llamado a superar la vinculación entre “cultura y valores”, para en cambio, avanzar hacia nuevas formas de entender la “cultura” (Welch, 2013). Así describen este desplazamiento Fernández & Morán (2014):

“En consecuencia, se difundieron estudios empíricos que, *en lugar de presumir la existencia de códigos de significación básicos*, consideraron cómo los actores, enfrentados a cuestiones públicas, emplean una multiplicidad de significados a la hora de establecer sus interacciones. *No se trataba ya de entender la puesta en práctica de una estructura cultural o de un sistema de códigos específicos*, sino de analizar la diversidad de las formas a través de las cuales los individuos y grupos recurren a distintos significados a lo largo de estos procesos, creando otros nuevos, reinterpretando los antiguos, e incluso equivocándose a la hora de emplearlos. En definitiva, este nuevo giro explica el énfasis en la “cultura en acción”, que dio lugar a un conjunto notable de investigaciones empíricas, en las que los discursos públicos siguen constituyendo una pieza clave del análisis” (pág. 45)<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Las cursivas son mías.

Dentro de las críticas más profundas que se hacía a los comparatistas, se señalaba la imposibilidad de desentrañar *comprendivamente* los multidimensionales significados o sentidos conferidos por los individuos a la actividad política, lo que, en definitiva, limitaba en demasía el análisis de la cultura política de los ciudadanos a la dimensión institucional, excluyendo la naturaleza más “cotidiana” o “extrainstitucional” de la política, muy en la línea de los aportes de la fenomenología (Habermas, 1999).

Por otra parte, la crítica epistemológica mencionada, ponía en evidencia otro elemento importante: el afán expansionista de los comparatistas de abarcar distintas naciones para el análisis comparado, el que por su propia especificidad metodológica negaba la posibilidad de identificar “subculturas políticas” o “culturas de rol” singulares dentro de una misma sociedad, clausurando con ello la existencia de eventuales conflictos culturales en sociedades complejas y diferenciadas (Welch, 2013; Botella, 1997).

## 2. Criterios de selección del enfoque

En efecto, la riqueza metodológica y teórica aportada por la fenomenología a partir del “giro cultural”, ha contribuido en forma notoria al campo de la investigación de la cultura política, fundamentalmente, por la posibilidad de enfocarse en el estudio de las prácticas sociales de los actores, incluso muchas veces, a través de una comprensión radical de la cultura como una especie de “caja de herramientas” (*Tool Kit*) (Swidler, 1986): “know-how” que operaría indistintamente, dependiendo de cada circunstancia social, avanzando en la dirección de lo que Anne Swidler ha denominado como “Culture in Action”. Así lo expresa su principal referente:

“The alternative analysis of culture proposed here consist of three steps. First, it offers an image of culture as a “tool kit” of symbols, stories, rituals, and world-views, which people may use in varying configurations to solve different kind of problems (...) Second, to analyze culture’s causal effects, it focuses on “strategies of action” persistent ways of ordering action through time. Third, it sees culture’s causal significance not in defining ends of action, but in providing cultural components that are used to construct strategies of action” (Swidler, 1986, pág. 273).

No obstante, en una línea de investigación diferente, la perspectiva que se pretende utilizar en este trabajo es distante del enfoque desarrollado por Swidler y la escuela hermenéutica a la que se hacía mención. Y ello porque, como se indicaba, el enfoque de la “cultura en acción” sitúa sus mayores esfuerzos en el análisis de las “prácticas sociales” de los agentes, bajo la difícil misión de comprender sociológicamente el juego entre agencia y estructura (Welch, 2013; Archer, 2009).

A pesar de lo sugerente y seductora que puede llegar a ser esta estrategia de investigación, lo cierto es que el objetivo de análisis busca desarrollar otra potencialidad, y por ello está más bien orientado al conocimiento de sólo una dimensión de la cultura política, a saber, aquella relacionada con lo que los autores

clásicos denominaron “actitudes políticas” (*attitudes matter*) (Almond & Verba, 1970, pág. 31; Putnam, 1973, pág. 4–5).

En tal sentido, y siguiendo de cerca las recomendaciones del enfoque más clásico, se considera apropiado distinguir, al menos analíticamente, la dimensión comportamental de la discursiva (Putnam, 1973, pág. 25–27; Navarro & Díaz, 1994; Alonso, 2003), centrando los esfuerzos especialmente en esta última a través del estudio de las *posiciones políticas y valores* de la élite empresarial o lo que se ha denominado como “*configuración ideológica*”. Esto último no significa que se vaya a dejar de lado el comportamiento político del sujeto de investigación, empero, el interés está más centrado en la dimensión discursiva asociada más bien al pensamiento político que al propio comportamiento (Almond, 1988, pág. 80–81).

Para poder investigar la cultura política de la élite empresarial se recogen sugerencias de otros referentes de la escuela clásica, particularmente los aportes de Pye & Verba (1965), quienes también interesados en el fenómeno de “notables”, mencionan la necesidad de distinguir algunos métodos para examinar la cultura política de las élites en forma diferenciada de las masas, aconsejando para las primeras la *estrategia interpretativa* así como para las segundas, los estudios de medición de opinión pública. Así formulan esta idea los autores:

“Quite different methods of research are called for in the study of (elite and mass) cultures. *Work on the elite political culture involves skill in interpreting ideologies, in characterizing operational codes, and in defining the spirit and calculations that lie behind high-risk political behaviour.* The study of the mass political cultures depends, on the other hand, upon the advanced techniques of survey research and modern methods of measuring public opinion” (Pye & Verba, 1965, pág. 16)<sup>14</sup>.

Esta sugerencia, por lo demás, es lo suficientemente compartida por otro referente de la cultura política, el sociólogo Robert Putnam, para quien la única forma de adentrarse con mayor profundidad en las creencias políticas de las élites es “*sentándose a conversar con ellas, escuchándolas atentamente*” (Putnam, 1973, pág. 8); finalmente, estudios más contemporáneos de analistas destacados también sugieren seguir la misma estrategia interpretativa (Morán, 1995, pág. 103).

En efecto, la atracción por los estudios sobre la cultura política de las élites fue una de las inquietudes intelectuales que a mediados del siglo pasado ya rondaba a Almond & Verba. Estos intelectuales en *The Civic Culture* (1963), le atribuyeron un papel “extraordinario” a las aristocracias anglosajonas en la institucionalización de una cultura política de carácter pluralista y orientada al “consenso” entre las élites, tanto para implementar cambios institucionales como también para, en palabras de los propios autores, “*moderarlos*”. Este arraigamiento de una cultura cívica “armoniosa” entre “quienes gobiernan” (Dahl, 2011), habría propiciado las condiciones para la posterior inclusión de otros actores sociales al sistema político (Almond & Verba, 1970, pág. 24).

---

<sup>14</sup> Las cursivas son mías.

Lo anterior deja entrever el valor que tenía el estudio de las élites para los pioneros, ya que estos concebían un rol fundamental de las minorías en el proceso de institucionalización de determinadas maneras de sentir y de pensar la actividad política, sobre las que, por cierto, se reconoce un cierto “principio de causalidad” sobre el rendimiento del propio régimen político (Diamond, 2003; Lipset, 1970; Lipset & Solari, 1967; cfr. Rustow, 1987; cfr. Inglehart, 1988; cfr. Inglehart & Welzel, 2006).

Y aunque Almond & Verba no desarrollaron estudios sobre culturas políticas de las élites, el diagnóstico sobre la importancia estructurante de las minorías selectas llevó a estos pensadores a insistir sobre la necesidad de investigar las “subculturas políticas” y “culturas de rol”, siendo esta última muy valiosa en la medida en que remite directamente al concepto de “élite” (Almond & Verba, 1970, pág. 47).

En otra notable publicación, *The Beliefs of Politicians* (1973), Putnam, también destacaba la importancia de examinar la cultura política de las élites, puesto que para el autor –y muy en concordancia con Almond & Verba– el análisis de sus creencias y valores permite comprender de mejor forma el funcionamiento de los sistemas políticos (Putnam, 1973, pág. 237–239). De hecho, como bien indica Morán (1997), Putnam realiza un aporte extraordinario en el sentido de lograr vincular los estudios de cultura política y el análisis elitista: dos tradiciones intelectuales que habían tenido muy poco diálogo entre ellas, producido, en gran medida, por la diversa naturaleza epistemológica de cada campo de investigación (Morán, 1997, pág. 196).

Con varios matices de diferencia, Inglehart –quien lleva varias décadas estudiando la relación entre modernización, cambio cultural y democratización– también admite la existencia de diferencias entre las culturas políticas nacionales y la especificidad de algunas culturas políticas como las de las minorías que ejercen el poder (Inglehart, 1988). Sin embargo, ya en sus últimos trabajos, sobre la base de una contundente evidencia empírica, sugiere de “*lo ingenuo que es creer que la construcción de instituciones adecuadas y de élites comprometidas con la democracia es lo único necesario para instaurar la democracia*” (Inglehart & Welzel, 2006, pág. 17). De esta manera, el fundador de *World Values Survey* matiza el rol decisivo de las élites en la cimentación de una cultura democrática, discutiendo directamente con los postulados más clásicos, en los que las élites era concebidas como claves en la formación de una cultura de “consenso” expandible al resto de la población como condición previa de la democratización.

Y, de hecho, a mayor abundamiento, desde la mirada de Inglehart y compañía, las élites parecieran tener un impacto en la cultura global bastante menor, ya que lo verdaderamente relevante sería la evolución de los países hacia economías más desarrolladas y con menos escasez, lo que permite a los ciudadanos de los países más avanzados gozar de mayores niveles de autonomía individual y autorrealización personal, sobre todo a través del ejercicio de la “libertad de elección”: el anhelado “desarrollo humano” (Inglehart & Welzel, 2006). De esta manera, el desarrollo socioeconómico permite el florecimiento de instituciones democráticas, ya que según Inglehart & Welzel (2006), las personas con mayores niveles de autonomía y elección individual demandan instituciones con una naturaleza no muy distinta a la promovida por esos valores arraigados, siendo la “democracia liberal” la más apropiada para su realización. En palabras de los autores:

“La propagación de los valores de autoexpresión impulsa a las personas a demandar instituciones que les permitan actuar de acuerdo a sus propias elecciones. *Por consiguiente, los valores de la autoexpresión motivan a las personas a conseguir los derechos políticos y cívicos que definen la democracia liberal.* Estos derechos capacitan legalmente a las personas para perseguir sus propias elecciones en sus actividades públicas y privadas. En pocas palabras, las aspiraciones subjetivas a la elección generan demandas de derechos de elección” (Inglehart & Welzel, 2006, pág. 203)<sup>15</sup>.

Cabe mencionar que, si bien los trabajos de Inglehart no analizan la distribución de valores en los distintos grupos y/o élites que conforman las sociedades (Díez, 2011; Morán, 2011), lo cierto es que sí dejan planteada una inquietud que se puede inferir de su teoría del “desarrollo humano”. Y ella está relacionada con los valores y recursos que tienen las “minorías selectas” (Bottomore, 1965), ya que de acuerdo con algunos postulados de la teoría de las élites, éstas detentan la mayor cantidad de recursos económicos, cognitivos y de capital social en una determinada sociedad, siendo particularmente relevantes en esta distribución las élites económicas o empresariales (Scott, 1990; Winters, 2011; Rothkopf, 2008; Acemoglu & Robinson, 2013; Dezalay & Garth, 2002; Bourdieu, 2012).

En efecto, no todos los valores inherentes al “desarrollo humano” están distribuidos de forma igualitaria en las sociedades analizadas por la empresa de Inglehart. Así lo han mostrado, por ejemplo, los trabajos de Pierre Bourdieu y Lóïc Wacquant (2001), quienes desde una perspectiva más sociologicista, han señalado que desde el origen social se produce una “distribución desigual de recursos”, que permite a determinados agentes contar con capitales escasos y socialmente valorados, considerados recursos esenciales en el agenciamiento para ejercer la dominación en los distintos campos que estructuran la sociedad (Bourdieu & Wacquant, 2001a; Osorio, 2014 y 2015; Dezalay & Garth, 2002).

Incluso, con bastante tiempo de antelación a los trabajos de Bourdieu, las teorías de las élites más tradicionales ya planteaban que en el marco de sociedades que tienden a la complejidad, la existencia de un número reducido de personas asume funciones de liderazgo y conducción en las posiciones más altas de la estructura de poder (Aron, 1972; Bottomore, 1965; Keller, 1971; Dahl, 2011; Mills, 2007; Osorio, 2014, 2015 y 2018). Así, desde el aporte más clásico de la literatura hasta los trabajos más contemporáneos, se caracteriza a estos grupos como sectores influyentes que poseen una gran cantidad de recursos materiales y simbólicos que permiten la acumulación de poder para intervenir en las distintas esferas de la sociedad (Scott, 1990; Winters, 2011; Solimano, 2015; Rothkopf, 2008).

Bajo la misma premisa sobre una “desigual distribución de recursos simbólicos”, actualmente, y desde la perspectiva de la teoría de la modernización, el sociólogo español Juan Díez, ha demostrado en base a la teoría centro-periferia de Galtung, que las élites desarrollan un conjunto de valores liberales de autoexpresión en forma diferenciada de la ciudadanía. Para ello, Díez (2011), a través de un índice de “posición social” (sexo, edad,

---

<sup>15</sup> Las cursivas son mías.

nivel educativo, situación de empleo, ocupación, ingresos del hogar), demuestra que durante el proceso de modernización en distintos países, las élites adquieren antes que las masas un conjunto de valores posmaterialistas, situación que se da, sobre todo, por su condición de *seguridad económica*, por su *nivel educacional* y *socioeconómico*, aunque también por su *seguridad física* (Inglehart & Welzel, 2006).

En definitiva, estos insumos teóricos y empíricos presentados permiten concluir, siguiendo a Fernández & Morán (2014), que el campo de la cultura política es bastante complejo a raíz de sus propias mutaciones, tanto en el nivel epistemológico como también metodológico. Sin embargo, a pesar de estas “rupturas” y “continuidades”, se estima pertinente, por los criterios teóricos y metodológicos antes mencionados, optar por un enfoque de orientación más clásico interesado en la dimensión más *actitudinal* de la cultura política desde una perspectiva interpretativa, lo que es más adecuado en función de los objetivos de investigación planteados.

### **3. El concepto de socialización política**

La mirada más tradicional de la cultura política –en coherencia con lo que persigue esta investigación– le presta la suficiente atención a las actitudes políticas de los ciudadanos, pero además, le concede una valiosa importancia al estudio de la “socialización política” como proceso de formación de la cultura política. En este desarrollo, los agentes de la socialización y las vivencias experimentadas por los sujetos puede llegar a ser altamente significativas en los *early years* o “años impresionables” (Lane, 1959; Sears, 1990; Almond & Verba, 1970; Trafimow & Wyer, 1993; Inglehart, 1991; Whitefield & Evans, 1999). Así lo manifiestan Almond & Verba (1970), cuando hacen referencia a la cultura y socialización política como dos procesos que pueden conectarse:

“Cuando hablamos de cultura política de una sociedad, nos referimos al sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población” (...) con el proceso de socialización política podemos trascender los supuestos, más bien simples, de la escuela psico-cultural respecto a las pautas generales de desarrollo infantil y las actitudes políticas del adulto y tendencias behaviorísticas del mismo con las experiencias socializantes políticas, manifiestas y latentes de la infancia” (pág. 31).

Pues bien, la selección de este enfoque de investigación no es al azar, y trata de ir en la misma línea con el planteamiento de las hipótesis de trabajo, en las que la socialización política de ambas generaciones de entrevistados tiene un impacto global en la “configuración ideológica” de sus miembros.

Como se destaca en la literatura sobre la materia, en general, la socialización política se asocia al proceso de transmisión deliberado y latente de valores, normas y creencias que hacen los agentes socializadores, especialmente los padres y las escuelas hacia los infantes, adolescentes y adultos tempranos (Almond & Verba, 1970; Lane, 1959; Greenstein, 1977; Maravall, 1978; Jaime, 2000; Sears, 1990). En esta comprensión, las instituciones sociales tienen una valiosa influencia en la formación cívica de la

ciudadanía, grupos y/o élites que constituyen la sociedad, ya que como ha indicado Gabriel Almond en textos posteriores a su obra cumbre, “*ahora era posible establecer si existían marcas nacionales distintivas; si las clases sociales, los grupos funcionales y las élites específicas tenían orientaciones distintivas hacia la política y la política pública, y el papel que jugaban los agentes de socialización en el desarrollo de estas orientaciones*” (Almond, 1980, pág. 27).

Para probar estas premisas sobre la formación cívica, desde mediados del siglo XX se comenzaron a hacer varias investigaciones en las que se intentó medir la eficacia de la socialización política en infantes y adolescentes (Benedicto, 1995). El propósito era observar si la transmisión de normas producía una cultura cívica adecuada para sostener el régimen democrático (Easton & Dennis, 1970; Greenstein, 1977).

Estos trabajos, innovadores para la época, particularmente por su carácter experimental, fueron discutidos por la comunidad científica, sobre todo, por su insistencia en vincular *causalmente* la socialización política con el sostenimiento del régimen democrático (Pateman, 1980; Barry, 1974). Por otra parte, las críticas apuntaban a la transmisión mecánica de “afinidades políticas” que inhibían la capacidad reflexiva de los ciudadanos sobre la significación de sus aprendizajes políticos (Percheron, 1985), lo que dejaba escaso margen al agente para la “desviación ideológica” (Maravall, 1978).

Como indica Jorge Benedicto (1995), la gran mayoría de estos estudios de “laboratorio social”, estaban más bien dirigidos a verificar la presencia en niños de una identificación con las instituciones políticas, por ejemplo, a través de la figura del presidente, líderes políticos o símbolos patrios. En el fondo, lo que se buscaba era pesquisar la presencia de sentimientos de “lealtad política” (*political loyalty*) hacia el sistema político, resultados que permitirían concluir que la “socialización política” funcionaba como una variable fundamental en el comportamiento político de los ciudadanos.

Evidentemente, el planteamiento de esta causalidad fue materia de controversia, debido al determinismo implícito que había entre un proceso y otro (Almond, 1988; Tormos, 2012). En ese sentido, se cuestionaba, fundamentalmente, que aquellos que desestimaban el determinismo incurrieran en algo no muy distinto al intentar establecer relaciones de causalidad entre la “socialización política” y el “comportamiento político”, siempre de cara a mantener la estabilidad de la democracia inspirada, por cierto, en el modelo anglosajón (Botella, 1997).

Con todo, aun cuando la idea de socialización política tenía un carácter “revolucionario” en la medida en que se concebía como notoria en la formación de la cultura cívica (Linz, 1978), lo cierto es que, según diversos autores, no tomaba muy en consideración algunos aspectos sociológicos e históricos relevantes para comprender con mayor precisión la estructuración de las culturas políticas de los ciudadanos (Welch, 2013; Percheron, 1985; Mcdevitt & Chaffee, 2002; Benedicto, 1995).

Esto es así, porque en esta comprensión más tradicional de la socialización política, los individuos ocupaban un rol muy pasivo en la recepción de valores, creencias y normas, estableciéndose como meros recibidores y “reproductores” de dichas normas, lo que se aproximaba en demasía a comprensiones estructuralistas que no contemplaban aspectos *reflexivos* (y estructurantes) de la agencia (Archer, 2009; Bourdieu, 2012).

En virtud de lo anterior, miradas un tanto más recientes sobre la teoría de la socialización política, han comenzado a conferir más importancia a la “autorreflexividad” de los sujetos (Mishler & Rose, 2007; Percheron, 1985; Benedicto, 1995; Jackman & Miller, 1998; Tormos, 2012), lo que matizaría o desde otra perspectiva “complementaria” la influencia que puede tener el proceso de transmisión que se realiza desde los agentes más clásicos de la socialización.

Así es como actualmente el campo de la cultura política ha comenzado a dar más relevancia a las vivencias “individuales” y “colectivas” que pueden tener los sujetos en determinados contextos históricos, particularmente, aquellas experimentadas durante los “años impresionables” (Halbwachs, 1995; Mannheim, 1958; Linz, 1978; Guichard & Henríquez, 2011; Manzi, y otros, 2004). Esto ha sugerido incorporar al modelo más clásico de la socialización una mirada cualitativa, centrada en la *historia* y la importancia de su impacto en las biografías de los individuos. En éstas, las “memorias” de las vivencias personales y colectivas pueden llegar a jugar un rol que es necesario considerar para entender su cultura política (Halbwachs, 1995; Mannheim, 1958). Así formula esta premisa Lucian Pye (1977), quien también otorga facultades a la historia como un elemento decisivo en la formación de la cultura política:

“Una cultura política es a la vez, *el producto de la historia colectiva de un sistema político y de las biografías de los miembros de dicho sistema*, debido a lo cual sus raíces hay que buscarlas tanto en los acontecimientos públicos como en las experiencias individuales” (pág. 323)<sup>16</sup>.

Se trata de un giro interesante que incorpora una dimensión “estructural” y también “agencial”, muy en la línea de la orientación propuesta por autores contemporáneos como Annick Percheron (1985). Bajo esta mirada, se señala lo adecuado de tener presente en el análisis de la socialización política, un nivel “macro”, que concibe la significación de la transmisión de actitudes desde agencias socializadoras como la familia, la escuela, los medios de comunicación, entre otros. Pero, por otra parte, se sugiere en modo complementario, la incorporación de un nivel “micro”, que tome en consideración el aprendizaje individual del ciudadano en relación con el contexto político, que puede ser decisivo en la configuración de actitudes políticas (Percheron, 1985).

Esta mirada o perspectiva enfocada en el aprendizaje político de los individuos, abre una puerta seductora al estudio de la “subjetividad política”. Y bajo esa consideración, la experiencia adquirida por la vía de las “vivencias” también puede ser una fuente de formación de actitudes (Halbwachs, 1995), que según autores como David Sears (1990) y Fred Greenstein (1977), dependiendo del tipo de significación que han tenido en la biografía de los individuos, pueden incluso llegar a ser *imperecederas e inmodificables*.

En todo caso, desde el campo del “institucionalismo” hay quienes discuten el aspecto determinista y persistente de la socialización política temprana (*early years*). En contraste, algunos investigadores interesados en el aprendizaje político, impugnan esta

---

<sup>16</sup> Las cursivas son mías.



tesis sobre el efecto perpetuo de la socialización en la infancia y adolescencia, matizando sobre todo su *naturaleza inmodificable* a lo largo de los años. En tal sentido, desde esta mirada se coloca mucho mayor énfasis en los contextos y experiencias recientes de los individuos para reconfigurar su aprendizaje político, sobre el cual no sólo se consideran aspectos políticos, sino también sociales y económicos en el proceso de “reaprendizaje” de los ciudadanos. Así lo formulan William Mishler & Richard Rose (2007):

“There are at least two reasons that generations are important. The first is *historical*. All generations in society may be socialized broadly into a common political culture, *but different aspects of that culture may be emphasized depending upon the particular historical environment (war, depression, etc.) within which different cohorts were socialized (...) Social and economic change provides a second reason that generations can matter*. Modernization and globalization mean that successive generations grow up literally in different worlds” (pág. 823)<sup>17</sup>.

En ese tenor, inquietudes intelectuales que se generan desde el enfoque institucionalista, pueden estar más bien relacionadas con el “aprendizaje político adulto” durante procesos de transición o cambio de regímenes. Así, la emergencia de nuevos contextos políticos y experiencias recientes de los individuos con esos contextos pueden ser reveladores para modificar sus actitudes políticas adquiridas, previamente, mediante el proceso de socialización clásico (Tormos, 2012; Jackman & Miller, 1998; Morán, 1995).

Ello bien podría implicar la modificación o adquisición de una nueva “configuración ideológica” por parte de la ciudadanía, aun cuando ésta hubiese sido socializada bajo regímenes autoritarios. Y así lo demuestran Mishler & Rose (2007), ya que esto es justamente lo que ocurrió en el caso de la Unión Soviética, país en el que se produjo la adquisición de algunas culturas políticas de orientación democrática en ciudadanos formados bajo el totalitarismo de los “socialismos reales”. Esto pone de manifiesto lo valioso del contexto democrático en el proceso de “resocialización política” (Morán, 1995).

Otra evidencia empírica levantada por investigadores institucionalistas también pone en interregno algunos de los presupuestos de la escuela “culturalista”. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en trabajos recientes de Raúl Tormos (2012), que refutan algunos aspectos de la “teoría de la modernización” de Inglehart, sostenida en la hipótesis de que las personas que han sido privadas materialmente en sus infancias y adolescencias no logran cambiar sus valores materialistas a lo largo de sus vidas, lo que es coherente con el enfoque de la socialización “persistente” (Sears, 1990; Inglehart, 1991).

Contrariamente a estos hallazgos, Tormos (2012), refuta esta teoría que pone un fuerte acento en la “socialización temprana” de las masas. Para ello, agrega nuevos datos que demuestran la presencia de un *re-aprendizaje político de valores* y actitudes posmaterialistas “intracohorte”, sobre todo en población de edad más avanzada.

Ahora bien, lo relevante sobre esta cuestión, es que tanto las teorizaciones así como la existencia de evidencia, avalan la posibilidad de nuevos aprendizajes que podrían

---

<sup>17</sup> Las cursivas son mías

reemplazar la “configuración ideológica” adquirida mediante el proceso de socialización temprana. De hecho, el mismo Almond, a treinta años de *The Civic Culture* (1993), habría sugerido la posibilidad de no contraponer ambos modelos de investigación, sino más bien, hacerlos complementarios. Así, investigadores culturalistas deberían comenzar a prestar más atención a aspectos más contextuales como la economía, lo social, las coyunturas y/o el desempeño gubernamental, siendo esto más fructífero y dinámico para dar cuenta de la complejidad de los “universos políticos” de los ciudadanos.

### *3.1. La socialización política de la élite empresarial*

Pues bien, la interesante discusión teórica presentada entre el “determinismo” de la socialización política de la escuela culturalista y los aprendizajes políticos posteriores a la adultez temprana, es fructífera para efectos de esta investigación, en la medida, en que permite *problematizar sociológicamente* los principales supuestos de este trabajo, tanto para confirmar las hipótesis, como también para contrastar la información.

Pero siguiendo a Jacques Lagroye (1994), se puede decir que será el análisis empírico de las entrevistas el que permitirá dilucidar la verdadera relevancia de la socialización política de la élite empresarial: tanto para concluir que la cultura política de esta minoría está marcada por su socialización en los años “impresionables”, o bien, para convenir que la “resocialización política” bajo el contexto democrático también puede influir en la formación de su actual cultura política. Se trata, de opciones teóricas que en un momento pueden parecer contradictorias, pero que hasta que no se realice el análisis, no es posible saberlo, cabiendo incluso la posibilidad de que, tal cual lo planteaba Almond (1993), puedan llegar ser estrategias “complementarias”.

Aún así, en principio, la coordenada teórica planteada es la de *orientación tradicional*, ya que se ha sostenido que la cultura política de la élite empresarial está marcada previamente por ambos tipos de socialización política, tanto la transmitida por los agentes de la socialización como la vivencias experimentadas por los dirigentes en su infancia, adolescencia y adultez temprana.

El criterio analítico para preferir la opción teórica indicada está relacionado con lo que previamente he señalado, en referencia al “trauma sociopolítico” (Páez & Basabe, 1993; Alexander, 2016) experimentado personal y familiarmente por la generación de empresarios mayores durante el gobierno de la Unidad popular; experiencias y vivencias negativas que, en el caso de la generación más joven, han sido transmitidas por agentes socializantes, especialmente, a través de la figura de los padres o familiares más cercanos. En definitiva, se trata de dos tipos de “memorias” que condicionan el tipo de cultura política: la “memoria colectiva” y la “memoria histórica”, la primera experimentada directamente por los individuos, la segunda, transmitida generacionalmente (Trafimow & Wyer, 1993).

Al respecto, la literatura que ha estudiado en profundidad los efectos de los “traumas sociopolíticos” (Páez & Basabe, 1993) o “traumas culturales” (Alexander, 2016), es bastante enfática en señalar los impactos duraderos que tienen estos acontecimientos en las biografías de cada individuo, muchas veces, determinando sus formas de ver el mundo de manera inmodificable. Ello denota una diferencia sustancial

respecto de socializaciones políticas en contextos institucionales menos álgidos o conflictivos.

Ciertamente, como se indicó, la “experiencia socialista” comportó una situación bastante crítica para los miembros de la élite empresarial, que no sólo se vieron perjudicados patrimonialmente por las reformas y expropiaciones que afectaron su dimensión material, sino también por la posibilidad de no ver asegurada su propia “existencia”. Se sostiene que esto, sin lugar a dudas, dañó en forma significativa sus vidas personales y familiares, contribuyendo a formar una imagen negativa de la democracia, como un tipo de régimen que bajo determinadas circunstancias no asegura la integridad existencial de sus ciudadanos (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel, 2006). Así definen Páez & Basabe (1993) las consecuencias biográficas del “trauma sociopolítico” en el caso chileno:

“Los hechos traumáticos se definen por su carácter negativo, extremo, inusual y porque se asocian a amenazas a la vida de las personas. Los hechos “materiales” calificados como traumáticos de origen humano y que pueden afectar a colectividades son claros: guerras, violencias, violaciones y daños masivos a propiedades. Sin embargo, desde una concepción más sociocognitiva, Janoff-Bulman define como hechos traumáticos los que alteran profundamente el conjunto de creencias esenciales de las personas sobre sí mismas, el mundo y los otros” (pág. 8).

Tomando en consideración los elementos teóricos expresados, tengo la convicción de que para la élite empresarial, la “solución autoritaria” a través del golpe de Estado, no sólo fue la posibilidad de volver a recuperar la materialidad perdida y dañada (tierras, empresas, propiedades), sino también, la posibilidad de ver asegurada su existencia, más allá de los mecanismos de violencia implementados por el régimen autoritario para asegurar esa supervivencia (Altemeyer, 1981).

En síntesis, la cultura política de la élite empresarial estaría dada por una socialización política “extraordinaria”, cruzada por experiencias personales negativas en democracia, y por transmisiones familiares de esas experiencias, conformando así una “configuración ideológica” identificada con el régimen militar y sus políticas de diseño de una democracia “protegida”.

#### **4. Conceptos operativos**

##### *4.1. La categoría socialización política*

En este apartado se da cuenta de los conceptos operativos utilizados en la investigación, y también de su interrelación. De esta manera, se explica tanto lo que se entiende operativamente como proceso de formación de la cultura política así como la concepción de ésta misma.

En concreto, como ya se ha dicho, las categorías de análisis son : 1) el *proceso de socialización política* y 2) la *cultura política*. Antes bien, por “socialización política” se

entiende, en primer lugar, el proceso de formación de la cultura política, que siguiendo la orientación más tradicional de la literatura, se asocia a la transmisión deliberada y latente de posiciones políticas, valores y/o creencias producida por agentes específicos como son la familia y la escuela (Almond & Verba, 1970; Inglehart, 1991; Trafimow & Wyer, 1993; McDevitt & Chaffee, 2002; Greenstein, 1977; Sears, 1990; Jaime, 2000).

Es así que en el contexto de las entrevistas realizadas, se les consultó a los dirigentes empresariales sobre su *posición social* de origen; la importancia de sus padres y de la escuela en su *formación política*; sobre sus *experiencias y aprendizajes políticos* más significativos en sus “años impresionables”, y sobre su actual *posición política*.

Con esas inquietudes, lo que se buscó a nivel analítico es: 1) identificar a través del relato, cuál es la “posición social” que tenían las familias de los entrevistados en sus primeros años de vida, con el objetivo de verificar si la ubicación en el “espacio social” tuvo incidencia en el tipo de socialización; 2) *cómo y cuál es el impacto de la transmisión deliberada y/o latente de valores y posiciones políticas a través de la familia y la escuela*, elementos que deberían configurar un aprendizaje político en los integrantes de las patronales a temprana edad, que puede ser “pasivo”, o bien, reactivo, atendiendo a lo que Maravall (1978) ha denominado como “disentimiento político”.

En segundo lugar, otra dimensión que compone la categoría de “socialización política” es lo que se ha denominado, siguiendo a Pye (1977), como “*historia colectiva del sistema político*” (Pye, 1977; Percheron, 1985; Morán, 1995). En el fondo, se trata del estudio de la “memoria colectiva” de los entrevistados más mayores, bajo la hipótesis de que esta última ha tenido un impacto en las experiencias personales y familiares que han sido fundamentales en la formación de aprendizajes políticos (Halbwachs, 1995 y 2004; Manzi y otros, 2004).

Así, se busca identificar mediante los relatos de vida o *life stories* las memorias de acontecimientos vividos durante diversos contextos históricos (Maravall, 1978; Cäis, Folguera & Formoso, 2014), particularmente, las vivencias bajo los tiempos de la “polarización”, la Unidad popular y el golpe militar. En efecto, como bien describe Juan Linz (1978), “*las memorias y escritos de los que participaron en los acontecimientos históricos son otra fuente importante para comprender los procesos políticos*” (pág.12), por lo que conocer sus experiencias vividas y los elementos más significativos de estas memorias serán relevantes para desentrañar cómo han contribuido en la formación de su cultura política.

En coherencia con las hipótesis de investigación, la categoría de la “socialización política” ocupa un *lugar decisivo en la formación de la cultura política*, especialmente, en el desarrollo de elementos de identificación con el golpe militar y el diseño institucional de “democracia protegida” que tiene su génesis bajo el gobierno militar. En tal sentido, sostengo que la socialización política, definida por su naturaleza “traumática” (Alexander, 2016; Páez & Basabe, 1993), impacta sobre el concepto global de cultura política, condicionando las actitudes políticas democráticas hacia una *postura inflexible* en torno a los cambios políticos orientados a *desmantelar la herencia autoritaria*.

#### 4.2. El concepto operativo de cultura política

La categoría de *cultura política* que esta investigación elabora, se encuentra orientada con mayor énfasis hacia la dimensión actitudinal, compuesta, fundamentalmente, por las “actitudes políticas” (Almond & Verba, 1970; Putnam, 1973) y la “configuración ideológica” (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel, 2006; Jost, 2006; Altemeyer, 1981).

Como muestra la literatura especializada, las *actitudes* integran dimensiones cognitivas, afectivas y evaluativas (Almond & Verba, 1970), en la forma de tomas de posición de los individuos frente al sistema político y sus diversos componentes (*input* y *output*). Estas posturas pueden ser favorables o desfavorables o de disposiciones positivas o negativas frente a instituciones políticas y actores, que se pueden expresar en diversos indicadores como legitimidad democrática, apoyo al régimen político, desconfianza institucional, entre otros (Pye & Verba, 1965; Almond & Verba, 1970; Jost, 2006).

El objetivo que se persigue es el análisis de una dimensión de la cultura política a través del estudio de las *actitudes políticas*. Para ello, en el contexto de las entrevistas realizadas, se les solicitó a los participantes que emitieran sus posturas y fundamentos sobre distintos actores que conforman parte del sistema sociopolítico (Congreso, partidos, movimientos, etc). Asimismo, se requirió que evaluaran los distintos períodos históricos y cambios institucionales implementados, prestando atención a sus posturas y valoraciones frente al reemplazo de instituciones heredadas del régimen militar y que han permanecido por bastante tiempo en democracia (Constitución, sistema electoral, senadores designados, etc).

Sobre la base de esa información, se buscó identificar, en primer lugar, las posturas de la élite empresarial frente a: 1) los principales acontecimientos históricos que han tenido lugar en Chile; 2) los cambios políticos que se han implementado desde el retorno de la democracia; 3) la institucionalidad política vigente; 4) frente a los diversos actores que conforman el sistema político (partidos, Congreso y movimientos sociales).

En relación a la dimensión de “*configuración ideológica*” que subyace a las actitudes políticas, se analizan dos subdimensiones: 1) las posiciones políticas y 2) algunos valores liberales de autoexpresión y/o de supervivencia.

En el primer caso, siguiendo Jost (2006), Colomer & Escatel (2005), Baño (1993), Bargsted & Somma (2018) y Manzi y otros (2004), quienes confirman que el posicionamiento izquierda y derecha sigue siendo fundamental en el análisis de la cultura política, se analizaron las distintas posiciones políticas de los integrantes de la élite empresarial en torno al clivaje izquierda y derecha, agregando además el del centro político, el que como se verá más adelante, sigue siendo fundamental en el caso chileno (Valenzuela, 1978; Moulian, 1994). Así, en términos operativos, en el contexto de las entrevistas, se les consultó a los dirigentes empresariales que señalaran con qué sector político se sentían más cercanos, si tenían militancia política o si se sentían identificados con algún partido o coalición de partidos (Segovia, 2009), buscando conocer, además, los *fundamentos* de sus preferencias, que es un *plus* que ofrece un trabajo cualitativo de esta naturaleza.

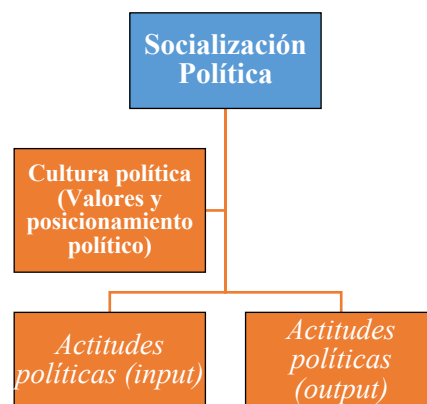
En relación a los valores o creencias fundamentales, y ante una gama diversa de éste tipo (religiosas, económicas, morales, etc), se decidió enfocar los esfuerzos sólo en

algunos valores de autoexpresión, particularmente, los de “igualdad” y “libertad” y de “permanencia” o “cambio”. El objetivo es conocer cuáles son los valores más importantes para los dirigentes de las patronales, y analizar cuáles son las *razones* o *argumentos* que esgrimen los entrevistados para adherir a un valor en detrimento de otro.

Si bien hay autores que indican que los valores son decisivos en la formación de las actitudes políticas (Inglehart, 1991; Schwartz y otros, 2001), incluso llegando a plantear que *“en la “cadena causal” que explica el comportamiento político los valores van primero moldeando al resto”* (Tormos, 2012, pág. 94), lo cierto es que no existe mayor consenso en relación a su causalidad (Van Deth & Scarbrough, 1995), puesto que la mayoría de las veces, tanto las actitudes como las opiniones y los valores son utilizados como sinónimos.

En virtud del punto anterior, y también tomando en consideración las limitaciones que tiene un estudio de carácter cualitativo, que por su propia especificidad hace bastante difícil o improbable establecer relaciones de “causalidad”, es que se sostiene, hipotéticamente, que tanto valores como posiciones políticas se influyen recíprocamente, sin que una dimensión determine necesariamente a la otra. Como se ha mencionado –en concordancia con Lagroye (1994)–, es el análisis empírico de las “expresiones verbales” de los entrevistados lo que permitirá dilucidar con mayor precisión el tipo de relación que se establece entre ambas subdimensiones.

Gráfico 2. Interrelación entre socialización política y cultura política



Fuente: elaboración propia.

## CAPÍTULO IV

### CARACTERIZACIÓN SOCIOCULTURAL DE LA ÉLITE EMPRESARIAL

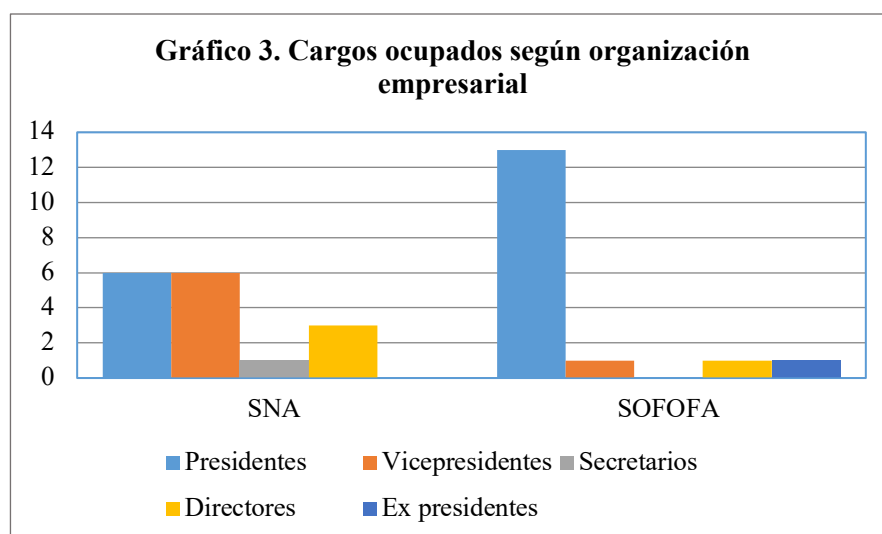
#### 1. Cargos, composición etaria y trayectoria dirigenal

En este capítulo de la tesis se caracteriza socioculturalmente a los miembros de la élite empresarial de la SOFOFA y la SNA. Para cumplir con esta tarea, en el contexto de las entrevistas se aplicó un cuestionario que tuvo como objetivo extraer datos sobre la procedencia de los dirigentes empresariales, su nivel de estudios, su edad, religión, participación en asociaciones, entre otros datos que se exponen a continuación.

Como se señaló, el criterio de selección de la muestra fue la elección de las dos organizaciones empresariales históricamente más importantes del país. Su importancia radica en el rol político que han jugado éstas en diversas “coyunturas críticas” de la historia nacional, pero además, por su larga trayectoria en la conducción y representación de los empresarios (las dos más antiguas de la historia del país) (Rojas, 2000).

Se trata, por cierto, no de todos los miembros que componen la élite empresarial, sino más bien de una muestra orientada por un criterio de selección de los entrevistados que intentó abarcar la mayoría de los rubros empresariales que hoy integran ambas cámaras investigadas. Precisamente, en esa tarea, se buscó entrevistar a los máximos dirigentes empresariales, no sólo por la naturaleza política de sus respectivos cargos, sino también por la *representatividad* que estos tienen en nombre del resto de los empresarios del país.

Pues bien, como se puede ver en el gráfico N°3, las personas entrevistadas ocupaban los *más altos cargos* de sus respectivas organizaciones empresariales. En el caso de la SNA, al menos seis de estos ejercían el cargo de presidente y otros seis de vicepresidentes de Federaciones y Asociaciones. Con matices de diferencia, en el caso de la SOFOFA, trece personas ocupaban el cargo de presidente de sus respectivas asociaciones, uno era vicepresidente, uno director, y el último fue un ex presidente de la misma SOFOFA.



Fuente: elaboración propia.

Siguiendo la definición de “empresario” que da Montero (1996), quien considera bajo esta figura a todos aquellos individuos que tienen una o varias empresas y que además se dedican a dirigirlas (pág. 166), es posible señalar que la gran mayoría de quienes ocupan altos cargos en las organizaciones patronales son empresarios “puros”.

En el caso de la SNA, un 94% señaló ser propietario y/o socio de una empresa, aparte de ejercer labores de conducción de las propias organizaciones patronales. Esta cifra es menor en la SOFOFA, ya que tan sólo el 78% de los dirigentes mencionó ser empresario “puro”, mientras el 22% restante sólo ejercía labores de conducción y representación de los empresarios de cada sector sin que ello implicase ser dueño o accionista de alguna empresa.

Los pocos entrevistados que no eran propietarios, por lo general, ejercían cargos de alta dirección en grandes empresas, por lo que igualmente pueden ser incluidos dentro de lo que la sociología de las élites ha denominado como “élite económica”. Esto es así porque la literatura más reciente referida a este tema, incluye a distintos actores económicos que están relacionados con las altas finanzas y las decisiones económicas, entre los que se encuentran no sólo los grandes propietarios, directores o gerentes, sino también asesores, ejecutivos de inversiones, académicos de *think tanks*, entre otros personajes vinculados directa o indirectamente en la distribución del poder económico (Froud, Savage, Tampubolon, & Williams, 2006). Esta complejización de la noción de élite empresarial, permite circunscribir a los líderes empresariales más allá de la categoría de “propiedad” (Aron, 1972; Keller, 1971).

En relación a la *composición etaria* de los dirigentes empresariales, se puede señalar que hay algunas diferencias entre los miembros de las dos organizaciones analizadas. Como se puede observar en el gráfico N° 4, en el tramo de edad que comprende entre los 40 y 58 años, los más jóvenes son los de la SOFOFA, ya que al menos cinco dirigentes tienen 46 años o menos de edad. Sin embargo, en el tramo de edad entre 47 y 58 años, los más jóvenes son los agricultores.

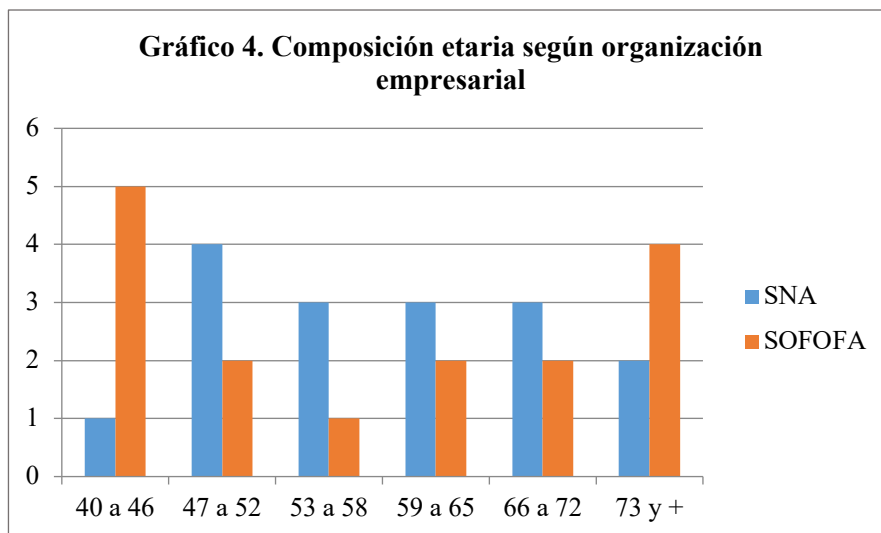
El promedio de edad entre ambas organizaciones es casi el mismo: 59 años para la SNA y 58 para la SOFOFA, aunque la composición etaria de la SNA sigue siendo un poco más longeva, sólo con la excepción del último tramo, en el que los más longevos pertenecen al rubro fabril.

En el ámbito de la comparación con otros grupos “favorecidos”, el promedio de edad de la élite empresarial es levemente más longevo, por ejemplo, en relación a la élite política de senadores elegidos para el nuevo Congreso (2018), cuyo promedio de edad es de 56 años (SERVEL, 2019); también lo es respecto del actual gabinete del presidente Sebastián Piñera, cuyo promedio de edad es de 55 años<sup>18</sup>. Pero donde sí se aprecian más diferencias en la longevidad es sobre los diputados elegidos en 2018, cuyo promedio de edad alcanza los 45 años (-13,5).

---

<sup>18</sup> Fuente: EMOL (2018), visitada el 12 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/01/23/892321/Promedio-de-edad-55-anos-Nuevo-gabinete-es-el-mas-viejo-desde-1990.html>





Fuente: elaboración propia.

Aunque el criterio teórico y metodológico para distinguir a las generaciones no fue estrictamente a través de la separación por cohortes (Inglehart, 1991), sí se considera que la composición etaria de la élite empresarial es fundamental en función de los objetivos de la investigación. Como recordará el lector/a, éstos están orientados por un análisis de generaciones entre aquellos que vivieron personalmente la experiencia del gobierno de la Unidad Popular y aquellos que crecieron en el marco de la dictadura militar (Maravall, 1978; De Miguel, Castilla & Cäis, 1994; Cäis, Folguera & Formoso, 2012; Manzi, Haye, González & Cornejo, 2013).

En efecto, tanto en la SNA como la SOFOFA, casi todos los entrevistados son hombres (sólo una mujer), y de estos, la mitad tiene actualmente entre 40 y 58 años de edad, con lo cual algunos de ellos bien habían nacido en pleno gobierno de Allende o bien tenían poca edad cuando ocurrió este evento; diferente es el caso de los entrevistados mayores, comprendidos en el tramo de edad entre 59 años hasta 73 y más, los que durante el gobierno “popular” o estaban en la adolescencia o incluso en algunos casos ya eran adultos y se encontraban trabajando y/o cursando estudios en la universidad (adultez temprana).

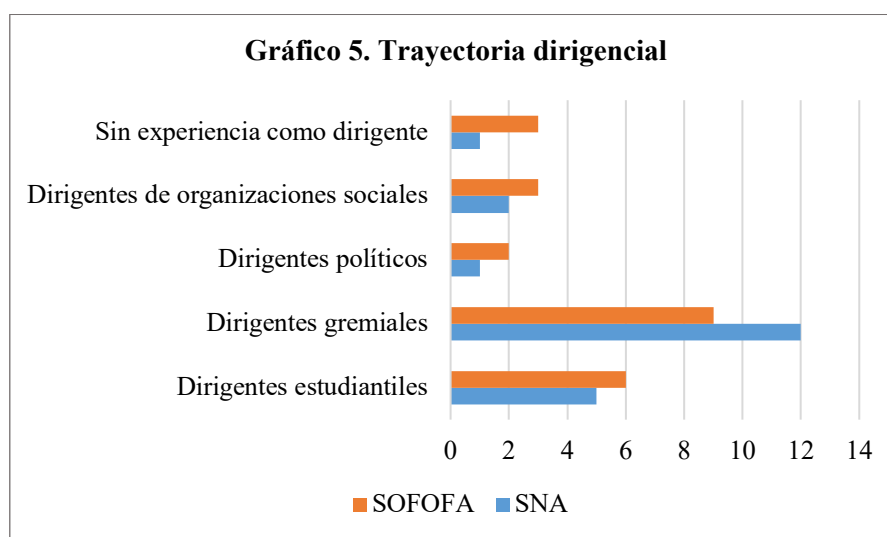
## 2. Cargos dirigentes anteriores

El cuestionario aplicado a los entrevistados también buscó indagar en las trayectorias dirigenciales que poseen quienes actualmente conducen las cámaras empresariales. El objetivo fue conocer si habían dirigido anteriormente algún otro tipo de organización.

En efecto, como se puede visualizar en el gráfico N° 5, el *perfil gremialista* asociado a la representación empresarial es más pronunciado en la SNA por sobre la SOFOFA, ya que en los agricultores, cerca del 80% acumula una experiencia previa asociada a la conducción de asociaciones gremiales, cifra que es menor en los miembros de la SOFOFA, llegando casi a un 60%.

En relación a otros tipos de experiencia en calidad de dirigentes, sobresale aquella asociada al *liderazgo estudiantil*, ya que en ambas organizaciones, casi el 50% había

ocupado diversos cargos de representación y dirección en sus respectivos colegios y/o universidades. Dentro de los cargos más ocupados están los presidentes de curso en el instituto [colegio] y los presidentes de Centro de Alumnos de las universidades.



Fuente: elaboración propia.

Las experiencias de conducción menos mencionadas fueron aquellas relacionadas con la *dirección de organizaciones sociales* y de *dirigencia política*. En el primer caso, casi un 20% de los entrevistados de ambas entidades manifestó haber presidido organizaciones sociales con algún tipo de orientación pública, entre las que destacan, por ejemplo, aquellas relacionadas con asociaciones vinculadas al deporte o fundaciones para la “superación de la pobreza”. Cabe agregar que algunas funciones directivas se ejercen en forma paralela a la conducción empresarial.

En el caso de la “dirigencia política”, se presenta una situación interesante, ya que al menos tres dirigentes expresaron haber tenido en su pasado algún tipo de experiencia “política profesional” (Weber, 2001), entre las que destacan, la Secretaría General del Partido Liberal, perteneciente a la actual coalición de partidos del Frente Amplio, y un cargo de alta dirigencia en el Partido de Renovación Nacional, que pertenece al conglomerado de Chile Vamos (ex Alianza por Chile). Lo interesante es que, a pesar de las escasas experiencias de dirección política, lo cierto es que a lo largo de sus trayectorias sí existieron varios intentos de vinculación de la élite empresarial con la actividad política, especialmente, a través de la ocupación de altos cargos a nivel gubernamental o bien en cargos de representación popular.

Ciertamente, los resultados muestran que un total de ocho entrevistados (cuatro de la SNA y cuatro de la SOFOFA) declaró haber trabajado en alguna oportunidad en el servicio público. Una de estas experiencias fue en el ámbito gubernamental: tres de los cuatro entrevistados de la SNA ocuparon altos cargos en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010–2014), incluido un ministerio. En el caso de la SOFOFA, sólo tres entrevistados manifestaron haber ocupado altos cargos de gobierno, incluida la jefatura de un ministerio en el primer gobierno del mandatario mencionado.

En relación a los cargos de elección popular, en la SNA dos dirigentes han tenido la oportunidad de ejercer tareas de representación: uno como diputado y otro como alcalde, este último elegido con una gran mayoría en su respectiva localidad. Sin embargo, al menos dos dirigentes de la SNA fueron designados directamente por el General Pinochet para ejercer la función de alcalde en sus respectivas localidades. Sólo uno aceptó el nombramiento, ya que en el otro caso, se rehusó de la designación.

En el caso de la SOFOFA, sólo un entrevistado ha ocupado un cargo de representación popular en calidad de diputado de la república. Sin embargo, llama la atención que al menos cinco dirigentes empresariales manifestaron haber intentado ocupar cargos de representación política en diversos ámbitos, aunque los resultados fueron negativos, no resultando electos por la ciudadanía. Estos cargos perseguidos fueron la Cámara Alta, un cargo como concejal y dos cargos como representantes de los estudiantes en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Lo anterior pone en evidencia que un segmento importante de la élite empresarial tiene o ha tenido alguna relación con la política institucional, independientemente de los resultados de sus acciones políticas.

### *3. Establecimientos educacionales: los colegios de élite*

La gran mayoría de la élite empresarial ha realizado sus estudios en colegios considerados de “élite”. Estos establecimientos, dentro del amplio universo de colegios pagados en Chile (OCDE, 2015), según la literatura especializada, se caracterizan por tener complejos criterios de selección de sus estudiantes, con cupos limitados de altas cuotas que excluyen a una parte importante de la población y con una alta exigencia académica (Moya & Hernández, 2014).

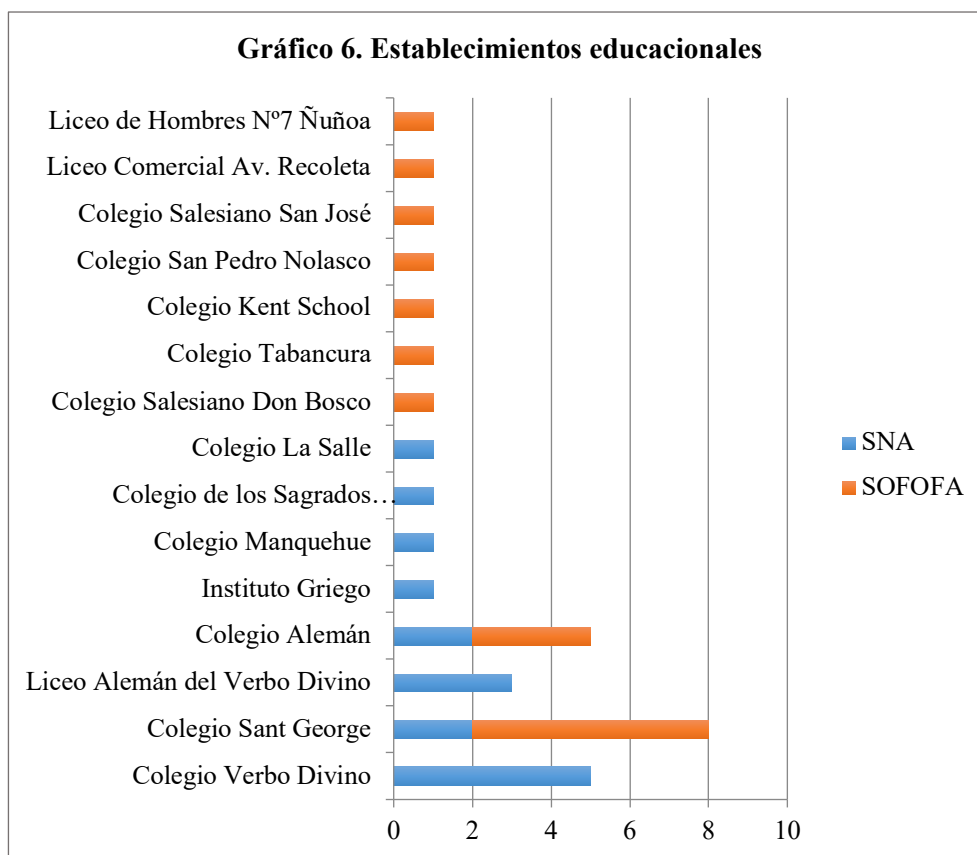
En contraste con la mayoría de entrevistados, sólo existieron dos casos de dirigentes que realizaron sus estudios en colegios públicos, siendo uno de ellos de carácter histórico, el Liceo de hombres N° 7 de Ñuñoa, y el otro, un liceo con menos reconocimiento, ubicado en el barrio [comuna] de Recoleta, que es un sector dentro del gran Santiago que se encuentra por encima del promedio de personas en situación de pobreza, según la encuesta CASEN de 2015, casi en 8 puntos porcentuales respecto de la Región Metropolitana de Santiago (6,20%)<sup>19</sup>. Este último dato no es menor, e indica que *no todos* los dirigentes empresariales provienen de sectores altos o por utilizar una expresión de Winters (2011), no todos son de “*High Born*”.

Efectivamente, Moya & Fernández (2014), señalan varios colegios considerados de “élite” en Chile, entre estos, al Verbo Divino, The Grange School, el Saint George, el San Ignacio El Bosque, el SS.CC. Manquehue, el Instituto Nacional, el SS.CC. Padres Franceses de Viña del Mar, el Tabancura, el Craighouse y el Santiago College, el Instituto Hebreo, el Colegio Alemán, la Alianza Francesa, El Instituto Nacional y el San George (Moya & Fernández, 2014, pág. 68). Como se puede examinar en el gráfico N° 6,

---

<sup>19</sup> Fuente: Reportes comunales de la comuna de Recoleta. Visitado el día 12 de febrero de 2019. Disponible en: <https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Recoleta>

bastantes miembros de la élite empresarial cursaron sus estudios en alguno de estos colegios y también en otros que son parte de este mismo conglomerado selectivo.



Fuente: elaboración propia.

También es importante mencionar que no todos los dirigentes entrevistados estudiaron en la ciudad de Santiago. De hecho, quienes más lo hicieron, fueron los dirigentes de la SOFOFA, cuyos padres residían en la zona oriente por razones laborales. En el caso de la SNA, algunos estudiaron en Santiago pero también hubo varios que se formaron en “colegios de élite” pero en regiones. Esto último es importante porque ilumina algunos rasgos de la posición social de origen de los entrevistados, ya que en efecto, la gran mayoría creció en comunas del sector oriente de Santiago de Chile, considerada una zona exclusiva de residencia de los sectores más acomodados del país (Solimano, 2013). En el caso de quienes nacieron fuera de Santiago, gran parte lo hizo en ciudades del sur de Chile, particularmente, en la región del Biobío y la Araucanía, que son precisamente los lugares en los que se concentra con más intensidad la actividad agrícola.

En términos comparativos, la formación académica en colegios de élite de los dirigentes empresariales de la SNA y la SOFOFA, es coincidente con la de algunos altos ejecutivos de los negocios en Chile. Así lo puso en evidencia la *Revista Capital* y el Seminario *Head Hunting* el año 2014, en la que se analizaron a 120 grandes empresarios en el país andino. En efecto, una de las coincidencias de resultados es que el colegio Saint George y el Verbo Divino, siguen siendo recurridos en la formación de la élites del mundo

económico (Aguilar, 2012, pág. 229); situación que se da sobre todo en aquellos empresarios más longevos (por sobre los 40 años)<sup>20</sup>.

Estas coincidencias que se dan en la formación académica de la élite empresarial, también se manifiestan en otro tipo de líderes. Es el caso, por ejemplo, de quienes han ocupado cargos en calidad de ministros de gobierno durante gran parte del período democrático, de los cuales, casi un 53% ha estudiado en colegios considerados de élite. En este grupo mencionado, en principio, sí parece tener un poco más de importancia el emblemático e histórico liceo público Instituto Nacional, ya que al menos el 10, 2% de los ministros se formó en esta institución. Sin embargo, el resto de los porcentajes se divide en los mismos colegios en los que se han formado los dirigentes de la SNA y la SOFOFA (González–Bustamente & Garrido–Vergara, 2018, pág. 44).

Finalmente, cabe agregar que la formación de las minorías privilegiadas no siempre estuvo asociada a colegios elitistas, ya que, según Cordero (2003), otras élites han estudiado en establecimientos fiscales. Uno de estos grupos son los congresistas electos desde la década del sesenta hasta el golpe militar, quienes fueron formados en más de un 60% en colegios públicos. Tendencia que a partir del retorno de la democracia en 1990, se comienza a diluir ante un fuerte descenso de la educación pública como base de la formación de políticos profesionales (Cordero, 2003, pág. 38), asemejándose en la actualidad un poco más a las instituciones privadas que educan a quienes ejercen parte importante del poder económico.

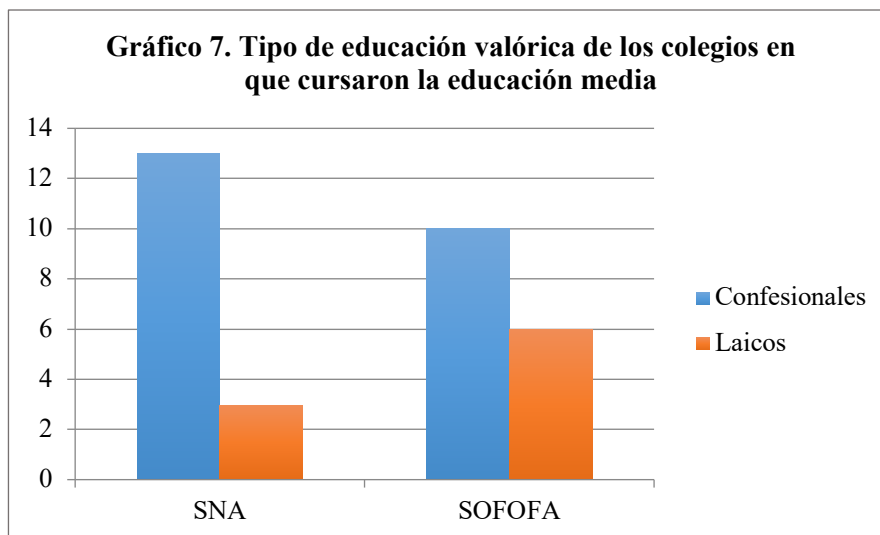
#### 4. *El tipo de educación: colegios elitistas confesionales o laicos*

Los colegios a los que ha asistido la élite empresarial se pueden clasificar, siguiendo a Maravall (1978), en “colegios de élite confesionales” o “colegios de élite laicos”. Esta clasificación se retoma de un estudio del sociólogo español sobre la socialización política de los líderes estudiantiles en el contexto del franquismo en España. Maravall demuestra que la mayoría de los establecimientos a los que asistía la élite estudiantil eran colegios de élite confesionales (26%) o bien colegios de élite laicos (34%), siendo menor el porcentaje de líderes formados en colegios que no eran de élite (14%) o que no eran religiosos (26%) (Maravall, 1978, pág. 220).

Con matices de diferencia respecto de los dirigentes analizados por José María Maravall, en el gráfico N° 7 se puede advertir que los colegios más recurridos por los dirigentes gremiales son los *colegios de élite confesionales*, siendo bastante más marcada esta preferencia en el caso de la SNA, organización en la que sólo dos dirigentes asistieron a establecimientos laicos. Esta situación es distinta en el caso de la SOFOFA, ya que casi la mitad de los miembros de esta organización se formaron en colegios no religiosos, y ya se indicó que dos entrevistados estudiaron en liceos públicos.

---

<sup>20</sup> Fuente: Revista Capital (2014). Visitada el día 1 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.capital.cl/la-elite-nace-o-se-hace/>



Fuente: elaboración propia.

En términos comparativos, si se contrasta el tipo de educación de la élite empresarial y otras élites mencionadas, como es el caso de los altos ejecutivos analizados por la *Revista Capital*, se pueden llegar a conclusiones similares, ya que casi el 70% de los empresarios fue formado en “colegios de élite confesionales”, lo que es más pronunciado en los mayores de 60 años.

Donde sí se manifiestan diferencias marcadas es con la élite política de la “antigua democracia” (hasta 1973), ya que sólo un cuarto de los congresistas fue a colegios católicos privados, mientras sólo un 8% asistió a colegios privados laicos (Cordero, 2003, pág. 38), lo que no es coincidente con las preferencias académico–confesionales de los dirigentes empresariales de este trabajo.

## 5. Escolaridad

En este apartado se analiza el nivel de escolaridad que tienen los dirigentes empresariales: si cursaron estudios universitarios, qué carreras estudiaron, en qué universidad realizaron sus estudios, si hicieron algún posgrado y en qué lugar se realizó dicha especialización.

En relación a las carreras cursadas por la élite empresarial, tal como se hace notar en el gráfico N° 8, en el caso de la SNA, la carrera más recurrente es la ingeniería con especialización en agronomía; también le siguen, en menor medida, los técnicos agrícolas, los veterinarios y los contadores<sup>21</sup>. Esto denota una diferencia con el grupo industrial, ya que en el caso de la SOFOFA, la carrera más cursada es la ingeniería civil, seguida por los abogados y los ingenieros comerciales (economía). Solamente tres personas no concluyeron sus estudios universitarios (dos en la SNA y una en la SOFOFA).

<sup>21</sup> Las preferencias por la carrera de agricultura en los líderes del agro son parecidas a las presentadas por de Imaz (1977), quien demuestra que los ingenieros y los ingenieros agrónomos son carreras concurridas por este tipo de dirigentes (pág. 108).



Fuente: elaboración propia.

Es interesante subrayar que esta tendencia a la elección de carreras universitarias como la ingeniería en la élite empresarial, no es un fenómeno relativamente nuevo. Así lo demuestran Briones (1963), Petras (1969) y Montero (1996), quienes señalan que las ingenierías son las carreras más recurrentes de los grandes empresarios desde la década del sesenta, ya que más del 60% de éstos estudiaban carreras de este tipo (Briones, 1963, pág. 17; Petras, 1969, pág. 33). Hoy día, la situación no es muy diferente en el mundo económico, ya que la élite “corporativa”, pero también los altos directivos indagados por la *Revista Capital*, coinciden en proporcionar una marcada adherencia a carreras vinculadas a la ingeniería, tanto civil como comercial (economía). Esto último, contrasta con la tesis de que la economía y las leyes siguen siendo las profesiones preferidas por las élites en América Latina, incluido, por supuesto, el país que nos ocupa (Dezalay & Garth, 2002).

En esa dirección, en los líderes empresariales, la carrera de derecho parece tener menor predominancia que las ingenierías, aunque si se comparan con otras élites, esta tendencia no se manifiesta en el caso de los parlamentarios electos en 2018, ya que la profesión de abogado es la más recurrente (33%)<sup>22</sup>, siendo esta una tendencia en los congresistas desde la recuperación de la democracia.

## 6. Las universidad selectas

Las universidades históricamente preferidas por las élites han sido las tradicionales pertenecientes al Consejo de Rectores. Las dos más concurridas son la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que son elegidas por su larga tradición en el país, por su prestigio nacional, pero además por su alta calidad académica, reconocida en diversas comunidades académicas a nivel internacional.

Esta preferencia por la Universidad de Chile y la Universidad Católica ha sido investigada por diversos trabajos que identifican los lugares donde cursan estudios las

<sup>22</sup> Fuente: [www.candidaturas.cl](http://www.candidaturas.cl), visitada el día 13 de febrero de 2019. Disponible en: <http://www.duna.cl/media/2017/11/INFORME-FINAL-Candidaturas-Chile-20NOV-.pdf>

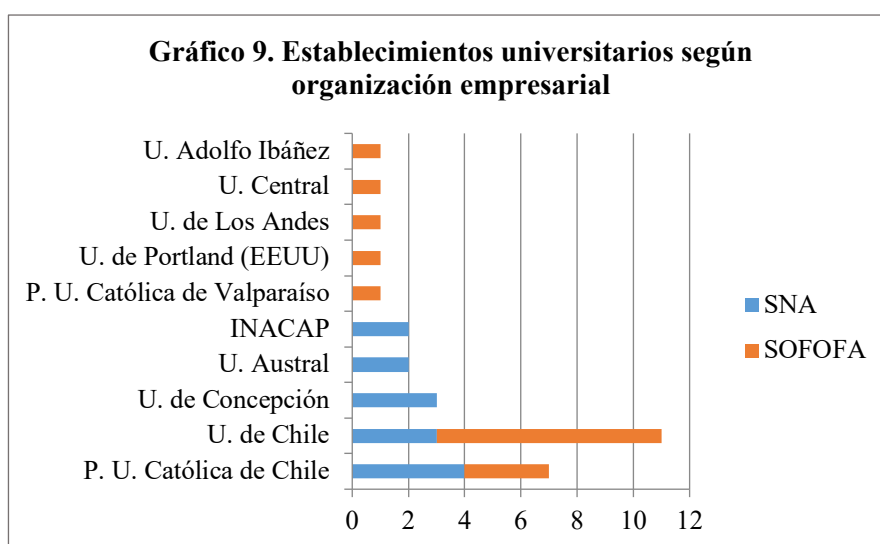
minorías privilegiadas (Cordero, 2003; González–Bustamante & Garrido–Vergara, 2018; Silva, 2010; Joignant & Güell, 2012).

Por ejemplo, en términos comparativos, la élite gubernamental desde la vuelta a la democracia hasta nuestros días, cursa mayoritariamente sus estudios en la Universidad de Chile (61,1%) y la Universidad Católica (19,4%) (González–Bustamante & Garrido–Vergara, 2018, pág. 44); fenómeno que se repite en los Congresistas electos desde 1990 hasta 2010 (González–Bustamante & Cisternas, 2016), e incluso en los parlamentarios de la “antigua democracia”, donde ambas casas de estudio son las preferidas por los “notables” (Cordero, 2003, pág. 42–43).

Esta preferencia actual y tradicional de las élites políticas por la Universidad de Chile, es diferente en la élite corporativa que analizó la *Revista Capital* en 2014, la que muestra que los empresarios se decantan más por la Pontificia Universidad Católica (50%), seguido de la Universidad de Chile (18,9%), y por algunas otras universidades privadas que han comenzado a adquirir importancia para estos grupos sociales. No obstante, en la élite empresarial que aquí se investiga, esta preferencia por la Universidad Católica no es compartida por todos los dirigentes empresariales.

En efecto, como muestra el gráfico N° 9, los dirigentes de la SNA se formaron más en la Universidad Católica que en la Universidad de Chile, aunque como indiqué recién, esta situación no ocurre con los dirigentes industriales, quienes cursaron estudios mayoritariamente en la universidad fundada por Andrés Bello (Universidad de Chile).

La distribución de casas de estudios de los dirigentes luego se disemina, ya que las universidades tradicionales parecen adquirir un poco más peso en la SNA que en la SOFOFA. Así, el resto de los dirigentes agrícolas se formó en universidades tradicionales del Consejo de Rectores, mientras que los dirigentes industriales se han formado más en universidades privadas no tradicionales (a excepción de la Universidad Católica de Valparaíso).



Fuente: elaboración propia.



## 7. Las credenciales académicas

La tendencia a la profesionalización de las élites no es un fenómeno reciente, lo que también incluye a los grandes empresarios (Dezalay & Garth, 2002). Muy atrás quedó la imagen del capitalista aventurero que describía Max Weber a comienzos del siglo pasado, en la que la “intuición” y el “espíritu especulativo” jugaban un papel fundamental (1985). Por el contrario, quienes hoy día ostentan un lugar relevante en la distribución del poder económico, tienen una alta especialización educacional, expresada en lo que Pierre Bourdieu (2001) denominó como “credenciales académicas”, que funcionan, según el sociólogo francés, como un tipo de capital cultural institucionalizado, “*que confiere a su portador un valor convencional duradero y legalmente garantizado*” (Bourdieu, 2001b, pág. 146).

En rigor, la profesionalización de las élites es más bien un fenómeno general de aquellos individuos ubicados en las partes más altas de las estructuras de poder (Galbraith, 1959; Keller, 1971). Esto es posible de apreciar en el caso chileno, por ejemplo, en varios tipos de grupos selectos, como es el caso de los ministros que ejercieron el poder gubernamental desde la transición hasta el final del primer gobierno de la presidenta Bachelet, quienes casi en un 50% tenían magíster o doctorado (González–Bustamante y Garrido–Vergara, 2018, pág. 45).

En el caso de élites más especializadas la situación no es muy distinta, ya que incluso la experticia se vuelve *distintiva* y más *específica*. Es el caso de una minoría de dirigentes de partido con altas credenciales académicas en campos muy especializados del saber, denominados por Jorge Domínguez (1997) como “technopols”, que en Chile desde el retorno de la democracia han ocupado posiciones decisivas en cargos políticos (Joignant & Güell, 2012). En este grupo es posible identificar que casi el 50% de estos agentes realizó estudios de posgrado en los Estados Unidos, mientras que sólo el 25% lo hizo en Europa. Las especializaciones de esta élite se reducen básicamente al campo de la economía y la ciencia política, formada a partes iguales en ambas disciplinas (35%) (Joignant, 2012, pág. 63–65).

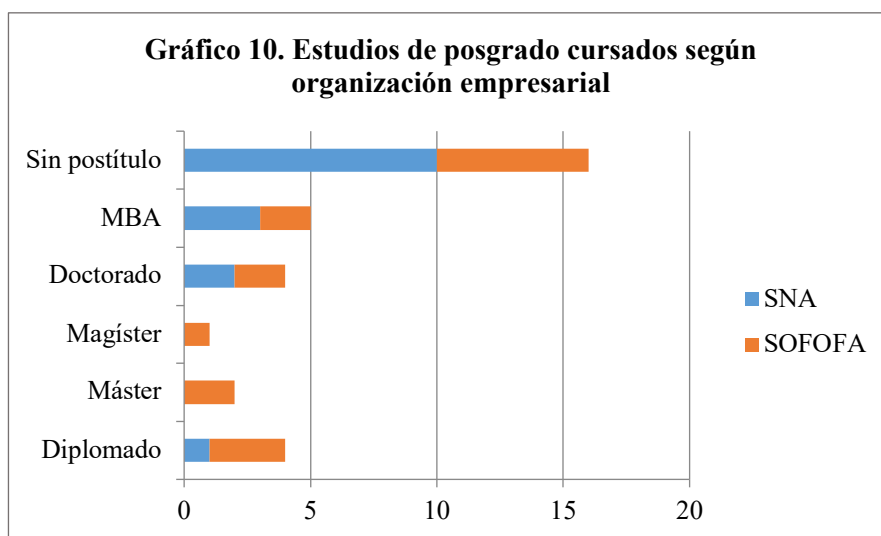
Asimismo, los datos de la formación de “technopols” son bastante coincidentes, por ejemplo, con los provenientes de los expertos que han jugado roles relevantes en distintas instancias públicas, como los consejos presidenciales durante el gobierno de la presidenta Bachelet en materias como pensiones, salud, educación, infancia, etc. Estos consejos compuestos por asesores con prestigio socialmente reconocido, según Aguilera & Fuentes (2012), han realizado casi en un 70% posgrados en los Estados Unidos y en mucho menor medida en el viejo continente (pág. 141).

Pero, como indicaba recién, la especialización de las élites también se ha dado en los líderes empresariales desde hace varias décadas, por lo que para la élite empresarial chilena no es un fenómeno reciente. Ya Guillermo Briones (1963) en la década del sesenta, mostraba que cerca del 40% de los empresarios había hecho especializaciones vinculadas al rubro de la economía, realizadas mayoritariamente en el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) (Briones, 1963, pág. 17).

Actualmente, los estudios de posgrado para la élite vinculada al mundo de los negocios siguen siendo valiosos, ya que cerca de la mitad de quienes pertenecen a este

grupo selecto ostentan “credenciales académicas” (Revista Capital, 2014), siendo especialmente significativo los estudios de posgrado realizados en Chile (36%).

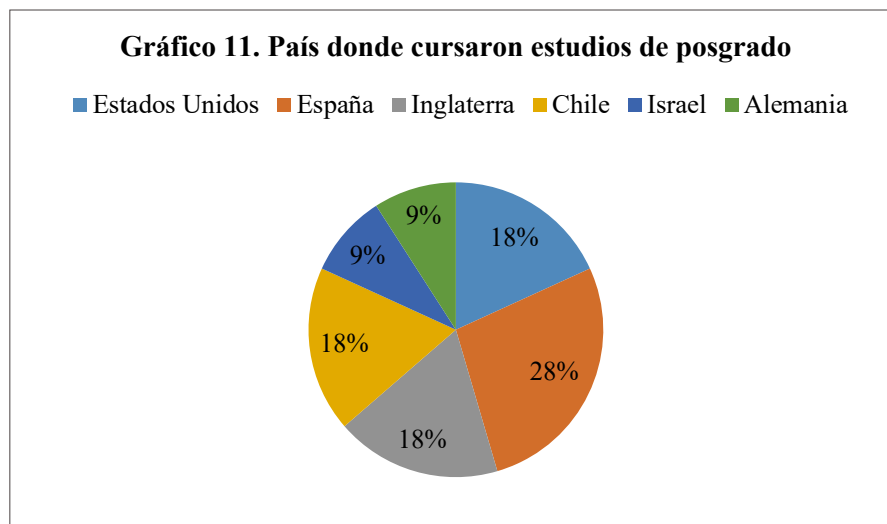
Ahora bien, los datos referidos a la élite empresarial de la SOFOFA y la SNA, son bastante más coincidentes con los expuestos por la *Revista Capital*. Esto muestra una diferencia fundamental con las élites políticas y expertas que han ejercido funciones en la conducción del Estado y el gobierno. En tal sentido, parece ser que la élite empresarial es menos especializada que las minorías políticas y expertas, ya que como muestra el gráfico N° 10, cerca de la mitad de los dirigentes patronales realizó estudios de posgrado, siendo menor la cantidad de credenciales académicas en la SNA que en la SOFOFA.



Fuente: elaboración propia.

También los campos del saber en los que se ha especializado la élite son diversos. En la SNA, quienes han realizado posgrados, lo han hecho mayoritariamente en economía (19%) y también en el rubro agrícola (13%), mientras que en la SOFOFA, los estudios predominantes con diferencia son en economía (44%), por sobre un 19% que ha optado por el derecho, asemejándose más este grupo social a la formación de quienes ejercen el poder político y simbólico de la conducción en el país.

En relación a los países de destino donde se ha formado la élite empresarial, se pueden señalar algunas diferencias respecto de los otros casos expuestos, ya que los países preferidos para estudiar se encuentran, fundamentalmente, en Europa, siendo España el país de mayor concurrencia, seguido de Inglaterra, Chile y Estados Unidos. Este último país, según los datos presentados en el gráfico N° 11, parece ser menos solicitado por los empresarios para su educación, lo que, como ya mencioné, se contrapone a la marcada preferencia de quienes asesoran y/o conducen el gobierno y el Estado.



Fuente: elaboración propia.

## 8. La religión predominante

En concordancia con algunos estudios históricos (Correa, 2005; Stuvén, 1997) y sociológicos (Thumala, 2007; Aguilar, 2012) sobre la confesión religiosa de la “clase dirigente”, la religión predominante en la élite empresarial de la SOFOFA y la SNA es el *catolicismo*.

En verdad, no abundan en Chile muchas investigaciones que den cuenta empíricamente de la religión que tienen los miembros de la élite económica. Esto se puede deber, como indiqué antes, a la dificultad que implica acercarse a las minorías selectas para estudiar aspectos que pueden ser controversiales o íntimos (Scott, 1995). Aún así, en el marco de esta ausencia de trabajos sobre esta temática, investigaciones como la de Thumala (2007), demuestran que aún “*el catolicismo constituye una parte esencial de la élite*” (pág. 25).

De algún modo, esta adscripción religiosa en la mayoría de los dirigentes entrevistados, no es muy distinta a la de otros países católicos como es el caso de España. Así, según un estudio de Jerez (1995), en el que se analizó la composición social del gran empresariado andaluz, se llegó a resultados similares a los del caso chileno que aquí se presentan, ya que la mayoría de los líderes empresariales se identificaban con el catolicismo (15% se autodefinía como “muy practicantes”) (Jerez, 1995, pág. 44).

A pesar de que la religión de la mayoría de los líderes gremiales es el catolicismo, es en la SNA donde esta preferencia es un poco más marcada, lo que también es coherente con los resultados expuestos por el sociólogo argentino de Imaz (1977), en los que el sector agrario parece seguir siendo menos secularizado que el industrial. En esa dirección, en la organización de la SNA, sólo existió un caso de confesión luterana y otro de religión judía, mientras en los industriales, diez dirigentes se identificaron como católicos (y muy pocos se autodefinieron como practicantes); también se identificó un luterano y una mujer que se autodefinió como cristiana ortodoxa. Los restantes no adhirieron a ninguna religión en particular, definiéndose como “ni religiosos ni practicantes”, aunque ninguno empleó la palabra “ateo” o “agnóstico”.

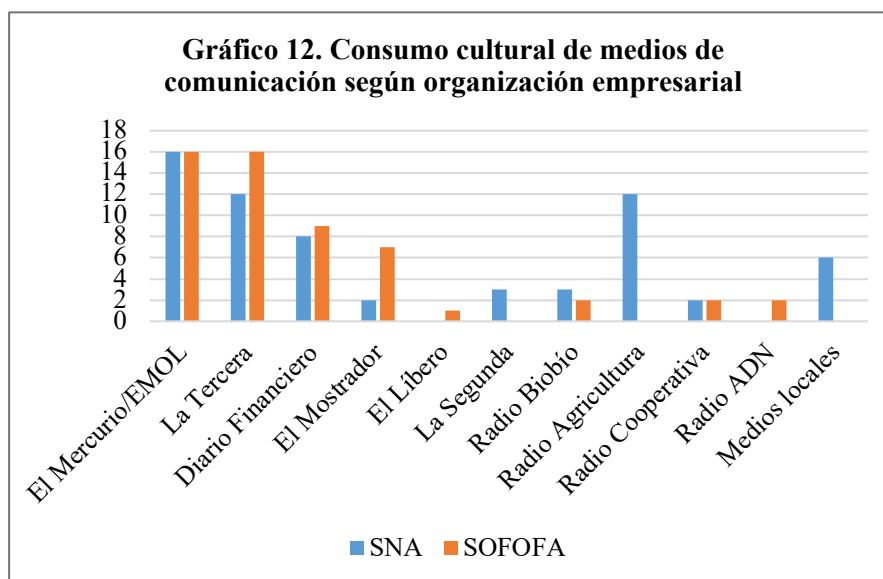
Por último, se puede agregar que el catolicismo de la élite empresarial converge con las tendencias generales de la sociedad chilena, ya que la mayoría de la población en 2018 señala adherir a este tipo de confesión religiosa (56%). Y de hecho, la minoría de los dirigentes que manifestó no tener algún credo religioso, también se asemeja a algunas tendencias generales de la población, donde actualmente, un 27% dice no tener confesión religiosa (WVS–MORI, 2018); tendencia que, por lo demás, va subiendo progresivamente desde 1996, fecha en que un 12% de los ciudadanos decía no pertenecer a algún grupo religioso, lo que muestra el acelerado proceso de secularización del país sudamericano.

## 9. Lectura de medios de comunicación

En este último apartado se analizan los medios de comunicación que consumen los dirigentes empresariales para informarse de la realidad nacional.

Se trata de un grupo social que no se diferencia significativamente del tipo de consumo cultural que tienen los sectores sociales con mayor riqueza de la sociedad chilena. Así se puede apreciar en la *Encuesta de Consumo Cultural* de 2011, que muestra que los diarios, tanto físicos como electrónicos, siguen siendo uno de los medios más consumidos en los estratos socioeconómicos más altos del país (pág. 98).

De esta manera, en la élite empresarial, como se puede distinguir en el gráfico N° 12, la mayoría de individuos se informa del acontecer nacional a través de la lectura diaria, incluso a veces dos veces al día, de los medios de comunicación más leídos en el país: El Mercurio (EMOL) y La Tercera. Le siguen el Diario Financiero y El Mostrador, siendo este mucho más leído por el grupo industrial.



Fuente: elaboración propia.

Es conveniente mencionar que los medios de comunicación predominantes en la élite empresarial han sido históricamente asociados al entorno ideológico de la derecha, “*El Mercurio y La Tercera, los dos diarios de referencia o registro de alcance nacional de*

*las dos mayores empresas periodísticas en Chile, El Mercurio SAP y Copesa SA, han sido caracterizados en reiteradas ocasiones como difusores del pensamiento político económico de la derecha chilena”* (Gronemeyer & Porath, 2017, pág. 181). Cabe mencionar sí, que la lectura del diario electrónico *El Mostrador* por parte de un pequeño segmento de la SOFOFA, muestra una apertura cultural a la lectura de un medio “alternativo” a los que han sido históricamente asociados con la derecha.

También se puede añadir que el consumo de radio es muy bajo en ambas generaciones analizadas. Esto contrasta con la tendencia de la población en general, ya que casi un 90% de las personas, independientemente del estrato socioeconómico, escucha la radio al menos una vez a la semana (ENPCC, 2011, pág. 110). Esto no se da con la misma intensidad en los dirigentes empresariales, salvo en el caso de los agricultores, que escuchan con más frecuencia la Radio Agricultura. En un sentido paradójico, siendo la Radio Bío-Bío el medio de prensa más leído y escuchado en el país según el ranking de Alexa, es al mismo tiempo uno de los medios menos escuchados por aquellos que conducen la economía del país.

Un dato más: los agricultores también dan importancia a la prensa y radio de las localidades rurales donde desempeñan sus funciones laborales, situación que no se da en el grupo industrial, concentrado mayoritariamente en la ciudad de Santiago.

Finalmente, llama la atención la poca importancia que tiene la televisión para la élite empresarial en su conjunto, ya que prácticamente nadie se refirió a este medio de comunicación como instrumento para informarse, lo que contrasta significativamente con el resto de la sociedad chilena, que cerca del 100% consume semanalmente este medio de información (ENPCC, 2011, pág. 114).

## *10. Recapitulación*

A modo de recapitulación, se puede concluir que se trata de un conjunto de sujetos que fueron elegidos a través del voto por sus pares empresarios bajo la modalidad de elecciones, y que gracias a dicha elección ocupan las posiciones más altas de los puestos de dirección empresarial del país.

Su promedio de edad es de casi sesenta años, siendo un grupo social levemente más longevo que otras élites, como la actual Cámara Alta y mucho más longevo que los diputados, ya que este grupo político ha bajado su promedio de edad a 45 años, fenómeno que se ha producido por la incorporación de políticos jóvenes provenientes en su mayoría del Frente Amplio.

Los miembros de la élite empresarial tienen una acabada trayectoria relacionada con el mundo de la conducción y representación de empresas, la que es más extensa en los empresarios agricultores. No obstante, también han desarrollado experiencia en cargos de dirigencia estudiantil en sus respectivos colegios como universidades. Esta experiencia acumulada es menor en el ámbito de la política formal, aunque un grupo importante ha intentado ingresar al campo político sin tener mucho éxito, salvo dos dirigentes que lograron ser electos por la ciudadanía para ocupar cargos de representación popular, logrando mantenerse en dicha posición por varios períodos.

En relación a ciertos aspectos sociales y culturales, la gran mayoría de las personas que componen la élite empresarial fueron formados en colegios denominados de “élite”, de orientación confesional, diferencia más marcada en el grupo de los agricultores. En esa dirección, se puede decir que se trata de un grupo social muy educado, en su mayoría compuesto por profesionales con estudios muy parecidos a los de otras élites de conducción del país y de la región de América Latina.

Los estudios que ha tenido la élite gremialista han sido realizados en las universidades más prestigiosas del país, en las que se agregan en menor medida, algunas universidades privadas “no tradicionales”. También, muchos poseen credenciales académicas de posgrado constituyéndose en un grupo con especialización, parecido en su composición al gabinete de ministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero menos especializada que otras élites expertas nombradas.

En relación a la confesión religiosa, hablamos de un grupo social con preferencia mayoritaria por la religión católica, con algunos miembros “muy practicantes”, sobre todo en los empresarios agrícolas quienes mostraron más adherencia al catolicismo que los de la SOFOFA, estos últimos más secularizados en sus preferencias religiosas.

Por último, puedo indicar que la élite empresarial lee medios de comunicación para informarse, siendo los más recurrentes los medios de prensa escritos, como los diarios digitales y físicos. Bastante menor es el consumo de radio, que se da en instancias circunstanciales como cuando los dirigentes se movilizan al trabajo en el coche. Lo mismo para otros medios como la televisión, de muy bajo consumo en relación al resto de la población y de los segmentos más acomodados de la ciudadanía. Seguramente, los altos niveles de productividad y los escasos espacios de ocio llevan a este segmento a destinar poco tiempo para consumir programas de televisión, salvo algunos noticiarios.

A la luz de estos antecedentes, siguiendo la definición de élite que proporcionan Milner (2016), Winters (2011) y los sociólogos españoles, Linz & De Miguel (1966), se puede afirmar que los entrevistados, por la naturaleza de sus cargos políticos y su alto capital cultural (Bourdieu, 2001b), forman parte relevante del mundo económico, manteniendo capacidad de influencia en otras esferas de la sociedad.

## CAPÍTULO V

### LA POSICIÓN SOCIAL DE LA ÉLITE EMPRESARIAL

En esta parte de la investigación se analiza la “posición social de origen” de la élite empresarial. De acuerdo a las características generacionales de los entrevistados, el fenómeno que se examina se sitúa temporalmente entre mediados del siglo pasado hasta finales de los años ochenta. Es en el transcurso de este período que tuvo lugar el nacimiento de los participantes, las “experiencias vividas” en sus “años impresionables” y también las “experiencias transmitidas” en el caso de los dirigentes más jóvenes.

Para comenzar, es conveniente realizar una breve contextualización histórica del período señalado, indicando los principales acontecimientos políticos, sociales y económicos que se dieron a partir de la década del cuarenta hasta el 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar. Se trata de una fecha clave en el país, tanto por el cambio de régimen político así como también por la importancia subjetiva que tiene actualmente en la vida de los chilenos (Huneus, 2003; Manzi y otros, 2003). Luego, se indican los cambios más sustantivos implementados por la dictadura militar hasta el plebiscito de 1988, el que promueve la salida del general Pinochet del cargo de jefe de Estado, dando paso a la “nueva democracia”.

Tal cual indiqué en mis hipótesis de investigación, la cultura política no es un fenómeno espontáneo, y ella es, en gran medida, entre otros factores, producto de la *“historia colectiva de un sistema político y de las biografías de los miembros de dicho sistema”* (Pye, 1977, pág. 323). Es por ello que se sostiene que existe una estrecha relación entre los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Chile y las biografías individuales de los dirigentes empresariales (Mannheim, 1958; Halbwachs, 2004; Haye, Manzi & González, 2013). Es más, es posible decir que es la misma evolución del sistema político chileno y la naturaleza de sus cambios más profundos los que impactan y definen las bases de la cultura política de la élite empresarial que en la actualidad conduce la economía del país.

Es por lo anterior que se considera que no es posible comprender la “socialización política” que experimentó la élite empresarial, sin antes tener presente el fenómeno de polarización política que se desarrolla durante la década del 60’; el gobierno de la “revolución en libertad” de Eduardo Frei Montalva; la “experiencia socialista” de la Unidad Popular; el quiebre institucional de 1973 y la instalación de la dictadura militar.

Luego, teniendo a la vista estos acontecimientos mencionados, se procede a analizar la “posición social de origen” de los entrevistados, para en lo que sigue continuar con las “vivencias transmitidas” a los dirigentes más jóvenes sobre el período de la Unidad Popular, y las “experiencias vividas” por los de mayor edad durante ese mismo período.

## 1. El contexto histórico

### *1.1. La vieja democracia*

Este apartado de la investigación se elabora sobre un supuesto normativo, el que dice relación con que la larga tradición liberal, social y republicana que existió en Chile, se desarrolló con mayor intensidad a partir de las primeras décadas del siglo pasado, teniendo su abrupto final en 1973.

En efecto, según varios analistas, a partir del gobierno de Arturo Alessandri (1920–1924), y particularmente a través de la Constitución de 1925, comienza una nueva etapa política en Chile (Cristi & Ruiz–Tagle, 2014; Góngora, 1986). Este momento está marcado, fundamentalmente, por un cambio en la redistribución del poder político a favor del ejecutivo, que tiene como objetivo disputarle el poder a lo que Alberto Edwards denominó peyorativamente como la “fronda aristocrática”. Con este apelativo, en 1928, Edwards, hacía referencia a la “oligarquía política” que había dirigido el país durante gran parte del siglo anterior, de una manera bastante poco comprometida, al descuidar los asuntos públicos y al hacer caso omiso del empobrecimiento de inmensos sectores de la población (Edwards, 2005).

Pero a partir del gobierno de Arturo Alessandri y de la Carta Fundamental elaborada bajo su mandato, esta situación comienza a modificarse. El nuevo diseño institucional sancionado tenía como finalidad avanzar hacia una mayor democratización política para mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables de la población: la creación del código del trabajo y el derecho a sindicalización de los obreros, que se conceden durante este gobierno, son prueba de ello. Así lo expresa la historiadora Verónica Valdivia (2010):

“Aunque Alessandri y los gobiernos que le siguieron –hasta la Democracia Cristiana– nunca tocaron el derecho de propiedad privada, la Constitución aludía a su función social. Simultáneamente, la nueva Carta incorporó la responsabilidad del Estado en materia de salud, reiterando la que tenía en educación, y ser el espacio de encuentro de los conflictos entre el capital y el trabajo, asegurando la reproducción del primero, pero reconociendo derechos sociales básicos al segundo” (pág. 8).

Uno de los más importantes avances democráticos del nuevo diseño institucional fue el mejoramiento de la representación y participación electoral de la ciudadanía, al extender el derecho a sufragio universal para la elección presidencial, de modo que el presidente ya no sería elegido indirectamente como antaño; también, se instala un sistema electoral proporcional adecuado para garantizar un mayor despliegue de las fuerzas de todos los sectores políticos (izquierda, centro y derecha) (Del Campo, 1991 y 2007), y un tribunal calificador de elecciones, que tiene vigencia hasta el día de hoy. En materia social, se busca dar una respuesta a los graves problemas sociales que se venían arrastrando desde el “parlamentarismo”, y que dieron origen al fenómeno conocido como la “cuestión social” (Morris, 1967).



La disposición de las fuerzas políticas de todo el entorno ideológico permite la configuración de un nuevo “pacto social” basado en un “Estado de compromiso” (Moulian, 1982), entidad que pasa a ocupar un rol protagónico gracias a las facultades que le confiere la Constitución.

Es a partir de la década del treinta que comienza a desarrollarse un conjunto de cambios en la orientación de la economía y de la política, que van a sostener en gran medida, parte de la situación socioeconómica que tiene lugar en las décadas posteriores. Se trata de un viraje desde una economía liberal tradicional propia del *laissez faire* del siglo XIX, hacia un modelo de desarrollo con un papel activo del Estado en diversas materias, con particular énfasis en la protección social focalizada hacia algunos grupos de la estructura social (Larrañaga, 2016).

Y en el ámbito específicamente político, producto de las modificaciones en el diseño institucional, los sectores sociales tienen la oportunidad de ser representados políticamente en partidos políticos, constituyéndose tres fuerzas en la pugna por el poder: la derecha, el centro y la izquierda (Garretón, 2015). Ciertamente, ninguna de estas tres fuerzas constituye una mayoría absoluta, lo que obliga a los partidos a establecer pactos para alcanzar mayorías y gobernar.

Así es como nace el “Frente Popular” en 1936, alianza originariamente de centroizquierda, que agrupa al Partido Radical, al Partido Socialista y al Partido Comunista. Este pacto apoya al candidato Pedro Aguirre Cerda, quien compite en una reñida elección contra el candidato de derecha, Gustavo Ross. En esta elección el candidato del Frente Popular obtiene el 50,1% de los votos, contra un 49,2% de su opositor (Moulian & Osorio, 2014, pág. 54).

A partir de la elección de Pedro Aguirre Cerda en 1938, el centroizquierda se mantiene en el poder hasta el gobierno de Gabriel González Videla, que culmina en 1952. Estos gobiernos tuvieron un marcado carácter “populista”, particularmente, por la condición de partido de “péndulo” del radicalismo, que oscilaba desde el centro a la izquierda, pero también con la inclusión de políticos de derecha vinculados al Partido Liberal, al Partido Conservador y al Partido Agrario Laborista (Moulian, 1994).

Estos gobiernos de “centro” se caracterizan por preocupaciones sociales y económicas orientadas al mejoramiento de la educación y el desarrollo industrial. Es así que durante los gobiernos del Frente se hizo obligatoria la educación primaria, para lo cual se crean miles de escuelas; y se crea también la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que promovía la industrialización con créditos y planes de Fomento. De hecho, durante este período nacen varias empresas estatales, como la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), la Industria Azucarera Nacional (IANSa), entre otras, que marcan la orientación modernizadora del Frente Popular. Por cierto, afán modernizador que no llegó al sector rural, que se encontraba en situación de un gran atraso y sin organización social de los campesinos, lo que recién comenzará a cambiar en el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964–1970).

Es importante detenerse un poco en el gobierno radical de Gabriel González Videla (1946–1952), quien llega al poder tras una alianza con los comunistas, obteniendo un 44,2% de la votación, lo que no constituye una mayoría “absoluta” sino una mayoría

“relativa”. Esto obliga al Congreso Nacional a decidir si ratifica a Gabriel González Videla, situación que lleva al nominado a buscar apoyos en la derecha. Este apoyo le permite obtener la ratificación del Congreso Pleno, y, a cambio de ello, incluye a políticos liberales en su gabinete, produciendo pugnas entre los partidos. Esto, finalmente, desemboca en la promulgación de la “Ley de defensa permanente de la democracia” (conocida como “ley maldita”). Esta ley deja a los comunistas en una condición de ilegalidad y de persecución política (Huneeus, 2003). Por este motivo, Gabriel González Videla pasó a ser conocido en la historia de Chile como “el traidor” (Milos, 2008).

Pese a esta delicada situación política, durante su gobierno hay un avance importante en la ampliación de la participación política, pues se promulga el voto de la mujer, que entonces sólo era permitido para la elección de los alcaldes. Con esta incorporación, el padrón electoral aumenta significativamente a 782.517 personas, lo que constituye el crecimiento de un 32,4% (Moulian & Osorio, 2014, pág. 64).

La votación femenina favoreció a la derecha y permitió entonces la elección del presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1952 (Larrañaga, 2016, pág.45). Paradójicamente, éste fue apoyado por los socialistas como una suerte de “voto de castigo” al radicalismo por la aplicación de la “ley maldita”, que como se indicó, deja fuera de la legalidad a los comunistas. Así, Ibáñez del Campo sale electo con un 46,7% de los votos válidamente emitidos.

El gobierno de Ibáñez tiene un marcado carácter “populista”, ya que éste se presenta ante la ciudadanía como una figura independiente y en contra de los partidos, señalando a “los políticos” como responsables del “estancamiento económico” del país. Y es más, aunque llega apoyado al gobierno por la izquierda, ciertamente la creciente inflación económica que afectó a su gobierno, lo lleva a aplicar algunas políticas de liberalización económica más próxima a los planteamientos de la derecha, medidas económicas influidas por la asesoría externa que le proporcionó la misión Klein-Sacks.

Aún así, el gobierno de Ibáñez no significó una ruptura con la modernización socioeconómica que se venía implementado desde el Frente Popular. Durante su mandato nacen importantes instituciones como el Banco del Estado, el Ministerio de Minería y el Departamento del Cobre, y se intensifica aun más la labor de la CORFO, todo lo cual muestra el marcado carácter “desarrollista” del período (Salazar, 2001).

Cabe mencionar que en la elección parlamentaria de 1953, un año después de la elección presidencial, el centroizquierda se constituye en la primera mayoría, en la que aún con los comunistas en la ilegalidad, radicales y socialistas obtienen un 34,5% de los votos. Sin embargo, la pérdida de la presidencia por los radicales en 1952 sólo será la antesala de su progresivo derrumbe electoral, ya que desde esta elección en adelante, el Partido Radical comienza a disminuir su preferencia en el electorado. Es así que pasan de haber tenido un 21,5% en 1949 a un 13,1% en 1953, lo que marca un descenso que tiene como consecuencia política *la pérdida de relevancia de este partido en el centro* (Moulian & Osorio, 2014).

En la última elección parlamentaria ocurrida el año 57’, se produce una reagrupación de fuerzas políticas en nuevas coaliciones, en la que el Partido Radical se une a fuerzas políticas centristas, constituyendo el “Bloque de saneamiento democrático”, conformado también por la Falange Nacional y los agrario laboristas, sin partidos de

izquierda. Esta coalición obtiene el 38,8% de los votos. Le siguen la “Federación Social Cristiana” compuesta por el Partido Liberal y el Partido Conservador con un 32,3% de los votos, constituyendo la segunda mayoría, y también el “Frente de Acción Popular” (FRAP), del cual son miembros los dos partidos socialistas existentes y otras fuerzas más a la izquierda.

Con posterioridad a la elección parlamentaria del 57’, y casi finalizando el gobierno de Ibáñez, los comunistas retornan a la legalidad, y también se aprueba la “ley de cédula única”, reforma electoral que facultaba a la Dirección del Registro Electoral para fabricar las papeletas donde se marcaría el voto. Esto permite acabar en la práctica con el cohecho, que se venía arrastrando desde el siglo pasado.

Esta mayor transparencia del proceso democrático, en opinión de algunos analistas, afectó gravemente al sector vinculado al “latifundismo”, que era el sector que más frecuentaba la práctica del cohecho, al contar con mayores recursos económicos (Larrañaga, 2016). Esta fue la razón por la que existió tanta resistencia desde este sector a la implementación de la reforma, puesto que con su implementación se sabía que perderían una considerable masa votante, algo que, efectivamente, se reflejó luego en las posteriores elecciones legislativas de 1961 (Avendaño y Escudero, 2016).

En 1958 sale electo presidente el dirigente empresarial Jorge Alessandri Rodríguez con un 31,5% de las votaciones. Le siguen Salvador Allende con un 28,9% y Eduardo Frei Montalva con 20,7%, este último apoyado por la Democracia Cristiana, partido recién formado a través de la fusión de la Falange Nacional y el Partido Conservador Social Cristiano. Los radicales, como se indicó, bajan su votación a un 15,4%, transformándose en una fuerza cada vez más debilitada, que se ve obligada a pendular entre los extremos, que en este contexto cada vez se hacían más fuertes.

El presidente Alessandri, al igual que Ibáñez del Campo, también se presenta como independiente, apoyado por los partidos de derecha y los radicales, pero con un discurso crítico hacia los partidos. De hecho, conforma un gabinete de gerentes de empresas privadas con un perfil tecnocrático (Silva, 2010), bastante orientado en sus primeras medidas hacia el sector privado, a través, por ejemplo, de una política de incentivos para fomentar la participación de este sector. Empero, el país no se encuentra preparado para una modernización capitalista de orientación tan liberalizante, lo que sumado al terremoto de 1960 que destruye varias ciudades del país, hace fracasar su programa de gobierno al tener que recular su implementación.

Sin embargo, durante el gobierno de Alessandri, el Congreso aprueba algunas reformas institucionales que van a ser significativas en la historia del país. En 1962, se amplía la democracia aún más, haciendo el *voto obligatorio*, lo que constituye un valioso avance en el proceso de democratización. Pero, por otra parte, el Congreso aprueba la *ley núm. 15.295*, a través de una reforma constitucional que faculta al Estado para expropiar predios abandonados o mal explotados. Este fue el marco legal que en la práctica permite llevar a cabo la primera reforma agraria en el país desde los tiempos de la colonización española. Se trata de una reforma “tímida”, llamada irónicamente por lo mismo como “reforma del macetero”, y que había sido sugerida por los Estados Unidos por medio de la “Alianza por el Progreso”. Esta hacia América Latina, como es sabido, intentaba frenar impulsos revolucionarios en la región, como había sido el caso de la Revolución Cubana

que triunfara el primero de enero de 1959, y para ello, se instaba a los gobiernos a aplicar medidas con una mejor redistribución de la riqueza, puesto que ésta se encontraba absolutamente concentrada en la región, siendo Uruguay, Argentina y Chile, los países con redistribuciones menos regresivas (Maddison, 1989).

La derecha, que había caído estrepitosamente en la elección parlamentaria de 1961, vuelca su votación sobre el candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Montalva. Su objetivo era evitar la llegada de Salvador Allende a La Moneda, quien había obtenido la segunda mayoría en la elección presidencial del 58'. Este apoyo al candidato de centro, se produce luego del episodio conocido como el "naranjazo". Este consiste en una elección complementaria en 1964 en la provincia rural de Curicó, lugar donde la derecha históricamente había sacado primeras mayorías. En esta elección, se desencadena un resultado sorpresivo: el triunfo del socialista Óscar Naranjo con 39.2% de los votos. El segundo lugar lo logró el candidato de la derecha con 32.5% y tercero el demócrata cristiano con 27.7%. En verdad, aunque la elección tuvo lugar en una pequeña circunscripción, se considera significó una lección de alcance nacional. Inmediatamente después de ella, la derecha decide apoyar a Frei, ya que sumando las dos fuerzas políticas, la derecha y el centro, se obtiene una mayoría que impediría la elección de Allende como presidente. Así, el candidato demócrata cristiano se convierte en presidente con un 56% de los votos, contra un 38,9% de Allende (Moulian & Osorio, 2014, pág. 76).

### *1.2.El gobierno de Frei y la "revolución en libertad"*

En 1964 asume el presidente Eduardo Frei Montalva bajo el lema de la "revolución en libertad". Se trata de un lema que hace referencia indirecta a la izquierda, al sugerir un programa de cambios profundos dentro de un marco democrático, sin caer en el autoritarismo de los "socialismos reales" que se asociaban como parte de la cultura política de la izquierda más radical.

Hablamos de un gobierno con mayoría política, ya que en las elecciones parlamentarias de 1965, el partido de la Democracia Cristiana obtiene una votación histórica, nunca antes conseguida por un partido, de 42,8%. La derecha, que había apoyado a la DC, obtiene 12,6%; y la izquierda llega a un 22,9%. Este dato es relevante, porque la votación histórica de los demócratas cristianos marca la antesala de lo que después se conocerá como el "camino propio", es decir, la conducción política sin la necesidad de alianzas ni con la derecha ni con la izquierda (Moulian & Osorio, 2014, pág. 79; Moulian, 1994; Valenzuela, 1978).

El gobierno de Frei es considerado como un "reformismo avanzado". En verdad, es una conducción que realiza cambios profundos en la sociedad chilena. Dentro de sus políticas se encuentra la "chilenización" del cobre, que implicó aumentar gradualmente la propiedad de este recurso hasta un 51%. Esta política, se hizo a través de una nacionalización pactada con las empresas norteamericanas, lo que no se transformó en una situación problemática. Por lo demás, su nacionalización había sido aprobada por el Congreso Nacional, incluidos los votos de la derecha, que en esa época aceptaba la participación "controlada" del Estado en la economía (Briones, 1963; Petras, 1967).

Además, el gobierno de Frei ejecuta varias políticas en diversos frentes. Una de éstas fue la reforma educacional, que prolonga la educación primaria desde los seis hasta los ocho años, creando más de 3.000 nuevas escuelas y guarderías para promover la inserción femenina al mercado del trabajo. También crea el Ministerio de la Vivienda y la política de “promoción popular”, orientada a la organización de pobladores de menos recursos en “centros de madres”, “clubes sociales”, “juntas de vecinos”, entre otras instancias que promueven la asociatividad y organización.

A partir de 1966 se intensifica el ritmo de los cambios, ya que se implementa con mucho más fuerza la reforma agraria bajo el lema: “la tierra para el que la trabaja”. Con esta reforma se expropiaron 1.408 fundos de 80 hectáreas de riego básico y 1.319 empresas agrícolas. Su base legal se encuentra en la reforma constitucional de 1967, que determina asignar una “función social” *explícita* a la propiedad privada. Esto, en la práctica, genera un marco normativo útil para las expropiaciones.

En efecto, la *Ley 16615*, fue uno de los cambios constitucionales más importantes en la historia del país, puesto que modifica el Derecho de Propiedad existente (Cristi, 2011; Cristi y Ruiz-Tagle, 2014; Navarro, 2014). Como advierte la misma Constitución en su Artículo 10 N°10:

“La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna; Nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley. En este caso, se dará previamente al dueño la indemnización que se ajuste con él o que se determine en el juicio correspondiente. El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social, y, en tal sentido, podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, de la salud de los ciudadanos, y de la salubridad pública” (Constitución Política de 1925, pág.4)<sup>23</sup>.

El cambio consiste en la eliminación de la disposición que hacía referencia a la “inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna” del artículo 10, N°10, reemplazando dicha disposición por “derecho de propiedad en sus diversas especies”. Con esto, el Estado, en nombre del “bien común”, puede con garantía constitucional *expropiar la propiedad privada en sus diversas especies*. Pero además, promueve otro cambio en el que la ley puede reservar al dominio nacional de uso público todas las “aguas”, autorizando al Estado a expropiar, para incorporarlas a dicho dominio, las que fueren de propiedad particular (BCN, 2016).

Estas transformaciones en el campo tuvieron un efecto muy significativo en la distribución del poder ya que afectaba directamente a los sectores propietarios (Montero, 1996). Además, y en forma casi paralela a la reforma agraria, el gobierno de Frei aplica la ley de “sindicalización campesina”, que consagra derechos de organización sindical al sector del agro. Esto también tiene un impacto en la distribución de poder de los

---

<sup>23</sup>Se ha respetado el texto original con las faltas de ortografía y los problemas de redacción propios de la época en que fueron escritos.

propietarios agrícolas, que, por lo general, mantenían relaciones sociales tradicionales con sus campesinos, sin ningún tipo de regulación sobre la relación entre capital y trabajo (Salazar, 2000).

La naturaleza profunda de estos cambios distancian a la derecha de la Democracia Cristiana, ya que a pesar de que en un principio habían apoyado a este partido, lo cierto es que el impacto de las reformas en el campo afecta seriamente a la base social de este sector político, que deja de mostrarse dispuesto a negociar con el centro. Así formulan esta situación Moulian & Osorio (2014):

“En realidad, por el carácter de algunas de las reformas implementadas, es muy difícil para la Democracia Cristiana entenderse con la derecha, pese a que ésta había demostrado un gran realismo al apoyarla en la elección presidencial de 1964. Pero, justamente aquel realismo ha conducido a las fuerzas de derecha a una postura pesimista. ¿Qué se ha conseguido?, se preguntan sus ideólogos: *El arrasamiento de los derechos de propiedad, contestan*” (pág. 82)<sup>24</sup>.

La izquierda, que buscaba distinguirse políticamente de la Democracia Cristiana, se radicaliza e incentiva al gobierno de Frei a aplicar mayor intensidad en sus reformas, lo que lleva a un “diálogo de sordos” tanto de la derecha como de la izquierda con relación al centro, liderado por Demócrata Cristianos (DC). Este partido, que tenía mayoría parlamentaria, opta por el “camino propio” en la elaboración de reformas. En la literatura especializada este fenómeno se conoce como efecto de “doble centrifugación”, en el que la izquierda (que se debatía entre “reforma” o “revolución”) se izquierdiza hacia posturas más revolucionarias, mientras la derecha se “derechiza” con una mirada más crítica hacia el centro; entretanto este último se distancia de los extremos, abandonando su papel de “péndulo” (Garretón & Moulian, 1985; Valenzuela, 1978; Moulian, 1994).

A pesar del carácter intenso de las reformas –criticadas desde ambos extremos– la DC aún cuando se mantiene como primera fuerza, baja su votación a 30,7% en las elecciones parlamentarias de 1969. La derecha se consolida como la última fuerza con un 20,6%, mientras el FRAP, incluye al Partido Radical que había obtenido un 15,3% de las votaciones válidamente emitidas. Este conglomerado, compuesto por comunistas, socialistas y radicales, pasa a denominarse la “Unidad Popular”, que obtiene el 40% de los puestos en el Congreso en la elección.

El 3 de noviembre de 1970 se produce la elección presidencial que gana Salvador Allende. Se trata de una competición donde el centro es representado por el demócrata cristiano Radomiro Tomic, quien obtiene un 27% de las votaciones. La derecha, con el expresidente, Jorge Alessandri, obtiene un 34,9%, y Salvador Allende, logra la primera mayoría relativa, obteniendo un 36,6% de los votos válidamente emitidos. Como ya se ha mencionado, el distanciamiento de la derecha con el centro, facilita las condiciones para el triunfo de Allende, ya que ambas fuerzas juntas sumaban mayoría electoral, pero su alianza no se dio, básicamente, por el “doble efecto de centrifugación” ya señalado. Incluso, en forma casi “anecdótica”, si la Constitución hubiese permitido la reelección

---

<sup>24</sup> Las cursivas son mías.

presidencial, muy probablemente hubiera salido elegido nuevamente Eduardo Frei, quien termina su mandato con una alta popularidad (Navia & Osorio, 2015, pág. 129).

Al igual que en la elección de Gabriel González Videla en 1946, al sacar Allende una mayoría relativa levemente superior al candidato de derecha, su elección a la presidencia tiene que ser ratificada por el Congreso Pleno. En este contexto, se produce una situación lamentable que muestra el nivel de polarización que existía en el país. El movimiento civil de corte fascista Patria y Libertad secuestra y asesina al comandante en Jefe del ejército, General Rene Schneider, acción concebida como una medida de presión para que el Congreso no validara a Allende como presidente. Aun así, el Congreso lo confirma como ganador de la presidencia del país, tras fallar las negociaciones entre la Democracia Cristiana y la derecha.

### 1.3.La Unidad Popular

El gobierno de la Unidad Popular se caracteriza por la intensificación de reformas que venían del gobierno anterior, pero también por la implementación de cambios orientados hacia una desintegración del capitalismo en la sociedad chilena (Fermendois, 2013).

Ciertamente, como muestra el cuadro que se introduce a continuación, la reforma agraria durante el gobierno de Salvador Allende se agudiza aun más, situación que se da tras rebajar el criterio de las hectáreas de riego básico de 80 a 40 (HRB). Esto implicó, según Montero (1996), que *“a fines del gobierno de la Unidad Popular prácticamente no existían fundos de 80 HRB y habían aumentado en forma significativa las propiedades de tamaño mediano. Al cabo de diez años se había terminado con la excesiva concentración de la propiedad, lo que llevó a una redefinición de los sistemas productivos y las formas de gestión de los predios agrícolas”* (pág. 153)<sup>25</sup>.

Resultados de la reforma agraria			
Período	Fundos expropiados	Ha físicas	Ha riego básico
1965–1970	1.408	3.560.000	323.363
1970–1973	4.408	6.401.315	572.389
Total	5.816	9.961.315	895.752

Fuente: (CEPAL, 1988).

En la misma línea de avanzar hacia una distribución del ingreso más igualitaria, se procede a la intervención directa del Estado en la industria, constituyendo lo que se denomina el “Área de propiedad social” (APS) (Fermendois, 2013). Esta permite al Estado tener el 70% de la propiedad industrial (Larrañaga, 2001). Para lograr este objetivo, el gobierno lleva a cabo entre noviembre de 1970 y diciembre de 1972, alrededor

<sup>25</sup> Según Beyer (1997), la reforma agraria no tuvo un impacto significativo sobre los ingresos, ya que esta distribución estaba determinada más que todo por los ingresos del trabajo. En tal sentido, aunque el autor reconoce una distribución de los activos muy desigual durante la época, lo cierto es que *“su impacto sobre la distribución de los ingresos monetarios totales de los hogares es menor”* (pág. 16).

de 329 intervenciones, de las que 126 fueron requisiciones (Valenzuela, 1978, pág. 173). Así describe la intervención estatal, Joaquín Fernandois (2013):

“Se llegó tener el control de 12 de las 20 más importantes industrias de Chile, de la mayoría de los 23 bancos privados y 3 de 4 bancos extranjeros. En diciembre de 1970 ya se tenían 40 industrias en el APS y en diciembre de 1972 había 202 de estas. En 1973 había más de 300 de estas empresas que de una manera u otra estaban bajo control del gobierno. Existían además hasta diciembre de 1972, según una estadística, 157 empresas requisadas y que en teoría debieron haber sido colocadas en el área mixta. Esto sumaba un total de alrededor de 500 empresas bajo el poder del Estado y de los partidos de la Unidad Popular, los cuales vivían dentro de un espíritu altamente político...” (pág. 385).

A pesar de que la gran mayoría de los empresarios no corría riesgo de sufrir expropiación (Valenzuela, 1978), lo cierto es que este sector percibía que igualmente iba a ser afectado por estas disposiciones del gobierno de Allende. Esta percepción de amenaza acentúa los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y opositores, con especial participación de las organizaciones empresariales, tanto de los grandes empresarios como la SOFOFA, la SNA y la CPC, así como también de los pequeños comerciantes y transportistas (Arriagada, 2005; Campero, 1984).

También, durante este gobierno se produce la “nacionalización del cobre”, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional con el apoyo de todos los partidos. Esta ley establece que el Estado de Chile para pagar las indemnizaciones a las empresas norteamericanas debe recortar lo que se denomina como “ganancias excesivas”: grandes utilidades que históricamente habían tenido las empresas con el cobre chileno, lo que, en la práctica, significó no pagar nada como compensación (Góngora, 1986). Esto gatilla la intervención de Estados Unidos sobre Chile a través de distintas medidas, entre ellas, ordenando a los países retener en los puertos los embarques con cobre chileno, además de la reconocida intervención encubierta para sacar a Allende de “La Moneda”.

La mayoría de las políticas y transformaciones estructurales que lleva a cabo el gobierno de Allende se realizan sin ser discutidas en el parlamento, haciendo uso de algunas “disposiciones constitucionales” de la Carta Fundamental de 1925. Lo anterior, redunda en el *problema de la legitimidad* (Linz, 1978; Almond & Verba, 1970; Montero, Richard Gunther, & Torcal, 1998), ya que el problema de “forma” también se transforma en un problema de “fondo” (Moulian & Osorio, 2014). Esto es así porque los intensos cambios implementados por el gobierno popular, se hacen apelando a un recurso legal pero no legítimo, al no tener acuerdos mayoritarios en el Congreso Nacional.

Como se indicaba, la resistencia a las expropiaciones no sólo se produce en el sector agrícola, sino también en las ciudades. En efecto, en el mes de octubre de 1972 se desencadena una fuerte movilización social en contra de Allende. Se trata de funcionarios del Banco Central, comerciantes y transportistas, apoyados por las organizaciones empresariales de sus respectivos rubros, pero también por la SOFOFA, la SNA y la CPC (Arriagada, 2005; Campero, 1984; Garretón & Moulian, 1985). Esta ciudadanía movilizaba, aquejada por el clima económico de desabastecimiento y de violencia



política, solicita abiertamente la intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente Allende. Esto es parcialmente solucionado por el mandatario, quien incorpora a su gabinete a algunos militares, entre ellos, al General Carlos Prats, que era el Comandante en jefe del ejército, y que pasa a ocupar el cargo de Ministro del interior. Desde su nuevo cargo logra deponer las movilizaciones.

Las elecciones parlamentarias de 1973 son la última aspiración democrática de la derecha y el centro para sacar a Allende de la casa de gobierno. Efectivamente, en esta instancia, la oposición no logra mayoría al obtener un 54,4% de las preferencias, contra un 44,6% de los votos de la Unidad Popular (Moulian & Osorio, 2014, pág. 91). Esta correlación de fuerzas hace imposible destituir constitucionalmente a Allende, por lo que la salida de fuerza a través de un golpe militar se torna una opción factible. Es así que se produce el “tanquetazo” unos meses antes del 11 de septiembre de 1973, siendo el primer intento de derrocar a Allende por la vía armada, situación que es reprimida, paradójicamente, por el mismo General Pinochet y el General Prats.

El golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas pone fin a la Unidad Popular el día 11 de septiembre de 1973. Se produce un bombardeo en La Moneda con aviones y tanques, y Allende se suicida. Así, la “experiencia socialista” finaliza de manera trágica, produciéndose el cambio de régimen político: el régimen autoritario.

#### *1.4. La dictadura militar*

La dictadura militar tiene una duración de diecisiete años, y se caracteriza por elaborar una “ingeniería institucional” y también un proyecto económico de orientación monetarista (Fontaine, 1988) o también conocido como “neoliberal” (Ffrench-Davis, 2003).

El régimen militar tiene como rasgo central el uso excesivo de la fuerza y la represión. Durante este período, se clausura el Congreso Nacional, se cierran los registros electorales, y toda actividad política es reprimida y asociada con la muerte. Este procedimiento se realiza a través de la DINA (Dirección nacional de inteligencia) y luego la CNI (Central nacional de informaciones), que tienen como misión la represión política a los opositores, lo que incluye, por supuesto, la violación sistemática de los Derechos Humanos de aquellos que habían militado o eran simpatizantes de los partidos de la Unidad Popular.

En 1977, en el discurso de Chacarilla, el General Pinochet habla por primera vez del nuevo tipo de democracia que se avecina una vez finalizado el régimen, denominándola como “autoritaria, técnica y protegida” (Memoria Chilena, 1977). Se trata de un proyecto institucional en formación que tiene como objetivo dar una “respuesta” al orden constitucional que emergió de la Constitución de 1925, que promovía una democracia de carácter liberal, social y republicana (Ruiz-Tagle, 2016): su reemplazo debía ser por una democracia “tutelada” por las Fuerzas Armadas, con el objetivo fundamental de no volver a repetir la experiencia de la Unidad Popular (Huneus, 2014).

Para avanzar en esta tarea, en 1973, el General Pinochet forma la “Comisión Ortúzar”, en honor al líder gremialista que había sido Ministro del interior de Jorge Alessandri durante la primera mitad de la década del 60. Dicha Comisión Constituyente,

comienza a reunirse desde 1974, y tiene como misión elaborar el proyecto de Constitución que luego va a ser aprobado por el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno. Su duración se extendió hasta 1978, con un total de 417 sesiones (BCN, 2017).

Este proyecto constitucional luego se transforma en la Constitución de 1980, plebiscitada “simbólicamente” el día 11 de septiembre de 1980, con un 67% a favor, un 30% de rechazo y un 3% de abstención (Moulian & Osorio, 2014, pág. 97). Algunos analistas indican que fue un procedimiento de legitimación de carácter fraudulento (Heiss & Szmulewicz, 2018), al no haber registros electorales que permitieran verificar la verosimilitud de los resultados (Navarro, 2014). Además, el plebiscito se realiza en un contexto de absoluta represión e imposibilidad de cuestionamiento público del proyecto, lo que más allá de los resultados, también resta legitimidad al proceso (Fuentes & Joignant, 2015).

Y en el ámbito socioeconómico, se producen cambios orientados a liberalizar en extremo la economía a través de las conocidas “políticas de shock”. Esto implicó un fuerte proceso de privatización de empresas públicas; una apertura de los mercados que provocó un déficit en la balanza comercial; y una política de libremercado que carecía de una institucionalidad reguladora (French–Davis, 2003; Meller, 1998). Estas transformaciones estuvieron a cargo de tecnócratas civiles conocidos como los “Chicago Boys” (Fontaine, 1988), formados en la Universidad de Chicago de la mano de Milton Friedman, uno de reconocidos padres del pensamiento “neoliberal” (Valdés, 1995; Dezalay & Garth, 2002; Puryear, 1994).

Las transformaciones económicas que implementa la dictadura militar tienen consecuencias extraordinarias en la sociedad chilena, muchas de las que se mantienen hasta el día de hoy, ya que se pasa de un modelo “desarrollista” que se había gestado desde finales de los años 20’ (Salazar, 2001), hacia una economía de libremercado a ultranza, todo en el margen de aproximadamente trece años (aproximadamente desde 1976). Es por ello que varios autores hablan de este período como una “revolución capitalista” (Moulian, 1997) o de una “contrarrevolución” (Garretón, 1993). De hecho, el régimen militar en su afán compensatorio hacia los grupos afectados por las reformas, inicia una política de devolución de tierras a sus antiguos propietarios (Salazar, 2000, pág. 4), tal cual se puede apreciar en el cuadro expuesto a continuación.

<b>Destino de tierras anteriormente expropiadas</b>		
Cifras de abril de 1979		
Destino	Ha de riego básico	%
Asignadas a campesinos	491.195	54,8
Restituidas a antiguos propietarios	258.674	28,9
Transferidas o rematadas	146.063	16,3
Total	895.752	100

Fuente: Martínez & Tironi (1985).

Las transformaciones económicas en curso tienen varios efectos inmediatos, entre estos, la sistemática desarticulación de la industria nacional (la que ya no podía competir con ventaja con los productos importados desde el extranjero). También en el desempleo, el

que aumenta rápidamente golpeando sobre todo a los sectores más vulnerables del país. Esto constituye uno de los problemas principales para los chilenos durante este tiempo, quienes en su mayoría veían que el cambio de régimen no venía acompañado de un mejoramiento de la situación socioeconómica (Huneus, 1987, pág. 87).

Esta situación de crisis gatilla en fuertes movilizaciones en contra de la dictadura militar, que comienzan el año 1983. Estas son encabezadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre, con el apoyo de pobladores y del movimiento estudiantil, y abarcan a todas las clases sociales, no sólo a los sectores más populares. Esto muestra una actitud de reprobación transversal al régimen y la situación económica que tenía al país, con una cesantía que llegó a superar el 30% (CEP, 1987, pág. 23; Meller, 1998, pág. 198).

Para contrarrestar las fuertes movilizaciones, Pinochet nombra en interior a Sergio Onofre Jarpa, quien había sido presidente del Partido Nacional. Para algunos analistas, este dirigente político fue clave en el proceso de “apertura” que generó la dictadura militar (Huneus, 2014), mientras que para otros, sólo jugó un papel de descompresión respecto del trato rígido de los militares con la oposición (Moulian & Osorio, 2014). Sin embargo, fuera de esta interesante discusión, lo cierto es que a partir de 1987, se realizan algunas reformas políticas que tendrán incidencia en el curso de la posterior democratización. Una de estas es la “ley de partidos políticos”, que permite la inscripción de estas organizaciones políticas, siendo el primero en inscribirse la Democracia Cristiana (Huneus & Morales, 2003).

Por otra parte, el Tribunal Constitucional, reactivado posteriormente a la promulgación de la Constitución de 1980, ordena adelantar la regulación del proceso electoral, lo que implica abrir los registros electorales y volver a restituir al Tribunal calificador de elecciones, que ya debían estar vigentes para el plebiscito de 1988. Esta decisión, a pesar de que no gustar a la Junta Militar, igualmente es acatada, y en la práctica significó darle al futuro plebiscito un carácter regulado, creíble y legítimo, en contraposición a lo que había sido el proceso de aprobación de la Constitución.

En el plebiscito de 1988, votan válidamente 7.086.697 personas: 55,9% vota por el No y el 44% vota por el Sí (Del Campo, 2007, pág. 244), que implicaba la continuidad de Pinochet. Este resultado permite sacar al General del ejecutivo y avanzar con más fuerza hacia la transición a la democracia.

Como habrá podido inferir el lector/a, el contexto analizado no es lineal, ya que se trata prácticamente de dos países distintos: el de la “vieja democracia” y el de la dictadura militar que da origen a la “nueva democracia”. Es justamente en estos “dos países” que se desarrolla tanto el “origen social” como la “socialización política” de los entrevistados de la SNA y la SOFOFA, lo que se procede a analizar en el apartado siguiente.

## **2. La posición social de los entrevistados mayores de la élite empresarial**

En este apartado se analiza la “posición social” de los líderes empresariales, la que de acuerdo con la hipótesis de investigación, se caracteriza por familias con un alto nivel educacional y una favorecida situación social, y que fueron afectadas directa e

indirectamente por el curso de las reformas implementadas durante los “tiempos de la polarización”, y cuyo climax se constituyó durante el gobierno de la Unidad Popular.

Es así que en esta sección, tomando en consideración el contexto general de la evolución del sistema político chileno, se profundiza en algunas dimensiones socioeconómicas del período en el cual tiene lugar el origen social de los entrevistados.

Como es sabido, en muchos estudios sobre la “posición social” se busca conocer, entre diversos objetivos, las determinantes económicas y sociales de los agentes (OECD, 2016). Bajo esa orientación, se presta suficiente atención, por ejemplo, a indicadores como el nivel de ingreso de las familias, lo que sin duda, convierte a la dimensión económica como una parte fundamental en el análisis (Beyer, 2000).

Desde una vertiente más culturalista, hay quienes matizan la determinación de los ingresos parentales, manifestando que en ocasiones su sobreutilización reduce el análisis a los aspectos puramente económicos (Casillas, Chain, & Jacome, 2007). Así, en forma complementaria, y sin negar la importancia del factor económico, se sugiere incorporar algunas determinantes sociales y culturales como el tipo de ocupación que tienen los padres y/o el nivel de estudio de los progenitores (Torche & Wormald, 2004; Mari-Klose y otros, 2009; CEP, 1987b), lo que contribuiría a la realización de un análisis un tanto más rico y complejo.

En virtud de lo anterior, en el marco de las entrevistas realizadas a los dirigentes, se intentó pesquisar a través del relato de los entrevistados, no sólo en las percepciones y memorias de la situación patrimonial que estos tenían en sus “años impresionables”, sino que también se puso atención en las respectivas trayectorias familiares, indagando en las labores y estudios de sus progenitores (Balzano, 2002; Lipset & Solari, 1967).

Las trayectorias familiares y patrimoniales de los dirigentes han sido contextualizadas a partir de algunos datos sociológicos y económicos sobre la época. Esto es importante para tener en cuenta que bienes culturales que hoy día son más frecuentes en la población, como lo es tener una profesión universitaria, en el contexto de mitad del siglo pasado más bien constituía un bien escaso y socialmente muy valorado. He ahí la importancia de escudriñar –parafraseando a Bourdieu– la adquisición de este tipo de capitales o recursos simbólicos, lo que, en definitiva, puede ser una herramienta útil para dimensionar con mayor acuciosidad la posición social de origen de la élite empresarial.

Es conveniente tener presente que el conocimiento sobre la “posición social” es imprescindible para analizar la dimensión de la “socialización política familiar” de los entrevistados (Inglehart & Welzel, 2006; Díez, 2011), tanto en lo que se refiere a las “vivencias experimentadas” como a la “transmisión” familiar de ellas. Ello bajo el supuesto de que la élite empresarial históricamente ha tenido una posición privilegiada, que la distingue de otros grupos sociales y del resto de la sociedad (Solimano, 2015; Aguilar, 2012; Petras, 1967; Briones, 1963). En tal sentido, se trataría de familias “tradicionales”, socialmente favorecidas, cuyo acervo cultural y económico viene cultivado desde la “cuna” (*High Born*) (Winters, 2011), definiendo un tipo socialización política muy singular, distinto al de otros grupos sociales y políticos, que es lo que esta investigación se propone demostrar.

Aunque no existe abundancia de estudios enfocados en la formación cívica de las élites económicas, lo cierto es que una parte de la literatura sobre “socialización política”

distingue algunas diferencias en el desarrollo de la cultura política de familias con alto nivel de escolaridad y con holgados recursos económicos (Maravall, 1978). Así lo señalan Wetsby & Braungart (1966), *“Generally, the focus of research in this area, with its concentration on socialization patterns in the family, seems to neglect the older class based model of political beliefs which assumes that the latter are primarily a function of the stratification system”* (pág. 690).

Esta escasa evidencia muestra el relieve de la *posición social de origen* (escolaridad y recursos) como dimensión para comprender el desarrollo de la socialización y la cultura política. He ahí la importancia de prestarle atención a estos capitales para verificar si, efectivamente, las características sociales de los entrevistados tienen alguna incidencia en el desarrollo de su “socialización política”, permitiendo con ello la formación de una cultura política con características particulares.

Ahora bien, siguiendo con el análisis de los entrevistados más mayores, como se indicó anteriormente, las fechas en que estos nacen y crecen se sitúan entre mediados de la década del cuarenta y comienzos de la década del sesenta.

Quienes han estudiado este período de la historia de Chile indican que –a pesar de las dificultades de despegue que produjo la crisis de 1929– se trata de uno de los ciclos socioeconómicos menos desiguales de la historia del país y en el que la distribución de la riqueza fue de las menos regresivas de América Latina, por detrás de Uruguay y Argentina (Ffrench–Davis, 2003, pág. 17; Gangas, 2003). Y, en opinión de los expertos, esta situación se produjo no sólo por cambios en la orientación del Estado en la economía, sino también, por factores sociales y políticos que nivelaron un poco el “campo de juego” entre trabajadores y empresarios (Larrañaga, 2001 y 2016; Moulian, 1982; Solimano, 2013).

Durante este contexto, la expansión de la industria también fue acompañada de una política de protección social particular, que Óscar Larrañaga (2001) denomina como “Estado benefactor”. Esto se expresaba en la cobertura de un conjunto de servicios sociales antes negados a gran parte de la población (Morris, 1967), entre estos, la salud, la educación y las pensiones, que ahora alcanzaban a proteger a las emergentes “capas medias”, aunque también en menor medida a los obreros y campesinos.

Es así que el cambio en el modelo de desarrollo propició la emergencia de una infraestructura pública y de “capas medias”, compuestas, fundamentalmente, por funcionarios, profesionales, técnicos, pequeños y medianos empresarios y comerciantes (Cerdeña, 1998). Esta transformación de la estructura social al amparo del Estado y también del sector privado tuvo un impacto significativo en la distribución de los recursos, puesto que ya no se trataba más de una sociedad compuesta solamente por ricos y pobres, sino también por la incorporación de estratos emergentes, lo que, en definitiva, fue importante en la reducción de la desigualdad entre 1940 y 1970 (Larrañaga, 2016, pág.48).

De la misma manera, algunos datos sobre la época muestran que a pesar de la concentración de la riqueza, se avanzó considerablemente en varias tareas sociales. De hecho, en la década del cuarenta, 76 hogares del país concentraban el 8,1% del ingreso total, cifra que en 1954 descendió a 0,69%, aumentando la participación de los grupos medios en la distribución del ingreso. En esa misma dirección, las cifras sobre superación de la pobreza y la indigencia son notables, ya que en las mismas fechas señaladas, los

pobres eran mayoría en el país, lo que disminuyó sensiblemente de un 45,6% en 1954 a un 15% en 1968. Efectivamente, esto da cuenta de algunos aspectos positivos de la evolución socioeconómica del país (Piñera, 1978, pág. 8), algo que también elogian algunos analistas internacionales (Maddison, 1989; Gangas, 2003).

A pesar de las cifras de disminución de la desigualdad y de crecimiento económico en diversos indicadores (Beyer, 1997; de Gregorio, 2005), a fines de la década del cincuenta el modelo de desarrollo comienza a mostrar sus limitaciones (Larrañaga, 2016; Meller, 1998; Ffrench–Davis, 2003). Ciertamente, aun cuando se había avanzado en el ámbito social a raíz de las modernizaciones del Frente Popular, lo cierto es que la orientación del “Estado Benefactor” hacía crecer en demasía las expectativas sociales y económicas sobre éste, lo que comenzaba a poner en tensión la posibilidad de un mayor crecimiento y de una mejor distribución de los recursos (Pinto, 1973). Esta situación aumentó la “pugna distributiva” en la sociedad, ya que, a pesar de los continuos mejoramientos, se comenzaba a mostrar insuficiente, sobre todo para los sectores más vulnerables menos protegidos por el Estado.

De hecho, aun cuando se ha destacado que bajo el gobierno del presidente Alessandri se presentaron algunos de los menores niveles de desigualdad en Chile a lo largo de su historia (con un coeficiente Gini en 1960 de 46,8) (De Gregorio, 2005; Lambrecht, 2011), lo cierto es que seguía existiendo una marcada distinción entre las clases sociales, sobre todo entre aquellos que detentaban gran parte de la riqueza, los sectores medios y en último lugar los obreros y campesinos.

Para sostener esta afirmación hay que remitirse brevemente a algunos datos: por ejemplo, entre 1958 y 1964, la diferencia entre el quintil más rico y el quintil más pobre era de 12,1 veces, lo que ponía de manifiesto el estado de la “cuestión social” en el país (Rodríguez, 2014; Larrañaga, 2001). Asimismo, los profesionales tenían una brecha salarial de un 230% respecto del promedio de los empleados, siendo los más afectados en esta distribución los obreros, cuyo salario era equivalente a un 17% respecto del de los profesionales (Larrañaga, 2016, pág. 50–52). Esta marcada desigualdad, también se expresaba en el pesimismo que tenía la ciudadanía sobre la situación económica, que durante este período es muy alto (Navia & Osorio, 2015, pág. 131).

En definitiva, como bien lo sugieren los analistas de este período, los ingresos de quienes tenían alta cualificación y profesiones, los situaba en el estrato social más rico de la población (Beyer, 1997), tanto en el nivel material como en algunos elementos del estilo de vida de la “clase alta” (Larrañaga, 2016; Martínez & Tironi, 1985).

### *2.1. Autoubicación en el espacio social*

Es bajo este contexto de avances sociales y limitaciones estructurales donde se sitúa el origen social de los dirigentes empresariales más mayores. Y, en efecto, tomando en consideración el estado de la “cuestión social” en el país durante el contexto analizado, es posible afirmar que en términos generales, los integrantes de mayor edad de la élite empresarial tienen un origen social “acomodado”, muy disímil al del resto de la población chilena.

A pesar de ello, la mayoría de los integrantes de este grupo se autodefinen como de “clase media”. Al respecto, se considera que no se trata de una “*actitud con la que se aparenta pertenecer a un estrato sociocultural y económico más bajo del que le corresponde*” tal cual define la Real Academia Española el concepto de “abajismo”<sup>26</sup>. En un sentido distinto, en términos discursivos, ellos se sitúan en una posición social “intermedia”, sostenida en expresiones como un “buen pasar”, sin “privaciones materiales” y un estilo de vida “austero”, sin mayor opulencia. Estas percepciones fueron consignadas en varios testimonios de los dirigentes de ambas organizaciones analizadas. Es más, ningún entrevistado manifestó haber tenido un origen de “superabundancia” o de “heredero” en los términos en los que se refería Pierre Bourdieu (1997).

Las trayectorias familiares analizadas en este grupo confirman esta autoubicación en el “espacio social”. Pero lo cierto es que si se profundiza en algunos aspectos como el nivel de cualificación de los padres, el tipo de ocupación laboral de éstos durante el contexto analizado y la percepción de la situación patrimonial de los entrevistados, es posible colegir que los miembros más longevos de la élite empresarial pertenecían a una *posición alta de la estructura social* chilena, lo que constituye una absoluta minoría en el contexto de mediados del siglo pasado. Esto último, de alguna manera, corrobora parcialmente el autoposicionamiento social que hicieron aquellos que participaron en este estudio.

## 2.2. Las ocupaciones de los padres

De acuerdo al análisis realizado, se logró distinguir que la mayoría de los padres de los dirigentes de la SNA tienen una ocupación con prestigio social vinculada al mundo de la “hacienda”. Este prestigio era una especie de “capital simbólico” muy valioso durante el contexto investigado, ya que algunos estudios sobre este período indican que su prestigio era tal, que incluso muchos empresarios de otros rubros compraban grandes extensiones de tierra por el status que éstas conferían (Petrás, 1967). De hecho, la literatura reconoce que este “prestigio social” emanado de la tenencia de fincas, es bastante singular del caso chileno y también latinoamericano (Medina–Echavarría, 1969; Avendaño & Escudero, 2016). Y no así en otros países, como, por ejemplo, en España, país en el que durante esta misma época el prestigio de los agricultores era lo suficientemente bajo en relación a otras ocupaciones, como el de los empresarios de otros rubros, los comerciantes o el tener una profesión (Linz & de Miguel, 1963). Así define este interés por las tierras en el caso chileno el sociólogo Osvaldo Sunkel:

“Durante los últimos años, el proceso de integración de los grupos sociales nuevos y tradicionales se ha completado mediante vínculos matrimoniales entre ambos sectores, así como la incorporación de las nuevas familias industriales y comerciales a las instituciones y círculos sociales que caracterizan y confieren status a la élite gobernante tradicional. Otra expresión del mismo fenómeno es el hecho de que una parte considerable de la nueva burguesía industrial está

---

<sup>26</sup> Al respecto, véase la Real Academia Española, visitada el día lunes 25 de febrero de 2019, disponible: <http://lema.rae.es/damer/srv/search?id=0bcudTktMx0AiG2r8Q5>

adquiriendo bienes y propiedades en el campo, como símbolo importante de jerarquía social” (Sunkel, 1965, pág. 24).

En relación a las ocupaciones de los padres, en la mayoría de los entrevistados mayores de la SNA, la labor de los progenitores es más bien *empresarial y dedicada al rubro de explotación agrícola*, siendo muchos menos los casos de padres profesionales y/o funcionarios públicos. Cabe mencionar que en este grupo ningún entrevistado señaló haber tenido padres sin ocupación o sin algún tipo de actividad remunerada.

“Mis padres tenían una buena situación económica, sí, es que es difícil evaluar lo que es situación económica “buena” dependiendo en los años que tú te ubiques, porque en el año 1944 cuando yo nací, Chile venía saliendo de una tremenda recesión económica y mis padres y abuelos contaban las pellejerías que habían pasado. Posteriormente no, en mi desarrollo de vida y juventud, sí austeros para vivir, *pero nunca hubo una dificultad para todo lo que sea economía, para todo lo que sea educación y vivienda, en fin. Así que no, no tenía problemas económicos.*

**Entrevistador: ¿Su padre era empresario también?**

Sí, era empresario agricultor con administración de tierras. Incluso, en la primera etapa trabajó mucho en lo que es la actividad de producción de aves y huevos, y que era un nivel de tecnología... ubiquémonos en la época, en el año 50’ o 60’, un nivel de tecnología alto, lo que requería viajar mucho fuera del país buscando diferentes razas de animales, manteniendo siempre la mejor tecnología del momento” (E21, 74 años, SNA).

Lo que menciona el entrevistado es bastante representativo de la situación ocupacional de las familias agrícolas tradicionales, sobre todo porque dicha labor empresarial se realizaba en un contexto donde el mundo del agro abarcaba cerca de la mitad de la población chilena (Rodríguez, 2014, pág.128). No obstante, también es cierto que aún cuando había muchísima gente vinculada al trabajo agrícola en calidad de campesinos, datos de la época muestran que hasta la implementación de la reforma agraria, no más del 10% de la población concentraba el 86% de las tierras dedicadas a la agricultura (Lambrecht, 2011, pág. 16). Este último dato es fundamental para entender que la tenencia de tierras no era un fenómeno generalizado en el país, siendo una minoría restringida la que accedía a este tipo de bienes económicos y también “simbólicos” (Sunkel, 1965).

Cabe mencionar que, por lo general, las ocupaciones empresariales de los padres estuvieron vinculadas a la tenencia de algún tipo de patrimonio, especialmente de posesión de tierras, que en algunos casos, según los discursos analizados, podía tener un carácter “significativo” (sobre todo por la extensión de las propiedades). Sin embargo, también es cierto que, como ya se anticipaba en las hipótesis, en varios casos investigados esta situación favorecida fue impactada por la reforma agraria, lo que marcó un antes y un después en la situación social de los dirigentes entrevistados.

“En el campo de mi abuelo toda la vida hubo lechería, mucha siembra, caballos de carrera y después de un día para otro se quedó con 160 hectáreas, que era



como tener para él una parcela, *porque de 1.100 hectáreas, le quedaron 160*, y él había donado incluso para la Escuela Agrícola, había donado 40 hectáreas” (E1, 60 años, SNA).

“Teníamos un campo bastante grande para esa época, *alrededor de 480 hectáreas que fue expropiado legalmente en el tiempo de la Unidad Popular*. Era un campo bastante bien trabajado. Mi papá fue en su minuto una persona muy innovadora en cuanto a tecnología, en cuanto a especialmente riego (...) era una situación económica, hasta el año 71’, era una buena situación, después cayó en una crisis bastante complicada a la que llegó la mayor parte de la gente del país” (E31, 60 años, SNA).

Con diferencia, las actividades empresariales son bastante menos frecuentes en el caso de los dirigentes más mayores de la SOFOFA, cuyos padres tienen, por lo general, actividades más heterogéneas vinculadas al *trabajo asalariado en calidad de profesionales universitarios*. A pesar de ello, en los mínimos casos de familia de empresarios, también se menciona la percepción de gran patrimonio económico vinculado a los negocios y la posesión de tierras, en una forma muy similar a lo expresado por Sunkel (1965) más arriba:

“Bueno, en mi infancia yo me acuerdo que en mí siempre hubo un espíritu de esfuerzo, de trabajo. Yo siempre miraba a mi padre que él estaba creando su industria en el año 1939, el año del terremoto de Chillán, y siempre fue una historia de esfuerzo y de crear empresas. Mi papá me llevaba a la empresa, yo trabajaba con él cuando era chico. Siempre me moví, no era ajeno a mí la actividad de la empresa, entonces, desde niño *a uno se le graba ese espíritu emprendedor que tenía mi padre*, de poder inventar negocios, de poder crear negocios nuevos, siempre pensando en productos nuevos, cómo progresar (...) mi padre también se dedicó a la agricultura, en Ovalle, en la cuarta región, por lo tanto, también aprendí harto [mucho] de agricultura. Mi padre tenía siembras de trigo, maíz, qué sé yo, tener lecherías, tener ganaderías, engorda de ganado, mi padre tuvo un aras de caballo que era pura sangre...” (E12, 74 años, SOFOFA).

Puedo señalar que esta menor presencia de padres empresarios en la SOFOFA, de algún modo, marca una diferencia importante con los resultados de otras investigaciones como la de James Petras (1967), quien concluye que la posición social de origen de los dirigentes industriales es de “herederos” de familias burguesas vinculadas a la industria, la tenencia de bancos e incluso la tenencia de tierras. Las evidencias encontradas en la presente investigación contrastan con lo concluido por este autor, pues los padres de los integrantes mayores del grupo de entrevistados de la SOFOFA son en su mayoría personas con alta cualificación, por tanto, *profesionales* sin posesión de un gran patrimonio económico. Esto último es importante y da cuenta al decir de Vilfredo Pareto (1967) de una mayor “circulación” de la élite empresarial industrial, lo que la distingue de la élite tradicional de la SNA, que parece seguir un patrón socialmente más “cerrado” (Aguilar, 2012).

En tal sentido, el “capital” educacional distingue al grupo industrial respecto de sus pares en la SNA. Esto se expresa en un mayor desarrollo por “actividades liberales” entre las que es posible identificar ocupaciones vinculadas a la medicina, las leyes, la administración de empresas, entre otras actividades exiguas para la época y socialmente valoradas. Se puede colegir que esto es así porque durante este contexto, este tipo de profesionales eran muy escasos en el país, ya que recién a fines de la década del sesenta poco más de 200.000 personas tenían estudios universitarios (Larrañaga, 2016, pág. 50), ello dentro de un universo de casi diez millones de personas según el censo de 1970, lo que constituía un 2% de la población.

Por otra parte, el nivel de las remuneraciones de estos profesionales era lo suficientemente alto como para distinguirse de los estratos medios tradicionales, y con mayor razón de los obreros y campesinos. En ese sentido, como demuestra Harald Beyer (1997), la mayoría de las personas que se ubican en el quintil de mayor riqueza en las fechas señaladas, son los sectores más *educados*, dentro de los que, según este estudio, caben las familias de los dirigentes investigados.

“Mi papá se dedicaba a trabajar y mi mamá, si bien ella era dentista, pero había dejado de trabajar en odontología años antes, se dedicaba a las labores de la casa, a cuidarnos, criarnos (...) mi papá nos pasaba a dejar en la mañana camino del centro y a la salida nos íbamos en micro [autobús] o mi papá nos pasaba a buscar, pero la mayoría de las veces eran micros que las tomábamos en Providencia... pero eso no era un problema... la situación económica en mi familia era muy buena, gracias a dios, no tuve ningún problema económico” (E2, 59 años, SOFOFA).

“Ellos fueron un matrimonio que se mantuvieron siempre unidos hasta el fallecimiento de mi padre, que falleció con 72 años de edad. Mi padre era contador, trabajó en empresas grandes siempre, teníamos un buen pasar, modesto. Mi padre fue contador de IANSA, trabajó unos años en INDAP y en general estuvo en empresas grandes. Tuvo buenos cargos para un contador. Y eso permitió educarnos, vivir bien, pero, en general, yo diría una familia de clase media, ni siquiera muy acomodada. Probablemente para esa época sería una clase media “acomodada”. Éramos una familia de cuatro hermanos, hasta hoy día muy bien avenidos” (E6, 77 años, SOFOFA).

Como se puede distinguir en los últimos fragmentos presentados, la referencia que hacen los entrevistados a la figura materna en el ámbito de las actividades laborales es prácticamente nula. De hecho, en las pocas menciones que hubo, ésta siempre fue relegada a las tareas del hogar (incluso en algunos casos siendo estas profesionales como se hacía notar), y también de soporte emocional de la figura paterna.

Por cierto, este papel secundario de la mujer en materia laboral, profesional y patrimonial no es un fenómeno singular de la élite empresarial, sino que más bien, es resultado de un proceso que responde a las propias lógicas culturales de la época, en las que la mujer tiene un rol bastante secundario y siempre detrás de la figura masculina (Castillo, 2006). Es más, en este contexto, son las mujeres de mejor situación económica

las más integradas al mercado laboral, constituyendo hacia fines de la década del sesenta el 39% de la participación laboral (Beyer, 1997, pág.17). Lo anterior permite dar cuenta de dos situaciones. Por un lado, la preeminencia de la figura masculina por sobre la femenina en diversas esferas de la sociedad, pero, por otra parte, la conformación de familias muy “tradicionales” (Sunkel, 1965), sobre todo porque, a pesar de que son las mujeres más acomodadas las que más se integran a la fuerza de trabajo, esta situación no se dio en el caso de las familias de los entrevistados.

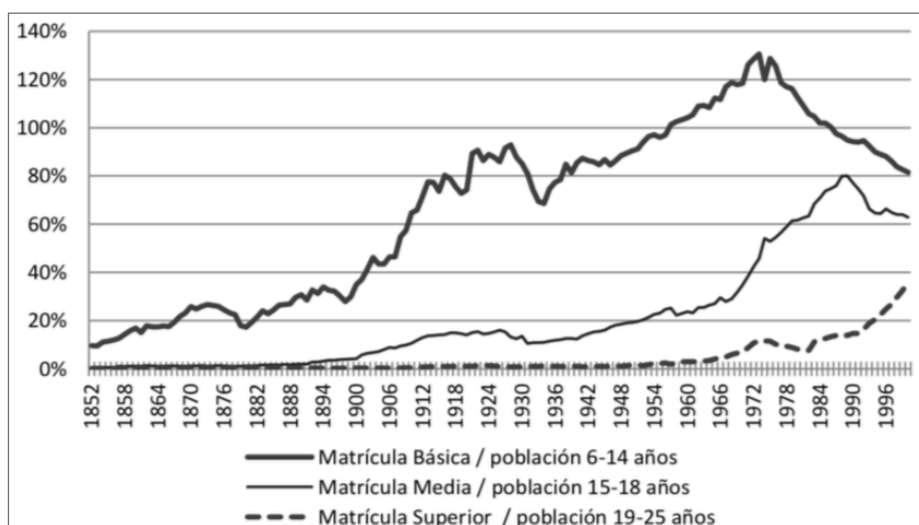
Pero como señalaba un entrevistado más arriba, a mediados del siglo pasado, “*no tener problemas económicos, tener educación y vivienda*”, no necesariamente constituían una situación generalizada en el país. Por ello, el diagnóstico que elabora el líder empresarial es bastante preciso, y así lo demuestran las cifras sobre la época.

Por ejemplo, en relación a la situación habitacional, recién en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1965), ello a raíz de una fuerte presión realizada por el movimiento de pobladores, que se venía desplegando sistemáticamente y por bastante tiempo en aras de conseguir una solución al problema de la vivienda (Garcés, 2002). Este último dato da cuenta de la existencia de sectores integrados al mercado del trabajo que *no* tenían acceso a la casa propia, problema que comenzó a resolverse con más intensidad a partir del gobierno demócrata cristiano (1964–1970).

Y en el ámbito de la escolarización, algunos datos sobre la época muestran que en Chile existía un bajo promedio de años de escolaridad. Éste era de 4,5 años en 1940, cifra que recién alcanzó los 5,6 años de estudios en 1960. Si bien es cierto este promedio estaba por sobre el que existía en esas fechas en América Latina, la verdad es que era casi la mitad del promedio de los países que hoy día componen la Unión Europea (Rodríguez, 2014, pág. 133), lo que también muestra las dificultades que tenían vastos sectores de la ciudadanía para completar sus estudios básicos y secundarios.

De hecho, la expansión educacional durante esta fecha es demasiado baja, ya que como muestra el gráfico a continuación, la cobertura en educación primaria recién en 1950 alcanzó al 60% de la población (Larrañaga, 2016, pág. 44). Y en relación a la universidad, desde mediados del siglo XIX hasta 1972, esta se encontraba reservada básicamente para los sectores más pudientes, ya que durante este período nunca más del 10% de la población cursó estudios universitarios (Martinez & Tironi, 1985, pág. 40).

Gráfico 13. Expansión educacional formal 1852–1996



(Fuente: Rodríguez, 2014, pág. 129).

En síntesis, bien expresa Guillermo Briones (1963), lo valioso de los estudios superiores, ya que *“el paso a la universidad representa en todos los países, pero sobre todo en América Latina, la solución a una de las más importantes barreras que separan los estratos superiores unos de otros, y es uno de los criterios que permite diferenciar el sistema de estratificación y dar cuenta de sus actitudes y conductas diferentes entre diversas categorías sociales”* (pág.14).

Por otra parte, no hay que olvidar que casi todos los entrevistados cursaron estudios en colegios privados, cuyas matrículas de cuotas eran altas, lo que también permite distinguir el acervo económico que tenían las familias de los dirigentes, ya que durante estas fechas, a pesar de que el Estado hacía un valioso esfuerzo por entregar cobertura a todos los sectores de la sociedad, la verdad es que en la educación igualmente se producía una fuerte segmentación social. En efecto, como indica Larrañaga (2016), *“sólo aquellos que pertenecían a la clase alta podían pagar la educación de sus hijos”* (Larrañaga, 2016, pág. 43), lo que no difiere de los datos de estratificación social expuestos por Martínez & Tironi (1985), quienes sitúan a los empresarios, profesionales, técnicos y agricultores en el estrato superior de las clases sociales (pág. 79).

### 3. La posición social de los entrevistados más jóvenes de la élite empresarial

Los entrevistados más jóvenes de la élite empresarial nacen y crecen entre 1960 y fines de 1970. Sus primeros años de vida transcurren en contextos históricos diferentes, que incluso hacen difícil su comparación. Se podría decir que algunos crecen en un país distinto al de sus pares más longevos, al tratarse de una sociedad un poco menos desigual, más integrada y políticamente más polarizada, mientras otros dirigentes crecen en un país donde las libertades políticas y cívicas están coartadas, con menos integración social y en medio de profundos cambios en la economía y la política implementados por el régimen militar.

Aun así, estas décadas se caracterizan por muchos cambios económicos, sociales, culturales y políticos. Se trata, en definitiva, de los “tiempos de la polarización” (Ruiz, 2005; Valenzuela, 1978; Moulian, 1994; Garretón & Moulian, 1985; Huneus, 1986), con todos los efectos negativos y positivos que implicó dicha situación en el país.

En todo caso, hablamos de un país diferente en muchos aspectos al que se venía desarrollando desde la década del cuarenta y cincuenta. Así, como diría Eric Hobsbawn, la “larga década del sesenta” hasta el quiebre institucional de 1973, se caracterizó por una fuerte movilización social y política, producto de varias reformas institucionales que fueron ampliando las bases sociales de la democracia (Garretón, 2015; Huneus, 1987; Moulian, 1982; Valenzuela, 1978; Sartori, 1976).

En el ámbito socioeconómico, se trata de una etapa de avances y también de estancamientos según se mire, puesto a que pese a que las cifras son positivas en algunos ámbitos, como, por ejemplo, en el mejoramiento del índice de Desarrollo Humano (muy por encima del promedio de la región), lo cierto es que como muestra el cuadro, en otros ámbitos se sigue reflejando la fuerte “pugna distributiva” que tenía lugar en el país (Huneus, 2003, pág. 39). Así, los sectores más acomodados, prácticamente bajo cualquier indicador que se observe, siempre concentran gran parte de los ingresos y también de los activos.

<b>Indicadores “pugna distributiva”</b>	
Promedio coeficiente Gini 1958–1970	0,487
Concentración por renta quintil más rico en 1960 y en 1970	de 51,8% en 1960 a 52% en 1970
Concentración por renta quintil más pobre en 1960 y en 1970	de 4,9% en 1960 a 4,3% en 1970
Distribución ingreso personal en 1967, 5 quintil	56,5%
Distribución ingreso hogar en 1967, 5 quintil	51%

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Larrañaga (2001), de Gregorio (2005), Gangas (2003) y Beyer (1997).

Con el objeto de mejorar la distribución de la riqueza, durante este período se producen varios cambios institucionales, que la literatura especializada distingue como elementales para comprender el desarrollo político y económico del país. Entre los más importantes está la reforma agraria (Fermendois, 2013; Valdés, 2016; Avendaño & Escudero, 2016) y las políticas económicas que implementó la Unidad Popular a través de la redistribución del patrimonio como medio para avanzar en materia de igualdad (Beyer, 1997).

Estas medidas redistributivas durante el gobierno de Allende, se complementaron además con un aumento de los salarios (Fermendois, 2013, pág. 379), aunque también es cierto que, en la medida en que éstos aumentaban, también se incrementaba el consumo y la demanda de bienes, todo ello en un contexto de baja capacidad productiva del empresariado (Lambrecht, 2011). Estas medidas redistributivas, tuvieron como efecto la

intensificación de las importaciones, produciendo un desequilibrio en la balanza de pagos, lo que aceleró la inflación hasta en un 700% (Ffrench–Davis, 2003).

Cabe agregar que, a pesar de las transformaciones implementadas durante estos dos últimos gobiernos, la percepción de la ciudadanía con respecto a la situación económica fue de más a menos, cayendo a niveles muy bajos (similares a los de 1958) en 1973, ya que más del 50% pensaba que la situación económica era definitivamente “mala” (Navia & Osorio, 2015, pág. 131).

Luego del golpe militar, el régimen autoritario generó profundos cambios a nivel económico, muchos de ellos con un efecto regresivo, como, por ejemplo, en la caída del PGB, que cayó, según datos del Banco Central, a –15 por ciento hacia 1983<sup>27</sup>. Asimismo, el desempleo se disparó, entre otras razones, por la destrucción de la industria nacional, que no se vio en condiciones de competir cuando comenzó la apertura comercial (Ffrench–Davis, 2003); también la drástica reducción del Estado perjudicó a los estratos medios que estaban muy vinculados al aparato público, lo que obligó a este segmento a enrolarse al sector privado en un momento en que el mercado estaba recién en proceso de recomposición (Martinez & Tironi, 1985).

Las transformaciones en curso tuvieron un efecto negativo en la situación social de gran parte de la sociedad, ya que esta empeoró al producirse una mayor concentración de la riqueza y de la desigualdad entre los chilenos. Por ejemplo, el coeficiente Gini aumentó de 0,467 durante la UP a un 0,557 entre el período 1982 y 1986, llegando incluso a 0,570 a fines de la dictadura (Larrañaga, 2001, pág. 9). Estos cambios también se reflejaron en la desigualdad de los ingresos, ya que entre 1958 y 1973, la diferencia entre el quintil más rico y el más pobre era de 12,62 veces, cifra que se incrementó a 19,93 veces al finalizar el gobierno militar (Larrañaga, 2001; Gangas, 2003).

En definitiva, el origen social de los entrevistados se desarrolla en dos contextos políticos y sociales disímiles separados por regímenes diferentes. Sin embargo, más allá de las nítidas distinciones entre ambos escenarios, es posible afirmar que los dos períodos se encuentran marcados por la “pugna distributiva”, puesto que las clases sociales seguían fuertemente marcadas, tal cual lo percibe un entrevistado quien se refiere del siguiente modo al período en cuestión.

“Cuando yo era chico tú notabas claramente a una persona de origen más modesto, que hablaba distinto, con un acento distinto y además había como una... *había una mirada de clase más marcada* y además, a mí no me tocó tanto en mi generación, pero yéndose un poquito más allá, inclusive hacia el inmigrante, o sea, todo lo que mueve el inmigrante español, el italiano, los que llegaron acá, la aristocracia chilena los discriminaba” (E25, 58 años, SOFOFA).

Esta “marcada distinción de clases” también tiene su correlato en las percepciones de la ciudadanía sobre la situación del país, ya que a mediados de los ochenta, más de un 60% de la población creía que la situación del país, en general, era “mala”, sobre todo por la sensación de empobrecimiento de los sectores más vulnerables (Huneus, 1987, págs.

---

<sup>27</sup> Fuente: Banco Central de Chile (2001).

30–32). No obstante, no toda la población compartía esta evaluación, ya que los sectores empresariales del país y aquellos más proclives a la posición política de derecha, creían que el país tenía una situación “buena” y “regular”, lo que muestra la importancia de la posición social y política en las actitudes de la ciudadanía (Díez, 2011; Inglehart & Welzel, 2006; Lipset, 1970; Huneus, 1987; Rustow, 1987; Briones, 1963).

### *3.1. Autoubicación en el espacio social*

La autoubicación en el “espacio social” que hicieron los entrevistados más jóvenes, es un tanto distinta a la que manifestaron los dirigentes más longevos, ya que éstos indicaron provenir directamente de familias “acomodadas”, sin mencionar en más de una oportunidad el concepto “clase media” como origen social. En tal sentido, se puede hablar de un autoposicionamiento distinto del identificado en los relatos de entrevistados de más edad, que discursivamente parecía ser más “austero” y menos “grandilocuente”, tal vez, más “conciente” del trabajo de generaciones anteriores para alcanzar una mejor posición, tal cual lo indicaba un entrevistado de la SNA anteriormente, quien contaba las “pellejerías” que habían tenido que vivir sus antepasados en el contexto de los primeros años del siglo pasado.

Pero esto no se da tan elocuentemente en el caso de los más jóvenes. Bien podría decirse, que se trata de una especie de “habitus de clase” diferente, discursivamente más “elevado”, y que ha sido retratado por una parte de la literatura sobre las élites (Rothkopf, 2008). Por ejemplo, algunos trabajos de Galbraith (2012) describen que en el contexto de sociedades “opulentas” como la norteamericana, los grupos favorecidos desarrollan prácticas culturales que hacen del “consumo conspicuo” algo inherente, y que además opera, al decir de Bourdieu, como un mecanismo de *distinción social* con respecto a quienes no pueden acceder a todo tipo de bienes. Esto bien podría expresarse en un discurso más “directo” y menos “meritocrático” sobre el origen social, tal cual ocurre en las entrevistas analizadas.

En todo caso, parece ser un fenómeno que ocurre con frecuencia en los sectores altos de esta generación en este contexto histórico, porque algo similar sucede con otros directivos industriales chilenos encuestados por Petras en la década del sesenta, ya que varios de éstos expresaban provenir directamente de sectores “acomodados” y de “muy buen pasar” (Petras, 1967).

En el caso de los más jóvenes de esta investigación, el posicionamiento social se sostuvo en expresiones como: “tener de todo”, “tener una muy buena situación” o menciones concretas como “tener para pagar colegio y universidad”. Estas referencias, como se verá a continuación, dan cuenta de una *pertenencia social favorecida*, singular e inaccesible para el resto de la población, sobre todo porque la “opulencia” aún no es un fenómeno de masas en el país.

Algunos datos ilustran esta última afirmación. Por ejemplo, la adquisición de una educación pagada no tiene un carácter masivo en esta época. Se trata de colegios particulares con cuotas muy altas que hacen difícil el acceso para el resto de los ciudadanos, salvo en aquellas instituciones educativas que durante esta época tenían

cupos reservados para personas de más escasos recursos, como es el caso del colegio Saint George, entre otros también de carácter religioso.

La situación no es muy distinta en relación con el ingreso a la universidad. En efecto, la matrícula universitaria comienza gradualmente a expandirse durante el gobierno militar –sobre todo a partir de la creación de universidades privadas–, sin embargo, también es cierto que a mediados de los años setenta, las universidades cambian la forma de su financiamiento, lo que en la práctica significó el encarecimiento de la educación superior (Brunner, 1986). Ello confirió a los estudios universitarios un valor económico mayor del que ya tenían, al volverse más reservados para aquellos que podían pagarlos, como es el caso de las familias de los entrevistados de este estudio.

### *3.2. Las ocupaciones de los padres*

En relación a las ocupaciones de los padres, se identifica una elevada cualificación escolar de los progenitores, siendo en esta oportunidad esto más pronunciado en el caso de la SNA, ya que en la mayoría de los casos, los padres de los entrevistados son *profesionales universitarios*, y al mismo tiempo, son *empresarios agrícolas*. Hablamos, por tanto, de familias educadas que forman parte de la minoría empresarial del rubro agrícola, que entre 1960 y 1986, nunca superó el 4% de la población (Gómez & Echeñique, 1988, pág. 62).

Es importante mencionar que el desarrollo de la actividad agrícola, al menos hasta los años setenta, no es el mismo que se comienza a gestar a partir del régimen militar, ya que algunas investigaciones indican que esta actividad había caído en su producción un 12% entre 1930 y 1970, aportando el 1% del PIB (Beyer, 1997). Esto cambió durante los años 80', ya que el sector agrícola creció significativamente a un 4,1% (Schmidt-Hebbel, 2006, pág. 48), especialmente por la apertura del mercado y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, considero que el dato es relevante porque, en primer lugar, confirma la evidencia de una tendencia hacia la configuración de un empresariado más profesional (Medina-Echavarría, 1969), más técnico y preparado para los desafíos del nuevo modelo de desarrollo que implanta el gobierno militar (Montero, 1996); en segundo lugar, también muestra un grupo social más vigoroso y económicamente mejor posicionado, sobre todo por su contribución al crecimiento del país en base a las exportaciones, lo que lo sitúa, definitivamente, en uno de los sectores de la economía más prósperos (Gómez & Echeñique, 1988).

Este crecimiento y robustecimiento de los empresarios vinculados al sector agrícola durante el gobierno militar, como es el caso de la gran mayoría de los progenitores de los entrevistados, también tiene su correlato en la percepción de una situación patrimonial favorecida, de tenencia de tierras y propiedades, y de crecimiento de los activos, aunque también se menciona en más de algún relato las dificultades que implicó el proceso de adaptación a las nuevas reglas del modelo de desarrollo.

“A ver, yo viví de lo que ganaba mi abuelo en el campo, yo viví de eso, en la agricultura hace tiempo atrás era muy rentable, entonces se ganaba mucha plata,



pero con el correr del tiempo, la apertura de mercado y la globalización se fue haciendo cada vez más competitivo porque ya se podía importar cualquier producto y había que competir. Entonces, yo pasé de una familia que vivía bien acomodada, no extremadamente, no es que fuéramos y nos compráramos una isla, no una cosa así, pero teníamos para comer, teníamos para pagar colegio, entonces, para mí eso es vivir bien” (E27, 48 años, SNA).

“Era buena situación, era buena, nosotros teníamos vacaciones, teníamos de todo, pero el esfuerzo que tenían que hacer nuestros padres era impresionante y se notaba. La presión... se juntaban en una casa fuera de Santiago que compraron, llegaban en el verano y trabajaban todo el verano para mantener la casa, no tenían vacaciones, mientras nosotros nos tirábamos al lago, mi papá y mi mamá pintando la casa, cortando el pasto, *preocupados de su patrimonio, entonces, no disfrutaron lo que tuvieron y no lo disfrutaron porque estaban muy preocupados por esta situación que podían perderlo*” (E5, 47 años, SNA).

De la misma manera que en el caso de los entrevistados más longevos, en la mayoría de los participantes más jóvenes, siempre está el “miedo” o la “amenaza” de expropiación de la reforma agraria, aunque en esta generación, fueron menos los casos de familias directamente afectadas. No obstante, en el caso de los perjudicados, el curso de la reforma agraria marca un antes y un después en la situación social al reducir el bienestar patrimonial de las familias, tal cual se puede inferir del fragmento seleccionado:

“Mire, yo diría que cuando era muy chico era una *situación muy cómoda, de mucho bienestar*, la reforma agraria golpeó muy fuertemente a nuestra familia y cuando hablo de mi familia no solamente estoy hablando de mi padre, de mi madre, sino que también estoy hablando de los hermanos de mi padre que eran todos propietarios del campo familiar” (E9, 56 años, SNA).

En definitiva, hablamos de un grupo de familias situadas en los estratos sociales superiores de la sociedad, al tratarse de familias de agricultores empresarios y algunos con profesión.

Pero con los entrevistados de la SOFOFA pasa algo un tanto distinto, ya que los padres tienen *ocupaciones mucho más diversas*, no existiendo en ninguno de los sujetos analizados algún progenitor vinculado al mundo de la gran empresa o con posesión de un patrimonio de carácter significativo.

En tal sentido, las actividades predominantes en este grupo fueron aquellas vinculadas al comercio y la pequeña empresa, siendo incluso *menos* los casos de padres con profesiones universitarias. En consecuencia, se trata de un grupo de padres sin una alta cualificación, lo que también era muy propio de los estratos medios independientes de la época, que si bien tenían una posición relativamente acomodada durante el contexto analizado, igualmente se encontraban más sujetos a los vaivenes del mercado del trabajo (Cerdeña, 1998). Este rasgo es interesante y, nuevamente, confirma la “circulación” o mayor movilidad al interior de la élite industrial, lo que, definitivamente, la diferencia del grupo agrícola, que sigue los patrones más propios de los “herederos”, al ser una minoría mucho más “cerrada” socialmente (Aguilar, 2012).

En virtud de lo anterior, es posible colegir que se trata de una colectividad con una posición social acomodada pero más variada, de menor percepción de patrimonio económico, de más “esfuerzo familiar” y más acorde a la clasificación tradicional que se hace de la “clase media” en los estudios de estratificación social, en la que la situación de los ingresos familiares está más vinculada al mercado del trabajo y no necesariamente a la posesión de activos (Beyer, 1997; Martínez & Tironi, 1985).

“Yo nací el año 1971 así que imagínese qué significó eso, porque esos recuerdos quedan siempre. Vi mucha austeridad, mucho trabajo, muchísimo trabajo y *también mucha preocupación por razones lógicas, no eran momentos muy fáciles*, pero crecí en un ambiente muy familiar, muy consolidado (...) cuando era niña tenía que cuidar a mis hermanos porque mis papás trabajaban mucho, en una tienda en el sector de Patronato –muy clásico de los inmigrantes palestinos– entonces mi papá estaba muy involucrado en el trabajo y vivíamos ahí mismo casi, en el trabajo” (E7, 46 años, SOFOFA).

“Yo diría que en la inmensa mayoría de mi familia, mayoritariamente son médicos, papás, mamás, abuelos, hermanos mayores, cuñados, tíos, así que su vocación social la transmiten a través de esa profesión” (E23, 51 años, SOFOFA).

Solamente un entrevistado señaló haber tenido una muy buena situación económica, con presencia de patrimonio en una de las zonas más codiciadas del gran Santiago, el que fue afectado con las tomas ilegales de terrenos que se produjeron durante el gobierno de la Unidad Popular.

“Mi padre tiene 83 años y cuando era joven estudió en un colegio, en el Saint George’s College, mi papá era comerciante, tenía una tienda en el centro, tenía una muy buena situación económica (...) Después, resulta que mi abuelo me había dejado un terreno en La Dehesa, cuando la Dehesa era campo, y resulta que en la Unidad Popular se tomaron una vez esta cuestión y mi papá para que no se la volvieran a tomar hizo una casa de estas prefabricadas y nos fuimos a vivir allá” (E25, 58 años, SOFOFA).

Antes bien, es importante recalcar que el entrevistado no hace mención directa al proceso de reforma agraria, con sus expropiaciones legales de fincas, sino que más bien se refiere a una situación “espontánea” de expropiación por fuera del marco legal, producto de la fuerte polarización que existía en el país, que hacía que muchas veces no existiera correspondencia entre lo legal y las tomas de terreno por fuera de las normativas vigentes.

Por último, se puede decir que mientras la evidencia expuesta sugiere que los padres de los entrevistados en la SNA podrían perfectamente ubicarse en el *quinto quintil de mayor riqueza* del país, en el caso de la SOFOFA, esta situación presenta matices de diferencia, ya que las actividades desarrolladas por los progenitores son más propias de las *capas medias con movilidad social ascendente*, sobre todo de los sectores más independientes, que luego con el transcurso de la “modernización autoritaria” se enrolan directamente al mercado (Tironi & Martínez, 1985).

En todo caso, cabe reconocer que estos hallazgos no son exclusivamente novedosos, ya que esta diversidad en el origen social de los empresarios confirma algunos resultados de Guillermo Briones elaborados en la década del sesenta, en los que descubre que los padres de los empresarios tienen actividades variadas, entre estas, ser comerciantes, empleados, profesionales, pequeños empresarios, entre otras (Briones, 1963, pág.12). Esta “circulación de la élite”, también confirma algunos hallazgos de Cecilia Montero, quien concluye que el “nuevo empresariado” no siempre ha heredado capital, tierra o industrias, lo que implica que *“las biografías de los nuevos empresarios no se entienden como la historia de ese trabajador independiente de origen humilde que se hizo a sí mismo escalando posiciones sociales, ni tampoco como herencia o simple reproducción de la burguesía tradicional o lo que en Chile se llamaría los “hijitos de papá”* (Montero, 1996, pág.169).

Como bien se puede observar en los relatos presentados, de la misma manera que ocurrió con los dirigentes mayores, en los entrevistados más jóvenes no se manifestaron diferencias en relación a la situación ocupacional de las madres, ya que las menciones fueron casi inexistentes. Igualmente, en las escasas veces en que se hizo referencia, quedaba relegada a un papel secundario o de soporte emocional de la figura masculina, sin mencionar la posesión de algún tipo de título profesional o labor empresarial.

*“Mi papá era abogado y mi mamá nada, mi papá se empezó a enfermar, como era independiente, cuando uno trabaja como independiente, no gana (dinero), entonces, mi mamá fue el pilar de la casa mucho tiempo”* (E5, 47 años, SNA).

De las escasas menciones a la figura materna en los discursos de los entrevistados, se infiere de éstas un bajo nivel de escolaridad, puesto que en la generación más mayor, aun cuando las madres ocupaban un rol secundario y/o doméstico en el hogar, igualmente los entrevistados hacían notar en el discurso su elevada educación. Y de hecho, muy probablemente esto se destacaba porque en ese contexto analizado, muy pocas mujeres tenían educación superior, ya que los niveles de escolarización eran extremadamente bajos. Sólo para ilustrar, en 1945 tan sólo había 1588 mujeres que tenían educación superior (menos del 1% de la población femenina), cifra que es muy inferior a las 389.882 mujeres que sólo tenían educación básica y media de poco más de 2 millones y medio de mujeres (Pardo, 1988, pág. 47).

#### **4. Recapitulación**

A modo de síntesis, puedo afirmar que en términos generales, la élite empresarial analizada proviene de una posición social “alta” y “media alta”. Así, las actividades empresariales y profesionales en ambas generaciones se constituyeron en un factor relevante para posicionarse en sectores bien “acomodados” de la sociedad chilena desde mediados del siglo pasado, lo que es bastante más visible en el caso de las familias de los entrevistados de la SNA, cuyos padres, por lo general, también tenían patrimonio familiar asociado a la tenencia de fincas. También es cierto, que dicha condición llevó a varias

familias de los entrevistados a ver reducido significativamente su patrimonio por la reforma agraria.

Los padres de los entrevistados de la SOFOFA también tienen profesiones universitarias, de lo que se infiere un alto nivel educacional. Por ello, puede afirmarse que se trata de un grupo cuya cualificación y actividades son bien remuneradas, tal cual se dejó en evidencia en los testimonios de los entrevistados.

Esta posición social alta no se da en todos los casos de la generación más joven de los industriales, cuyos padres tienen actividades de menor ingreso, más propias de los sectores medios acomodados pero “independientes”, vinculados al comercio y la pequeña empresa.

<b>Posición social de la élite empresarial</b>				
	<b>Generación longeva SNA</b>	<b>Generación longeva SOFOFA</b>	<b>Generación joven SNA</b>	<b>Generación joven SOFOFA</b>
Cualificación	media	alta	alta	media
Ocupaciones y actividades	empresarios agricultores	profesionales liberales (medicina, leyes, comercio, etc.)	empresarios agricultores y profesionales	comerciantes, pequeños empresarios, funcionarios, empleados
Patrimonio	sí	no	sí	no
Lugar en estratificación	clase alta / media alta	clase alta / media alta	clase alta / media alta	clase media /media alta

Fuente: elaboración propia.

## CAPÍTULO VI

### SOCIALIZACIÓN POLÍTICA FAMILIAR Y ESCOLAR EN LA ÉLITE EMPRESARIAL

En este capítulo se analiza la “socialización política familiar” y la “socialización política escolar” de la élite empresarial. Para ello, siguiendo los postulados de Almond & Verba (1970), y también de investigadores más recientes como Jaime (2000), Trafimow & Wyer (1993), Whitefield & Evans (1999), y McDevitt & Chaffee (2002), se examina la transferencia intergeneracional de la “configuración ideológica” y de la formación cívica recibida por los entrevistados.

Es conveniente tener presente que la “socialización política familiar” y también de aquella producida en el contexto escolar, de acuerdo a la literatura especializada, han sido consideradas verdaderas “cajas negras” a la hora de determinar con exactitud cómo se produce el traspaso de normas, valores y posiciones políticas hacia los hijos (Jaime, 2000, pág. 89). De hecho, existe poca evidencia que muestre con claridad los efectos en los hijos de esta transmisión. Se trata, por cierto, de un fenómeno siempre “impreciso”, de transmisión “deliberada” y también “latente” (Maravall, 1978; McDevitt & Chaffee, 2002; Whitefield & Evans, 1999), que hacen difícil distinguir analíticamente su real impacto en el “contenido de las mentes de los ciudadanos” (Almond & Verba, 1970).

Aun así, pese a la dificultad de desentrañar sociológicamente estos mecanismos, la evidencia empírica sigue destacando el rol que cumplen las familias y, en especial, los progenitores en la transmisión de “afinidades políticas” a los hijos (Jaime, 2000; Braungart, 1971; Espinoza & Madrid, 2011). Es más, en este campo de investigación se ha llegado a hablar la existencia de una “ley de Mendel” (“Mendelian Law”) (Lane, 1959), sostenida en una sistemática herencia de padres a hijos de sus preferencias políticas. Y aun más, según algunos estudiosos, esto explicaría, por ejemplo, la estabilidad de los sistemas de partidos, cuya existencia se debería, en gran medida, a la continuidad generacional de preferencias partidarias (Percheron & Jennings, 1981). Así se refiere Robert Lane a la “ley de Mendel”:

“Loosely speaking, there are three ways in which a father lays the foundations for his son’s political beliefs. He may do this, first, through indoctrination, both overt and covert as a model for imitation, *so that the son picks up the loyalties, beliefs, and values of the old man*. Second, he places the child in a social context, giving him an ethnicity, *class position*, and community or regional environment. And, *he helps to shape political beliefs by his personal relations with his son by the way he molds the personality which must sustain and develop a social orientation*. The combination of these three processes produces the “Mendelian Law” of politics: the inheritance of political loyalties and beliefs” (pág. 502)<sup>28</sup>.

En efecto, como indica el mismo autor (1959), la transmisión de este tipo de preferencias políticas se realiza sobre la base de la “politización” que existe en los hogares. Es bajo

---

<sup>28</sup> Las cursivas son mías.

este supuesto que para determinar la “continuidad generacional”, se consideró apropiado incursionar en la dinámica política en el seno familiar de los entrevistados. Para ello, se trató de conocer cuál era la posición política de los padres, con el objetivo de identificar si existió transmisión de las afinidades ideológicas, o bien, si se produjo lo que Maravall (1978) denominó como “disentimiento político”, el que indica ruptura o desviación ideológica de las preferencias políticas de los hijos con respecto a las de sus padres.

Este objetivo de identificar la continuidad en las preferencias políticas, también busca discutir con la gran mayoría de la evidencia empírica sobre los estudios de cultura política en el país. Es estos, la posición política de los ciudadanos es bastante influyente en el conjunto de actitudes hacia el sistema político (Huneus, 1987 y 2003; Baño, 1993; PNUD, 2014; Manzi, y otros, 2003; Manzi, y otros, 2004; Navia & Osorio, 2015; Haye, 2009).

En el caso de los dirigentes jóvenes, de acuerdo a las hipótesis de investigación, primero se indagó si, efectivamente, se transmitió generacionalmente una suerte de “trauma sociopolítico” del período de la Unidad Popular. Luego, en los casos en que este existió, se puso interés en desentrañar los mecanismos de transmisión del “trauma” vivido por los padres, el cual es muy significativo en la formación de la cultura cívica de los entrevistados de menos edad.

Evidentemente, esta dimensión “sensible” en las trayectorias familiares y/o personales, no fue analizada en esta sección para los dirigentes de más edad, puesto que estos por su pertenencia a otra generación, vivieron esta experiencia directamente. De allí que lo más significativo sobre este asunto son sus *vivencias personales y/o familiares* durante los tiempos de la polarización, el gobierno de Allende y el golpe militar, lo que se analizará en el siguiente capítulo.

Es conveniente recordar al lector/a que, de acuerdo a la evidencia presentada en páginas anteriores, hablamos de un grupo en su mayoría conformado por entrevistados pertenecientes a un origen social “acomodado”, propio de un estrato social alto, siendo bastante menos los casos de participantes que provienen de “clase media” (fenómeno que sólo se dio en el caso de algunos padres de los dirigentes más jóvenes de la SOFOFA). Lo anterior, de todas maneras, tiene *una relación con las percepciones* de los entrevistados respecto de la experiencias traumáticas personales y de sus familias.

Se señala esto porque es relevante tener presente la “posición social” de los entrevistados, ya que al tratarse de un grupo con las características enunciadas, muy posiblemente ello tiene incidencia en las posiciones políticas de los padres. Algunos estudios avalan esta conexión entre características socioculturales de los familiares y su posición política. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso español y la socialización política de los líderes estudiantiles en contra del franquismo, en la cual la mayoría de los padres de los dirigentes pertenecían a estratos sociales altos y medio-alto (Maravall, 1978), lo que en esta investigación, se confirmaría o rechazaría conforme la evidencia se ponga “sobre la mesa”.

## 1. La socialización política familiar en los dirigentes mayores

### 1.1. La “cuestión política” en los hogares

Tal cual se indicó en páginas anteriores, el transcurso de los “años impresionables” (Sears, 1990; Easton & Dennis, 1970; Mannheim, 1958) de los entrevistados más longevos de ambas organizaciones empresariales, tuvo lugar entre mediados de la década del cuarenta y mediados de la década del sesenta. Por esto mismo, se trata de una socialización política familiar transcurrida, fundamentalmente, en un contexto político de menor polarización, lo que, por cierto, se refleja en el *bajo nivel de politización que existía en el hogar* según los entrevistados de este grupo de edad. Esta situación, no es muy distinta respecto de hallazgos de otros estudios de cultura política en los que se ha detectado una relación entre el “nivel de politización” en el hogar y el “bajo interés” que tiene la ciudadanía en la política. Así, por ejemplo, en países en los que la política no goza de un lugar prioritario para los ciudadanos, el nivel de la politización en los hogares también es menor (Jaime, 2000). Esta situación descrita, es precisamente lo que ocurrió con los dirigentes empresariales mayores, tal como lo manifiesta uno de los entrevistados:

“No se hablaba de política, no era tema, no tengo ningún recuerdo de la sobremesa hablando de política; no había militancia política de ningún miembro y no interesaba particularmente. Mi papá trabajaba en el comercio y la mamá estaba en la Cruz Roja, era voluntaria, y el papá trabajaba en una empresa mayorista, la Agencia Graham. Bueno, estoy hablando de los recuerdos que me llegan, aproximadamente en el año 1945, 1947, 1948, yo nací en 1941... ya en la universidad tengo más recuerdos, un poco más. Del 48’ hasta el 62’, la política no fue tema en mi casa” (E6, 77 años, SOFOFA).

En esa dirección, la mayoría de testimonios de los entrevistados de ambas organizaciones patronales, indican que el tema político en el hogar no era frecuente *ni tampoco muy relevante*. Incluso, según gran parte de los entrevistados, los temas centrales que siempre estaban presentes en las conversaciones familiares se relacionaban con el “trabajo”, la “familia” y la “empresa”. Las muy pocas excepciones a esta situación de baja politización en el hogar, son aquellas de algunos participantes que tenían parientes vinculados a la actividad política.

“(...) por el lado de la familia materna había un político. Mi abuelo era primo hermano de Sótero del Río, que fue Ministro del Interior del presidente Jorge Alessandri. En la casa de mis abuelos se hablaba de política y se discutía” (E28, 69 años, SNA).

Cabe señalar que esta mayor “politización” en el hogar a raíz de la presencia de familiares involucrados en política, es bastante frecuente según algunos estudios de socialización política, ya que, en ocasiones, la participación en los “asuntos públicos” de familiares incentiva conversaciones sobre política al interior de las familias. Así ocurrió en Chile, por ejemplo, con las juventudes militantes de la “nueva democracia” (1990 en adelante),

en la que se detectó que una gran mayoría de los dirigentes políticos señaló éste factor como muy importante para su propia motivación a participar activamente en política (Espinoza & Madrid, 2011, pág. 105).

Pero lo anterior constituye más bien una excepción, ya que, tal como bien enfatiza un entrevistado de la SOFOFA más arriba, el interés en la política *recién empieza a manifestarse en la década del sesenta*; percepción personal que, de algún modo, se confirma dentro de los escasos datos que existen sobre la cultura política de los chilenos durante este período (Huneus, 1987; Baño, 1993; Hamuy, 2000; Navia & Osorio, 2015).

Al respecto, en Chile, desde que se tiene registro, el interés en la política por parte de la ciudadanía siempre ha sido *bajo*, a excepción del interés que esta actividad suscitó bajo el gobierno de la Unidad Popular. Este bajo interés se manifiesta en diversos indicadores, como, por ejemplo, que hacia fines de la década del cincuenta, poco más del 50% de la población no se posicionaba políticamente (Navia & Osorio, 2015, pág. 122), cifra que comenzó recién a modificarse a mediados de la década del 60', con la consolidación del sistema de partidos de tres tercios (derecha, centro e izquierda) (Ruiz, 2005; del Campo, 1991). De hecho, la valoración positiva de los partidos, considerados como la "columna vertebral de la sociedad chilena" (Garretón, 1983), hasta 1973, fue *baja*. Predominaban los que estaban "en contra" de los partidos sobre los que estaban "a favor" (con la única excepción del partido Demócrata Cristiano) (Baño, 1993, pág. 16). Estas cifras no mejoran mucho en relación a la participación política, ya que a pesar de lo elogiado que ha sido el sistema de partidos chileno (Sartori, 1976), lo cierto es que ésta era de las más bajas de la región (Valenzuela, 1978; Lagos, 2016).

A raíz de lo anterior, también puede decirse que el *escaso interés* en la actividad política por parte de los padres de los entrevistados no es un fenómeno aislado, sino representa más bien una tendencia de la época. Es más, algunas cifras indican que casi llegando a la década del 60', en los sectores más acomodados de la población, como es el caso de los empresarios y también los profesionales universitarios, no existía una activa "implicación cívica"; la gran mayoría de estos sectores no se encontraban inscritos en los registros electorales aun cuando la ley lo permitía, lo que expresa una bajo "compromiso cívico" de aquellos que mejor posición social tenían en ese entonces (Briones, 2000, pág. 480).

### *1.2. Posición política de los padres*

A pesar de que la política no tenía una centralidad en el hogar de los entrevistados, lo cierto es que esta situación no significó necesariamente que los padres no tuvieran una posición política definida. En efecto, la mayoría de los padres de los dirigentes empresariales más mayores de la SNA se posicionaban en el *entorno ideológico de la derecha*. Este posicionamiento, en algunas ocasiones fue relacionado con la pertenencia al campo, en el cual la derecha era la posición política predominante, sobre todo en los sectores propietarios (Valenzuela, 1978; Avendaño & Escudero, 2016; Correa, 2005).

"Mi familia era muy de campo, así que es bastante... lo que pasa es que mi papá se murió cuando yo era muy joven, 11 años, después mi mamá trabajó para



poder sostener la familia desde que se murió mi papá, así que mucho tema político tampoco tuve, no tenía esa conversación papá—mamá, así que no tengo muchos recuerdos. Lo que sí en la casa de mi abuelo de repente se hablaba de política bastante, como gente de campo, bastante de derecha” (E1, 60 años, SNA).

Pues bien, como se vio en la sección anterior, la mayoría de los padres de los dirigentes entrevistados de la SNA están vinculados a labores empresariales agrícolas y constituyen por ello una verdadera minoría dentro de la población chilena de ese entonces. Se trata de un sector muy acomodado, con presencia de patrimonio y con tenencia de trabajadores, probablemente ubicado en el quintil de mayor riqueza del país. Por lo mismo, no sorprende mucho el aumento en el interés por la política y su posición ideológica más próxima a la derecha, ya que hacia fines de la década del cincuenta, la mayoría de quienes pertenecen a la “clase alta” del país, se identifican con este sector político (78%) (Valenzuela, 1978, pág. 40).

Entre los entrevistados sólo en dos casos sus padres no se identificaban con el sector de la derecha. En uno de ellos, el entrevistado enfatizó que sus padres eran “independientes” a favor del líder demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, sin ningún tipo de militancia ni simpatía por el Partido Demócrata Cristiano. En el otro caso, señaló que sus padres se identificaban con la izquierda, posición política sobre la cual se colige de sus palabras un *disentimiento político* respecto a la posición de los padres:

“Mis padres tenían una orientación de izquierda bastante notoria pero no eran activistas (...) claro que era un un socialismo antiguo, estamos hablando de mucho antes de 1989, o sea, *estamos hablando de una época que se veía que las ideas de izquierda tenían alguna posibilidad de existir en el mundo, pero después del año 89’, ya el mundo llegó a la conclusión de que ese ya no era el camino*, pero ellos eran mucho más antiguos que eso, entonces ellos tenían este “idealismo” por decirlo de alguna manera” (70 años, SNA).

En este punto es conveniente hacer la distinción entre posicionamiento político y “voto útil” (Baño, 1993), ya que también se presentó el caso de quien mencionó que sus padres siempre estuvieron identificados con la derecha, pero que habían hecho un “voto útil” a favor de Eduardo Frei en la elección de 1964: “(...) *mis padres eran personas de derecha, aunque siempre yo los molesté porque en la elección de Eduardo Frei Montalva votaron por él*”(E29, 63 años, SNA). Si bien este dirigente evitó mencionar las razones de este voto, muy probablemente éstas se relacionaban con impedir la llegada de Salvador Allende a “La Moneda” en las presidenciales del 64’. El voto útil fue un fenómeno que se produjo durante esta elección, pues el electorado de derecha se volcó masivamente a votar por la Democracia Cristiana para evitar la llegada de un presidente marxista al poder (Moulian & Osorio, 2014; Petras, 1967).

Cabe señalar que en el caso de los padres de los entrevistados de la SOFOFA, la posición política mayoritaria también fue la *derecha*, aunque en este grupo se observó un poco más de diversificación en las preferencias políticas, ya que hubo más casos de padres

identificados con el centro, representado por la Democracia Cristiana, y no por el Partido Radical.

“Mi padre estuvo muy metido en política, nunca en cargos parlamentarios ni nada, pero sí en el Partido Liberal. Yo fui muchas veces al Club de Setiembre y me afilié al Partido Liberal, entonces, mi papá también me llevaba a las reuniones” (E12, 74 años, SOFOFA).

“Bueno, en mi familia, es una familia que tenía una concepción que... conversábamos de temas políticos en la mesa, no mucho, mi padre tenía una sensibilidad demócrata cristiana, de mi época de estudiante de colegio, era una familia con una cierta sensibilidad social, con valores cristianos, católicos, yo me formé en colegio católico” (E3, 77 años, SOFOFA).

Tal cual se mostró anteriormente, los padres de los dirigentes de la SOFOFA son en su mayoría profesionales, en menor medida, empresarios. En cualquier caso, son personas con actividades laborales sumamente escasas para la época, que permitían tener altos ingresos económicos que los aproximaban bastante al sector de la “clase alta”, aun tratándose de sectores “no herederos” (Larrañaga, 2016; Martínez & Tironi, 1985; Beyer, 1997). Y, tal como muestra la literatura especializada en el caso chileno, hacia fines de la década del cincuenta, quienes ostentan una posición social alta o media-alta, por lo general, adhieren más a posiciones políticas de derecha y mucho menos de centro, tal cual ocurre con los padres de los entrevistados de la SOFOFA. Esta tendencia es incluso más nítida si se desagrega por el tipo de actividad laboral empresarial, ya que, por ejemplo, aquellas personas que son dueñas de grandes empresas adhieren en casi un 60% a la derecha y en un 17,6% al centro (Valenzuela, 1978).

Si bien varios autores han indicado que en Chile el sistema de partidos no tenía un carácter “clasista” fuertemente marcado –rasgo que comienza a consolidarse o manifestarse sólo a partir de 1970 (Baño, 1993; Valenzuela, 1978; Navia & Osorio, 2015)–, la verdad es que en el caso de los dirigentes entrevistados, sí se puede observar a muy “pequeña escala” una relación entre las determinantes sociales y la posición política, sobre todo por su identificación con el sector de la derecha (Lipset & Rokkan, 2001). Así, este hallazgo de alguna manera relativiza la evidencia que asocia una alta posición social y su preferencia por posiciones más “progresistas” (Lipset, 1970); evidencia que Maravall (1978) y Linz (1978) habían criticado en su momento por sus limitaciones.

### *1.3. La transmisión de valores*

La información producida muestra la presencia de una socialización política familiar relativamente “laxa”, menos influida por el contexto político. En definitiva, es una socialización producida la mayor parte del tiempo en la *antesala* de los “tiempos de la polarización”, tiempos en que la actividad política no era tan valorada por parte de la ciudadanía, lo que recién comienza a modificarse en la década del sesenta. De hecho, los datos expuestos sobre “desafección” hacia los partidos, permiten entender que la elección de dos presidentes con discursos anti-partidos durante este período no fue una mera

casualidad: el exdictador Carlos Ibáñez del Campo en 1952, cuyo símbolo de campaña era “la escoba”, la que sería usada para “barrer con los políticos y los partidos”; y luego, Jorge Alessandri Rodríguez, que se presenta como independiente de los partidos políticos, con un discurso tecnocrático que hacía gala de la eficiencia en la gestión gubernamental (Silva, 2010).

Aun así, y a pesar de esta situación de menor politización en el hogar, muchos entrevistados manifestaron haber recibido por parte de sus padres una entrega de *valores que se mantienen firmes actualmente en la “constelación” que define su cultura política*. Al respecto, parece que esto confirma la tesis de Inglehart (1991) y Schwartz y otros (2001), en la que se concede al aprendizaje temprano de valores una dimensión decisiva de la formación de la cultura política de las personas, y que además es duradera, tal como se puede inferir de algunos relatos de los entrevistados que presento a continuación.

“(…) la tendencia política de mis padres yo diría que fue muy marcada hacia la derecha y te la contesto al revés, bueno, ¿por qué se vinieron de España? oye, se vinieron generalmente arrancando. Yo no sé la historia específica de mi familia, pero arrancando de regímenes autoritarios o regímenes comunistas de la época<sup>29</sup> y eso te revela un poco por qué se fueron escapando, por lo tanto, siempre mi formación ha sido en base a un sistema de conservación de los valores, principios, libertad de pensamiento y libertad de vida, y eso hace de que uno aprende ese tipo de vida, de formación, de concepto y te lleva así siempre con la misma línea política...” (E21, 74 años, SNA).

“Se hablaba bien poco de política. Yo diría que mi padre, al contrario, siempre me dijo: “mira, evita meterte en un partido político”, ese fue su gran consejo y de hecho, yo no me metí nunca en un partido político, yo siempre... a ver, tengo mis ideas, por supuesto, y soy de las personas que cree que hay que ir a votar, que cree que hay que participar, pero mi papel está más bien en lo gremial que en lo político” (E19, 61 años, SOFOFA).

En los discursos analizados se muestra la presencia de transmisiones “deliberadas” y “latentes” por parte de familiares, sobre todo con relación a la conformación de valores de orientación *liberal*, como son las “*libertades individuales*” y la “*propiedad privada*” (Macpherson, 1997; Morlino, 2009), que son entendidos por los entrevistados como principios esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Esto último, corrobora la tesis de la “ley de Mendel” de Lane (1959), ya que la adquisición de valores provenientes de los padres es fundamental para la formación de la actual cultura política de los entrevistados. Por cierto, pudo observarse que esta “continuidad generacional” se presenta de manera similar en los dirigentes de ambas organizaciones estudiadas, sin diferencias marcadas entre ambos grupos.

Cabe mencionar que, desafortunadamente, no se cuenta con datos que permitan comparar los valores que tienen los entrevistados con los valores que predominan en la

---

<sup>29</sup> Aunque no lo menciona explícitamente, se infiere que el entrevistado se está refiriendo a la experiencia política de la Segunda República, que dentro de varias políticas sociales, también tuvo la experiencia de la reforma agraria aunque con muchísima menos intensidad que en el caso chileno (Gil, 1997).

sociedad chilena en el contexto analizado<sup>30</sup>. Sí puede afirmarse que al día de hoy, el valor de la “libertad”, fuertemente enfatizado en los discursos de los participantes, es un valor con menos preeminencia que el valor de la “igualdad”, que parece mostrarse más importante para los chilenos (WVS–MORI, 2018).

La “lealtad política” (*Political Loyalty*) transmitida, también puede operar en un sentido inverso, ya que tal cual señala el último entrevistado, este fue deliberadamente aconsejado a mantenerse distante de la participación política activa, por ejemplo, a través de la militancia en algún partido político, sin que ello implique necesariamente no tener ideas políticas propias o “compromiso cívico”. Lo relevante, en cualquier caso, es la “significación” que los entrevistados confieren al discurso de sus padres en la adquisición de determinados principios, que finalmente se traducen en contenidos que luego definen su *comportamiento político*, como pueda ser el compromiso cívico de ir a votar.

#### *1.4. Continuidad de afinidades políticas y “disentimiento político”*

Como se indicó previamente, la mayoría de las familias de los entrevistados vienen de una tradición política de derecha; posición política que fue heredada por la mayoría de los dirigentes empresariales que participaron en esta investigación. Es así que se logró detectar una verdadera “*continuidad generacional*” entre las afinidades políticas de los entrevistados y la de sus padres, ya que casi todos los participantes, tanto de la SNA como de la SOFOFA, se identificaron con la *derecha*.

Esta identificación en varios casos también se fundamentó, con el aprendizaje anterior de valores de “orientación liberal”, los que, como ya expliqué, fueron adquiridos tempranamente en el seno de sus hogares.

Esto último es interesante, ya que los valores adquiridos muestran su estatus de base y subyacen a otras dimensiones como la posición política. Esto, de algún modo, no difiere mucho de algunos postulados de la literatura especializada, la que asigna a los valores un lugar decisivo que formaría a las actitudes y también al comportamiento político (Tormos, 2012; Flores & Selios, 2013).

“(…) y yo prefiero un sistema administrado por una entidad que es regulada por alguien que es completamente independiente, y por eso yo me defino una persona más de derecha, menos estatista. Lo que yo he cambiado a mi manera de ver, es ir descubriendo, aunque suene pretencioso decirlo, *siento que he ido descubriendo es que los mejores caminos para una mejor sociedad son caminos basados en mayores grados de libertad individual*. Yo creo, y estoy cada vez más convencido de que las izquierdas, en general, los sistemas estatistas, lo que hacen es que tratan de atribuir a unos pocos, que son los líderes políticos, la capacidad de decidir bien por los demás. Y yo creo que eso no funciona, yo creo que la sociedad funciona mejor cuando cada uno decide por sí mismo y lo que de alguna manera está en la función política es velar porque existan reglas lo más parejas posibles para todos, existan limitaciones al uso del poder” (E3, 77 años, SOFOFA).

---

<sup>30</sup> Este tipo de estudios recién aparecen a nivel mundial con la primera encuesta de Inglehart el año 1981.

En efecto, la mayoría de los entrevistados manifestó sentirse más identificado con la derecha, reproduciendo así las mismas afinidades políticas de sus padres. No obstante, se logró distinguir situaciones de “disentimiento político”, siendo en verdad muy pocos casos. Este distanciamiento de la posición política de los hijos respecto de la de sus padres, se dio sobre todo en aquellos sujetos cuyos padres se posicionaban más con el centro y la izquierda. Tal como explica el sujeto entrevistado cuyos padres eran simpatizantes del centro, el viraje es hacia la derecha: *“como usted me va a preguntar si pertenezco a un partido político, yo le voy a decir, yo soy militante de la UDI, efectivamente, yo soy militante (...) siempre he estado al lado de la UDI y milito desde la reinscripción de militantes, es decir, desde el año pasado. Hace poquito, pero siempre he estado al lado de ellos. Yo he evolucioné del 70’ al 73’, de las juventudes demócratas cristianas a ser hoy día militante de la UDI. Un gran cambio, pero uno va madurando”* (E30, 62 años, SNA).

Para finalizar este apartado, puedo indicar que los exiguos casos de “desviación ideológica”, difieren un poco de algunos hallazgos de la literatura especializada, que suele concluir que los hijos cuyos padres se posicionan en el centro son menos disidentes. Las entrevistas realizadas en esta investigación ponen de manifiesto que, más bien, los hijos disienten de sus padres cuando estos se situaban en el centro o la izquierda, y lo hacen para virar a la derecha. Asimismo, se ha indicado que la educación es un importante factor para tomar distancia ideológica de las posiciones parentales, situación que tampoco se dio especialmente en la generación analizada, ya que, en general, la transmisión de posiciones políticas coincidentes con la derecha fue bastante fluida y positiva (Jaime, 2000, pág. 88).

En relación a la socialización política con participación femenina, lo cierto es que se puede indicar que esta es prácticamente *inexistente*. Así, del mismo modo que ocurrió con las muy escasas menciones al rol de las madres respecto de la actividad laboral, en el caso de la continuidad de afinidades políticas la situación es similar. Éstas se encuentran absolutamente invisibilizadas y no son destacadas en el “orden del discurso”.

Lo anterior no sorprende especialmente, porque el género femenino en esta época de la historia de Chile ocupa un papel subordinado y secundario. Se trata de una sociedad con predominio de valores masculinos (Castillo, 2006), ya que, por ejemplo, hacia fines de la década del cincuenta, más del 50% de la población creía que las mujeres no debían participar en política, cifra que recién comienza a disminuir a mediados de los años sesenta, llegando a 28,8% (Hamuy, 2000, pág. 497). Lo anterior, da cuenta de una sociedad tremendamente “masculinizada”, en la cual, y a pesar de que la mujer había obtenido el derecho a voto en 1949, no parecía preparada para la profundización de la democracia con la inclusión del género femenino, de lo que infiero que esta situación probablemente se replicaba en los hogares de los entrevistados.

No hay que perder de vista que en el contexto cultural en que se desarrolla la socialización política familiar de los entrevistados, es la figura masculina representada en el “padre” y el “abuelo”, la que tiene mayor preponderancia en detrimento de la mujer, tal cual lo muestran los discursos analizados. Esta no es una peculiaridad propia del caso chileno, sino que más bien se trata de un fenómeno global. El lector/a debe tener presente que en este contexto las sociedades, en general, tienen aún una marcada presencia de

“colectivismo” y valores de “supervivencia”, en las que el desarrollo socioeconómico está forjando las bases materiales para producir una mayor democratización, que llegará luego con la “tercera ola” (*third wave*). Esto traería consigo la promoción de valores de “autoexpresión”, que darán a la mujer mejores condiciones de igualdad, sobre todo a través del derecho (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel; cfr., Morán, 2011).

## **2. La socialización política familiar en la generación más joven de la élite empresarial**

### *2.1. La “cuestión política” en los hogares*

La “socialización política familiar” de los entrevistados más jóvenes de la élite empresarial, transcurre, aproximadamente, entre mediados de los años sesenta y fines de los años ochenta. Hablamos de contextos diferentes, definidos por el intenso y veloz proceso de polarización generado por el fenómeno de la “ampliación de la democracia”, la “experiencia del socialismo” bajo el gobierno de la Unidad Popular, el golpe militar y el cambio de régimen político desde una democracia a una dictadura. Se trata, entonces, del desarrollo de una socialización política producida bajo el contexto de polarización existente en el país, contexto que comienza recién a modificarse o debilitar sus rasgos más violentos en los últimos años del régimen militar, tras la moderación de los extremos políticos y el predominio del centro (Huneus, 1987; Baño, 1993; CEP, 1988).

Ciertamente, la “polarización” en el país no desaparece inmediatamente después del quiebre institucional, y esta tiene una clara expresión en la “politización” de los hogares de los entrevistados. Así, a diferencia de la generación más longeva y menos politizada, abordar la “cuestión política” en los hogares de los entrevistados más jóvenes no sólo *fue más frecuente*, sino que también tuvo un carácter más “*intenso*”, situación que se dio con mayor énfasis en el caso de la SNA. Pudo observarse un pequeño segmento de líderes industriales que expresaron que la política en sus respectivas familias no adquirió un carácter tan definitorio.

La politización familiar de los entrevistados va en la misma línea de algunas actitudes políticas de la población antes del quiebre democrático, como es el “interés” que tiene la ciudadanía en la política, que hacia el último año de gobierno de Eduardo Frei Montalva aumenta a poco más de un 40% (Baño, 1993). Como contrapartida, la “apatía política” durante el gobierno de Allende desciende desde casi un 30% a un 8%, lo que confirma el creciente proceso de movilización política y la relevancia que adquiere esta actividad para la sociedad chilena en ese entonces (Huneus, 1987). Sin embargo, también es cierto que este interés en la política cae en forma abrupta durante la dictadura militar, ya que desde 1987 hasta 1989<sup>31</sup>, desciende a menos de un 35% (Baño, 1993), lo que también puede ser comprendido como uno de los efectos nocivos del régimen autoritario, que no sólo clausura la actividad política formal y además reprime

---

<sup>31</sup> Los datos sobre cultura política durante la dictadura sólo se comienzan a elaborar a partir de 1986. No existen datos entre septiembre de 1973 hasta la fecha mencionada (Huneus, 1987). Esto ocurre porque las dictaduras no facilitan el trabajo de producción de información con fines de investigación (Inglehart, 1988).

fuertemente a sus militantes, sino que también tiene un discurso crítico hacia los políticos, culpándolos de “destruir la democracia” (García González, 2006; Huneus, 2003).

Esta disminución sobre el interés en la actividad política que se da durante la década de los 80’, también se manifiesta en los hogares del segmento más joven de la SOFOFA, cuyos entrevistados, como ya se ha señalado, recuerdan haber percibido una *menor politización* en sus familias. Así lo expresa un dirigente de la SOFOFA:

“Hubo una época donde no se habló de política, donde nadie decía nada, la gente sólo trabajaba, por ejemplo, mis padres se esforzaron en darnos una educación universitaria a nosotros, y eso de alguna manera llegó a la forma de conversar las cosas, de ver la vida, de “buscarse la vida” (E26, 41 años, SOFOFA).

En contraposición a estas excepciones, entre los diversos factores que podrían explicar la “politización” de la mayoría de las familias de los entrevistados, fueron mencionados la presencia de familiares vinculados a los asuntos públicos, y también la “*situación política*” del país: expresión que hacía alusión a la polarización, la experiencia familiar bajo el gobierno de Allende, el golpe militar y la dictadura militar.

En efecto, como han mostrado otros autores, la participación política de miembros familiares directos tiene un impacto significativo en la formación de la cultura política de algunos ciudadanos (Cross & Young, 2008; Maravall, 1978; Espinoza & Madrid, 2011; Asún, 2004) e influye decisivamente en la motivación para implicarse políticamente. Ello queda demostrado en varios de los testimonios recogidos, tanto del segmento de más edad como en el de los miembros más jóvenes de la élite empresarial.

“Yo diría que la inquietud nace desde muy joven dentro de la familia, porque como le decía, las conversaciones y los temas políticos eran recurrentes y yo creo que fue muy influyente mi padre en generarme esa inquietud, por *la situación del país*, por contribuir con el país, por preocuparse por la cuestión pública, y a eso sumo que al incorporarse a la vida política activa uno va conociendo personas que de alguna manera se van constituyendo en una suerte de referentes y con ellos una motivación adicional a la que uno traía desde la infancia o desde la juventud” (E9, 56 años, SNA).

“(…) por razones familiares he tenido también varios parientes vinculados en diferentes ámbitos del servicio público: gremial, sindical, político, con lo cual me era cercano el tema político” (E10, 40 años, SOFOFA).

De los relatos se puede inferir que la implicación política de los familiares incide fuertemente en la adquisición de *valores democráticos* como la “*participación*”, tanto en la referida a una concepción weberiana de “la política” (asociada a la distribución de poder del Estado), como también con aquella relacionada con la actividad empresarial o gremial.

Por otra parte, como se indicó, el nivel de politización del hogar también fue relacionado con la “situación política” del país. Sobre este aspecto, sucede un fenómeno

bastante interesante en relación a la función que cumple la “familia” en el marco de ambos contextos políticos en el país. Esto se examina a continuación.

## 2.2. Posición política de los padres

Se ha destacado en la literatura que la “familia” ocupa un rol fundamental ante el desarrollo del contexto político, sobre todo cuando este tiene un carácter “adverso”. Así, esta estructura, en determinadas circunstancias, puede cumplir funciones de “neutralización” de las influencias políticas externas (Lane, 1959; Jaime, 2000; Maravall, 1978). De esta manera ocurrió, por ejemplo, en el caso chileno y español respecto de otros grupos socializados en contextos políticos autoritarios. En esa dirección, tal cual muestran Cornejo y otros (2013), distintas generaciones de chilenos socializados políticamente antes de la dictadura y durante este período, tuvieron metafóricamente en la familia una suerte de “paraguas” que sirvió de protección respecto de la violencia política vivida bajo el autoritarismo; situación muy similar a la socialización que tuvo la élite de dirigentes estudiantiles durante el franquismo que estudia Maravall, en la que, las familias de oposición al régimen de Franco jugaron un papel fundamental en “neutralizar” el carácter coercitivo de la dictadura española.

En el caso de los entrevistados más jóvenes de la élite empresarial chilena sucede algo un tanto parecido, ya que las familias proporcionan una especie de “paraguas” o “burbuja” de resistencia respecto de la situación política bajo un contexto adverso para ellos, representado por el gobierno de la Unidad Popular. Se observaron varios casos similares de entrevistados que mencionaban situaciones conflictivas en las que sus familias ejercieron una función de protección respecto de algunas situaciones de violencia política de ese entonces (Linz, 1978).

Esta “resistencia” o “protección” respecto del contexto en que se desarrolla el gobierno de la Unidad Popular está directamente relacionada con la *posición política* de los padres de los entrevistados, la cual, en la gran mayoría de los casos de la SNA, corresponde a la *derecha*. Esto coincide bastante con la literatura especializada que señala que quienes se posicionan en la derecha, son los que más apoyaron cívicamente el golpe militar de 1973.

“Entonces yo crecí en el ambiente materno, en la familia materna, ahí crecí yo. El ambiente en que se agradecía mucho “el golpe”, que se quiere trabajar, que se quiere tener la certeza del derecho de propiedad, etcétera. De hecho, a mi abuelo sí le alcanzaron a expropiar 200 hectáreas, entonces... pero afortunadamente de ahí le iban a expropiar todo el resto y no fue” (E24, 48 años, SNA).

“Siempre hemos mantenido la independencia. Siempre con la derecha, mi papá votó por Frei una vez, pero siempre más tirado a la centro-derecha. Mi madre era más extremista, más tirada a la derecha, muy preocupada de la estabilidad, de la tranquilidad del país y todo el cuento, y se sintió tranquila con un gobierno militar” (E5, 47 años, SNA).



“Algunos recuerdos de mi papá viendo las noticias, escuchando a Don Augusto Pinochet hablando y él muy comprometido o muy de acuerdo con las opiniones del presidente Pinochet, de la necesidad de levantar el país, de reconstruir el país, de los errores de los políticos. La típica frase de Augusto Pinochet donde les hablaba a los “señores políticos” como en el fondo, de alguna manera, enrostrándoles lo culpable de lo que había ocurrido en el país” (E14, 51 años, SNA).

En los entrevistados más jóvenes, la *posición social* de las familias tiene incidencia en las *orientaciones políticas de los padres*. Incluso, así lo menciona un entrevistado, quien ve en el gobierno de Allende la posibilidad de experimentar familiarmente, parafraseando a Tezanos (1994), una especie de movilidad social “descendente”: “*mis padres fueron de clase media alta siempre y podían bajar clase media baja, ese era el miedo, y no querían volver a la clase media baja, eso es un poco el tema, no estaban dispuestos a que todo lo que se había ganado en este país, volver atrás, no estaban dispuestos, esa es la sensación que yo vi en ellos y sí, me marcó*” (47 años, SNA).

Pues bien, la evidencia empírica sobre las determinantes sociales y las posiciones políticas durante esta época no es muy distinta a la mostrada en el apartado referido a los dirigentes más mayores. Efectivamente, la sociedad chilena durante este período se encuentra dividida en tres sectores políticos claramente definidos: la izquierda, el centro y la derecha, los que conforme se acerca el gobierno de la Unidad Popular, van adquiriendo un *carácter clasista cada vez más marcado* (Lipset & Rokkan (2001): los sectores populares y obreros comienzan a identificarse cada más con la izquierda; los sectores medios con el centro y la clase alta, en mayor medida con la derecha (Baño, 1993; Valenzuela, 1978; Navia & Osorio, 2015; Huneus, 1987; CEP, 1987b).

Los sectores de clase alta —como es el caso de los padres de los entrevistados— durante esta época rechazan en masa la opción del presidente Allende en el poder, ya que la gran mayoría (76,6%) no habría votado por el candidato socialista bajo ningún concepto (Valenzuela, 1978, pág 124), lo que sitúa a este sector como opositor al gobierno de la Unidad Popular. Y ciertamente, esta situación sociopolítica grafica con mucha claridad la “cuestión política” en el hogar de los entrevistados de la SNA, ya que las familias son opositoras al gobierno de Allende y, en particular, al proceso de reforma agraria, teniendo que proteger a sus descendientes de la compleja situación a la que se enfrentaba el país, y que aquejaba, especialmente, a todos aquellos que tenían grandes extensiones de fincas.

En todo caso, el posicionamiento político hacia la derecha de los padres de los entrevistados y su resistencia al gobierno popular y apoyo a la dictadura militar, no es un fenómeno singular, ya que se encuadra absolutamente dentro de las tendencias generales de la cultura política nacional de los chilenos de ese entonces. En ese tenor, quienes han estudiado este período, señalan que uno de los grupos sociales que más apoyaron el golpe militar es el de los que indican tener mejor situación económica (Huneus, 2003, pág. 37). Y respecto del apoyo cívico al régimen militar a mediados de los años ochenta, este sólo se produce por una minoría que no llega al 7%, mientras más del 60% de la población sí apoya la democracia como régimen. No obstante, la posición política que menos apoya

la democracia es la derecha, con un 54%, en contraposición a la izquierda y al centro, con un 92% y un 90% de apoyo, respectivamente (Huneus, 1987, pág. 56; CEP, 1987a y 1987b).

Lo anterior confirma la importancia de la posición política en el caso chileno, y en particular de los entrevistados más jóvenes de la SNA. Aunque también es cierto que, como se mostrará a continuación, la posición ideológica de los padres de los entrevistados de la SOFOFA presenta algunos matices de diferencia respecto a la de sus pares agrícolas.

Definitivamente, acá también se puede apreciar cómo las determinantes sociales tienen relación con las preferencias ideológicas de los progenitores, confirmando así los postulados de Lipset & Rokkan (2001), Lipset (1970), Díez (2011) y Briones (1963), ya que al tratarse de padres con actividades laborales de *menor nivel educacional* (por tanto de menor ingreso) (Beyer, 1997), ubicados socialmente en una posición más cercana a la “clase media tradicional”, esto también tiene su expresión en la posición política, *donde la derecha está presente* pero comparte su dominio con el *centro*.

En tal sentido, la orientación política de los padres del grupo industrial es un tanto característica de la época. Se trata de una situación típica de la sociedad chilena de ese entonces, ya que la creciente presencia de grupos medios con algún grado de acomodamiento (Martínez & Tironi, 1985; Cerda, 1998), tiene su correlato en una *mayor preferencia electoral por el centro*, e incluso en los partidos de este sector político.

De hecho, si se profundiza, desde una perspectiva más analítica esto se puede apreciar en la pérdida de importancia del Partido Radical, que pasa de 27,7% de los votos durante el gobierno de González Videla (1946–1952) hasta descender a un 3,7% en 1973. Su lugar en el centro, es reemplazado por el partido de la Democracia Cristiana, que sube de 3,9% en 1952 a un 42,3% en 1965, misma fecha en que la derecha llegaba a 12,5%. El lector/a no tiene que olvidar que esta situación se dio, entre otras cosas, porque la mayoría de los votos de la derecha se traspasaron al centro para evitar el triunfo de Salvador Allende (Moulian, 1994; Garretón & Moulian, 1985; Moulian & Osorio, 2014; Petras, 1967).

Es importante destacar que en la antesala de la elección presidencial de 1970, los grupos medios –al igual que los sectores de clase alta– presentan un fuerte rechazo al candidato socialista. Quienes se identifican con este sector manifiestan un 66,4% de rechazo al representante de la UP, cifra que disminuye a menos de un 40% en el caso del candidato Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic, que tiene un programa de reformas parecido al del líder socialista (Huneus, 2003). Esto no es muy de extrañar puesto que, por ejemplo, la Democracia Cristiana –partido que representaba a los sectores medios– había obtenido mayoría parlamentaria en 1965, lo que había propiciado la posibilidad de optar por el “camino propio” para hacer las reformas bajo su gobierno, produciendo con ello el efecto de “doble centrifugación” al que se ha hecho mención.

Por tanto, nos referimos a sectores sociales moderados pero reformistas, inspirados en la fórmula del “gradualismo”, ajenos a la alternativa revolucionaria y la “solución autoritaria”. Incluso, hacia finales de la dictadura militar, esta actitud política proclive al cambio en los sectores de centro se mantiene, solamente que se moderan aún más los medios para conseguir tales fines, todo ello bajo una cierta “ética de la responsabilidad” (Weber, 2001). Pero, en verdad, esto es transversal al entorno ideológico

ya que, en general, hay más moderación, lo que se manifiesta en un rechazo al empleo de la violencia y un rechazo a la alteración del orden (Huneus, 1987; Baño, 1993).

“Mi familia, como te decía, estaba en contra del régimen militar. Mis padres eran de tendencia política de centro, de centro “moderado”, lo que pasa es que en ese tiempo no habían muchas tendencias. Yo te hablo del 73’ para adelante. Había una tendencia no más: o de oposición o a favor. No había mucho más. Y antiguamente, si tú vas un poco más para atrás, te encuentras con los mismos tres tercios que tenemos hoy en día: tenemos el centro, con la Democracia Cristiana, un partido tremendamente importante; la izquierda y la derecha. Y la alternancia siempre fue centro, centro–izquierda, y cuando se caían, a la derecha, pero era repoco (...) *por eso, como te digo, en mi caso, era más bien neutral, pero más bien con un sesgo democrático, obviamente... seguramente les habría gustado más un gobierno democrático*” (E17, 49 años, SOFOFA).

Cabe añadir que las posiciones políticas no desaparecen durante la “experiencia autoritaria”, sino que más bien, como indica este último miembro de la élite, éstas pasan a situarse en una dicotomía: bien de apoyo al régimen de Pinochet o bien en contra de la dictadura militar. En esa línea, los estudios de cultura política señalan que la ciudadanía continúa distinguiendo las posiciones ideológicas en el “espacio político”, no obstante, lo que ocurre es que las posiciones tanto de izquierda, centro o derecha, terminan siendo orientativas del apoyo al régimen militar o del apoyo a la democracia (Huneus, 1987; Baño, 1993; CEP, 1987a y 1988). Esto último, también se puede colegir del testimonio del siguiente entrevistado:

“(...) de mi familia, tengo como dos vertientes porque mi papá de chico participó en la Democracia Cristiana, fue bastante activo políticamente hablando, y del lado de mi madre, más bien de una tradición de derecha (...) de mi familia, eran mucho de discutir temas políticos, era como... en el contexto del colegio alemán éramos una excepción, porque en la mayoría en el colegio alemán estaban a favor del régimen de Pinochet, nosotros estábamos en contra” (E11, 43 años, SOFOFA).

Por cierto, es relevante recalcar que en este grupo no se detectó la presencia de familiares con posición política de centroizquierda o de izquierda, lo cual también debe destacarse, ya que se trata de un sector político con vocación de cambio social (Moulian & Osorio, 2014; Moulian, 1994). De esto se podría inferir *a priori* que las familias de los entrevistados tienen actitudes políticas “conservadoras” (Jost y otros, 2003; Manzi y otros, 2013), sin embargo, la verdad es que durante esta época, el cambio social no es “patrimonio” o “derecho natural” de la izquierda. Esto es así porque el partido más importante del centro también es un sector que promueve el cambio político y económico. Ya mencioné que había una diferencia bastante relevante en “la forma” de conseguir dichos cambios. Hay que tener presente que la “Revolución en Libertad” era una especie de “reformismo avanzado” que se levantaba contra las ideas de cambio más profundo que se promovían desde sectores de izquierda más radicalizados, que adherían

discursivamente tanto al reformismo como también a la “revolución”, medios que también consideraban la violencia política como legítima para producir la transformación social (Gazmuri, 2003, pág. 336; Arancibia, 2001; Arrate, 1985).

### 2.3. La transmisión de valores

Como indiqué más arriba, en los dirigentes empresariales más jóvenes, por lo general, la transmisión de valores democráticos o de “autoexpresión” se produce tempranamente, los que de acuerdo con algunos estudiosos de este fenómeno, efectivamente, se desarrollan con mayor intensidad y rapidez en los sectores con elevada posición social, élites o como los denomina Juan Díez (2011) grupos de “centro social” (Díez, 2006, 1992 y 2011; Inglehart & Welzel, 2006; Lipset, 1970). Se infiere que esto es precisamente lo que sucede en el caso de las familias de los empresarios, ya que aún cuando los sectores altos en el país no estaban muy implicados en política a mediados del siglo pasado, toda la evidencia recogida apunta que a partir del proceso de polarización y movilización política esta situación se comienza a modificar.

Es por lo anterior que se puede decir que son familias más “politizadas” en comparación con la de los entrevistados más mayores, lo que también se puede observar en la transferencia deliberada de valores de padres a hijos. El desarrollo de estos valores se asocia, fundamentalmente, con la *implicación* en los “asuntos públicos”, así como también con las ideas de “*libertad individual*” y de “*libre elección*”; ideas que son parte del acervo cultural del liberalismo político (Morlino, 2009; Dahl, 2017).

*“Además de la influencia que tenía de mi padre que siempre era muy “pro-libertad”. Yo soy muy amante de la libertad de las personas, encuentro que después del amor lo más importante es la “libertad”, entonces, todo lo que me ancle a las políticas donde alguien me tiene que decir lo que tengo que hacer, “me mata”, y ahí es donde yo soy alejado de que el Estado influya en la vida de la gente. Yo creo que tiene que regularla, pero esa posesión de influir y que la gente pierda su libertad en todo sentido, es lo que hace que yo tenga una conducta de centroderecha en mi visión de vida, entonces, determinados liderazgos siempre influyen”* (E27, 48 años, SNA).

*“Yo te diría que la otra condición que sí siempre se dio (en mi familia), era un bien que era intransable —uno podía estar políticamente de acuerdo— era la “libertad”, la libertad de poder hacer lo que uno tenía ganas de hacer y eso se contraponía con gobiernos más autoritarios y otras veces con esquemas más regulatorios, con un Estado que te decía “como hacer las cosas”, entonces, en mi familia siendo “socialistas de derecha”, no hay acuerdo ni por lo uno ni por lo otro, es: “déjenos ser a nosotros, déjenos crear, déjenos funcionar, déjenos trabajar”* (E20, 57 años, SNA).

Pero también se ha dilucidado que estos valores liberales son muchísimo menos intensos en un segmento de entrevistados jóvenes de la SOFOFA, lo que siguiendo el esquema de análisis que ha orientado este trabajo, parece estar relacionado con la posición social de

las familias de origen, que carecen de patrimonio económico y no tienen un elevado “capital cultural”. En consecuencia, los valores más destacados por los entrevistados de este segmento son propios de las capas medias de “buen pasar” (Tezanos, 1994), con una orientación más “materialista” o de “supervivencia”, como son los valores del “esfuerzo”, el “trabajo” y el “mérito”, este último como medio necesario para alcanzar una mejor situación social (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel, 2006; Martínez & Tironi, 1985).

“Hubo trabajo, hartó [mucho] trabajo, siempre hubo mucho trabajo, entonces, si tuviera que pensar qué me marcó, que quizás que vi que había más trabajo, entonces ahí me empezaron a enseñar y a pedir que los ayudara... me llevaban con ellos al local, pero eso de durante el gobierno militar” (E7, 46 años, SOFOFA).

Antes bien, así como se presentó una transmisión familiar “deliberada” de valores democráticos y algunos de “supervivencia”, lo cierto es que también en este grupo se produjo una transmisión muy potente de las experiencias familiares negativas vividas durante el gobierno de Allende. Esto es analizado en el siguiente apartado.

#### *2.4. La transmisión del “trauma sociopolítico”*

La referencia a la “situación política” del país fue una de las expresiones verbales más mencionadas en los testimonios de la gran mayoría de los entrevistados. Estas referencias dan cuenta de una socialización política especialmente penetrante en relación a la “experiencia socialista” de la Unidad Popular, situación que, por cierto, se da con mucho más ímpetu en el grupo de dirigentes de la SNA.

En efecto, las imágenes o representaciones que tienen los entrevistados sobre este momento histórico *están profundamente marcadas* por las experiencias que tuvieron sus familiares respecto de situaciones de “violencia política”. En estas circunstancias, según los discursos analizados, no solamente estuvo en riesgo el patrimonio familiar a raíz del curso de las reformas (particularmente, la reforma agraria), sino que también estuvo en peligro la propia *supervivencia física* de las familias, las que muchas veces se veían expuestas personalmente a la defensa de los campos en contra de los beneficiados por la reforma, muchos de ellos partidarios del gobierno de Allende. En tal sentido, no resulta una exageración señalar, siguiendo a Arnoso, Cárdenas & Páez (2012), que “*el impacto de dicha violencia se extiende, incluso, hacia las generaciones siguientes que no vivieron directamente la experiencia represiva*” (pág. 7).

Es así que las imágenes que tienen los entrevistados sobre el gobierno popular se dividen en “transmisiones directas”, ejercidas en forma deliberada por sus padres, aunque también por “recuerdos”, la mayoría de ellos un tanto difusos sobre acontecimientos vividos en la infancia. Por cierto, todo este contenido, tanto el transmitido como el reconstruido social y particularmente a partir de las propias experiencias (Aguilar, 2007), está muy marcado por sentimientos negativos y recuerdos como el “dolor”, “temor” y “preocupación” de los padres, sobre todo por la situación de violencia política; también

fue subrayada la sensación de “caos social” y la sensación o transmisión parental de un “país profundamente dividido” durante la Unidad Popular.

“(…) Y yo cuando niño también, yo tenía que dormir en la tina [bañera] para que las balas no me llegaran, mi madre estaba embarazada, y con una metralleta llegaban los partidistas del gobierno de entonces, y la pasamos muy mal. Yo tengo súper malos recuerdos de esa época donde las casas se tomaban, fue bastante doloroso para la vida rural, había mucha libertad en la época de la reforma agraria y gente armada que podía hacer lo que quisiera...

**Entrevistador ¿esos recuerdos de la reforma agraria le influyeron en su actual forma de pensar? R:** Indirectamente, a través de mi padre, porque yo en esa época tenía tres años, entonces, no lo recuerdo bien. Si me recuerdo cuando estaba cuando niño yo no sufrí tanto, pero sí mi padre sufrió bastante porque le costó convivir con eso, porque estaba sólo contra todo el mundo que se tomaba los campos” (E27, 48 años, SNA).

“(…) y desde que yo tengo uso de razón, o desde el primer recuerdo, porque yo nací en Santiago y viví en Santiago, yo nací el 70’. Y el primer recuerdo que tengo más o menos claro de acá, es estar escondido para el golpe de 1973, estar escondido en una azotea en la casa de una amiga, ¿por qué? porque mi papá al ser oficial de la Fuerza Aérea y al ser edecán del General Leigh, o sea, obviamente nuestra familia podía ser blanco” (E24, 48 años, SNA).

“¡Qué pregunta! los recuerdos que tengo, sin dudas, son recuerdos complicados, de un país muy quebrado, muy dividido (...) bueno, viniendo de una familia agrícola, de agricultores, le insisto, no era demasiado consciente pero sí tal vez en el mismo período, posteriormente, he tenido una influencia de lo que sufrió mi familia, las expropiaciones a nuestro entender injustas, en el fondo de los campos, de las dificultades cuando justamente provengo de una familia de muchos hermanos... entonces, recuerdo a mi madre y a mis hermanos mayores repartidos en distintas partes haciendo cola [fila] por los alimentos básicos, entonces, de alguna manera había un poco de *trastocación* del devenir normal de cualquier familia en pos de conseguir cosas básicas, el papel confort [higiénico], no sé pues, los tallarines, el aceite, cosas tan básicas como esas que, en verdad, no eran de fácil acceso” (E14, 51 años, SNA).

“Tengo recuerdos de parientes, de mis padres, que muchas veces tuvieron en mente irse del país. Algunas amistades así lo hicieron, mis padres decidieron quedarse en Chile aun cuando yo tengo recuerdos que no pocas veces pensaron en dejar el país por la situación que se vivía, y más que por la situación que se vivía, por las expectativas de lo que iba a ocurrir con el país con ese gobierno. *Yo creo que eso fue justamente un elemento que en uno influye, las decisiones que toma posteriormente*” (E9, 56 años, SNA).

Esta socialización política “extraordinaria”, difiere de la de cualquier régimen con ausencia de violencia política de esta magnitud (Linz, 1978). También, este fenómeno se puede apreciar en otros estudios de socialización política como el de Maravall (1978) o

el de Miguel, Castilla & Cäis (1994), quienes muestran el carácter “complejo” que tiene en las familias las situaciones de violencia política, como fue el caso de la “guerra civil” española. Y si bien es cierto que en Chile el conflicto político y social estuvo muy lejos de acercarse a lo que se podría denominar como “guerra civil” (Huneeus, 2003; Garretón & Moulian, 1985; cfr. Guzmán, 1991; cfr. Arancibia, 2001; cfr. Góngora, 1986), lo cierto es que igualmente a partir de la difícil situación que vivieron algunos actores, se puede hacer un símil con los entrevistados de esta investigación. La situación traumática aparece prácticamente en todos los relatos de los afectados en forma muy intensa, marcando un antes y un después en la vida familiar.

A continuación, se presentan dos extractos de líderes estudiantiles que entrevista José María Maravall, los que permiten hacer una breve comparación con lo que han señalado algunos de los entrevistados en esta investigación.

“A mi padre le pusieron ocho penas de muerte cuando los “nacionales” entraron en Murcia. Se lo llevaron de Murcia y le tuvieron mucho tiempo encarcelado. Mi madre se solidarizó con él. Tenían dos hijas, que iban por delante de mí, que mi madre se las llevó con ella a la cárcel. Mi madre era de carácter fuerte y orgullosa y no admitía ninguna clase de ayuda de ningún tipo. Cuando por fin mi padre pudo salir dejaron esas tierras y emigraron a Andalucía. En un plazo de una semana murieron las dos niñas porque en la cárcel cogieron algo... es decir, que son gente que sufre las represalias de la Guerra Civil, que en cierta medida destrozó sus vidas (...)” (Maravall, 1978, pág. 198)

“Mi padre había sido anarquista. Estuvo escondido tras la guerra, pero por una declaración le cogen. Se pasó dos años en la cárcel. Después de aquello fue una odisea, mi padre nunca conseguía trabajos fijos. Por dos veces, consiguió estar empleado en uno de esos colmados bares, ¿los recuerdas? Murió cuando yo era muy joven y me tuve que ir a vivir a casa de una tía en Madrid. *Empecé a trabajar...por supuesto llegue a tener opiniones muy firmes*. Tuve problemas en el colegio debido a esto...” (Maravall, 1978, pág. 199).

Como es posible dilucidar, tanto en los relatos del segmento joven de la SNA como también en el caso de los testimonios recogidos por Maravall, las experiencias intensas vividas por los padres tienen un impacto significativo en la vida personal, pero también en la vida política de los entrevistados, *determinando en el futuro sus propias posiciones y comportamientos políticos*. En efecto, es una socialización política “excepcional”, fuera de lo común, que tiene un carácter *definitorio* en la “configuración ideológica” de los entrevistados, ya que se reconoce abiertamente que las experiencias transmitidas por los padres son muy relevantes en su actual cultura política. Así lo formulan algunos entrevistados:

“Que no sentían como tranquilidad con la vuelta de la democracia, cuando la democracia debería ser la tranquilidad, ¿te fijas? y que tuvieran susto a no tener para dar de comer a sus hijos cuando mi papá fue profesional toda la vida, tuvo un muy buen pasar, pero volver hacia atrás les preocupaba muchísimo, y en base a eso, *obviamente, que sí, me marcó en el sentido de que hizo la tendencia*

*mía a la derecha, por ver a mis padres a ver sus hijos que no tenían comida. Para mí eso es aberrante en un país como el Chile de hoy. Pero si lo vivieron a mí me marcó, para serte sincero”* (E5, 47 años, SNA).

“(…) las posturas que yo tenía tal vez venían mucho más marcadas de la familia, de los padres, de los abuelos, que lo que uno propiamente tal a lo mejor había reflexionado, a lo mejor era más restrictivo de poder tener una opinión propia, ese yo diría que es el recuerdo que tengo” (E14, 51 años, SNA)

Esto permite poner en evidencia el carácter *significativo de la transmisión familiar*, tanto de afinidades políticas así como también de vivencias traumáticas durante el gobierno de Allende (Mannheim, 1958; Halbwachs, 1995). Este hallazgo confirma así los postulados de los teóricos sobre el impacto de la socialización política en los “años impresionables” (Lane, 1959; Sears, 1990; Lane, 1959; McDevitt & Chaffee, 2002; Percheron & Jennings, 1981), la que adquiere aún mayor significación si posee una naturaleza “traumática” (Páez & Basabe, 1993), como ocurrió en la mayoría de los casos de la SNA. De hecho, siguiendo a Trafimow & Wyer (1993), es posible indicar que la consecuencia del impacto de este tipo de socialización se asocia a asumir las “experiencias transmitidas” como conocimientos “verdaderos”, que sirven para explicar la propia realidad, lo que es coherente por lo planteado por los analistas norteamericanos: *“Much of the information that people encounter in the course of their daily lives consists of sequences of temporally related events. Memories of these events often provide the basis for judgements of the persons involved in them, causal attributions, and, in some cases, behavioral decisions. These memories are also used in informal conversation when communicating to others about events to which they refer. Event sequences of the sort conveyed in stories or narratives compose a major portion of the knowledge one has acquired and serve as a basis for understanding oneself”* (Trafimow & Wyer, 1993, pág. 365).

Esta transmisión definida por experiencias negativas sobre la Unidad Popular, fue bastante *menos intensa en los dirigentes empresariales más jóvenes de la SOFOFA*. De alguna manera, esta menor intensidad y penetración también tiene relación con la “posición social” de las familias, ya que al tratarse de un grupo de origen de clase media con “buen pasar”, éste no necesariamente tenía comprometido su patrimonio económico con el curso de las reformas, por lo que sus integrantes se mantuvieron ausentes de la defensa personal y activa de sus familias y de sus bienes.

Es así que en este grupo las transmisiones familiares deliberadas y también los “vagos” recuerdos de la infancia estuvieron más bien referidos a la situación de “desorden”, “caos” y “desabastecimiento” que existía en el país durante la UP. Se destacó en varios testimonios la difícil situación que ello significaba para las familias. En tal sentido, se mencionó en varias oportunidades por distintos entrevistados, la presencia de “colas” o “filas” para conseguir alimentos, como se puede dilucidar en el fragmento expuesto a continuación.

“Yo era chiquitita, tenía dos años, entonces, más allá de lo que hoy día probablemente yo tenga en mis recuerdos, *es porque me lo cuentan*, entonces, que había que hacer largas colas para comprar un kilo de pan, que había que



andar con mucho cuidado porque había mucha violencia y delincuencia, *son esas cosas que más que nada uno las escucha*, porque yo tenía dos años cuando fue el tema del golpe. No te podría decir, mira yo ese día estaba sentada acompañada viendo tele” (E7, 46 años, SOFOFA).

Solamente se presentó el caso de un entrevistado que indicó que su familia había percibido la amenaza de expropiación, constituyéndose esta situación en un relato transmitido por los familiares. Es una de las excepciones dentro de este segmento, ya que la mayoría tiene una situación social menos favorecida.

“Mi papá venía de una familia de empresarios y mi mamá no. Nada que ver con la empresa. En el caso de mi familia vieron peligro de expropiación. Sí, *bueno, lo que me cuentan mis padres*, que mi papá trabajaba con su padre, que tenían una empresa mediana y no se la expropiaron, pero tuvieron peligro de que se la expropiaran” (E18, 40 años, SOFOFA).

En todo caso, como bien ha explicado Arturo Valenzuela (1978), durante la UP, el empresariado desarrolló una percepción generalizada de peligro de expropiación, sin que ello implicara necesariamente una situación personal dramática o, parafraseando a Inglehart & Welzel, con riesgo de “seguridad física y existencial”. De hecho, algunos analistas señalan que la situación de expropiación de empresas, por lo general, tenía un carácter legal un tanto “abstracto”, por lo que en pocas oportunidades se producían enfrentamientos entre propietarios y partidarios del Gobierno (Arriagada, 2005).

A diferencia de los dirigentes empresariales de la SNA, en el grupo joven de la SOFOFA no se destacó demasiado en el “orden del discurso” la situación de violencia política, no siendo este tópico muy recurrente ni en la transmisión familiar ni tampoco en los recuerdos difusos sobre el período, salvo un entrevistado que recuerda con claridad el clima de polarización de la época.

“Yo en el año del golpe tenía 13 años, entonces, mi infancia–adolescencia, fue durante el período del gobierno militar. En la época del gobierno de la UP, me tocó ver las manifestaciones, la convulsión (...) y bueno, aquí esta misma rabia que tú dices... mira el origen del MIR, viene de los 60’, o sea, cuando uno pudiera haber pensado que el país vivía en democracia en el gobierno de Eduardo Frei, fueron los peores dirigentes con el MIR, y en esa época yo me acuerdo haber leído un libro con la biografía del Che Guevara y el prólogo de Clodomiro Almeyda y decía: “basta ya de la charlatanería demócrata burguesa, ha llegado el momento de las armas”... ¡en esa época, en los sesenta y tantos, producto de esta misma cuestión...! es que además influyó por la Revolución Cubana, fue arrastrando todas estas cosas pero había una base, que es lo que dices tú, esta rabia que venía de la época de la colonia” (E25, 58 años, SOFOFA).

Como se puede distinguir en el discurso del entrevistado, la violencia política que promueven los sectores de izquierda tiene un carácter discursivo e ideológico, que es muy propio de la “larga década del sesenta”, en la cual la influencia de la Revolución Cubana

tiene un gran impacto en los líderes políticos de izquierda (Huneeus & Morales, 2003; Arancibia, 2001). De hecho, este paso de la institucionalidad democrática a la vía revolucionaria es precisamente el debate que dividirá a la izquierda entre “reformismo” y “revolución” (Moulian & Osorio, 2014).

### 2.5. Continuidad de afinidades políticas y “disentimiento político”

Pues bien, así como hubo una potente transferencia de valores y de las “traumáticas experiencias” familiares vividas durante la Unidad Popular, también se generó una continuidad generacional de las afinidades políticas familiares, aunque ésta, como se verá, presentó un matiz de diferencia que se destaca a continuación.

En ese marco, se puede identificar que en la generación más joven de la SNA, se manifestó una continuidad de afinidades políticas muy fluida, sin ningún caso de “disentimiento político” marcado entre padres e hijos. En tal sentido, la gran mayoría de los entrevistados se posicionó en el *sector político de la derecha*, de igual manera que sus familiares más cercanos. Tan sólo un entrevistado se identificó con el centro político y se declaró simpatizante de la Democracia Cristiana, corroborando con ello la fuerte influencia paterna en la socialización, ya que su padre había sido simpatizante del Partido Radical, mientras su madre había sido de derecha, “*Mi papá tenía ciertas características radicales, y mi mamá más bien de derecha, había una mezcla...(...) yo siempre he estado muy cercano al centro, a la Democracia Cristiana, si es que necesito una “casa política” (E8, 44 años, SNA)*. Así, en el único caso de dirigente de centro, se mantuvo la afinidad política desarrollada desde el hogar.

El único matiz de diferencia en los entrevistados más jóvenes con respecto a sus progenitores fue la mayor referencia al “centroderecha” que hicieron los entrevistados, distinción que no se hizo discursivamente en la generación mayor. De hecho, esta mención de posicionamiento de “centroderecha”, en reiterados testimonios fue vinculada a una cierta identificación con el partido de la Democracia Cristiana alemana, utilizando esta institución como una referencia ideológica.

Ahora bien, de la misma manera que pasó con la generación mayor, se hizo una pronunciada alusión a valores de “orientación liberal”, los cuales, como se mostró, fueron desarrollados tempranamente en sus respectivas familias. Entre los *fundamentos ideológicos* que subrayaron los entrevistados para identificarse con el centroderecha se enfatizó la “*libertad individual*” incluidas las *libertades económicas* para emprender. Podría decirse que esta base valórica desarrollada en el hogar, también es coherente con la trayectoria familiar de los entrevistados, ya que gran parte de las familias estaban vinculadas al negocio agrícola. Al ser consultados sobre qué significa ser de “derecha”, varios fundamentaron del siguiente modo, haciendo incapié en valores liberales entendidos como “fundamentales” o como parte de la “naturaleza humana”.

“Siento que el Estado tiene que ser el regulador del ordenamiento de la nación pero no el controlador, más que idealismos, porque los idealismos pueden ser de cualquier lado, porque igual yo tengo... en el fondo tengo más mente de centroderecha que corazón de centroderecha, pero, fundamentalmente, por la

libertad, la libertad económica, la libertad de pensamiento, la libertad de poder elegir, la libertad de que no te impongan nada” (E27, 48 años, SNA).

“Mira, yo creo que la centroderecha, no lo circunscribas a los partidos políticos de centroderecha, las ideas. Si tú ves, y yo me baso mucho en lo que es Alemania, la Democracia Cristiana alemana es de centroderecha y es un poco lo que te decía, yo encuentro que hay mucho que hacer en el tema social, pero para eso hay que crear riqueza, entonces, la centroderecha para mí es el concepto que yo tengo y por eso me siento identificado; *es que es un ente que te da todas las libertades para desarrollar y generar riqueza; tú y esas oportunidades que te dan, tú las retribuyes vía impuesto, lo que sea y mientras más riqueza tienes, más entregas, más aportas y eso se devuelve a la sociedad, porque nunca todos vamos a poder ser iguales*” (E24, 48 años, SNA).

**“Entrevistador: ¿qué lo ha marcado en su vida para sentirse identificado con la centroderecha?** Yo salí de la “oveja negra”, mira, no sé, es una postura personal de la vida, yo creo que las personas no son iguales, no somos iguales, no sale este tema de la equidad que somos todos iguales, no es así. Desde el momento que nacemos; si nacemos más gordos, más altos, de ojos verdes, café, negros y somos distintos, y eso no quiere decir que sea malo o bueno, lo que sí creo que tiene que haber la oportunidad para que todas las personas tengan acceso a lo que tienen que tener” (E17, 49 años, SOFOFA).

“¿Qué significa ser de derecha? la libertad está en la naturaleza, o sea, el respeto a tu libertad, en la historia para atrás siempre ha habido gente que ha querido imponerse y controlar al ser humano, llámese reyes, emperadores o lo que sea, o dictaduras, de izquierda, derechas, lo que sea y todo eso ha sido anti natura; ha sido natural en el ser humano porque la maldad está siempre presente, digamos, pero no es la cosa natural del hombre. *Lo natural es que el hombre sea capaz de surgir por sí mismo y que le den las libertades para que se desarrolle, no que lo restrinjan y lo controlen y lo transformen en una especie de animal, pues*” (E25, 58 años, SOFOFA).

Como bien se puede dilucidar en algunos fragmentos expuestos, otro elemento enfatizado por los sujetos es una menor creencia en la “igualdad”, lo que fue bastante reiterado en entrevistados que se identificaron con la derecha. Es sabido que esto es muy propio de las personas que se identifican con este último sector, ya que como ha explicado Norberto Bobbio (1995), la actitud política ante la igualdad es un elemento distintivo del clivaje izquierda y derecha: “*Consecuentemente cuando se atribuye a la izquierda una mayor sensibilidad para disminuir las desigualdades no se quiere decir que ésta pretenda eliminar todas las desigualdades o que la derecha las quiera conservar todas, sino como mucho que la primera es más igualitaria y la segunda más desigualitaria*” (pág. 144).

En el caso de la SOFOFA, hubo quienes se identificaron con el *centroderecha*, pero lo cierto es que también existieron dirigentes que se identificaron con *el centro político*, siendo ambas distinciones políticas muy parejas. Y de hecho, entre quienes más se identificaron con el centro, por lo general, sus padres también se posicionaban en el mismo sector político.

“De mi familia, tengo como dos vertientes porque mi papá de chico participó en la DC, fue bastante activo políticamente hablando y del lado de mi madre, más bien de una tradición más bien de derecha (...) yo siempre me he sentido como alguien de centro, no me siento de izquierda necesariamente, he ido mutando mi pensamiento, pero yo me identifico bastante con la tendencia social cristiana y también con lo que Fundación Konrad que es una fundación de la DC alemana, que es un partido en Alemania de centroderecha” (E11, 43 años, SOFOFA).

También en esta generación más joven de la SOFOFA existieron pocos casos de “disentimiento político” –lo que a mi modo de ver vuelve a probar la marcada intensidad de la socialización política familiar, sobre todo por la signada herencia de las posiciones políticas de los padres– y estos se dividieron en padres de “centro”, cuyo hijo viró hacia el centroderecha, y padres identificados con la derecha, cuyo hijo se desvía hacia el centro, matizando el radicalismo por la derecha de sus padres. Este último entrevistado es el único caso de militante de un partido de centro (Partido Liberal), que pertenece al conglomerado del Frente Amplio, aunque el dirigente enfatizó con mucha vehemencia que no se siente representado por este conglomerado que se sitúa a la izquierda del entorno ideológico en el sistema político chileno. *“Soy militante del Partido Liberal... entrevistador: ¿pertenece al Frente Amplio? R: No, no soy del Frente Amplio, soy de los que está en contra de haber tomado esa decisión, pero la respeto porque fue tomada, pero no me siento participe del Frente Amplio”* (E26, 40 años, SOFOFA).

Por último, cabe añadir que los casos de “disidencia política” de los más jóvenes, parecen diferenciarse de algunas tendencias sociopolíticas antes investigadas. En ese sentido, la literatura muestra que la afinidad política de los hijos respecto de los padres no es tan marcada en los sectores medios y altos (Jaime, 2000), situación distinta a la de los participantes de esta investigación, ya que en pocos casos los entrevistados jóvenes se distanciaron ideológicamente de sus padres.

Para terminar con este apartado, se puede resaltar un fenómeno que también se dio en los entrevistados más mayores. Me refiero a las *nulas* referencias que hicieron los jóvenes a la figura materna en el proceso de socialización política.

De esta manera, en este grupo se generó un predominio mayor de la figura masculina del “padre” y del “abuelo”, lo que, en verdad, es muy a tono con lo que está ocurriendo durante esta época. Esto es así porque, a pesar de que la sociedad chilena de entonces valoraba más positivamente la participación de la mujer en la actividad política (Hamuy, 2000), la verdad es que la mujer aún no se encontraba plenamente integrada en igualdad de condiciones a las diversas actividades de la sociedad, reproduciendo en la práctica una estructura de dominación fundamentalmente “masculina”.

Esta dominación tenía su expresión en la delegación femenina de las actividades domésticas, entre las que se encontraban, entre muchas otras, la crianza de los hijos (Godoy, Díaz, & Mauro, 2009). Sin embargo, también es cierto que al tratarse de una estructura de dominación masculina, dicho rol ocupado por la mujer en la crianza de los hijos se realizaba en condiciones de “inferioridad” respecto del hombre, por lo que la figura paterna tenía un mayor impacto o significación en los hijos (Jaime, 2000),

principalmente porque éste era concebido como una figura de “autoridad” (Bourdieu, 2000b).

Como es sabido, esta situación comienza a modificarse gradualmente con el desarrollo socioeconómico, que permite una mayor inserción de la mujer al mercado laboral, lo que, en consecuencia, facilita una mayor autonomía del género femenino (Inglehart, 1991; cfr. Morán, 2011). Esto último, por cierto, tiene un impacto en la socialización política de los ciudadanos, ya que como se ha observado, en países avanzados, como es el caso de España, se han comenzado a modificar gradualmente algunos patrones de socialización política, en los cuales la figura femenina ha tenido un rol levemente más significativo que el del hombre casi llegando al nuevo milenio (Jaime, 2000).

Por esto, el anhelado “desarrollo humano” ha permitido en muchos países algunos cambios relevantes que han nivelado en mayor medida (aunque siempre en forma insuficiente) el campo entre ambos géneros, lo que tiene su expresión cultural, por ejemplo, en un mayor reconocimiento de la significación de la figura femenina por parte de los hijos. La decadencia de la “masculinidad tradicional” y su asociación a la figura de “autoridad” (Bahr, Dechaux, & Stiehr, 1995), ha ido modificándose junto con el cambio de valores hacia sociedades menos “rígidas”, más “autoexpresivas” y menos influidas por la violencia simbólica (Inglehart & Welzel, 2006), lo que ha traído como consecuencia un reconocimiento mayor de las madres en el proceso de continuidad generacional.

No obstante, esto constituye una situación relativamente reciente de países más desarrollados, que no es el caso del Chile de los años setenta–ochenta. Hay que tener en cuenta que se trata, como ya se indicó, de un país que no ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, a pesar de los avances sociales de la época por sobre el resto de la región (Maddison, 1989; Gangas, 2003), y continúa marcado por la “pugna distributiva”, que se acentúa incluso más durante el gobierno militar.

Aun así, es bajo este último régimen que la mujer comienza a insertarse en forma más masiva al mercado laboral, que es mucho más pronunciado en aquellas mujeres que tienen mayor cualificación y un mejor nivel socioeconómico, lo que constituye durante la época un porcentaje muy bajo de la población (Godoy, Díaz, & Mauro, 2009). Pese a esto, las familias de nuestros entrevistados deben encontrarse entre las más “tradicionales”, ya que la mayor inserción de las mujeres educadas en el mercado laboral no parece verificarse entre ellas.

Antes bien, sólo se presentó una excepción respecto de la socialización política con carácter más femenino. Esto ocurrió en el caso de un entrevistado de la SOFOFA que le confirió a la figura de la “abuela” un rol absolutamente significativo en su socialización política. Y de hecho, llama la atención la naturaleza del contenido transmitido, que no está tan cargado de una posición política, sino que más bien se asocia a la adquisición de herramientas *críticas* de observación de la realidad, como es buscar causalidades históricas para entender el presente.

*“Tenía una abuela con la cual conversábamos mucho de política cuando era niño, y me hacía ver que todo pasaba porque estaba influenciado por la historia y que yo siempre a futuro ver los antecedentes históricos para ver lo que iba a*

*pasar a futuro*, entonces, con ella sí que tenía conversaciones políticas siendo que mi abuela nunca tuvo nada que ver con política (...) mi familia fue, y siempre fue familia con una tendencia de derecha y tal vez por mi manera de ser yo quería siempre escuchar la otra versión, porque empecé a escuchar a algunos casos de gente que había vivido que “que no tenía para comer”, sino que gente que contaba la experiencia de que “me mataron a mi marido, me mataron a mi hijo” y yo para mí eso... ¡chuta!... desde mi casa escucho la versión de que “no había para comer” o “había escasez”... sí, pero tampoco nadie murió de hambre en mi casa, había escasez, pero empecé a escuchar casos y gente real, no lectura, pero yo veía la realidad, por lo mismo, porque estudié en colegios de mi comuna, colegios de barrio, donde veía la realidad de esos dirigentes de pueblo, de la junta de vecinos, ese dirigente sindical que no se fue al exilio a Francia, sino que tuvo que esconderse acá en Chile, que tuvo que pasar hambre, muchos torturados, *entonces, esa realidad a mí me conmovió mucho, más allá de la que escuchaba de parte de mis padres*” (E26, 40 años, SOFOFA).

Si bien, este último relato constituye una verdadera peculiaridad, es importante hacer notar que, tal como indica el entrevistado, las herramientas intelectuales adquiridas a través de su abuela, le permitieron luego forjar sus propias opiniones, marcando un matiz de *disentimiento político* con respecto a lo transmitido por sus padres.

### **3. La socialización política escolar: educación cívica y participación política**

Como han señalado en reiteradas oportunidades diversos autores, la socialización política en el ámbito escolar constituye uno de los agentes de la socialización más relevantes y destacados por la literatura (Almond & Verba, 1970; Jaime, 2000; Braungart, 1971; Lipset, 1970; Verba, Norman, & Kim, 1987; Morán, 2011; Benedicto, 1995). Se trata, al igual que la socialización política familiar, de otra “caja negra”, conformada por una transferencia de contenidos ideológicos latentes y deliberados de carácter “ambiguo”, los cuales se desarrollan a pesar de todos los esfuerzos por hacer de la escuela una institución “neutra” y “despolitizada”.

Quienes han indagado en este campo de investigación señalan que la socialización política en la escuela puede tener un carácter “acumulativo” respecto de la familiar. De hecho, esta adquisición de saberes formales e informales, latentes y/o deliberados, puede reforzar lo desarrollado en el hogar o también convertirse en una fuente de disidencia y/o independencia de las actitudes aprendidas en las familias (Greenstein, 1977; Espinoza & Madrid, 2011; Vargas-Salfate, Oyanedel & Torres-Vallejos, 2015).

En efecto, como indican los especialistas, el desarrollo de conocimientos cívicos en los “años impresionables” (Sears, 1990; Jennings, 2007) puede transformarse en una verdadera fuente de aprendizaje político, que también puede verse robustecido a través de distintas instancias, entre las que sobresalen, por ejemplo, la participación activa en los asuntos que incumben a la comunidad académica. Así lo han demostrado autores como Easton & Dennis (1976), Maravall (1978) y los mismos Almond & Verba (1970), quienes concluyen que el involucramiento político puede tener un impacto decisivo en la

formación de la cultura política de aquellos que se vinculan desde temprana edad con la toma de decisiones.

Bajo esas coordenadas, en esta investigación se buscó conocer el impacto de la escuela en la socialización política de los entrevistados, tanto del colegio como de la universidad. En tal sentido, se persiguió explorar si existió algún tipo de transmisión deliberada y/o latente de afinidades políticas, a través, por ejemplo, de materias relacionadas con la formación cívica, que viene desarrollándose curricularmente en Chile desde 1912 (Mardones, 2018). En esta búsqueda, se prestó atención a la significación de algunos actores educativos que llevan a cabo la tarea de transferir el conocimiento, como es el caso de la figura del profesor/a, que suele ser significativa en la formación de los universos políticos de los ciudadanos (Kriger & Dukuen, 2012; Benedicto, 1995).

Esta información producida fue complementada con el análisis de las trayectorias en calidad de dirigente estudiantil de los entrevistados en sus escuelas y/o universidades. El objetivo fue lograr determinar si en éstos se despertó algún interés o bien se reforzó la inquietud, ya adquirida en el hogar, de implicarse políticamente en los asuntos de su comunidad educativa, ya que no hay que olvidar que, particularmente, el segmento más joven de la élite empresarial recibió una fuerte influencia familiar de valores relacionados con la participación.

#### 4. La formación cívica en los entrevistados mayores

Como se demostró previamente, la mayoría de los entrevistados de la élite empresarial cursó sus estudios en colegios privados. En estas instituciones educativas existía una clara preocupación por formar cívicamente a sus estudiantes, ya que a pesar de que la asignatura de “educación cívica” era solamente obligatoria para los colegios públicos<sup>32</sup>, igualmente en los privados se incluía una asignatura optativa llamada “seminario”, en la cual se impartían materias de educación cívica mezclada con la enseñanza de valores judeocristianos. De hecho, algunos entrevistados, al ser consultados si habían recibido esta formación, señalaron que no la tuvieron por el motivo antes enunciado. Así lo expresa un dirigente: “*¿usted tuvo educación cívica cuando joven? R: No, nosotros no somos de los que tuvimos educación cívica. Yo estuve en colegio de curas pero pasé por seminarios*” (E30, 62 años, SNA).

Este último dato es relevante, y da cuenta del interés y motivación que despierta en los entrevistados cursar la asignatura de “educación cívica”, aún cuando en esta colectividad no se enfatizó haber tenido una transmisión familiar intensa de valores como el “compromiso cívico”.

Es así que la mayoría de los entrevistados más longevos de ambas organizaciones empresariales cursó este tipo de “seminario” con carácter optativo. Y, de hecho, casi todos quienes pasaron por esta experiencia señalaron que la educación cívica fue *importante en*

---

<sup>32</sup> La educación cívica como asignatura nace en 1912, no obstante, tras la reforma educacional del gobierno de Frei, ésta pasa a fusionarse con “ciencias sociales”. Así lo informa el documento de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado: “*De la formación cívica a la educación ciudadana: hitos, distinciones, desafíos y propuestas*” (2016).

*su formación como ciudadanos*. En tal sentido, varios destacaron el rol que jugaron los profesores en el proceso de transmisión de conocimientos, lo que no sorprende mayormente a nivel teórico, puesto que la figura del docente goza de un carácter simbólico asociado a la autoridad del saber, lo que tiene un impacto en los estudiantes (Espinoza & Madrid, 2011; Maravall, 1978). Y efectivamente, así lo recalcaron en sus discursos los entrevistados, que cuando fueron consultados sobre la importancia de la educación cívica, manifestaron con distintos matices una valiosa huella:

“Mucho, mucho, fue muy importante. Yo siento muchísimo que mis hijos no la tuvieran y que mis nietos no la están teniendo. Yo tuve un par de profesores y me parece que era una hora a la semana o dos horas a la semana, no me acuerdo, no era más que eso, *pero a mí me dio las herramientas de democracia, de patriotismo, de compromiso con la sociedad*, eso salió de esos cursos, definitivamente. Recuerdo a los profesores como si los estuviera viendo ahora, después de 53 años que salí del colegio” (E16, 70 años, SNA).

“Mucho se ha hablado acá en Chile, pero yo creo que falta un análisis más profundo, despolitizado, desideologizado, para ver qué es lo que realmente tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Yo creo que se pierde mucho tiempo en cosas que no sirven, se han dejado de lado otros valores, la misma convivencia social, el respeto por “el otro” que había antes, que existía en la educación cívica. Yo alcancé a tener educación cívica en los primeros años. Me enseñó algunas cosas generales, pero como digo, fue en los primeros años, faltó después ir... y que fueran temas de discusión... yo todavía tenía a los profesores que se paraban adelante y eran el “gran señor” que instruía y que tú... entonces, tú anotabas... yo creo que todavía queda mucho de eso y eso no está bien” (E19, 61 años, SOFOFA).

En este grupo más longevo, el único entrevistado de la élite empresarial que había cursado estudios en un liceo público y estatal, y que por tanto, había tenido educación cívica de carácter obligatorio, mencionó que la formación política recibida en el colegio tuvo un impacto decisivo en su actual cultura política. Definitivamente, como se puede inferir de su relato, el entrevistado hace una mención indirecta a la educación pública heredera del “Frente Popular”, que se identifica simbólicamente con el lema de Pedro Aguirre Cerda “gobernar es educar”. De hecho, es a partir de este gobierno radical cuando la educación ocupa un lugar central en los objetivos de política pública del Estado.

“(...) mire, lo que pasa, es que lo que usted puede ver de mi educación, yo soy un producto de la educación laica radical de nuestro país, de la segunda mitad del siglo pasado, por lo tanto, yo tuve una muy excelente, una perfecta y enorme educación cívica (...) yo me siento republicano, por eso siempre me ha interesado la política, por la formación que tuve como ciudadano y la educación cívica que tuve fue muy importante en el Liceo. Soy producto de la educación laica radical, ¡orgulloso! (E15, 66 años, SOFOFA).



Lo anterior pone de manifiesto el carácter “acumulativo” y en ocasiones “definitivo” que puede tener la socialización política en la escuela, ya que en ningún caso se mencionó ningún tipo de *desviación ideológica* entre lo que se enseñaba en el colegio y lo que se había aprendido en sus hogares. Muy probablemente, esta compleja acumulación de saberes ocurre sin mucha “volatilidad”, por el carácter menos ideologizado que tenían los saberes formales en el sistema educativo durante este contexto, que aún no se han polarizado, como sí comienza a ocurrir en muchos colegios hacia finales de la década del sesenta. Esto último se pone de manifiesto en el testimonio de un entrevistado, que enfatiza el carácter “republicano” de los conocimientos aprendidos en la escuela:

“(…) nos enseñaban como funcionaban las leyes, como funcionaban las instituciones de la república, no tenía un sesgo político. O sea, la podría usar porque este señor nos enseñaba cómo funcionaban las instituciones y yo estaba en la Escuela Militar en esa época, por lo tanto, la posición era cuál era el rol que tenían que tener las Fuerzas Armadas dentro de la estructura del país, muy republicano” (E28, 69 años, SNA).

En virtud de lo anterior, se puede decir que se trata de una colectividad que va formando su cultura política sobre la base de conocimientos desarrollados fundamentalmente en el hogar, y que luego se fortalecen sin entrar en contradicción con la socialización política que experimentan en sus respectivos colegios. De hecho, en este grupo de dirigentes mayores, las herramientas de “implicación política” son forjadas en la escuela, ya que este tipo de valores no fue promovido activamente por sus respectivas familias.

Pero, por otra parte, esta socialización “acumulativa” también se ve robustecida por la interacción social de los entrevistados con sus pares en el aula de clases, los que provienen, por lo general, de estratos sociales similares. El lector/a no tiene que olvidar que en estas fechas son muy pocos los sectores sociales que pueden pagar por una educación privada tan selectiva, lo que da cuenta de una socialización estudiantil segmentada por determinantes sociales. Así lo describen a continuación los entrevistados, que enfatizan el tipo de socialización “de clase” que tuvieron en su experiencia escolar:

“El Liceo Alemán tenía gente de clase socioeconómica alta pero también habían muchos alumnos, era colegio pagado, pero había un montón de gente que no era del grupo de profesionales o agricultores, sino que más bien de empleados públicos. Me acuerdo que yo tengo un montón de compañeros que eran hijos de gente que trabajaba en la Telefónica o en ENDESA, y todavía tenemos muy buenas relaciones, lo puedo decir con mucho orgullo, tenemos muchas relaciones con mi excompañeros. Creo tener un grato recuerdo de la época escolar, a pesar de que habían incluso en esa época difícil de la UP, había compañeros, la mayoría de derecha, pero habían algunos de izquierda, pero incluso en grupos de excompañeros nunca hemos llevado el tema político a ningún extremo” (E31, 60 años, SNA).

“Yo entré desde niño en la preparatoria al Saint George, y tendría que haber tenido doce años, pero yo era medio flojo así que repetí un año y me quedé trece años en el Saint George. Fui compañero de Roberto Fantuzzi. Sí, bueno,

nosotros en la clase, de la gente destacada estaba Roberto Fantuzzi, estaba Andrés Concha y estaba Andrés Pascal. Bueno, Andrés no terminó con nosotros, pero estuvo hasta... debe haber terminado los dos últimos de estudios en el Grange's School. Yo con Andrés estábamos en la Academia Literaria que la dirigía Don Roque Esteban Carpa, así que fui compañero de él" (E12, 74 años, SOFOFA).

En realidad, esta socialización política escolar influida por la "pertenencia social" de los entrevistados, también tiene un asidero político que fue un poco más pronunciado en el caso de los dirigentes de la SNA. Así, en este grupo se enfatizó haber tenido mayor relación con compañeros identificados con la derecha, cuyas familias de origen tenían preferencia por ese entorno ideológico. En verdad, esto tampoco es distante de lo que pasaba en la sociedad chilena durante esas fechas, puesto que como ya se mencionó, los sectores altos se encuentran más identificados con la posición política de la derecha, y luego con el centro.

Lo expresado por el dirigente industrial en el último fragmento expuesto tampoco constituye una excepción, puesto que, según la poca evidencia empírica existente sobre el caso chileno, los colegios de élite *son transversales al entorno ideológico*. Como ejemplo, el entrevistado menciona haber sido compañero de distinguidos personajes públicos, como es el caso de Andrés Concha, destacado dirigente empresarial fallecido, que fue presidente de la SOFOFA, y también de Andrés Pascal Allende, exguerrillero e importante dirigente del Comité Político del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Lo anterior, en definitiva, corrobora la relevancia que tiene para las élites la formación académica de sus hijos, lo que parece ser independiente de las posiciones políticas, ya que tanto familias de izquierda como de derecha con una alta posición social, enviaban a sus hijos a formarse a los mismos establecimientos (Cordero, 2003; Moya & Hernández, 2014; González-Bustamante y Garrido-Vergara).

#### *4.1. Aprendizajes políticos como dirigentes estudiantiles*

En relación a los cargos dirigentes y al aprendizaje político que tuvieron los entrevistados más mayores, es posible señalar una *implicación política más intensa en el grupo de la SNA*, organización en la cual de acuerdo a los testimonios de los participantes, gran parte de sus miembros participó activamente en los asuntos de la comunidad académica, tanto en el colegio como la universidad.

Cabe mencionar que la participación que tuvieron los entrevistados fue resaltada como un tipo de participación "gremialista", que en algunos casos fue asociada discursivamente a una posición política de derecha. Sin embargo, esta identificación de los entrevistados con el "gremialismo", no necesariamente significó una "militancia" activa en el movimiento gremialista liderado por Jaime Guzmán, el cual tiene lugar en Chile a partir de 1967 (Huneeus, 2001).

En efecto, este importante movimiento se caracteriza, efectivamente, por identificarse políticamente con la derecha, pero con cierta independencia de los partidos de este sector. Su identidad política es el "gremialismo", ideología que se sostiene en el

principio de que “individuo” y “cuerpos intermedios” son *ontológicamente* superiores al Estado, el que representa al “bien común” (Guzmán, 1991, págs. 256–257). Su expresión política más clara fue en el movimiento estudiantil, que fue bastante activo en la reforma de la educación de 1967, y también fue un importante actor de oposición al gobierno de la Unidad Popular. De hecho, varios de sus miembros luego ocuparon cargos importantes en el gobierno militar, como fue el caso del mismo Jaime Guzmán, que lideró la “Comisión Ortúzar” para redactar la Nueva Constitución (1980) (Fontaine, 1991).

Sin embargo, a pesar de que este movimiento político es contemporáneo al tiempo en que los dirigentes más mayores están estudiando en el colegio y la universidad, solamente hubo un entrevistado que manifestó haber participado activamente en esta colectividad, tal cual se deja ver en el siguiente relato: *“Yo fui miembro del Centro de Alumnos de Ingeniería en la Universidad Católica. En esa época surgía el liderazgo de Jaime Guzmán que tú ya habrás encontrado, aunque estaba en otra escuela, entonces, me integré al grupo gremialista, grupo independiente, autónomo, también con un ideario de derecha pero muy independiente de los partidos políticos, de todos los partidos políticos”* (E6, 77 años, SOFOFA).

Con varios matices de diferencia, la participación política que hizo el resto de los entrevistados más mayores no tenía un carácter políticamente intenso, ni de militancia activa en el movimiento liderado por Guzmán, sino que más bien, este involucramiento se asociaba a una participación independiente de los partidos y no enmarcada en ningún proyecto político más amplio. Es más, en el caso de los entrevistados, como se puede inferir de sus narraciones, muy posiblemente la identificación de ser “gremialista” se relacionaba justamente con el desmarque de los partidos políticos.

“Bueno, también he tenido cargos en el colegio, desde el colegio yo fui presidente del curso, después fui presidente del centro de alumnos, después en la Universidad de Concepción también tuve el cargo de delegado de curso, estuve en el centro de alumnos de la universidad; siempre participé en las cosas gremiales. Siempre he sido dirigente, pero no fanático, me gusta servir a los demás, me gusta la justicia, no me gustan los excesos” (E32, 72 años, SNA).

“Me tocó vivir la Unidad Popular completa siendo dirigente estudiantil en Temuco, era presidente de mi generación de estudiantes; luego me tocó una universidad muy tranquila y ordenada que fue desde 1974 en adelante, donde yo no supe qué es lo que era el *desorden* y la pérdida de tiempo en la universidad” (E30, 62 años, SNA).

“Fui presidente del Centro de alumnos de la Facultad de Química y Farmacia, en una época difícil, en la época del golpe de Estado en 1973 (...) Y a mí me eligieron, curiosamente, como presidente del centro de alumnos con votos de izquierda y con votos de derecha, así que yo básicamente fui dirigente gremial por vocación fundamentalmente, y no por un tinte político. Yo lo que buscaba era, obviamente, era tratar de apoyar a la gente de menos recursos. En esa época de presidente, me tocó organizar y crear un pensionado universitario para los alumnos que eran de provincia y que no tenían condiciones económicas para pagar” (E4, 70 años, SOFOFA).

Antes bien, como se puede deducir de los relatos, se trata de un grupo cuyos miembros desde muy jóvenes desarrollaron la creencia en la “implicación política”, aunque esta actitud de incumbencia se desmarca del carácter partidista y/o conflictivo de la política, incluso cuando este carácter se acentuaba durante el gobierno de la Unidad Popular.

Por otra parte, la participación política de los dirigentes más mayores, también trae consigo el aprendizaje de valores, puesto que también se observa el desarrollo de estos elementos, tales como la “*vocación de servicio público*”, de “*justicia*” y de “*solidaridad*”. Esta proliferación de principios, además, se ve fortalecida por otras instancias estudiantiles como los “trabajos voluntarios” que hacían este tipo de colegios, en los que se llevaba a los estudiantes a conocer realidades sociales vulnerables. Así lo expresa un dirigente de la SOFOFA, “(...) *porque cuando yo era chico, yo recuerdo haber ido a poblaciones en Conchalí cuando yo estaba en el colegio, hacíamos trabajos allá y los niñitos andaban sin zapatos, andaban sin ropa*” (E2, 59 años, SOFOFA).

Por último, creo que es importante subrayar que la participación política menos partidista o anclada a algún imaginario político de los entrevistados, contrasta absolutamente con la participación activa de otros dirigentes políticos estudiantiles durante la Unidad Popular y la dictadura militar.

Efectivamente, las dirigencias políticas durante los tiempos de la polarización y durante la UP eran sumamente activas (Rojas, 2009), con fuerte presencia de los partidos y sus bases, lo que tiene su fin tras el golpe militar. Luego, el movimiento estudiantil durante la dictadura tuvo un carácter distinto y sus luchas se daban en varios frentes: la lucha por recuperar la democracia; la lucha por democratizar las propias universidades, cuyas federaciones estudiantiles habían sido reemplazadas por organizaciones gremialistas impuestas por el régimen, y, finalmente, la lucha por la *supervivencia*, ya que varios estudiantes habían sido asesinados por los organismos de inteligencia de la dictadura militar (Garcés, 2011).

## **5. La formación cívica en los entrevistados menores**

La socialización política escolar de los dirigentes más jóvenes, no es muy diferente a la de sus pares más mayores, puesto que en esta generación también se manifestó un *impacto significativo de la formación cívica recibida en el contexto escolar*, que en algunos casos como se verá, tuvo un carácter decisivo en la formación de su actual cultura política, sobre todo en lo que refiere al desarrollo de la “implicación política” (Almond & Verba, 1970).

En términos contextuales, a comienzos de los años ochenta, el gobierno militar implanta la educación cívica en primero y segundo medio con un carácter obligatorio en el sistema educativo; luego, en 1984, esta asignatura es dictada en tercer y cuarto medio, y la cantidad de horas aumenta a un total de cuatro horas semanales (BCN, 2019). Es así que al hacerse obligatoria, la mayoría de los entrevistados cursan la asignatura, y los que no lo hicieron, cursaron el “seminario optativo”, que ya se indicó era una especie de “equivalente” de educación cívica.

Se trata de una formación cívica cuidada hasta el más mínimo detalle por el régimen militar, a tal punto que, como indica Mardones (2018), contó con la propia intervención del general Pinochet en la elaboración del currículum de la asignatura de

Historia y Geografía. Es así como se introduce en esta materia un fuerte énfasis en el aprendizaje de la recién promulgada Constitución de 1980: el objetivo, según este autor, es adoctrinar a los estudiantes sobre la legitimidad del régimen militar (Mardones, 2018, pág. 71).

Aun así, como gran parte de la socialización política en las escuelas tuvo lugar en el contexto de la dictadura militar, la impartición de materias de formación cívica se constituyó en una valiosa fuente de conocimientos y de conexión con la realidad del país, lo que fue valorado positivamente por los entrevistados jóvenes de ambas organizaciones analizadas. De hecho, esto fue bastante elogiado por varios participantes, ya que el gobierno militar tenía clausurada y reprimida la actividad política, sobre todo de aquellos que se oponían al régimen. Pues bien, en varias oportunidades se mencionó la importancia que tuvo para ellos el conocer del “funcionamiento de la democracia”, y cómo dichos saberes también fueron activando una actitud favorable hacia las instituciones, tal cual describe el siguiente entrevistado a continuación, que enfatiza que su educación cívica fue clave para valorar positivamente el rol de quienes ejercen el poder político en la actualidad.

“Interesante. Nunca pensé en el colegio que iba a ocupar lo que no se estaba ocupando en ese minuto, o sea, me hablaban del parlamento, yo decía: “ah ya, perfecto, fue hace tiempo atrás, ya no existe esa cuestión, ahora es el gobierno de Pinochet”, pero no le tomaba el asunto, el peso, como que “esto es la realidad” y es lo que debiera pasar ahora... cuando volvió (la democracia) pude recién ahí empezar a entender el tema y empecé a analizar lo que estudiaba de memoria; en ese sentido me sirvió mucho, cuando hablaban de los parlamentarios que “estaban preocupados del país” y que en realidad “no tenían sueldo” y que en realidad “tenían patrimonio y que podían hacerlo porque en realidad ellos podían y la gente no podía”, “que este gallo se la jugó por tener un país mejor, sea del lado que sea”, *entonces, ahí uno ve que hay gente que se necesita que son los políticos. Para mí es clave tener buenos políticos*” (E5, 47 años, SNA).

Como señalé, la experiencia de desarrollar valores cívicos tuvo un carácter fundamental, tanto por las “*competencias cívicas*” adquiridas, como también por el desarrollo de valores de “*implicación*”. Se trata de una socialización política escolar con un carácter efectivo, y que tuvo un impacto en la cultura política de la mayoría de los dirigentes más jóvenes, que también subrayaron en varias oportunidades el rol de los profesores. Como se puede distinguir en los relatos, los participantes enfatizan lo significativo de la educación cívica en su vida personal, resaltando la necesidad de esta herramienta para para el resto de la sociedad, sobre todo porque demuestran estar “conscientes” de la actual *desafección* con el mundo político, tal como se puede inferir de uno de los relatos a continuación.

“Mire, yo estudié prácticamente toda mi vida escolar en un colegio llamado Verbo Divino en el centro de Santiago, que era un colegio de sacerdotes, religioso. Tuve muy buenos profesores en historia, en ese tiempo en castellano, hoy día tiene otro nombre esa asignatura, y yo diría que entre los profesores de

historia, fundamentalmente el profesor de historia, de alguna manera siempre nos motivaba mucho a conocer la situación del país, la cosa pública *y yo creo que ese fue un elemento que sin duda tiene que haber influido en mí*, y yo diría que teníamos una formación en materia cívica que lamentablemente hoy día se echa mucho de menos. La gente joven comprende mucho menos cómo funciona el país, cómo funciona el Estado, cómo se dividen los poderes... no hay una formación. *Yo afortunadamente la tuve, y yo también creo que ese fue un elemento que influyó en las decisiones que más tarde fui tomando en mi relación con la política y la actividad pública*" (E9, 56 años, SNA).

"(...) por ejemplo, hoy día en Chile no hay clases de educación cívica, yo las tuve, ¡una lata... [aburrimiento] pero las tuve!, había que leerse la Constitución, había que hacer todas esas cosas... y era bueno. Por lo menos tenías un profesor, muchos eran dictadores que estaban hablando una hora a la semana de que era importante votar, de que tu voto servía de algo, por último para perderlo, pero era tu forma de manifestarse. Y sabía el entorno de la ley, de lo que significaba esa responsabilidad cívica. *Ahora, si nadie te lo enseña, nadie te lo inculca, nadie le da importancia, no pidan que después la gente vaya a abotonarse ahí a votar*" (E17, 49 años, SOFOFA).

También es cierto que, en general, en ambas generaciones examinadas, los saberes cívicos recibidos tenían un carácter "polarizado". En realidad, muy posiblemente enseñar la Constitución y algunas "reglas del juego democrático" en el contexto de la dictadura militar era interpretado por los estudiantes y sus familias como "polarización", lo que es probable que ocurriera en el contexto de una sociedad que se encontraba dividida entre quienes apoyaban al régimen y quienes querían volver a la democracia (CEP, 1988). Así lo confirman algunos hallazgos de la literatura especializada, en los que se concluye la existencia de un país profundamente *dividido* entre quienes comprendían la dictadura militar y quienes apoyaban la recuperación de la democracia (Huneus, 2003; Manzi y otros, 2003; Manzi, y otros, 2004; Tironi & Agüero, 1999).

Así, esta polarización mencionada, fue transversalmente percibida por la mayoría de los entrevistados en sus respectivos colegios, con muy pocas excepciones. En la generalidad de los relatos se mencionó insistentemente situaciones conflictivas, de discusiones entre compañeros a raíz de divisiones políticas marcadas entre los que estaban a favor del régimen y los que estaban en contra.

"Teníamos, sí (educación cívica), pero el contexto del colegio en esa época era bien "apolítico", *y la política era como una mala palabra y uno tenía que hablar con mucho cuidado. Yo no hablaba con mucho cuidado, pero generalmente terminaba en peleas bastante acaloradas con los compañeros*, sí, pero no era algo que se cruzara demasiado. Yo diría que la colonia alemana en Chile es una colonia de centroderecha, incluso más allá, entonces, como que la divergencia no era algo tan aceptado" (E11, 43 años, SOFOFA).

Como se puede inferir de los testimonios de los entrevistados y de la evidencia de otros estudios, la conflictividad política que separaba a los compañeros de clase, en verdad,

sólo muestra la intensidad de la transmisión política familiar en los hogares. Por ejemplo, así describe un entrevistado la intensidad de esta transmisión: *“Lo que pasa es que se exacerbaban un poco los ánimos para la época del plebiscito, la época del Sí y del No, entonces, obviamente que los ánimos estaban súper fuertes a todo nivel, incluso en el mismo colegio, la gente que está a favor y la gente que estaba en contra que en el fondo éramos y repetíamos lo que escuchábamos en las casas, así que esa era la verdad”* (E10, 40 años, SOFOFA).

La “tensión” a la que hace referencia el entrevistado, en ningún caso fue resuelta por las herramientas cívicas adquiridas por los participantes en la escuela, lo que tampoco se dio en su grupo de pares. Esto último es tremendamente coherente con los estudios de socialización política que se han hecho en Chile, en los que se ha destacado la función de la familia en la transmisión de afinidades políticas en el contexto autoritario (Cornejo, y otros, 2013; Guichard & Henríquez, 2011; Manzi, y otros, 2004). Bajo esta mirada, ante la clausura de las libertades cívicas y políticas, las familias adquieren una relevancia excepcional, lo que se deja ver en la polarización que tienen los estudiantes en los colegios, que reproduce, en gran medida, lo aprendido directamente de sus padres.

Por otra parte, en esta generación de jóvenes, la “posición social” vuelve a adquirir relevancia, ya que como se indicó, la mayoría asiste a colegios particulares pagados, y en éstos, los entrevistados se relacionan, fundamentalmente, con hijos de familias de derecha (y menor medida de izquierda), que, por supuesto, en su generalidad venían de un origen social parecido. Sin embargo, a pesar de la polarización existente y la división política en las aulas de clases, los entrevistados reconocen haber socializado más con sus pares de *derecha*, lo que en algunos casos influyó en el actual posicionamiento político de los entrevistados. Así lo deja ver un entrevistado de la SNA:

“Me fui al mejor colegio pagado que se llama Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles y ahí, no sé, obviamente el 80% o el 90% (de los estudiantes) eran del mundo empresarial, era uno de los pocos colegios particulares pagados y había más gente de centroderecha, *entonces, a la larga yo creo que igual influye* porque a pesar de que yo era bastante libre pensador, pero hoy día yo me junto con mis compañeros después de 30 años y de los 30 que somos, 28 hacen alusiones a ser de centroderecha, *así que sí influye mucho*. Efectivamente, hay un momento de la historia de Chile donde el sector emprendedor empresarial era de derecha y en ese grupo yo estaba porque mi papá era emprendedor y estaba en un colegio particular pagado” (E27, 48 años, SNA).

“(…) yo estudié en el Kent School, hoy día está siempre en los rankings de los diez primeros colegios (...) era un colegio que era una casona, de instalaciones “ahí no más” [no muy buenas], pero era un buen colegio... y teníamos un grupo muy heterogéneo: judíos, católicos, de todo tipo, de todos los niveles, más o menos parejos en lo económico y en lo político de derecha” (E17, 49 años, SOFOFA).

Esto último corrobora el relieve que tiene la “posición social” de las familias de los entrevistados, tanto en su posicionamiento político como también por la socialización de

los participantes en un mismo “espacio social”. En efecto, la socialización con compañeros de clases que provienen de sectores sociales similares y que además piensan políticamente parecido, se transformó en un factor relevante que reforzó afinidades políticas transmitidas en el seno del hogar. Así, los relatos esgrimidos dan cuenta del carácter más bien *acumulativo* de la socialización política, al no manifestarse ningún tipo de disidencia política entre lo transmitido por las escuelas y lo transferido por los padres. Es más, en el único caso en que existió “disidencia política” entre el colegio y la familia, esta fue solucionada inmediatamente por la familia, que parecía estar atenta a lo que su hijo podía aprender en el colegio: “(...) *lo que yo veía era que pasaban más las materias para los de izquierda y yo llegaba a la casa y ponía el cuaderno, y me ponía a estudiar con mi mamá, y mamá y mi papá me decían: “¡no pues, si eso no es real! ¿ellos no te dijeron que habían colas [filas]? ¿no te dijeron esta cuestión... no te dijeron cuánta gente murió en Rusia? ¡sólo una parte!... ahí es donde yo tengo una base bastante importante, familiar por decirlo así”* (E5, 47 años, SNA).

#### *4.1. Aprendizajes políticos como dirigentes estudiantiles*

Efectivamente, ya Almond & Verba (1970) en *The Civic Culture* (1963) destacaban la importancia que tiene la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, siendo la participación estudiantil a temprana edad un verdadero insumo para aumentar la “eficacia política” de los ciudadanos. A partir de estos supuestos, varios trabajos en una línea parecida han avanzado en corroborar estas premisas (Braungart, 1971; Easton & Dennis, 1970; Verba, Norman, & Kim, 1987; Pateman, 2014).

Sin embargo, también es verdad que, gran parte de la literatura, subraya estos hallazgos en el margen de regímenes democráticos que presentan las mínimas garantías constitucionales para la participación, que es precisamente lo que deja de ocurrir en Chile a partir del golpe militar. Efectivamente, la persecución de la actividad política y el cierre de todos los espacios de deliberación, influyen notoriamente en la cultura política de los chilenos. Y, esto se deja sentir en un segmento de los entrevistados de esta investigación, puesto que su participación política en las escuelas y universidades *fue bastante menor* en relación al grupo de mayor edad.

Aun así, hubo algunos casos de quienes tuvieron una participación política activa, sobre todo en la universidad. Esta participación fue más mencionada en el grupo de los agricultores, que como se vio en páginas anteriores, venía desde sus hogares con la inculcación de valores asociados al involucramiento político, valores muy propios de los grupos de “centro social” (Díez, 2011; PNUD, 2014).

Hablamos, en general, de una participación también identificada con la posición de derecha y distante de los partidos políticos, haciendo de esta situación su sello identitario. Ésta se caracteriza, de acuerdo al relato de los entrevistados, por una participación más bien “filántropica”, orientada a solucionar problemas que subyacen al propio estudiantado, como los problemas de recursos económicos de algunos estudiantes, problemas de infraestructura y asuntos más menores o “administrativos”. En ningún caso se registra una concepción “conflictiva” de la política, aunque sí se mencionó en más de un caso la “competición” por lograr mayorías para convertirse en representante, lo que



exigió medirse frente a adversarios de centro y de izquierda, también constituyendo esta situación un aprendizaje en sí mismo.

“(…) después en la universidad empecé con ideas gremiales también, me metí en el Centro de Alumnos y me gustaba expresar ideas y competir con ideas y ahí también gané elecciones, fui vicepresidente de la Federación de Estudiantes en Concepción (...) yo encuentro que la mejor etapa de mi vida fue haber pasado en una universidad como la de Concepción. Y también me forjó carácter en ese sentido porque me hizo ser un poco más aterrizado desde el punto de vista de no ser extremo en ideas, porque había estudiantes y había de todo, así que a mí *me marcó bastante* esa época universitaria, *porque logré de alguna manera comprender los pensamientos de la gente, de gente que le había desaparecido su papá, por ejemplo... así que ese contexto me marcó porque logré consensuar las distintas ideas, no enmarcarme dentro de una de ellas, que aunque yo era de centroderecha, pude haber sido más transgresor*” (E27, 48 años, SNA).

“Fui dirigente de la universidad, fui parte del Centro de Alumnos de la universidad en la Escuela de Agronomía en la Universidad Católica donde yo estudié, siempre hubo una preocupación en ese caso, en particular, por el desarrollo de mi facultad por tener mejor oportunidades, mejor infraestructura, poder darle la oportunidad a jóvenes que tenían problemas más serios en lo económico, que no podían estudiar y se tenían que conseguir becas. Yo recuerdo que fuimos el primer Centro de Alumnos y fuimos a tocar puertas a distintas empresas y conseguimos una cantidad importante de recursos para becas, para nuestros compañeros” (E14, 51 años, SNA).

Como se puede deducir de los fragmentos presentados, la experiencia como dirigente estudiantil siempre estuvo separada de la política partidista, ello recalcado como un sello distintivo, por cierto, muy propio de la ideología del “gremialismo”. Pero, por otra parte, también es cierto que permitió el desarrollo de diversos valores como la ya mencionada “participación”, y al mismo tiempo, la “*moderación política*”, la “*solidaridad*” y el “*ponerse en los zapatos del otro*”.

Es así como las experiencias de participación política facilitan el aprendizaje de valores como la “empatía” (Leca, 1986), de reconocimiento y pertenencia a una comunidad política, sobre la que se hace necesario participar bajo ciertas reglas que regulan el bien común. Esto se puede inferir de los relatos de las experiencias *políticas* y *asociativas* de los entrevistados, que han contribuido a aumentar la confianza en sí mismos y también en los demás; de aceptación y aprecio por la diferencia; de colaboración con el prójimo que está más desfavorecido; o de, finalmente, “*empatizar*” con la situación de los otros. Esto, en consecuencia, permite incluso *moderar* sus propias posturas políticas, tal cual mencionaba uno de los entrevistados más arriba.

En definitiva, los resultados expuestos confirman la teoría cultural del aprendizaje político en el transcurso de los “*early years*” (Sears, 1990; Greenstein, 1977; Trafimow & Wyer, 1993), en la medida en que la socialización política estudiantil proporciona a los integrantes jóvenes y longevos, un conjunto de “valores cívicos” relacionados con la

actividad política desde una perspectiva más pragmática de la política y menos confrontacional.

Cabe añadir que estos principios, en algunos casos, “activan” un interés de participar en la actividad política, lo que no es en ningún caso contraproducente con los valores desarrollados previamente en el hogar. En otros casos, el aprendizaje político fue “acumulativo” respecto de valores aprendidos por medio de las familias, sin producirse “desviación ideológica” entre lo desarrollado por los agentes socializadores.

Por último, a modo de recapitulación, se puede añadir esta socialización política está “cruzada” por la posición social de las familias de origen de los entrevistados (Díez, 2011; Inglehart & Welzel, 2006; Lipset, 1970; Lane, 1959), ya que la mayoría acude a colegios de élite. En estos lugares socializan con compañeros mayoritariamente de derecha, con los que además desarrollan experiencias que despiertan una cierta “sensibilidad social” que contribuye a la formación de valores como la “solidaridad” y “vocación de servicio social” por los más pobres.

## CAPÍTULO VII: LA ÉLITE EMPRESARIAL FRENTE A LOS ACONTECIMIENTOS DE LA UNIDAD POPULAR Y EL GOLPE MILITAR

### 1. El concepto de memoria y cultura política

En este capítulo nos centramos en conocer e investigar la “memoria colectiva” de la élite empresarial. De esta manera, se analizan los recuerdos de las vivencias personales y familiares más significativas de los entrevistados *mayores* respecto de la experiencia de la Unidad Popular y el golpe militar de septiembre de 1973.

Como se ha señalado, el concepto de “cultura política” es bastante complejo, y por la misma razón, varios autores expertos en la materia han llegado a hablar de una categoría “multidimensional” (Moran & Benedicto, 1995; Verba, Norman, & Kim, 1987; Almond & Verba, 1970; Putnam, 1973), la que por su propia naturaleza, no se reduce únicamente a un sólo factor, sino más bien a un conjunto de componentes que, en la mirada más tradicional, pueden llegar a ser orientativos del comportamiento político de los ciudadanos (Pye & Verba, 1965; Tormos, 2012; Pateman, 2014).

Uno de los componentes que pueden tener incidencia en la formación de la cultura política, es la “memoria”. Se trata, por una parte, de aquellos saberes históricos transmitidos generacionalmente (Trafimow & Wyer, 1993) a través de la organización formal e informal de distintos agentes socializantes (familia, escuela, medios de comunicación e incluso la esfera laboral) (Almond & Verba, 1970). Pero, por otra parte, también se considera relevante prestar atención a aquellas “vivencias experimentadas” por distintos *grupos* o *generaciones* en determinados momentos históricos; vivencias que, por su especificidad, pueden producir un aprendizaje político cuyo impacto puede llegar a ser decisivo en la configuración de la cultura política de algunos ciudadanos, sobre todo de aquellos con características excepcionales (Linz, 1978), como pueden ser las élites o grupos de “centro social” (Putnam, 1973; Díez, 2011; Almond & Verba, 1970).

Para realizar esta tarea, se incluyó el concepto de “memoria colectiva” desarrollado por Halbwachs (1995 y 2004), que se define, parafraseando al autor, por un “acceso al pasado” a través del relato o testimonio de aquellos que han experimentado acontecimientos históricos que han marcado individualmente sus vidas, pero también las de todo un grupo o generación.

“Para que la memoria de los otros venga así a reforzar y completar la nuestra también hace falta, decíamos, que los recuerdos de esos grupos estén en relación con los hechos que constituyen mi pasado. Cada uno de nosotros, en efecto, es miembro a la vez de varios grupos más o menos grandes. Ahora bien, si fijamos nuestra atención en los grupos más grandes, por ejemplo la nación, aunque nuestra vida y la de nuestros padres o la de nuestros amigos estén comprendidas en la suya, no se puede decir que la nación como tal se interese por los destinos individuales de cada uno de sus miembros” (Halbwachs, 1995, pág. 211).

Bajo esta mirada, la generación mayor que se examina en este capítulo, está definida por diversas características o singularidades, como pueden ser la pertenencia a una misma posición social de origen; grupos de familias que se identifican políticamente con la

derecha; socialización en colegios elitistas, con compañeros de clase provenientes de los mismos barrios y círculos sociales; éstas y otras características, que pueden ser valiosas para explicar el desarrollo de un tipo específico de “memoria” sobre el acontecimiento histórico de la Unidad Popular y el golpe militar. En suma, podría tratarse de una “memoria colectiva” muy diferente respecto de la que tienen otros grupos que también participaron de los mismos sucesos históricos.

En virtud de lo anterior, se considera que la memoria colectiva de la élite empresarial está definida a temprana edad por un conjunto de vivencias “difíciles” y “complejas”, marcadas por recuerdos negativos de violencia política y de “inseguridad física y existencial”. Estas vivencias, como se verá a continuación, tienen un impacto global en el desarrollo de sus creencias más básicas (Páez & Basabe, 1993; Manzi y otros, 2013; Arnoso, Cárdenas, & Páez, 2012), lo que no es muy diferente de lo planteado por varios expertos en el estudio de la memoria, para quienes esta dimensión puede ser fundamental en la formación de la cultura política (Guichard & Henríquez, 2011; Haye, Manzi & González, 2013; Arnoso, Cárdenas, & Páez, 2012; Cornejo, y otros, 2013).

De hecho, los estudiosos de esta temática, con base en estudios empíricos, son lo suficientemente categóricos en indicar que algunos acontecimientos históricos vividos por algunos grupos o generaciones a temprana edad, pueden marcar su memoria colectiva en forma prácticamente definitiva, muy en la línea de lo planteado por la literatura sobre la socialización política temprana, que le concede a las experiencias vividas en los “años impresionables” un aspecto duradero y muchas veces inmodificable (Sears, 1990; Trafimow & Wyer, 1993; Percheron & Jennings, 1981; Maravall, 1978; Mannheim, 1958; Jennings, 2007; Halbwachs, 1995; Whitefield & Evans, 1999; Manzi y otros, 2013; Guichard & Henríquez, 2011).

En todo caso, hablamos de sucesos sociales complejos (que no siempre tienen un carácter negativo o “traumático”), y que por su misma singularidad, pueden llegar a producir una suerte de “identidad colectiva” en aquellas personas que los experimentaron (Mannheim, 1958). Así ocurrió, por ejemplo, con la generación de mayo del 68’ en algunos países europeos, en la que participaron cientos de miles de estudiantes que protagonizaron uno de los movimientos culturales más llamativos del siglo pasado, y cuyo impacto aún permanece en la memoria colectiva de esas generaciones. Lo anterior también vale para calificar a otros grupos como, por ejemplo, la generación de españoles que vivió la “transición a la democracia” luego de la prolongada dictadura de Franco, generación conocida en la literatura como la “generación de la transición” (de Miguel, Cäis, & Castilla, 1994).

Pero la experiencia de Mayo del 68’ o el “destape cultural” que experimentó la “generación española de la transición” no es para nada cercano a lo que ocurre con los entrevistados de esta investigación. Esto es así porque hablamos a todas luces de una “memoria disidente”, caracterizada por una “filosofía de la historia” negativa sobre el gobierno popular (Arnoso, Cárdenas, & Páez, 2012). En tal sentido, su normatividad se asocia, siguiendo a Halbwachs (1995), a una “lección histórica” que no se puede volver a repetir bajo ningún concepto, que hay que evitar utilizando todos los recursos necesarios para que ello ocurra, como llegó a ser la intervención militar el 11 de septiembre de 1973.

Se puede decir que esta memoria colectiva *disidente* de la Unidad Popular, está atravesada por recuerdos y sentimientos negativos, siendo estas afectividades también compartidas por otros colectivos de la época, sobre todo de aquellos grupos políticos que se posicionaban en la derecha y también en algunos sectores de centro. Así lo demuestran varias investigaciones sobre cultura política presentadas a lo largo de este estudio, que ponen de relieve la ubicación en el espacio político para bien definir el apoyo cívico al golpe y la dictadura militar, o también para definir un lugar de oposición a estos sucesos (Huneus, 1987 y 2003; Baño, 1993; CEP, 1988).

Cabe añadir que otros hallazgos científicos también complejizan un poco este “estado de la cultura política” en el caso chileno. En ese marco, algunos investigadores centrados en el estudio de la memoria, además han sostenido que la posición política no sólo es fundamental para identificar el apoyo al régimen militar o la democracia, sino que también es esencial para formar la propia memoria histórica y colectiva (Haye y otros, 2003; Manzi y otros, 2013). Esto último significa que la re-interpretación y/o “representación ideológica” que se hace sobre el pasado, sus causas y efectos, están signadas por la ubicación de cada persona o grupo en el entorno ideológico.

Lo anterior va en la misma línea de análisis de este trabajo, y lleva necesariamente a volver la vista sobre la “configuración ideológica” de los entrevistados de la élite empresarial, sobre todo para indagar en la *formación* de sus memorias respecto de la experiencia de la Unidad Popular y el golpe militar. Esto puede ser fundamental para develar cómo se construye la memoria colectiva respecto de los acontecimientos vividos, pero además, es elemental para observar cómo este sujeto en la actualidad re-evalúa o re-construye, a casi 50 años de la Unidad Popular y del golpe militar, el impacto de dichos eventos en la memoria histórica de los chilenos.

## **2. Las memorias “traumáticas” en torno a la violencia política**

El impacto de la relación entre “configuración ideológica” y “memoria” es tan profundo en el caso chileno, que incluso se podría decir que atraviesa a parte importante de la literatura referida al fenómeno de la Unidad Popular. Así, las diversas miradas o re-construcciones de la “memoria” que hacen sus actores, también están signadas por las dimensiones enunciadas, lo que se puede identificar en varios libros y ensayos sobre el período. Estas interpretaciones pueden ser divididas, caricaturescamente, entre aquellas más influidas por el pensamiento “progresista”, y por otro lado, por aquellas más próximas al pensamiento “conservador”.

En esa dirección, desde el pensamiento “progresista” se reconoce la existencia de una fuerte polarización política durante la UP, acompañada de un clima político muy álgido, producido, fundamentalmente, por la lucha política entre partidarios del gobierno y de aquellos que se posicionaban en el bando contrario (Valenzuela, 1978; Garretón & Moulian, 1985). De hecho, el revisionismo y la renovación ideológica del progresismo, ha concluido en líneas generales, que la experiencia de la Unidad Popular no debería volverse a repetir nunca más en Chile. Al respecto, las lecciones son variadas, pero todas ellas tienen un denominador común: la imposibilidad de realizar cambios profundos en la sociedad sin mayorías políticas, siendo la “democracia” el régimen político apropiado

para lograr consensuadamente dichas transformaciones (Arrate, 1985; Moulian, 1983; Boeninger, 1997; Flisflisch, 1987).

Esta revisión del pasado por parte de la “intelligencia” del centroizquierda, realiza una crítica a la polarización y excesiva “sobreideologización” de parte de los actores que participaron en la UP; también fustiga el cómo se pudo llegar a una imposibilidad de diálogo entre extremos y el centro; y, finalmente, valora negativamente la radicalización de algunos sectores políticos, especialmente de algunos sectores de izquierda, que como indiqué, se debatían acaloradamente entre “reformismo” o “revolución” (Gazmuri, 2003).

Pero más allá del evidente y necesario revisionismo, también es cierto que desde esta vertiente se señala enfáticamente la ausencia de una “guerra civil” durante el período de la Unidad Popular (Huneus, 2003). En efecto, aún cuando hay un reconocimiento de que las pasiones políticas –parafraseando a Max Weber– desbordaron una suerte de “ética de la responsabilidad” (Flisflisch, 1987) de quienes tomaban decisiones políticas (Linz, 1978), lo cierto es que dicho desenfreno no implicó un enfrentamiento civil entre grupos armados por fuera del “monopolio legítimo de la violencia física”. Estas apreciaciones de la élite intelectual respecto del pasado se pueden corroborar en algunos estudios actuales de la “memoria histórica” nacional, que concluyen que el “imaginario” de resistencia al golpe militar más bien fue débil (53,4%), siendo esta creencia más pronunciada en la gente de izquierda que de derecha (Manzi y otros, 2003, pág. 189)<sup>33</sup>. Creo que bien sintetiza el clima de la época Alan Angell (1993), quien se refiere a la “crisis política” del país durante el gobierno de la Unidad Popular del siguiente modo:

*“Es imposible transmitir la atmósfera de los años de gobierno de la UP entregando solamente una simple narración de las estadísticas económicas y políticas. Hubo muchas transformaciones. Conceptos antiguos, como el de afiliación a diferentes partidos, cambiaron y se dejaron de considerar una mera expresión de preferencia para convertirse en una posición en la “lucha de clases”. Se quebró el consenso general acerca de la validez del sistema constitucional. Aumentó la intensidad y frecuencia de la violencia política, muy poco común en Chile hasta ese momento. Nuevos movimientos, vagamente identificados como “poder popular”, intensificaron las demandas de vastos sectores y no sólo alarmaron a la oposición, sino que también debilitaron la autoridad política del gobierno. Todos los aspectos de la vida se politizaron y la política misma se polarizó: se estaba a favor o en contra del gobierno. La terrible brutalidad con que se le puso fin, el 11 de septiembre de 1973, es un triste testimonio de los niveles a que había llegado la pasión política (pág. 61)”<sup>34</sup>.*

Análisis de posturas un tanto más conservadoras matizan o impugnan esta percepción de la “violencia política”, esgrimiendo una intensidad muchísimo mayor, bastante más próxima a lo que se ha denominado como una “guerra civil” (Góngora, 1986; Guzmán,

---

<sup>33</sup> A mayor profundización, en 1990 sobre un 40% declaraba la existencia de una “guerra civil” antes del golpe militar, cifra que en 1999 disminuyó a 33%. Son las personas de derecha las que más manifiestan la existencia de este hecho, ya que la gente de centro e izquierda señala más bien una ausencia de este hecho (Huneus, 2003, pág. 44).

<sup>34</sup> Las cursivas son mías.

1993; Arancibia, 2011). Así describe la “situación política” del país el célebre historiador Mario Góngora: “(...) *la perspectiva general de esos años, sobre todo la del último (1972–1973), es la de una guerra civil todavía no armada, análoga a los últimos meses de la república española, antes de julio de 1936. Fue un reflejo de la guerra ideológica mundial entre concepciones irreconciliables: más que una guerra de clases, una lucha de pasiones que destruyó para siempre la imagen convencional del Chile moderado y equilibrado*” (págs. 293–294).

La interpretación “progresista” y “conservadora” muestran visiones encontradas, de percepción, recuerdos y formación de la memoria definidas por configuraciones ideológicas distintas, y que parecen primar por sobre la propia construcción “objetiva” de la memoria (Aguilar, 2007): en este caso particular, la diferencia radica, sobre todo, en cómo se concibe la *intensidad* de la “violencia política”. Como se verá más adelante, este asunto es relevante, ya que muchos de quienes se identifican con la derecha, justifican la intervención militar aludiendo a la existencia de un clima beligerante que hacía necesario frenar desde las Fuerzas Armadas (Huneeus, 2003; Manzi y otros, 2003).

En este contexto cruzado por interpretaciones “oficiales” disímiles, puede ser apropiado seguir el consejo de Juan Linz (1978), y prestar atención a la rememorización de experiencias vividas por los actores “*que estuvieron allí*” (Cornejo y otros, 2013), siendo menos sobresaliente la propia *veracidad* de los hechos. Esto es así porque la fase de “rememorización” puede producir representaciones vitales de la experiencia que pueden “*no coincidir con la “realidad”, sin que sea el sujeto consciente de ello*” (Cáis, Folguera, & Formoso, 2014, pág. 31). Bajo esta tesitura, en este ejercicio analítico e interpretativo de rescatar algunos discursos de los propios actores, se pueden encontrar notables coincidencias y también discrepancias respecto de lo que señala la literatura especializada.

En efecto, la sociedad chilena durante la Unidad Popular parece ser que estaba muy polarizada y mantenía la presencia de un clima álgido de tensión política, en el que gran parte de los actores que participaron en la *toma de decisiones* tuvo responsabilidad en el trágico desenlace de 1973. Se puede hacer esta afirmación “normativa” tomando en cuenta lo que *siente* parte de la ciudadanía que vivió este acontecimiento, ya que algunas investigaciones mencionan que una gran mayoría percibía la existencia de un clima de polarización y violencia política en el país. Por cierto, esta percepción es transversal al entorno ideológico (Valenzuela, 1978, pág. 188; Huneeus, 1987), lo que tiene su correlato en los testimonios de entrevistados de ambas cámaras analizadas, independientemente de la posición política de los participantes, como se puede ver a continuación:

“(...) y mi sensación era que estábamos a punto de una guerra civil... qué es lo que pasaba que la gente se juntaba en los barrios y decía: “pongámonos defensa”, había una amenaza en los cordones industriales que se llamaban y la percepción era esa, que estábamos al borde de la guerra civil” (E28, 69 años, SNA, derecha).

“Ahora, también a veces me pregunto si no hubiese habido este golpe... mi sensación es que íbamos derecho a una “guerra civil” y siento que una guerra civil hubiese tenido efectos mucho más devastadores que lo devastador que fue

el gobierno militar. Pero comparémoslo con la guerra civil española, hablamos de un millón de muertos, el año 39', entonces, imagínate acá... yo creo que aquí nadie puede estar de acuerdo con las cosas que se hicieron, pero me temo que la alternativa que yo veía ahí era la guerra civil y ahí eso podría haber sido mucho peor" (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

"Cuando llegó la Unidad Popular sufrimos ataques, nos quebraron vidrios, la familia de alguna manera se rompe porque unos son de un lado y otros de otro lado. Los parientes de mi madre eran del Partido Comunista, era todo una mezcla; las familias se van resistiendo cuando existen esos niveles de *radicalización* que hubieron en el tiempo de la Unidad Popular" (E16, 70 años, SNA, apolítico).

Los fundamentos de esta "violencia política" son variados. Sucintamente, se trata de un gobierno socialista que llega por la vía electoral con una mayoría relativa (36,6%), con un programa de cambios profundos en la sociedad. Estos incluían, según el mismo presidente Allende, avanzar hacia el socialismo con un "gobierno revolucionario"<sup>35</sup>, que era una alternativa política que parte importante del país *no compartía* plenamente. Ya indiqué que se trataba de un país con una fuerte identificación con el centro político, con una historia institucional de bastante moderación y gradualismo y cuya "fórmula política" habían sido los "consensos" entre las élites, acuerdos que se empiezan a resquebrajar a partir de la década del sesenta, especialmente con la reforma a la propiedad en 1967 y la reforma agraria (Moulian, 1982; Ruiz-Tagle, 2015; Avendaño & Escudero, 2016).

En este contexto, algunas cifras muestran que la llegada de Allende al poder tiene un carácter amenazante para la sociedad. Evidentemente, este clima de violencia política durante el gobierno popular era bastante más desarrollado en la clase alta (98%) y la clase media (92%), mientras los sectores populares parecían percibir *menos* este clima de tensión (75%). Y de hecho, esta similitud entre los sectores altos y medios parece extrapolarse a otras valoraciones políticas, ya que ambos sectores responsabilizaban en 1972, fundamentalmente al gobierno de Allende como también a la oposición del clima de violencia en el país. Esta apreciación es muchísimo menos compartida por los sectores más populares –que como indiqué estaban más identificados con la izquierda y con el gobierno– ya que para este grupo social, la mayor responsabilidad en la generación de violencia la tenía la oposición, y muchísimo menos el gobierno del presidente Allende (Valenzuela, 1978). Lo anterior vuelve a poner de manifiesto el marcado carácter polarizado y "clasista" de la política chilena durante este momento histórico, ya que las *determinantes sociales* parecen tener una expresión política bastante nítida (Lipset & Rokkan, 2001).

Los cambios que producían mayor resquemor en los sectores privilegiados eran la reforma agraria y la intervención de empresas privadas (Larrañaga, 2001 y 2016; Ffrench-Davis, 2003; Fermandois, 2013; Góngora, 1986). Pero se trata, en todo caso, de

---

<sup>35</sup> Véase el discurso de Salvador Allende llamado: "El pueblo entrará conmigo a La Moneda", disponible en el magnífico libro recopilatorio de discursos de líderes políticos llamado *Los Discursos del Poder* (2003).



transformaciones promovidas por las élites que participaron en la toma de decisiones de la época. En efecto, la reforma agraria aun cuando ha sido considerada un aporte significativo para la productividad y modernización del campo (no así en su efecto redistributivo) (Beyer, 1997), no era una aspiración mayoritaria de la sociedad chilena. Ello porque, como muestra Carlos Huneeus (1987), la reforma del campo era prioritaria para menos del 10% de la población (pág. 48), lo que da cuenta del ímpetu transformador que tenían las dirigencias políticas de la UP, que no necesariamente sintonizaba con las demandas ciudadanas más urgentes de ese entonces.

En verdad, la reforma agraria implicó una fuerte redistribución del poder político y económico, ya que su aplicación tuvo un impacto devastador en los sectores propietarios del campo (Montero, 1996; Manzi y otros, 2004; Avendaño & Escudero, 2016; Arriagada, 2005; Campero, 1984; Valdés, 2016). Así lo expresa Pedro Minai, un dirigente activo y partidario de la implementación de la reforma agraria en su momento, quien subraya el impacto que significó para los empresarios agrícolas la implementación de la reforma: *“Es un hecho que con Allende se acabó el Latifundio: el efecto político que generó en los empresarios agrícolas, que se les decía latifundistas, se puso fin a la clase social, cuando ellos tenían el poder institucional, económico y político por años, dejó de existir (...) la Reforma Agraria nació como un castigo a los malos empresarios y para expropiar la tierra y hacerla producir. Ese fue un golpe muy fuerte para la oligarquía política y económica, creándose en el campo toda una resistencia. Hubo víctimas de este proceso”* (Andreani, 2010, pág. 122).

Como se puede deducir del fragmento, mientras para algunos actores políticos la reforma agraria significó un cambio positivo en la distribución del poder en la sociedad chilena —con *víctimas* incluidas como parte de este proceso—, para los entrevistados mayores de esta investigación significó una situación verdaderamente *dramática*. El análisis de las entrevistas muestra en la élite empresarial una memoria colectiva “trastocada” y disidente de las políticas del gobierno. En suma, hablamos de un “yo sobreviviente” (Cornejo y otros, 2013) de la potencia de las transformaciones que tuvieron lugar durante la “experiencia socialista”.

El examen de los testimonios así lo verifica, ya que las experiencias vividas por los entrevistados están profundamente marcadas por la percepción de un clima político beligerante y por *vivencias familiares directas de “violencia política”* durante el gobierno de la Unidad Popular. Estas situaciones fueron experimentadas con *muchísima más intensidad en los dirigentes empresariales de la SNA*, quienes casi en su totalidad fueron expropiados por la reforma agraria. En el caso de la SOFOFA, los sucesos ocurrieron de forma distinta, ya que entre los entrevistados solamente hubo un caso de expropiación, siendo mucho más significativo para estos últimos participantes el clima político de polarización, la sensación de “caos social” y el problema del desabastecimiento.

La situación de expropiación y violencia política se debe con mayor frecuencia por la “posición social” de las familias de los entrevistados. No hay que olvidar que la mayoría de las familias de la SNA venían del mundo empresarial, mientras los padres de los dirigentes de la SOFOFA no poseían gran patrimonio económico y estaban más vinculados al mundo profesional. Esto revela una importante *diferencia* con respecto a la formación de la “memoria colectiva”, ya que en el caso de los entrevistados agrícolas,

estos defendieron personalmente sus propiedades, con una clara exposición física y existencial tanto de los entrevistados como de sus familias, mientras que en el caso de las familias de la SOFOFA, nada de esto ocurrió.

“Después vino una toma ilegal del predio en que la *defendimos con toda mi familia* durante una noche y al día siguiente llegaron un montón de agricultores y amigos, y el campo efectivamente no pudo ser ocupado por la gente que pretendía tomársela. Además, los trabajadores que tenía mi padre era gente que estaba absolutamente del lado de él y lo ayudaron en reprimir esta toma ilegal (...) *así que desde ese punto de vista la vivimos en una forma bastante difícil porque la defendimos, la tuvimos que defender, yo tenía 13 años, tuvimos que hacer uso de armas me acuerdo en ese minuto para defender nuestra propiedad (...) salimos en ese sentido si bien afectados, mucho menos afectados que otras personas desde el punto de vista patrimonial, pero efectivamente desde el punto de vista emocional, de lo que significó para nosotros la reforma agraria fue un golpe bastante duro*” (E31, 60 años, SNA, derecha).

“Fue dura la expropiación, yo recuerdo cuando era chico como fue la expropiación y justo en 1971 se murió mi papá y mi abuelo cuando ya le expropiaron el campo dijo: *“bueno, ya no me queda por qué vivir”* ... y ahí se fue como deteriorando todo lo que teníamos (...) *así que fue duro por el tema de las expropiaciones y defender los campos y todo eso fue muy duro*” (E1, 60 años, SNA, centro).

Como manifiestan con claridad los participantes, el “trauma sociopolítico” no solamente tiene que ver con la pérdida del patrimonio y/o el cambio en la distribución del poder económico y político. Por ello, su dimensión es más compleja y no se puede reducir únicamente a una lectura economicista influida por la corriente de *Rational Choice* (Barry, 1974), ni menos a una lectura marxista como si sólo de las posesiones económicas se tratara el asunto (Gómez Leyton, 2003). En efecto, sin negar la relevancia de la dimensión económica, lo que se intenta hacer aquí es más bien incorporar una dimensión “cultural” que tiene un impacto emocional duradero en las familias de los entrevistados, puesto que las medidas coercitivas que impulsa el gobierno lleva a situaciones extremas en este grupo, que ve *trastocado sus valores aprendidos a temprana edad*, sobre todos aquellos asociados a las “libertades individuales” y la “propiedad privada”. Este último valor ya no entendido como pura materialidad o una simbología del poder, sino como un “*habitus*” o “*ethos cultural*” al decir de Joseph schumpeter (1957), que define, en consecuencia, su visión del mundo y su comportamiento dentro de éste. He ahí la elucubración de expresiones tales como “*fue doloroso*”, “*¡un país desquiciado!*”, “*¡gente con un odio!*” o “*estábamos enfermos*” ...etc., las que tienen una fuerte carga emocional negativa para referirse a estos acontecimientos que han marcado las “prácticas de vida” de los entrevistados.

Ya mencioné que en la SOFOFA estos recuerdos *fueron traumáticos pero menos intensos*, y más entrelazados con la percepción generalizada de la población, la que percibía la presencia de un clima político polarizado y altamente politizado. Sólo existió

un caso de expropiación, que es ilustrativo de la enorme diferencia entre la expropiación producida a través de la reforma agraria y la intervención legal que tenía lugar en las empresas de otros rubros. Esta intervención, como indican Arriagada (2004) y Campero (1984), fue mucho menos violenta y tuvo menos enfrentamientos directos entre propietarios, interventores y partidarios del gobierno. De hecho, en muchas ocasiones estas intervenciones tenían un carácter legal, por lo que el sentido de perder la propiedad parecía no ser tan agresivo y por tanto, no impactaba al sujeto de un modo tan permanente, “(...) él estaba acá (mi padre), le intervinieron la empresa, estuvo intervenida dos años y a él lo mandaron a la casa, y bueno fueron cosas terribles. También, durante el gobierno de Frei le expropiaron el campo a mi papá en Ovalle, entonces tuvimos experiencias bien amargas. Dejaron sólo 40 hectáreas básicas” (E12, 74 años, SOFOFA, derecha).

### 3. Memorias del desabastecimiento

Otro de los fenómenos más duraderos en la memoria colectiva de los chilenos durante la UP es la experiencia del “desabastecimiento”. Esta crisis económica consistía en una ausencia de productos básicos para alimentarse, generada por una creciente demanda de la población, la que a raíz de algunas medidas redistributivas del ingreso implementadas por el gobierno, había visto mejorada su realidad económica con un alza de salarios (Fermendois, 2013; Larrañaga, 2016). Este mejoramiento, según indican algunos economistas, provocó un acelerado proceso de importación de bienes, sobre todo porque el empresariado chileno no tenía la capacidad suficiente para cubrir la demanda interna de productos que aumentaba rápidamente (Lambrecht, 2011; French–Davis, 2003): el desenlace de este problema fue un grave desequilibrio macroeconómico que aumentó la inflación hasta casi un 700%, lo que llevó a la creación de un “mercado negro” y a la intervención directa del gobierno para satisfacer las necesidades de la población (Garretón & Moulian, 1985; Fermendois, 2013).

Es a fines de 1971 y comienzos de 1972 el tiempo en que este problema de escasez comienza a agudizarse y a ser sentido por la población. Como respuesta, el gobierno del presidente Allende junto a organizaciones sociales, crean la Junta de Abastecimiento Popular (JAP), cuyo objetivo era aliviar el déficit de productos básicos para la supervivencia. Esto último, se produce en medio una fuerte movilización social del empresariado, tanto de las organizaciones gremiales como de los pequeños comerciantes, y, en general, de los sectores altos y medios: todos estos tienen como denominador común atribuir la culpabilidad de la crisis al gobierno de turno (Campero, 1984). Con un tono efusivo describe esta movilización uno de los entrevistados en esta investigación, quien fue un activo dirigente del movimiento gremialista opositor al gobierno de Allende: “(...) Orlando Sáenz<sup>36</sup> se transformó un poquito en líder de los independientes contra Allende y empezó a organizar el movimiento empresarial y nos contactamos con la SNA que en esa época la presidía Manuel Valdés, que fue muy clave en esto. Y Orlando tuvo la gracia de pensar que el sector empresarial también estaba en los comerciantes, en el pequeño

---

<sup>36</sup> Presidente de la SOFOFA entre 1971 y 1974.

*comercio, que eran millones, que estaban en todas partes, en los camioneros, que era un sector más “medio”, tal vez menos que “medio”, pero empresarios, que todos eran dueños de uno o dos camiones, entonces, tenían una actitud distinta. Y yo te diría que nunca habíamos tomado contacto con las CONUPIAS<sup>37</sup>, las pequeñas industrias, nunca habían entrado a la SOFOFA. ¡Para qué decir los camioneros! y se empezó entonces a formar con ellos un centro de resistencia, una articulación. Como te digo fue muy visionario Orlando, al darse cuenta que entre la SNA, la SONAMI y la SOFOFA no íbamos a mover a las masas ni íbamos a parar a nadie, sin embargo, con el comercio detallista y con los camioneros sí se podía hacer y con los pescadores” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).*

Este último relato da cuenta del “ánimo” de la oposición y del clima de descontento que había con el gobierno de la UP, siendo muchos los problemas que detonaban las movilizaciones. Sin duda, es el desabastecimiento uno de los problemas más importantes percibidos por las generaciones que vivieron en plenitud la “experiencia socialista” (Huneus, 1987). De hecho, la literatura muestra que las vivencias de escasez fueron un episodio negativo que afectó a prácticamente todo el país, siendo los sectores altos (99%) y medios (77%), los que más expresaron sentir la ausencia de productos de primera necesidad (Valenzuela, 1978). Por cierto, ya expliqué que se trata de los sectores de mayor oposición al “gobierno popular”, y de hecho, otra expresión de su movilización fue el fenómeno de los “cacerolazos”, consistente en la movilización de mujeres de clase alta y media que protestan en la calle con sus ollas vacías a raíz de la falta de alimentos.

Los datos expuestos prueban que la crisis económica afectó en su totalidad a la sociedad chilena, no obstante, lo cierto es que el fenómeno de la “sobreideologización” (Salazar, 2001) de las generaciones que “*estuvieron allí*” es notorio, y muestra los marcados prejuicios de “clase” existentes. Esto se puede distinguir en la siguiente afirmación que realiza una señora dueña de casa identificada con el gobierno popular, quien señala que el problema del desabastecimiento sólo afectaba a quienes no tenían riqueza, “*(...) la gente común y corriente no tenía cosas guardadas, los poderosos, los que tenían plata sí, pero la gente humilde, no*” (Gajardo, 2013, pág. 143). Esta afirmación no es un relato aislado, y de alguna manera puede ser representativo del sentir de muchas personas que creían en el proyecto de la Unidad Popular.

En virtud de lo anterior, se pueden distinguir otras “memorias” que no necesariamente coinciden en recuerdos y valoraciones del mismo acontecimiento histórico vivido, tal como lo expresan los entrevistados. Efectivamente, muchos partidarios del gobierno de la UP percibían de una manera muy diferente la situación de desabastecimiento, sobre todo los sectores más populares que se sentían más identificados con el proyecto de la Unidad Popular (Baño, 1993; Valenzuela, 1978; Garretón & Moulian, 1985). Esto vuelve a poner de manifiesto lo sobresaliente de las determinantes sociales y políticas en la formación de la memoria colectiva e histórica, que forman una parte esencial de la “constelación” de conceptos que nutren la noción de cultura política: “*(...) Es cierto, yo era madre y temía por no tener que darle a mis hijos, pero nos las*

---

<sup>37</sup> El entrevistado se refiere a la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile.

*arreglamos siempre.... cuando había desabastecimiento no sufrimos, el sufrimiento comenzó después del golpe” (Gajardo, 2013, pág.131).*

Como se puede inferir de algunos fragmentos seleccionados, la situación de desabastecimiento traía consigo una profunda preocupación por la “supervivencia”, sin embargo, también es cierto que quienes han estudiado este período, señalan que la experiencia del desabastecimiento es compleja y puede ser leída desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Gajardo (2013), destaca el carácter “comunitario” que tenían las JAP, ya que algunas personas implicadas con el proyecto político de la UP, se organizaban colectivamente para enfrentar la adversidad, colaborando solidariamente entre ellas para superar la ausencia de productos, lo que fortalecía los vínculos sociales en el mundo por fuera de las élites.

Por otra parte, la experiencia de las largas “colas” o “filas” para adquirir productos tenía un rico carácter en lo que a socialización se refiere. En estas instancias se encontraban todos aquellos que tenían necesidad de comprar: personas con recursos económicos y también gente proveniente del mundo popular, lo que hacía de esta experiencia una interacción alegórica e interesante de analizar. Así se refiere el historiador Joaquin Fernandois (2013) a la experiencia de las filas durante el gobierno de la UP: *“Como espacio de encuentro social, el aspecto de pequeño carnaval que podía tener el “mundo de las colas” correspondía a esa parte de toda convulsión política y social que, por violenta y en muchos casos sangrienta que fuera, no dejaba de tener, al menos, una primera fase de fiesta, de carnaval, de mundo vuelto al revés (...) Así, la vida de las colas no era siempre un azote, un trabajo irritante ni, como no pocos lo pensaban, de humillación, dado que se desarrolló una vida social bastante activa en torno a ellas”* (pág. 584)<sup>38</sup>.

Esta descripción del alegórico “mundo de las colas”, es muy lejana respecto de los recuerdos que marcan la memoria colectiva de la élite empresarial sobre la situación del desabastecimiento. Pues bien –y contrariamente respecto de los prejuicios de aquellos que creían que los más privilegiados no tenían problemas con el desabastecimiento–, los testimonios de los entrevistados sobre esta temática tienen más bien un tono “sobrecogedor”. En efecto, aunque la gran mayoría también manifestó haber tenido problemas para adquirir productos alimenticios, lo más enfatizado por los entrevistados fueron problemas relacionados con la adquisición de medicamentos para combatir enfermedades, lo que fue mencionado en varios relatos recogidos con un tono emocional:

“O sea, nosotros vivimos el que no había mercadería, que había que hacer cola para conseguir las cosas, fue un desastre, fue un verdadero desastre, había mucha tensión” (E32, 72 años, SNA, derecha).

“Un día llegué un poco más temprano, y entro a la casa y la veo llorando y le dije “chica, ¿pero qué te pasa? me dijo, “fui a hacer la cola para comprar el pan y no hay pan”... ¡el sentimiento que ella tenía! ¡es como si fuera hoy!... bueno,

---

<sup>38</sup> Dentro del ambiente de carnaval que describe J. Fernandois, a veces se producían confrontaciones, ya que también estaban los “coleros”, que hacían de ello una ocupación para luego revender los productos conseguidos.

nació mi hijo y como a los tres meses lo llevamos al pediatra, y él empieza a mudar para poder revisarlo y el niño se empieza a chupar el dedo y el niño tenía hambre, “y que el niño no está comiendo bien, acá tiene una receta”, dijo el médico. Fui a todas las farmacias de Temuco y no encontré, puse un SOS en la oficina hasta que al final se consiguieron, me la conseguí en el mercado negro... yo ya ahí decía ¡aquí no hay nada más que hacer! ¿esto qué es? y yo ya ahí veía que el proceso no tenía ningún destino” (E28, 69 años, SNA, republicano).

“Yo creo que estas experiencias de rupturismo muy profundo, de una revolución, tienen costos muy altos. Fíjate que yo sufro de asma de toda la vida, desde chico. En la época de la Unidad Popular cuando yo entré a la universidad, para comprar algunos inhaladores o medicamentos que usaba, hubo ocasiones en las cuales yo caminaba días enteros, farmacia tras farmacia para encontrar algún medicamento, el que hubiera para poder combatir la enfermedad, en lugar de estar en la universidad... *esas cosas te marcan bastante*” (E3, 77 años, SOFOFA, derecha).

En la mayoría de los testimonios de los entrevistados de la SOFOFA y la SNA, el asunto del desabastecimiento no fue recordado gratamente, sino que más bien fue reconstruido sobre la base de sentimientos negativos. En esa dirección, varios entrevistados esgrimieron expresiones tales como: *“yo tenía amigos que no tenían que comer”*, *“yo creo que lamentablemente se le escapó de las manos al gobierno del presidente Allende al creer obviamente en el pueblo”* o *“lo que pasaba en Chile era muy angustiante”*; expresiones discursivas que dan cuenta de la intensidad, crudeza y determinación de las experiencias vividas durante este acontecimiento histórico.

#### **4. Memorias sobre la “polarización”**

Otro de los fenómenos más latentes en la memoria histórica y colectiva de los chilenos es el proceso de “polarización” que se vivió durante la UP. Como se ha indicado en páginas anteriores, éste se comienza a desarrollar sobre todo desde mediados de la década del sesenta, llegando a su climax en 1973.

Efectivamente, como muestra la literatura, esta situación de distanciamiento entre los extremos políticos se dio con más fuerza en el nivel institucional y de las élites, especialmente, a través del sistema de partidos (Ruiz, 2005), que por su propia naturaleza “pluralista”, contenía partidos institucionalistas pero también fuerzas políticas y sociales que tensionaban los marcos normativos de la democracia hacia una vía revolucionaria (Sartori, 1976).

Algunas de las razones políticas que explican el desarrollo de esta polarización son: la influencia ideológica de la revolución cubana en las dirigencias de izquierda (Huneus & Morales, 2003); también la naturaleza céntrica y rígida del centro político (Ruiz, 2005), el que, como ya indiqué antes, tenía un proyecto diferenciado de la izquierda y la derecha, optando durante el gobierno de Frei por el “camino propio” (Moulian, 1994; Moulian & Osorio, 2014). Por otra parte, fue decisivo el diseño institucional, que facultaba exageradamente el “presidencialismo” sin un sistema de contrapesos eficiente

que pudiera equilibrar al poder del ejecutivo; además se enfatizan algunas razones de orden socioeconómico, como la política de nacionalizaciones y la reforma agraria (Ruiz, 2005), aun cuando éstas se basaron en aprobaciones constitucionales aprobadas previamente por el Congreso Nacional.

A grandes rasgos, los elementos anteriormente enunciados tuvieron un impacto en la intensidad del proceso de polarización, el que además afectaba a las élites pero también al mundo social sin poder efectivo (Baño, 1993; Huneus, 1987). Así, quienes han analizado empíricamente este período, señalan que los “sentimientos” de la población de ese entonces estaban absolutamente divididos, ya que cerca de la mitad de los chilenos creía que con Allende el país iba a ir a “mejor”, mientras la otra mitad pensaba todo lo contrario. En el mismo sentido, los partidarios del gobierno veían con optimismo la “vía chilena al socialismo”, mientras su contraparte anhelaba la intervención militar con un golpe militar (Navia & Osorio, 2015).

Evidentemente, esta situación de distanciamiento entre los extremos a nivel sistémico y también –parafraseando a Habermas– en el “mundo de la vida”, se reflejaba en forma particular en las vidas personales de los entrevistados. En su totalidad ellos percibían una excesiva polarización y politización de todos los ámbitos de la vida, que hacían imposible el diálogo político, incluso extrapolando esa incomunicación a otras dimensiones humanas.

“Había mucha tensión, habían luchas en las calles, grupos antagónicos se tiraban piedras, habían disparos, de hecho, en la industria azucarera mucha gente era de izquierda, después se decía y se supo de que tenían una lista en el caso de que hubiera un enfrentamiento, quienes eran las personas que tenían que liquidar, personas del bando contrario, ¿ese era el grado de tensión que había! hay que haberlo vivido realmente, nosotros veíamos las luchas en las calles, ¡era tremendo! ¡una cosa que no daba para más!” (E32, 72 años, SNA, derecha).

“Yo tuve siempre amigos en los *tres sectores*, buenos amigos, teníamos conversaciones, pero había una dificultad enorme, una radicalización muy grande, una descalificación muy grande y yo creo que esa descalificación entre los distintos grupos entre sí hace imposible colaborar” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

Por cierto, las percepciones de los entrevistados de ambas patronales son bastantes congruentes con las de aquellos que pertenecen a los sectores más altos de la sociedad y que, además, son mayoritariamente de derecha (Valenzuela, 1978). Esto vuelve a corroborar lo decisivo que es la posición social y también la posición política de la élite empresarial en la formación de su memoria colectiva.

En vista del examen anterior, se puede inferir en forma concluyente, que las vivencias personales y familiares que tuvieron los entrevistados frente a los acontecimientos descritos, *fortalecieron e intensificaron sus posiciones políticas hacia la derecha* (adquiridas tempranamente por la vía familiar), e incluso acercaron a esta posición política a quienes aún no tenían una identificación ideológica definida.

Esto se puede haber producido, de acuerdo al análisis de los discursos de los entrevistados, por varias razones. Por un lado, por la excesiva polarización y politización, que hacían imposible el diálogo político entre los distintos sectores, afectando también las vidas personales de los entrevistados más longevos de ambas organizaciones empresariales.

Por otro lado, debido a las experiencias directas de “violencia política” sufridas a raíz de los profundos cambios implementados por el gobierno popular y también las vivencias de desabastecimiento, que afectaban directamente la vida cotidiana en los hogares de la sociedad chilena. El denominador común de estas situaciones son las *sensaciones o sentimientos de “inseguridad física y existencial”* (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel, 2006).

Como se verá en lo que sigue, estos tres elementos son definitorios en los entrevistados para reclamar y adherir a la intervención de las Fuerzas Armadas el día 11 de septiembre de 1973.

## **5. Memorias en torno al golpe militar de 1973**

Utilizando una expresión Wetsby & Braungart (1966), podemos colegir que el proceso de “radicalización política” hacia la derecha de los entrevistados, no tiene ni un carácter “espontáneo”, ni tampoco “economicista”, como se podría argumentar a partir de los postulados de la teoría de la elección racional y del marxismo (Downs, 2001; Barry, 1974; Almond, 1980). Desde una mirada distinta y más culturalista, se puede fundamentar que esta radicalización tiene su base en la naturaleza “traumática” de su memoria colectiva. Y esto se puede corroborar en los fragmentos expuestos a continuación, ya que los entrevistados ante la pregunta sobre *cómo había afectado la experiencia de la UP en su “visión política” del mundo*, respondieron manifiestamente que dicho impacto había profundizado sus posiciones políticas hacia la *derecha*. En otros casos, la huella de lo vivido provocó “disentimiento político”, generando una posición de antagonismo al gobierno popular, identificándose luego con la derecha:

“Hemos sido claramente identificados con un sector de la derecha en el país, ni siquiera de la centro derecha, más bien a la derecha, siempre hemos estado ligado familiarmente a este sector. *Y eso fue una de las cosas que también lo reforzó* y esa fue una de las razones porque el campo fue expropiado legalmente y trató de ser tomado ilegalmente, porque mi padre fue marcadamente en la época de la Unidad Popular uno de los personajes en Los Ángeles o junto a muchos más que hicieron defensa del derecho de propiedad, y que trabajaron y se marcaron políticamente como anti gobierno de Allende, anti allendista (E31, 60 años, SNA, derecha).

“Participé en la universidad en algunos movimientos de izquierda durante un año, con una visión idealista de promover “justicia social”, de que la gente de origen más humilde tuviera mejores oportunidades, y mi experiencia personal fue que me encontré con un grupo de gente fantástica ahí, *pero me encontré con otros grupos que tenían una visión muy negativa de la sociedad. Un poco de*



*resentimiento y finalmente me alejé de eso, y con la vida me he ido poniendo más “momio”*<sup>39</sup> (E3, 77 años, derecha).

“Hay que haberlo vivido realmente, nosotros veíamos las luchas en las calles, ¡era tremendo! ¡una cosa que no daba para más! había un tremendo clamor nacional para que interviniera el ejército, los militares, yo lo sentía así, claro, era una tensión tremenda, de *inseguridad* de salir a las calles, había *enfrentamiento* en todos lados (...) *lo vimos como una salvación* (el golpe), una tremenda alegría porque era insostenible seguir en el estado en que estábamos, y toda la gente lo único que pedía, le gritaba a los cuarteles a los militares para que salieran a hacer orden” (E32, 72 años, SNA, derecha).

“Tuve esperanza con el “golpe”, sin duda que la tuve, sino no hubiera sido capaz de tomar la decisión de independizarme. Si bien, el hecho de haber estado en la escuela militar, sabía que los militares eran personas ordenadas, tengo respeto por ellos... sin duda, que me generó esperanza” (E28, 69 años, SNA, Republicano).

“(...) y las mujeres acá en Santiago, yo recuerdo el “cacerolazo” famoso, que efectivamente reclamaban por falta de alimentos, y fueron a los regimientos y le tiraban maíz a los militares, como diciendo “¡gallinas, ustedes no hacen nada!” y con “el golpe” yo pensaba: “bueno, al fin se va a ordenar la cosa” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

Las sensaciones positivas de “esperanza”, “tranquilidad”, “orden” y/o “salvación” que produjo la intervención militar en los entrevistados, son una verdadera muestra de lo que ocurrió ese día en los sectores de la oposición al gobierno de la UP. Efectivamente, el 11 de septiembre provocó sensaciones bastante ambivalentes en la sociedad chilena, siendo para la gente identificada con el gobierno una situación amenazante, mientras los sectores de derecha fueron los que se sintieron más aliviados con este suceso (Huneus, 2003). En tal sentido, expresiones verbales de entrevistados que participaron en esta investigación, también se asemejan a lo experimentado por otros actores identificados con la derecha, y que también fueron testigos directos de dicho evento, “(...) *Y después, el golpe: todos felices, todos felices; apareció el azúcar, apareció la leche, apareció todo lo que estaba escondido*” (Cornejo, 2013, pág. 56).

Esta “alegría” y “tranquilidad”, es diametralmente opuesta a lo palpado por personas identificadas con la izquierda y con el proyecto de la UP, cuyas sensaciones son negativas, “*a pesar que hayas hecho todos los esfuerzos posibles y que sinceramente hayas trabajado tratando de construir, de ser algo que vale la pena de acuerdo a ideales, empiezas a sentir que has fracasado, que has hecho mal las cosas*” (íbid, pág. 56).

---

<sup>39</sup> El concepto de “momio” es una especie de neologismo típico chileno para referirse en forma peyorativa hacia quienes se identifican con la derecha conservadora. Su uso era muy común en el vocabulario chileno en los tiempos de la polarización, particularmente, durante la Unidad Popular. Su contraparte son los “upelientos”, neologismo que se usaba desde la derecha para atacar a quienes se identificaban con la Unidad Popular (Boeninger, 1997, pág. 251).

Aunque este último relato, de algún modo, es representativo de la desazón que significó el golpe militar para una parte importante de la sociedad chilena, lo cierto es que quienes han investigado empíricamente la memoria histórica en Chile, también observan que en el centro y la izquierda –aunque muchísimo menos que en la derecha– también se desarrollaron algunos sentimientos positivos con el golpe militar, sobre todo de “alivio”, lo que muestra la complejidad del fenómeno en cuestión (Manzi y otros, 2003, pág. 184). Esto se puede distinguir en el relato que expongo a continuación, ya que el único entrevistado que se posicionó políticamente en el “centroizquierda”, también mencionó haber experimentado sensaciones positivas con la intervención de los militares: *“Cuando vino el ‘golpe’ yo era de los que esperaba una acción militar, a pesar de que tenía 17 años, pensaba que era la única manera de salir del caos que estábamos viviendo (...) yo esperaba que con esto (el golpe) se ordenara el país y pudiéramos realmente hacer las cosas que teníamos que hacer y dejar de andar en la calle tirando piedras o protestando, por lo tanto, fue una sensación de alivio”* (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

### 5.1. Las justificaciones del golpe militar

Como indicaban algunos entrevistados más arriba, el “tirarle maíz a los militares en los cuarteles para su intervención” es parte intrínseca de la memoria colectiva de los chilenos que *“estuvieron allí”* (Manzi y otros, 2014). Así, esta provocación a las Fuerzas Armadas representa, de alguna manera, la razón que gran parte de las generaciones mayores creen que motivó a los militares a intervenir. Pero, por otra parte, hay un cierto consenso transversal en la sociedad chilena que comparte la idea de que el golpe militar es el resultado de un gobierno que *“no supo hacer las cosas bien”*: la experiencia del desabastecimiento, la incapacidad de controlar la situación política y también la naturaleza de las reformas implementadas que provocaron una reacción de *“los que mandan”*, son consideradas en la memoria colectiva como factores que desencadenaron la llegada de un golpe militar.

En esa dirección, una de las justificaciones de la intervención militar más señaladas por las generaciones socializadas en esa época, es el “desabastecimiento” (Huneus, 1987), y en bastante menor medida, las “causas políticas” y el “clima de violencia política” y “polarización” que existía en ese entonces (Manzi y otros, 2003). Estas justificaciones de quienes fueron testigos directos del golpe, presenta *matices de diferencia* respecto de la significación que atribuyeron los entrevistados para que se produjera el golpe militar. Así, la dimensión *política e ideológica* en éste grupo parece ser la más relevante y enfatizada en los relatos, lo que no difiere tanto según la posición política de los participantes. En tal sentido, en los discursos analizados se remarcó la “sobreideologización” del proyecto de la UP, la “convulsión social” que significó la aplicación de los cambios estructurales y también la exacerbada polarización, que incluso en algunos casos llevó a la separación al interior de las propias familias:

**Entrevistador: ¿en su opinión Allende estaba en contra de la democracia?**

**R.** “No es que estuviera en contra de la democracia, se polarizaron estas cosas, eran los buenos y los malos, entonces, no había término medio, eso se fue

polarizando, el discurso se fue cerrando, se fue generando crisis en el parlamento hasta que llegó un momento donde querían derogar al presidente de la república, y entonces estaba todo muy convulsivo (...) bueno, el golpe de Estado vino a mucha gente, no solamente a la gente de izquierda, la gente de centroderecha vino a dejar un “*pañó frío*”, *a ordenar*” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

“Mira, yo recuerdo que había un *desorden*, las cosas no funcionaban, sabes lo que me acuerdo, cuando veo a Venezuela hoy en día y se parece mucho: *el desabastecimiento, esto de expropiar empresas y que al final las empresas no funcionaban*. Si no es llegar y hacerlo, “otra cosa es con guitarra”<sup>40</sup>. Yo me voy mañana y tú pones a alguien aquí, seguramente esta empresa no dura más de un año porque hay muchos años detrás para poder llegar a esto. No es llegar y pasárselo a los trabajadores, no es esa la solución” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

“(...) pero nos tocó vivir el desabastecimiento, la confrontación, la agresión, un país dividido, dramáticamente dividido, hasta las familias se dividían. Yo tengo la anécdota, me he encontrado en un desfile de estudiantes universitarios y de una fila de un lado venía mi hermano y en la otra venía yo... ¡y a piedrazos el uno contra el otro!... cuando lo vi, honestamente, desde ese día no fui nunca más a una protesta, nunca más fui a un desfile universitario, me fui a la casa a llorar, y después le dije “hermano, ¡estamos mal pues, weón!”, entonces, *con todas esas cosas quedan marcas de fuego que no se borran, y que de alguna manera uno se las ha transmitido a sus hijos y a todos los demás. Ahora, el 11 de septiembre, guste o no nos guste, hay mucho gente que no lo comparte, pero si no es por un 11 de septiembre, no estaríamos donde estamos*” (E29, 63 años, SNA, derecha).

Por cierto, más de algún entrevistado subrayó el rol positivo jugado por los militares en su intervención, pero se mencionó también que su presencia debía tener un carácter limitado en el tiempo, “(...) entonces, *asume el nuevo gobierno, todos muy llenos de esperanza, que no se vaya luego, porque algunos planteaban 3 meses, 6 meses, elecciones generales, yo creo que nosotros nos opusimos, creíamos que tenía que ser un poco más largo, tal vez dos años, nunca más de dos años en todo caso y mira con lo que salieron después...*” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

Pero esta “transitoriedad” del gobierno militar se vive un tanto diferente en los entrevistados que fueron víctimas de violencia política, especialmente aquellos pertenecientes a la SNA, ya que la llegada de los militares para ellos supuso una tranquilidad que debía prolongarse más tiempo, especialmente por las condiciones en que se encontraba el país según éstos “(...) *el país estaba tan destruido, estaba todo tan socavado que en realidad el no tener que participar en política ni discutir de política, sino que para eso estaba la “junta de gobierno” y no nosotros, digamos. Éramos poco*

---

<sup>40</sup> “Otra cosa es con guitarra” es un refrán típico chileno que indica que las cosas en la práctica ocurren de otra manera.

*críticos del sistema si lo que queríamos era estabilidad, tranquilidad y levantar al país” (E29, 63 años, SNA, derecha).* Este relato clarifica, como sugieren Arnoso, Cárdenas, & Páez (2012), cómo la exposición a la violencia acentúa la intensidad afectiva, la que en este caso se canaliza positivamente en el gobierno militar.

Por último, como se puede inferir de los relatos, parece conveniente indicar que los entrevistados no hicieron menciones reiteradas a factores destacados por otros grupos políticos que también vivieron la experiencia de la UP, como lo es la “ambición de los militares”, la “responsabilidad de los empresarios” o la responsabilidad particular de algunos actores políticos en la radicalización, como ejemplo, las referencias que se hacen en la memoria colectiva al Partido Comunista (Manzi y otros, 2003; Manzi y otros, 2014).

Sobre el factor relacionado con la ambición de las FF.AA., en los testimonios recogidos se puede observar que existía mucha confianza en esta institución, ya que esta era considerada como “republicana” por los entrevistados, lo cual de alguna manera coincide con el *supuesto* no demostrado empíricamente de Genaro Arriagada (2004), quien señala que la crisis de la UP llevó a los “sectores dominantes” a abandonar sus creencias republicanas para contemplar una posible “solución autoritaria” al gobierno popular.

En relación al papel de los empresarios, éste no fue significativamente destacado por los dirigentes entrevistados como un factor relevante para que se produjera el golpe militar. De hecho, sólo un entrevistado mencionó con claridad que la UP produjo una reacción en los adversarios políticos, “(...) *mucho desorden, mucho de querer cambiar las cosas muy rápido y que provocó, claro, la reacción al final del otro lado*” (E2, 59 años, SOFOFA, derecha), sin embargo, esta referencia a la oposición fue una excepcionalidad, ya que la mayoría de los relatos culparon al gobierno popular de la crisis total del país.

Sobre la responsabilidad particular de actores políticos, las menciones a líderes como Allende, Frei o Pinochet fueron casi inexistentes, y tampoco fue mencionado el Partido Comunista. En efecto, este es un dato interesante, ya que en Chile desde siempre ha existido un sentimiento “anticomunista” muy marcado (Huneeus, 1987 y 2003). Pero se trata de una situación histórica, ya que este partido siempre ha contado con un fuerte rechazo, el más alto dentro de todos los partidos, lo que viene ocurriendo desde que hay datos disponibles (1958 hasta 1973). Este rechazo nunca se sitúa por debajo de un 40%, e incluso aumentó a cerca de un 55% llegando a la transición (Baño, 1993, pág. 16).

En definitiva, las experiencias vividas por los entrevistados durante la UP son varias, siendo las más significativas las de violencia política que se dieron en la mayoría de los casos de la SNA, y sólo en un caso en la SOFOFA. También, la exacerbada “polarización” y “politización” de todos los ámbitos de la vida social, que separaba a las familias, a los amigos y situaba a las personas en una relación de antagonismo casi de carácter “schmiditiano”, vale decir, entre amigo-enemigo; por último, las experiencias de desabastecimiento, que en muchos casos tuvieron un carácter dramático.

Los resultados muestran que la intensidad de todas estas experiencias negativas está estrechamente relacionada con la posición social y política de los entrevistados, ya que la memoria colectiva de otros grupos populares y también cercanos al proyecto de la UP es diferente. Esto constituye a la élite empresarial en una verdadera “memoria

disidente” del acontecimiento de la UP, que después de ocurrido el golpe militar, abandona dicho disentimiento para subordinarse a los discursos de “orden” que promueve el gobierno militar, aunque como se verá más adelante, esta subordinación también es diferente en ambos grupos examinados.

En términos teóricos, parece que lo que ocurre es que la memoria colectiva de la élite empresarial está profundamente marcada por el “trauma sociopolítico” que conllevan las experiencias de violencia política, polarización, desabastecimiento y caos social. Estas situaciones tienen un factor común, *que es la amenaza a la vida tras el desarrollo de sentimientos de “inseguridad física” y “existencial”*, que según Inglehart, acentúan valores de supervivencia que reclaman “orden” y “autoridad” (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel, 2006).

Bajo esta tesitura, siguiendo a Alexander (2016) y Páez & Basabe (1993), se diría que este grupo social se enfrenta a un acontecimiento histórico que no sólo cambia la distribución del poder en la sociedad (Garretón & Moulian, 1985; Montero, 1996), sino que además, parafraseando al antropólogo Rene Girard, también trae consigo un cierto “sacrificio”, *“una violencia que amenaza con herir a sus propios miembros, los que ella pretende proteger a cualquier precio”* (Girard, 1972, pág. 12). En definitiva, esto trae como consecuencia una *radicalización* de las posiciones políticas hacia la derecha (Lipset, 1970), que se refuerzan y agudizan en el antagonismo contra el gobierno de Allende, y que ven en el golpe militar una interrupción del “sacrificio”, un reencuentro con la certidumbre, el orden y la posibilidad de la supervivencia de sus posiciones sociales.

Hasta este punto de la investigación, este hallazgo refuta parcialmente la hipótesis auxiliar 2, que plantea la existencia de rasgos autoritarios de la cultura política de la élite empresarial. En este supuesto se señalaba que estos rasgos se habrían producido por la complejidad de las vivencias experimentadas durante la UP. La refutación es “parcial”, porque lo que en verdad ocurre, es que *hay una intensificación de las posiciones políticas hacia la derecha*, lo cual no necesariamente implica como condición sine qua non una mutación autoritaria de la cultura política. Parafraseando a Juan Linz, *“la desviación del ideal democrático no constituye necesariamente, sin embargo, su negación”* (Linz, 1978, pág. 19).

En efecto, aunque parte de la evidencia apunta a que mientras más a la derecha hay más actitudes ideológicas autoritarias (Jost, 2006; Manzi y otros, 2013), lo cierto es que en este caso se trata de una cuestión un tanto diferente, ya que la radicalización de los entrevistados “converge” con el golpe militar, produciendo un vínculo cultural, político y afectivo con este evento, entendido como una verdadera “salvación”.

Finalmente, en el caso de los dirigentes de la SNA esta identificación es bastante más intensa que en el de los dirigentes entrevistados de la SOFOFA, puesto que en el grupo agrario, las experiencias de violencia fueron más penetrantes, por lo que su interrupción a raíz de la intervención militar fue valorada positivamente, tanto en aquella época como en la actualidad. Sin embargo, como se verá en el apartado siguiente, esta radicalización hacia la derecha y su identificación con el golpe, desarrollará un rasgo autoritario en el grupo mayor de la SNA, sobre todo por la “sumisión irrestricta a la autoridad” que emplea el régimen militar (Altemeyer, 1981), el cual usa la violencia

política como método para restaurar el orden social. Singularidad que sólo se da en este segmento, ya que en el caso de los industriales, la violencia política no fue tan directa, por lo que el vínculo con el “golpe” existe, se valora positivamente, pero es de menor magnitud.

## **6. La entrevistados más longevos y los Derechos Humanos**

En este apartado se describen y analizan las “memorias” y posicionamientos políticos de los entrevistados de mayor edad con relación a la situación de violación de los Derechos Humanos ocurrida durante la dictadura militar. También se incluye un apartado referido a los más jóvenes, con el objetivo de conocer sus recuerdos y actitudes políticas en torno a este evento.

El criterio de inclusión de estas memorias tiene que ver con la creación de un “código emergente” durante el proceso de codificación de las entrevistas, que denominé en su momento como “Violación a los Derechos Humanos” (ver anexos). Este código se creó porque, prácticamente todos los entrevistados que evaluaron la modernización implementada por el gobierno militar, también hicieron mención a los Derechos Humanos, destacando la imposibilidad de separar ambos acontecimientos.

En efecto, uno de los temas más controversiales, dolorosos y sensibles del régimen militar fue la violación de los Derechos Humanos (Piper, 2005; Arnosó, Cárdenas y Páez, 2012; Manzi y otros, 2003). Estas acciones llevadas a cabo por el Estado de Chile, a través de las Fuerzas Armadas, funcionarios de Carabineros y la policía secreta (DINA y CNI), consistió en torturas, secuestros, encarcelamientos, asesinatos y desapariciones contra miles de chilenos en el marco de la represión política sistemática contra de aquellos militantes y simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular.

Es en 1991 bajo el gobierno democrático de Patricio Aylwin que se elabora el primer informe sobre violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura militar. Este documento es conocido en la opinión pública como el “informe Rettig”, que da cuenta de 3.550 denuncias, de las cuales 2.296 fueron determinadas como homicidios calificados (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991). Este informe fue un sustantivo avance en materia de Derechos Humanos, ya que se daban a conocer cifras oficiales sobre la situación de homicidios realizados por la dictadura militar. Su importancia radica, entre otras cosas, en la posesión de una cifra concreta sobre los casos de muertes y desapariciones, pero además, por el reconocimiento público y simbólico del papel jugado por el Estado en la aplicación de violencia política contra los ciudadanos chilenos (Moulian, 2002).

Posteriormente, el año 2011, y bajo el primer gobierno del presidente Piñera, se elabora otro documento conocido como “informe Valech”, que fue complementario al “informe Rettig”. En este documento se dio cuenta de otras situaciones y cifras: 27.153 personas reconocidas por la Comisión Valech como víctimas de represión política, 30 ejecutados políticos, 9.795 prisioneros y torturados, además de cerca de 200.000 exiliados.

Los informes citados fueron bastante elocuentes en avanzar en materia de Derechos Humanos y, de hecho, su conocimiento público no pasó desapercibido,

provocando sentimientos ambiguos en la población, desde miedo y vergüenza hasta alegría (Arnosó, Cárdenas & Páez, 2012).

Incluso así, pese a lo evidente de las cifras difundidas por estas comisiones, la verdad es que aún siguen existiendo algunas disidencias en la población en torno a la naturaleza de este evento, las que se relacionan con posiciones políticas distintas en la ciudadanía. Esto último, para quienes han estudiado con sistematicidad esta temática, vuelve a probar fehacientemente las diversas identidades de la memoria colectiva entre los chilenos, ya que estas memorias continúan estando cruzadas por el posicionamiento entre quienes apoyaron el golpe militar y quienes estaban en contra (Manzi y otros, 2013; Cornejo y otros; Guichard & Henríquez, 2011).

Sin embargo, y como punto de partida, hay que señalar que en la sociedad chilena hay un consenso básico en torno al reconocimiento de los casos de violación de Derechos Humanos, ya que es una minoría absoluta de la población la que niega la existencia de este hecho social (– del 3%) (Arnosó, Cárdenas & Páez, 2012). No obstante, pese a este consenso, lo cierto es que no todos están de acuerdo respecto de si estas violaciones ocurrían en casos puntuales o bien si eran un objetivo de Estado.

La literatura que se ha ocupado sobre este asunto indica que son los grupos políticos de derecha los que señalan con más insistencia que las violaciones de Derechos Humanos no eran una política sistemática del régimen de Pinochet, sino que más bien, estas correspondían a “excesos individuales” que cometían aquellas personas que no tomaban las decisiones. Esta creencia, contrasta significativamente con aquellos que se posicionan más hacia la izquierda, quienes en un 80% creen que las violaciones de Derechos Humanos tuvieron un carácter metódico, y sólo un 20% declara que son excesos de personeros del gobierno militar (Manzi y otros, 2013).

Estas apreciaciones de la población se extrapolan a otros aspectos del tema en cuestión, como, por ejemplo, encontrar a los “detenidos desaparecidos”. Ciertamente, una mayoría abrumadora de la izquierda ve esta situación como tremendamente necesaria (89%), lo que a pesar de tener porcentajes altos en el centro (63,2%) y la derecha (60%), es menos significativo que en la izquierda. Estas ambivalencias también se dan en otras valoraciones, como lo es “juzgar a los culpables” de las atrocidades, ya que la cifra en aquellos que se ubican en la derecha apenas sobrepasa el 30%, en contraposición al otro extremo del entorno ideológico, donde no caben mayores dudas de la necesidad de que se produzca esta situación (85,7%) (Manzi y otros, 2013).

En virtud de lo anterior, es posible afirmar la existencia de consensos mínimos sobre esta materia, pero también es verdad que los disensos y sus intensidades son bastante claros, tal cual ocurría con las percepciones de la ciudadanía respecto de las sensaciones de violencia política durante el gobierno de la UP. Se trata de divisiones sociales y políticas profundas que, efectivamente, han marcado las vidas de aquellas generaciones que fueron protagonistas directas de estos eventos y también de las generaciones posteriores (Haye, Manzi, & Gonzáles, 2013).

En el caso particular de los entrevistados mayores de esta investigación, la referencia a la violación de Derechos Humanos estuvo presente en casi todos los relatos. Estas referencias se hicieron en forma “directa” y también “latente” siempre que se les consultó sobre cómo valoraban la modernización que había implementado el régimen

militar. Es decir, se trató, definitivamente, de dos caras de la misma moneda: una evaluación positiva de los cambios estructurales realizados y una “mancha oscura” que empañó los logros del gobierno militar. Por cierto, esto ocurrió con distintos matices en los participantes más mayores de ambas organizaciones estudiadas.

Quienes han indagado en profundidad la cultura política de los chilenos durante el autoritarismo, señalan que lo que predomina en la ciudadanía no sólo es una mirada negativa sobre el régimen, sino también una imagen positiva (Huneus, 2003; CEP, 1988). De hecho, sólo los extremos políticos absolutizan negativa o positivamente la “experiencia autoritaria”, mientras la gran mayoría tiene una imagen ambivalente sobre este régimen. Evidentemente, y en concordancia con toda la evidencia empírica que hemos presentado, son las personas de derecha las que tienen una imagen más positiva. Así lo ratifica Huneus (2003), quien señala que sobre el 70% de los chilenos que se posicionan en la derecha en el año 2003, tienen una imagen positiva del régimen militar, siendo los sectores más pobres y también los más ricos los que más apoyaban a Pinochet (Huneus, 1987 y 2003).

Esta valoración positiva del régimen de Pinochet también fue muy nítida en el caso de los participantes de esta investigación, quienes en términos generales, evaluaron de buena manera lo que Eugenio Tironi (1990) denominó la “modernización autoritaria”. Sin embargo, como ya indicaba, esta actitud de aprobación hacia lo realizado por Pinochet en materia de modernización, lleva consigo también un componente “agrio”: las violaciones de Derechos Humanos, lo que le quita méritos a las transformaciones estructurales.

Al respecto, en el análisis de las entrevistas, se podían distinguir dos posiciones predominantes en los participantes: un grupo caracterizado por tener una actitud desfavorable hacia la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar, en la que inexorablemente se realizaron algunas *equivalencias* de dicha situación con las vivencias dramáticas experimentadas por la gente de derecha durante el gobierno de la UP; y un segundo grupo definido por tener una actitud de reprobación implacable, y sin ningún tipo de relativización de la violación de derechos humanos sufridas por otros compatriotas.

En efecto, es en la SNA donde en términos globales se identificó una *posición desfavorable hacia la violación de los Derechos Humanos en dictadura*, lo que implicó cuestionar la violencia que empleó el régimen militar para reprimir a la oposición. No obstante, este juicio fue acompañado en algunos testimonios *de una equiparación de la violencia política que tuvo lugar durante la UP y la que ocurrió bajo el gobierno militar*. Este tipo de relativización de los Derechos Humanos de las personas de oposición a la dictadura, se dio con mayor intensidad, especialmente, en aquellos individuos que vivieron directamente situaciones de violencia política durante el gobierno de Allende. De hecho, a raíz de estas vivencias, son esos entrevistados los que tienen la creencia más marcada de haber vivido una verdadera “guerra civil”, que para ellos marca la antesala de la intervención militar y de los posteriores enfrentamientos donde caen muertos de ambos bandos:



“(…) lo que pasa es que los Derechos Humanos, siempre se ha hablado para un sólo lado, porque en tiempo de la UP se violaban los derechos de los que eran de derecha, después, los extremistas de izquierda que hoy día están en los gobiernos, y todo lo demás, era un derecho propio de matar a alguien de derecha, entonces, yo no le llamo que son Derechos Humanos, *son los abusos que se produjeron al tener el poder total de un país que los llevó a cometer errores de eliminar a alguna gente innecesariamente, pero en toda guerra cae gente de los dos lados*. A mí me produce preocupación cuando hablan de los Derechos Humanos de la gente de izquierda pero no de los Derechos Humanos de gente de derecha, porque la violación de los Derechos Humanos no es tan sólo matar a alguien, quemar a alguien o acribillar a alguien, hay muchas otras formas de hacerlo, desde la violación a la propiedad, a la familia y todo lo que se ha hecho” (E29, 63 años, SNA, derecha).

“(…) naturalmente que se cometieron *excesos y esos se fueron viendo después*, pero hay que haber vivido la tensión que había en el momento para entender los *excesos* que se cometieron... **Entrevistador: ¿Usted se refiere al tema de los derechos humanos?** **R:** Al tema de los derechos humanos... hubo situaciones en que *algunos militares se extralimitaron, no es que fueran muchas veces instrucciones inclusive del “Alto Mando”, sino que algunos trataron de hacer justicias por su propia cuenta y ahí se cometieron excesos*, pero nunca fueron lo que se dijo desde aquí hacia el exterior, no fue nunca tan tremendo. Imagínese en una situación como esa, se habla de personas que murieron en enfrentamientos porque hubo enfrentamientos en esos primeros días, no fueron más de 2000 o 2500 personas, no fue más que eso. En otros países ha sido mucho más y durante el gobierno militar en esos años hubo más paz y tranquilidad que casi en ningún país, ni siquiera hubo robos, asaltos, ninguna cosa, había respeto, había un contraste tremendo de lo que hemos vivido anteriormente” (E32, 72 años, SNA, derecha).

Como se puede inferir de los relatos presentados, y en la misma línea con los resultados de algunas investigaciones anteriores, la violación de los Derechos Humanos para los entrevistados de derecha es concebida como “arbitraria” y llevada a cabo por decisiones propias de los “mandos medios o bajos” (Manzi y otros, 2013). Pero, por otra parte, los testimonios están marcados por una percepción de haber estado viviendo un permanente estado de “guerra civil”; percepción de violencia política que ya indiqué que se daba con más fuerza en los sectores altos y de derecha (Valenzuela, 1978; Huneus, 2003), como es el caso de la gran mayoría de los participantes de esta investigación. Antes bien, la amenaza permanente a la *seguridad existencial* de los entrevistados durante el gobierno de la UP, se transforma en una de las más importantes justificaciones por parte de los entrevistados para la intervención militar, la que viene a aplacar los enfrentamientos. Y naturalmente, en todo este proceso, el Estado al tener el “monopolio legítimo de la violencia”, puede cometer “excesos”, también mencionados en varios testimonios como “atropellos” o “abusos”, tal cual comenta un entrevistado más arriba.

Otro elemento que se puede destacar es la excesiva preocupación que tienen los entrevistados mayores por el “orden, la delincuencia y la tranquilidad”. Estimo que esto

no sorprende mayormente, ya que como muestran algunos trabajos del CEP durante los años 80', la economía, la delincuencia, el desorden, la violencia y el terrorismo, son los temas que más preocupan a los sectores altos y que se posicionan en la derecha (CEP, 1989); preocupaciones que conforme se acerca el proceso de transición a la democracia se van haciendo más patentes, incluso llegando a desplazar en orden de prioridad a las preocupaciones económicas. Aunque esto lo trataré en detalle más adelante, esto último parece poner en evidencia la *incertidumbre* que produce en algunos sectores el retornar a la democracia (CEP, 1987a, 1988 y 1989).

Ahora bien, esta actitud desfavorable hacia la violencia del régimen pero marcada por la percepción de un enfrentamiento civil, fue completamente distinta respecto de aquellos entrevistados que no se habían visto expuestos a situaciones de defensa personal de sus familias y propiedades. En estos participantes, la intensidad afectiva producto de las vivencias experimentadas no es tan penetrante (Arnoso, Cárdenas & Páez, 2012), lo que se traduce en una diferencia discursiva mucho más tenue o matizada. Este posicionamiento de reprobación también se dio en un caso en la SNA, aunque fue completamente mayoritario en la SOFOFA, ya que los entrevistados *condenaron transversalmente* y con distintos matices las violaciones a los Derechos Humanos.

“Yo valoro altamente como positiva los aportes económicos y de cambio de modelo y de sistema del gobierno militar, pero rechazo absolutamente el tiempo de permanencia y las violaciones a los Derechos Humanos. *O sea, son dos cosas que hay que separarlas, yo sé que son inseparables, porque ocurrieron todas juntas, y por eso voté por el “No”, porque no era partidario de que siguiéramos con lo mismo (...)* yo aquí sé que hubieron violaciones tremendas, matanzas atroces con todo lo que pasó, yo creo que en Chile hemos tenido poca capacidad de reconciliarnos o nos hemos demorado mucho en llegar a esta reconciliación” (E13, 71 años, SNA, centro).

“Sin embargo, la violencia que trajo esto no estaba en mis cálculos. Yo de hecho, cuando a mí me dijeron: “oye, murió Allende”, yo pensé “pero ¿cómo murió?”, mi idea era que lo tomaran y se fuera... yo tenía como una idea... pero no de daño, si yo nunca pensé que esto iba a traer este tipo de situación o de régimen como fue... de violencia, en que mucha gente inocente o que a veces por sus ideas fueran tratados como fueron tratados, nunca me lo imaginé. Esa fue una situación que me sobrepasó y que si bien al principio yo estaba muy de acuerdo con el golpe militar, pensaba que era la única salida que había, a poco andar dos o tres años, uno se da cuenta que las cosas... no era eso lo que uno quería tampoco” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

“Sí, por supuesto, para mí la democracia es fundamental, *no acepto los gobiernos totalitarios*, Pinochet pudo haber hecho una labor espectacular y haberlo tomado en un período determinado y no haber cometido esos excesos que cometió, pero lamentablemente se obsesionó con el poder y ahí se generó una suerte de dictadura en todo el período que estuvo” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

En vista del examen anterior, tal como se puede colegir de los fragmentos presentados, es la *intensidad* de las vivencias experimentadas la que condiciona, en gran medida, las actitudes políticas hacia la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura, ya que la relativización de este evento se realiza, fundamentalmente, por aquellos entrevistados directamente afectados por el curso de las reformas, mientras que la condena absoluta del evento la hacen quienes tienen una identificación positiva con el golpe militar y con la modernización autoritaria, pero no con la violencia política que se ejerce hacia el resto de los ciudadanos chilenos como medidas represivas.

Esta actitud de reprobación de los entrevistados de la SOFOFA hacia el gobierno militar por las violaciones de Derechos Humanos, también es coherente con algunas memorias de acontecimientos vividos en la dictadura, en las que se señala en varios relatos haber experimentado riesgo, peligro o amenaza, de haber vivido situaciones de inseguridad por la violencia que ejercían los militares, *“Yo me acuerdo un país que... por ejemplo yo iba mucho a Cerro Navia porque construimos una biblioteca en una época, después teníamos un hogar de menores con niñitos en La Pintana, entonces, veíamos una realidad a veces donde se tomaban las poblaciones los militares, la contingencia que todo el mundo sabe hoy día, que antes se pegaba... y eso para mí desde un punto de vista personal no era bueno porque teníamos dos Chiles totalmente divididos y vivíamos casi en “guetos” por poner una expresión”* (E22, 74 años, SOFOFA, apolítico).

Este último fragmento presentado no es excepcional y se reitera en varios testimonios de los entrevistados mayores de la SOFOFA. De hecho, es sólo en este grupo donde se hizo mención explícita a la percepción de haberse sentido amenazados bajo la dictadura militar, aun cuando todos habían apoyado cívicamente el golpe. En verdad, esta sensación de “miedo” o “amenaza” es un sentimiento común en la ciudadanía en este período de la historia del país, ya que algunos trabajos señalan que poco más de la mitad de la población se sentía amenazada por la violencia del régimen; percepción de amenaza que es muchísimo mayor que durante la UP (Huneus, 1987), y que es más acentuada en la gente de izquierda y el centro (Manzi y otros, 2003).

En todo caso, los sentimientos negativos de la sociedad están relacionados con los “hechos” que ocurrieron durante la dictadura militar, sobre los cuales lo más recordado por las distintas generaciones que *“estuvieron allí”* es la violencia represiva: el control ciudadano, los “toques de queda”, el despliegue militar en las calles, la ocupación militar de los espacios públicos, entre otros eventos que en términos generales marcaron la “memoria colectiva” de todos los grupos que forman parte de la sociedad de ese entonces (Manzi y otros, 2004). Este sentimiento negativo transversal a la sociedad, también fue subrayado por algunos entrevistados de la SOFOFA, quienes fueron muy enfáticos en señalar que la violencia que traía el régimen militar *había marcado sus vidas*, tal como lo señala uno de los entrevistados a continuación:

*“Yo sentí miedo cuando fue el golpe militar, porque yo vivía en una pensión en Valparaíso, porque yo tenía literatura de todo tipo, tenía de izquierda, de todas esas cosas, y de hecho me llamaron de la universidad, me pusieron condicional, yo había sido dirigente estudiantil en el primer año”* (E3, 77 años, SOFOFA, derecha).

“Mira, *me marcó porque vi cosas que en realidad como joven uno no está preparado para esas experiencias*. Una me tocó una noche de turno en la guardia, llegó una patrulla de carabineros (policía) y se paró en la farmacia y se bajaron 10 o 12 carabineros y yo estaba en la guardia, en el recetario haciendo unas preparaciones y me llaman directamente desde el salón y me dicen: “doctor, lo necesitan acá en el salón”. Y me dicen: “¿quién es usted?” yo soy el químico a cargo y me dicen: “¡al suelo!” y estábamos todos en el suelo. Entonces, por lo que yo entendí, estaban buscando a una persona, Jorge González... y casualmente había un señor Jorge González que era vendedor y que tenía el mismo apellido del otro Jorge González que andaban buscando y que no tenía turno. Y le dicen: “ven, te llevamos y te vamos a ejecutar”. Y lo llevaron, pero había un soplón dentro del grupo que le dijo al oficial ahí que en realidad ese no era el Jorge González que andaban buscando, pero se lo llevaron igual. Y a los pocos segundos que salió de la sala, yo sentí unos gritos y unos balazos...ratatatatatata! entonces, se fueron y partió la micro [autobús] de los carabineros de ahí de la farmacia y nosotros salimos los dos o tres que estábamos ahí a ver qué había pasado con nuestro Jorge González... y resulta que estaba tirado en el suelo y yo dije: “¡chuta, lo mataron!” y lo voy a tomar y estaba como palo de duro, y resulta que no lo habían matado, le dijeron que corriera y el tipo gritaba pensando que lo iban a matar y bueno, tiraron los balazos al aire, *entonces, son cosas que a uno lo marcan*. Lo metí a la farmacia, le traté de colocar un diazepam, un Valium inyectable, para tratar de calmarlo y no le entraba la aguja de lo duro que estaba, entonces, *son cosas que a uno lo marcan...*” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

La crudeza de este relato, que es representativo de varios participantes de la SOFOFA, contrasta con el único caso de un entrevistado que no sintió ningún tipo de “amenaza” o “miedo” durante el gobierno militar, “(...) *yo me dediqué a trabajar y no tuve nunca un problema trabajando, nadie me molestó, nunca sentí digamos el peso de la dictadura, nunca*” (E12, 74 años, SOFOFA, derecha). En efecto, se trata de un sólo entrevistado, identificado con la derecha, y a cuyo padre le habían expropiado la empresa durante el gobierno de la UP, *lo que afectó profundamente en lo emocional* a su progenitor. Esto último, vuelve a poner en evidencia la complejidad del “trauma sociopolítico” que experimenta la élite empresarial, lo que, en definitiva, termina acentuando más las posiciones hacia la derecha al punto de hacer delgada la línea entre “radicalización” y “autoritarismo”. En cualquier caso, se trata de una verdadera excepción, porque la gran mayoría de este segmento no vaciló en reprobar la acción militar del gobierno contra la ciudadanía.

No puede excluirse, en todo caso, que los relatos de los entrevistados incluyan un efecto de construcción *ex post*, en el sentido de que sus recuerdos acerca de las emociones (miedos, inquietudes, confianza...) que acompañaron a la instauración de la dictadura se hayan visto “enriquecidos” o “agrandados” a posteriori en función o bajo la influencia del clima político en democracia y de las cosas que se fueron sabiendo sobre la ejecutoria del régimen en relación, sobre todo, con los Derechos Humanos. Es posible que algunos de los recuerdos que manifiestan los protagonistas contengan “adherencias” posteriores,

no necesariamente conscientes, por lo que no cabe considerarlas como insinceridades, sino más bien que, en tanto que recuerdos, como diría Paloma Aguilar “*no son inamovibles sino que se ven continuamente modelados, influidos, en definitiva transformados, por los recuerdos y los relatos de los demás*” (2007, pág. 2).

Para terminar con este apartado, quiero señalar que se presentaron opiniones parecidas en varios de los participantes en relación al *conocimiento* que tenían sobre las violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura militar. Tal como mencionó un entrevistado más arriba, “*los excesos se vinieron a conocer después*”, lo que hace una referencia subrepticia al informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación emitido ya en democracia, que hizo públicos muchos de los casos de violación de Derechos Humanos cometidos en dictadura. Antes bien, la mayoría de los entrevistados señaló haber tenido algunas nociones sobre lo que estaba pasando con otros compatriotas perseguidos, sin embargo, también es cierto que se mencionó no haber sabido con certeza la magnitud y la cantidad de personas afectadas, lo que recién se pudo conocer mejor cuando se emitieron los informes citados, “*la genialidad de Pinochet con sus famosos senadores designados, o sea, evitó una transición que pudo haber sido como la que él había hecho (refiriéndose al golpe), donde había dejado la “tendalada”, pero no, fue paulatina y la evaluó con bastante satisfacción, no hubo ningún problema hasta que empezaron a aparecer, a aflorar los problemas de los Derechos Humanos, y ahí sí que empezamos a sorprendernos, con el informe Rettig, a sorprendernos y ¡cómo es posible y en qué momento!... y no faltaba el que decía: “pucha si yo supe tal cosa” pero siempre eran cosas aisladas*” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

Esta aseveración en la cual se afirma sobre el escaso conocimiento que había sobre las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, es un tanto diferente de lo que expresa otro dirigente empresarial entrevistado, que sufrió personalmente la pérdida de un familiar desaparecido por los agentes de la dictadura. Con una entonación emocional de tristeza, el entrevistado indica más bien que existía “poca voluntad” de enterarse o lisa y llanamente “no querían enterarse” de lo que estaba pasando, ya que la necesidad de que el país saliera adelante era superlativa, lo que suponía dejar de cuestionar los métodos o formas que implementaba el régimen militar para conseguir ese objetivo. En tal sentido, y parafraseando a Zygmunt Bauman (2006) –quien, valga la analogía, se refiere a la experiencia del Holocausto Nazi– parece que ya no era posible asumir en plenitud la magnitud de lo que estaba pasando, porque eso podría haber implicado “retroceder, siendo ya demasiado tarde para poder hacerlo”, “*(...) siendo bien sincero o no queríamos o no sabíamos como mirar. Intuíamos que algo pasaba, no teníamos acceso ni ganas, a parte de lo que yo viví a través de mis primos, pero que no supimos nada, o sea, supimos que desapareció. A él lo sacaron de la cárcel y desapareció y nunca más se supo y no tengo más, pero la verdad es que en el mundo en que vivíamos no sabíamos o no queríamos saber o no lo hablábamos, pero lo vivimos de esa forma, esa es la realidad. Tratando de ver, de sobrevivir, haciendo nuestro trabajo, haciendo nuestro aporte en nuestra especialidad, tratando de dar un aporte positivo al país y sin pensar mucho en el gobierno, en el régimen de gobierno. Esa es la verdad*” (E16, 70 años, SNA, apolítico).

## 7. Los entrevistados más jóvenes y los Derechos Humanos

De la misma manera como ocurrió con los entrevistados más mayores, el tema de los Derechos Humanos en la generación más joven, también surge como una evaluación ambivalente respecto de la modernización autoritaria. En tal sentido, aunque en términos generales se evaluó positivamente lo relacionado con las transformaciones estructurales que hizo el gobierno militar, también fue inevitable separar esta valoración de lo ocurrido con las violaciones de Derechos Humanos. Esto último es relevante, y muestra que los participantes de esta investigación no atenuaron bajo ningún concepto la gravedad de las violaciones de Derechos Humanos ni la justificaron por el desarrollo económico que tuvo el país, lo que sí suele ocurrir en algunos sectores identificados con la derecha (Manzi y otros, 2004, pág. 162).

Cabe recordar al lector/a que la mayoría de los entrevistados de la generación más joven de la élite empresarial no tiene recuerdos y memorias nítidas respecto de acontecimientos vividos durante la dictadura militar, lo que es mucho más expreso en todo lo relacionado con los Derechos Humanos. Como se verá en lo que sigue, y adelantando un poco al lector/a, esto no es una cosa arbitraria, y más bien responde a un “mecanismo de defensa” que utilizan las familias para proteger a sus hijos respecto del contexto de violencia política. De esta manera, son muy pocos los recuerdos y memorias que tienen los participantes más jóvenes, sin embargo, igualmente es preciso conocer sus actitudes políticas sobre esta materia, ya que la defensa de los Derechos Humanos es un aspecto vital del pensamiento político democrático (Habermas, 1994)<sup>41</sup>, por lo que su aceptación bien puede ser un indicador potente de algunos rasgos de su cultura política.

Pues bien, y marcando diferencias significativas con los entrevistados mayores del rubro agrícola, en la generación más joven de la SNA y de la SOFOFA, se realizó una *crítica implacable y sin ambigüedades a la violación de los Derechos Humanos*, no existiendo ningún tipo de relativización sobre este evento. Por cierto, esta valoración negativa fue transversal al entorno ideológico, ya que tanto los entrevistados de derecha como de centro fueron enfáticos en evaluar negativamente todo lo ocurrido en relación a esta situación analizada.

“Yo creo que hay algunos aspectos que se pueden valorar, pero me cuesta, pero en términos del legado creo que lo que pasó con los Derechos Humanos opaca todo el resto, entonces, si bien en algunos aspectos del punto de vista de conformación de los mercados que puede ser interesante, creo que hubiera sido bastante más deseable que fuese una discusión democrática en torno a ello, es fácil legislar cuando no hay que pedirle la opinión a nadie, entonces, me cuesta como dar una versión demasiado positiva y tratar de aislarlo de lo que pasó a nivel de los Derechos Humanos” (E11, 43 años, SOFOFA, centro).

“(...) porque obviamente un gobierno militar va a cometer violaciones a los Derechos Humanos, obvio, no puedes esperar mucha sensibilidad de un

---

<sup>41</sup> Véase la *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948) que establece un claro vínculo con la democracia.

gobierno militar, entonces, *eso no hay que permitirlo nunca*, y eso fue por el problema de los políticos de la Unidad Popular. Ellos permitieron que pasara todo esto, no fueron patriotas, no velaron por el bien del país, que por una idea o por una ideología que la querían contaminar por todo el país” (E27, 48 años, SNA, centroderecha).

“Fíjate que yo lamento cuando gente... cuando se habla del período del “gobierno militar” o llámale “dictadura” o como quieras, pero lamento que el aprendizaje más valioso de todos es el ¿por qué se llegó a eso? ¿por qué se llegó al punto en que la cosa estuviera tan extremada y de tanta violencia?, claro, hay un contexto histórico, pero también, ¿por qué después se produjo esto?, también hubo gente que siguió como con un odio... porque estos abusos de Derechos Humanos, tratando tú como sociólogo, tratando de entender qué puede haber dentro de la cabeza de un ser humano que pueda estar ejecutando un acto de abuso de esa naturaleza; este otro ser humano, por mucho que piense distinto o qué sé yo, llegar a matar a alguien en la más absoluta impunidad, *porque fue una situación no de una guerra donde estaban todos disparando...* que hubieron situaciones aisladas así, pero este otro tipo de abusos, ¿qué puede haber en la cabeza? (E25, 58 años, SOFOFA, centroderecha).

Como se puede inferir de los relatos –aun cuando estos son bien distintos– existe una actitud desfavorable hacia la represión política implementada por el gobierno militar. Pero también hay que decir que la responsabilidad mayor de llegar a esa circunstancia se la asignan al gobierno de la Unidad Popular. Esto no es muy distinto respecto de las valoraciones de los sectores más próximos a la derecha y también de centro (Manzi y otros, 2003; Manzi y otros, 2014). En tal sentido, como indica un entrevistado, es precisamente el “mal gobierno” de la Unidad Popular el elemento que gatilla la intervención de los militares, la que por su propia naturaleza violenta, trae consigo las violaciones de Derechos Humanos. Lo interesante es que los entrevistados no manifiestan tan claramente la percepción de un clima de “guerra civil”, como sí lo sentían aquellos que vivieron el gobierno popular. Lo anterior lleva a comprender la violación de Derechos Humanos como una respuesta violenta y excesiva del régimen, y no como un “enfrentamiento”, *donde las muertes son de ambos bandos*.

Se sostiene que este último punto es importante, y de algún modo vuelve a probar que la naturaleza de las vivencias experimentadas puede ser un condicionante fundamental de la cultura política de los ciudadanos (Halbwachs, 1995; Mannheim, 1958; Alexander, 2016; Cornejo y otros, 2013; Manzi, y otros, 2004; Pye, 1977; Páez & Basabe, 1993). Según la evidencia de esta investigación, esto es precisamente lo que ocurre con los entrevistados ya que aquellos que no vivieron en “carne propia” el período de la Unidad Popular, tienen una imagen del fenómeno menos intensa, que aún siendo bastante negativa, no está marcada por la experiencia personal e individual del “dolor” y del peligro de la *seguridad física y existencial*. Parece que esto es así, porque su imagen del gobierno popular es una pura transmisión negativa familiar, o sea que, en definitiva, se trata de una “memoria histórica” transferida por aquellos que sí vivieron la “experiencia socialista”.

Sólo una de las personas entrevistadas hizo una referencia latente al tema de los Derechos Humanos, evitando hablar directamente de ello, lo que también resalta la ambivalencia respecto de las valoraciones del régimen, ya que siendo estas positivas en lo global, no están exentas de un oscurecimiento cuando se hace referencia al sufrimiento de algunos compatriotas, “(...) *de ahí para atrás, claro que ha habido un cambio, es parte de la historia de Chile, yo ahí sí veo cambio, porque claro, hubo y no es que uno quiera beneficiar a uno o desmejorar a otro, pero claramente que el país cambió para mejor. Quizás hay temas que quedaron pendientes, que son lamentables, no voy a entrar en eso, pero el país sí cambió*” (E7, 46 años, SOFOFA, apolítica).

Es apropiado remarcar que la evaluación negativa de los actos de violación de los Derechos Humanos es transversal a las posiciones políticas. Esto último corrobora el grado de consenso que existe en la sociedad chilena respecto al reconocimiento de la represión política, que también se puede observar a “pequeña escala” en los entrevistados de esta investigación. Es más, varias de las opiniones de los participantes, que eran niños y adolescentes durante la dictadura, coinciden con las de otras generaciones que tampoco alcanzaban la mayoría de edad durante el régimen militar. La evidencia empírica muestra que mientras más distancia generacional de la brutalidad de los acontecimientos, más crítica se torna la evaluación (Arnosó, Cárdenas & Páez, 2012). Así lo expresan dos personas de diferente adscripción ideológica entrevistadas por Cornejo y otros (2013), quienes condenan de igual manera la represión política que había en dictadura:

*“Yo de verdad que no podía entender lo que estaba ocurriendo y llámalo como querai, iluso, no sé, volao [distráido], porque de alguna manera lo que veía en ese momento era una atrocidad enorme”* (Claudio, centroizquierda).

*“Yo tengo un dolor con esa gente [conscriptos del Ejército], que nunca se me olvidó, yo de repente pienso que tengo daño psicológico, porque tengo como un rollo [lío] contra ellos, pero no contra el ejército; contra esa gente”* (Hugo, derecha) (Cornejo y otros, 2013, pág. 57).

Si se presta atención al relato del entrevistado de centroizquierda, se puede apreciar que la persona expresa haber visto una “atrocidad enorme”, lo que implica haber tenido algún grado de conciencia de la situación. Algunos estudios como el recién citado, muestran que en las familias más de izquierda durante la dictadura había conocimiento respecto de la situación de los Derechos Humanos, lo que era absorbido también por los integrantes más pequeños de las familias (Cornejo y otros, 2013). Por el contrario, en las familias de derecha, el conocimiento de la represión política y crímenes de lesa humanidad de otros ciudadanos parecía ser *neutralizado* para que no llegara a los hijos. Tal cual indican Cornejo y otros (2013), “*para los de familias de derecha, estas sellan un no saber como blindaje que los protege, dejando la duda respecto de lo que sí sabían los padres*” (pág. 57).

Esto debe ser exactamente lo que ocurre con los participantes más jóvenes de esta investigación, ya que en los entrevistados que se posicionaron en la derecha o cuyas familias se orientaban políticamente con este sector, señalaron en reiterados testimonios no haber tenido nociones respecto de lo que estaba ocurriendo en el país. Esto muestra,



nuevamente, la *intensidad* de la socialización política familiar, en la se que se neutralizaba cualquier conocimiento o información del mundo exterior. Así, la familia se establecía como un verdadero “campo de fuerza”, que sólo podía verse vulnerado en tanto los entrevistados abandonaran ese blindaje, saliendo al exterior para socializar con otros individuos, tal vez, menos protegidos:

“Cuando ya era un poco más joven, más adolescente, todo el período de las protestas, bastante inconsciencia con toda la situación del abuso de los Derechos Humanos, la verdad que siempre lo hemos conversado; hoy día con amigos míos que tenían y venían de familias que políticamente, no sé pues, tenían una raíz de centro izquierda y que para ellos, en el fondo, el ímpetu que tenían de su familia, de sus padres, era distinta a lo que yo tenía y como que no nos creíamos unos con otros: “¿por qué me estás diciendo esto? ¿de dónde sacaste esta cuestión? ¡es una mentira!” o viceversa, era como que se viviese en dos países distintos, a pesar de ser compañeros de colegio, muy amigos hasta el día de hoy, *pero vivíamos dos realidades distintas, influidos por nuestros padres*” (E14, 51 años, SNA, centroderecha).

Esta situación es un tanto distinta en entrevistados cuyos padres se posicionaban al centro o bien eran opositores al régimen, ya que en las familias con “disentimiento político” de la ideología promovida por la dictadura militar, sí había más conocimiento e interés por estar enterados respecto de lo que pasaba en el país. Así lo indica la literatura que se ocupa de esta temática y así se confirma en los resultados de esta investigación: *“Mi familia, como te decía, estaba en contra del régimen. Yo creo que en ese tiempo se sabía poco de los atentados contra los derechos humanos, algo se sabía, ¿te fijas? pero ¿vox populi?, no, salvo que tú estuvieses ligado a algún organismo o algo que supieras cosas. Algo se sabía y se comentaba en el fondo, pero no era una cosa abierta. Ahora, no había que ser muy ingenuo para no saber que algo pasaba”* (E17, 49 años, SOFOFA, centroderecha).

En definitiva, en ambas organizaciones empresariales se realizó una clara condena a la violación de los Derechos Humanos. El único matiz de diferencia se presentó en el grupo mayor de la SNA, en el cual, a pesar de que en lo global se criticó el actuar del gobierno militar en relación a la represión política, también se hizo una “relativización” de este dramático hecho ocurrido contra miles de chilenos.

Uno de los factores que ayuda a *comprender* esta actitud hacia este hecho, está relacionado, como ya se mostró, con el “trauma sociopolítico” experimentado por los entrevistados durante el gobierno popular: las vivencias personales y familiares de violencia política y la percepción de haber vivido una verdadera “guerra civil”, llevan a la mayoría de este grupo a entender la violación a los Derechos Humanos como un “exceso”, como algo inherente al proceso de “reconstrucción” del país, pero que se “escapó de las manos”. Prueba de esto es el uso reiterado de la palabra “abuso” o “exceso”, que, según la Real Academia Española, en el contexto del “abuso de autoridad”, significa “excederse en el ejercicio de las atribuciones”<sup>42</sup>.

---

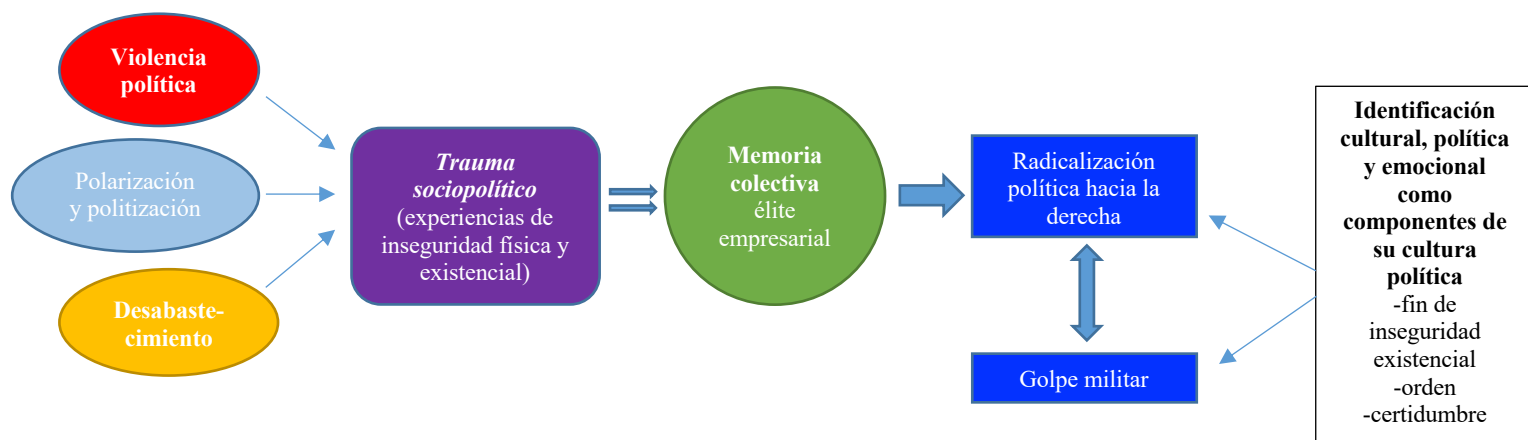
<sup>42</sup> Al respecto véase la RAE, <https://dle.rae.es/?id=0EZHSBG>, visitada el día 2 de mayo de 2019.

En vista del examen anterior, se puede decir que la postura ambivalente hacia la violación de Derechos Humanos en el segmento más longevo de la SNA muestra un rasgo “autoritario” de su cultura política, ya que el apoyo irrestricto e irreflexivo hacia autoridades fuertes que pueden ejercer castigos físicos, es un rasgo típico de *autoritarismo* (Carvacho y otros, 2014). Así también lo indica Bob Altemeyer, quien de acuerdo a su escala de medición de autoritarismo en el entorno ideológico (*right-wing authoritarianism*), argumenta que la *sumisión* sin reparos a la autoridad puede ser considerada como un elemento antidemocrático (1981), “*Authoritarian followers usually support the established authorities in their society, such as government officials and traditional religious leaders. Such people have historically been the “proper” authorities in life, the time-honored, entitled, customary leaders, and that means a lot to most authoritarians. Psychologically these followers have personalities featuring: 1) a high degree of submission to the established, legitimate authorities in their society; 2) high levels of aggression in the name of their authorities; and 3) a high level of conventionalism*” (Altemeyer, 1981, pág. 9).

De esta manera, en este grupo sí se cumpliría la hipótesis auxiliar que señala la presencia de una cultura política que *amalgama rasgos democráticos y autoritarios en una compleja convivencia*. Junto a aquellos rasgos autoritarios que mencionábamos más arriba y esa relativa disculpa de los “excesos” en la violación de derechos, en los entrevistados más longevos de la élite empresarial, sobre todo agricultores, coexisten, paradójicamente, valores democráticos como son las libertades individuales (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel, 2006; Díez, 2011), que son aprendidas a temprana edad en el seno del hogar. Es preciso recordar que estos valores también son complementados con lo aprendido por medio de otro agente de la socialización, la escuela, que transmite valores como el “compromiso cívico”, el funcionamiento de la democracia, entre otros propios de la educación cívica y la participación política en el contexto escolar (Almond & Verba, 1970).

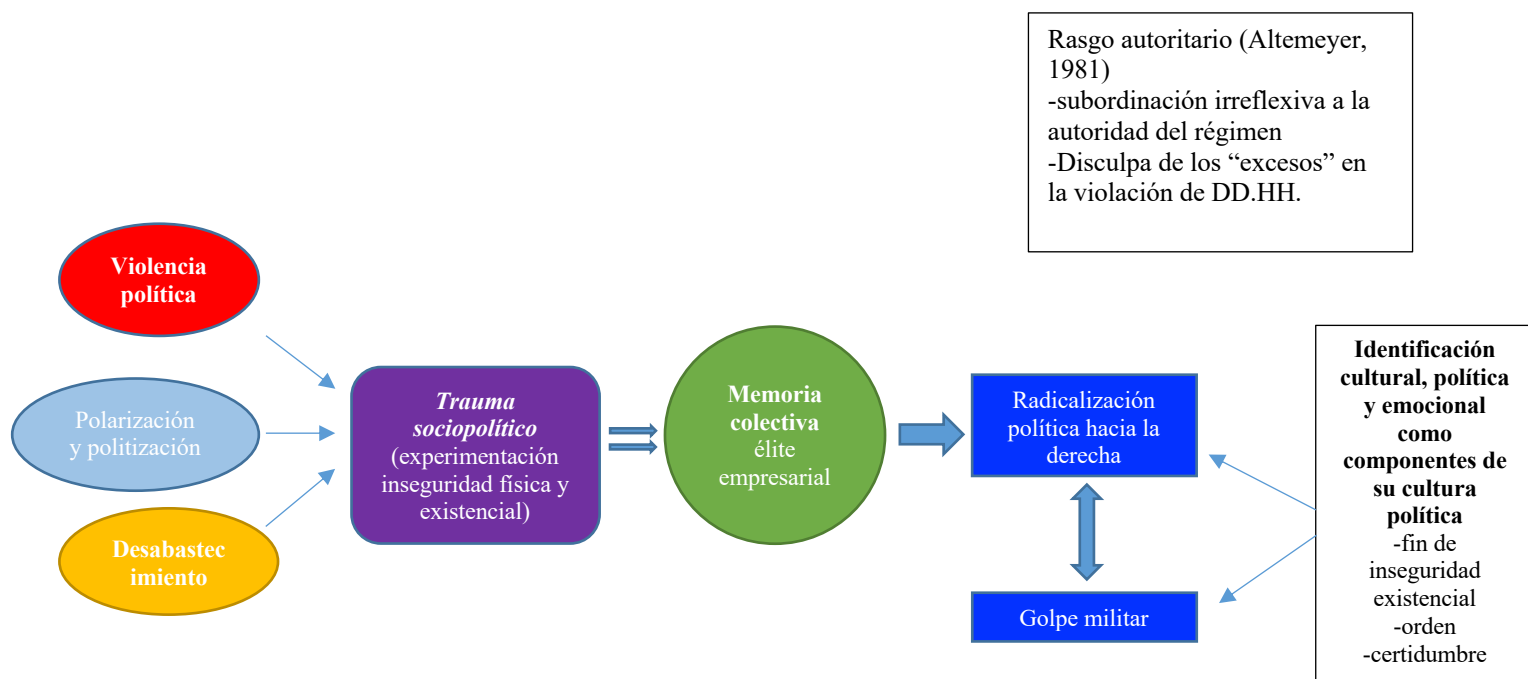
En el caso del resto de los entrevistados la radicalización hacia la derecha no implica necesariamente autoritarismo o negación del ideal democrático (Linz, 1978), sino más bien, un apoyo cívico al golpe militar, una valoración positiva de la modernización autoritaria, pero también con una condena a los medios utilizados para conseguir tal fin.

*Esquema de memoria colectiva y cultura política élite empresarial a excepción SNA  
longeva*



Fuente: elaboración propia.

*Esquema de memoria colectiva y cultura política élite empresarial de la SNA longeva*



Fuente: elaboración propia.

## CAPÍTULO VIII

### LA ÉLITE EMPRESARIAL Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

#### 1. La élite empresarial frente al proceso de transición

Como se ha visto en páginas anteriores, a pesar de lo elogiada que ha sido la transición chilena a la democracia<sup>43</sup>, lo cierto es que este evento político estuvo profundamente marcado por la división social y política entre los que querían la continuidad de Pinochet en el poder y aquellos que querían recuperar la democracia (Tironi, 1999; Torcal & Chhibber, 1995). El resultado del plebiscito confirma esta aseveración: 55,9% a favor del No y un 44,01% a favor del Sí. La votación del día 10 de octubre de 1988 permitió la salida del General Pinochet de la presidencia de la República, dando paso a la celebración de elecciones democráticas al año siguiente, en la que sale electo Patricio Aylwin como primer mandatario de la “nueva democracia”.

Influidos por Juan Linz (1978), quienes han estudiado la cultura cívica en este período, se preguntaban hacia fines del régimen si, efectivamente, la prolongada dictadura militar (1973–1990) había erosionado la elogiada cultura política democrática de los chilenos (Huneus, 1987; Baño, 1993 y 1995; CEP, 1987a, 1987b, 1988). Sin duda, se trata de una pregunta interesante, y las hipótesis más lógicas indicaban en su momento que esto era justamente lo que había ocurrido: un conjunto de cambios subjetivos en las orientaciones políticas de la ciudadanía, caracterizados, particularmente, por el desarrollo de una fuerte desafección hacia la actividad política, la democracia y sus instituciones elementales (Linz, 1978). En definitiva, hablamos de la desaparición de una larga tradición democrática en el país, incluido el potente sistema de partidos, tan celebrado por la literatura politológica (Ruiz, 2005; Sartori, 1976; Moulian, 1994; Garretón, 1983; Luna & Altman, 2011; Luna & Rosenblatt, 2012).

Pero al parecer la situación es un tanto distinta, pues tal como explica Linz (1978), existe una estrecha relación entre la tradición democrática de un país y su socialización política. En ese sentido, *“no hay duda de que la socialización política juega un papel decisivo, y ésta es una ventaja para los regímenes democráticos que llevan mucho tiempo establecidos y cuyos sistemas de educación, de prensa y de cultura de élite han permitido la penetración y comprensión de los ideales democráticos”* (pág.41).

Siguiendo esta premisa del sociólogo español, se puede afirmar que en Chile los rasgos esenciales de la cultura democrática permanecieron y resistieron la crudeza de la dictadura militar, más allá de los intentos por parte del régimen de transformar esta situación. Así lo indican algunas de las investigaciones que analizan la opinión pública

---

<sup>43</sup> Al respecto, véase estas dos referencias mediáticas sobre la transición chilena: la del líder político del partido Ciudadanos, Albert Rivera, en su visita a Chile en 2018, y un reportaje del diario *El País* donde se resalta la valoración positiva del presidente de Estados Unidos, G. Bush, sobre la transición chilena a la democracia. Disponibles en:

<https://www.lavanguardia.com/politica/20180504/443252582810/albert-rivera-elogia-la-politica-de-consensos-de-la-transicion-chilena.html> y

[https://elpais.com/diario/1990/12/07/internacional/660524419\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1990/12/07/internacional/660524419_850215.html), ambas visitadas el día 18 de junio de 2018.

hacia fines de la dictadura militar, en las que se muestra que a pesar de la larga “experiencia autoritaria”, la mayoría de los ciudadanos chilenos seguían prefiriendo la democracia como régimen político, lo que pone en evidencia la *persistencia* de esta tradición a la que hacía mención. Este apoyo denominado como “difuso” por Montero, Gunther, & Torcal (1998), se puede observar en distintas mediciones: en todas se registra su constancia a través del tiempo, nunca bajando del 55% entre 1986 y 1988 (Huneeus, 1987; Baño, 1993; CEP, 1987a; CEP, 1988). De hecho, hacia fines de la dictadura militar, es sólo una minoría que no supera el 7% la que apoya el autoritarismo (Huneeus, 1987; CEP, 1987)

En este punto, parece conveniente mencionar que en las mismas fechas señaladas, hay sobre un 20% de personas que se declaran indiferentes ante el régimen político (Baño, 1993), lo que constituye un porcentaje significativo de la población. Podría pensarse que este grupo de “indiferentes” es un claro indicador del efecto de despolitización de la dictadura militar (Baño, 1993), lo que es verdad hasta cierto punto, ya que los estudios muestran que esta cifra históricamente fue alta: desde 1958 hasta 1969 siempre llegó a los dos dígitos, sólo bajando drásticamente durante la Unidad Popular (Navia & Osorio, 2015). Luego, bajo el gobierno militar este porcentaje de “indiferentes/independientes” vuelve a su “estado natural”, pero conforme se acerca el plebiscito nuevamente se comienza a reducir, llegando a un 10% (CEP, 1988). Esto muestra, en definitiva, que ante coyunturas decisivas una parte importante de la población no identificada políticamente toma partido y se moviliza a votar.

Otro fenómeno político que se da casi llegando a la transición, es la moderación de los extremos políticos, tal cual se puede apreciar en la tabla que se expone a continuación. En efecto, esto da cuenta de un debilitamiento o evanescencia de la polarización que caracterizó la política chilena en las décadas anteriores (Ruiz, 2005; Moulian, 1994): distintas fuentes de medición muestran resultados similares, ya que se produce una disminución importante de aquellos que se identifican con la izquierda y también con la derecha, situación opuesta a la del centro político que crece fuertemente (Baño, 1993; Huneeus, 1987).

#### *Moderación de posiciones políticas en porcentajes*

<b>Posicionamiento político</b>	<b>1986</b>	<b>1987</b>	<b>1988 (postplebiscito)</b>	<b>1989</b>
Izquierda	6,5	9,5	13	7,8
Centroizquierda	5,5	11,6	19	17
Centro	38,5	32,1	23	39,6
Centroderecha	10,2	9,6	16	12,7
Derecha	18	7,7	13	6,7
Independientes/indiferentes	17	29,4	10	16,2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del:  
CERC (1987), FLACSO (1993) y el CEP (1988).

La escasa evidencia existente muestra la moderación de los extremos, lo que además se corrobora en otros ámbitos como una gran adhesión ciudadana a cambios graduales y

consensuados en la actividad política, con un gran rechazo a medios menos pacíficos de protesta, como “cortes” de luz, “cortar el tránsito”, “paros nacionales”, entre otras formas de acción colectiva (Huneus, 1987; Baño, 1993), muchas de las cuales habían sido frecuentes en las protestas de 1983 (Moulian & Osorio, 2014).

Ahora bien, si se observa el cuadro con un poco más de atención, se puede distinguir que conforme se acerca el plebiscito de 1988, las posiciones políticas vuelven a polarizarse, ya que el centro político gradualmente va perdiendo adhesión mientras crecen los extremos, siendo este fenómeno muy parecido a lo que ocurrió durante la UP. Se trata de una “coyuntura crítica” (Collier & Collier, 2002) en la que la ciudadanía tiene que tomar partido entre la *continuidad de Pinochet* o el *cambio*. Es más, como los mismos datos señalan, una vez conocidos los resultados del plebiscito, las posiciones políticas vuelven a moderarse, difuminándose la polarización.

Este último punto es interesante, y confirma que el evento del plebiscito es concebido por la sociedad chilena como muy significativo (sobre el 70% de la población tiene interés en este evento (CEP, 1987a), sobre todo para aquellos que estaban identificados con la oposición al régimen militar. No obstante, su significación política no es para todos igual: mientras para la izquierda y para gran parte del centro significa la opción de sacar a Pinochet del poder y cimentar el camino para la democracia, para un sector de la derecha se trata de un proceso que genera “miedo” e “incertidumbre”, sobre todo en los sectores altos, en donde el apoyo cívico al golpe militar había sido muy importante (Huneus, 1987).

La atmósfera de polarización también es agudizada por las campañas políticas del Sí y del No, que no fueron para nada neutras en su construcción mediática. En ellas se utilizaba estratégicamente toda la potencia de la memoria y del miedo para convencer a la ciudadanía. Como bien ha explicado García González (2006), la oposición democrática promovía ante los chilenos una imagen de unidad, de sentimientos positivos alejados del comportamiento político confrontacional que había sido característico durante el gobierno popular, mientras por otra parte, el gobierno militar hacía uso de las memorias del “miedo”, el “caos” y el “desorden” que se habían vivido durante la UP, situaciones que se volverían a repetir si ganaba la alternativa del No. Así lo expresa el propio general Pinochet: *“La oposición entregó el país hecho un caos y su único destino es volver al mismo camino. Todo el conjunto de políticos y politicastros que hoy marchan unidos tras el No, no han mostrado ninguna alternativa distinta a la que tuvieron cuando llevaron a la patria al más grande desastre político, moral, económico y social de su historia. Hay sectores que quieren revivir los viejos y atrasados esquemas políticos, cuya aplicación será nefasta, pero los cuales presentados de una manera embustera pretenden confundir la buena fe de los chilenos”* (Pinochet, citado por García González, 2006, pág. 453).

Es así como esta aprensión por el proceso de transición a la democracia, para muchos es sentido como un posible resurgimiento del “fantasma” de la Unidad Popular, lo que, como se verá a continuación, es corroborado en algunas memorias de los entrevistados más mayores, cuyos recuerdos coinciden en haber percibido una atmósfera polarizada en torno al plebiscito, caracterizada por la desconfianza hacia el cambio de régimen, que en el caso de los participantes de esta investigación fue transversal a sus posiciones políticas.

“(…) a ver, yo creo que hay dos cosas que son súper claras: cuando hablamos del proceso de volver a la vida política de este país en la época del Sí y el No, todos los que habíamos vivido el tiempo de la UP teníamos temor” (E29, 63 años, SNA, derecha).

“Bueno, después de 17 años de vivir en un país donde la información era sesgada, con un orden y con un sistema, a mí me dio un poco de temor de que volviera ese caos que habíamos tenido al inicio con la Unidad Popular y que volviera... sí, si tú me preguntas, sí, temor sí tuve. *Pero con el tiempo, me di cuenta de que sí, de que podíamos manejarnos, tener un sistema democrático en que nos pusiéramos de acuerdo y pudiéramos salir adelante*” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

Es sorprendente que en algunos entrevistados más jóvenes –varios de los cuales no tenían mayoría de edad para votar en el plebiscito– la percepción de “miedo” o “intranquilidad” llega incluso a ser más intensa que en los más mayores. Esta situación se da, según el testimonio de los participantes, por haber percibido la “polarización” en sus escuelas conforme se aproximaba el plebiscito; en otros participantes, la incertidumbre también se da por la aprensión que generaba la transición en sus propias familias de origen.

En todo caso, los sentimientos y sensaciones negativas en el seno del hogar se dan con más potencia en las familias de los entrevistados de la SNA, ya que la mayoría de padres tienen una alta posición social, son de derecha y, como se ha mostrado anteriormente, apoyaron irrestrictamente el golpe militar, sobre todo por las experiencias trágicas de violencia política. Así lo resalta un entrevistado, quien relata que sus padres se sintieron agobiados con el triunfo del No:

“Cuando perdió el Sí, (mis padres) creían que iba a volver a la Unidad Popular... o sea, en este minuto no es pensable, pero sí vi la preocupación de gente de la edad de mi papá” (E5, 47 años, SNA, derecha).

En forma excepcional, sólo un entrevistado en este grupo mencionó sentimientos positivos con la transición a la democracia; sensación que también está relacionada con su socialización política familiar, ya que su padre había sido de centro, un simpatizante del radicalismo, *“fue una etapa de las mejores, yo estaba en la época universitaria, por lo tanto, fue una época de explosión. En la universidad de Chile fue lejos lo más entretenido, cuando llegó el gobierno de Aylwin coincidió que yo entré a la universidad, entonces, me comí la transición completa. Y ahí sí que hubo un destape completo, un destape cultural, un destape social, un destape de apertura, de discusión, de conversación, fue como un cambio muy muy violento”* (E8, 44 años, SNA, centro).

La transición se vive de manera distinta en los entrevistados jóvenes de la SOFOFA, cuyas familias son acomodadas pero más próximas a los sectores medios. Por lo mismo, no todas son de derecha, ya que también hay familias de centro que son opositoras al régimen militar. Estas características sociales y políticas de las familias de

los participantes inciden en una *menor* sensación de temor en torno al cambio de régimen, tal cual se puede colegir en el fragmento seleccionado que expongo a continuación:

“Tal vez el que estaba con más miedo es el que venía de la Unidad Popular y que le tocó ahí y tenía ese temor (...) **entrevistador: ¿usted palpó en otras personas ese miedo?** R: Sí, sí, se palpaba, sí había... pero por eso mismo creo que el primer gobierno fue muy inteligente en el sentido de que cuando Aylwin dice “en la medida de lo posible”, precisamente se estaba haciendo cargo de ese miedo, es decir: “aquí no vamos a hacer ni bien ni mal, de lo único que nos vamos a encargar es de que esta cosa termine bien, nada más, no vamos a volver ni para atrás, ni para adelante, ni vamos a romper mucho el status quo al menos en este período, porque lo que queremos consolidar es esto”... ¡porque tenías al otro gallo [otro tipo] sentado con la otra mano arriba del botón, pues!” (E17, 49 años, SOFOFA, centroderecha).

Se diría que la “aprensión” que tienen varios de los entrevistados más jóvenes en torno al proceso de transición vuelve a poner en evidencia la profundidad e intensidad de la socialización política familiar (Trafimow & Wyer, 1993; Percheron, 1985; McDevitt & Chaffee, 2002). Esto es así porque se trata de un régimen político que ellos no han experimentado directamente, como sí lo hicieron los entrevistados más longevos. Sólo sabían de la existencia de la democracia gracias a la educación cívica que habían tenido en sus respectivos colegios, siendo muchísimo más potente la formación adquirida con base a lo escuchado directamente de sus padres. Hablamos, en términos generales, de un aprendizaje negativo sobre la “experiencia democrática”, que es relacionada en *forma automática* con lo vivido bajo el gobierno de la Unidad Popular, siendo esto más marcado en los entrevistados de la SNA, cuyas familias habían tenido experiencias directas de violencia política.

Es por lo anterior que el triunfo del No y la salida del general Pinochet del poder producía sensaciones de incerteza respecto de lo que podía traer la “nueva democracia” y, de hecho, en más de algún relato se hizo mención a la preocupación que provocaba que los mismos que habían sido actores políticos en la caída del régimen democrático, ahora podían “volver al poder”. Esto acentuaba aún más la desconfianza sobre el nuevo régimen en las familias que apoyaron cívicamente el golpe militar. Un argumento que, por cierto, coincide en demasía con los discursos mediáticos que había en torno a la campaña por la continuidad de Pinochet en el poder (García González, 2006).

Pero es conveniente señalar que la preocupación en torno al cambio de régimen no fue una sensación compartida por todos los participantes, ya que también hubo quienes mencionaron no haber experimentado ningún tipo de sensación negativa. Esta ausencia de temor o aprensión se dio por dos aspectos destacados discursivamente: 1) *el diseño institucional elaborado por el gobierno militar*; 2) *la calidad de los políticos que asumían el gobierno en la nueva democracia*.

De esta manera, aquellos que más confiaban en el “sistema” implantado por Pinochet fueron los entrevistados más mayores, quienes habían vivido la experiencia de la UP, la dictadura militar y ahora se enfrentaban con plena lucidez al cambio de régimen. Por esto mismo, muchos estaban enterados de los profundos cambios políticos que se



habían realizado bajo el autoritarismo, que asegurarían el mantenimiento *en democracia* de las principales instituciones refundadas bajo el gobierno militar.

La otra razón subrayada fue el conocimiento que se tenía de los líderes políticos que asumirían en marzo de 1990, calificados en varios relatos como políticos “republicanos”, que, seguramente, por su propias características políticas, no se habrían arriesgado a una “regresión autoritaria” o poner en riesgo el nuevo orden político que se inauguraba.

**Entrevistador: ¿sintió temor de volver a la democracia? R:** “No, no, yo por lo menos no, no no no, no lo noté en ningún momento, teníamos gente que estaba ya involucrada en el “Acuerdo Nacional”<sup>44</sup>... cómo se llamó, este que hizo el cardenal, estaba Zavala, hombres nuestros. No, estábamos conscientes que no podía ser eterno esto. No, *nunca tuvimos el miedo de que se volviera a la Unidad Popular. No, nunca lo tuvimos, era un parlamento súper defendido, con 9 senadores designados*” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

“No, porque también para mí la gente que estaba haciendo las cosas ahí yo los veía republicanos, para mí Aylwin y todas esas personas las conocía de toda la vida, eran las mismas personas que estaban en política cuando yo era joven, por lo tanto, no me generaban nada” (E28, 69 años, SNA, republicano).

La confianza en el legado institucional del régimen militar y también en los actores políticos que asumirían el gobierno democrático, es fundamental para producir en los entrevistados un cierto anhelo por volver a vivir bajo un régimen democrático, ya sin riesgos que correr. En todo caso, se trata, eso sí –y esto es muy importante– de una “democracia modificada” (CEP, 1988), vale decir, un régimen político diferente de la vieja democracia que permitió la llegada de un presidente marxista al poder.

Asimismo, es importante mencionar –tal cual ocurrió con las posturas frente al tema de los Derechos Humanos– que estas posturas favorables hacia el cambio de régimen son *ex post*, y probablemente han sido “reconstruidas” a la luz actual de la “experiencia democrática”, lo que no necesariamente implica incurrir en un falseamiento de la realidad, sino más bien en un esfuerzo por dar coherencia a sus propias interpretaciones de la historia y sus acontecimientos.

Las posturas favorables hacia el cambio de régimen no son tan distantes de lo que pasa en algunos grupos sociales y políticos al interior de la sociedad chilena, ya que ciertamente, a un año del plebiscito, la mayoría de la ciudadanía quiere el fin de la dictadura militar y volver a vivir bajo un régimen democrático (CEP, 1987a; Huneeus, 1987; Baño, 1993). Sin embargo, también es cierto, que ese anhelo va acompañado de un aprendizaje político fundamental en algunos sectores de la ciudadanía, como es tener una democracia *diferente* a la que se venía desarrollando desde la Constitución de 1925.

---

<sup>44</sup> El entrevistado hace mención al “Acuerdo nacional para la transición plena a la democracia”, firmado en 1985 por 11 partidos tanto de izquierda, centro y derecha. Este documento, promovido también por la Iglesia Católica, hacía un llamado a la “reconciliación nacional”, y buscaba elecciones congresistas y presidenciales, reformas constitucionales, además de un conjunto de demandas de orientación democrática.

Hablamos de una “democracia modificada” o “reformada”<sup>45</sup> (CEP, 1988), cuya característica principal es que es *distinta* a la “vieja democracia”.

En efecto, dentro del 67% que apoyaba la democracia a un año del plebiscito, cerca de un 40% deseaba tener una “democracia modificada”, mientras un 31% quería una democracia tal cual como la que existía antes del golpe militar (CEP, 1987a, pág. 31). Los *sectores altos* de la sociedad chilena –que es donde mayormente se ubican los entrevistados de esta investigación– y que están más identificados con la derecha, se encuentran divididos entre una democracia “modificada” o la continuidad de un gobierno autoritario, pero con reformas. Lo que sí está claro, es que el peso de la memoria “histórica” y “colectiva” es bastante determinante en su “filosofía” sobre la política y el sistema político, ya que la opción por tener una democracia como la que existía antes del golpe militar es prácticamente inexistente. Muy probablemente, una “democracia liberal y pluralista” podía contener el “germen” del socialismo, tal cual se concebía desde el pensamiento gremialista que había ocurrido en Chile a partir de la Constitución de 1925 (Guzmán, 1993; Cristi, 2011; Cristi & Ruiz-Tagle, 2014).

La derecha, en vísperas del evento político del plebiscito se encuentra dividida entre la continuidad del general Pinochet y el régimen democrático (Huneus, 1987). Esto podría llevar a pensar, a priori, que las personas de derecha son menos decididamente democráticas que las del centro o izquierda (Huneus, 1987, pág. 65), pero lo cierto es que en éste sector político, el asunto más bien estriba en quién debería conducir la “nueva democracia”, y en ese punto, la figura de Pinochet es decisiva, puesto que entre quienes desean volver a la democracia, un 40% quiere que sea bajo el liderazgo del General Pinochet (Huneus, 1987, pág. 62). Es una minoría absoluta la que quiere que se mantenga la dictadura tal cual estaba sin mayores modificaciones (4%) (CEP, 1987a).

Se puede decir que estas tendencias generales en la sociedad chilena se expresan de manera nítida en el caso de los entrevistados de esta investigación, tanto en los más mayores como en los más jóvenes. En el primer caso, hablamos de memorias compartidas en torno al evento del plebiscito, mientras en el segundo caso, se trata de una generación menor que tiene sentimientos y percepciones un tanto mezcladas frente a este suceso, influidas fuertemente por sus familias de origen. Como se verá en lo que sigue y adelantando un poco al lector/a, estas lealtades políticas (*political loyalties*) de los más jóvenes luego se van matizando en la medida en que se conoce personalmente (y ya no a través de los libros) la “experiencia democrática”.

---

<sup>45</sup> El estatuto de la democracia “modificada” o “reformada” no está claro en la literatura que estudia la cultura política en Chile, ya que la pregunta de las encuestas del CEP no especificaba qué se entendía por “democracia modificada”. Es posible que quienes respondieran, no necesariamente asociaban las “modificaciones” con la democracia “protegida y autoritaria” planteada por Pinochet. Probablemente, la modificación era entendida como una democracia orientada a la búsqueda de consensos, cuya “fórmula política” obligara a la clase política a “sentarse” a conversar entre las fuerzas políticas mayoritarias para hacer grandes cambios (izquierda y derecha). Esto se puede inferir a partir de la moderación de las posiciones políticas hacia el centro conforme se acerca la transición.

## 2. El Sí y el No, asimétricos

En virtud de lo anterior, pueden identificarse dos grupos: un primer grupo minoritario que votó por el Sí y un segundo grupo mayoritario que votó por el No. Este segmento que prefería la continuidad de Pinochet se dio sólo en la SNA, tanto en los entrevistados más longevos como también en los pocos entrevistados jóvenes que alcanzaron a votar para el plebiscito.

“Creo que los militares en definitiva cumplieron lo que se habían comprometido y el gobierno de Aylwin fue también, como se ha dicho, “hasta donde se podía”<sup>46</sup>, así con la cosa. Creo que estuvo bien, que fue una persona bien elegida, bien seleccionada para el proceso. *Naturalmente que nosotros votamos por el Sí, por la continuidad, pero no por la continuidad perse hacia el futuro, sino que volver a la democracia con una transición tranquila y todo lo demás es lo que esperábamos también, si no podía estar eternamente el gobierno militar*” (E31, 60 años, SNA, derecha).

“yo voté que Sí, y si tú me preguntas hoy, *me arrepiento haber votado que Sí, debí haber votado que No, no porque tenga algo contra el gobierno militar o nada, sino que encuentro que era correcto que hubiera pasado esta transición de esa manera. Encuentro que de alguna manera se portaron bien los políticos más viejos como Aylwin, y como todos los otros que instalaron “en la medida de las circunstancias”<sup>47</sup> y no fue tan trágico al final.* Fue bueno que haya ganado el No, para limar un poco esos odios que tenía la izquierda con respecto a la derecha, creo que fue bueno... tenía más temores, eso era lo que pensaba y no era tal. *Y también es que... yo me arrepentí mucho tiempo después, el año 2000 y tanto, además que te empieza a dar vuelta el hecho de que todas estas otras cosas... te empiezas a dar cuenta de que no era como tú pensabas y que las cosas fueron de otro modo*” (E27, 48 años, SNA, centroderecha).

En todo caso, como se puede inferir de los fragmentos seleccionados, se trataba de un Sí que más que todo indicaba continuidad de la obra del gobierno militar en democracia, no necesariamente un gobierno dictatorial. Lo interesante, a mi modo de ver, es que este comportamiento político de votar por el Sí, responde justamente a un momento decisivo de la política chilena, en el que las circunstancias obligaban a tomar posición. Sin embargo, lo sorprendente es que esta valoración positiva de la transición a casi treinta años del evento, muestra lo valioso del proceso de “*resocialización democrática*” que han tenido los entrevistados desde el preciso instante en que Pinochet entrega el mando en marzo de 1990 hasta el día de hoy. Son varias décadas de vivir y participar de una democracia estable y en proceso de “consolidación”, lo que tiene un doble impacto en la cultura política de la élite empresarial de más edad: por un lado, *refuerza o despierta sus*

---

<sup>46</sup> La frase original a la que se refiere el entrevistado es “justicia y verdad en la medida de lo posible”, que fue pronunciada por el presidente Patricio Aylwin en el contexto de esclarecer los casos de violaciones de los Derechos Humanos perpetrados durante la dictadura militar.

<sup>47</sup> El entrevistado también hace referencia a la frase de P. Aylwin recién contextualizada.

*valores democráticos de autoexpresión* que habían quedado soterrados o “suspendidos” por la experiencia autoritaria; pero por otro lado, se produce un *impacto en la modificación de sus aprendizajes políticos*, muy en la línea de lo planteado por el campo del institucionalismo, desde donde se destaca la relevancia que tienen los nuevos contextos en la formación de actitudes políticas democráticas (Mishler & Rose, 2007; Percheron, 1985; Tormos, 2012; Flores & Selios, 2013).

El otro grupo mayoritario fue el de quienes *votaron directamente por la alternativa del No*, mostrando una postura favorable hacia el proceso de transición. Esta toma de posición se sostuvo, sobre todo, porque la “democracia” fue concebida como un régimen político deseable, lo cual, por cierto, involucró a entrevistados de diversas posiciones políticas, sobre todo de la SOFOFA y algunos también de la SNA.

“Claro, ese era el fantasma que ha rondado siempre, que la democracia mal aprovechada nos podía llevar de nuevo a lo mismo que pasó en la Unidad Popular. *Yo no, yo creo que la democracia, el voto, es la base para el mejor funcionamiento y entendimiento entre los distintas corrientes de pensamiento político*” (E30, 62 años, SNA, derecha).

“No podía ser que siguiéramos siempre con un gobierno militar, *es agradable disponer de más libertad y todas las cosas*, ahí hubo restricciones en los primeros años muy fuertes porque, claro, había mucho resentimiento y habían enfrentamientos todavía en esa época (...) a mí me gustaría la democracia con medidas más severas para aquellos que cometen ilícitos o atentados y cosas así, *sigo pensando que la democracia siempre es lo mejor, absolutamente*” (E32, 72 años, SNA, derecha).

“Yo la busqué (la democracia), fui de los primeros. Una vez que se produjo esta situación del golpe y que pasó el tiempo, yo me di cuenta de que después del golpe vinieron todas estas cosas y fui de los primeros que me sumé al No. Yo creo que, independientemente, nunca vamos a volver a lo de antes, porque yo creo que esa lección ya se aprendió y la aprendieron los zurdos, o sea, si tú hablas con los socialistas ahora o con los comunistas, no son los socialistas ni comunistas de la época del 73, que querían la lucha armada... eran idealistas en el fondo. No, ahora ellos son todos burgueses sociales” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

En vista del examen anterior se puede señalar que este apoyo cívico a la democracia, coincide con algunos postulados de Linz (1978) antes expuestos, quien sostiene que la “socialización democrática” es clave en producir una *legitimidad* que puede permanecer soterrada ante experiencias autoritarias “contrarrevolucionarias”, como parece ocurrir con varios entrevistados de esta investigación. Es conveniente recordar que la generación más longeva fue socializada políticamente bajo una democracia sólida y estable (Sartori, 1976; Linz, 2016), lo que, de todas maneras, tuvo un valioso impacto en sus familias de origen, en las que se promovían valores democráticos como las libertades individuales, que son parte del acervo cultural del liberalismo (Morlino, 2009; Dahl, 2017).

Por último, se puede agregar que en la generación mayor de la SNA hubo solamente un entrevistado que mencionó haber votado por el Sí, de lo cual confiesa no arrepentirse en la actualidad: “yo voté por el Sí, no lo hubiera dudado nunca (...) **Entrevistador: ¿y luego se arrepintió?** R: *Pienso igual y mientras converso contigo estoy mirando a Don Augusto Pinochet en una foto al lado conmigo y ¡no soy de los que ha sacado la foto!*” (E29, 62 años, SNA, derecha). Esta es una verdadera excepción, porque a pesar de que varios reconocieron haber votado por el Sí en el referéndum, la verdad es que la misma *resocialización democrática* ha sido fundamental en la revitalización de valores democráticos y de aprendizajes políticos que han *moderado* sus posturas radicalizadas hacia la derecha. Esto ha tenido como resultado valorar hoy positivamente el régimen político actual, más allá de las críticas que se le pueden y deben hacer a éste.

En el caso de los entrevistados de ambas generaciones de la SOFOFA, las tomas de posición frente al proceso de transición son, por unanimidad, favorables y en ellas el apoyo cívico a la democracia es más explícito. En todo caso, este apoyo igualmente fue controversial, ya que no estuvo exento de cuestionamientos políticos por parte de los mismos protagonistas. Esto ocurre así porque todos tienen una evaluación positiva del gobierno militar en relación a los cambios implementados, por lo que también se desea su *continuidad* en tiempos democráticos, pero *sin* violencia política mediante. Esto fue expresado en varios de los testimonios recogidos, en los que incluso se volvió a poner énfasis en la importancia de la relación entre “democracia” y “Derechos Humanos” (Habermas, 1994).

“Para mí la vuelta a la democracia, lo importante fue terminar con esta cortina de humo que había respecto de los Derechos Humanos, eso para mí fue lo más importante. Que de una vez por todas se iba a conocer la situación, se iba a terminar a veces con este poder oculto, de que una persona la podían agarrar y no tenías idea de por qué la agarraron y desaparecía y ¡desaparecía no más!. Y nadie daba explicaciones, entonces, esa pesadilla con la que andaba mucha gente, yo creo que era una tranquilidad” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

“Y a mí me tocó un período muy bonito que fue el Sí y el No, habiendo entrado recién a la universidad, en segundo año, el 88’, el Sí y el No. Que fue una tremenda cuestión porque hubo una polarización tremenda. Ahí yo creo que habían 3 grupos: los que votaban por el No, los que votaban por el Sí y los que se *identificaban por el Sí, pero que no querían votar por el Sí*, porque querían el cambio pero no querían ese gobierno, sino una idea más de centroderecha; ahí me incluí yo, que me gustaba una idea de centroderecha, pero no quería ver nada, entonces, era un *No obligado, pero muy convencido también*, porque era una pregunta más que un modelo político. Era una continuidad de un régimen, una cosa bien extraña” (E17, 49 años, SOFOFA, centroderecha).

Como se puede distinguir del último fragmento, el asunto es bastante complejo porque varios sectores de la sociedad chilena se encuentran divididos entre la *continuidad* o la *salida* del general Pinochet, pero, en todo caso, manteniendo en democracia lo que se

había logrado. Pero lo cierto es que este es un anhelo de quienes se identifican más con la derecha y con los sectores altos de la sociedad (CEP, 1987a 1987b), ya que existen varios factores que explican por qué la sociedad chilena se movilizó a votar masivamente el día 10 de octubre de 1988 para darle el triunfo al No. Así expresa este fervor social por votar un entrevistado de la generación joven que alcanzó a ejercer el sufragio para el referéndum: *“todos fuimos a inscribirnos en el registro civil, todos fuimos a votar, fue como una cosa... no quedó nadie sin inscribirse (...) pero en general en ese tiempo tú veías como la gente iba a votar y veías el colegio electoral lleno y había que hacer colas y el calor, pero la gente iba... había que ir, no estaba la posibilidad de no ir, todos”* (E17, 49 años, SOFOFA, centroderecha).

Dentro de los aspectos más críticos del gobierno militar está la negativa evaluación ciudadana sobre la economía. De hecho, quienes mejor valoran la política económica del gobierno son los sectores de derecha, siendo más intenso el apoyo en los estratos sociales altos (Huneus, 1987; CEP, 1987b); el centro y la izquierda son mucho más críticos de esta dimensión (67%). Efectivamente, la alta cesantía que caracterizó a toda la década del ochenta (Meller, 1998), la mala calidad de los servicios públicos como la educación y la salud (CEP, 1988) y las negativas cifras en torno a la pobreza en el país (casi llegando a un 40% a fines de la década) (MIDEPLAN, 1991) se transforman en factores detonantes para movilizar a la ciudadanía a votar por el No, ya que la posibilidad de un gobierno democrático abría nuevas esperanzas en torno a este tópico, no sólo en lo político sino también en lo económico.

Por otra parte, la situación de los Derechos Humanos, la necesidad de recuperar las libertades cívicas y políticas, y, en definitiva, la urgencia por recuperar la democracia, también son aspectos importantes para aquellos que dijeron *No* a la continuidad de Pinochet en el poder. Las posiciones sociales y políticas vuelven a ser fundamentales en esta deliberación, ya que son indicativas del apoyo cívico a la democracia o la continuidad de Pinochet (Huneus, 1987 y 2003; Haye y otros, 2009; Manzi y otros, 2004). Ciertamente, son los grupos políticos más identificados con el centro y la izquierda, los que más se movilizaron a las urnas para el plebiscito: sus características son de grupos de ingreso medio y bajo, y un poco más educados que quienes votaron por el Sí, que se dividen mayoritariamente en votantes provenientes de sectores populares y con poca educación (siendo esto lo que Carlos Huneus llamó la “base sociológica” del pinochetismo (1987)); se incluye también a los segmentos medios (CEP, 1989) y parte importante de la clase alta del país, sobre todo de *“los que mandan”* (Huneus, 1987).

Como se ha podido observar, algunas razones esgrimidas por los entrevistados para tener una postura favorable hacia el cambio de régimen, coinciden con las que tiene la mayoría de la ciudadanía que votó por el No, sobre todo en las referidas al apoyo cívico a la democracia (pero no cualquier democracia, sino una democracia modificada por el régimen militar); la necesidad de ejercer las libertades políticas y civiles, y también la preocupación por los Derechos Humanos.

El *disenso* en las actitudes políticas entre la ciudadanía y la élite empresarial es más evidente en torno a la mala evaluación que se hace respecto de la situación económica del país y de la política económica del régimen militar. Este es un punto importante, ya que gran parte del “orgullo cívico” que produce la transición está relacionado con las

bases del desarrollo socioeconómico y político que implementa el gobierno militar, políticas que son continuadas a grandes rasgos por los gobiernos de la Concertación, siendo esto valorado positivamente por los entrevistados, como se verá a continuación.

### **3. La transición como motivo de orgullo cívico**

El día 11 de marzo de 1990, el General Pinochet hacía el traspaso de mando al presidente electo, Patricio Aylwin. Se trata de un momento histórico, de cambio de régimen político por la vía pacífica e institucional, lo que es muy valorado en el país y en distintas partes del mundo, incluso llegando a hablar de un “modelo de transición chileno”, digno de imitar por otros países (Huneus, 2014).

En verdad, el proceso de transición a la democracia fue vivido con bastante intensidad por los chilenos. Hablamos no sólo de un traspaso de mando, sino también de la posibilidad de recuperar las libertades individuales que por tantos años estuvieron coaccionadas por la dictadura militar. Las celebraciones de los chilenos no se hicieron esperar y mucha gente salió a las calles para conmemorar la llegada de la democracia tras 17 años de autoritarismo. Como bien indicó más arriba un entrevistado que había ingresado a la universidad durante la transición, se trató de un momento de “destape político y cultural” muy recordado en la memoria de los chilenos.

Y de hecho, la transición chilena, más allá de los debates académicos y políticos en torno a ésta, sigue siendo valorada positivamente en este país. Es así que a una década del cambio de mando, el 65% de la población consideraba que ésta era “motivo de orgullo cívico”, mientras un 24% consideraba que esto no era así. Las valoraciones positivas de la transición son más marcadas en las personas identificadas con el centroizquierda, sobre todo en aquellos simpatizantes de los partidos de la Concertación (81%), mientras que el porcentaje es significativamente más bajo en aquellos que se identifican con Chile Vamos (en ese tiempo llamada Coalición por el Cambio), con un 59% (Huneus, 2014, pág. 30–31).

Aunque los porcentajes en el caso chileno son altos, siguen siendo inferiores respecto de otros países como España, cuyas transiciones a la democracia suelen ser comparadas (Alcántara, 1992). En el caso del país ibérico, como muestran Morán & Benedicto (2015), la transición a la democracia ha sido motivo de “orgullo cívico” en la gran mayoría de la población, nunca bajando esta opinión de un 75%, a excepción del año 2012 que es uno de los años donde la crisis caló más fuerte en ese país, lo que tuvo un impacto en cómo se valoraba la transición (Moran & Benedicto, 2015, pág. 6).

Esta mirada satisfactoria hacia la transición en otros países, es menos potente en algunos grupos de ciudadanos chilenos. Es el caso de las generaciones que *vivieron* el gobierno de la Unidad Popular, la dictadura militar y el proceso de transición, que valoran en un 53% el cambio de régimen como “motivo de orgullo cívico”. Si bien el porcentaje es alto y da cuenta de una mayoría que mira con buenos ojos cómo se dio el traspaso de mando, lo cierto es que esta cifra no mejora la del plebiscito de 1988, en el que, como se indicó, un 55,9% marcó su preferencia por el No.

Mientras que poco más de la mitad de la ciudadanía considera que la transición es “motivo de orgullo cívico”, en el caso de los entrevistados esto es un poco distinto, ya

que es la gran mayoría la que estima que la transición fue un proceso elogiado. Esta apreciación se dio incluso en aquellos casos en que los participantes habían votado por la *continuidad* de Pinochet en el poder. De esta manera, a veintinueve años de dicho evento, el proceso de transición a la democracia fue valorado como un “motivo de orgullo cívico”, como bien lo expresa un participante: “*ejemplar, con una paz que nunca hubiéramos pensado que se iba a dar, notable, notable*” (E15, 66 años, SOFOFA, republicano).

El orgullo cívico que produce la transición en los entrevistados está asociado a la forma pacífica en que se dio el cambio de mando. Pero también las opiniones fueron un poco más allá y se mencionó positivamente la “política de los acuerdos” que caracterizó a la clase política hasta 2011, año de las movilizaciones sociales que produce el cambio en la orientación política del centroizquierda (Garretón, 2015).

En ese tenor, los participantes de ambas organizaciones empresariales y de ambas generaciones analizadas, destacaron, sin mayores diferencias, a la Concertación de Partidos por la Democracia y la calidad de sus líderes políticos (Linz, 1978); coalición de partidos que mantuvo el “compromiso democrático” (Flisflisch, 1987) y el consenso entre las élites que permitió (favorablemente para ellos) la continuidad en democracia de las bases políticas y económicas elaboradas por el gobierno militar.

“El gobierno de Aylwin fue más político, de transición, pero logró él que las cosas fueran lo suficientemente suaves; Aylwin era un fanático de llegar a acuerdos, entonces, eso ayudó mucho, porque perdía tiempo y obligaba a llegar a acuerdos (...) y había conciencia en el modelo económico, bueno y el “loco” de Foxley<sup>48</sup>, porque creo que terminó en 8 o 10 % de arancel parejo el gobierno de Pinochet, y el gobierno de Aylwin lo bajó a Frei, pero si era una cuestión impensable...;era más Chicago Boys que los otros!, digamos. Porque era el pensamiento económico moderno, era *continuidad* y en algunas cosas que él estimó que había que profundizar más, las profundizó, en lo laboral hizo reformas para el otro lado” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

“Yo creo que ha sido un proceso, finalmente, a mi modo de ver, bien desarrollado y ejemplar. Yo no soy parte como usted bien sabe, ni de la Concertación ni nada similar, pero reconozco que tuvimos 20 años de gobiernos de Concertación que son una absoluta excepción para la historia de Chile, que son un tremendo éxito para la historia de Chile y es un éxito a nivel occidental. Yo puedo discrepar de muchas de sus políticas y visiones, pero me da la impresión de que hicieron un trabajo muy profundo, muy correcto en conducir este proceso de transición. Yo creo que la transición está acabada hace tiempo, pero no me cabe la menor duda que esos procesos tan complejos como los que vivió Chile en la década del 60’, y particularmente, en el año 70’, y fundamentalmente durante todo el período que no tuvimos democracia en este país, todavía produce consecuencias, y eso hay que seguir resolviéndolo y solucionándolas, pero mi visión de la transición que fue conducida por la Concertación es que yo creo que fue ejemplar y fue absolutamente adecuada a la realidad chilena” (E23, 51 años, SOFOFA, derecha).

---

<sup>48</sup> El entrevistado se refiere a Alejandro Foxley, Ministro de Hacienda de Aylwin entre 1990 y 1994.



“(…) pero yo creo que fue una gran época para Chile la transición, que yo creo que no ha terminado, porque se entendió de que habían cosas buenas y que la “verdad” no estaba en un sólo sector o en un sólo lugar, y así nos fuimos acomodando, fuimos cambiando algunas cosas y las hemos ido mejorando, en algunos podemos estar más de acuerdo, en otros menos de acuerdo, pero yo creo que ha sido un gran proceso para Chile, y así lo demuestran creo que los números” (E20, 57 años, SNA, derecha).

Como bien se puede distinguir en los fragmentos presentados, los entrevistados en forma transversal al entorno ideológico, hablan de continuidad, profundización, perfección o “corrección” (Garretón, 2012) sobre lo ya fundado previamente por el régimen militar. Sus relatos siempre van más allá del “cambio de mando”, como si fuera un “momento político” que pareciera no terminar con esta situación, y como bien dice un entrevistado, parece desviarse después del segundo gobierno de Bachelet, en el que se “abandona” la política los consensos.

Este “mejoramiento” al que hacen mención los entrevistados –y en el cual la Concertación jugó un rol fundamental– está referido a la modernización de orientación monetarista y también a la institucionalidad, *“fueron unos cambios muy importantes para la realidad positiva que hemos tenido en los treinta años posteriores”* (E15, 66 años, SOFOFA, republicano). Se trata, como se ha indicado en páginas anteriores, de un diseño institucional orientado por sus reglas políticas y constitucionales a frenar cualquier posibilidad de volver a repetir la “experiencia socialista” de la Unidad Popular (Pinochet, 1977; Guzmán, 1993; Garretón, 2015, Fuentes, 2012): una Constitución elaborada por una comisión designada por Pinochet, con claros objetivos de condicionar el poder de los ciudadanos; un Congreso con 9 senadores designados; un sistema de supramayoría que no permitía una mayoría parlamentaria en la Cámara Baja, lo que le otorgaba un extraordinario poder de veto a las fuerzas políticas afines al régimen militar; y además, al General Pinochet como comandante en jefe y senador vitalicio en calidad de expresidente de la república (Huneus, 2014). Así resaltan los entrevistados de ambas generaciones algunas de estas instituciones que sientan las bases del desarrollo político y socioeconómico del país:

“La transición fue de alto costo social porque efectivamente se habían tomado las medidas desde el punto de vista económico, y fue “a lo militar”, entonces, con un costo social fuerte para la gente en general, no solamente la gente más vulnerable, sino también la clase media, porque todos lo pasamos mal con estas medidas, *pero bueno, eso hizo que el país cambiara. Y hay que reconocer que si no hubiera sido por ese momento de ordenamiento en la economía y en todo lo demás, no estaríamos donde estamos parados ahora*” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

*“el proceso de transición sí que ayudó a terminar de consolidar e instalar las instituciones democráticas del país, Chile creo que es un ejemplo en América Latina y en el mundo del funcionamiento de sus instituciones democráticas, en sus procesos electorarios también y creo que de alguna manera eso lo dejó diseñado el gobierno militar”* (63 años, SNA, derecha).

“Pero todos teníamos en mente de que en algún momento ese gobierno iba a terminar e íbamos a volver a la normalidad. La normalidad era restablecer la democracia en el país como de hecho ocurrió, claro después de 17 años, pero terminó ocurriendo y el país volvió a la normalidad *habiendo el gobierno militar sentado las bases para restituir la democracia en el país*” (E9, 56 años, SNA, derecha).

“Yo lo que veo es que tuvo un equipo económico que dio libertad (bajo el gobierno militar), que esa libertad económica tiene que ser controlada, que fue así, los siguientes gobiernos lo lograron y allí la Concertación hizo una tremenda pega [trabajo], en ese sentido, *pero que nos posicionó en que tenemos una Constitución que resguarda los intereses públicos y privados, tenemos una Constitución que permite tener seguridad jurídica, tenemos un país que entiende que no puede cambiar las reglas así como así no más, y eso nos ha permitido ser líderes en Sudamérica*” (E5, 47 años, SNA, derecha).

Como bien se puede inferir de los fragmentos expuestos, la mayoría de los entrevistados tiene pleno conocimiento sobre lo valioso que fue el diseño institucional y la modernización implementada por el régimen para sentar las bases del sistema político y económico chileno. De esta manera, es posible afirmar que los participantes *valoran positivamente* la ingeniería política y constitucional o “democracia modificada” que heredan los gobiernos de la Concertación, aun teniendo claridad sobre las limitaciones que puede tener este diseño en la cultura política política de la ciudadanía (Linz, 1978 y 2016).

En el fondo, esto último no es muy distinto de lo que se planteaba anteriormente respecto de la significación que le conceden Almond & Verba (1970) al diseño institucional que aplicó Bonn en Alemania, que tenía como fin último prevenir la posibilidad de que se repitiera la gran inestabilidad política y social que tuvo lugar durante la República de Weimar (pág.87). Esto puede ser lo que de algún modo está pasando en Chile, y es lo que valoran positivamente los entrevistados, ya que este tipo de democracia “modificada” asegura un desarrollo político y económico estable, sin riesgos de ningún tipo que se acerquen a lo que pasó en 1970–1973 (Tironi & Agüero, 1999).

Ahora bien, lo interesante es que la “resocialización democrática” (Mishler & Rose, 2007) en Chile desde 1990 hasta la fecha, ha tenido un impacto en las culturas políticas de los entrevistados, y así lo demuestra su *actual* apoyo a la democracia e instituciones, independientemente de la discusión académica y política de si la democracia es protegida (Godoy, 2003), “soberana” (Huneus, 2014), “autoritaria” (Pinochet, 1977), “tutelada” (Portales, 2000) o con alguna otra denominación; o si el *origen* de las instituciones es democrático o autoritario (Garretón, 2017; Godoy, 1999).

Queda por ver si la “resocialización democrática” durante estras tres décadas de democracia estable (Mishler & Rose, 2007; Tormos, 2012; Morán, 1995), ha permitido a los entrevistados *tomar cierta distancia* de la institucionalidad que dejó el legado de Pinochet y que ha ido siendo gradualmente desmantelada por la clase gobernante, con

especial interés por parte de los gobiernos de la Concertación (actualmente ex Nueva Mayoría) (Garretón, 2012).

Para recapitular, se puede decir que se advierten dos fenómenos que se pueden distinguir de las posturas de los participantes frente a la transición.

En primer lugar, puedo señalar en forma “transitoria” que existe una valoración favorable de la herencia institucional del régimen militar, la que garantiza una transición pacífica a la democracia pero también una determinada orientación del desarrollo político y socioeconómico con las características ya explicadas.

En segundo lugar, posiblemente el carácter marcado y aparentemente definitorio de la socialización política en los “años impresionables”, marcado por el “trauma sociopolítico” que experimentó la élite empresarial, bien puede haberse ido “suavizando” con la “experiencia democrática” y el nuevo proceso de socialización política que ésta conlleva, relativizando los rasgos más radicales de aquella adquirida tempranamente.

Lo anterior se puede colegir porque a pesar de que los entrevistados apoyaron unánimemente el golpe militar y valoraron favorablemente las modernizaciones del régimen, en la actualidad han ido mostrando una suerte de “disentimiento” con respecto al apoyo que dieron a Pinochet en el plebiscito de 1988. Lo mismo vale para el tema de los Derechos Humanos, ya que las actitudes frente a este asunto al día de hoy tal vez son mucho más críticas de lo que fueron en el pasado, y ello de todas maneras tiene que ver con una re-interpretación política a la luz de la “resocialización democrática”, ya que este proceso parece haber traído “aprendizajes políticos” que se han ido resignificando con el nuevo régimen político.

Finalmente, esto va probando que la “resocialización democrática” ha surtido efecto en parte importante de la cultura política de la élite empresarial, haciendo aflorar o activando los valores democráticos que estaban soterrados o encubiertos por la experiencia autoritaria, muy en la línea de la hipótesis planteada por Linz al comienzo de este capítulo (1978).

En lo que sigue, se intenta determinar la singularidad de la cultura política de la élite empresarial, y para ello, se busca conocer si persiste esta valoración favorable del legado autoritario que todavía permanece en democracia y que ha sido lentamente contrarrestado por el proceso de democratización y consolidación de la democracia. Así, el objetivo es identificar las posturas “favorables” o “desfavorables” hacia los cambios institucionales (*input y output*) que han sostenido las bases del desarrollo político que se instaló bajo el gobierno militar.

## CAPÍTULO IX

### LA ÉLITE EMPRESARIAL Y EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

#### 1. El debate en torno al problema de la legitimidad de las instituciones

Como se ha señalado en las primeras páginas de este trabajo, diversos investigadores e informes nacionales e internacionales indican actualmente la existencia de un divorcio entre la ciudadanía y el sistema político. Algunos definen esta situación como “crisis institucional” (Garretón, 2015 y 2017; Lagos, 2016; Piñera, 2019<sup>49</sup>), entendida como *“un progresivo encapsulamiento de los partidos políticos respecto de la ciudadanía y sus organizaciones; la personalización de la acción política que ha estimulado el clientelismo en relaciones entre electores y actores políticos; y recientes escándalos de corrupción que han afectado transversalmente a la mayoría de los partidos tradicionales, lo que ha generado una distancia todavía mayor entre ciudadanía y partidos. En un contexto de creciente cuestionamiento social y político respecto de la forma en que se distribuye el poder en la sociedad, emergen presiones para cambiar las reglas del juego político en democracia”* (Fuentes & Joignant, 2015, pág. 21–22).

Por el contrario, otros desestiman la existencia de una crisis institucional y más bien advierten un problema de confianza y bajo desempeño de las instituciones (CEP, 2017a; Lyd, 2013): *“los indicadores de un buen funcionamiento de una democracia – variable que aproxima el desempeño de las instituciones en un país– muestran que Chile, Alemania, España y Estados Unidos, por nombrar algunos, alcanzan el máximo nivel posible, y Francia obtuvo un punto menos que el máximo posible en 2014. Esto significa que la desconfianza en las instituciones puede coexistir con un razonable desempeño institucional, por ende, no es una condición suficiente para hablar de una crisis institucional”* (CEP, 2017a, pág. 25).

En este contexto, en las interpretaciones de los expertos, a pesar de sus matices de diferencias, subyace el diagnóstico respecto al *distanciamiento* entre quienes gobiernan y los gobernados (Mosca, 2006), que estaría minando la confianza hacia las instituciones.

Esta situación de escisión entre política y sociedad, comenzó a ser realmente dimensionada como tal a partir del año 2011. Ese año, se desarrollaron en Chile cientos de movilizaciones y protestas sociales en las cuales se demandaba un cambio en la orientación del modelo de desarrollo –para reducir los altos niveles de desigualdad– y también una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas (PNUD, 2014, 2015a, 2015b; CEP, 2016; Fuentes & Joignant, 2015; Heiss, 2016; Mayol, 2013; Rojas, 2012). Entre otras movilizaciones se encuentran las de Hidroaysén; la Agrupación nacional de deudores habitacionales (ANDHA); la agudización del conflicto mapuche en la zona de la Araucanía; movilizaciones en Magallanes, Puerto Natales y Punta Arenas;

---

<sup>49</sup> El expresidente Ricardo Lagos (2016) y también el actual presidente Sebastián Piñera (2019) han reconocido la presencia de una crisis de las instituciones en Chile. Dos entrevistas confirman estas afirmaciones: <https://www2.latercera.com/noticia/ricardo-lagos-escobar-esta-es-la-peor-crisis-politica-e-institucional-que-ha-tenido-chile/> ; [https://www.cnnchile.com/pais/exclusivo-entrevista-sebastian-pinera-cuenta-publica\\_20190602/](https://www.cnnchile.com/pais/exclusivo-entrevista-sebastian-pinera-cuenta-publica_20190602/)

el movimiento de liberación homosexual (MOVILH); movilizaciones en Calama y también en la localidad de Freirina; entre otras expresiones sociales menores y aisladas que hacían percibir un “despertar” de la sociedad en distintas zonas del país (LAPOP, 2014, pág. 93).

Esta situación de efervescencia social se agudizó con el movimiento estudiantil, que llevó a cabo en forma permanente cientos de marchas demandando cambios estructurales en la educación, tanto en su nivel de calidad como en su concepción ideológica: el objetivo buscado era transitar desde una concepción de “bien de consumo privado” hacia una concepción de derecho social influida por aquella que se promueve en algunos Estados del bienestar europeos (Fuentes & Joignant, 2015; Rojas, 2012; Mayol, 2012).

Tal parece que la naturaleza política de estas demandas de la ciudadanía interrogó los alcances de la institucionalidad vigente, en la medida en que la mayoría de éstas no podían ser resueltas íntegramente por el gobierno de Sebastián Piñera, aun cuando sí existió voluntad política de parte del ejecutivo por remediar la situación<sup>50</sup>.

El asunto era más complejo de lo que se veía a simple vista, y más bien estribaba en que el tipo de demandas ciudadanas cuestionaban en plenitud la *legitimidad de las instituciones democráticas* (PNUD, 2014; cfr., CEP, 2017a), ante la imposibilidad de dar acceso a una educación gratuita entendida como un derecho social que fuera garantizado por el Estado bajo el marco institucional existente en el país; del mismo modo, muchas de las demandas regionales mostraron limitaciones institucionales al exigir mayor descentralización y autonomía local para tomar sus propias decisiones políticas, administrativas y económicas sin pasar por la capital, lo que tampoco podía resolverse sin la realización de reformas institucionales de mayor profundidad (LAPOP, 2012, pág. 31; Garretón, 2013)<sup>51</sup>.

En efecto, aun cuando en las elecciones presidenciales de 2013 se ofertó desde el centroizquierda un programa de gobierno orientado a dar respuesta a la mayoría de las demandas que emergían desde los movimientos, esto no necesariamente se tradujo en una alta votación electoral, puesto que la elección presidencial de ese año sólo alcanzó un 46,68%, sin mostrar un aumento significativo en la participación (Garretón, 2017). Lo anterior hacía presagiar que la ciudadanía preferió seguir sintonizando con “la calle” a través de manifestaciones y movilizaciones por fuera de los canales institucionales de participación, haciendo cada vez más evidente el déficit de legitimidad, por tanto, de desconfianza hacia las instituciones políticas (PNUD, 2014, pág. 30; cfr. CEP, 2017a).

Desde una mirada clásica de la cultura política, se podría decir que esto volvió a poner en evidencia el *problema de la legitimidad* de las instituciones enfatizado en por autores como Linz (1978) y (2016), Lipset (1970), Almond & Verba (1970), Inglehart (1988, 1991, 2006) y Montero, Gunther & Torcal (1998), para quienes la “legitimidad”

---

<sup>50</sup> El presidente Sebastián Piñera propuso el día 5 de abril de 2011 el *Gran Acuerdo Nacional por la Educación*, que buscaba avanzar hacia una nueva institucionalidad para regular a las universidades; la creación de un fondo especial para la educación; el mejoramiento del acceso y financiamiento para los estudiantes y mayor fiscalización para el sistema universitario (Mineduc, 2011).

<sup>51</sup> Al respecto, García García (2014) señala que la actual Constitución es muy deficiente en materia de descentralización política, administrativa y fiscal (pág. 291).

de las instituciones democráticas es fundamental para el interés e involucramiento ciudadano en los asuntos políticos; legitimidad que, según los últimos informes como Latinobarómetro (2017), ha ido bajando aceleradamente en el último tiempo, mostrando el delicado estado de la cultura política de los chilenos, sobre todo si se compara la actual situación con la tradición democrática que había existido en el país hasta 1973 (Satori, 1976).

Efectivamente, y tomando en consideración estos postulados, algunos analistas también han manifestado que la separación entre política y ciudadanía que tiene lugar en Chile es bastante anterior, y se explica, parcialmente, por la herencia institucional impuesta por los militares y consagrada durante el proceso de transición a la democracia (Huneus, 2014; Fuentes, 2012; Garretón, 2012; PNUD, 2012 y 2014).

Es así que en los estudios de la “transitología” chilena se produjo un interesante debate politológico durante los años 90’ sobre el tipo de transición a la democracia (Garretón, 1999; cfr. Boeninger, 1997; Joignant & Menéndez–Carrión, 1999; Moulian, 1997; Brunner, 1990; cfr. Godoy, 1999; Jara, 2009), en el cual predominaban básicamente dos posicionamientos: el carácter “impuesto” de las instituciones autoritarias y aceptadas durante el proceso de transición y, por otra parte, una visión “pactada” entre las fuerzas de la dictadura y las fuerzas políticas de oposición sobre el cambio de régimen.

Ciertamente, en el ala concertacionista, la tesis que más consenso ha generado es aquella en la cual se concebía que las fuerzas de la oposición democrática, tuvieron que aceptar las reglas del juego político definidas por la dictadura militar, como única estrategia de salida del régimen autoritario (Garretón, 1999; Fuentes, 2012). Esto se deja ver en toda su magnitud en la siguiente reflexión del expresidente Patricio Aylwin (1998):

“Yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa constitución –me guste o no– está rigiendo. Éste es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. *¿Cómo superar este impase sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: eludir deliberadamente el tema de la legitimidad*” (pág. 264)<sup>52</sup>.

Es así que la adopción de esta estrategia implicó, por un lado, abandonar la táctica de movilización social como mecanismo de presión para la salida del régimen, lo que precisó por parte de las dirigencias partidistas de su alejamiento respecto de las bases sociales como estrategia de negociación (Garretón, 2015; Tironi, 1987). Pero, por otro lado, implicó que los líderes democráticos tuvieran que aceptar la Constitución de 1980 y el “rayado del campo de juego” que ésta hacía para definir las instituciones que regirían en democracia, una vez terminada la dictadura militar. Esto implicaba, por defecto, aceptar una Carta Fundamental que trazaba una ingeniería institucional que hacía muy complejo realizar cambios más profundos, tal cual lo describe su principal arquitecto, Jaime Guzmán:

---

<sup>52</sup> Las cursivas son mías.

“(…) que en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. *Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha (campo) imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario* (Guzmán, 1991, pág. 377–378)<sup>53</sup>.

Desde otra mirada, la tesis sobre una transición “pactada” se sostenía en los acuerdos que existieron entre el gobierno militar y la oposición democrática (Brunner, 1990); consensos que luego se materializaron en las reformas constitucionales de 1989 y el plebiscito del mismo año que permitió su “legitimación” (Godoy, 1999; Huneeus, 2014; García & Verdugo, 2015). Algunos de estos cambios consistieron en rebajar los quórum de reforma de 2/3 a 3/5 para cambiar algunas atribuciones del Ejecutivo (60% de ambas Cámaras); en el caso de las Leyes Orgánicas Constitucionales (LOCE), que funcionaban a modo de “cuerpo intermedio” de la Constitución y que protegían materias esenciales para el régimen militar (Godoy, 2003), también se rebajaron los cuórum de reforma a 4/7 de ambas Cámaras (Fuentes, 2012); moderaciones que, en definitiva, permitieron darle un margen de maniobra un poco más holgado a las reglas institucionales una vez recuperada la democracia.

En esta versión de la transición, la Concertación de partidos por la democracia habría aceptado la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso político, teniendo como objetivo modificar dicha situación antidemocrática en forma gradual a través de la vía electoral (Garretón, 2012; Fuentes, 2012).

Como podrá distinguir el lector/a, se trata de un apasionante debate politológico de la época, aunque lo relevante como bien diría Durkheim es el “hecho social”: a partir de 1990 se restauró totalmente el régimen democrático bajo el mandato de Patricio Aylwin, quien debió gobernar con un diseño institucional trazado durante el período autoritario y que había sido denominado por el mismo general Pinochet como una “democracia autoritaria y protegida” en el discurso de Chacarillas de 1977 (Memoria Chilena, 1977); instancia en que se delineaban algunos rasgos de cómo sería la nueva democracia que gobernaría a los chilenos.

La arquitectura de este diseño institucional consistía en la transferencia de poder hacia dispositivos no democráticos, también conocidos en la literatura como “enclaves autoritarios” (Garretón, 2015; Godoy, 2003; Siavelis, 2009; Fuentes, 2012; PNUD, 2014). Estos “enclaves” tenían capacidad de veto y estaban orientados a limitar la voluntad del ejecutivo y del Congreso Nacional. Entre estos se encontraban los senadores vitalicios y designados, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y el Tribunal Constitucional (TC); instituciones que, a través de la Constitución de 1980, garantizaban una determinada evolución institucional en la que los militares funcionarían como deliberantes y vigilantes del proceso político, una vez restaurada la democracia (Huneeus, 2014; Domínguez, 2005). En palabras del propio General Pinochet: “*Finalmente,*

---

<sup>53</sup> Las cursivas son mías.

*entraremos en la etapa de normalidad o consolidación, el poder será ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases esenciales de la institucionalidad, y la seguridad nacional en sus amplias y decisivas proyecciones modernas”* (Memoria Chilena, 1977, pág. 14).

Es así como en 1990 se dio paso a una democracia “cautelada”, en la que las Fuerzas del Orden tuvieron representación política en el Congreso Nacional, permitiendo por más 15 años una sobre-representación de la derecha afin al gobierno militar en el parlamento (PNUD, 2014, pág. 201). Esta situación política se vio reforzada, además, a través del *Sistema Electoral Binominal*, que fue diseñado en los últimos años del régimen (Von Baer, 2006), y que por su propio diseño conducía a un “empate” político entre las fuerzas partidarias del régimen y las fuerzas democráticas identificadas con la Concertación (los partidos del Sí y los partidos del No) (Tironi, 1999, pág. 13). De esta manera, durante más de dos décadas se reprodujo el clivaje *democracia/autoritarismo* en las elecciones de autoridades, lo que tuvo un impacto muy negativo en la participación ciudadana, puesto que los electores sabían de antemano los resultados de las votaciones (PNUD, 2014, pág. 43; Torcal & Chhibber, 1995).

Ciertamente, –y en forma muy cercana a los planteamientos de Almond & Verba (1970), Lipset (1970) y Linz (1978)– existe un consenso político y académico en el diagnóstico sobre la importancia que ha tenido el diseño institucional heredado en la cultura política democrática de los ciudadanos, lo cual es muy nítido en el caso chileno (Ruiz, 2011; Godoy, 2003), sobre todo por sus efectos *nocivos* en la baja confianza, mala evaluación de las instituciones políticas y declinante “compromiso cívico” (PNUD, 2014). En definitiva, se trata de “variables políticas” al decir de Juan Linz, que tienen una incidencia a tomar en consideración para comprender la naturaleza del sistema político chileno, así como también sobre la cultura política de los ciudadanos que lo sostienen (Almond & Verba, 1970; Pye & Verba, 1965; Inglehart, 1988).

Como se señaló en las primeras páginas de este estudio, la literatura especializada sobre los gremios empresariales (Montero, 1993; Arriagada, 2005; Campero & Cortázar, 1988; Campero, 1984) muestra una postura política bastante homogénea en el apoyo al diseño institucional de “democracia protegida”, ya que su comportamiento político fue de resistencia ante cualquier modificación que buscara redefinir las reglas del juego democrático. No obstante, hablamos de organizaciones empresariales con una postura institucional que, como bien indican algunos estudiosos de las organizaciones, no necesariamente tiene que ser compartida plenamente por sus miembros (Varela, 1978), en este caso, por los integrantes de la élite empresarial, ya que éstos en su condición de ciudadanos pueden disentir del comportamiento político que promovieron sus respectivas patronales.

Tal cual se ha indicado, la importancia que tienen las limitaciones institucionales a la democracia han sido fundamentales en el impacto sobre la cultura política global de los chilenos. En ese marco, puede decirse que no tenemos ningún tipo de certeza sobre cómo se posiciona políticamente la élite empresarial frente a estos elementos del proceso político chileno. En ausencia de aquella certeza, pueden valernos como indicio las tomas de posición de los entrevistados en esta investigación, frente a la reforma constitucional



de 2005, que elimina la figura de los senadores designados y vitalicios del proceso político, lo que sin duda, constituyó un hito importante en materia de democratización.

Este ítem es fundamental para comenzar a distinguir la “*legitimidad*” que tiene para los participantes el régimen político: si estos ven necesario que permanezca este tipo de institucionalidad que restringe la representatividad, o bien, si se considera políticamente imprescindible avanzar hacia una “*democracia representativa*” sin dispositivos que limiten a la ciudadanía, con mecanismos de poder que solamente provengan de la soberanía popular (Gargarella, 1995).

### *1.1. La élite empresarial y los senadores designados*

El cambio de régimen político incluyó varios “enclaves autoritarios”, siendo uno de los más importantes la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso político chileno. Así, esta institución se transforma en un dispositivo con capacidad de tomar decisiones políticas, lo que constituye a todas luces “*un factor de distorsión del régimen democrático, que influye fuertemente en la representatividad y legitimidad del Congreso Nacional*” (Godoy, 2003, pág. 12).

Esta herencia institucional fue modificada sustancialmente por las reformas constitucionales de 2005, que permitieron, entre otros cambios, *subordinar el poder militar al poder civil* al suprimir a los senadores institucionales o designados y vitalicios (expresidentes, comandantes en jefe y generales directores de carabineros que podían ocupar cargos de senadores una vez retirados de sus instituciones de origen) (PNUD, 2014, pág. 432).

Por otra parte, las reformas constitucionales posibilitaron una mayoría civil en varias instituciones que habían sido claves para el régimen militar, restándole a éstas sus facultades designativas. Algunos de los cambios permitieron que el Presidente de la República pudiera remover a los comandantes en jefe del ejército, lo que antes prohibía la Constitución (a menos que estos abandonaran voluntariamente el cargo). Además, el ejecutivo, como parte de sus atribuciones ordinarias podía, en forma “*exclusiva*”, solicitar el pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nacional, institución que con la reforma perdía su carácter designador, pasando a ser una institución consultiva. Asimismo, se cambió su composición incorporando al Presidente del Senado, lo que le daba mayoría civil. Por último, las Fuerzas Armadas ya no podían nombrar miembros del Tribunal Constitucional ni designar senadores, porque estos fueron suprimidos por la misma reforma (Garretón & Garretón, 2010; Fuentes, 2012; Carmona, 2014). De hecho, su salida de la composición del Tribunal Constitucional también fue inminente. Así expresa la Constitución Política este nuevo ordenamiento:

“Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas” (art. 101, Constitución Política de Chile).

Como algunos analistas han hecho ver, esta limitación a la soberanía popular tuvo un impacto en la calidad de la democracia, sobre todo en lo referido a la dimensión electoral (Ruiz, 2011; Huneus, 2014; Fuentes, 2012; PNUD, 2014; LAPOP, 2006). No obstante, lo cierto es que luego de la reforma constitucional, Chile aumentó la calidad de su democracia y así lo indican los expertos, ya que de ahí en adelante todos sus senadores han sido elegidos a través de elecciones populares, sin ningún tipo de designación (Ruiz, 2011; LAPOP, 2006; Garretón, 2015).

Se trata, de todas maneras, de un cambio en la Carta Fundamental anhelado por la ciudadanía, sobre todo por los sectores afines políticamente a los gobiernos de la Concertación. Es más, quienes estudian la cultura política de los chilenos indican, por ejemplo, que a una década de la transición, cerca del 60% de la ciudadanía estaba a favor de la supresión de los senadores designados, mientras sólo un 28,9% prefería que estos se mantuvieran en el sistema político. El sector de clase alta es el que más clamaba por su mantención (53%), mientras el 65% de la clase media y el 73,1% de la clase baja solicitaban su salida del proceso político. De la misma manera, quienes más demandan la retirada de los senadores designados de la Cámara Alta son los que se posicionan más a la izquierda (84,2%), mientras los que se ubican más a la derecha del entorno ideológico son los más prefieren su inclusión (59,5%) (CERC, 2000)<sup>54</sup>.

Lo anterior vuelve a mostrar la importancia que tienen los posicionamientos políticos en el clivaje *democracia/autoritarismo* (Tironi, 1999), ya que los que más buscan una “democracia avanzada” y sin presencia de senadores institucionales son los que se oponían al régimen, mientras que, lógicamente, la gente de derecha más cercana al gobierno militar prefiere que las Fuerzas Armadas sigan vigilando e interviniendo en el desarrollo del proceso político. Las razones son políticas y culturales, y están asociadas a la “memoria histórica” del apoyo cívico al golpe de 1973 (Huneus, 2003; Manzi y otros, 2004), pero tampoco se puede dejar de mencionar la imagen positiva de la que gozaban las Fuerzas Armadas, percibidas en ese contexto por la ciudadanía como la institución menos corrupta de todas las instituciones del país (CEP, 2006)<sup>55</sup>.

En el caso de la postura de la élite empresarial ante la reforma constitucional que eliminó a los senadores designados, se puede indicar que, en primer lugar, los entrevistados se desmarcaron férreamente de la ideología clásica del “*gremialismo*”, en la que se concebía teóricamente como estratégico limitar la representación política a través de lo que se ha denominado como una democracia “orgánica”. Ésta consiste en un régimen mixto, con políticos elegidos popularmente pero con inclusión designada y con capacidad deliberativa de representantes de “cuerpos sociales” como los gremios, los colegios profesionales, las Fuerzas Armadas, entre otras élites que pueden tener capacidad deliberativa en el Congreso Nacional (Cristi, 2011). Así lo formula Jaime

---

<sup>54</sup> Véase la base de datos del CERC, disponible en:

[http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES\\_COL=138&Idioma=E&S\\_Cultura\\_politica\\_de\\_la\\_democracia\\_en\\_Chile\\_y\\_en\\_las\\_AmericaseccionCol=05&ESID=491](http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES_COL=138&Idioma=E&S_Cultura_politica_de_la_democracia_en_Chile_y_en_las_AmericaseccionCol=05&ESID=491)

<sup>55</sup> Los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas han ido socavando la valoración positiva que tenía la ciudadanía de esta institución. En efecto, desde 1990 hasta 2019 la confianza en las FF.AA siempre fue alta, disminuyendo desde un 54% en 2018 a un 33% a mayo de 2019 (Barómetro de la política, CERC-MORI, 2018).

Guzmán (1991): *“Dicho sistema se propone para elegir al Presidente de la República, a la totalidad de la Cámara de Diputados y a las dos terceras partes del Senado. Sin embargo, el tercio restante de éste se sugiere integrarlo con personalidades que hayan investido las más altas calidades de la vida republicana, y siguiendo variados métodos para su generación. Así, por ejemplo, se propone que integren el Senado los ex Presidentes de la República por derecho propio; el Comandante en Jefe de cada rama de las Fuerzas Armadas y el ex General Director de Carabineros que más recientemente se haya acogido a retiro al momento que corresponda la designación; un ex Presidente de la Corte Suprema, elegido por ésta; un ex Rector de la Universidad, elegido por todos los Rectores de Universidades que se encuentren en ejercicio cuando corresponda el nombramiento; un ex contralor General de la República, nombrado por el Jefe del Estado con acuerdo de la Cámara de Diputados, etc”* (pág. 333–334).

Por cierto, la ideología del gremialismo tiene antecedentes remotos en la política chilena<sup>56</sup>. Por ejemplo, en 1964, el presidente Jorge Alessandri y su ministro Enrique Ortúzar, enviaron un Proyecto de Ley al Congreso Nacional para redefinir la composición del Senado bajo una modalidad gremialista. La intención de sus autores, en la misma línea planteada por Guzmán, era justamente incorporar a los “cuerpos intermedios” en el Congreso, lo que tenía como finalidad, entre otros objetivos, limitar la voluntad popular. El proyecto fue rechazado y no llegó a “buen puerto”. Sin embargo, algunos expertos en esta materia señalan que la influencia de los gremialistas en la Comisión “Ortúzar” que dio vida a la Constitución de 1980 es evidente, por ejemplo, en la inclusión de los “senadores designados”, tal cual se puede inferir de las intenciones de Guzmán antes expuestas (Cristi, 2011; Cristi & Ruiz-Tagle, 2014)<sup>57</sup>.

Como se puede distinguir, se trata de una ideología relevante en la política nacional, la cual impregnó a diversos sectores de la derecha. Entonces, teniendo a la vista estos antecedentes, en el marco de las entrevistas realizadas, se les consultó a los participantes si ellos consideraban pertinente la inclusión y designación de representantes de las organizaciones empresariales y otros “cuerpos sociales” en el Congreso Nacional. En el fondo, lo que se quiso examinar era si permanecían algunos vestigios del gremialismo en la “configuración ideológica” de los entrevistados, lo que luego debía ser

---

<sup>56</sup> Mirando muy hacia atrás, se puede rastrear la idea de “designación” en detrimento de la representación popular ya en los primeros “ensayos constitucionales” de la república. Por ejemplo, el ensayo constitucional de 1822, desarrolló el principio de “soberanía” al que se le otorgó la facultad de instalar un gobierno y de dictar leyes objetivas que regulasen a quienes ejercían el poder del Estado como a los gobernados (*principio de supremacía constitucional*). También, se reconoció la separación de los poderes del Estado entre el ejecutivo y el Legislativo, este último *conformado por cinco senadores designados por el propio ejecutivo*, y el Poder Judicial, que fue delegado a un Supremo Tribunal Judiciario y a una Corte de Apelaciones y juzgados subalternos (Campos Harriet, 1983).

<sup>57</sup> Según Cristi (2011), las ideas gremialistas de los miembros constituyentes fueron matizadas con la integración a la Comisión de la Nueva Constitución de Evans, Bascuñan y Lorca, siendo los dos primeros profesores de derecho constitucional y militantes del Partido Demócrata Cristiano. Bajo esta mirada, estas incorporaciones coadyuvaban para que Guzmán, uno de los principales líderes de la Comisión, ponderara sus posturas organicistas, al darse cuenta, finalmente, que bajo esta corriente igual se corría el riesgo de que se formaran gremios estatales que pudieran controlar el proceso político.

verificado en la pregunta por las actitudes políticas sobre la reforma constitucional que eliminó a los senadores institucionales o designados. Al respecto, la élite empresarial tuvo una postura unánime de rechazo a las designaciones, como se puede ver a continuación.

“Bueno, son épocas. No, para nada viable, pero ¿por qué los empresarios? y ¿por qué no los académicos?... y suma y sigue, ¿por qué los mapuches tienen que tener un asiento? ¿por qué no se lo ganan? etcétera, y de hecho hoy día los mapuches están... entonces, no, no lo comparto eso. Hoy día ya sabemos cómo es la democracia y tenemos que jugarla y hacer las cosas bien de tal manera de poder ganar las elecciones” (E21, 74 años, SNA, derecha).

“No, no la comparto, nosotros hemos tenido en algunos momentos de nuestra historia estos famosos Consejos Económicos Sociales y de esas características. Yo comparto plenamente la existencia de ese tipo de instancias, ojalá un gobierno siempre tuviera la voz y pudiera escuchar la voz de gremios, sindicatos, grupos intermedios, etcétera, *pero me parece que la composición base que tenemos en el Congreso es una composición finalmente política, de decisión de las personas sobre la base de los méritos de los candidatos. Yo discrepo de esas instancias más corporativas y creo que el Congreso como tal debe ser el lugar de los representantes de la gente*” (E23, 51 años, SOFOFA, derecha).

“No, el mundo ha cambiado mucho y eso se llama, ¿cómo se llama?... Nacional socialismo, el gobierno de los gremios tiene un nombre internacional medio macabro... lo que era Mussolini...”

**Entrevistador: ¿El fascismo? R:** El fascismo, no me interesa, no me interesa, al contrario, en los gremios está la gracia de la independencia personal que permite una acción mucho más auténtica de cada persona” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

Tal cual se puede colegir de los textos presentados, en la élite empresarial predomina en forma transversal una concepción de la “*democracia representativa*” muy parecida a elaborada por Roberto Gargarella (1995), quien define este modelo como “*un ordenamiento político destinado a reemplazar al sistema de democracia directa, y mediante el cual un grupo de personas lleva adelante la tarea cotidiana de organizar (a través del dictado de normas legales) la vida en sociedad, en nombre y representación del resto de la ciudadanía*” (pág.91). Esta concepción clásica de la representación política que tienen los entrevistados es muy alejada respecto del gremialismo que tenía lugar hacia mediados del siglo pasado en el país, lo que pone en evidencia una *diferencia* ideológica sustantiva entre la ideología que se le atribuye a algunos líderes políticos e intelectuales de la derecha gremial y la comprensión de la “democracia representativa” que tienen los participantes, siendo esta última mucho más “democrática”.

Continuando con el análisis, puedo confirmar que no hubo ningún entrevistado que haya hecho mención a limitar la democracia sobre la base de *designaciones* de cuerpos intermedios y/o de élites no electas por la soberanía popular. Esta demarcación del gremialismo tradicional a la que hacía mención, también se corroboró en las posturas

favorables que actualmente tienen los entrevistados en torno a la eliminación de los senadores designados, en las cuales todos valoraron positivamente la salida de las Fuerzas Armadas del proceso político, enarbolando para ello distintos argumentos.

La mayoría de los razonamientos esbozados para fundamentar estas tomas de posición, estuvieron relacionados con la necesidad de haber tenido a los senadores institucionales para un determinado *momento del desarrollo político de Chile*, como fue la “transición a la democracia”, ya que estos actores proporcionaron una cierta estabilidad al proceso político, la que hoy día es innecesaria tal cual está consolidada la democracia.

Por otra parte, también se justificó su existencia en el sistema político sobre la base de un ordenamiento institucional que emergió como una respuesta o “*reacción*” al proceso político que se comenzó a polarizar en la década del sesenta y que tuvo su punto más álgido con el gobierno de Allende.

En definitiva, es por lo anterior que la existencia de los senadores designados se entiende como “transitoria”, ya que, una vez consolidada la democracia y sus instituciones, estos ya no deberían ser necesarios como garantes de este proceso, ni menos como deliberantes, tal cual se puede interpretar de los relatos que expongo a continuación.

Cabe añadir que, de la misma manera que ocurrió con las posturas favorables al cambio de régimen que hoy día manifiestan los entrevistados, se trata de una lectura realizada *ex post*, y muy probablemente los participantes en 2005 podrían haber tenido una postura contraria a la implementación de la reforma. En todo caso, ya indique que no se trata de una “insinceridad”, y aunque esto fuera así, no es sociológicamente relevante (Cäis, Folguera & Formoso, 2014), siendo lo verdaderamente interesante cómo a quince años de dicho suceso, el sujeto intenta dar coherencia a sus propias interpretaciones, aunque estas a veces puedan incluso ser contradictorias, sobre todo en un contexto de consolidación democrática como el que ha tenido el país, donde este tipo de dispositivo parece hoy día no ser necesario.

**“Entrevistador: ¿Qué le parece que la eliminación de los senadores designados? R:** ¡Bueno, buenísimo!, por supuesto, o sea, *creo que es importantísimo de que los militares no se metan en política. Yo creo que fue un momento, ahora no es necesario, pero lo que hizo la Concertación en los primeros años de pasar una transición sin haberse generado ningún conflicto con un gobierno “duro” al respecto, yo creo que se manejó muy bien la Concertación justamente para evitar roces innecesarios. Que ahora sean necesarios los Senadores designados, no me importa que el expresidente sea senador designado, vitalicio, para ser franco me encantaría que fuera, lo veo súper bien, es que lo veo institucional, un país republicano, yo creo que es importante que estén*” (E5, 47 años, SNA, derecha).

“A mí me parece bien, Las FF.AA se deben al ejecutivo y así tiene que ser, no lo veo de otra manera” (E24, 48 años, SNA, centroderecha).

“Bien, me parece bien, me parece que la representatividad tiene que provenir de la ciudadanía y no de algún elemento de poder, así que a mí me parece bien eso” (E16, 70 años, SNA, apolítico).

“Nuevamente, como desde el punto de vista del sistema electoral, yo creo que *hay ciertas instituciones en la Constitución que van respondiendo a apellidos o épocas de nuestra historia. A mí me parece que los senadores designados responden a un cierto concepto o un cierto principio o a una cierta reacción a nuestra historia*, por lo tanto, creo que fueron una contribución importante para el Congreso dentro de algunos años, pero me parece también que tal como aludía en otros temas, hay momentos en que históricamente ya no responden a las necesidades de un país, y, por lo tanto, su modificación y eliminación creo que fue adecuada” (E23, 51 años, SOFOFA, derecha).

“Yo prefiero que no estén. Me gusta más el esquema antiguo donde no eran deliberantes. Porque yo creo que lo que hablábamos antes, que la sociedad se desarrolla mejor cuando ve equilibrios de poderes y los poderes están divididos, entonces, si tú tienes el poder de las armas y le sumas el poder de la política, corres el riesgo de un poder muy alto que produzca un desequilibrio de poderes en la administración del país, que es lo que pasa con las revoluciones, con los golpes de estado, con las intervenciones militares (...) es la distribución del poder, que tú necesitas un equilibrio de poderes. Si el poder las personas lo usamos, y lo usamos en exceso si es que no tenemos una limitación, y yo creo que eso está en la *naturaleza humana*” (E3, 77 años, SOFOFA, derecha).

Hay que mencionar sí, que algunos de los entrevistados destacaron positivamente el rol de los expresidentes como senadores vitalicios, entendiendo esta figura más bien con un carácter “republicano”, que puede aportar cierta experiencia política, *“no entiendo que tengan derecho a ser senadores porque sí. Una salvedad: yo creo que un expresidente de la república, existe hasta en las organizaciones más básicas, el consejo de los ancianos, alguien o una persona que ha sido Presidente de la República es una persona que tiene una experiencia que aportar de todas maneras, no sé si sea el formato como para meterlo como senador designado...”* (E20, 57 años, SNA, derecha). Pese a esto, aunque se subrayó la importancia que podían tener líderes políticos que habían sido mandatarios, también es cierto que ninguno de los participantes se refirió al General Pinochet, el que asumió en esa calidad desde 1990 hasta 2002, año en que renunció al Congreso<sup>58</sup>.

Se puede inferir que este desmarcamiento de la figura del General Pinochet está relacionado con su propio debilitamiento ante la opinión pública (Heiss & Szmulewicz, 2018), sobre todo por sus enjuiciamientos en Inglaterra y España por los casos de violaciones de los Derechos Humanos, además de los casos de corrupción en los que se vio involucrado él y su familia. En efecto, entre 2001 y 2003 su imagen como un buen gobernante cae de un 27% a un 19%, mientras en forma inversa aumentaba su imagen como dictador, de un 66% a un 75% en las mismas fechas señaladas (CERC-MORI, 2015).

Esta imagen negativa del General Pinochet también es considerada por Claudio Fuentes (2012), para quien los factores mencionados obligaron al ala más “dura” de la

---

<sup>58</sup> Al respecto, véase esta nota del diario El País (2002) del día en que el General Pinochet renunció a su cargo vitalicio en el Senado.

[https://elpais.com/internacional/2002/07/04/actualidad/1025733613\\_850215.html](https://elpais.com/internacional/2002/07/04/actualidad/1025733613_850215.html)

derecha a tomar distancia de la figura del General, sobre todo con fines electorales. En esa misma dirección, el mismo autor enfatiza que el dispositivo que favorecía a las fuerzas políticas afines al régimen en el Senado, luego se transformó en un verdadero obstáculo para este sector político, especialmente por el cambio en la correlación de fuerza que se hizo favorable a la Concertación (coalición que ganó los tres primeros gobiernos antes de la reforma). Esto habría gatillado la necesidad de introducir cambios a la Constitución que pudieran suprimir estos “amarres institucionales”, pero que a la vez, permitieran a la derecha disputar el poder en otra instancia: el Congreso Nacional. Así, la transacción política consistió en subordinar el poder militar al poder civil a cambio de un mejoramiento de la distribución del poder político, al darle más herramientas al legislativo, entre estas, la facultad para crear Comisiones Investigadoras en la Cámara Baja y la creación de un mecanismo de interpelación al ejecutivo, que en casos extremos podía culminar con la destitución de autoridades ministeriales (Fuentes, 2012)<sup>59</sup>.

Pues bien, en vista del examen anterior, y tomando en cuenta las posturas favorables que *hoy* tienen los entrevistados en torno a la eliminación de senadores designados, se puede afirmar que el proceso de “resocialización política” bajo el contexto democrático (Mishler & Rose, 2007; Almond, 1993; Jackman & Miller, 1998; Tormos, 2012; Percheron, 1985; Flores & Selios, 2013), ha sido importante en la cultura política de la élite empresarial. Así, la vuelta a la democracia es valiosa en la proliferación y promoción de las *libertades individuales*, lo cual tiene un asidero en el régimen político y en la consolidación de sus instituciones (Inglehart & Welzel, 2006). De esta manera, el fenómeno de democratización que gradualmente vive el país va permitiendo a los entrevistados tener mayor *confianza* en el régimen político y sus instituciones, lo que, en consecuencia, permite ir corrigiendo o desestimando aquellas valoraciones de las herencias del período autoritario, siendo una de las más importantes la limitación a la democracia que hacían los senadores institucionales (Domínguez, 2005).

En todo caso, aún no está claro si la postura favorable de la élite empresarial a la desmantelación gradual de la herencia autoritaria se da con todos los “enclaves autoritarios”, como, por ejemplo, hacia el cambio de la Constitución o el sistema electoral, lo que se verá en las páginas siguientes. Pese a esto, entre tanto sí se puede señalar que el apoyo cívico de la élite empresarial a la democracia y sus instituciones es mucho más evidente que en el resto de los chilenos, puesto que como se mostró, los entrevistados sí apoyan irrestrictamente la “democracia representativa”, siendo este apoyo muy característico de aquellos que pertenecen a los sectores con mejor posición social de la sociedad (PNUD, 2014; Díez, 2011).

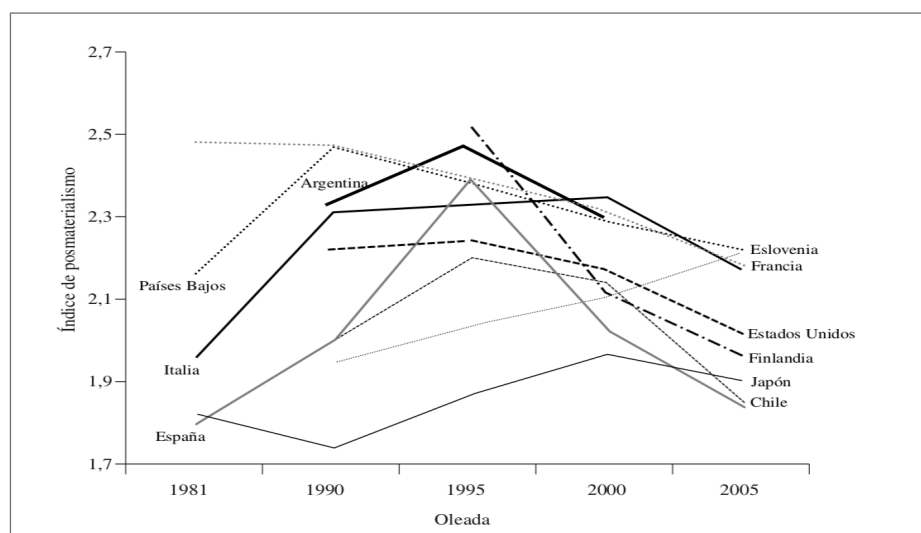
El lector/a tiene que tener en cuenta que en Chile, sobre todo por el fuerte crecimiento económico, los grupos de “centro social” o élites, como es el caso de los entrevistados, desarrollan manifiestos valores de “autoexpresión”, sin perjuicio de que esos valores hoy día vayan en un cierto “retroceso” producto de un resurgimiento de valores de “supervivencia” en algunos países desarrollados (Díez, 2006 y 2011). Así se

---

<sup>59</sup> Las reformas también rebajaron los años del mandato presidencial de seis años a cuatro, sin posibilidad de reelección inmediata (Ruiz, 2011).

puede ver en el gráfico núm. 13, que muestra la evolución de los valores posmaterialistas en las élites, incluida la chilena.

Gráfico 14. Índice de posmaterialismo de las élites (centro social), por país y oleada



Fuente: Díez (2011, pág. 24).

Es por ello que cabe verificar próximamente si este apoyo cívico a la democracia va acompañado de una postura flexible hacia cambios más profundos, como es el caso de la Constitución y de otras dimensiones políticas como el cambio electoral u otras reformas institucionales, que pueden ser consideradas importantes en contribuir al bajo desempeño de las instituciones políticas (PNUD, 2014).

Ahora bien, actitudes políticas que emanan de grupos con una alta posición social pueden presentar más de una contradicción con respecto a lo que ocurre en el mundo por fuera de las élites, y esto es interesante de analizar. Advierto esto porque, en efecto, los entrevistados, que ostentan una situación favorecida, valoraron favorablemente la modernización que hizo el gobierno militar, evaluando de buena manera la continuidad de la política económica que hicieron los gobiernos democráticos de la Concertación (Garretón, 2012). Pero esta prolongación del modelo de desarrollo no es tan clara para el resto de los chilenos, ya que algunos datos indican que éstos parecen tomar cierta distancia, mirando incluso con sospecha las cifras sostenidas de crecimiento económico con una ineficiente distribución de la riqueza: distribución negativa que ha producido una “pugna distributiva” de carácter histórico y que no ha podido ser solucionada por los gobiernos democráticos, ni por los de la Concertación ni por los de Chile Vamos.

Lo anterior invita a analizar el problema del desarrollo socioeconómico que ha existido en el país, que también se ha visto limitado *institucionalmente* en su dimensión distributiva. Esto, según algunos expertos en el campo de la cultura política, tiene efectos nocivos en el socavamiento de las bases culturales de la democracia, de ahí la importancia de su análisis (PNUD, 2014; Segovia & Gamboa, 2015). Efectivamente, parte del problema de la distribución de los recursos en la sociedad chilena, como se apreciará próximamente, también tiene su origen en el “tipo” de transición a la democracia. Esto



obliga a volver la vista sobre este fenómeno para entender el panorama de la cultura política de la ciudadanía en general, y de la élite empresarial, en particular.

## **2. Modernización y conducción de las élites**

Desde la transición a la democracia (1990) hasta la fecha, Chile ha tenido un importante progreso en distintas materias económicas, sociales y también políticas, lo que sitúa al país, según diversos organismos internacionales, como un ejemplo de desarrollo socioeconómico y político de la región<sup>60</sup>. Este desarrollo, así lo indican algunos expertos, se debería en gran medida, a un equilibrio entre crecimiento económico (Ffrench–Davis, 2003; De Gregorio, 2005) y “gobernabilidad democrática”, que se ha mantenido a pesar de la herencia autoritaria aún presente en el régimen político (Domínguez, 2005; Montero, 1993; Garretón, 2017; Heiss & Szmulewicz, 2018).

Dentro de estos avances, la literatura sobre el tema y los informes internacionales destacan diferentes aspectos, resaltando algunos como el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos chilenos, que ha aumentado significativamente en las últimas décadas acercándose cada vez más al promedio de los países de la OCDE en algunas dimensiones de bienestar (bienestar subjetivo, ingresos, balance vida–trabajo y salud) (OCDE, 2018). Asimismo, se celebran los avances en materia de educación, dado que Chile ha aumentado significativamente su cobertura educacional, posicionándose como uno de los países más avanzados en esta materia entre los países de la OCDE (OCDE, 2015a, pág. 2). Por último, son de destacar, sobre todo, los elogiados avances en materia de reducción de la pobreza, puesto que ésta ha disminuido desde un 38,6% en 1990 a un 11,7% a 2015 (Ministerio del Desarrollo Social, 2017, pág. 13).

Sin embargo, “no todo lo que brilla es oro” en Chile. Y esto porque a pesar de los indicadores macroeconómicos positivos, persisten serios problemas de desigualdad socioeconómica y de concentración de la riqueza, que no han podido ser solucionados, a pesar del continuo crecimiento experimentado por el país desde el retorno a la democracia. Se trata, como se ha sostenido anteriormente, de una histórica “pugna distributiva”, que ha sobrevivido a los cambios de régimen sin mejoras realmente sustanciales (Larrañaga, 2016).

Efectivamente, Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina (octavo lugar) en 2015, con un coeficiente Gini de 47,7 según fuentes del Banco Mundial en 2018<sup>61</sup>. Así también lo informan organismos internacionales como la OCDE, que muestran, por ejemplo, que se establece una diferencia muy pronunciada entre el décil de ingresos más elevados y el décil de más bajos ingresos (OCDE, 2018, pág. 6), siendo de las más desiguales dentro de los países que pertenecen a este grupo, sólo superado por Brasil, Costa Rica y México.

---

<sup>60</sup> Al respecto, véase Banco Mundial (2018) y el PNUD (2017).

<sup>61</sup> Véase el Banco de datos del Banco Mundial, disponible en [https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL&year\\_high\\_desc=false](https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL&year_high_desc=false), visitado el día 3 de octubre de 2018.

Por otra parte, el país registra una alta concentración de la riqueza y diferentes indicadores dan cuenta de una muy desigual distribución de los recursos económicos. Aunque es bien sabido que este no es un problema específico de Chile, sino más bien de concentración de la riqueza a nivel global (Piketty, 2015, pág. 31; Stiglitz, 2012, pág. 103–135), lo cierto es que en el caso del país sudamericano los datos llaman la atención por la evidente contradicción entre su crecimiento sostenido y su marcada desigualdad y concentración del ingreso.

Así lo reflejan algunos datos, donde por ejemplo, en 2013 un 0,1% de la población reunía el 13,75% de la riqueza nacional (Huneus citando a Engel, 2014, pág. 38), lo que no varía significativamente cuando se revisan otras fuentes de medición más actuales. En esa orientación, organismos internacionales como la OCDE dan cuenta de un escenario similar, puesto que en 2015 se registraba que los ingresos del decil más rico de Chile eran 26 veces más altos que el decil más pobre (OCDE, 2015, pág. 3); fuentes locales del más diverso signo político, aunque reconocen una paulatina disminución de la desigualdad, concluyen resultados igualmente alarmantes (CEP, 2017a; Urzúa, 2018; cfr. López, Figueroa & Gutiérrez, 2013).

Aunque siempre es materia de debate entre autores que conforman el campo de la cultura política, puede inferirse siguiendo los postulados de Almond & Verba (1970), Inglehart & Welzel (2006), Lipset (1970) y Rustow (1987), que los problemas asociados al desarrollo socioeconómico han sido parte fundamental en las causas de la baja participación de los ciudadanos en política y en el declinante apoyo al régimen político y sus instituciones (Latinobarómetro, 2017 y 2018). Esto puede ocurrir porque la ciudadanía percibe que a pesar de gozar de indicadores macroeconómicos positivos, esto no necesariamente se traduce en una mejor redistribución de la riqueza o un mejoramiento sustantivo de la situación social del país. De hecho, los chilenos evalúan muy críticamente el crecimiento económico, ya que sólo un 17% de la población manifiesta haberse beneficiado de esta situación, mientras un 76% señala que sólo ha beneficiado a los más ricos (CERC–MORI, 2011; Latinobarómetro, 2017, pág. 25). Esta evidente contradicción, resalta lo señalado por Inglehart & Welzel (2006), para quienes el desarrollo y el crecimiento económico no son necesariamente lo mismo:

“(…) el nivel de desarrollo económico de una sociedad es un factor de predicción mejor de la democratización que su tasa de crecimiento económico. De hecho, las tasas de crecimiento económico son siempre engañosas como factor de predicción de la democracia, e incluso pueden tener el signo contrario” (Inglehart & Welzel, 2006, pág. 60”).

Esto último explica, no totalmente pero sí en forma importante, la ya mencionada baja confianza en las instituciones políticas (Putnam, 2000; LAPOP, 2012, pág. 92), pero además, otros aspectos de la cultura política de los chilenos como la baja confianza interpersonal y la escasa importancia de la actividad política en la vida personal de los ciudadanos (WVS–MORI, 2018, pág. 18).

Pero también es importante mencionar que el desarrollo socioeconómico no es el único elemento que ha incidido negativamente en la cultura política de los chilenos, ya

que es sabido que los “universos políticos” de los ciudadanos son “multidimensionales” y estos se deben a múltiples factores (Verba, Nie & Kim, 1987; Morán & Benedicto, 1995; Jost y otros, 2003). Uno de estos factores es el fenómeno de la *corrupción*, que ha golpeado con fuerza a los ciudadanos de los países latinoamericanos (Latinobarómetro, 2018).

Sin duda, hablamos de una situación que hace bastante tiempo viene erosionando la confianza en los regímenes democráticos y en sus élites dirigentes, pero pese a esto, habría que hacer más énfasis en el problema del desarrollo socioeconómico, ya que la corrupción se percibe como más intolerable y, por ende, socava más las bases de la democracia cuando aumenta la desigualdad o ésta se hace más evidente (Stiglitz, 2012; Ariño & Romero, 2016). Así ocurre en varios países iberoamericanos, donde a pesar de detentar una posición elevada en los rankings de corrupción, no necesariamente ha bajado el apoyo a la democracia. Hay varios casos que ilustran esta situación: es el caso de países como España, ubicado en 2018 en el lugar 58 en el *Corruption Perceptions Index* (2018), nueve lugares adelante de Chile, y donde el apoyo a la democracia es de un 86% (Fundación Alternativas, 2019, pág.19). Lo mismo sucede con países vecinos como Argentina, ubicado en el puesto 40 en el índice mencionado (27 lugares por sobre Chile), con un apoyo a la democracia de un 58% (igual que Chile). O casos, incluso, muchísimo más complejos como el de Venezuela, país que a pesar de todos los problemas de su régimen político, se encuentra en el puesto 18 de los países percibidos como más corruptos, pero al mismo tiempo presenta un apoyo a la democracia de un 75%. Esto último parece indicar que la corrupción es un problema gravísimo en la forma en que los ciudadanos perciben a las élites en el poder (Ariño & Romero, 2016), no obstante, aunque siempre es materia de discusión académica, parece ser que la desigualdad es un tanto más incisiva en la cultura política de los ciudadanos, y de alguna manera, así lo confirma la literatura y la evidencia empírica (Latinobarómetro, 2017; LAPOP, 2016; PNUD, 2014; Inglehart & Welzel, 2006; Lipset, 1970; Diamond, 2003).

Bajo la premisa anterior, se puede decir que la dificultad en reducir significativamente la desigualdad en Chile y atenuar la excesiva concentración de la riqueza ha sido materia de diversas interpretaciones, aunque varios sostienen en que su explicación predominante es más bien de carácter político y no puramente económica (Acemoglu & Robinson, 2012; Segovia & Gamboa, 2015; Huneus, 2014; Garretón, 2015; PNUD, 2004 y 2015).

Bajo esa tesis, los estudiosos de la transición chilena colocan el énfasis en *las decisiones estratégicas de las élites políticas y también empresariales*, en las que la alianza de gobierno de la Concertación, los partidos de oposición y quienes “mandan” en el mundo económico, habrían consensuado la continuidad del modelo de orientación “neoliberal”, en el que el mercado tiene un rol absolutamente predominante por sobre el Estado (Fuentes & Joignant, 2015; Van de Wyngard, 2013).

El problema de esta decisión de las élites radicaba en que esta política económica garantizaba altas tasas de crecimiento, sin considerar mayormente el problema de distribución de los recursos y sus posibles efectos perjudiciales sobre la relación entre ciudadanía y democracia (Inglehart & Welzel, 2006; Lipset, 1970; Rustow, 1987; Stiglitz, 2012). Por el contrario, habría primado una visión “funcionalista” sobre la continuidad

del modelo de desarrollo heredado de la dictadura, cuyo crecimiento sostenido en democracia era considerado un factor esencial para la consolidación del régimen democrático, ello en la medida en que los grandes problemas políticos se resolvían a nivel de “quienes gobiernan”, sin una participación ciudadana relevante en las decisiones (Huneus, 2014; Garretón, 2012 y 2015; Mayol, 2016; Montero, 1993).

Otra mirada como la de Garretón (2012 y 2015) también coloca el foco sobre la estrecha relación entre política y desarrollo socioeconómico. Así, desde una vertiente más “estructuralista” y con menos énfasis en la “agencia” propiamente tal, los gobiernos de la Concertación carecieron de un “margen de maniobra” lo suficientemente holgado como para realizar transformaciones en la orientación del modelo de desarrollo y también del sistema político. Esta imposibilidad de cambios se produjo, como decía anteriormente, por la institucionalización de los “enclaves autoritarios” heredados de la dictadura militar, sumados a un fuerte poder de veto de la oposición y a un empresariado fortalecido por el poder económico adquirido a través de las privatizaciones realizadas durante la dictadura militar, lo que, según algunos autores, lo habría transformado en una suerte de “poder fáctico”, vehiculado a través de sus organizaciones empresariales (Arriagada, 2004; cfr. Álvarez, 2015; cfr., Cortes, 2000)<sup>62</sup>. Así, frente a una institucionalidad constreñidora y frente a actores con mucho poder como el gran empresariado, los debilitados partidos de la Concertación en el gobierno, distanciados ya de sus históricas bases sociales, sólo pudieron optar por la realización de algunas correcciones específicas sobre el modelo socioeconómico y avanzar gradualmente en la democratización política de la “sociedad pinochetista” (Garretón, 2016, pág. 29).

Como bien se puede ver, ambas interpretaciones muestran la estrecha relación entre política y desarrollo, haciendo complejo distinguir y separar ambas dimensiones. El resultado en el caso chileno ha sido, en síntesis, un avance paulatino en materia de democratización que no ha ido necesariamente de la mano de un mejoramiento potente en el desarrollo socioeconómico, sobre todo en las dimensiones referidas a la lucha contra la desigualdad y concentración de la riqueza (Huneus, 2014).

A raíz de lo anterior, es posible inferir que la política de continuidad de los gobiernos de la Concertación, dirigida a consolidar la democracia sobre la base del crecimiento, pero sin prestar la debida atención a la dimensión del desarrollo socioeconómico, tuvo como consecuencia una serie de “estallidos sociales” que algunos analistas definieron como el “despertar de la sociedad civil” (Rojas, 2012; LAPOP, 2012). Estas explosiones sociales se produjeron, primeramente en 2006, con las movilizaciones de estudiantes secundarios (conocida como la “revolución pingüina”); fenómeno que

---

<sup>62</sup> Un ejemplo del poder que tiene el sector privado en la sociedad chilena, se puede distinguir en la discusión sobre el modelo previsional. En este diálogo, que se puede leer en las Actas secretas de la Junta Militar, el General Pinochet confirmaba el excesivo poder que se le confería a los grupos económicos: *“aquí van a aparecer dos o seis imperios del dinero, que lo manejarán ellos (...) por consiguiente, a la larga, como apunta el General Mendoza, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso. No será ahora, sino que con el tiempo. En ocho o diez años tendrán al país en sus manos”* (Acta n°398 1980 Sistema de AFP). Disponible en:

[https://es.scribd.com/document/319822433/Acta398-1980-a-Sistema-AFP#from\\_embed](https://es.scribd.com/document/319822433/Acta398-1980-a-Sistema-AFP#from_embed) visitada el día 24 de diciembre de 2018.

adquirió muchísima más fuerza y sistematicidad a partir de 2011, a través de una serie de diversos movimientos y movilizaciones sociales que desafiaron la institucionalidad vigente (PNUD, 2014 y 2015a).

Estos movimientos sociales fueron fundamentales para motivar algunos cambios en el centroizquierda, sobre todo en la orientación política de algunos partidos de la Concertación, coalición que recogería parte de las demandas ciudadanas en el programa de gobierno de Michelle Bachelet (2014–2018) (LAPOP, 2014). Se trata de un giro ideológico que intentaba sintonizar con la sociedad, buscando resolver algunas de las cuestiones más urgentes de los movimientos sociales. Situación que como era de esperar, provocó el cuestionamiento de distintos actores políticos y económicos, ya que muchos esgrimían que esta mutación ideológica de sintonizar con “la calle” habría puesto fin a la “transición” y/o a la “política de los consensos” que había caracterizado los primeros cuatros gobiernos de la Concertación. Esta ruptura o “desviación ideológica” se sintetiza en la polémica frase del entonces presidente del Partido por la Democracia (PPD), el Senador Jaime Quintana, que a días de haber asumido la presidenta Bachelet formula el siguiente comentario en relación a los cambios que había que implementar en educación: *“Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. El lucro, la selección, la discriminación y la mala calidad. Esas son las características de un modelo educacional que tenemos hoy día, y por lo tanto estos anuncios que hoy día ha planteado la Presidenta Michelle Bachelet van en la línea absolutamente contraria”*<sup>63</sup>.

Evidentemente, la frase elaborada por el senador fue criticada por parte importante del mundo político, en particular por la oposición y el empresariado, ya que su concepción ideológica atentaba contra toda la política de continuidad “funcionalista” que se venía gestando desde la transición<sup>64</sup>.

Es por esto mismo que interesa conocer cuál es el posicionamiento que tienen los entrevistados frente al origen de las movilizaciones, prestando atención a lo que la literatura especializada ha denominado difusamente como el “malestar social”: fuente de energías sociales acumuladas, que habría desatado los movimientos “tectónicos” de la sociedad chilena, poniendo en riesgo los consensos que se habían mantenido durante más de dos décadas. He ahí la importancia de desentrañar las posturas de la élite empresarial sobre este evento social de gran magnitud y con consecuencias políticas relevantes en el giro a la izquierda que hacen las fuerzas políticas de la Concertación.

---

<sup>63</sup> Fuente: Emol (2018), página visitada el día 18 de mayo de 2018. Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/nacional/2014/03/25/651676/nueva-mayoria-advierte-que-pasara-retroexcavadora.html>

<sup>64</sup> Véase la opinión del dirigente empresarial Alfredo Moreno, expresidente de la CPC: <http://www.diarioeldia.cl/region/le-hizo-mal-chile-pensar-que-se-podia-usar-retroexcavadora-cambiarlo-todo>. También revisar otras opiniones contrarias, incluso del mismo gobierno, como bien declaraba el Ministro del interior de la presidenta Bachelet, Rodrigo Peñailillo: <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-retoexcavadora-de-quintana-cumple-cinco-anos-las-anecdota-y-los-costos-del-intento-de-pasar-maquina/585112/> Visitadas el día 3 de junio de 2019.

En virtud de lo anterior, es conveniente conocer cuáles son las imágenes políticas y las posturas que tiene la élite empresarial ante las movilizaciones que comienzan a emerger desde 2011. Esta será una sección importante de este capítulo, ya que buena parte de la evidencia empírica muestra que desde la ciudadanía se demandaban “confusamente” algunos cambios profundos de la relación entre política y sociedad (PNUD, 2014; Garretón, 2015; cfr. CEP, 2017a). Petitorios ciudadanos que podrían entrar en tensión con la postura inflexible de la élite empresarial en torno a cambios que amenacen la línea de continuidad, que se viene promoviendo desde el retorno de la democracia. Esta dimensión de la cultura política se analiza a continuación.

### *3.1. La élite empresarial, el malestar y las movilizaciones sociales*

Diversos autores e informes han señalado (LAPOP, 2012; PNUD, 2014 y 2015; Garretón, 2015; Rojas, 2012; Mayol, 2013; Atria y otros, 2013) que las movilizaciones sociales responden a un descontento social que se comenzó a hacer más evidente a partir de 2011, a raíz de múltiples estallidos sociales y de diversa magnitud a lo largo del territorio nacional. En efecto, desde las protestas en contra de la dictadura militar en 1983 que no se veía tal nivel de agitaciones subterráneas en la sociedad chilena, generando interés y simpatía en los chilenos... al menos durante un tiempo (PNUD, 2015a).

Al respecto, no hay un diagnóstico único en torno a esta cuestión, existiendo más bien distintas interpretaciones sobre la emergencia o irrupción de estos movimientos. Una de las interpretaciones más difundidas es la tesis del “malestar social”, que se vendría incubando en la sociedad chilena desde hace largo tiempo, y que comenzó a ser rastreado por el informe de Desarrollo Humano “Las paradojas de la modernización”, dirigido por Norbert Lechner en 1998 (Salazar & Osorio, 2010).

Una de las diversas expresiones del “malestar” tendría un componente político asociado a la fuerte desafección hacia las instituciones políticas, como la sistemática mala evaluación de los gobiernos, los partidos, el Congreso Nacional, además del bajo interés en la actividad política (PNUD, 1998, 2012; WVS–MORI, 2018). Sin embargo, esta desconfianza ciudadana hacia las instituciones no sólo se explicaría por factores políticos relacionados con la calidad de la democracia, sino también, por la histórica “desigualdad” que ha tenido lugar en el país.

En tal sentido, muy en la línea de lo desarrollado a lo largo de este trabajo, la desigualdad ha sido un factor decisivo en el *impacto* sobre la cultura política de los ciudadanos (Haye, Carvacho, Manzi, & Segovia, 2009). Y así lo defienden diversos analistas e informes de organismos internacionales como los del PNUD, el Barómetro de la política (LAPOP), Latinobarómetro, entre otros estudios con validez internacional. Si bien es cierto, en muchos de estos trabajos no se menciona tan explícitamente ni se hace un desarrollo exhaustivo en torno a la noción de “malestar social”, sí se recalca la importancia del problema del desarrollo socioeconómico como un factor que lentamente ha ido socavando las bases culturales de la democracia. Así lo formulaba el PNUD el año 2004: “... la creciente frustración por la falta de oportunidades y por los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, se expresa en malestar, pérdida de confianza en

*el sistema político, acciones radicalizadas y crisis de gobernabilidad, hechos que ponen en riesgo la propia estabilidad del régimen democrático”* (pág. 25).

Pero desde otro ángulo hay quienes matizan este diagnóstico crítico que pone el énfasis en la desigualdad como fuente de las agitaciones sociales y del malestar (CEP, 2017a). En esta otra interpretación sería más bien la propia “modernización capitalista” la que traería consigo esta sensación de “incomodidad” en la ciudadanía, al producir un conjunto acelerado de altas expectativas no cumplidas en el corto plazo, a pesar del sostenido crecimiento que ha experimentado el país. En esta versión, la ciudadanía – socializada mayoritariamente en el contexto de las modernizaciones (primero autoritaria y luego en democrática) (Inglehart, 1991)– por distintas vías habría gozado de los beneficios del acceso a la “modernidad”, teniendo al alcance bienes y servicios sociales (consumo, educación, salud, infraestructura, entre otros) antes negados para la inmensa mayoría de la población. Este acceso habría aumentado en forma exponencial las posibilidades sobre esta acelerada e intensa inclusión. Así describe algunos de los beneficios que ha traído la modernización el influyente intelectual chileno, Carlos Peña: *“Cambios que antes tomaban generaciones se han producido ahora en poco más de dos décadas. La mejora del bienestar que antes se relataba como parte de una historia familiar extendida en largos lapsos, se resume en nuestros días en un capítulo de una trayectoria individual. Y el resultado es que las mayorías históricamente excluidas atribuyen a su propio esfuerzo el bienestar del que ahora disponen. Lo que hasta anteayer se atribuía a la autoridad estatal y a la política, los nuevos grupos medios lo ven como el resultado de su propia transpiración. Después de eso es muy difícil que las viejas fuentes de autoridad que servían de apoyo y de soporte a las costumbres más conservadoras sigan cumpliendo ese papel”* (Peña, 2019).

Bajo esta tesis, la ciudadanía absolutamente “impregnada de modernización” (pero sin modernidad al decir de García Canclini), más que todo estaría disconforme con el funcionamiento de algunas instituciones públicas y privadas, sobre todo en lo referido a la provisión de bienes y servicios (CEP, 2017a). En tal sentido, su opción pareciera ser *conservadora* en torno a un eventual cambio profundo del modelo de desarrollo y del sistema político, aunque se mantendría inflexible en torno a una constante demanda por el mejoramiento de sus condiciones de vida. En palabras de José Joaquín Brunner, *“la gente desea seguir mejorando sus condiciones de vida —y de su familia— pero más rápido. Quiere ‘más de lo mismo’ pero en un menor tiempo, de manera de, así, satisfacer sus expectativas”* (Brunner citado en CEP, 2017a, pág. 43).

La evidencia empírica que ha producido el Centro de Estudios Públicos avala el diagnóstico que tienen sus investigadores sobre el “malestar” en la sociedad chilena, en el que concluyen en forma muy parecida a lo expuesto por Brunner y Peña. Aunque se reconoce la importancia de la desigualdad en el impacto sobre la cultura política de los chilenos, igualmente se estima que *no* es precisamente un cambio político y económico estructural lo que se estaría solicitando desde la ciudadanía, sino más bien un conjunto de “ajustes” o “mejoramientos” sustantivos en la calidad y eficiencia de los servicios y bienes entregados a través de instituciones públicas como privadas. Estas modificaciones sobre lo ya existente, irían mucho más en sintonía con los “valores individualistas” de los

chilenos, de mayor creencia en el “esfuerzo personal” por sobre valores de orientación más colectivista (CEP, 2017a).

Como bien podrá deducir el lector/a, se trata de dos miradas o enfoques distintos sobre un mismo fenómeno, con soluciones estructurales o parciales también diferentes. Antes bien, emerge la interrogante sobre ¿cuál es la postura que tienen los entrevistados frente al “malestar” de la sociedad chilena? ¿reconocen este problema o son debates académicos desconectados de la realidad? En efecto, como se mostrará en lo que sigue, la postura de la élite empresarial frente a esta situación es muy compleja, ya que a pesar de valorar positivamente la evolución socioeconómica que ha tenido el país, igualmente existe en los entrevistados una sensación de “incomodidad” con la modernización, sobre todo en lo referido a la desigualdad y a los cambios políticos y culturales experimentados por los chilenos.

En esa dirección, la gran mayoría de los entrevistados considera que Chile ha experimentado cambios positivos en términos de desarrollo socioeconómico. Sorprende que varios testimonios fueron muy similares en relación a proporcionar una “mirada histórica” que incorporó elementos del *pasado* y del *presente* para hacer la comparación. En tal sentido, la “evolución de la sociedad chilena” que hicieron los participantes se hizo sobre todo pensando en el *cambio material* experimentado por el país: de ser un país muy pobre a transformarse en un país con bastante desarrollo incluso alcanzando a países más avanzados.

Por otra parte, en forma transversal al entorno ideológico y en ambas generaciones analizadas, los discursos esgrimidos por los sujetos de investigación se caracterizaron por enfatizar con vehemencia la erradicación prácticamente absoluta de la pobreza que había en el país, otorgándole, por lo demás, un mérito al modelo de desarrollo en dicha función; se subrayó el acceso a “bienes de consumo” a vastos sectores de la población, los que antes se encontraban reservados sólo para sectores más pudientes, siendo este argumento elucubrado en casi todos los relatos como un claro indicador de desarrollo: el “coche”, la “casa propia”, el acceso a “tecnología”, la “cobertura en educación”, entre otros bienes y servicios fueron reiterados en los relatos y asimilados como una “entrada a la modernidad”.

“Mire, Chile, ha tenido un crecimiento que no se puede negar, en todos los ámbitos. Chile ha crecido en los niveles de escolaridad, Chile ha crecido educacionalmente, el chileno hoy día es más instruido, el chileno está abierto al mundo a través de la tecnología que tenemos hoy en día, pero también ha tenido una mejor posición económica; el chileno viaja más y viajar ya no es lo mismo que ver las cosas por la televisión sino que tener esa experiencia, entonces, el chileno ha crecido harto [mucho]. Los últimos 20 o 30 años han sido lejos la época más gloriosa de Chile en toda su historia, estamos viviendo ese “gran salto”, que saltamos de un país de ingresos bajos a un país ya de ingresos altos, rosando ya a países desarrollados, entonces, estamos ahí... y eso no se puede negar” (E10, 40 años, SOFOFA, centro).

“(...) pero yo lo encuentro altamente positivo, logramos integrarnos al mundo de los países desarrollados y cuando digo desarrollados, no digo desarrollados



económicamente, yo creo que hemos hecho cosas que se han incorporado al *bienestar* de la gente, o sea, preguntarse hoy día cuánta gente son hoy día universitarios de primera generación; cuánta gente tiene hoy día un vehículo; cuánta gente hoy día no vive miserablemente; cuánta gente hoy día se viste bien; que tenemos gente en situación de calle, pero ¡por favor!, veamos un libro de los años 50' donde la gente no tenía que comer, veamos Lota en 1850, o sea, claramente hemos evolucionado hacia un estado donde la gente tiene más bienes de consumo pero también más acceso a bienes de bienestar (...) yo he estado en India, yo he estado en China y he estado 20 veces en China y no solamente he estado en Beijing, en Shangai y en Wansu, he estado en la China “interna”. Yo no sé si usted ha leído... lea el libro de Pearl Buck “La Buena Tierra”, lo que era China el siglo pasado. Hoy día hay regiones de China que siguen siendo eso... de pobreza infinita, de miseria, de degradación humana. Hoy día en Chile cada vez lo vemos menos” (E13, 71 años, SNA, centro).

“Buh, ¡un cambio total!... el surgimiento de una clase media baja impensable, ¡no, la transformación es total! Ha surgido una clase media baja a partir de dos o tres factores que no son siquiera los más claves del modelo económico, pero yo lo caricaturizaría en el surgimiento de la tarjeta de crédito como medio de pago y el progresivo acceso a esa tarjeta de crédito universal que produce un cambio en la sociedad muy grande. Con tarjeta de crédito en la mano, la nana<sup>65</sup> de mi casa o el Sr. Luksic son iguales... no, ¡es salvaje! Bueno, *eso va a terminar en el endeudamiento de esta gente y en las crisis salvajes producto del endeudamiento y lo exagerado del endeudamiento*, pero es un cambio de actitud ante la vida, el ser titular de la tarjeta de crédito (...) bueno, el otro (cambio) es de estatus, de percepción de la gente, de percepción de su dignidad personal y de sus derechos, que lo caricaturizo y me parece muy representativo, el acceso del primer miembro de la familia a la universidad. Esas dos cosas, produjeron una toma de conciencia de un sector popular, no el de D o el E<sup>66</sup>, pero sí un sector bajo, que lo pasó a un sector medio bajo, pero “medio” de frentón, con televisión por cable, con nevera en la casa... el “acceso a la modernidad”, de manera muy importante” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

En verdad, la mirada histórica, sociológica y comparativa que tienen los entrevistados está signada por una percepción personal sobre la evolución de la sociedad chilena, que se corresponde absolutamente con los indicadores objetivos de mejoramiento del estandar de vida de los chilenos, tal cual se mencionaba en páginas anteriores. En ese sentido, los participantes recalcan sobre todo el aumento de la educación de la sociedad chilena, lo que es coherente con las cifras que dan cuenta de esta situación, ya que principalmente a través de la inversión privada, la expansión de la cobertura en educación en Chile ha sido casi absoluta (OCDE, 2015a); otro elemento percibido y enfatizado es la superación de la pobreza endémica que había existido en Chile, que a datos de 2018 no llega al 11%

---

<sup>65</sup> El concepto “nana” es un chilenismo referido a las personas que ejercen labores domésticas. Véase la RAE, visitada el 24 de diciembre de 2018, <https://dle.rae.es/?id=QDyMKfC|QDyvIIk>

<sup>66</sup> El entrevistado hace referencia a la estratificación típica de mercado: ABC1 (segmento alto), C2 (segmento medio alto), C3 (medio), D (mediabaja) y E (extrema pobreza).

(CEPAL, 2018); también se enfatizó como factor de “acceso a la modernidad” el turismo que actualmente hacen los chilenos, lo que se corresponde plenamente con los datos sobre esta situación. Así lo ilustra la cifra de viajes al extranjero, según el Servicio Nacional de Turismo, que aumentó aceleradamente de poco más de dos millones de personas en 2007 a sobre 3.552.000 personas en 2016<sup>67</sup>. Como se puede inferir de las cifras, se trata de un aumento acelerado y en muy poco tiempo, algo muy parecido al diagnóstico sobre las expectativas aceleradas que produce la modernización.

Otro aspecto subrayado en los relatos y que merece mención a parte es la “*tarjeta de crédito*” como signo de estatus social. En efecto, a lo que se refiere el entrevistado más arriba es a uno de los aspectos más interesantes del “acceso a la modernidad” que ha experimentado la sociedad chilena, el que está relacionado con la posibilidad de alcanzar bienes y servicios en el sector privado como público por la vía del crédito. Esto ha significado que desde el retorno de la democracia hasta el día de hoy, la apertura comercial y la profundización del libre mercado que ha tenido el país, ha permitido a su población tener un pleno acceso a cualquier tipo de bienes y servicios (desde un televisor hasta un coche o una casa) por la vía del crédito. Esto en opinión del último entrevistado produce una situación de “*igualdad*” entre una persona de bajos ingresos y una de las personas más ricas de Chile, ya que ambos pueden gozar de tener los mismos productos, siendo el mercado lo suficientemente “*democrático*” como para producir esta posibilidad. Se trata de una mirada positiva, aunque no exenta de preocupación, ya que él mismo entrevistado luego matiza sobre los *efectos nocivos* que tiene este “bienestar material”, al señalar el problema del endeudamiento, calificándolo como “*salvaje*”.

Conviene detenerse un poco en esta apreciación sobre los efectos negativos de la “tarjeta de crédito”, lo que, como se puede inferir del fragmento, genera aprensión en algunos miembros de la élite empresarial.

Efectivamente, la sociedad chilena ha tenido un acceso a la modernidad absolutamente innegable, y así lo muestran algunos de los indicadores expuestos anteriormente. Se trata eso sí (como bien lo describe el dirigente) de un “acceso a la modernidad” por la vía del consumo y del endeudamiento, los que se han mantenido *in crescendo* desde 1990 hasta la fecha, constituyendo una situación muy compleja en términos socioeconómicos. Esto es así porque este acceso a bienes y consumos se realiza sobre la base de un alto endeudamiento de la sociedad chilena, que llega según distintas fuentes de medición a niveles extraordinarios. Así lo constata, por ejemplo, el Banco Central en 2018, entidad que señala que ese año, los hogares chilenos llegaban a destinar al endeudamiento un 70,1% de sus ingresos totales. De esta cifra, casi un 40% corresponde a créditos bancarios y casas comerciales (Banco Central de Chile, 2019, pág. 5).

El uso “indiscriminado” de la tarjeta de crédito, según varios expertos, se produce, sobre todo, por los bajos salarios que tiene gran parte de la población. Y así lo confirman otras fuentes de medición, ya que, por ejemplo, según el Instituto Nacional de

---

<sup>67</sup> Al respecto véase el informe de SERNATUR sobre “turismo emisor”, visitado el día 1 de enero de 2019, <http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/10/20170731-TURISMO-EMISIVO-2016-julio.pdf>.

Estadísticas, el 50% de los trabajadores percibe ingresos menores o iguales que \$ 379.673 pesos (489 EUR), mientras sólo el 12,2% tiene ingresos mayores a \$ 1.000.000 de pesos (1.288 EUR) (Instituto Nacional de Estadísticas, 2019)<sup>68</sup>; cifras que se tornan más sombrías respecto de lo entregado recientemente por la Fundación Sol (2019)<sup>69</sup>, que en base a la última encuesta de Caracterización Socioeconómica de 2017 (CASEN), se señala que casi un 75% de la Fuerza de trabajo obtiene menos de \$ 500.000 (644 EUR) pesos liquidados al mes, y tan sólo un 16,1% gana por sobre los \$700.000 pesos (901 EUR)<sup>70</sup>.

Lo anterior verifica la compleja relación entre bienestar material inmediato por la vía del consumo y del crédito, lo que significa establecer una hipoteca sobre el futuro, lo que se acentúa aún más en el marco de una sociedad enrolada en las pautas de consumo y estilo de vida moderna. Esto no es muy lejano de las descripciones que hacía Tomás Moulian en su célebre obra *Chile Actual: Anatomía de un mito*, ensayo donde el sociólogo hacia fines de los noventa metaforizaba a la ciudad como un verdadero “paraíso del consumidor” (1997)<sup>71</sup>. Pero claro, se trata de un consumo no exento de frustración (Moulian, 1997 y 2000; Lipovetsky, 2006), ya que el acceso ilimitado a bienes y servicios se realiza en un marco socioeconómico de bajos salarios, de endeudamiento y de una exacerbada desigualdad en los ingresos, todo lo cual coadyuva a fortalecer este “malestar subjetivo” que produce la modernización. En definitiva, una “paradoja” que se expresa en el sacrificio de ser una sociedad altamente endeudada, y, por otra parte, de ser una sociedad que mayoritariamente se declara feliz, tal cual lo confirma la Encuesta Mundial de Valores (85% se declara feliz o muy feliz) (WVS–MORI, 2018).

De alguna manera, este “*cuadro matizado y complejo de percepciones y opiniones, con reconocimiento de progresos que se corresponden con los indicadores objetivos de mejoría en las condiciones de vida de las personas; altas expectativas de mediano y corto plazo; nítida identificación de desigualdades...*” (Brunner citado por CEP, 2017a, pág. 15) que tendrían la mayoría de ciudadanos chilenos, también sería compartido por gran parte de los miembros de la élite empresarial, que si bien identifican nítidamente las bondades del modelo de desarrollo, no son para nada ajenos a esta percepción subjetiva de incomodidad o “malestar” que produce la modernización (Leca, 1986). Esto último es interesante, y prueba que, sorprendentemente, esta sensación “agridulce” es transversal en la sociedad chilena, haciéndose sentir incluso en los sectores de posición social alta como es el caso de quienes participaron en este estudio.

En ese tenor, se puede advertir que los entrevistados, en términos generales, son bastante críticos de la desigualdad que existe actualmente en el país. De hecho, cuando

---

<sup>68</sup> Véase más detalle en: [https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2018/07/18/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-\\$554.493-en-2017](https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2018/07/18/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-$554.493-en-2017) visitada el 4 de agosto de 2018.

<sup>69</sup> Al respecto, véase el informe “Los bajos salarios en Chile” de la Fundación Sol (2019).

<sup>70</sup> El valor en euro fue calculado con fecha 20 de mayo de 2019.

<sup>71</sup> Un dato casi anecdótico sobre este “paraíso del consumidor” se puede ver en los viajes que realizan ciudadanos argentinos a Chile para comprar tecnología, la que es mucho más variada y barata que la que se importa en el país trasandino. Se trata de una práctica muy común y recurrente, que atrae a personas de otros países para el consumo.

fueron consultados si compartían las tesis del “malestar social” en la sociedad chilena, la mayoría relacionó esta sensación de disconformidad o frustración con el problema de la desigualdad y de concentración de la riqueza, situaciones que fueron vistas como un *efecto no deseado* de la modernización.

“Sí, lo que pasa es que la desigualdad se ha producido... mira, depende mucho del liderazgo y de la idiosincrasia, esto no lo hacen dos o tres líderes que antiguamente influían mucho, pero yo creo que al final el sistema político y socioeconómico tal como está funcionando ha permitido esta desigualdad. Una, porque yo creo que hubo un momento en que había que generar una libertad económica tal como se hizo en el sentido de que hay gente que tenía que “tirar del buque” como sea, con la fuerza necesaria aunque sea un poco; lo que sucede es que después de un tiempo a fines de los 90’ era suficiente, y ahí yo creo que pasamos a un momento en que ya se debió haber puesto trabas a ese crecimiento descomunal de “pocos” (E27, 48 años, SNA, centroderecha).

“A ver, soy un gran crítico: yo voy a Santiago y antes veía dos Santiago, un Santiago de Plaza Italia para abajo y un Santiago de Plaza Italia para arriba, digamos. Hoy día hay tres Santiagos: uno que parte en Los Leones para abajo, otro que parte en Los Leones para arriba y después hay una gran cantidad de gente que vive en una opulencia máxima en los cerros de Santiago, en las casas de veraneo. Es decir, puede que sea lícito, pero me gustaría que en este país existieran menos pobres, no me molestaría que existieran los ricos y los que tienen las fortunas que tienen si existieran realmente menos pobres, y me refiero no solamente a la pobreza material, me refiero a la pobreza de vivir en la miseria; de vivir en la miseria sin educación, sin salud, sin previsión, sin ninguna cosa, *eso todavía tengo la capacidad de que me duela, por ser partícipe de una sociedad donde existen brechas de repente muy grandes*” (E29, 63 años, SNA, derecha).

“Creo que sí, hay mucha desigualdad, hay una brecha muy grande entre los más ricos y los más pobres. Claramente no puedo considerarla positiva, es parte de una deuda pendiente del sector empresarial que no supo o no ha sabido en definitiva compensar y tener ganancias altísimas y no hacer las compensaciones con sus trabajadores” (E31, 60 años, SNA, derecha).

Parafraseando al popular sociólogo Talcott Parsons, los “efectos no esperados de la acción” también fueron relacionados con el “extremo individualismo” que existe en la sociedad chilena, ya no entendido como un valor de “autoexpresión” en el sentido que le confieren Inglehart & Welzel (2006), sino más bien como un comportamiento “egoísta” que difiere del individualismo que está orientado a la libre elección y al fortalecimiento de la democracia en las sociedades desarrolladas. Hablamos de un individualismo distante, frío y corrosivo de la “solidaridad” que caracterizaba a la sociedad chilena de antaño, *“Yo siento que con tal de llegar a un fin, que normalmente es un fin material, se han perdido los valores morales, éticos, incluso valores de familia, valores que son los que a mi modo de ver, son los fundamentales en una sociedad y en el ser humano. La*

*modernización extrema tiene consecuencias brutales, yo creo que sí y a veces se nos olvida” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).* Se trata, nuevamente, de una sensación de incomodidad con la modernización, como si ésta tuviera un fin teleológico necesario e inevitable pero con costos sociales muy altos por pagar: la excesiva *mercantilización* de todos los aspectos de la vida social y la pérdida de un sentido colectivo que, en definitiva, le ha hecho mal al país, y que se hace necesario “ajustar” mas no cambiar, como se verá un poco más adelante.

“La desigualdad ha crecido mucho. Y también es producto de nosotros mismos, no tanto del sistema económico. El Estado si bien se ha despreocupado de eso, muchos somos culpables de que el individualismo y la mercantilización de las cosas nos lleve a nosotros mismos a mercantilizarnos con nuestros vecinos, con el otro apoderado [tutor] del colegio y todo lo transformamos a cuánto gana, dónde trabaja, qué auto tiene, qué es lo que hace, y nos valoramos poco como personas. En eso creo que ha crecido mucho la desigualdad en Chile... somos arribistas, muy arribistas. Cuando yo puede que socialmente o económicamente esté uno o dos escalones más allá que mi vecino, pero yo genero desigualdad al no generar lazo con él —no sé si me explico— al yo vivir mi individualismo. La diferencia tal vez no es tanta, pero esa desigualdad, yo bloquearme con él y ese otro al bloquearse conmigo, porque claro “ese que se compró el auto” o porque “puso al cabro chico acá” [refiriéndose al colegio] y eso genera esos cortes de conversaciones y se genera resentimiento” (E10, 40 años, SOFOFA, centro).

“He visto una sociedad, tal vez, en el pasado más solidaria pero mucho más desigual, mucho más desigual, yo vi, me parece que te conté el otro día que hablamos, que mi madre había trabajado en cosas de voluntariado de cruz roja, era casi universal, todas sus amigas estaban de alguna manera involucradas en cosas de voluntariado, muchos caballeros estaban involucrados. Había, sin duda alguna, más solidaridad, entonces, digámoslo en términos actuales, es una sociedad poco solidaria la actual, respecto de la que fue, te diría yo... hasta el 80’, 1980, sí, hasta 1980. Porque incluso era muy solidario en el tiempo de la Unidad Popular, en el tiempo del presidente Allende, de que habían problemas de abastecimiento, habían problemas de sobrevivencia, en muchos casos sí se ayudaba mucho la gente, íbamos a las poblaciones y ayudábamos a la gente, bueno, pero ese es un cambio importantísimo” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

Como indicaba antes, el “malestar social” es un concepto “multidimensional” y por lo mismo es difuso o “escurridizo”, que además parece tener una expresión política según los entrevistados (muy en la línea de lo planteado por el PNUD). Este malestar asociado a desigualdad e individualismo, según los dirigentes empresariales, también tiene alguna incidencia negativa en la baja “eficacia política” que desarrollan sus compatriotas chilenos. En verdad, se trata de un diagnóstico acertado, ya que al tratarse de un país con un desarrollo limitado por todo lo antes explicado, esto tiene como resultado una débil propagación de valores de “autoexpresión” a nivel societal, apenas superior a los valores de “supervivencia” (WVS–MORI, 2018; CEP, 2017a). Sólo las élites logran distinguirse

de esta desafección, condición dada sobre todo por su alta posición social, lo que les ha permitido desarrollar valores democráticos más intensamente (Díez, 2011).

Ambas generaciones de entrevistados y sin distinción por patronal, dejan ver con claridad el poco interés que genera la actividad política en la sociedad. Y en opinión de los participantes, esto de alguna manera se relaciona con el “desarrollo económico”, el “individualismo” y la pérdida de un “sentido colectivo”:

*“Sí, es cierto que el desarrollo económico ha generado un cierto “individualismo” y ese individualismo siento yo que se refleja en la apatía política, en que en realidad, la gente no participa, no vota, dice “no qué, si a mí me da lo mismo, yo tengo que trabajar igual, esté Juan, Pedro, Diego... tengo que levantarme a trabajar igual, tengo que hacer las cosas igual...” (E14, 51 años, SNA, centroderecha).*

*“(...) y las generaciones más anteriores, y si uno se va más para atrás, las abuelitas votan pero sagradamente, aunque se estén muriendo vienen a votar, porque hay un “sentido colectivo”, y yo voto porque hay un proyecto colectivo, muy asociado a los partidos políticos, aunque no sean de partido, pero es una constitución más comunitaria y aquí no... el cabro joven es individualista, “chanchito[cerdo] total”<sup>72</sup>, radical, si no está bien aquí “me cambio de pega [trabajo]”, “me las arreglo, punto”, cero compromiso y si hay cero compromiso por el trabajo, por la gente... ni se casan” (E17, 49 años, SOFOFA, centroderecha).*

*“Yo creo que la sociedad chilena es más desinteresada en la política que antes, superlativamente. Nosotros en la vida política era un elemento importante de nuestro acervo cultural, hoy en día yo lo veo en la gente más joven y ya no tan joven, 50 años para arriba, o para abajo, no “está ni ahí”<sup>73</sup> con la política, no le interesa el tema” (E16, 70 años, SNA, apolítico).*

Como se puede inferir de los fragmentos presentados, la gran mayoría de los entrevistados reconocen situaciones que han contribuido a generar la presencia de una especie de “malestar social” en la sociedad chilena, poniendo en evidencia una cierta “empatía” (Leca, 1986) con el mundo que está por fuera de las élites. Se trata de un conjunto de actitudes políticas bien definidas sobre un objeto sociopolítico que tiene un carácter difuso y que por su misma complejidad tiene distintas expresiones, siendo las más recalcadas la “apatía política”, la “desigualdad” y el “extremo individualismo” imperantes en el país, este último concebido como un cambio cultural en gran medida negativo.

---

<sup>72</sup> “Chanchito” es una expresión que se usa en Chile para referirse a los puercos, definida por la Real Academia Española como una persona sucia, que es en el sentido en que el entrevistado se refiere figuradamente a los jóvenes individualistas. Véase <https://dle.rae.es/?id=8Xnmkqe>

<sup>73</sup> “No estar ni ahí” es una expresión típica chilena para referirse a una situación donde no existe ningún tipo de interés de parte del involucrado.

En efecto, las actitudes políticas de los entrevistados muestran un nítido contenido cognitivo y evaluativo (Almond & Verba, 1970) –muy propio de las minorías selectas (Puntam, 1973; Pye, 1977)– que en verdad no se reduce únicamente a estas dimensiones. Así, como se puede inferir de los relatos presentados, los miembros de la élite empresarial también logran expresar *sensaciones*, sobre todo en lo referido a esta “incomodidad” o “frustración” que ha producido la modernización. En algunos casos estas sensaciones son más extremas y producen “dolor”, como mencionaba un participante que describía el sentimiento negativo que le provocaba la “miseria humana” de otros compatriotas.

Pero pese a esto último, las posturas políticas de los miembros de la élite empresarial son *inflexibles* en torno a la modificación del *modelo de desarrollo*, ya que este sistema socioeconómico para este grupo ha traído muchos más beneficios que perjuicios, lo que está sustentado, como se ha podido ver, en su visión “comparativa” y “funcionalista” de la sociedad: comparativa porque en la mirada pasado–presente, el “modelo” ha permitido erradicar la pobreza histórica que había caracterizado a la sociedad chilena, proporcionando en forma gradual y por la vía mixta distintos servicios y bienes que se pueden ir mejorando para optimizar su calidad; “funcionalista” porque es el crecimiento económico el factor que permitiría ir mejorando otras dimensiones de la sociedad, sobre todo la referida a la “igualdad de oportunidades”. En tal sentido, sin excepción, se manifestó una *aversión* a cambiar la orientación socioeconómica existente, aunque sí se resaltó la necesidad de introducir “ajustes” o mejoramientos, dándole al modelo de desarrollo una *mirada más social* y mejor dirigida a solucionar el problema redistributivo.

“A lo mejor uno quisiera que las desigualdades se fueran superando más rápido, *pero siempre hay que tener cuidado de no introducir elementos que terminen frustrando el modelo que ha sido exitoso*. Pero de todas maneras yo pienso que a la economía social de mercado que nos rige, siempre tenemos que fortalecer el elemento social, precisamente para contribuir a superar esas desigualdades” (E9, 56 años, SNA, derecha).

“Yo creo que ese sistema de mercado hay que perfeccionarlo, hacerlo más social, en ese sentido de que hay que tener cuidado con las ganancias excesivas, *hay que “repartir mejor la torta” en el mercado*, pero pienso que el emprendimiento, la libertad de acción es lo que hace que los países progresen y así ha pasado con Chile” (E30, 62 años, SNA, derecha).

“Yo creo que la sociedad chilena está en una transición hacia una sociedad más democrática, hacia una sociedad donde se valora el esfuerzo individual pero también la gente entiende que en ciertos aspectos los modelos de solidaridad son deseables (...) a pesar de todas las cosas malas que tiene el sistema chileno, en general los nietos están mejor que sus abuelos, que sus padres, o sea, ha habido avances e importantes y tengo la impresión de que a poco, una parte importante de la población, *no le interesa dinamitar el sistema ni que cambie radicalmente, porque saben que sus abuelos estaban peor que ellos, que sus padres estaba peor que ellos y que creen que sus hijos van a estar mejor*. Sino que más bien, le interesan ajustes, digamos, cosas que no tienen tanto vértigo:

tener miedo a la vejez, tener miedo a enfermarte, es verdad, todos los tenemos, pero yo no... al final creo que hay una elite bien vociferante que poco representa a la mayoría del país” (E11, 43 años, SOFOFA, centro).

“Si yo pensara cuáles son nuestros grandes miedos como sociedad en general, sin hablar de ningún partido en particular, la sociedad chilena le tiene miedo a los grandes cambios, a los cambios radicales, porque uno está acostumbrado a ese hábito, de rutina, entonces, cuando te dicen de repente: “mira, mi programa es esto”, y tú ves que eso es distinto a lo que ya estamos acostumbrados y que funciona relativamente bien, eso genera temor, entonces, esa es la política que no me gusta, esa es la política a la cual le tengo miedo, a la radical, a la que cambia, a la “retroexcavadora” (E7, 46 años, SOFOFA, apolítica).

Esta postura *inflexible* que tiene la élite empresarial revela un notorio disenso respecto de lo que vienen planteando algunos movimientos sociales, especialmente desde 2011 hasta la fecha. Así, el sujeto de investigación tiene una especie de “diagnóstico” de la sociedad chilena, que reconoce aspectos negativos de la modernización, pero que pese a esto, aboga por reformas o “ajustes” de lo existente en función de mejorar la realidad socioeconómica del país. En el fondo, hablamos de una perspectiva “funcionalista” del desarrollo, tal como se venía implementando desde la vuelta a la democracia, y que comienza a entrar en tensión con los discursos que se vienen enarbolando desde los movimientos ciudadanos, que apuntan hacia cambios más profundos.

En efecto, desde las protestas contra la dictadura militar que no se había visto en el país una actividad social tan sistemática como la que se comienza a producir en 2006 y luego a partir de 2011 (Rojas, 2012). Hay que recordar que hacia fines del gobierno militar se produce una separación entre las fuerzas sociales que luchaban contra el régimen y las dirigencias de los partidos de la oposición democrática (Tironi, 1987), por lo que la transición y luego el proceso de democratización, se caracterizan por un “momento partidario” o por el predominio de los partidos. Esto, como explica Garretón (2015), de alguna manera deja sin marco de referencia o sin instrumento de lucha a los históricos movimientos sociales que se habían desarrollado en el país, como es el caso del movimiento obrero, el estudiantil o de pobladores; actores sociales que históricamente habían estado imbricados con los partidos en su acción colectiva (Garretón, 2010 y 2015; Angell, 1974).

Es así que, por más de dos décadas, se produce una exitosa y elogiada “gobernabilidad democrática” (Domínguez, 2005) con una ausencia de movilización social significativa, que perdura hasta la irrupción del movimiento de estudiantes secundarios en 2006 y con el movimiento de trabajadores del cobre en 2007. Ambas movilizaciones, elaboran petitorios particulares que convergen en desafiar la institucionalidad a través de demandas sociales que no podían ser resueltas bajo el marco legal vigente, ya que tensionaban directamente parte importante de las reglas institucionales heredadas de la dictadura militar, como lo eran la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) y la legislación laboral que se mantenía muy poco modernizada desde su implementación en 1978–1980 bajo la dirección de José Piñera.



Estas movilizaciones de gran magnitud y convocatoria remecieron al país y también desconcertaron a las élites que lo conducían en ese entonces. El *output* del sistema político a este conflicto fue una institucionalización de las demandas ciudadanas a través de distintas instancias de participación, que además incluyó a los propios actores movilizadores. El resultado fue la realización de algunos cambios institucionales, que si bien fueron celebrados por la clase gobernante en su momento, en rigor no pueden ser considerados como significativos en torno a las peticiones que se hacían desde los actores movilizadores. Así formula Garretón (2015) la resolución del problema: *“Pero la solución a los conflictos y movilizaciones planteados por estos actores se resuelven normalmente con la generación de instancias asesoras o deliberativas con participación de los sectores involucrados, las que, dada la correlación de fuerzas en el Parlamento, terminan distorsionando las posiciones del movimiento social y legitimando las posiciones derrotadas por este”* (pág. 226).

Pese a los cambios realizados, las movilizaciones sociales vuelven a emerger con mucha fuerza el año 2011, prolongándose hasta el día de hoy aunque con mucha menos sistematicidad en el espacio público, salvo por el movimiento feminista y el movimiento No +AFP al que me referiré más adelante. Efectivamente, a partir del año mencionado se desarrolla con bastante regularidad y alta convocatoria el movimiento estudiantil, que se desata en forma simultánea junto a otras movilizaciones sociales que estallan en varias partes del país (Magallanes, Puerto Natales, Freirina, entre otras localidades), las que también tienen en común demandas sociales y políticas que tensionan la institucionalidad política, exigiendo sobre todo descentralización (PNUD, 2014).

Desde el movimiento estudiantil se demanda la revitalización de la educación pública, su gratuidad y también un mejoramiento en su calidad (Rojas, 2012; Mayol, 2013; Guzmán & Oppliguer, 2012). La singularidad política de las demandas ciudadanas objeta la médula del modelo de desarrollo, básicamente, porque su intencionalidad apunta a derrotar las lógicas de mercado que se venían desarrollando en el sistema educacional desde la dictadura militar, y que habían sido corregidas parcialmente por la Concertación a través de fórmulas bancarias, que obligaban a los estudiantes deseosos de estudiar a pedir créditos para pagar las altas cuotas de las matrículas universitarias. Como era de esperar, esto solucionó algunos problemas inmediatos como el acceso (antes negado), pero posteriormente provocó un conflicto mayor asociado al fuerte endeudamiento de las familias de los estudiantes, que veían frustradas sus economías familiares (incluso llegando a destinar sobre un 70% de los salarios para pagar las matrículas universitarias según el Ranking Forbes (2015)<sup>74</sup>, lo que gatilló la implicación política de los padres en el movimiento social (PNUD, 2014 y 2015).

Para lograr los objetivos, desde el movimiento estudiantil se planteó la necesidad de hacer una reforma tributaria para financiar la educación superior, e incluso desde algunos sectores más radicalizados se planteaba una nacionalización de los recursos del cobre como medio para lograr tal fin. Políticas que, en opinión de sus dirigentes, hubieran

---

<sup>74</sup> Al respecto, revisar Ranking Forbes que sitúa a las universidades chilenas como de las más caras del mundo. Página visitada el día 2 de enero de 2019, disponible en <http://forbes.es/listas/3326/los-paises-con-las-universidades-mas-caras-del-mundo/7/>

sido suficientes para revitalizar la educación pública. De hecho, esta reforma tributaria planteada en este contexto de movilización había sido vista con buenos ojos por el presidente de la SOFOFA de ese entonces, Felipe Lamarca<sup>75</sup>, y también por el destacado dirigente empresarial Roberto Fantuzzi. De hecho, éste último dirigente señalaba en una entrevista que lo que había en Chile era *“un reventón social que tenemos que enfrentar los empresarios, porque lo más nos conviene a nosotros es la estabilidad social”* y esta, *“de alguna manera, hay que pagarla”* (El País, 2011)<sup>76</sup>.

Efectivamente, la especificidad de las demandas ciudadanas no era sólo socioeconómica por la situación de las deudas de los estudiantes y de sus familias, sino también política, ya que su cuestionamiento ponía en duda el rol del Estado subdiario que consagra la Constitución de 1980. Este rol consiste en *“entregar criterios de actuación de los privados y el Estado en diversos ámbitos económicos y sociales –privilegiando, en la medida de lo posible, el accionar de los primeros (dimensión negativa), a menos de que se cumplan ciertas condiciones que hagan necesario el apoyo estatal (dimensión positiva)”* (García García, 2014, pág. 291).

En el caso de la educación (que es uno de los casos que más se analiza sobre todo por su alta simpatía ciudadana), se proporcionaban recursos económicos directamente a la demanda por la vía del crédito y endeudamiento (conocido como “Voucher”), sin otorgar recursos económicos a las instituciones universitarias en forma directa (lo que se denomina en términos de mercado como subsidio a la “oferta”). Esta situación institucional obligaba a las universidades a seguir autofinanciándose y a competir entre ellas para recibir a esos estudiantes financiados por los bancos pero con respaldo estatal, por eso su nombre *Crédito con aval del Estado* (CAE). Lo anterior consolidaba, en definitiva, un sistema educacional público muy debilitado, con mayor predominio del sector privado, lo que además no necesariamente se traducía en una educación de buena calidad. Varios de estos problemas se modificaron con la reforma educacional de 2015, ya que el Estado pasa a financiar la gratuidad tanto en los colegios como en las universidades, logrando hacer de la educación ya no un bien de consumo sino un “derecho social” (Educación 2020)<sup>77</sup>.

La movilización estudiantil tuvo una alta convocatoria y contó por un largo tiempo con un claro apoyo de la ciudadanía. De hecho, en pleno climax de las movilizaciones, la gran mayoría de la población apoyaba a los estudiantes y poco más de un 70% creía que

---

<sup>75</sup> El expresidente de la SOFOFA, Felipe Lamarca, siempre ha tenido una postura crítica respecto del desarrollo socioeconómico que ha habido en Chile, criticando la acentuada desigualdad y la concentración de la riqueza que se produce en las élites. De hecho, fue conocida su frase realizada el día 9 de octubre de 2005, a un año de las movilizaciones estudiantiles, cuando el dirigente empresarial señaló que *“Chile no va a cambiar mientras las élites no suelten la teta”*. Este reportaje no está disponible en internet actualmente, pero hace una buena reconstrucción el portal EMOL (2017) sobre lo polémico de estos dichos del otrora dirigente empresarial. Página visitada el día 24 de septiembre de 2018, disponible en <https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/10/18/879620/A-12-anos-de-la-polemica-frase-de-Lamarca-Chile-no-va-a-cambiar-mientras-las-elites-no-suelten-la-teta.html>

<sup>76</sup> Al respecto, véase este reportaje del diario El País (2011). Visitada el día 24 de diciembre de 2018. Disponible en [https://elpais.com/internacional/2011/10/19/actualidad/1319042083\\_758894.html](https://elpais.com/internacional/2011/10/19/actualidad/1319042083_758894.html)

<sup>77</sup> Al respecto véase este enlace de la institución Educación 2020: <http://educacion2020.cl/noticias/como-cambia-el-sistema-educativo-con-la-ley-de-inclusion/> Visitado el 24 de diciembre de 2018.

la salida al conflicto educacional pasaba por un referéndum (CERC–MORI, 2011). Su nivel de masividad y convocatoria fue tal que golpeó con fuerza al gobierno del presidente Piñera, provocando incluso la salida de varios ministros de educación, obligando al Congreso Nacional a tomar cartas en el asunto. Así describe el clima político un entrevistado que trabajaba en la alta dirección pública para el gobierno de Piñera cuando llegaron las movilizaciones, *“Yo lo pasé pésimo, o sea, yo estaba trabajando en el gobierno de Piñera y esta cuestión estaba descontrolada... ¡descontrolada!, pero era todo armado por pequeños grupos que hacían mucho ruido y que generaban justamente esta desconfianza”* (E5, 47 años, SNA, derecha).

Unos años después en pleno gobierno de Michelle Bachelet vuelve a emerger otro movimiento que también gozó en su momento de una masiva convocatoria y cuyas demandas aún siguen desafiando la institucionalidad política y económica vigente: el movimiento No + AFP. Este movimiento tiene como objetivo terminar con el actual sistema de capitalización individual y avanzar hacia un sistema de solidaridad social de carácter público y tripartito, muy en la orientación de los sistemas de seguridad social europeos y de algunos países de la OECD.

Ciertamente, si durante la primera parte de esta década fue la *educación* el gran problema social que movilizó a los chilenos, en la segunda parte del decenio el problema más complejo son las *pensiones* que tienen y recibirán los chilenos.

Al respecto, hay consenso en que los datos sobre este asunto son realmente catastróficos: diversos estudios muestran un panorama extremadamente adverso de no modificar la situación actual en relación a las pensiones. Uno de los estudios más “representativo” y también reciente es el “informe del Consejo Asesor Presidencial sobre el tema de pensiones” (2015), conocido mediáticamente como la “Comisión Bravo”. Este informe emana de un consejo que cuenta con la participación de distintos actores del mundo político, social y académico, que representa además diversas sensibilidades políticas, y que se forma durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Su propósito es hacer un diagnóstico sobre el tema de las pensiones y también elaborar algunas posibles soluciones en materia de seguridad social. Algunas de las cifras de este informe son taxativas (2015), y ellas muestran el delicado estado de la cuestión de las pensiones, como, por ejemplo, que un 50% de las personas pensionadas entre 2007 y 2014 tienen pensiones iguales o inferiores a \$82.650 pesos (106 EUR) (pág. 85); también dicho documento señala que el 50% de los pensionados tiene pensiones que como máximo equivalen al 34% de su salario promedio de los últimos 10 años (lo que se denomina como “taza de reemplazo” (ibíd, pág. 87), siendo muchísimo más afectadas en esta distribución las mujeres.

Como se puede dilucidar, se trata de una situación social delicada que tiene y va a tener un impacto en la modernización. Y ella ha incidido en gatillar la movilización del mundo social. Es en este contexto que emerge el movimiento No + AFP, que es una fuerza social que considera que es imprescindible eliminar a las AFP de la provisión de las pensiones, ya que estas entidades, desde su perspectiva, no tendrían ninguna capacidad para solucionar el problema de fondo. En su reemplazo, se demanda un sistema público orientado hacia la seguridad social que existe en los países con Estados del bienestar (Esping–Andersen, 2015). Así plantea esta demanda el movimiento en cuestión: *“Somos*

*un grupo de ciudadanos y ciudadanas que tenemos conciencia que al llegar a nuestra vejez, nuestro nivel de vida se deteriorará sustancialmente, dado que jubilaremos por una AFP (administradora de fondo de pensiones), con una pensión que será la tercera parte de lo que hoy ganamos. En la totalidad de los países desarrollados y en casi la totalidad de los países afiliados a la OCDE, existen sistemas públicos de pensiones, cuyas jubilaciones alcanzan a un promedio 70% de los ingresos obtenidos durante la etapa laboral y los sistemas privados de pensiones son complementarios al público y en ningún caso lo sustituyen, como es el caso Chileno, dónde el único sistema al cual tienen opción de afiliarse los trabajadores(as) son las AFP'S" (No + AFP, 2019)<sup>78</sup>.*

Como se puede deducir del fragmento expuesto, el movimiento No + AFP tiene una actitud reprobatoria del rol jugado por las AFP, lo que no difiere significativamente de lo que manifiesta la opinión pública en forma sostenida hace bastante tiempo. Así lo revela un estudio del CEP (2017b) que muestra que un 80% de las personas consideran que las AFP son abusivas; valoración negativa que coincide con datos muy recientes de CADEM, que muestran que las AFP (y también las Isapres) generan sentimientos negativos en la población: un 69% de enfado, 7% de ansiedad y un 12% de tristeza, contra sólo un 3% de felicidad (CADEM, 2019, pág. 22).

Es conveniente señalar que, a pesar del mayoritario rechazo que manifiesta la ciudadanía hacia las AFP, también existen actores sociales y políticos que defienden su *mantención* con algunas correcciones, sobre todo referidas a la elevación de la tasa de cotización sobre un 10% (que es lo que hay actualmente); un aumento en la edad de jubilación y también un aumento del pilar solidario financiado vía impuesto general. De esta manera, según sus partidarios, el problema no sería tanto el actual sistema privado de pensiones, sino más bien en la informalidad del mercado de trabajo, que no permite cotizar sostenidamente en el tiempo, y también el crecimiento de las expectativas de vida, entre otras razones. Bajo esta tesitura, según señala Schmidt-Hebbel (2018): *“el descontento con el sistema es por bajas pensiones, lo cual no tiene casi nada que ver con las comisiones de administración que cobran las AFP. Esto se debe a enormes lagunas previsionales en buena parte de la población, edades efectivas de jubilación demasiado bajas y crecientes expectativas de vida, factores que explican la mayor parte de por qué las tasas de reemplazo en Chile son en torno a un 40% y no de un 70%, que es a lo que aspira la gente”* (pág. 8).

Como se puede concluir, hablamos de movilizaciones sociales que han motivado importantes cambios institucionales en el país, algunos de los cuales se comenzaron a materializar con la implementación de la gratuidad que se aprobó con la reforma educacional bajo el gobierno de Bachelet. El otro cambio referido a las pensiones, y que también tiene su origen en las movilizaciones sociales, actualmente es liderado por el gobierno del presidente Piñera, sin que todavía se materialice en una legislación. En todo

---

<sup>78</sup> En septiembre de 2017, éste movimiento organiza un referéndum *no vinculante*, que según la misma organización, logró una votación de 96,8% (961.319 votos) en contra del sistema de AFP, contra un 1,7% (17.247 votos) de personas que manifestaron continuar con el sistema actual vigente. Al respecto, véase los resultados del plebiscito en la página web de la Radio Universidad de Chile (2017), disponible en <http://radio.uchile.cl/2017/10/04/plebiscito-de-noafp-convoco-a-casi-un-millon-de-personas/>. Visitada el 1 de diciembre de 2018.

caso, ambos temas han marcado la agenda política, y es sobre ellos que interesa investigar cuáles son las posturas que tiene la élite empresarial.

Al respecto, el análisis de las entrevistas muestra que los entrevistados de ambas organizaciones empresariales, en general, valoran favorablemente el aporte que han significado las movilizaciones sociales en el país. En ese sentido, sus integrantes manifiestan “empatía” (Leca, 1986) y una actitud “comprensiva” (Almond & Verba, 1970) de las demandas que se han venido desarrollando desde la sociedad. Así, la gran mayoría de los entrevistados identifica las problemáticas de fondo que se plantean de los movimientos ciudadanos, *admitiendo* la existencia de problemas reales que se hace necesario solucionar, y en los cuales las élites tienen un rol fundamental que jugar.

En el caso del movimiento estudiantil, la valoración es mucho más positiva que la del movimiento No + AFP, ya que varios entrevistados de distintas posiciones políticas, manifestaron tener claridad sobre el endeudamiento económico que tenían las familias de los estudiantes. Esta “empatía” y “comprensión” acerca de la consecuencia de la política de financiamiento de la educación, permitió justificar en varios y diversos testimonios la irrupción de la movilización social como una medida de presión para solucionar el problema del acceso. Cabe agregar sí, que en la medida en que bien se valoraba al movimiento estudiantil, también se criticaba la *violencia* y *desorden* que traían estas movilizaciones en las calles. Sobre este asunto, se criticó en algunos relatos su radicalización y la alteración del orden público, algo que desde siempre ha molestado a los sectores altos de la sociedad chilena, muy preocupados por el orden (CEP, 1987a; Barómetro de la Política, CERC–MORI, 2019).

“Pero también hay frustración en el hecho de que no alcance para pagar el costo de la educación y objetivamente ocurre en la mayoría de las carreras, casi todas te diría yo, es producto de la mala educación recibida... genera frustración... entonces todo eso da origen, lo económico, el tomar conciencia de que lo que estaba estudiando no iba a terminar en la panacea con la que soñaba, produjo legítimamente *estos movimientos tan violentos* (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

“Yo creo que la sociedad o los pueblos tienen ciertos períodos de desarrollo que permiten que una élite maneje. En la medida que esa élite no tenga la preocupación de ver las necesidades de su pueblo, vienen estos problemas, vienen las revoluciones, los estallidos sociales, es cosa de revisar la historia. En el tiempo de los reyes, de la Revolución Francesa, en Rusia los Zares tenían una vida... y el pueblo se moría de hambre. Entonces, yo creo que acá, nosotros, la élite (y me incluyo dentro de los que tienen un mejor ingreso), yo creo que nosotros no hemos tenido la visión de “abrir un poco la llave”, de preocuparnos de estas necesidades sociales y no esperar que estallen. Yo creo que ahí hemos fallado, han fallado los políticos y las élites de la sociedad, que son los que tienen poder: el poder de la prensa, el poder de los empresarios... ¿me entiendes? tendríamos que habernos dado cuenta antes y haber dicho: “bueno, mira las jubilaciones que están saliendo, no puede ser, veamos cómo se arregla esto, la gente no puede vivir con eso, entonces, preocupémonos”, y no esperar que salga la gente, que te lo tire en la cara para que tú recién ahí digas “ah, debíamos

estudiar el problema”. Lo mismo pasó con la educación, cuando tú ves que la gente se endeudaba, que la gente tenía que poco menos que salir debiendo una casa o un departamento al final de sus estudios, ¡pucha, tendríamos que habernos dado cuenta antes! y haber dicho “¡esta cuestión no puede ser!”, o mira “¿cómo solucionamos esto?” entonces, estamos actuando mucho por reacción más que por acción. En ese sentido crítico a la clase dominante que tenemos, que tendrían que haber sido previsores, habernos dado cuenta antes, si eso es de una persona inteligente, de un grupo inteligente. Y no esperar que todo se mantenga tal cual” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

“Mire, yo creo que si no hubiera existido la revolución francesa, la revolución industrial, los países del mundo estarían bastante más atrasados en materias de seguridad, en materia de legislación laboral, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, estos movimientos mueven a la sociedad, la sacuden y dicen: “oiga, miren bien por donde se tienen que producir los cambios” y eso es el gran valor que le doy al movimiento estudiantil” (E30, 62 años, SNA, derecha).

Los fragmentos expuestos muestran que los miembros de la élite empresarial conectan o relacionan con bastante lucidez algunos problemas de la modernización del país con la emergencia de las movilizaciones sociales, lo que corrobora lo expresado en páginas anteriores, sobre la presencia de una “incomodidad” o “frustración” en la sociedad que ha desencadenado esta irrupción social de las generaciones más jóvenes (y no tan jóvenes). Se trata de una mirada empática por el mundo menos favorecido, que incluso como claramente alude un entrevistado con un tono autocrítico, podría haber sido prevista por quienes conducen el país, de manera de no haber esperado que esta situación estallara afectando a vastos sectores de la sociedad chilena, “manteniendo todo tal cual está”.

Pero, por otra parte, pese al reconocimiento de los problemas asociados a la modernización que hicieron los participantes, se puede decir que existió *ambigüedad* en torno a su posicionamiento, sobre todo en lo referido a la *gratuidad universitaria*, que era una de las principales demandas del movimiento estudiantil. En efecto, este es un tema que divide a la élite empresarial, independientemente de las afinidades políticas, de las generaciones y de las cámaras investigadas.

Pues bien, de acuerdo al testimonio de los entrevistados, se puede identificar un grupo que consideró que el país estaba preparado para tener educación gratuita a nivel universitario, compartiendo dicha demanda de gratuidad y universalización solicitada por los movimientos ciudadanos. Por otra parte, es posible detectar otra aglomeración de entrevistados que tenía una postura desfavorable hacia la implementación de educación gratuita, siendo el principal argumento para sostener esa actitud que la gratuidad universal también involucraba darle educación a aquellos que tenían riqueza y que por su condición podían pagarla con sus propios medios. Esto, en opinión de los empresarios, atentaría contra aquellos que no tenían recursos propios para financiar sus estudios.

“Yo creo que la educación debiera ser un bien para todos igual, pero de calidad; yo creo que el país debiera invertir en gratuidad en educación, sí, de todas

maneras, pero no sólo los universitarios, la técnico–profesional” (E20, 57 años, SNA, derecha)

“Yo creo que la gratuidad universal no debiera existir como tal. Yo me recuerdo que en tiempo de Allende yo entre a la universidad y nosotros llenábamos una ficha socioeconómica, y de acuerdo a los ingresos familiares se pagaba la proporción que correspondía y lo encuentro absolutamente sano, porque tal vez muchos que pueden pagar la universidad no van a pagar la universidad, y los que tienen realmente derecho o necesidades de que se les financien los estudios básicos, medios o universitarios, tienen que tener el apoyo del Estado. Si aquí tiene que existir... cuando hay una desigualdad económica tiene que existir un desigualdad en el copago. No puede ser que el hijo de Eliodoro Matte<sup>79</sup> tenga una universidad gratis o mis hijos tengan la universidad gratis cuando yo se la puedo pagar” (E29, 63 años, SNA, derecha).

Las posturas de ambigüedad o división en torno a la educación gratuita, no se manifestaron respecto al sistema de seguridad social que debería existir en Chile. Acá se produce una extraordinaria *postura homogénea* por la preferencia de un “sistema privado de pensiones”, que se justificó, fundamentalmente, sobre la base de un juicio negativo sobre el Estado y su mala administración de los recursos.

En verdad, este posicionamiento a favor de un sistema de capitalización individual como el que proporcionan las AFP, no necesariamente implicó para los entrevistados *mantener* el sistema de pensiones tal cual está en este momento, sino que más bien, su mejoramiento debería realizarse en lo inmediato mediante ajustes o correcciones imprescindibles para su buen funcionamiento. Esta postura es coherente con la mirada continuista y funcionalista respecto del desarrollo.

Los entrevistados también esbozaron una imagen negativa sobre el movimiento No + AFP, sobre todo por la conducción de sus líderes. De hecho, su principal dirigente fue duramente criticado por varios participantes, siendo esta evaluación transversal a las posiciones políticas en ambas generaciones de participantes. En efecto, aunque éstos admiten y comprenden la gravedad del problema de las pensiones y, además valoran positivamente los movimientos sociales que han colocado este conflicto en la agenda política, igualmente manifestaron críticas hacia su principal conductor, Luis Messina, expresando, en definitiva, una distancia con la radicalidad del movimiento.

“No, si las demandas son todas justas, si las pensiones son bajas, no hay que desconocerlo: ¿Se pueden mejorar? con ciertos límites: ¿se tiene que cambiar todo? yo creo que no, no vamos a solucionar el problema si hay que cambiar todo” (E5, 47 años, SNA, derecha).

“A ver, yo creo que en general los movimientos son todos legítimos, pero todos estos están basados en algo que se generó en los años 60’, en la revolución de los estudiantes franceses y el lema era muy simple, que es lo mismo que están haciendo las personas ahora: “Seamos realistas y pidamos lo imposible”, así de

---

<sup>79</sup> Eliodoro Matte es líder del “Grupo Matte”, uno de los principales grupos económicos que hay en el país.

claro. O sea, para mí, el movimiento No + AFP tiene esa misma lógica “seamos realistas, pidamos lo imposible”; No + AFP, no más Hidroaysén, o sea, ¿qué quieren, volver a un país del siglo XIX?: ¡absurdo! (E15, 66 años, SOFOFA, republicano).

“Haber, primero me parecen una consecuencia absolutamente lógica de un principio que yo respeto muchísimo constitucionalmente, que es la libertad en el país, particularmente en este caso, la libertad para asociarse, y poder defender determinados puntos. O sea, desde el punto de vista de la institución, me parece clave que muestren una democracia participativa y con interés ciudadano. Pero lo que yo sí les exigiría, sería cada vez mayor niveles de “Accountability”, mayor nivel de explicación de sus decisiones, tanto desde el punto de vista de sus recursos como desde el punto de vista de sus decisiones políticas. Por ejemplo, yo creo que algunos elementos de los dos que usted cita, yo creo que ha sido extraordinariamente negativo para los propios afiliados y no hay ningún grado de “Accountability” de esos propios discursos, por ejemplo, el cambio brutal mayoritario, bueno no muy brutal mayoritario, el cambio al fondo E<sup>80</sup>, terminó siendo una tremenda carga económica para aquellas personas que lo hicieron y no creo que haya ningún tipo de respuesta y responsabilidad de sus líderes” (E23, 51 años, SOFOFA, derecha).

En síntesis, la élite empresarial tiene una postura común en torno al *mantenimiento* del sistema socioeconómico, manifestando una postura *inflexible* respecto de los cambios promovidos por actores sociales como el movimiento No + AFP. No obstante, no todo es inmovilismo, ya que la gran mayoría de los integrantes de ambas organizaciones empresariales sí se muestran abiertos a realizar un conjunto de “reformas” o “ajustes” para mejorar el problema de las pensiones, siempre y cuando se mantenga el sistema de capitalización individual como pilar de la seguridad social. Esta “apertura” en los entrevistados se produce, en gran medida, por un reconocimiento explícito del problema de las jubilaciones, lo que requiere una urgente solución.

En el ámbito de la educación como derecho social, sí se presentaron divisiones, ya que la mitad de los entrevistados se mostró favorable hacia la política de gratuidad implementada bajo el gobierno de Michelle Bachelet y mantenida por el actual mandato del presidente Sebastián Piñera. Este apoyo a la reforma educacional tiene su razón de ser en una comprensión y empatía con la situación del endeudamiento de las familias de los estudiantes.

En lo que sigue, se examina otro elemento destacado anteriormente: las reformas institucionales que van contribuyendo al proceso de *consolidación de la democracia*. Entre estas se encuentran el cambio electoral, la reforma de voto de inscripción automática y voto obligatorio y el proceso constituyente para la Nueva Constitución.

---

<sup>80</sup> A lo que se refiere el entrevistado es al mediático llamado que se hizo desde el Movimiento No + AFP a cambiarse al fondo E en las AFP, porque ese fondo limita a los inversores a prácticamente no poder mover el dinero en el mercado bursátil. Ello implicaría para los afiliados no rentabilizar el dinero ahorrado de las pensiones, pero al mismo tiempo, no permitir que las AFP puedan hacer uso del dinero en otras fuentes de inversión.



Aunque la mayoría de estos cambios tienen como objetivo de fondo profundizar la democracia en el país, lo cierto es que también intentan articular a la ciudadanía con la política y sus actores, precisamente a raíz de este divorcio que ha llevado a distintos organismos, autores y líderes políticos a hablar de una “crisis institucional” (Lagos, 2016; Piñera, 2019).

Es muy relevante conocer cuáles son las actitudes políticas de la élite empresarial frente a los cambios institucionales mencionados (*output*) y también frente a los partidos políticos y el Congreso Nacional (*input*). Este conocimiento puede ser valioso para determinar si los dirigentes empresariales desean avanzar hacia una “democracia plena”, dejando atrás la democracia “defectuosa” (Democracy Index, The Economist, 2018) que tiene su corazón en la Constitución de 1980 (Fuentes, 2012). En segundo lugar, puede ser significativo para determinar si sus miembros mantienen el apoyo a la “democracia representativa” y también a sus principales instituciones, como son los partidos y el parlamento, lo que podría ser interpretado como un claro indicador del sustrato democrático de su cultura política (Almond & Verba, 1970).

#### **4. La élite empresarial y el cambio de sistema electoral**

Una de las reformas políticas más importantes aprobadas desde el retorno de la democracia es la del cambio del sistema electoral *Binominal*, que rigió las elecciones de congresistas de la Cámara Alta y la Cámara Baja desde 1989 hasta 2015.

Se trata de un sistema electoral diseñado y aprobado bajo el gobierno militar, y cuyos artífices fueron Arturo Marín, ex jefe de Gabinete del Ministro del interior Carlos Cáceres (1988–1990), Rafael Larraín Cruz y Carlos Cruz–Coke (Cruz–Coke, 1986). Fue promulgado después de la derrota del General Pinochet en el referéndum de 1988, aunque en verdad, ya a mediados de la misma década, la intelligensia del régimen discutía cómo diseñar un sistema electoral que pudiera evitar la experiencia multipartidista, y sobre todo, la fragmentación de partidos, tal cual había ocurrido en Chile antes del quiebre de la democracia (Valenzuela & Siavelis, 1991).

El diseño institucional del *Binominal* consistía en la elección de dos diputados por cada distrito y dos senadores por cada circunscripción. El electorado podía votar por candidatos independientes, o bien, por aquellos que estuvieran afiliados a partidos agrupados en pactos electorales, en este caso la Concertación o Chile Vamos (ex Alianza por Chile). Para que un voto fuese válidamente emitido, el elector debía votar por un candidato de una lista abierta. Luego, el conteo de votos se hacía sumando los votos de los candidatos por listas. El primer congresista electo era aquel candidato más votado de la lista más votada y su compañero de lista resultaba electo si entre ambos lograban al menos duplicar la cantidad de votos de la segunda lista más votada (lo que se conoce como “doblaje”). Si ello no ocurría, el segundo candidato electo era aquel que obtenía la mayoría de votos de la segunda lista más votada (PNUD, 2014).

La combinación de pequeño tamaño de los distritos y alto umbral electoral produjo un reparto poco proporcional de los votos en escaños durante toda su vigencia, y además, obligó a los partidos a incorporarse a pactos electorales para poder tener alguna posibilidad de resultar electos. Por otra parte, la alta barrera electoral favorecía el empate

político entre la mayoría de gobierno y la minoría opositora, sacrificando con ello la dimensión de la “representatividad” (Carey, 2006), además de excluir por el propio diseño a nuevas fuerzas políticas que pudieran emerger al margen de los pactos electorales (Ruiz & Osorio, 2016). De esta manera, la Concertación y Chile Vamos (ex Alianza por Chile) fueron las grandes favorecidas (Navia & Garrido, 2005), ya que hasta 2013, el porcentaje de escaños promedio obtenido entre ambas coaliciones sumadas fue sobre el 97% para ambas cámaras. Como contraparte, las fuerzas políticas independientes o no agrupadas en pactos electorales, incluso cuando habían obtenido porcentajes cercanos al 7% o 10% a nivel nacional, no resultaban electas (PNUD, 2014, pág. 200).

A pesar de varios intentos e iniciativas de reemplazar el sistema electoral por parte de los sectores de la Concertación, la falta de *quórum* en el Congreso fue el factor que no permitió su substitución, lo que finalmente consolidó estas reglas electorales por más de dos décadas en el país. Es en 2015 cuando se logra reemplazar el Binominal por un *Sistema Proporcional Inclusivo* (Ley 20.840). Este sistema modifica varios aspectos del antiguo sistema, especialmente, la reorganización de los distritos y las magnitudes de los mismos. Así, los distritos disminuyen de 60 a 28, y las circunscripciones se reducen a una sola por región, haciendo un total de 15 circunscripciones (15 regiones). Además, se modifica el tamaño de las Cámaras, pasando la Cámara Baja de 120 a 155 diputados, mientras el Senado aumenta de 38 a 50 senadores.

Dentro de los cambios positivos que trae el nuevo sistema se encuentran las mayores facilidades que tienen los candidatos independientes, que antes se veían casi obligados a sumarse a algún pacto electoral para ganar una elección, o bien, tener un 30% de los votos para poder conseguir el mismo objetivo. Este porcentaje de votos con el nuevo sistema baja dependiendo del distrito, ya que en aquellos lugares donde se eligen tres diputados, el porcentaje baja a 25% de votación; en los que se eligen cuatro diputados, el porcentaje desciende a 20%; en los de cinco diputados se requiere un 17% de los votos; 15% en los de seis, 13% en los de siete y 11% en los que se escojan ocho diputados (Ley 20.840, 2015). Como resaltan Leticia Ruiz & Alejandro Osorio (2016), “*junto a estos cambios se introduce la fórmula D’hondt con base en las circunscripciones para el reparto de los votos dejando atrás el principio mayoritario. Con esta fórmula los votos que obtenga una lista se repartirán proporcionalmente entre las candidaturas que la conforman*” (pág.65).

### 3.1. Discusiones en torno al sistema binominal

El cambio del sistema electoral fue uno de los procedimientos más complejos en el proceso de democratización, ya que como indiqué, la falta de *quórum* en el Congreso hizo imposible su modificación. Esta postura inflexible en torno al cambio del sistema por parte de algunos sectores de derecha, se sostenía en distintos fundamentos políticos e ideológicos, algunos de los cuales se indican a continuación.

En efecto, el Sistema Binominal tenía un carácter ideológico muy definido, y su objetivo principal era impedir la reproducción de la misma estructura política que permitió la fragmentación y polarización de partidos que existió en Chile hasta 1973 (Marín, 1986): el sistema de partidos de 3/3 (Valenzuela, 1978; Valenzuela & Siavelis,

1991; Moulian, 1994; Sartori, 1976), y que permitió, por su propio diseño, formar gobiernos sin mayorías absolutas, como fue el caso de Gabriel González Videla (1946–1952), quien llega a ser mandatario con la primera mayoría relativa de un 44,2% (Moulian & Osorio, 2014, pág. 61); luego, con el gobierno de Salvador Allende, quien también llega a la presidencia con una mayoría relativa de 36,6% de los votos (Ibíd., pág. 36).

Como destaca Von Baer (2006), son esta clase de argumentos políticos e ideológicos los que están presentes en la discusión de la ley sobre el sistema electoral, lo que muestra los claros propósitos de sus principales ideólogos.

Es bajo estos presupuestos normativos que se elabora un sistema electoral que obliga a la fuerza política gobernante llegar necesariamente a consensos con la oposición, sobre todo para hacer cambios institucionales profundos, ya que su arquitectura hacía muy improbable la conformación de gobiernos minoritarios como había ocurrido anteriormente. Es justamente éste punto central el que defendían aquellos simpatizantes del binominal: la voluntad de formar gobiernos mayoritarios, con alianzas políticas robustas o grandes conglomerados políticos, sin posibilidad de producir fragmentación política (Von Baer, 2006; Carey, 2006). De hecho, muy pocas posibilidades tenían los partidos o candidatos que quisieran competir por fuera de los grandes conglomerados de la Concertación o de Chile Vamos, ya que el mismo sistema electoral promovía este efecto centripeto y de moderación<sup>81</sup>, excluyendo *deliberadamente* a una posible tercera fuerza política que pudiera poner en riesgo esta estabilidad que proporcionaban las dos coaliciones (Guzmán, 1993).

Para los defensores del binominal, el sistema electoral había cumplido exitosamente sus principales objetivos políticos: la formación de gobiernos mayoritarios y fuertes, coherentes con el presidencialismo que consagraba la Constitución. En opinión de sus partidarios, esto habría dado al país una estabilidad necesaria para consolidar la democracia (Von Baer, 2006) evitando así, entre otros factores, la posibilidad de una “regresión autoritaria” (Alvarado, 2015). Por cierto, uno de los argumentos que permitía sostener esta afirmación era la prolongada duración que habían tenido la Concertación y Chile Vamos, estableciéndose como los dos conglomerados que más duración han tenido en la historia política del país, algo que no había ocurrido bajo la experiencia del multipartidismo que promovía el sistema proporcional antiguo.

Pero desde otro ángulo, los detractores del sistema binominal y partidarios del sistema proporcional, cuestionaban precisamente que esta “consolidación de la democracia” se había realizado a costa de perder en “competencia” y “representación”, ya que como se explicaba anteriormente, gracias al sistema binominal, la Concertación y Chile Vamos prácticamente “monopolizaron” los escaños desde 1990 hasta la instalación del nuevo sistema, excluyendo a terceras fuerzas que en varias oportunidades obtuvieron votaciones significativas y que bajo un sistema proporcional habrían tenido oportunidad de representar a esas minorías (PNUD, 2014).

---

<sup>81</sup> En opinión de algunos defensores del binominal, éste habría sido clave en la modernización política de las élites, argumento que es difícil de sostener si se analizan los estudios de cultura política de los chilenos y de los grupos con una alta posición social. Como se ha mostrado en este trabajo, la moderación política es un fenómeno anterior a la instalación al binominal, lo que de algún modo es un aprendizaje político de la ciudadanía definido fundamentalmente por la memoria colectiva e histórica (Huneus, 2014).

En verdad, la crítica al binominal en su origen apuntaba a la sobrerrepresentación de la derecha en las votaciones electorales, ya que tras los resultados del plebiscito de 1988, se señalaba que el sistema electoral buscaba asegurar a los partidos de derecha como una fuerza política activa, que pudiera hacerle frente a la naciente Concertación. Así describe esta situación política el líder político demócrata cristiano Edgardo Boenninger (2009), *“En Chile está vigente el sistema binominal que fue implementado por el gobierno militar después de perder el plebiscito. Como supo que sería minoría en un régimen democrático, se preocupó de dar máxima defensa a las fuerzas políticas que lo apoyaron mientras estuvo en el gobierno y que, luego, devinieron en los actuales partidos de derecha: Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente. De todos los sistemas, el binominal es el que da mayores posibilidades a la segunda fuerza electoral ya que con un 33% de los votos tiene asegurado uno de los dos escaños. Está claro, entonces, por qué el sistema binominal le conviene a esos dos partidos mencionados”* (pág. 168). Ya se indicó que con el paso del tiempo, se demostró que el sistema electoral no solamente benefició a la derecha, sino que también a la misma Concertación, ya que ambas coaliciones fueron las más favorecidas en todas las elecciones llevadas a cabo desde el retorno de la democracia (PNUD, 2014; Navia & Garrido, 2005).

Según los críticos del binominal, la sobrerrepresentación también tenía como efecto perjudicial un constante “empate político” entre las dos principales fuerzas políticas, que hacía muy difícil lograr mayorías parlamentarias (60%) para aprobar grandes reformas tanto a nivel político como también a nivel socioeconómico (Garretón, 2015). De esta manera, el sistema electoral cumplía a la perfección su función, al moderar las posturas políticas de cara a lograr consenso con la oposición (Guzmán, 1993).

Bajo esta mirada crítica, la innegable estabilidad política que logró el país tuvo como precio un tremendo desincentivo en la participación de la ciudadanía, ya que las elecciones de congresistas siempre se debatían entre un candidato de la Concertación o de Chile Vamos, con muy baja probabilidad de ganar de un candidato independiente. Esto le quitaba cualquier posibilidad de sorpresa al electorado, sin provocar ningún aliciente para asistir a votar (Corvalán, 2012). Según los expertos, esto habría tenido un impacto corrosivo en la cultura política de la ciudadanía (PNUD, 2014; LAPOP, 2014; Garretón, 2015; Fuentes, 2012), que se refleja en las cifras de una baja participación, que vienen decayendo sistemática e intensamente desde el referéndum de 1988 (Lagos, 2017).

Finalmente, otra crítica que se hacía al sistema electoral estaban relacionadas con su *ilegitimidad de origen*, ya que el binominal había sido diseñado y aprobado durante el gobierno militar, siendo ideado por personas afines al régimen (Heiss & Szmulewicz, 2018), por lo que no se discutió en un contexto democrático lo que era mejor para el país (PNUD, 2012 y 2014). Esto último, vuelve a ilustrar lo ya comentado antes, referido al problema de la *legitimidad de las instituciones* y su impacto perjudicial en la cultura política de los chilenos, quienes no necesariamente se sienten identificados en instituciones que no fueron apoyadas por las élites representativas de la ciudadanía (Linz, 1978 y 2016).

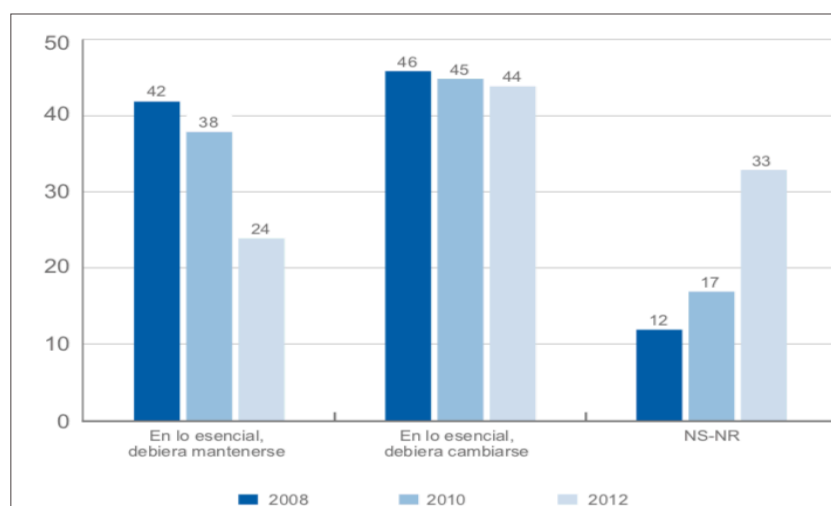
### 3.2. Las posturas de la élite empresarial frente al cambio de sistema electoral

Sin duda alguna, el cambio del sistema electoral fue una de las reformas institucionales más importantes que ha tenido el país desde el retorno de la democracia, y por su misma singularidad política, fue controversial a nivel de la opinión pública.

Sobre esta temática, algunos estudios revelan que, a nivel general, el cambio electoral no era un asunto trivial para la población, sino más bien al contrario, este tenía un carácter valioso para la mayoría. Así lo demuestra la Encuesta UDP de 2013, instrumento que pone en evidencia que en una escala de 1 a 7, la importancia atribuida por los ciudadanos a la reforma electoral era de 5,4 (por debajo de la reforma tributaria y la reforma educacional) (UDP, 2013, pág. 5). Y, en general, este interés de la ciudadanía por la reforma, se correspondía con una postura favorable hacia el cambio electoral, siendo esta posición transversal al entorno ideológico, aunque con un carácter más intenso en los sectores identificados con la izquierda. Así también lo revela la Encuesta del Diario El Mostrador y la Universidad Mayor en 2012, que señala que el 63,2% aprueba el cambio electoral, mientras un 27,3% se manifestaba en contra. En cualquier caso, este entusiasmo se fue moderando conforme se acercaba la fecha del cambio de sistema, ya que a un mes de la promulgación de la Ley 20.840, la encuesta CEP ilustraba que una mayoría relativa de un 30% tenía una visión negativa del cambio electoral, mientras un 27% tenía una visión positiva sobre esta nueva institucionalidad (CEP, 2015).

Los datos expuestos resaltan algunos anhelos en la sociedad chilena por la implementación de reformas políticas, pero también los deseos de permanencia de una cierta institucionalidad heredada (ver gráfico 15): tensión política que también se reflejó en los posicionamientos de la élite empresarial frente a la reforma en cuestión.

Gráfico 15. Opinión frente al cambio del Sistema Binominal (2008, 2010 y 2012)



Fuente: PNUD (2014).

En este contexto sobre el cambio electoral, en el análisis de las entrevistas se pudo identificar dos grupos de entrevistados: 1) un grupo levemente *mayoritario*, que manifestó una *postura favorable* sobre del cambio de sistema electoral; 2) un segundo

grupo que mantuvo una *postura inflexible* en torno a la implementación de la reforma. También se han detectado un par de casos aislados de quienes se mantuvieron neutros y un tanto escépticos respecto a la reforma y su funcionamiento, aduciendo ser muy pronto para realizar una evaluación de la nueva institucionalidad: *“Mire no tengo una opinión al respecto porque los dos sistemas, ambos sistemas han demostrado que no son representativos”* (E16, 70 años, SNA, apolítico).

Es relevante hacer notar que la gran mayoría de los entrevistados expresó sus posturas frente a la reforma con argumentos que resaltaron aspectos positivos y negativos de cada sistema electoral, dejando muy en claro en sus apreciaciones que ningún sistema es “malo de por sí” y que ambos tienen ventajas y desventajas según se mire. En otras palabras, ningún entrevistado utilizó el adjetivo “antidemocrático” para referirse al binominal, como muchas veces sí hacían algunos de sus detractores, tal cual se puede observar en las declaraciones del diputado independiente Gaspar Rivas en el contexto de la “discusión en sala” por el cambio electoral: *“Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones e incluso hice un video en que lo explique con “palitos”, hoy hemos cambiado un sistema pésimo de porquería como es el binominal antidemocrático por un sistema que trae la misma distorsión a través de la cifra repartidora que tiene el sistema (proporcional)”* (Historia de la Ley 20.840)<sup>82</sup>.

Pues bien, los entrevistados que manifestaron una postura desfavorable hacia el cambio electoral, esgrimieron distinto tipo de razones políticas para sostener sus actitudes. Uno de los principales fundamentos mencionados fue la “estabilidad política” que produjo el sistema binominal en el país, el que —muy en la línea de lo que plantea la literatura especializada— delineaba la formación de grandes coaliciones de gobierno que incluían a distintos partidos, sin posibilidad de mayor fragmentación por fuera de la coalición. En efecto, la “fragmentación” es apreciada negativamente por la gran mayoría de la élite empresarial, sobre todo porque dificultaba la realización de grandes acuerdos políticos en quienes gobiernan, *consensos* que bien valoran los dirigentes entrevistados.

Como se ve a continuación, la postura homogénea de la élite empresarial en sus actitudes políticas hacia los “objetos políticos” parece seguir manifestándose, ya que la defensa del sistema binominal es transversal a las generaciones de entrevistados, dándose de igual manera en ambas cámaras y sin ser especialmente relevante las afinidades políticas, ya que tanto los participantes de centro como de derecha preferían el sistema antiguo:

“A mí me preocupa que este cambio se transforme en una atomización de grupos que “ah, que yo represento esto, no, que yo represento esto otro”... y al final tengamos un país de 30 grupos que cada uno defiende sus ideas particulares, en vez de tener grandes conglomerados que pudieran en conjunto, un poco como fue la Concertación en su momento. Yo siento que los grandes países como Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, en Alemania, qué sé yo, tienen grandes conglomerados. Esto de tener 20 partidos que cada uno representa el 5%, no creo que sea la solución. *De alguna manera el sistema*

---

<sup>82</sup> Al respecto, véase la historia de la ley 20.840 en el siguiente enlace, revisado el día 1 de mayo de 2018. <https://www.bcn.cl/historiadelaey/nc/historia-de-la-ley/3997/>

*binominal le daba más estabilidad al país, por lo menos permitía y obligaba que tuvieran que juntarse, porque en este otro no, cada uno va por su lado, no, no creo que sea la solución, de muchos partidos chicos. Yo soy más bien de la idea de 2, 3 o 4 partidos grandes. Es por la idea de consenso y porque te obliga a llevar ideas más centradas y más equilibradas, tu partido chico puede tener ideas a veces medias alocadas, claro que representan a alguien a un 5% de la gente” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).*

“Bueno, se mejoró (la representación)... eso sí a mí me gustaba más el Binominal, porque fíjate pienso que el Binominal te fuerza a los acuerdos. No es que sea mejor, pero hay sistemas mejores que otros. Yo veo al Binominal un poco como en Estados Unidos, demócrata y republicanos, ahí no tienes dónde moverte. Hay otros partidos pero ni siquiera marcan algo: ¿por qué? porque el sistema de ellos *los obliga a tener coaliciones*. Si uno saca los votos por Estado, el que gana se lleva todo, entonces, al final, las *grandes mayorías son las que gobiernan*. El Binominal chileno ¿qué es lo que hacía? una coalición grande, la Concertación, amplia y robusta y una coalición de la derecha, Chile Vamos. Y estas tenían que juntarse para tener una cierta representación y la perdedora no perdía por paliza, salvo la pasada que fue muy mala (refiriéndose a la última elección de 2017)” (E17, 49 años, SOFOFA, centroderecha).

“Sabe lo que pasa, yo hago una reflexión: mire lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Donde con un binominal hay prácticamente dos partidos, ¿te fijas? Pero, por otro lado, veo que las instituciones de ese país funcionan. Entonces, nosotros tenemos instituciones frágiles y una atomización muy grande y tenemos esta raíz española que nos hace tan peleadores, entonces, no puede ser sano que en la derecha esté la UDI, EVOPOLI, RN y dos o tres movimientos más, no puede ser que el Frente Amplio sean 14 movimientos, ¡no puede ser que la Nueva Mayoría sean tantos!, eso indica que no tenemos una visión país, donde cada persona cree tener un liderazgo y su movimiento, eso no es sano” (E28, 69 años, SNA, republicano).

Como bien se puede dilucidar de las citas presentadas, la referencia al sistema electoral uninominal de los Estados Unidos es frecuentemente mencionada en quienes no están de acuerdo con el nuevo sistema proporcional. Esta alusión se produce, fundamentalmente, porque los entrevistados ven en el sistema estadounidense un sistema de mayorías que proporciona *gobernabilidad* al país, justamente al evitar la dispersión de partidos y proyectos políticos minoritarios. La analogía con el sistema americano permite justificar las preferencias por el Sistema Binominal, ya que éste último, según los entrevistados, también evitaría la fragmentación de partidos.

Por otra parte, para los protagonistas, el nuevo sistema proporcional es visto como un dispositivo que dificulta la búsqueda *acuerdos* o *consensos*, precisamente por la misma experiencia multipartidista que pareciera provocar un efecto no centrípeto como sí lo hacía el binominal (Von Baer, 2006). Finalmente, se puede inferir un cierto anhelo nostálgico por la estabilidad política que proporcionaban las dos grandes coaliciones de partidos, Chile Vamos y la Concertación (ahora ex Nueva Mayoría), que ahora disputan

distribución de poder con otros actores políticos, particularmente el Frente Amplio, ubicado más a la izquierda del entorno ideológico.

En contraposición a lo anterior, el grupo levemente *mayoritario* está compuesto por aquellos entrevistados que manifestaron tener una *postura favorable* hacia el cambio electoral y que hoy, a tres años de su implementación, valoran positivamente este cambio institucional. Las razones son varias y ellas se asemejan lo suficiente a los aspectos positivos que resalta la literatura en relación a las virtudes del sistema proporcional: mayor representación, recambio generacional a través de la emergencia de nuevas fuerzas políticas y mayor competencia entre los adversarios políticos.

Ahora bien, pese a las actitudes favorables hacia este cambio producido, lo cierto es que prácticamente todos los entrevistados evaluaron negativamente el fenómeno de “arrastre” que tiene el sistema proporcional, ya que políticos que no obtuvieron alta votación salieron igualmente electos (que era justamente lo que se le criticaba al binominal). El caso emblemático que hicieron los líderes empresariales para denunciar esta situación fue la votación del diputado del Frente Amplio, Raúl Alarcón, conocido popularmente como “Florcita Motuda”: “(...) *que salga Florcita Motuda con 300 votos es una vergüenza. O sea, yo estoy de acuerdo con que el otro había que cambiarlo (el binominal) pero no sé si se cambió por el más adecuado*” (E1, 60 años, SNA, centro). El caso de Florcita Motuda es el de un músico popular chileno que salió electo con 5.812 votos (2,67% de las preferencias) (SERVEL, 2017), situación que fue criticada tanto por los partidarios del sistema proporcional como por aquellos defensores del binominal. Así se refirieron los entrevistados que apoyaron el cambio electoral y que optan por tener mayor proporcionalidad:

“Mira, pareciera ser que el Binominal era más injusto, lo que pasa es que para mí el sistema binominal era más práctico, porque alguna vez sincerada la verdad, desde el punto de vista de que había que generar cierto tipo de posiciones donde haya menos gente involucrada en política, desde el punto de vista de que hayan menos partidos políticos, yo creo que el Binominal tiene una ventaja. Pero si tú me preguntas si yendo a la *democracia absoluta*, yo finalmente creo que éste sistema (el Proporcional) es más democrático desde el punto de vista de que da más oportunidad a otra gente que pueda meterse en política. En cambio el otro, *el Binominal, lamentablemente te condicionaba a que las personas designadas a dedo para postular a un cargo político. En cambio hoy día con este nuevo sistema, por último está la posibilidad de que la democracia actúe no más, y que tengan que ser un poquito más agresivos en sus posturas, en sus ideologías, en sus ideas, los distintos postulantes, así que creo que es más democrático y por eso creo que me gusta más, porque genera un poco más de que se meta gente por lo menos para hacer recambio y eso se vio, se vio en el resultado que hubo un cambio importante de políticos y que eso le hace bien porque por último para bien o para mal, es bueno siempre hacer estos cambios*” (E27, 48 años, SNA, centroderecha).

“No, me gusta más éste sistema electoral (proporcional) a pesar de todos sus problemas... es que el otro eran sólo designaciones a dedo, era parte del desprestigio del sector parlamentario, esto afectó... pero si eran designaciones a



dedo, aquí somos uno para cada lado, entonces, pucha como es el partido el que va a decidir quién es el candidato, estás poniendo ya, eligiendo a alguno que va a senador; *siempre se hablaba que el otro era “arroz graneado”*<sup>83</sup> (*compañero de lista*), *que era acompañamiento; llevo dos candidatos porque sé que voy a elegir uno y me preocupo que sea el que yo quiero, mantenía un empate pero no tanto lo del empate, porque el empate tampoco se daba tan exactamente, porque en muchas partes había doblaje, lo que sí era, que la elección era como innecesaria, porque sabíamos quien se iba a elegir, estos dos o uno de estos dos, pero no había competencia entre ellos. Bueno, pero creo que el binominal produjo daño, particularmente por el prestigio de la política del sistema parlamentario*” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

“Yo creo que está bien el cambio (de sistema electoral), lo único que a mí no me gusta es que tengamos que pagar más, pero creo que está bien. Yo tengo la impresión de que lo que no salió bien, si es que existe alguna... lo que pasa es que aquí siguieron un modelo, el D’Hont, yo no sé si hay un D’Hont afinado porque no puede ser y lo digo incluso para que se entienda bien, el color político, el partido político, EVOPOLI, con el cual estoy bien de acuerdo, que es el de esta señora en Temuco en la novena región que salió arrastrada por la votación de Felipe Kast con 1 o 2%<sup>84</sup>, yo creo que hubo algún senador que se haya quedado afuera con un 10% o alguna cosa así, entonces, eso no me parece. Ese arrastre con tan poco porcentaje a favor no me parece lógico... hay varios ejemplos, no son muchos y eso es bueno, pero creo que hay que buscarle... no sé si hay un D’Hont modificado que supere ese tipo de injusticias” (E2, 59 años, SOFOFA, derecha).

Como se puede inferir de los fragmentos expuestos, la preferencia por el sistema actual se da, sobre todo, por una *mala evaluación* del sistema binominal. Sobre éste se reconocen aspectos no deseables como la producción de un “empate político” y la exclusión de nuevas fuerzas políticas que podrían haber facilitado el recambio generacional de la clase gobernante. Como se señaló, este fundamento de los participantes va muy en la línea de lo propuesto por el informe del PNUD (2014), que critica esta sobreprotección de los “incumbentes” por sobre nuevas generaciones que trataban de ingresar al Hemiciclo. Pero, por otro lado, también los entrevistados hacen referencia a “designaciones a dedo” que se producían con el antiguo sistema, ya que éste desincentivaba la competencia. En efecto, en la búsqueda por asegurar el escaño, los partidos privilegiaban la reelección de los “incumbentes” (la mayoría hombres)<sup>85</sup>, mientras en la oposición se nombraba a

---

<sup>83</sup> El entrevistado utiliza una expresión típica chilena para señalar que el compañero de lista de un pacto electoral solamente era una formalidad, ya que se sabía de antemano que no saldría elegido. Revisar el diccionario chileno en el siguiente enlace, visitado el día 11 de septiembre de 2018.

<https://diccionariochileno.cl/term/Arroz+graneado>

<sup>84</sup> El entrevistado se refiere a Carmen Gloria Aravena, quien salió electa con 1,24% (4.198 votos), pero que igualmente alcanzó un escaño por la alta votación de su compañero de partido, Felipe Kast (SERVEL, 2017).

<sup>85</sup> El informe del PNUD (2014) muestra que entre 1989 y 2013, el 84,77% de los candidatos nominados por los partidos pertenecen al género masculino (pág. 283).

candidatos que saldrían sí o sí electos porque el sistema así lo facilitaba (Huneus, 2014). En opinión de varios entrevistados, este factor de rutinización y escasa sorpresa del sistema electoral *habría sido fundamental en la baja participación electoral* que han tenido los chilenos desde las elecciones de 1993 hasta el día de hoy.

En relación a la presencia de fundamentos más de carácter “ideológico” para la permanencia del sistema binominal, solamente un entrevistado mencionó una razón más propia de esta naturaleza, manifestando que el sistema electoral había cumplido una función necesaria en el contexto de la transición: *“En mi opinión, siempre he pensando que los sistemas políticos, particularmente los sistemas electorales, dependen de las realidades de cada país. Tienes desde países extraordinariamente democráticos como Inglaterra o Estados Unidos que actúan sobre una base uninominal hasta países que son igualmente democráticos que usan sistemas total y absolutamente proporcionales. Chile creo que tuvo, y creo que fue una reacción a cierto período político de nuestra historia y a una crítica de cierto período histórico, un sistema binominal, que creo que fue adecuado para el momento que vivía Chile, pero mi impresión y en eso, por lo tanto sí estoy de acuerdo con el cambio, mi impresión es que era imprescindible buscar algún modelo un tanto más mayoritario que proporcional”* (E23, 51 años, SOFOFA, derecha). Aunque el participante no lo menciona explícitamente, se deduce que hace referencia al objetivo central que planteaban los ideólogos del sistema binominal (Marín, 1986): la elaboración de un diseño electoral que no permitiera reproducir un sistema de partidos de “doble centrifugación” (Valenzuela, 1978; Moulian, 1994) como el que se había desarrollado en Chile hasta 1973. Para lograr ese objetivo, se construye, contrariamente, un sistema que aunque haya una mayoría, ésta se vea imposibilitada de realizar grandes cambios sin un consenso con la oposición (Guzmán, 1991), lo que, en consecuencia, habría sido fundamental en el tipo de gobernabilidad que tuvo el país (Domínguez, 2005), aun a costa de perder en representación (Ruiz & Osorio, 2016).

Finalmente, un aspecto transversal que se dio en casi todos los relatos relacionados con el cambio electoral, es la desaprobación que hicieron los entrevistados sobre el *aumento* de diputados y senadores. En prácticamente todas las entrevistas este fue un tópico mal evaluado por los participantes, los que miran con cierto rechazo esta situación, precisamente, porque de sus relatos se puede inferir una actitud crítica del desempeño de los actores políticos:

“Yo, por lo demás, no estoy muy alejado de la opinión de la mayoría de los chilenos, o sea, si usted le pregunta a cualquier chileno hoy día, qué necesidad había de aumentar el número de diputados, creo que la mayoría no lo entiende y más bien ve en ello un intento por generar espacios de privilegio, además del gasto” (E9, 56 años, SNA, derecha).

“Aumentar el parlamento y después empezar a ver dónde los pongo porque no tenemos presupuesto con lo que les pagamos, creo que es una falta de respeto al país” (E7, 46 años, SOFOFA, apolítica).

Se trata de varias opiniones que expresan cierto “descontento” o “disconformidad” de los participantes con el funcionamiento de la clase política, muy a tono –como menciona un entrevistado– con las evaluaciones negativas y la mala imagen que tiene la ciudadanía de los actores políticos en general. Este fenómeno puede estar relacionado con el diagnóstico que acusa la presencia de una “crisis institucional” en el país, o bien, con la mirada que sostiene que los chilenos están satisfechos con la democracia pero no con algunos aspectos de su funcionamiento, lo que, de algún modo, obliga a revisar la *imagen* y *confianza* que puedan tener los entrevistados sobre los partidos y el Congreso, con el propósito de definir si el malestar de la ciudadanía es compartido por la élite empresarial.

En efecto, buena parte de la literatura muestra que la desconfianza de la sociedad chilena hacia los actores políticos tiene relación con la institucionalidad heredada –como bien expresaron algunos participantes– pero también está relacionada con otros fenómenos políticos como la reforma de inscripción automática y voto voluntario, los sucesivos casos de corrupción a nivel de quienes dirigen el país, la desconexión entre las élites y la ciudadanía, entre otros factores que también inciden en una sistemática evaluación negativa que hacen los chilenos sobre el desempeño de los partidos y el Congreso Nacional. Esto se revisa a continuación.

## **5. La élite empresarial, los partidos y el Congreso Nacional**

Sin duda, uno de los temas más apasionantes del proceso político chileno tiene que ver con los partidos políticos y también con el Congreso Nacional. Efectivamente, el sistema de partidos chileno fue elogiado en la literatura especializada por distintos autores nacionales e internacionales, que destacaban, particularmente, su arraigo institucional (Luna & Rosenblatt, 2012) y su estructura de tres tercios, que permitía un fuerte vínculo de representación con las bases sociales (Garretón, 1983 y 2015), además de una fuerte identificación partidista, de las altas de la región (Valenzuela, 1978; Ruiz, 2005). Estos elementos hacían del sistema partidista chileno uno bastante similar a los sistemas de partidos europeos, sobre todo por el tipo de clivajes que estructuraban la competencia (Lipset & Rokkan, 2001; Sartori, 1976).

Pero pese a las fortalezas destacadas del sistema de partidos, lo cierto es que algunos datos de la cultura política nacional muestran un panorama histórico que matiza el prestigio de estas instituciones. Así, es posible señalar que desde siempre en Chile ha existido una apreciación un tanto “ambigua” de los partidos por parte de la ciudadanía, incluso en tiempos del mayor “apogeo democrático” (1958–1973) (Sartori, 1976). Las encuestas de Eduardo Hamuy (que son una de las pocas fuentes de medición que hay antes del golpe militar), muestran que desde 1958 hasta 1973, un porcentaje cercano al 20% de la población expresaba que los partidos *no eran necesarios* (Navia & Osorio, 2015), evaluación que se hacía en el contexto de un régimen democrático cada vez más en expansión (Moulian, 1982; Garretón & Moulian, 1985; Pinto, 1973).

Con datos distintos producidos por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), Carlos Huneeus señala que los partidos en 1986 tenían un considerable apoyo de la sociedad, ya que poco más de la mitad de la población los consideraba como indispensables y sólo un 24% pensaba lo contrario. Según el autor

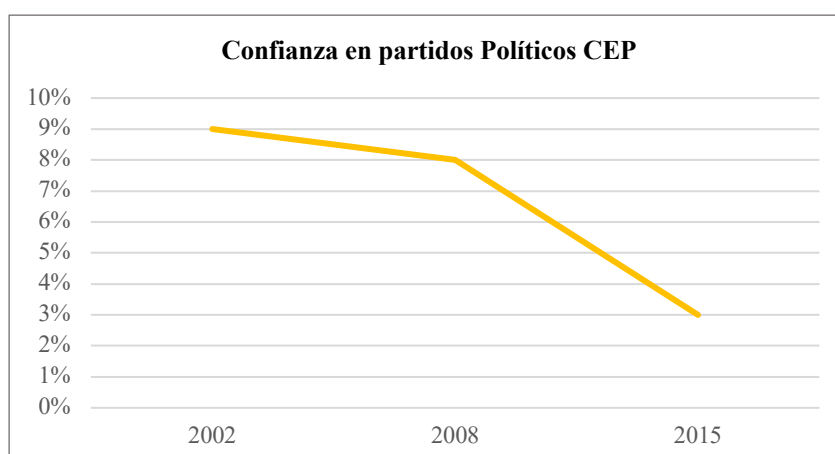
citado, hasta la fecha mencionada, no aumentó la cantidad de personas que rechazaban a los partidos, sino que más lo que ocurrió fue que había crecido el número de indecisos de casi un 5% en 1973 a un 16% en 1986. Este resultado permitía concluir en ese momento que la “experiencia autoritaria” no había logrado cumplir sus objetivos de despolitización, ya que como mucho sólo había aumentado la cifra de indiferentes (Huneus, 1986, pág. 69).

Posteriormente al estudio de Huneus, y con otra fuente de medición, Rodrigo Baño (1993), sobre la base de datos de FLACSO, muestra un panorama más crítico en el apoyo ciudadano a los partidos. Así, este autor demuestra que en Chile la evaluación de los partidos siempre fue más negativa que positiva. De esta manera, se revela, por ejemplo, que el Partido Comunista siempre fue el partido más rechazado en el país, antes y después del quiebre democrático, marcando en las preferencias ciudadanas siempre sobre un 45% de rechazo. Le seguían hasta 1973 el Partido Nacional (fusión del Partido Conservador y Liberal) con 37% de rechazo y luego el Partido Radical y el Partido Socialista, ambos con un 30%. Casi llegando al plebiscito, los radicales descienden a menos de un 20%, mientras los socialistas mantuvieron su alto nivel de mala imagen. En esta mirada hacia la historia de la opinión pública, sólo la Democracia Cristiana presentaba un menor nivel de rechazo ciudadano, marcando cerca de un 11% entre 1987 y 1989 (Baño, 1993, pág. 16–17).

Lo anterior da cuenta, efectivamente, de un panorama ambiguo de la relación entre la ciudadanía y los partidos hasta 1989. Pero, ¿qué ha ocurrido en democracia con la evolución de la confianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos?, ¿se ha mantenido este “apoyo” a los partidos que hubo bajo el gobierno militar?

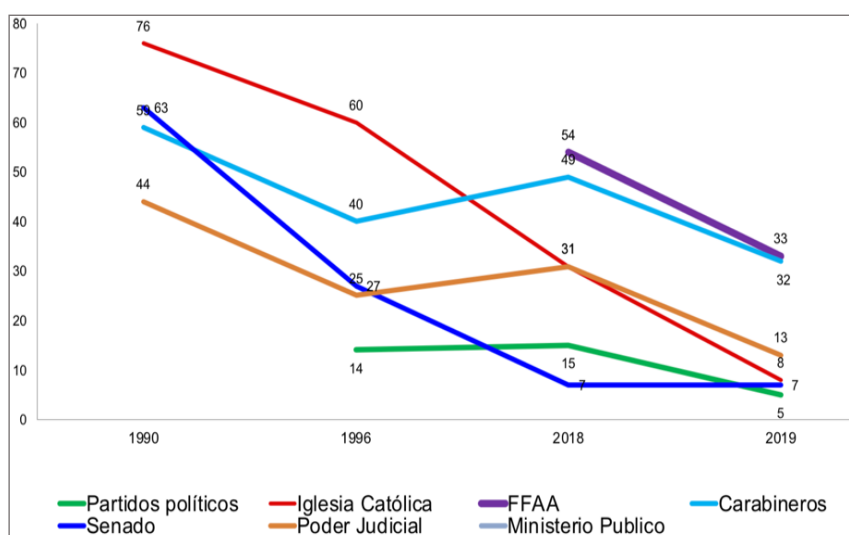
En verdad, los datos posteriores son mucho menos alentadores puesto que bajo cualquier fuente de medición que se mire, los partidos han sido la institución política de las que menos confianza generan en la población. Esta desconfianza ha ido aumentando acelerada y sistemáticamente desde el retorno a la democracia hasta la última medición del CERC de mayo de 2019. Así se distingue en los dos gráficos de fuentes distintas expuestos a continuación.

Gráfico 16. Confianza en partidos políticos Centro de Estudios Públicos



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CEP (2017).

Gráfico 17. Confianza en las instituciones (1990–2019) Barómetro de la Política CERC



Fuente: Barómetro de la Política CERC–MORI, mayo 2019.

Se puede distinguir de los gráficos presentados que la confianza en los partidos políticos tiende a la baja en forma periódica pero además de manera acelerada. Aunque según la medición de Latinobarómetro de 2018, se trata de una tendencia que se da en toda la región de América Latina, siendo Chile el octavo país con mayor confianza en los partidos (14%), con sólo un punto sobre el promedio de la región (13%) (Latinobarómetro, 2018).

Como era de esperar, esta situación de caída en la confianza motivó a distintos gobiernos a introducir reformas políticas orientadas a mejorar la participación ciudadana. Así ocurrió bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006–2010), administración que envía un proyecto de ley de inscripción automática y voto voluntario al Congreso, y que finalmente se aprueba bajo el primer mandato del presidente Sebastián Piñera (2010–2014) con la *Ley 20.568*.

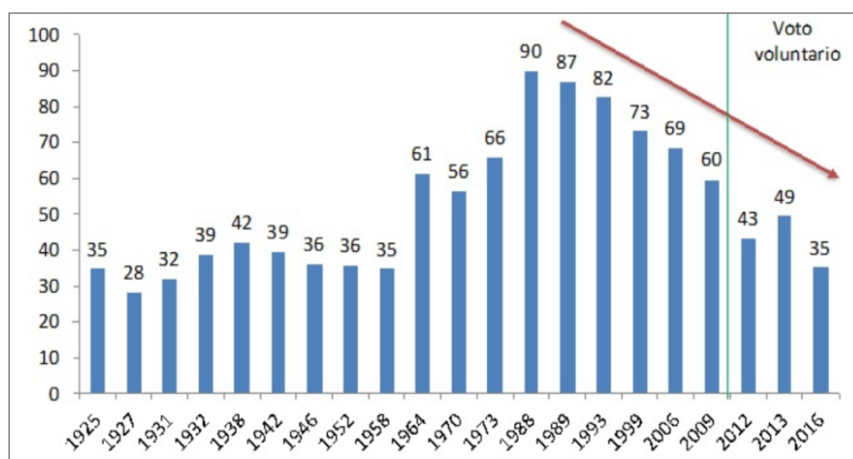
Uno de los principales fundamentos para impulsar esta reforma, era que ante un padrón electoral “congelado” y que comenzaba a envejecerse, se hacía necesario

introducir mecanismos institucionales para fomentar una mayor participación, sobre todo de los más jóvenes, que es el segmento etario con menos “compromiso cívico” (PNUD, 2014; INJUV, 2009; González y otros, 2005). De esta manera, el cambio institucional, en opinión de sus defensores, podría haber originado una mayor participación del electorado, ya que las personas quedarían automáticamente inscritas en los registros electorales, facilitando el acceso de quienes no estaban inscritos o no tenían tiempo ni deseos de ir a inscribirse, dependiendo solamente de la voluntad de ejercer el derecho a votar.

Otros argumentos con un tenor más “ideológico” señalaban que el Estado no debía ejercer coacción sobre las libertades individuales de las personas y que había que proteger la “libre elección” de los ciudadanos. También se esgrimía, entre otras razones, que su implementación obligaría a los candidatos a encantar y convencer a su electorado, algo que había dejado de ocurrir con el voto obligatorio (Libertad y Desarrollo, 2013).

En definitiva, hablamos de una reforma celebrada por la clase política, pero que a poco andar comenzó a mostrar serias falencias, ya que los resultados sólo corroboran un empeoramiento de la participación electoral. De hecho, entre 2009 (con voto obligatorio vigente) y 2012 (con reforma de voto voluntario), la participación cayó en 11 puntos porcentuales (Lagos, 2016), lo que no ha mejorado a la fecha puesto que de ahí en adelante es menos del 50% del electorado quien elige al presidente y menos de un 40% a los alcaldes y concejales (Fuentes, 2019). Así lo grafica la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos (2017).

*Gráfico 18. Participación electoral 1925–2016*



Fuente: Lagos (2017).

Con posterioridad, bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet (2014–2018), se vuelve a implementar otro paquete de cambios institucionales con fines de mejorar la participación y la imagen de la clase gobernante. Se trata, nuevamente, de un contexto de baja confianza institucional, que se ve agravado con otro factor que incide aun más en las percepciones negativas de la ciudadanía: un escenario de repetidos casos de corrupción entre grandes empresarios y miembros de la clase política (Matamala, 2015). Esto motiva a la presidenta a impulsar un conjunto de reformas políticas orientadas a regular la

relación entre dinero y política, situación que no se encontraba fiscalizada legalmente desde el retorno de la democracia.

Los cambios implementados por el gobierno, estuvieron sustentados en el informe del *Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción* (2015), instancia conocida mediáticamente como “Comisión Engel”. En esta comisión participaron expertos y políticos de diferentes sensibilidades del entorno ideológico, que emiten un informe entregado a la presidenta en abril de 2015. Sobre la base de este documento se realizan varios cambios, entre estos, la eliminación de los aportes privados de empresas y personas jurídicas a los partidos y las campañas políticas, y su reemplazo por un financiamiento público, pudiendo éste ser fiscalizado por el Estado a través del SERVEL y auditado por la ciudadanía. Esta última reforma, fue clave para terminar legalmente con una asimetría que se venía desarrollando en el sistema político desde su restauración, en la que ciertos “grupos de interés” con holgados recursos económicos podían tener mayor influencia sobre el sistema político y sus actores, ello en detrimento de ciudadanos de a pie (Huneus, 2014).

En esa lógica de regulación y democratización, el financiamiento de la política fue acompañado de reformas a los partidos orientadas a desarrollar mayor democracia interna en estas organizaciones, sobre todo en la elección de sus dirigentes. Además, los partidos dejaron de ser instituciones privadas, convirtiéndose en entidades de derecho público, lo que facilita su inspección estatal, tanto para la rendición de gastos como para promover la participación ciudadana, sobre todo de jóvenes y mujeres; estas últimas, con participación garantizada a través de la Ley de Cuotas implementada el 2015. Cabe añadir que la Ley de Cuotas ha tenido efectos inmediatos, ya que como revela Dazarola (2018), en las elecciones congresistas de 2017, se logró un avance de 7 puntos porcentuales en la inclusión de mujeres en cargos políticos, cifra significativa respecto del 1,6 de promedio que se venía registrando desde 1989 (Dazarola, 2018, pág. 2).

A pesar del notorio avance que han producido estos cambios institucionales en el perfeccionamiento de la “calidad de la democracia”, la verdad es que ello no se ha traducido a la fecha en un mejoramiento de los indicadores de participación y de desafección, y así lo prueban la gran mayoría de informes locales y regionales.

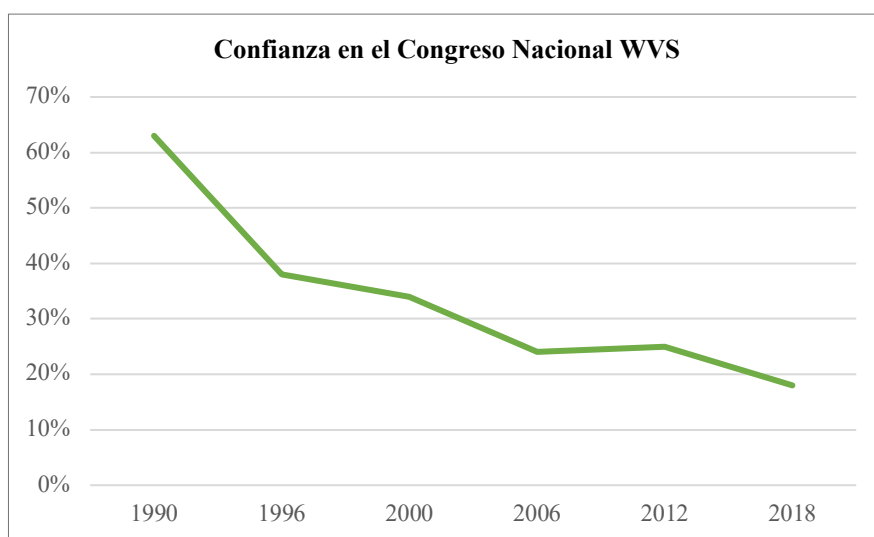
Uno de los factores asociados a esta imagen de la política es la percepción de corrupción que ha ido *in crescendo* a partir de 2014. En efecto, pese a informes internacionales que sitúan a Chile como uno de los países menos corruptos de la región de América Latina (Corruption Perceptions Index, 2018), lo cierto es que a partir de la fecha mencionada, se comienza a desarrollar en la población una percepción generalizada de corrupción a nivel de “*los que mandan*” (CERC–MORI, 2017). Esta situación ha contribuido dañinamente sobre la cultura política de los chilenos, que ven en la actividad política un trabajo “poco transparente” y de enriquecimiento individual por sobre el bien común (PNUD, 2014).

Otros estudios con validez internacional como la *Encuesta Mundial de Valores* (2018), dan cuenta de una situación parecida. Por ejemplo, a tres años de las reformas que regulan la relación entre dinero y política, la mayoría de los chilenos sigue creyendo que las autoridades de gobierno están involucradas en actos de corrupción (61%), mientras casi un 15% cree que *todas* las autoridades políticas están involucradas en dichos actos

ilícitos (WVS–MORI, 2018). En síntesis, le lector/a podrá inferir que son cifras que dan cuenta de una situación delicada en torno a cómo los ciudadanos miran y evalúan a la clase gobernante y sus prácticas políticas.

La mala imagen de los partidos también es semejante respecto de la del Congreso Nacional, ya que en varios estudios esta institución es la penúltima peor evaluada por los chilenos (apenas por encima de los partidos). Así lo informan, por ejemplo, el Barómetro de la Política CERC–MORI de éste año, que ilustra que los senadores y los diputados alcanzan una puntuación de 7% de confianza en la población. También la citada Encuesta Mundial de Valores (2018) resalta un declive en la confianza depositada en el Congreso Nacional, que viene cayendo en forma constante desde 1990 hasta la fecha. Esto se puede apreciar en el gráfico que se expone a continuación.

*Gráfico 19. Confianza en el Congreso Nacional, World Values Survey (2018)*



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de WVS–MORI (2018).

Los expertos que han investigado con detención esta desafección política, argumentan que hay varios factores involucrados que pueden estar incidiendo en esta situación, siendo uno de los más recalcados el “cinismo político” (González, y otros, 2005) o la creencia de que la mayoría de los políticos están en política sólo para beneficiarse individualmente (PNUD, 2014; CERC–MORI, 2017). De hecho, existen cuestionamientos muy concretos que parecen incrementar esta evaluación crítica, como pueden ser los altos salarios que tienen los legisladores (de los más altos del mundo)<sup>86</sup>, además de algunas situaciones de uso cuestionable de recursos públicos. Todas estas situaciones han contribuido a socavar progresivamente la confianza en esta institución. Se trata de un asunto que no es menor, y que incluso ha motivado la propia intervención del presidente Sebastián Piñera, que ha sugerido la reducción de congresistas en la cuenta pública de junio de 2019, desatando

<sup>86</sup> Según un estudio realizado por Schaeffer, Segura & Valenzuela (2014), dentro de los países de la OCDE, los parlamentarios chilenos son los que tienen los sueldos netos más altos después de los congresistas mexicanos. Uno de los resultados de este estudio muestra que, de hecho, un diputado chileno gana 40 veces el salario mínimo.



con ello aireadas reacciones en la oposición, ya que muchos pensaron que ello podía significar volver al Sistema Binominal<sup>87</sup>.

El problema del desarrollo socioeconómico ya explicado, más algunos de los factores recién mencionados, son parte de las razones que han contribuido a corroer la confianza de la ciudadanía en los partidos y el Congreso Nacional, pero ¿es el “cinismo político” transversal a la sociedad chilena, incluyendo a la élite empresarial? ¿consideran los empresarios que los partidos y el Congreso están desconectados de la sociedad y/o que sólo se benefician individualmente de la política? ¿Comparte la élite empresarial la misma imagen de la clase política que los jóvenes chilenos, que son quienes muestran los mayores niveles de desafección?

Sobre esto último, parece que no hay muchas dudas respecto a que los partidos y el parlamento son las instituciones peor valoradas desde 1990 hasta la fecha. Las mediciones así lo indican y también algunos estudios cualitativos que se han centrado en el estudio de grupos sociales y sus subculturas, siendo los más frecuentes los estudios sobre los jóvenes (Godoy, 2016; Nieto, 2010). Se trata de una comparación que puede ser interesante, ya que los jóvenes sistemáticamente parecen ser quienes peor evalúan el funcionamiento de la democracia y sus instituciones.

Por ejemplo, en relación a este grupo social, en términos generales, como revela el Instituto de la Juventud (2009), los jóvenes tienen escaso interés en la política, ya que cerca del 64% manifiesta una actitud de apatía sobre la actividad política formal, que es todavía más nítida aún en su valoración hacia los partidos y el Congreso Nacional. Esta *aversión* hacia la política institucional contrasta con otras formas de organización por fuera de los canales institucionales, como son los movimientos sociales y otras formas de organización social y acción colectiva (PNUD, 2015a). Así, varios trabajos recientes concluyen que, sobre todo los partidos, producen una actitud de “indiferencia” en los más jóvenes (Godoy, 2016), lo que se alimenta aún más a raíz de esta creencia instalada de “cinismo político” (PNUD, 2014), que se ha visto agudizada a partir de los casos repetidos de corrupción desde 2014 hasta la fecha.

Para ilustrar, así expresan esta desafección estos jóvenes estudiantes secundarios refiriéndose a los partidos políticos: “(...) *es que al final, o sea, por lo que conozco de los partidos políticos y todo eso, la gran mayoría se va por sus beneficios personales, o buscan beneficios sólo para un estrato social, en vez de buscar un beneficio común para todos*” (*Estudiante de tercero medio, Instituto Politécnico*) (Nieto, 2010, pág. 74). Hablamos, por cierto, de una actitud bastante representativa de este grupo social, de reprobación y sobre todo de un “*no estoy ni ahí*” respecto al rol que juegan los partidos en democracia, “*No sé, yo encuentro que la mayoría son muy parecidos (los partidos). ¿No hay ninguno que te interese de los que existen? No, además no sé mucho. (NP, hombre, 16 años)*” (Godoy, 2016, pág. 54). Se trata de una actitud de “baja implicación”

---

<sup>87</sup> Al respecto, véase esta nota de Radio BíoBío (2019) en la que el presidente Sebastián Piñera plantea la reducción de diputados y senadores, disponible en: <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/02/parlamentarios-dispuestos-a-analizar-reduccion-de-legisladores-pero-sin-volver-al-binominal.shtml>

y declinante “competencia política”, que hace tiempo vienen describiendo los expertos en materias de cultura política (LAPOP, 2012), lo que en verdad, no es singular del caso chileno (Morán & Benedicto, 2000). De hecho, otros estudios verifican que esta apatía política también se manifiesta en otros países con regímenes más avanzados y consolidados, como es el caso, por ejemplo, de España, que en 2018 tenía un 31% de jóvenes que creía que los partidos no son necesarios para que haya democracia<sup>88</sup>.

Como se decía, varios estudios convergen en esta “indiferencia” de la juventud hacia los actores políticos formales, lo que además no es muy alejado de lo que opina el resto de la ciudadanía, sobre todo en los sectores de posición social media y medibaja, que en Chile son los que menos confianza tienen en quienes toman decisiones políticas (“clivaje socioeconómico” según el Barómetro de la política, CERC–MORI, 2019).

Análisis enfocados en la cultura política de individuos con menos edad, incluso, muestran resultados que son verdaderamente alarmantes, no sólo en el país, sino también en la región. Es el caso del cuestionario latinoamericano ICCS, que midió, entre otros ítems, el apoyo y justificación de dictaduras entre 2009 y 2016. En sus resultados, se concluye que el 69% de niños de 12 y 13 años de cinco países latinoamericanos *aprueban* un régimen autoritario bajo determinadas circunstancias. Dentro de esas naciones se encuentra Chile, que en 2016 registra un porcentaje de 57% de niños que manifestaron apoyar una dictadura si esta traía “orden” y “seguridad” (ICCS, 2016, pág. 28–29). Durante estas fechas mencionadas, otra fuente detectó que 1 de cada 4 jóvenes entre 18 y 29 años, cree que un gobierno autoritario puede ser preferible que un gobierno democrático (11% de la muestra) (UDP–Feedback, 2017). Como podrá comprenderá el lector/a, los datos presentados dan cuenta que el problema sociopolítico en Chile no es trivial ni menos efímero, ya que la desconexión de la política con la ciudadanía está comenzando a afectar a segmentos que tienen muy poca edad, lo que con toda seguridad se refuerza con la socialización política que tienen los jóvenes en sus hogares (Lane, 1959; Easton & Dennis, 1970).

Pues bien, comparando las actitudes políticas de jóvenes chilenos y la élite empresarial, se puede decir que estas son bastante *diferentes*. En efecto, mientras los jóvenes tienen una imagen negativa casi por *default* de los partidos, los entrevistados de esta investigación conciben a los partidos como instituciones *fundamentales para el buen funcionamiento* de la democracia. Así, los dos generaciones de entrevistados de ambas patronales analizadas, independiente de su posición política, manifiestan un apoyo sumamente explícito a los partidos, que son entendidos como instituciones necesarias para la representatividad y funcionamiento del régimen democrático. Esta actitud política da luces sobre su cultura política democrática de apoyo al régimen y las instituciones que lo sostienen (Offerle, 2004; Linz, 1978; Morlino, 2009), lo que además, es coherente con su modelo de democracia predilecto: la democracia “representativa” (Gargarella, 1995).

---

<sup>88</sup> En el marco de la celebración de 40 años de la Constitución Política de España, la encuesta Microscopia arrojó estos preocupantes resultados, dando cuenta de que la democracia ha perdido apoyo en varios países con sistemas institucionales ejemplares. Al respecto, véase la nota en el siguiente enlace: <https://www.20minutos.es/noticia/3508991/0/encuesta-microscopia-constitucion-partidos-politicos-democracia/>

“Yo creo que los países se construyen con los partidos políticos, para mí los partidos políticos son necesarios en todos los países” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

“Son súper importantes, los partidos políticos al final del día le dan la estabilidad a la democracia, le dan la cancha [campo], le dan la discusión, las grandes líneas de la política” (E8, 44 años, SNA, centro).

“Yo creo que los partidos políticos hacen un tremendo trabajo y son necesarios” (E5, 47 años, SNA, derecha).

“Los partidos políticos son muy importantes, creo que la participación política es algo muy clave y fundamental en el desarrollo de los países. No soy de aquellos que dicen que los países puedan funcionar sin los partidos políticos, no, todo lo contrario, me gustan los partidos políticos fortalecidos, con discusión interna, incluso con corrientes internas que hagan discusiones entre ellos” (E14, 51 años, SNA, centroderecha).

El apoyo que reciben los partidos por parte de los entrevistados, se produce de manera similar con el Congreso Nacional, siendo también concebido como fundamental para ejercer la representatividad y la conexión con la ciudadanía: *“yo creo que el parlamento tiene que estar conectado con la sociedad, tiene que estar conectado, es muy evidente que el parlamentario tiene que estar conectado con sus electores, pero para legislar necesariamente tiene que estar conectado con el mundo real; con las empresas, con los artistas, etcétera. Esos canales tienen que estar, ojalá que sean lo más transparente porque sino y volvemos a otra cosa que hablábamos recién, que la gente se sienta representada pero si esos canales no están, alejas cada vez más al mundo político del mundo real”* (E3, 77 años, SOFOFA, derecha).

Es conveniente dejar en claro que *todos* los entrevistados se manifestaron favorablemente sobre la existencia de instituciones representativas, como son los partidos y el Congreso Nacional. Sin embargo, también es verdad que este apoyo manifestado no necesariamente significó evaluar de buena manera el *desempeño* de estas instituciones en la “nueva democracia”, lo que es coherente con este “malestar” que describía en páginas anteriores, en relación al aumento de cupos parlamentarios con el cambio electoral.

Desde la perspectiva de análisis de esta investigación, esto muestra un aspecto interesante de la cultura política de los entrevistados, quienes apoyan decididamente la democracia y sus instituciones, incluso en varios casos las movilizaciones sociales. Pero como se decía, esta postura no necesariamente significa tener una actitud favorable hacia el funcionamiento de estos actores políticos en democracia.

Al respecto, se puede decir que los entrevistados logran distinguir sin dificultad entre “instituciones propias” de la democracia y el “desempeño de turno” que hacen los actores en éstas. Se trata, en verdad, de una “competencia política” (Almond & Verba, 1970) que en términos analíticos permite diferenciar a la élite empresarial respecto de un problema que comunmente ocurre en la opinión pública. Así lo indica Huneus (2014), para quien la ciudadanía no logra distinguir con nitidez entre la democracia y sus

instituciones respecto del desempeño gubernamental de los gobiernos posautoritarios. De esta manera, las personas desencantadas y los que mal evalúan el desempeño gubernamental, finalmente terminan confundiendo al Estado con el gobierno, lo que redundaría en el declinante apoyo al régimen político (Latinobarómetro, 2017 y 2018).

Esto último no ocurre con la élite empresarial, ya que los protagonistas de este trabajo fueron enfáticos en, por un lado, manifestar confianza en los partidos y el Congreso, pero al mismo tiempo, manifestarse negativamente respecto del rol que han jugado los partidos y el Congreso Nacional en la producción de apatía política y desconexión de las élites con la ciudadanía. En esta mirada, sorprende nuevamente la *homogeneidad* de las respuestas de los entrevistados, dejando de ser relevante las posiciones políticas y también la pertenencia a una determinada organización empresarial. Tampoco se encontraron diferencias marcadas entre las generaciones analizadas.

En relación a los partidos políticos, uno de los aspectos más resaltados por los entrevistados fue la *desconexión* que existe entre estas instituciones y la ciudadanía. Así, la mayoría de los participantes coincide con el diagnóstico de una escisión entre el mundo de la “representación” y la “sociedad”, que en algunos casos fue adjetivada como “crisis institucional” y en otros fue mencionada como simple “desconexión” entre quienes toman las decisiones y las necesidades reales de los ciudadanos.

Los fundamentos para referirse a este divorcio entre el mundo político y los “profanos” al decir de Bourdieu (2001c), se da por diversos motivos, según los entrevistados. Nuevamente, entre los más enfatizados estuvo el “*cinismo político*” y las prácticas de *corrupción*. Definitivamente, es una mirada que los participantes comparten con el resto de la población: una percepción negativa de abuso o de “espacio de privilegios” usado para beneficio personal en detrimento del “bien común”, que ha impactado negativamente en la confianza de la ciudadanía. En un tono similar se destacó la desconexión con las necesidades de la ciudadanía, como si se tratara de intereses muy distintos y sobre los cuales pareciera no haber intersección<sup>89</sup>. Esto se produciría, para los participantes, porque quienes dirigen el país cuidan sus intereses sin prestar atención al mundo que se encuentra por fuera de las élites:

“Hay un alejamiento de la clase política y los partidos de entender realmente las necesidades de los sistemas porque están más preocupados de ellos, de sus acuerdos políticos y de sus ambiciones, y de quién va a tener el poder en el próximo período que preocuparse realmente” (E27, 48 años, SNA, derecha).

“Los partidos políticos son necesarios, pero los partidos políticos tienen que ser... estar conectados con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa con las personas, o sea, hoy día hay cada vez menos gente en los partidos políticos porque hay menos conexión, es un dato estadístico (...) *hay una crisis de la*

---

<sup>89</sup> Así corrobora esta percepción de los entrevistados el estudio liderado por Claudio Fuentes, en el que se analizan las diferencias respecto de cómo piensa la élite representativa y cómo piensa la ciudadanía. Por citar un ejemplo, una diferencia notoria se da sobre el rol del Estado en la economía, el que para la ciudadanía debería ser mayor que para los representantes (Criteria–Labcon, 2019).

*institucionalidad, las instituciones están cuestionadas, y necesitamos buenos líderes” (E18, 41 años, SOFOFA, derecha).*

“Yo creo que ahí los políticos están muy al debe, hoy día los políticos y los partidos políticos tradicionales y eso yo creo que se vio enormemente en la última elección, donde el Frente Amplio sacó harta [muchacha] votación, donde EVOPOLI sacó harta votación y los partidos tradicionales, para qué decir la Democracia Cristiana y la UDI, perdieron votación, porque están preocupados de los políticos mismos de su propio bolsillo, de sacar las cosas fáciles o de favorecer a grupos de distinta índole y eso es lo que no debe ser” (E2, 59 años, SOFOFA, derecha).

“Yo siento que no representan a la sociedad en este minuto, no han logrado conectarse con los nuevos tiempos (...) yo creo que los partidos políticos y las otras instituciones están en una crisis” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

Como bien puede apreciar el lector/a, las posturas siguen siendo homogéneas, ya que tanto los entrevistados de centro como de derecha, coinciden en la creencia de *“cinismo político”*. Sólo un entrevistado matizó estas percepciones sobre el funcionamiento de los partidos, aduciendo que hay mucho desconocimiento desde quienes no militan en éstos (algo que ocurre mayoritariamente con los participantes de esta investigación). Este desconocimiento acentúa la desconfianza hacia estos actores *“(...) es curioso porque la gente que no milita en partidos políticos así como a la política la miran también con distancia, no obstante, cuando muchos de ellos se incorporan a una organización política, empieza rápidamente a cambiar su percepción (...) pero de todo hay en “la viña del señor”, yo creo que hay mucha gente que se dedica a la política por una ambición meramente personal, pero creo que son una minoría. Creo que la gran mayoría desde que está en política los mueve el interés del país y lo hacen en un partido porque representa sus ideas. Yo creo que los partidos políticos son indispensables en una democracia representativa”* (E9, 56 años, SNA, derecha).

Con la imagen del Congreso Nacional pasa algo muy parecido a lo que sucede con los partidos. Se trata de un apoyo irrestricto a la idea de “representación política”, entendida como la mejor forma de régimen político, siendo este un claro indicador de la legitimidad democrática (Linz, 1978). Sin embargo, la actitud “específica” que se manifiesta del funcionamiento del parlamento es negativa, compartiendo la percepción mayoritaria que tiene la ciudadanía sobre el trabajo político, entendido como una labor “poco transparente” de los congresistas (PNUD, 2014). Y de alguna manera, esto se relaciona con otro aspecto aludido por los entrevistados, relacionado con las “condiciones materiales” que tienen quienes ejercen el poder político. Entre éstas fueron nombrados los *altos sueldos* como también las *prácticas abusivas* que se hacen desde la posición de poder. Estas situaciones, en opinión de los entrevistados, han sido contributivas en la socavación de la imagen del Congreso, lo que se suma a un tercer elemento destacado: las pocas capacidades técnicas y políticas que tendrían los congresistas para legislar. En

definitiva, esto produciría una legislación de mala calidad que afecta la calidad de vida de las mayorías, generando una representación política deficiente:

“La Cámara de Diputados es para representar ciertos intereses y para legislar, entonces, hay personajes que *no* tienen idea de legislación. Cada vez la legislación chilena es de más mala calidad, y yo me ocupé de eso cuando estudiaba derecho, de que antiguamente nuestros diputados eran verdaderos honorables, verdaderos sabios del derecho, o sea, un Alessandri, un Frei, por nombrar, eran tipos que se sabían las leyes completas, eran estudiosos, eran juristas, verdaderos juristas que crearon leyes de muy buena calidad” (E10, 40 años, SOFOFA, centro).

“El tipo que va a hacer una labor social parlamentaria tiene que ir a ayudar al pueblo y no a lucrar en el fondo con esa función. Y aquí por muchos años la verdad es que los que buscaban esa posición era para lucrar y eso no me parece correcto. Por ejemplo, las dietas parlamentarias, los sueldos que tienen, las pensiones, las jubilaciones, excesivo... ¡obvio!, o sea, si yo voy a trabajar es porque tengo un servicio de compromiso social, no es para lucrar. Es obvio que quiero tener una jubilación digna y lo demás, pero no tengo por qué tener pensiones 10 veces superiores a la de cualquier cristiano, entonces, eso ya preocupa” (E4, 70 años, SOFOFA, apolítico).

“Creo que han perdido mucha conexión con la ciudadanía porque el sistema les ha permitido arrogarse muchas franquicias, muchos beneficios personales, cuando uno ve el hecho de que le paguen hasta el taxi para irse al Senado... ¡pero si es su trabajo! a mí no se me ocurriría que me paguen...y es un trabajo súper bien remunerado, pero todos esos gastos y plata para los asesores y plata para esto, y cantidades grandes, entonces, hay abuso... cuando determinaron que volverían a trabajar un día después que el resto del país... pero ¿qué se han imaginado? hay una actitud... y lo defienden abiertamente y creen que es lo correcto. Ha habido muchísimo de autodestrucción, en ese sentido, me hace harta [mucho] esperanza y vamos a ver si son consecuentes, porque hasta ahora no lo han sido, el movimiento este de los jóvenes, los del Frente Amplio, especialmente los jóvenes, que han hablado de reducir la dieta” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

“No están preocupados de lo que le pase a la gente, son individualistas más que nada, si yo veo al diputado o al senador de la región, de lo único que está preocupado es que las cosas que suceden aparezcan como que él las hizo, pero no están preocupados del desarrollo del país, están preocupados de su puesto, al final es un trabajo para ellos, no hay esa visión de país que es con la que yo me eduqué. Ellos se presentan como servidores públicos pero *yo no encuentro que sean servidores públicos*” (E28, 69 años, SNA, republicano).

Para la gran mayoría de los entrevistados, todo lo anteriormente señalado incide mucho en la desafección política que existe en la ciudadanía, lo que ha ido desincentivando la participación electoral, como bien lo sintetiza un dirigente de la SNA: “*la política de*

*alguna manera también es un acto solidario, y pienso de que nuestros líderes también no han cooperado mucho en que la gente se interese más en la política” (E30, 62 años, SNA, derecha).*

### *5.1. La élite empresarial y al reforma de inscripción automática y voto voluntario*

Además de los factores recién mencionados, los entrevistados señalaron otras causas que han incidido en la baja participación y desencantamiento con la democracia. Estos componentes están relacionados con el *diseño institucional*, sobre todo con la reforma de inscripción automática y voto voluntario y también con el sistema binominal, que como se explicó antes, también para algunos participantes ha tenido un efecto negativo en la participación tras la exclusión de fuerzas políticas que podrían haber permitido un recambio generacional, *“Yo creo que ha faltado recambio generacional en los dirigentes políticos. Los partidos políticos se han alejado mucho de las preocupaciones, de los cambios generacionales y de darles cabida a los otros, sino que son los mismos que se van repitiendo el plato” (E29, 63 años, SNA, derecha).*

Sobre la reforma electoral de inscripción automática y voto voluntario aprobada durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera (Ruiz & Osorio, 2016; Avendaño, 2013), los entrevistados se manifestaron un tanto divididos, siendo la *postura mayoritaria* la de aquellos que se *manifiestan a favor del voto obligatorio*, es decir, que desaprueban la reforma política.

Al respecto, sorprende que las distintas posturas o posicionamientos que se dan sobre este tópico están marcadas, sobre todo, por las *diferencias generacionales* de los entrevistados. Así, son los más jóvenes los que en ambas organizaciones empresariales están *más de acuerdo* con el voto voluntario. Esto es interesante y parece estar relacionado con su socialización política en los “años impresionables”, ya que como recordará el lector/a, los participantes más jóvenes tuvieron su socialización temprana fundamentalmente bajo el gobierno militar, contexto en el que la actividad política estaba clausurada. Sobre esto se puede inferir que su conocimiento sobre el “compromiso cívico” de la ciudadanía, solamente se remonta al tiempo democrático después de la transición, sin poder hacer la comparación histórica con la participación que tenía la ciudadanía antes del golpe militar. Y de hecho, éste es precisamente el factor que destaca la generación más longeva, que por la vía de la experiencia personal logró observar una sociedad mucho más interesada en la política, en lo que el sistema de voto obligatorio jugaba un rol positivo: *“Yo creo que la sociedad chilena comparando, por ejemplo, la época de la Unidad Popular, los primeros años del gobierno militar, me parece que está menos interesada en política, eso lo dice también el hecho de que vaya a votar menos del 50% de los potenciales votantes” (E2, 59 años, SOFOFA, derecha).*

Uno de los fundamentos más subrayados por los participantes que se mostraron a favor del voto voluntario es la “libertad de elección” (Inglehart & Welzel, 2006). Probablemente, esto se relaciona con la “configuración ideológica” que tienen los dirigentes empresariales, formados con mucha fuerza en valores de autoexpresión como las libertades individuales, siendo sobresaliente la creencia de la “libertad de poder elegir”. Este principio, según algunos protagonistas, debería poder extenderse a toda la

ciudadanía, la que debería ir administrando ese valor y haciendo un uso de esa libertad en forma responsable, algo que como resaltan los entrevistados, no siempre se cumple. Así lo describe un entrevistado de la SNA:

“(…) porque eso de alguna manera es parte de algo que yo le decía muy en principio, de un valor que yo tengo que es el *valor de la libertad, por supuesto, la libertad tiene que ser administrada con responsabilidad y ahí hay un problemita, y el problemita está en que yo soy libre de ir o no a votar, pero no me hago responsable de lo que significa ir o no a votar, entonces, ahí hay que tratar de trabajar mejor y probablemente hay un déficit profundo en el tema de la educación cívica* (...) yo estoy de acuerdo con el voto voluntario y la inscripción automática, pero creo que tiene que ir acompañado de más cosas, más elementos, por ejemplo, mayor educación cívica, que la gente realmente haga el link [enlace] de que “yo soy parte activa de las autoridades que nos están gobernando y por tanto del desarrollo del país” (E14, 51 años, SNA, centroderecha).

Precisamente, este “déficit de cultura cívica” que se resalta, fue lo que motivó a la *mayoría* de los entrevistados a *manifestarse contrarios a la reforma de voto voluntario*. Bajo la mirada de los participantes, la sociedad chilena, al carecer de una cultura democrática profunda y arraigada, ha tenido una baja implicación, lo que es rechazado por los entrevistados, quienes profesan un implacable “compromiso cívico”. Se trata, nuevamente, de valores democráticos de participación adquiridos muy tempranamente por la vía de la socialización: en algunos casos por la vía familiar, y en otros, por la vía de los propios aprendizajes políticos desarrollados a partir de experiencias de participación estudiantil:

**Entrevistador: ¿Cree que ha afectado el voto voluntario en esta “crisis de representación” que usted señala? R:** Sí, claro que ha afectado, sin duda alguna, sí pero yo soy muy hinchado de las cosas voluntarias, pero cuando la relación de las cosas entre deberes y derechos, yo creo que los deberes deben ser para poder exigir los derechos, hay que hacer perentorios los deberes. Yo creo que muchos amigos míos se escandalizarían... no lo había pensado bien, pero mi respuesta sería que yo prefiero en lo personal un sistema de votación obligatorio... es que es muy cómodo el no votar, el no me comprometo, es el no-compromiso, no-compromiso con el destino colectivo” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

“Yo creo que uno debiera tener la obligación de votar, así como... este es el país de los derechos pero no de las obligaciones. Hoy día la sociedad se mueve en base a todos los derechos que tenemos, pero yo les pregunto a los cabros [jóvenes] “oye, ¿y tus obligaciones?”, claro, porque si yo salgo a la carretera tengo la obligación de respetar las reglas del tránsito. Si yo voy a cruzar la calle, tengo que respetar el semáforo como peatón y el paso de cebra, entonces, si no empezamos a respetar eso, no respetamos a los padres en la casa, no respetamos a la persona que va sentada en el metro de la tercera edad y le cedo el asiento,



no hay respeto por nada, pero exijo el derecho de que tienen que darme gratuidad, que tienen que darme educación, que tienen que darme todo, pero yo no apporto a la sociedad porque soy un receptor, no soy un constructor, y ¿cómo lo convengo yo de que es un constructor de lo que hay que hacer como país y como sociedad?” (E29, 63 años, SNA, derecha).

“Mi opinión es que ese sistema funciona única y exclusivamente en países que tienen una cultura cívica alta, lo cual Chile no lo tiene, entonces, mi opinión es que no es adecuado para nuestra sociedad. Yo volvería o al voto obligatorio o la inscripción voluntaria, o haría un sistema que sea muy fácil a través de internet o algo, que pudiera la gente evitar que ya no tengas excusas para ir a votar. Incluso, a través del teléfono que pudieran votar y ahí tendríamos una mucho mayor participación” (E24, 48 años, SNA, centroderecha).

Las citas muestran en forma explícita que la élite empresarial tiene un enérgico “compromiso cívico” con la participación democrática. Esto es así en ambas generaciones y con independencia de la posición política de los entrevistados, tal como se puede inferir de los fragmentos expuestos. Este compromiso resaltado, se relaciona sobre todo con la participación en su dimensión “electoral”, algo que bajo la mirada de la élite es clave para la elección de autoridades y representantes. En efecto, es bajo estos principios mencionados que se rechaza el voto voluntario, ya que se considera que este sistema ha contribuido en parte importante a la abstención política que tienen sus compatriotas.

En definitiva, la postura de confianza en los partidos y el Congreso muestra en toda su magnitud la “configuración ideológica” de la élite empresarial analizada en este trabajo, la que cuenta con una presencia manifiesta de valores democráticos. Esto va muy en la línea de lo planteado por Díez (2011), quien subraya que los grupos de “centro social” tienen valores más posmaterialistas que los que se encuentran en la periferia social, algo que también según el autor ocurre en Chile.

En este sentido y tomando en consideración el expreso compromiso cívico de los entrevistados, se podría decir que este grupo encaja en la categorización de la cultura política que hizo LAPOP el año 2012. Entre varias tipologías, se logró clasificar a un 21,64% como personas con *actitudes entusiastas*, es decir, de alto interés e implicación política (LAPOP, 2012, pág. 105). Esto diferencia en forma importante a la élite empresarial respecto de lo que está pasando con el resto de la sociedad chilena, que muestra una baja confianza en dos de las principales instituciones democráticas. Por el contrario, los entrevistados manifiestan fuerte apoyo en los partidos y el Congreso, y los ven necesarios para un sano funcionamiento de la política, sin perjuicio de la evaluación crítica de su actual desempeño.

A mayor abundamiento, este apoyo favorable hacia los partidos, es coherente con lo mostrado en páginas anteriores, referido a la expresión de un claro apoyo cívico a la democracia, entendido como el régimen político más adecuado para cumplir con las funciones de representación ciudadana (Linz, 1978; Montero, Gunther, & Torcal, 1998). Esta visión se ajusta al modelo de “democracia representativa”, en el que la soberanía se ejerce sobre la base de representantes elegidos y no designados (Gargarella, 1995).

Por último, y en vista del examen anterior, se puede decir que el apoyo a los partidos y el Congreso, además del apoyo mayoritario al cambio electoral, van dando cuenta de una combinatoria compleja de rasgos en las culturas políticas de los entrevistados. Se trata, por un lado, de una amalgama entre una “memoria colectiva” e “histórica” marcada por el “trauma sociopolítico” que tuvo la élite empresarial durante el gobierno de la Unidad Popular y, por otro lado, de una “resocialización democrática” que ha permitido una revitalización y fortalecimiento de valores democráticos adquiridos en los “años impresionables”. Así, parece ser que estos valores sobrevivieron a la “experiencia autoritaria”, y una vez que se vuelve a la democracia y se produce una nueva socialización (Mishler & Rose, 2007; Tormos, 2012; Morán, 1995), éstos vuelven a emerger y a manifestarse, lo que se verifica en su apoyo irrestricto al régimen político vigente.

Veremos en el apartado que sigue, si esta resocialización democrática logra permear los posicionamientos que tiene la élite empresarial en lo que se refiere al cambio constitucional. Hablamos, como se verá, del último “enclave autoritario” que va quedando (Garretón, 2015), ya que el resto de la institucionalidad heredada ha ido siendo gradualmente desmantelada por los gobiernos democráticos de la Concertación (ex Nueva Mayoría) y también por las administraciones de Sebastián Piñera (por la primera y la segunda).

## **6. La élite empresarial y el cambio en las reglas del juego institucional**

### *6.1. ¿Crisis institucional o bajo desempeño de las instituciones políticas?*

Como se decía anteriormente, las movilizaciones sociales que comienzan a desarrollarse a partir de 2011, sólo pusieron de manifiesto ante la opinión pública el delicado panorama de la cultura política de los chilenos: baja participación electoral (menos del 50% para elecciones de representantes) (Fuentes, 2019), desconfianza del Congreso Nacional y los partidos (menos del 10% en la última medición del Barómetro de la Política del CERC) y un declive en el apoyo a la democracia, llegando a un 58% en 2018, según Latinobarómetro (remontando 3 puntos porcentuales respecto de 2017 y con 10 puntos por sobre el promedio de la región) (pág. 16). Por otra parte, pese a las reformas institucionales de esta década, sigue habiendo en la ciudadanía una percepción mayoritaria de corrupción en quienes toman las decisiones (WVS–MORI, 2018). Todo ello ha influido en la instalación de una apatía, distanciamiento, disconformidad y un cierto “cinismo político” que no ha sido fructífero en fortalecer la participación ciudadana y la calidad de la democracia (CERC–MORI, 2017). Así definen esta situación de “desafección” Montero, Gunther & Torcal (1998), la que sirve para interpretar algunos de los fenómenos que se manifiestan en la cultura política de los chilenos:

“La *desafección política* es un concepto tan crecientemente utilizado como diversamente definido. Si se considera como una especie de síndrome, sería posible situar a sus *síntomas* en un continuo que fuera desde un polo positivo de ciudadanos completamente integrados y con fuertes sentimientos de cercanía

a su sistema político, que pasara a través de puntos intermedios caracterizados por un cierto desapego respecto a elementos significativos del régimen, y que alcanzara un polo negativo definido por una hostilidad completa hacia el sistema político y un consecuente alejamiento del mismo. Entre los síntomas más importantes de esta gradación se encontrarían el desinterés, la ineficacia, la disconformidad, el cinismo, la desconfianza, el distanciamiento, la separación, el alejamiento, la impotencia, la frustración, el rechazo, la hostilidad y la alienación. Se trata, por lo tanto, de una familia de conceptos diversos que capta unas orientaciones básicas hacia el sistema político cuyo denominador común radica en “la tendencia a la aversión de su componente afectivo” (pág.25).

Algunos de los rasgos mencionados por los autores citados están presentes en las orientaciones ciudadanas hacia el sistema político chileno, pero esta desafección contrasta, por otra parte, con cierta simpatía por la participación a través de movilizaciones y otras formas de acción social por fuera de los canales formales que otorga el sistema político. Así lo anuncia el Informe de Desarrollo Humano (2015) “Los tiempos de la politización”, que corrobora un divorcio ciudadano con la política formal, pero que, además, registra simultáneamente algunas demandas de mayor inclusión en la toma de decisiones. Hablamos, otra vez, de solicitudes o requerimientos que provienen desde la sociedad, y que por su singularidad, parecen tensionar algunos elementos significativos de la institucionalidad vigente, sobre todo el referido a la Constitución Política, que según algunos de sus detractores, estaría limitando la participación de la ciudadanía en deliberaciones de gran trascendencia (Atria, 2013; Garretón, 2015; Heiss, 2018).

Este debate no está cerrado, ya que hay quienes matizan esta desafección de la ciudadanía, indicando más bien, que no necesariamente tienen que coincidir el apoyo al régimen democrático con actitudes particulares hacia las instituciones políticas. Así, por ejemplo, a partir de la distinción de David Easton entre “actitudes difusas” y “actitudes específicas”, Bargsted & Somma (2018), señalan que la democracia sigue siendo apoyada mayoritariamente por los chilenos (además con un crecimiento extraordinario de la derecha en este apoyo), lo que no se refleja en las actitudes específicas hacia el Congreso y los partidos, que son negativas, sobre todo porque estas últimas tienden a ser más volátiles e influidas por el contexto (Tormos, 2012). Y ya se ha indicado que éste se ha visto perjudicado por casos de corrupción y mal uso de recursos públicos que han contribuido a mermar la escasa confianza en “*los que mandan*”.

En una dirección similar a la de Bargsted & Somma (2018), el Centro de Estudios Públicos (2017a), manifiesta que hoy día más que nunca hay una adhesión a los principios democráticos, y que la percepción “algo negativa” que tiene la ciudadanía puede ser compatible con el funcionamiento de la democracia, por lo que la idea de “crisis institucional” puede parecer *exagerada*” (pág.141).

Desde esta mirada, si ésto fuese distinto o más próximo a una “crisis”, la desafección hacia los partidos y el Congreso se expresaría en una baja satisfacción con la democracia, fenómeno que, según algunos datos, no estaría ocurriendo con tanta nitidez, ya que desde 1997 este ítem ha ido aumentando gradualmente, llegando a poco más de un 50% en 2015 (CEP, 2017a). Cabe mencionar que aunque esta cifra ha ido

gradualmente creciendo, ella sigue siendo baja respecto de otras democracias consolidadas, como es el caso de los países la Unión Europea. En estas naciones, según *Eurobarometer* en 2018, tan sólo un 39% de los ciudadanos europeos declara *no* estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia en sus respectivos países (Eurobarometer Survey, 2018, pág. 29), cifras que proclaman una diferencia significativa respecto al caso chileno.

Por otra parte, y desde la perspectiva mencionada, la participación electoral aunque es baja, es muy parecida a la de otros países con democracias avanzadas (Morán & Benedicto, 2015), y las supuestas demandas de mayor participación a través de mecanismos de “democracia directa”, si realmente fuesen efectivas, se habrían cristalizado en un mayor compromiso cívico de la ciudadanía en el Proceso Constituyente impulsado por la expresidenta Bachelet en 2016<sup>90</sup>. En definitiva, “*en cuanto al sistema político, los síntomas negativos han dado lugar a varios diagnósticos de crisis que parecen exagerados para explicar el momento actual de Chile*” (CEP, 2017a, pág. 28).

Como bien podrá deducir el lector/a, la importancia de los diagnósticos está estrechamente relacionada con el “diseño institucional” y con las reformas que se han ido introduciendo y que se tendrían que efectuar para mejorar aún más la calidad de la democracia en el país (Ruiz, 2011; Alcántara, 2014). Esto lleva a prestar atención a algunas reformas como las que se han tratado en páginas anteriores, pero sobre todo, al tema del cambio constitucional, ya que indiscutiblemente el diseño institucional que ha tenido lugar en Chile ha sido el de una “democracia protegida” (Pinochet, 1977), que gradualmente y, por la vía de los consensos entre las élites (Fuentes, 2012; Godoy, 2003), ha ido siendo transformada en una democracia más avanzada, sin todavía llegar a la categoría más prestigiosa que es la “democracia completa” (Garretón & Garretón, 2010). En opinión de algunos expertos, para que esto ocurriese, deberían existir instituciones plenamente democráticas y con más participación ciudadana, muy en la línea del modelo de “democracia de ciudadanos” planteado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2014), que sugiere pasar de una “democracia electoral” hacia una con más participación deliberativa. O también, tratando de aproximarse al modelo de “democracia plena” o “en forma” que promueve el *Índice Democrático* de *The Economist* (Democracy Index, The Economist, 2018).

En síntesis, quienes defienden la existencia de una “crisis institucional”, colocan especial atención al decir de Linz (1978) en las “variables políticas” e institucionales que han sido causales para agravar el divorcio entre política y sociedad, por lo que las demandas ciudadanas sólo han mostrado algunos síntomas de un problema más grave y anterior: el diseño institucional con sus “enclaves autoritarios”, especialmente, la Constitución de 1980. Este texto constitucional, en opinión de sus detractores, debería ser reemplazado por una Carta Fundamental nacida en democracia, atendiendo al real sentido de la palabra “Constitución”, que deriva del latín *cum* que significa “con o conjuntamente” y *statuere* que significa “establecer” (Kalyvas, 2005, pág. 112). Como se

---

<sup>90</sup> “Nota técnica del proceso constituyente abierto a la ciudadanía”. Visitada 18 de septiembre de 2018. Disponible: <http://datos.gob.cl/dataset/proceso-constituyente-abierto-a-la-ciudadania/resource/8f5fbded-5ca2-4111-8dd6-91039d82bcaa>

verá más adelante, esto implicaría la participación del pueblo en su gestación, independientemente del mecanismo de cambio constitucional.

Por el contrario, quienes sostienen la tesis de que en Chile *no* hay una crisis de las instituciones, la opción de cambios más profundos como el constitucional parece menos viable, fundamentalmente, porque el bajo interés de los ciudadanos en la actividad política, la escasa confianza en el Congreso y los partidos y su evaluación negativa, no se solucionaría necesariamente con un reemplazo institucional, lo que incluye también a la actual Constitución: “*Por estas razones, creemos que la crisis del sistema político ha sido sobre-diagnosticada. Esto es importante, pues, como advierte Pippa Norris, académica de la Universidad de Harvard, cualquier intento reformista fracasará si el problema de la legitimidad democrática o la llamada crisis de confianza se exageran o se diagnostican mal*” (CEP, 2017a, pág. 141).

Bajo esta última mirada, de existir soluciones, estas se encontrarían en el camino del “reformismo moderado” que busca el mejoramiento del desempeño institucional, por ejemplo, a través de reformas parciales o incluso a través de la inclusión de algunos mecanismos de “democracia directa”, que podrían ser complementarios a la “representación”: mixtura que no necesariamente tendría que poner en riesgo la estabilidad democrática que ha tenido el país desde 1990 hasta la fecha (Altman, 2007).

En virtud de lo anterior, el lector/a podrá deducir que los diagnósticos son importantes, porque de ellos se deriva la naturaleza y profundidad de los cambios institucionales, incluida la propia Constitución, que es el “centro gravitante” o “corazón” del diseño institucional (Guzmán, 1991; Fuentes, 2012). Este debate se examina a continuación.

## *6.2.El debate en torno al cambio constitucional*

En estricto rigor, el asunto de la Constitución tiene larga data en el país y se remonta, en realidad, casi a su propia génesis (García & Verdugo, 2015). Así, a un año de ser aprobado el texto constitucional de 1980, un conjunto de destacados intelectuales y políticos de oposición al régimen conocido como el “grupo de los 24”, incluido el presidente Patricio Aylwin, elabora un manuscrito en el que se critica la ilegitimidad de origen y el carácter autoritario y “cesarista” que tiene la nueva Carta Fundamental, que además, consagra el rol de las Fuerzas Armadas en el proceso político. También se menciona, entre otras discrepancias, la consolidación de un modelo económico de libremercado de carácter “individualista” y una concepción negativa sobre los partidos políticos (Grupo de los 24, 1981, pág. 4–5), siendo esto último muy contrario a los principios de la “democracia liberal” (Dahl, 2017; Morlino, 2009; Offerlé, 2004).

Como es sabido, en el contexto de la transición, esta crítica de la oposición luego se fue moderando, ya que las propias condiciones de negociación con el régimen, prácticamente obligaron a aceptar la vigencia de la Constitución, apelando a su modificación o reemplazo a través de la vía electoral (Godoy, 1999 y 2003; Garretón, 2015; Fuentes, 2012). Por otra parte, hay que tomar en cuenta que estos impugnamientos se comenzaron a elaborar poco después del plebiscito que ratificó la Constitución, sin que aún se hubiesen realizado las reformas constitucionales que se vinieron a implementar un

año después del referéndum de 1988. Estas reformas modificaron el texto original y, como se mencionó, “nivelaron” un poco las reglas del juego institucional, haciendo un poco más equitativa la distribución de poder (Godoy, 1999).

Pero en verdad, fueron las reformas de 2005 las más importantes que se le han hecho a la Constitución (Fuentes, 2012; García García, 2014), sobre todo porque estas lograron subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil, pero además, porque propiciaron una mejor distribución de poder entre el legislativo y el ejecutivo, este último, como manifestaba el grupo del 24, con un poder casi “cesarista”, muy desbalanceado, que se vio mejorado con las reformas que dieron mayores atribuciones al Congreso Nacional.

Pero la implementación de estas reformas, extraordinariamente importantes para mejorar la “calidad de la democracia” (Ruiz, 2011; Alcántara, 2014), no dejó conforme a un sector de la clase política, especialmente al mundo vinculado a la Concertación. De hecho, poco después de haber aprobado las reformas se comenzaba a colocar en la agenda pública la necesidad de volver a introducir cambios más profundos, lo que tendrá como consecuencia la apertura del debate sobre la Nueva Constitución, algo que se encontraba discursivamente clausurado desde el planteamiento de una “asamblea constituyente” por parte del grupo de los 24, y que había sido desestimada por el gobierno militar (Grupo de los 24, 1981).

Es así que en las elecciones presidenciales de 2009, el tema constitucional comienza a emerger con más fuerza en el “orden del discurso”, sobre todo en políticos del centroizquierda. Es el caso de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Marco Enríquez-Ominami, candidatos presidenciales que en 2009 ya introducen en sus programas de gobierno la necesidad de avanzar hacia cambios constitucionales. De hecho, como señala Claudio Fuentes (2010), muy probablemente de haber salido electo Eduardo Frei, “*se hubiese convocado a una comisión presidencial para establecer las bases de lo que sería una nueva Constitución en Chile*” (pág. 45).

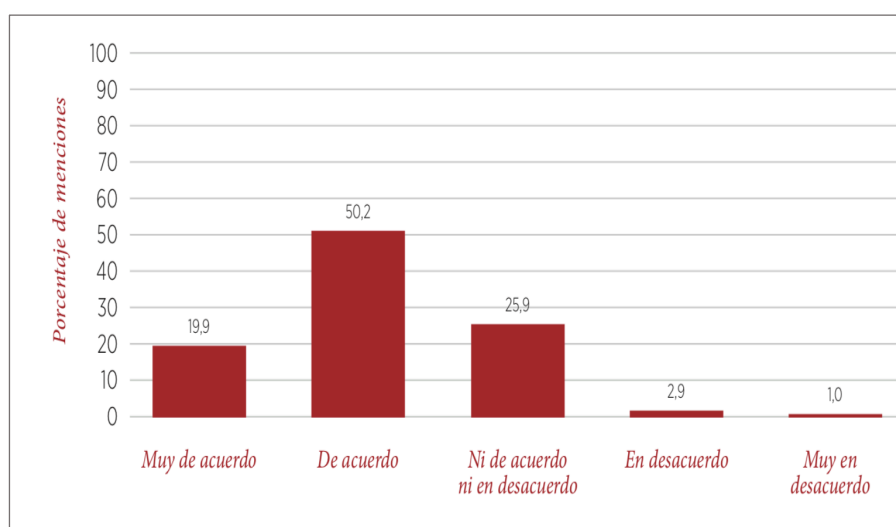
Sin embargo, la elección del presidente Piñera en 2009 frena estos anhelos de cambio constitucional... al menos momentáneamente. En efecto, para el centroderecha y para el mandatario recién electo, el tema constitucional no es una prioridad, colocando como eje de su programa de gobierno materias relacionadas con el empleo, el crecimiento económico y la lucha contra la delincuencia<sup>91</sup>.

Pero a partir de 2011, el escenario político cambia, porque el desencadenamiento de las movilizaciones (especialmente la estudiantil) terminan modificando la agenda del gobierno con un giro hacia el tema de la educación. Este asunto va a estar marcado por el “realismo político” que permite el marco institucional efectivo (por ejemplo, la solución que proponía el presidente Piñera a través del Gran Acuerdo Nacional en Educación), pero también, por ideas de cambio en las “reglas institucionales” (reforma tributaria, reforma educacional, nacionalización del cobre, sistema electoral, etc.), que, en definitiva, darán al debate constitucional una centralidad. Esta relevancia, además, se refleja en el apoyo mayoritario que hace la ciudadanía en este contexto, tal cual muestra el gráfico de LAPOP (2012).

---

<sup>91</sup> Programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, visitado el día 1 de mayo de 2018, disponible en: [http://www.labconstitucional.cl/wp-content/uploads/2016/05/programa\\_gobierno\\_2010-Piñera.pdf](http://www.labconstitucional.cl/wp-content/uploads/2016/05/programa_gobierno_2010-Piñera.pdf)

Gráfico 21. ¿Cuán de acuerdo está usted con que se busque realizar una reforma constitucional?



Fuente: PNUD, 2015b con datos de LAPOP (2012).

Ciertamente, ya se ha mencionado que las demandas ciudadanas muestran algunos límites de la institucionalidad, al exigir lógicas más públicas en el modelo de desarrollo, menos influidas por el mercado, lo que colisiona con los principios de la Constitución, que tiene una mirada más liberal y menos proclive a la extensión de derechos sociales (Cordero, 2015; García García, 2014). Los movimientos sociales también demandan más participación ciudadana, sobre todo, porque algunos de sus líderes habían aprendido de la experiencia de 2006, que terminó con la institucionalización de sus petitorios (Garretón, 2015), frenando con ello los impulsos más radicales de cambio social. Este aprendizaje en la dirección de los movimientos agudiza el divorcio entre la ciudadanía y la clase gobernante, ya que los canales institucionales se mostraban débiles ante el ímpetu transformador de las movilizaciones, desatando por su propia naturaleza desafiante, la antesala de lo que Bruce Ackermann (2015) llamó como un “momento constitucional” (Atria y otros, 2013; Fuentes & Joignant, 2015; Heiss & Szmulewicz, 2018).

A partir de la “coyuntura crítica” (Collier & Collier, 2002) de las movilizaciones, se comienza a producir un debate político e ideológico interesante respecto del cambio en las reglas institucionales. Las posiciones predominantes son básicamente dos: los partidarios de hacer cambios profundos a la Constitución o quienes quieren una “nueva” y aquellos que abogan por mantener la actual Constitución, aunque de alguna manera abriéndose a la posibilidad de introducir algunas reformas particulares, bajo los mecanismos que la propia Constitución establece.

En el primer caso, se trata de influyentes políticos e intelectuales identificados mayormente con el centroizquierda (progresismo), y que a partir de ese posicionamiento político elaboran un conjunto de críticas sobre los efectos *negativos* que estaría generando en la ciudadanía la Carta Fundamental, siendo ésta decisiva en la “crisis institucional” que hoy día tendría lugar en el país.

En todo caso, la mayoría de quienes abogan por un cambio constitucional, reconocen la importancia de las reformas de 2005, sobre todo por la eliminación de las Fuerzas Armadas del proceso político. No obstante, desde esta posición se señala que a

pesar de estos avances, aún permanecen dispositivos “neutralizadores de las mayorías”. Entre estos se encuentran los *quóruns supramayoritarios de reforma constitucional* de dos tercios o tres quintos (dependiendo del capítulo de la Constitución) y también las *Leyes Orgánicas Constitucionales* (LOCE) (leyes vitales para el régimen militar), que requieren cuatro séptimos para su modificación o derogación. Por otra parte, también se rechaza el control preventivo “obligatorio” que hace el *Tribunal Constitucional* en el caso de las LOCE, lo que no ocurre respecto de otro tipo de leyes (Atria, 2013). Todo esto hasta hace muy poco se veía fortificado por el *sistema binominal*, que también es señalado por sus detractores como un “amarre”, que reproducía esta distorsión del “principio mayoritario”, al facilitar la sobrerrepresentación de la minoría de derecha:

“Se eliminó el binominal que consagraba este empate no sólo en la Constitución sino también en el Congreso, ya que la sobrerrepresentación de la derecha hacía que no pudiera haber mayoría. Lo que además se hacía más difícil con los quóruns de 4/7 supramayoritarios que exigían obtener un número superior a la mayoría. Esto altera el principio democrático de mayoría, por tanto de igualdad política, ya que la mayoría electoral tiene menos peso que las minorías sobrerrepresentadas. En consecuencia, se otorga un poder de veto excesivo a la minoría parlamentaria que tiende a perpetuar el statu quo” (Heiss & Szmulewicz, 2018, 76–77).

En definitiva, desde esta mirada constitucional, se trataría al decir de Fernando Atria (2013), de un conjunto de “cerrojos” que distorsionarían el proceso democrático al imponer el proyecto político de “democracia protegida” de Pinochet “*con reglas destinadas a preservarlo*” (García & Verdugo, 2015, pág. 131).

Por otra parte, otra crítica frecuente que se hace a la Constitución es su “ilegitimidad de origen”. Efectivamente, la Constitución fue elaborada por una Comisión Constituyente designada por el gobierno militar, que no contó con la participación de representantes elegidos popularmente. En consecuencia, en la Carta no fueron expresadas las distintas visiones que existían en ese momento en la sociedad chilena, sino sólo aquellas pertenecientes a las del “bando vencedor” (Cordero, 2015). Para sus detractores, esto ha sido muy perjudicial a la hora de concitar aquello que Jürgen Habermas llama “patriotismo constitucional”, es decir, el sentimiento de legitimidad e identificación que puede producir la Carta Fundamental en la sociedad (Fuentes & Joignant, 2015; Heiss, 2018; García & Verdugo, 2015; García García, 2014).

Se trata, en verdad, de una de las críticas más profundas y realistas que se le puede hacer a la actual Constitución, lo que necesariamente se relaciona con el tema de la *legitimidad democrática* (Linz, 1978 y 2016; Inglehart, 1988; Lipset, 1970), que es justamente de lo que adolece en la ciudadanía el actual texto constitucional. Y así lo demuestran algunos trabajos que han indagado sobre este punto en particular.

Al respecto, un estudio sobre las posturas de la “élite intelectual” frente al cambio constitucional (Fuentes, 2010), reveló que un 59% de los intelectuales, docentes y expertos estaba de acuerdo con la necesidad de tener una Nueva Constitución, mientras un 41% señaló lo contrario. Y de hecho, aunque el 50% de la élite se posicionaba más hacia la izquierda, un 85% de los encuestados en forma transversal manifestó *estar de*

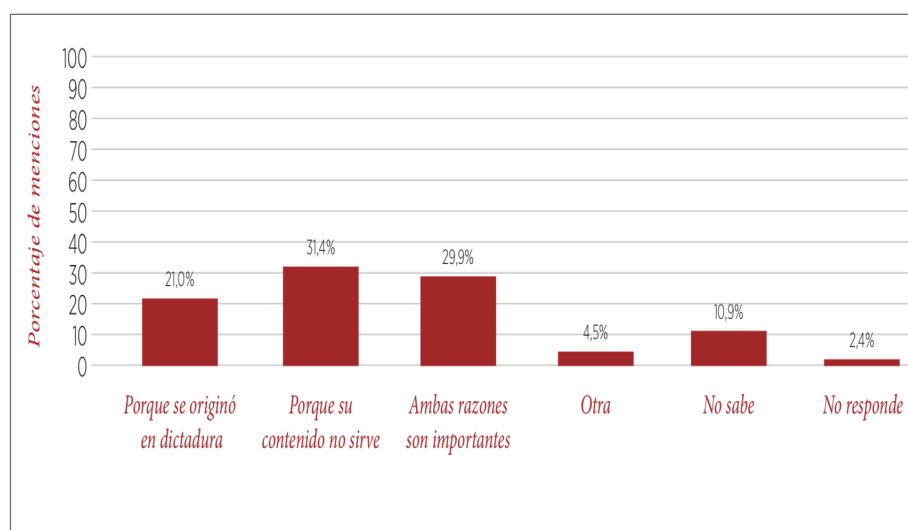


acuerdo con la idea de que la ciudadanía pueda ratificar una Constitución (Fuentes, 2010, pág. 74), lo que resalta la preeminencia y necesidad de darle al texto fundamental una legitimidad social que según sus críticos hoy día carece (Garretón, 2015; Atria, 2013).

Estos datos contrastan, por ejemplo, con la satisfacción que tienen otros grupos sociales con la Constitución. Por ejemplo, si se considera el caso español, puede verse que un 72,4% de los pequeños empresarios declaran estar satisfechos con la Carta Fundamental. Y de hecho, es casi un 70% el que evalúa de buena manera el desempeño del rol de la Constitución en democracia, manifestando sobre un 60% de confianza en que el texto constitucional puede ayudar a resolver los problemas que tienen los españoles (CIS, 2003, pág. 6–8)<sup>92</sup>.

Pero en el caso chileno esto parece ser distinto. A dos años de las movilizaciones de 2011, la ciudadanía sitúa el *origen ilegítimo* de la Constitución como la segunda razón de más peso para cambiar la Carta Fundamental (21%), siendo el argumento más relevante para la población *su contenido* (31,4%). No obstante, como se puede distinguir en el gráfico que se expone a continuación, casi un 30% considera que ambas razones son importantes, lo que, en el fondo, revela el escaso “reconocimiento” que le dan los chilenos a la actual Constitución. Además, esta desaprobación ha ido aumentando en el tiempo, ya que la medición del PNUD de 2016 muestra que en esta fecha un 56% declara muy importante cambiar la Constitución (PNUD, 2016).

Gráfico 20. Principal razón para cambiar la Constitución en 2011



Fuente: PNUD (2015b).

Otra crítica resaltada se relaciona con modelo de desarrollo que promueve la actual Carta Fundamental. Según esta mirada, el “principio de la subsidiariedad” que tiene la Constitución restringe fuertemente el rol del Estado en la economía, sobre todo en materia

<sup>92</sup> Hoy día parece estar un tanto en duda la “legitimidad” de las instituciones en España, ya que también hay quienes señalan la presencia de una “crisis institucional”, lo que ha obligado a los analistas a volver la vista sobre la naturaleza del proceso político y de las instituciones. Revisar con más profundidad Morán & Benedicto (2015).

de intervención y regulación. Situación que además se ve asegurada, por ejemplo, a través de algunos “cerrojos”, como las *leyes de quórum calificado*, que requieren mayoría absoluta de senadores y diputados, entre las que se encuentran, por ejemplo, la autorización del Estado para desarrollar actividades empresariales. En opinión de los críticos de la Constitución, esta limitación al rol del Estado sitúa al mercado como principal asignador de los recursos, lo que tiene un impacto negativo sobre el “régimen de lo público” (Atria y otros, 2013). Así lo formula un actual defensor de la Constitución, Van de Wyngard (2013): *“Bajo la Constitución de 1980 se define el rol del Estado como subsidiario y se prioriza como eje del desarrollo el ejercicio de la libertad y el consiguiente emprendimiento de las personas. El Estado deja de asumir un rol paternalista y entrega la responsabilidad de proveerse la satisfacción de las necesidades a las propias personas y a su capacidad de esfuerzo, trabajo y superación (...) Ahora las personas han ido progresivamente entendiendo y asumiendo que la satisfacción de las necesidades de salud, educación, trabajo, seguridad social, desarrollo económico etc., son asuntos que dependen prioritariamente de ellas mismas y que ya no estará siempre el Estado para proveérselas. Es indudable que ese camino ha sido duro para algunos, pero en definitiva ha generado una profunda transformación sociocultural, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que entienden que deben ser capaces por sí mismos de configurar sus propias existencias, prescindiendo en buena medida del Estado”* (pág. 281).

En definitiva, algunas de las razones mencionadas habrían contribuido a una deslegitimación del sistema político, que ha acentuado la crisis de confianza en la institucionalidad y en sus actores (Fuentes & Joignant, 2015, pág. 21). Desde la perspectiva del centroizquierda, esto implicaría elaborar un nuevo texto constitucional legitimado bajo principios “smendianos”, vale decir, atendiendo a un orden constitucional más flexible y democrático, en el que se plasmen los valores y vivencias compartidas por la “comunidad política” (Smend, 1985).

Pero, por otra parte, como bien señalan García & Verdugo (2015), no son muchos quienes defienden la Constitución de 1980 bajo una especie de “conservadurismo maximalista” (Rojas, 2013; Van de Wyngard, 2013; Cordero, 2015), y quienes lo hacen, parten de una premisa que *está muy ligada con uno de los diagnósticos* actuales de la sociedad chilena. En esta “percepción” de lo que ocurre en el país, se reconoce una sociedad desarrollada, con crecimiento económico, con estabilidad democrática y con instituciones funcionando, y que a pesar de los problemas que puedan haber, esto no ameritaría un cambio constitucional profundo. Se trata de un nexo indisoluble entre la Constitución y el actual desarrollo del país. En palabras de dos partidarios de la Constitución vigente:

“No ha quedado claro de parte de quienes han propuesto dicha alternativa (Nueva Constitución) cuáles serían los fundamentos más profundos de la misma y que entendemos tendrían que ver con graves problemas que presentaría la actual Carta Constitucional, en su vigencia y aplicación, y que hicieran imprescindible su sustitución completa o, en su defecto, con la presencia de graves trastornos político—institucionales o económico—sociales, que

ameritaran la generación de un nuevo marco constitucional que contribuyera a salir de tal crisis” (Van de Wyngard, 2013, pág. 278).

“Nadie de buena fe puede negar nuestras carencias y problemas, pero otra cosa es decirle a los chilenos que la solución a todas nuestras tareas pendientes se encuentra en una Nueva Constitución. Usar ese argumento para convencerlos de que la felicidad y la justicia llegarán de la mano de esa idealizada Carta Fundamental, con el objetivo real, aunque convenientemente maquillado, de plasmar en ella su particular visión ideológica, hará que abandonemos la senda virtuosa de estabilidad y crecimiento de que hemos gozado, sembremos la semilla de futuras frustraciones, deterioremos nuestras instituciones y fracturemos la cohesión social que tanto nos ha costado reconstruir” (Cordero, 2015, pág. 95).

La defensa de los partidarios de la Constitución de 1980, se realiza dejando muy en claro sus objetivos ideológicos, siendo el más importante evitar el modelo político y socioeconómico que se desarrolló a partir de las reglas institucionales que delineó la Constitución de 1925 (Guzmán, 1991; Cristi & Ruiz-Tagle, 2014). Estas reglas, desde la mirada conservadora, permitieron un tipo de Estado que cada vez se hacía más grande e ineficiente en la distribución de los recursos, que intervenía en forma desmesurada sobre la economía (incluso controlando los precios) y que mantenía una situación de pobreza estructural que comenzó recién a ser corregida a partir de la modernización autoritaria y luego por los gobiernos posautoritarios<sup>93</sup>. Por cierto, estas modernizaciones (la autoritaria y la democrática) tienen su respaldo en las “bases constitucionales” que proporcionó el texto de 1980: *“El punto es que todos sabemos que en estos años ha habido gobiernos de distintas tendencias políticas, algunas de las cuales, en principio, no están muy de acuerdo con las bases económicas sentadas en la Constitución, pero precisamente los quórums de reforma altos que ella contempla en este caso han operado como eficaces mecanismos de preservación de las bases económicas y los gobiernos, conformes o no, han debido someterse a las mismas, asegurando así la tan celebrada continuidad y seriedad de Chile en la materia”* (Van de Wyngard, 2013, pág.282).

Pero, en verdad, esta defensa de la modernización que consagra la Constitución tiene un origen mucho más profundo y filosófico que una simple apuesta economicista por las bondades del “modelo”. Se trata, más bien, de una *concepción ideológica* de la sociedad y del derecho en la que se desecha la mirada que apela al Estado como una *“llave maestra para ajustar la mayoría (y a veces todas) las dimensiones de la sociedad”* (Salazar, 2015, pág. 97). Contrariamente a este principio, la Constitución de 1980, con todos sus dispositivos contramayoritarios, lo que realmente protegería, son los *“derechos fundamentales”* del hombre, los que emanan intrínsecamente de su *“naturaleza humana”*, como es la *“libertad”* (Van de Wyngard, 2013) y también la *“propiedad privada”* (Cordero, 2015).

---

<sup>93</sup> Este es un argumento recurrente en quienes defienden el legado del gobierno militar, pero el lector/a recordará que antes se mencionó que la pobreza comenzó a ser erradicada con más fuerza a partir de la década del sesenta, llegando en 1968 a un 15% (Piñera, 1978, pág. 8).

Así formula esta problemática Gonzalo Cordero (2015), quien se pregunta si los “derechos fundamentales” son anteriores al pacto social o si éstos son creados por la “sociedad política”. Para este autor, la izquierda radical (no la socialdemócrata) siempre ha estado identificada con el pensamiento de Jean Jacques Rousseau, quien concibe el “pacto social” como fundante de todo orden político y jurídico, incluido los derechos esenciales: *“No es la persona la que, en conjunto con el resto, confiere poder y atribuciones a la sociedad política, renunciando en alguna proporción a sus derechos fundamentales, en aras de establecer una forma de relación de beneficio recíproco. Es la sociedad política la que le confiere derechos a la persona en la medida que estos son útiles para el conjunto. Esos derechos sirven y ceden en beneficio del colectivo, no del individuo”* (Cordero, 2015, pág. 89). Desde esta postura conservadora, sería este “colectivismo” mencionado el que amenazaría los derechos esenciales del hombre, razón por la cual la Constitución le da tanta preeminencia al “principio de subsidiariedad”, que subordina al Estado al servicio del individuo, la familia y los “cuerpos intermedios”, resguardando este principio en su primer artículo.

Como podrá inferir el lector/a la discusión es “ontológica”, y va a dar justamente a la filosofía política que inspiró al mismo Jaime Guzmán a proteger la Constitución de las posibles “degeneraciones” del liberalismo (Guzmán, 1991; Cristi, 2011).

Por otra parte, como ya se ha dicho, la crítica tal vez menos ideológica y más objetiva es la de la *ilegitimidad de origen de la Constitución* (Aylwin, 1998), la que estaría afectando sobre todo al “patriotismo constitucional” o en términos políticos lo que se ha denominado como “legitimidad democrática” (Linz, 1978 y 2016). Sobre esta crítica, Cordero (2015) señala que *todas* las Constituciones tienen por defecto un “pecado original” o “mancha”, ya que siempre la promulgación de una Constitución supone el quiebre o destrucción de una tradición jurídica anterior, por lo que todas las constituciones que ha tenido el país tienen en mayor o menor medida ese problema.

En efecto, aunque el autor evita mencionarlo directamente, se infiere que hace referencia al concepto de “poder constituyente”, entendido como una *“voluntad política creadora del orden, que requiere naturaleza originaria, eficacia y carácter creador”* (Sánchez Agesta, 1966, pág. 339), y que tiene distintas expresiones democráticas: la concepción seyesiana de “nación”, que delega la soberanía en el cuerpo político representativo (Schmitt, 1996, pág. 93) o aquella de inspiración roussoniana, que reniega de la representación política para trasladar la “soberanía popular” a las asambleas: *“En el instante en que un pueblo se da un representante, ya no es libre, ya no existe (...) La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y ésta no puede ser representada: es ella misma o es otra; no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus representantes; no son sino sus comisarios: no pueden acordar nada definitivamente”* (Rousseau, 2007, pág. 62).

Se trata de dos tradiciones democráticas de difícil reconciliación (Gargarella, 1995), pero lo importante y lo que hay que retener, es que ninguna de las dos fue desarrollada durante el “proceso constituyente” de la Constitución de 1980, por lo que con seguridad Cordero (2015) se está refiriendo al “poder constituyente” como *“organización firme”* (Schmitt, 1996), que bajo determinadas circunstancias políticas

como un golpe de Estado, un cuartelazo o una dictadura, puede arrogarse la facultad constituyente, tal como ocurrió con la “Comisión Ortúzar” en 1974 (Guzmán, 1991).

Como podrá comprender el lector/a, hablamos de una discusión que por muy abstracta que parezca, no es para nada estéril, ya que está relacionada con los fundamentos ideológicos que permiten justificar o desacreditar las reglas institucionales existentes.

A raíz de lo anterior se puede decir que la discusión sobre el cambio constitucional tiene un carácter jurídico, político pero además ideológico. Y así se señala desde ambos sectores, puesto que quienes son partidarios del cambio constitucional manifiestan que la Constitución de 1980 está cargada ideológicamente hacia un “individualismo radical” (Cristi, 2011; Ruiz-Tagle, 2016). Así, un texto constitucional nuevo, que se elabore desde “el pueblo”, debería ser mucho más neutro y legítimo, algo que no es aceptado por quienes abogan por la permanencia de la actual Constitución, quienes ven en la “asamblea constituyente” un mecanismo que pondría en suspensión los “derechos fundamentales” (Rojas, 2013; Cordero, 2015).

En virtud de esa suspensión, se puede deducir que las posturas encontradas en torno a un cambio en las reglas institucionales también manifiestan otra deriva: el *mecanismo de cambio constitucional*. Esto es así, básicamente, porque existe un consenso en que el mecanismo de cambio de la Constitución está estrechamente ligado con el propio contenido de la Carta Fundamental (Atria, 2013; Fuentes & Joignant, 2015; Salazar, 2015; García & Verdugo, 2015; Rojas, 2013; Cordero, 2015).

En este contexto del debate sobre las reglas institucionales, García & Verdugo (2015) señalan que prácticamente hay dos grupos: aquellos que anhelan una Nueva Constitución elaborada a través de mecanismos altamente *participativos*, como podría ser una “asamblea constituyente” o con mecanismos mixtos, y por otra parte, aquellos que optan únicamente por el camino de la *representación*, alegando que en la eventualidad de de realizar cambios, estos tendrían que ceñirse al marco institucional que define la Constitución, superando los *quórum*s de reforma constitucional.

Dentro de este último grupo están los que quieren reformas específicas, y también aquellos que son más flexibles y partidarios de la “evolución constitucional” o la “deconstrucción constitucional”. En el primer caso, se trata de una corriente planteada por García García (2014), que busca alejarse de los extremos (asamblea constituyente y “maximalismo conservador”), para, en cambio, proponer *modificaciones graduales* en la actual Constitución (las constituciones cambian), tomando como referencia las reformas de 1989 y 2005: “Se trata esta de una reflexión que es particularmente importante y de profundo sentido político y democrático, dado que reformas incrementales, que van siendo acumulativas en el tiempo, pueden reflejar un orden constitucional sustancialmente diferente al original, pudiendo hacer incluso irreconocible el rostro inicial de una Constitución, lo que sucede con la Constitución actual en relación a la Constitución original de 1980 o en su versión de 1989 de ingreso a la democracia” (García García, 2014, pág. 287). En el segundo caso referido a la “deconstrucción”, se trataría de una “eliminación de contenidos de la Constitución vigente con el objeto de abrir los espacios para la política ordinaria” (García & Verdugo, 2015, pág. 132).

Los argumentos para decantarse por una opción u otra, no son sólo jurídicos e ideológicos, sino también se relacionan con el *diagnóstico* del estado actual de la cultura

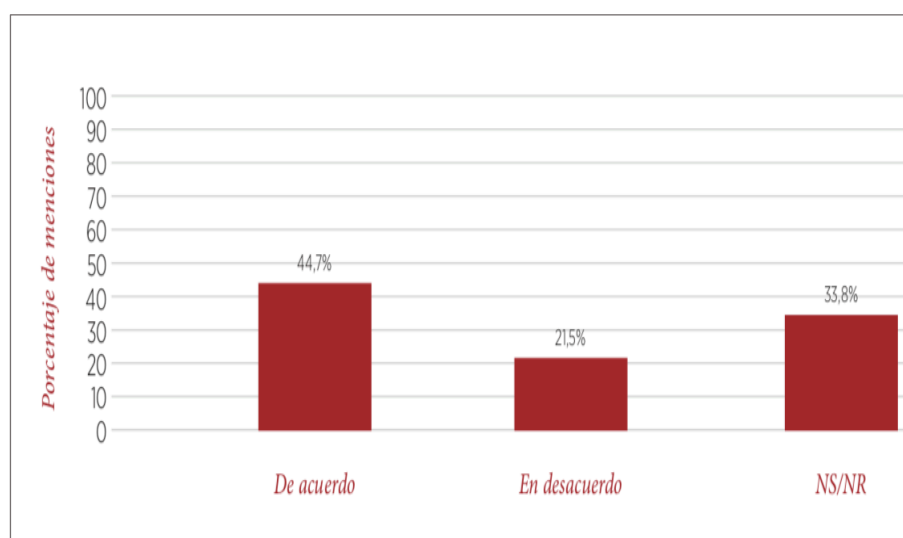
política de los chilenos, ya que quienes abogan por mecanismos de “democracia directa”, lo hacen señalando que las instituciones representativas carecen de confianza ciudadana, lo que podría afectar al nuevo texto en el sentido de que podría volver a carecer de legitimidad. Pero, por otra parte, quienes son partidarios de que el *Congreso* realice los cambios, señalan que una asamblea constituyente puede tener un efecto nocivo sobre la democracia, y esto no sólo porque rompe el principio de “supremacía constitucional” (Kelsen, 1991) a través del “poder constituyente originario”, sino también porque su implementación fortalecería aún más la desconfianza hacia los partidos y el Congreso, que son dos de las instituciones más relevantes en una democracia liberal (Dahl, 2017) y constitucional (Kelsen, 1991).

Antes bien, este complejo debate entre especialistas, parece mucho más zanjado en la ciudadanía, ya que según un estudio del PNUD (2015b), todos los trabajos sobre opinión pública y mecanismo de cambio constitucional previos a 2015, coinciden a grandes rasgos en que la ciudadanía *anhela un cambio* en las reglas institucionales, en el que deberían participar los ciudadanos. En verdad, la evidencia muestra que es una minoría la que desea que todo se mantenga tal cual está.

A mayor abundamiento, casi un 90% considera que es la ciudadanía la que debe elegir el mecanismo de cambio constitucional; distribución que incluso se da de manera similar en la derecha, ya que quienes se posicionan en este sector, adhieren en un 82,5% a esta consideración, mientras un 17,5% cree que debería ser el Congreso Nacional la institución que seleccione cómo se debería hacer el cambio constitucional.

Respecto del mecanismo de cambio constitucional, como se puede apreciar en el gráfico a continuación, un 44,7% está de acuerdo con *asamblea constituyente*, contra un 21,5% que se declara en desacuerdo. Sorprende que un 33,8% de la población no sabe o no responde ante esta definición (PNUD, 2015b).

Gráfico 22. Acuerdo o desacuerdo con propuesta de asamblea constituyente



Fuente: PNUD (2015b) sobre la base de datos del CEP (2013).

Por cierto, la distribución del apoyo ciudadano a la asamblea constituyente es interesante de destacar, ya que son los más educados quienes más adhieren a este tipo de mecanismo (casi un 60%) y sólo un 22,3% se manifiesta en desacuerdo. Respecto de las posiciones políticas, son las personas de izquierda las que más se decantan por una alta participación ciudadana, con un 61,8%, mientras el porcentaje en la derecha aunque es alto, desciende a casi un 41% (PNUD, 2015b).

Se podría decir que los chilenos, en general, son más proclives a la participación de la ciudadanía en un eventual cambio constitucional, pero esto también ocurre en algunos grupos específicos, como es el caso de la “élite intelectual” a la que ya se hacía mención, que en un 52% manifiesta su preferencia por una asamblea constituyente (Fuentes, 2010, pág.76).

En definitiva, se trata de una discusión un tanto “acalorada” a nivel de las élites, que parece no encontrar una salida clara que deje a todos satisfechos. Muy distinto de lo que ocurre con el mundo por fuera de quienes toman las decisiones más importantes del país.

### *6.3. La élite empresarial y el proceso constituyente para la Nueva Constitución*

Con el objetivo de cumplir una promesa de campaña presidencial, la mandataria Michelle Bachelet impulsa el “Proceso Constituyente” para la Nueva Constitución.

Efectivamente, tomando en consideración las aristas del debate constitucional, también el pulso a la opinión pública y teniendo como antecedente que en Chile nunca se había elaborado una Constitución con alta intervención ciudadana (Valdivia, 2010; Salazar, 2015), entre 2016 y 2017 se desarrolla un proceso de participación que tiene como propósito hacer discutir a la ciudadanía sobre los valores, derechos, deberes e instituciones que debería tener la Nueva Constitución (Garretón, 2016). Se trata, por cierto, de una de las banderas de lucha del gobierno de la Nueva Mayoría (ex Concertación), ya que por primera vez se habla de Nueva Constitución y no de mecanismo de reforma constitucional, lo que genera una alta expectativa en la población, pese a que su carácter nunca fue *vinculante*.

“El Proceso Constituyente se define como el mecanismo de cambio constitucional que incorpora la discusión pública sobre los asuntos constitucionales, de manera institucionalizada, permitiendo el diálogo y la convergencia para la construcción de acuerdos de las personas sobre la Constitución. Es abierto a la ciudadanía, por cuanto los ciudadanos participan y pueden incidir en la discusión constitucional por medio de los diferentes espacios de participación contemplados para ello”<sup>94</sup>.

Hablamos de un proceso participativo complejo, ya que si bien es cierto existía un anhelo de la ciudadanía hacia el cambio constitucional, lo cierto es que algunos casos de corrupción salpicaron a algunos ministros de gobierno y a la propia presidenta, lo que

---

<sup>94</sup> Información disponible en [www.unaconstitucionparachile.cl](http://www.unaconstitucionparachile.cl), visitada el día 23 de octubre de 2018.

comenzó a mermar el apoyo cívico a su mandato, trasladando este efecto de caída de la popularidad hacia las reformas en curso, entre estas el mismo “proceso constituyente”. En consecuencia, la alta expectativa de implicación ciudadana en el proceso no se cumplió, ya que la participación en todas las etapas de este evento fue de 218.689 personas, muy por debajo de lo esperado (CEP, 2017a).

En relación a las fases que tuvo el Proceso Constituyente, estas fueron varias y de distinto tipo. La primera fue una etapa de *preparación*, en la que el Estado proporcionó información a la población sobre contenidos cívicos y constitucionales. También se comunicó a la ciudadanía sobre los procedimientos de participación del proceso en curso. Luego, en la segunda etapa, se le *consultó individualmente* a los ciudadanos cuáles deberían ser los contenidos que tendría que tener la Nueva Constitución.

La tercera fase es más participativa, y se realiza a través de los *Encuentros Locales Autoconvocados* (ELA), que consistieron en reuniones compuestas de entre 10 y 30 personas para dar cuenta de las prioridades que deberían ser incorporadas en la Nueva Constitución. Se trata de discusiones grupales que terminan en un acta, que será incorporada en la siguiente fase.

Posteriormente se realizó la etapa de los *Cabildos Provinciales*, cuyo propósito fue la discusión sobre valores, principios, derechos, deberes, responsabilidades e instituciones que debieran estar presentes en la nueva Carta Fundamental, lo que también se plasmó en un acta con los acuerdos y desacuerdos entre ciudadanos, siempre tomando en consideración los resultados de la consulta individual y de los ELA.

La quinta etapa corresponde a los *Cabildos Regionales* que incluyen los acuerdos logrados en las instancias anteriores, pero además, los diálogos sobre acuerdos parciales y desacuerdos de carácter regional.

Por último, se llega a la finalización del proceso a través de *Las Bases ciudadanas de la Nueva Constitución*, que es el documento en el que se sistematizan todos los acuerdos logrados por la ciudadanía que participó a lo largo del proceso. Este informe fue entregado en octubre de 2016 a la Presidenta de la República para la elaboración del proyecto de Ley de Nueva Constitución.

Posteriormente a este evento que, ya se indicó, *no tenía un carácter vinculante*, se presentan cuatro posibles mecanismos para realizar cambios en la Constitución o bien elaborar una Nueva Carta Fundamental: un plebiscito para que sea la ciudadanía la que elija el mecanismo de cambio constitucional, una asamblea constituyente, una comisión bicameral y una Convención Constituyente, en la que participarían congresistas y ciudadanos para elaborar la Nueva Constitución (Fuentes & Joignant, 2015; García & Verdugo, 2015).

Contra todo pronóstico y a cinco días de terminar su mandato, la presidenta Bachelet envía un proyecto de ley que busca modificar el capítulo XV de la Constitución, agregando a éste el “artículo 130” que posibilita la creación de una nueva Carta Fundamental a través de la convocatoria de una “Convención Constitucional”. Su primer obstáculo es ser aprobada por 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, algo que se hacía bastante improbable con el Congreso existente en ese momento (elegido con el sistema electoral binominal). Muy probablemente, la apuesta de la presidenta era hacia el futuro Congreso, que debía ser elegido con el nuevo sistema proporcional, lo que le daría



mayor legitimidad y representación a la discusión sobre la Nueva Constitución, lo que finalmente no ocurrió.

Así, en el caso hipotético de haber superado el quórum de reforma, habría sido la “Convención Constitucional” la que podría haber determinado el mecanismo de cambio de la Constitución: el Congreso Nacional, un mecanismo híbrido entre congresistas y ciudadanos, o bien, una asamblea constituyente. Cabe añadir que dentro de las facultades de esta convención estaban los contenidos que deberían haberse incorporado en el nuevo texto, que estarían basados fundamentalmente en el documento de las *Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución*. Si ese proyecto hubiese llegado a aprobarse, habría sido la ciudadanía la que hubiese tenido la última palabra para decidir si finalmente se avanza hacia una Nueva Carta Fundamental o bien se reforma la Constitución de 1980.

Como es sabido, este “momento constitucional” no se completó tras la elección con amplia mayoría (54,5%) del presidente Sebastián Piñera el año 2018, quien en los primeros días de su mandato retira el proyecto de “convención constitucional” enviado anteriormente por el gobierno de la Nueva Mayoría, lo que clausura automáticamente toda la discusión constitucional, cerrando así el capítulo sobre la Nueva Constitución. El asunto de ahí en adelante ha perdido relevancia pública, a tal punto que la Encuesta CEP de mayo de 2019, muestra que la reforma constitucional está dentro de los temas menos importantes para la ciudadanía (CEP, 2019, pág. 6), aunque es posible que esta discusión se vuelva a activar, ya que el actual mandatario mencionó en la última cuenta pública la implementación de reformas constitucionales para disminuir los cupos parlamentarios.

Pues bien, como indica la literatura, la ciudadanía y también algunos grupos sociales, se decantan mayoritariamente por un cambio constitucional con participación ciudadana (PNUD, 2015b; Fuentes, 2010), anhelo que, efectivamente, no se reflejó en una alta aportación en el proceso convocado por la expresidenta (CEP, 2017a). Pero así como se puede rastrear qué ocurre con la opinión pública respecto de un cambio en las reglas institucionales, no se puede decir lo mismo respecto al gran empresariado, ya que no disponemos aún de evidencia empírica que revele con certeza cuál es la postura de la élite empresarial frente al Proceso Constituyente. No sólo se desconoce su postura frente a este proceso participativo, sino que además se ignoran cuáles podrían ser sus fundamentos. La presente investigación, sin embargo, aporta algunos indicios sobre el posicionamiento de los empresarios, obtenidos a través de un conjunto de entrevistas en profundidad en las que se ha indagado sobre esas opiniones.

El análisis de la información producido por la técnica mencionada, permite distinguir, nuevamente, una *postura homogénea*, en la que la mayoría de los entrevistados, sin distinción política y en ambas generaciones, tiene una *imagen negativa* sobre el Proceso Constituyente implementado por el gobierno anterior. Se trata, de un proceso concebido como poco confiable, considerado peyorativamente en varios relatos como un “tongo”<sup>95</sup> o fraude, que fue realizado por el gobierno sobre todo con fines electorales. Así, para algunos entrevistados, este proceso constituye un instrumento de

---

<sup>95</sup> “Tongo” es una palabra definida por la Real Academia Española como “trampa” que permite ganar un juego con reglas ajenas a éste. Véase <https://dle.rae.es/?id=a0mv9gt>, visitada el día 4 de agosto de 2018.

carácter “populista”, sobre todo por su elaboración al margen de la institucionalidad que confiere la propia Constitución.

Dentro de las razones o fundamentos que sostienen esta postura negativa, está la percepción de “sesgo ideológico” que tuvo el proceso. Esta apreciación fue realizada tanto por quienes participaron activamente en los cabildos del proceso constituyente, como por quienes no quisieron implicarse activamente, aduciendo que este evento se encontraba “dirigido” por los partidarios del gobierno de la Nueva Mayoría.

Otro de los fundamentos de esta visión negativa fue la “baja participación” ciudadana que tuvo el Proceso Constituyente a lo largo de todo su desarrollo, lo que, en opinión de los entrevistados, le resta legitimidad al evento, ya que no contaría con la suficiente representatividad de todos los sectores de la sociedad.

Por último, se mencionó en algunos relatos que la gente que había participado carecía de preparación técnica y política para discutir sobre la Constitución, y que a pesar de lo valiosa que pudo haber sido la instancia de participación, esta había sido “muy pobre” en términos de contenidos. Así lo expresaron varios entrevistados:

“Más o menos pobre, porque yo participé en el proceso. Lo encontré muy pobre en el sentido de la participación y en el sentido de saber a ciencia cierta qué es lo que uno quiere cambiar realmente. No hay seguridad en eso, creo que hay mucho trabajo que hacer ahí todavía. Hay que saber por qué se quiere cambiar un poco la Constitución, por qué razón... fue pobre en los contenidos porque no tenía mucha lógica y la participación fue bastante pobre” (E12, 74 años, SOFOFA, derecha).

“No te voy a decir que lo desprecio, pero no le doy ninguna importancia, ninguna capacidad realmente en ese sistema de asamblea, de gente sin ninguna preparación especial. Yo no soy capaz de redactar una Constitución, bueno, no se trataba de redactar, se trataba de aportar ideas, conceptos, objetivos. Yo creo esa tarea es de expertos, tarea de una capacidad de evaluar lo que ocurre en otros países, cómo se ha hecho, mucho estudio, para gente muy muy inteligente, muy preparada, es para doctores, tiene que ser diverso, *pero creo que no resultó muy diverso, parece que fue bastante mayoritaria la postura del gobierno de turno de la gente que participó... así que creo que sea demasiado representativo tampoco*” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

“Pésimo, pésimo, pasaron a llevar toda la institucionalidad chilena y todo por un idealismo político donde las minorías nuevamente están tomando decisiones por todo el país. Para mí, la presidenta, el gran problema de ese gobierno, es lo ideológico que fue” (E5, 47 años, SNA, derecha).

“¡Un desastre, una burla! Me da pena por la gente que honestamente trató de participar y exponer sus ideas, ¡una burla! y un gastadero de plata sin sentido” (E16, 70 años, SNA, apolítico).

Las actitudes expuestas dan cuenta del rechazo que genera esta instancia en participantes de todo el entorno ideológico y de ambas patronales. De hecho, en muy pocos casos se

valoró positivamente la instancia de participación, y quienes lo hicieron, la destacaron como un ejercicio cívico interesante y necesario, al mismo tiempo que se matizó su carácter “vinculante” como mecanismo de cambio constitucional: “Yo participé, entonces, la participación me pareció extraordinaria. Yo no soy abogado, no soy experto en las leyes, pero el sólo hecho de sentarse 30 personas y opinar y discutir sobre un tema y respetarse unos a otros, lo encuentro extraordinario (...) a mí me gustó mucho la participación de la gente, pero no sé si es el camino adecuado, considero que consultar es muy positivo, y no que quede en manos de expertos” (E22, 74 años, SOFOFA, apolítico).

#### 6.4. ¿Reforma constitucional o Nueva Constitución?

Respecto de las posturas que tiene la élite empresarial sobre un eventual “cambio de la Constitución” o posibles “reformas constitucionales”, se puede señalar que en este grupo no se presentan divisiones, ya que se produce una extraordinaria alineación *homogénea* en torno al *rechazo* de la elaboración de una nueva Carta Fundamental.

Pero, contrariamente a como se podría pensar *a priori*, de la misma manera como ha venido ocurriendo con otros cambios institucionales, no todo es “inmovilismo” en el empresariado, ya que, en efecto, se puede identificar en los relatos recogidos, una postura “híbrida” entre lo que se ha denominado anteriormente como “conservadurismo maximalista” y un cierto “evolucionismo constitucional” (García García, 2014; García & Verdugo, 2015).

Esta postura “híbrida” consiste, fundamentalmente, en que gran parte de los entrevistados mantiene una postura *flexible* en torno a la introducción de reformas constitucionales específicas, y que, incluso en algunos casos, pueden llegar a ser profundas (tal vez parecidas a la postura progresista) como, por ejemplo, cuando se hace mención a la necesidad de descentralizar el país hacia un orden más regionalista. En ese sentido, se manifiesta disposición a que la Constitución *pueda ir cambiando su contenido*, desmarcándose de la naturaleza del texto original de 1980. Y para ello, los entrevistados —en la misma línea planteada por García García (2014)— también ponen como ejemplo de “mutación constitucional” (Correa, 2015) las reformas que eliminaron a los senadores designados, siendo estos cambios una buena ilustración sobre cómo puede evolucionar el texto conforme a los “nuevos tiempos”. Por cierto, siempre que se superen los *quóruns de reforma* que establece la propia Constitución.

Así manifiesta esta postura *flexible* un entrevistado de la SNA, haciendo referencia a un posible cambio de la Constitución.

“Yo creo que es un tema—país como el de La Haya<sup>96</sup>. Yo creo que requiere una conversación grande, profunda y creo que el presidente debiera jugar un rol grande y decir: “¿saben qué, quieren mejorar la Constitución? ¿qué cosas le vamos a hacer?”, bueno, vamos de a poco, las cosas hay que pensarlas, se hizo

---

<sup>96</sup> El entrevistado se refiere a la disputa territorial que tiene Chile con Bolivia respecto de la salida soberana al mar de este último país. Este caso ha sido dirimido por la Corte Internacional de la Haya.

muy apurado (el proceso constituyente). Son cambios grandes, hay Constituciones en el mundo que no se han cambiado nunca. Yo creo que la nuestra ha sufrido cambios con más subidas que bajadas. Mejoremos lo que haya que mejorar, sin duda alguna, y de hecho la Constitución ha tenido cambios, los senadores designados: ¿estamos todos de acuerdo en que los senadores designados salgan? bueno, se hizo, hay mecanismos para eso” (E20, 57 años, SNA, derecha).

Pero esta postura “flexible” hacia reformas en la Constitución, se torna *conservadora* mostrando cierta aversión a cambios que puedan modificar aspectos más profundos de la Carta Fundamental, como es el “principio de subsidiariedad”, que consagra un rol pasivo del Estado frente al individuo y sus “derechos fundamentales”. Se trata, por tanto, de una flexibilidad hacia el cambio pero con “limitaciones”, particularmente en lo referido al resguardo de los derechos fundamentales, sociales y económicos de las personas.

En el fragmento expuesto se muestra esta tensión entre “cambio” y “permanencia” en las reglas institucionales:

“Yo creo que un cambio constitucional se tiene que hacer en la medida en que los países vayan necesitando modernizarse y que la Constitución les permita ir haciendo esos cambios, *pero mientras se respete el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a crecer, a la defensa*, creo que la Constitución es adecuada” (E30, 62 años, SNA, derecha).

El lector/a recordará que esto es bastante coherente con la *postura inflexible* en torno a un giro o viraje en la orientación del modelo de desarrollo, lo que en el caso de la élite empresarial está muy conectado con la Constitución. Esto va en la línea de lo planteado por Van de Wyngard (2013), quien señala que la Carta Fundamental consagra un tipo de Estado que no interfiere en los derechos fundamentales, entre estos, las libertades individuales y la propiedad privada.

Como se explicó antes, en Chile, las posturas de “cambio” o “permanencia” en relación a las reglas institucionales están relacionadas con las *posiciones políticas*, ya que las personas más de izquierda son más proclives a cambios más profundos que las de derecha (PNUD, 2015b; Haye y otros, 2009). Y los anhelos por cambiar la Constitución, que según la evidencia empírica son mayoritarios (al menos hasta 2015), también son más marcados en aquellos que adhieren al “progresismo” en detrimento de aquellos que se posicionan más a la derecha del entorno ideológico.

Pero este rasgo global de la cultura política de los chilenos (Huneus, 2003; Baño, 1993; Bargsted & Somma, 2018; Manzi y otros, 2004), no se manifiesta tan nítidamente en el grupo examinado, ya que la postura de rechazo hacia la Nueva Constitución, *no* está relacionada necesariamente con la posición política de los participantes. Así, no sólo los entrevistados de derecha mantienen esta postura, sino también aquellos que se posicionan en el centro y el centroizquierda (que sólo fue un entrevistado). Sin embargo, donde sí aparecen diferencias marcadas es respecto de la organización empresarial. Esto no es al azar, y como se verá está relacionado con la “posición social” de origen y la “socialización

política” marcada por la memoria histórica y colectiva de quienes conforman a esta minoría selecta que conduce la economía del país.

#### 6.4.1. *Fundamentos de la postura sobre un cambio en las reglas institucionales*

Los fundamentos que sostienen la postura de rechazo sobre una Nueva Constitución son complejos y de diversa naturaleza (políticos, económicos e ideológicos), aunque como se planteó en la hipótesis de investigación, algunos de ellos están relacionados con “conceptos” y “escenarios” que retrotraen a la experiencia de la Unidad Popular. Esta referencia a la memoria, como se verá, se da de forma latente, ya que la mención a este período no suele hacerse en forma directa por parte de los entrevistados.

Uno de los fundamentos más señalados por varios participantes es el *origen autoritario de la Constitución*: “el pecado original” de la Carta Fundamental. No se trata, en ningún caso, de una defensa en el sentido plantado por García García (2014), cuando hace mención a una “*promoción del arreglo original, tal cual quedó plasmado bajo categorías propias de la guerra fría*” (pág. 287). Lo que más bien ocurre, es que para la élite empresarial esta discusión parece ser “improductiva” o tal vez innecesaria respecto de la “eficiencia” que produciría la actual Carta Fundamental en el desarrollo que ha tenido el país.

En virtud de lo anterior, los entrevistados aducen que, en verdad, el cambio constitucional es una cuestión política que tiene más que ver con aspiraciones del centroizquierda que con problemas “reales” que existen en el país. Y en ese sentido, el anhelo de cambio del progresismo sería considerado insuficiente por los protagonistas para avanzar hacia un reemplazo de la Carta Magna. Así lo expresa un entrevistado de la SNA:

“La verdad no lo sé, no sé si hay que hacer un cambio, yo siento que de hecho, por ahí lo leí en el diario hace poco, *que los cambios constitucionales que se estaban haciendo son más para borrar vicios que permanecen de cuando se hizo la Constitución* que de aportar un cambio real o una mejora sustancial a nuestra Carta Fundamental” (E24, 48 años, SNA, centroderecha).

“Yo creo que ahí hay bastante desconocimiento, hay una cuestión más visceral que real, porque pareciera ser que la objeción sobre la Constitución tiene que ver con el “origen” más que con el contenido, porque si uno le pregunta a gran parte de la gente qué es lo que te molesta de la actual Constitución, van a dar a lugares comunes, sin precisar lo que les molesta” (E11, 43 años, SOFOFA, centro).

Otro aspecto resaltado es la *conexión* entre el desarrollo que ha tenido el país y la Constitución. En efecto, como ya se ha mostrado en páginas anteriores, los entrevistados tienen una concepción “etapista” del desarrollo, y bajo esta mirada, sostienen que en la medida en que el país progrese y crezca, van a seguir mejorando los indicadores objetivos de calidad de vida, tal cual ha venido ocurriendo desde las dos modernizaciones que ha tenido el país, la autoritaria y la democrática. Ambos procesos están sustentados en las

“*bases constitucionales*” que permiten un rol mucho más activo del mercado por sobre el Estado, ya que éstas protegen a la propiedad privada. Esta figura es entendida en varios relatos como el “motor” o “driver” de la sociedad”. De esta manera, un cambio de la Constitución pondría en cuestión los avances notorios que ha tenido el país, con un resultado incierto, algo que parece desconcertar a los entrevistados.

“La Constitución ha funcionado bien hasta ahora, como nunca en la historia, por eso hemos tenido un período como nunca antes en la historia, de 30 años de progreso común” (E15, 66 años, SOFOFA, republicano)

“Chile está avanzando, Chile tiene un orden, tiene una forma de hacer las cosas. Por supuesto que es mejorable, pero no es que esté todo malo, esa es la diferencia que yo veo. Yo siento que hay cosas básicas que si tú las cambias significa un cambio de fondo, y entre eso está el derecho de propiedad como clave, es el eje, entonces, sin duda que hay cosas de la Constitución que son fundamentales y que si tú las cambias, cambias al país de frentón” (E19, 61 años, SOFOFA, centroizquierda).

Este tipo de argumentos que resaltan la relación entre Constitución y desarrollo, es lo que ha llevado a algunos analistas a señalar como la verdadera razón por la cual el empresariado rechaza un eventual cambio en las reglas institucionales. Ante el déficit de conocimiento empírico, así lo insinúa, por ejemplo, el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (2016), entidad que sugiere que uno de los posibles *temores* de este grupo social para cambiar la Constitución es que dicho proceso podría afectar en el crecimiento y las inversiones económicas del país. Ciertamente, el supuesto que subyace a este estudio, es que la élite empresarial rechazaría un cambio constitucional por un tema puramente *económico*. Y ante ese escenario, los empresarios manifiestan su desconfianza: “*Al bajo precio del cobre, la consecuente depreciación cambiaria y la desaceleración económica, se ha sumado una serie de reformas que generan incertidumbre y desconfianza*” (Andrónico Luksic) (Laboratorio Constitucional, 2016, pág. 2).

Bajo la perspectiva de análisis de esta investigación, la lectura anterior si bien puede tener un grado de verosimilitud respecto al posicionamiento público que hacen los grandes empresarios sobre el cambio constitucional, en verdad, se trata de una interpretación un tanto “reduccionista”, ya que la postura de rechazo al cambio de la Constitución no es puramente económica, como si todo el asunto se tratara de inversiones, propiedades y/o del patrimonio personal de “*los que mandan*”. Y para ello, “gatopardistamente”, “*todo se cambiaría para permanecer*” (Moulian, 1997, pág. 145).

De manera distinta, y sin desconocer la importancia de la dimensión económica (Downs, 2001; Barry, 1974), se intenta aportar otra perspectiva, mucho más influida por el culturalismo que se ha planteado desde los trabajos clásicos de cultura política (Almond & Verba, 1970; Inglehart, 1991; Pye & Verba, 1965; Morán, 1997).

Es así que bajo las coordenadas teóricas mencionadas, se puede decir que a la *aversión al cambio* que tiene la élite empresarial sobre un cambio profundo en las reglas institucionales, le subyacen varios fenómenos antes analizados a lo largo de este trabajo:

1) Una socialización política marcada por la transmisión de una “*configuración ideológica*” intensa en valores liberales, como son las “libertades individuales” y la “propiedad privada”, además de una “continuidad” en las afinidades políticas hacia la derecha del entorno ideológico (“Mendelian Law”) (Lane, 1959).

2) El “trauma sociopolítico” que vivió la élite empresarial bajo el gobierno de la Unidad Popular: vivencias “directas” de los mayores y vivencias “transmitidas” en el caso de los más jóvenes, relacionadas con el “desabastecimiento” y “caos social”, la fuerte “polarización” hacia los extremos políticos y las situaciones de “violencia política” que experimentaron personal y familiarmente gran parte de los entrevistados, y que fueron detonantes en el reclamo de “autoridad” y “orden” (Arriagada, 2004). Estas experiencias acentuaron los sentimientos de *inseguridad existencial* desarrollados durante este período (Inglehart & Welzel, 2006), y por ello, el clamor por el “principio de autoridad y orden” extraviado fue hallado en el golpe militar de 1973 (Linz, 1978).

3) Por otra parte, es cierto que la “resocialización democrática” (Mishler & Rose, 2007; Tormos, 2012; Almond, 1993) que ha tenido el país desde 1990, ha sido efectiva en ir “redemocratizando” la cultura política de entrevistados, ya que ha permitido ir moderando sus posiciones políticas antes intensificadas hacia la derecha (colindando con rasgos autoritarios en el caso de un segmento de la SNA).

Prueba de ello, han sido sus re-evaluaciones y re-interpretaciones del proceso político, además de sus *actuales* posturas favorables hacia la desmantelación de la “democracia protegida” (cambio del binominal, senadores designados, rol de las Fuerzas Armadas en el sistema político, etc.). Sin embargo, esta “resocialización” no ha sido suficiente para desactivar la confianza en la Constitución reinante, ya que ésta protege algo esencial para la élite empresarial: los “derechos fundamentales”, que son nada más y nada menos que la expresión de *principios liberales* aprendidos a temprana edad en el hogar. Esto último, sería clave para matizar la mirada “economicista” que suelen hacer las corrientes “racionalistas” (Downs, 2001) o el “marxismo” (Almond, 1980), con las que se suele interpretar el comportamiento político de los grandes empresarios chilenos.

Lo anterior salta a la vista cuando los entrevistados son consultados por un “*escenario ficticio*” sobre un cambio de la Constitución, en el que se pregunta por los riesgos que implicaría una transformación de esta magnitud. Y ante la posibilidad de esa situación, se muestra el carácter imponente de la *socialización política* que tuvieron los entrevistados en sus “años impresionables” (Almond & Verba, 1970), ya que la “configuración ideológica” y la expresión de la memoria colectiva e histórica, son *elementos definitorios para orientar sus posturas de rechazo*, poniendo en evidencia su aversión a cambios más profundos.

Respecto del caso de la SNA, el lector/a debe recordar que este grupo fue socializado en “valores liberales” a temprana edad, con particular énfasis en la adquisición de máximas como las “libertades individuales” y la “propiedad privada”. Se trata de principios que se promueven en los sectores de posición alta de la sociedad chilena, los que “hacen carne” o se “cristalizan” en la Constitución de 1980, puesto que ésta protege esos valores entendidos como “derechos fundamentales” (Van de Wyngard, 2013; Cordero, 2015; Rojas, 2013; García García, 2014; Guzmán, 1991). Entonces, ante un escenario hipotético de cambio constitucional, lo que precisamente se demanda por parte

de la élite empresarial, es una protección de estos principios “arraigados” en la cultura política de cada uno de los entrevistados. Así lo sintetiza un participante, consultado por la posibilidad de llegar a una Nueva Constitución:

“Esa es una de las condiciones mínimas que yo le exigiría a toda constitución, es resguardar el *derecho a la propiedad* y la *libertad de las personas*. Para mí no existe sociedad que no tenga esos elementos bases dentro, escrito dentro de sus constituciones. La constitución actualmente hoy día me da derecho y libertades y derecho de propiedad, *que para mí son derechos fundamentales*, que permite el desarrollo como persona dentro de la sociedad (...) a mí me gustaría que no cambien mis derechos básicos: derecho a la vida, derecho a la educación, *derecho a poder elegir yo*, que yo pueda elegir por mí, para mí y mi familia, que nadie me imponga nada, el derecho a la seguridad, el derecho a la *propiedad privada* y eso prácticamente” (E24, 48 años, SNA, centroderecha).

Lo anterior muestra que la confianza e identificación con el texto constitucional no es puramente económica, sino fundamentalmente “cultural” y “política”, ya que éste representa en su contenido *valores imprescindibles* que ha desarrollado la élite empresarial en sus “años impresionables”.

En segunda instancia, un escenario ficticio de cambio constitucional, produce en los entrevistados percepciones, aprensiones y sentimientos negativos que retrotraen a los “tiempos de la polarización” y la Unidad Popular, haciendo aflorar el “*trauma sociopolítico*” experimentado durante este período señalado. Y como se mencionó en páginas anteriores, esta intensidad es muchísimo más fuerte en el grupo de la SNA, sobre todo en los mayores que vivieron personalmente situaciones de “*violencia política*”; experiencias que han sido significativas en su manera de concebir el mundo, y particularmente de comprender la actividad política. En el caso de los más jóvenes, estas vivencias negativas fueron transmitidas, por lo que la intensidad es un tanto menor, aunque igual de profunda y significativa.

Situados en el mismo contexto hipotético, se puede distinguir cómo comienzan a emerger discursivamente referencias latentes y, a veces, directas a la situaciones de “*violencia política*” que tuvieron lugar durante la Unidad Popular, como si un cambio de Constitución implicara, insoslayablemente, volver a *revivir* esa incertidumbre y momento “traumático” del pasado. Así, aparece con determinación toda la crudeza de la memoria colectiva, que se expresa en relatos que dialogan con acontecimientos “difíciles” del pasado aunque sin nombrarlo, tal cual se puede inferir de los relatos que se presentan a continuación:

“Sí, yo siento que hay un tema que no se titulariza mucho (la propiedad), pero por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua tiene que ser un bien de uso público, así está, está en discusión, el gobierno puede disponer del agua así como puede disponer de tu casa y de la mía, porque te puede expropiar pero te tiene que pagar el justo valor (...) A los especuladores hay que darles, a los que mal usan y abusan de la buena fe pública, pero para el que está trabajando y está usando, y está creando trabajo y está haciendo las cosas bien, ¿por qué le van a



quitar 30 años después el agua?, ¿porque alguien decidió? y volvemos a la reforma agraria, la reforma agraria eran campos mal explotados y eso ¿quién lo decidió? lo decidió un grupo, gente que en un minuto dijo que lo hicieron bien pero después lo empezaron a hacer mal, entonces, no puede quedar al arbitrio o a la subjetividad de sólo una persona, de un grupo” (E20, 57 años, SNA, derecha).

“Yo creo que el tema apunta al tema de la propiedad, al tema de la familia, al tema hoy día que estamos hablando de aborto, ¿estamos hablando de sexo por opción po?, weón!<sup>97</sup>, ya no reconocer ni las características biológicas sino que por el entorno en que estamos metidos, entonces, toda esa permisibilidad y toda esa... legislar para minorías y cambiar la Constitución porque Juanito quedó fuera y Pedrito está dentro, ¿estamos mal pues! no, no, no, yo creo que existen riesgos muy altos con un cambio tan profundo en la Constitución” (E29, 63 años, SNA, derecha).

Como recordará el lector/a, se trata de aquellos protagonistas más afectados con los cambios implementados por el gobierno “popular”, el que intensificó la reforma agraria erradicando prácticamente a todos los grandes propietarios agrícolas que había en ese entonces (Montero, 1996), como es el caso muchas de las familias de los entrevistados.

Pero en el caso de la SOFOFA, hay matices de diferencia con respecto a lo que sucede con los empresarios agrícolas.

En primer lugar, ya se ha mencionado que los entrevistados más mayores y un segmento de los más jóvenes, provienen de familias “tradicionales” favorecidas, en las que también por su alta posición social se inculcaban valores liberales como las “libertades individuales” y la “propiedad privada”. Se trata, de la misma manera que con sus pares agrícolas, de una socialización política familiar marcada por la promoción de principios “individualistas”, que también se materializan, ejemplarmente, en la actual Constitución. Ésta protege los derechos fundamentales que emanan de la “naturaleza humana” de las individuos, siendo esta una creencia política muy arraigada en los participantes de la patronal industrial. Así lo describe “pedagógicamente” un entrevistado, quien realiza una analogía entre su concepción individualista del “orden social” y la “propiedad privada”, siendo resaltados como aspectos que van ligados en la evolución “natural” del hombre y la sociedad.

“Yo creo que el derecho de propiedad debe ser un derecho fuerte, sólido, porque lo que pasa es que si yo creo que la sociedad evoluciona por los *apetitos individuales*, de destacar, todo eso, si yo le quito el dulce... volviendo al ejemplo de Alexis: ¿por qué Alexis Sánchez se va del Arsenal al Manchester United?, *no sólo por dinero*, es porque él y tú lo escuchas: “yo soy el mejor del mundo”. Cuando lo comparan con Messi, él dice: “yo no tengo nada que envidiarle a Messi o a Ronaldo”, él quiere ser reconocido como el mejor del mundo: ¿por qué? *Yo creo que está en su naturaleza humana* como en la de todos nosotros, entonces, y él ¿por qué entrena más, se pelea con sus

---

<sup>97</sup> “Weón” es una expresión típica chilena que en un determinado contexto significa “persona”.

compañeros del Arsenal, le baja la intensidad a la selección chilena porque estaba preocupado de su transferencia?, pero ¿por qué? porque el quiere un reconocimiento, quiere seguir escalando, quiere ser más que los demás y eso lo hace ser mejor jugador al mismo tiempo” (E3, 77 años, SOFOFA, derecha).

Este fragmento seleccionado, es representativo de los principios más arraigados en la “*configuración ideológica*” de los entrevistados de la SOFOFA, y prueba, nuevamente, que la confianza e identificación con la Constitución vigente, no es un asunto meramente económico, “*por qué Alexis Sánchez se va del Arsenal al Manchester United?, no sólo por dinero, es porque él, y tú lo escuchas: “yo soy el mejor del mundo”*”. Interpretativamente, se trata, más bien, de una representación cultural del orden social, en la que el “individualismo” y la “propiedad privada” son el “driver” que permite el buen funcionamiento de la sociedad.

Por otra parte, esta sensación de amenaza hacia los derechos fundamentales que se da en los agricultores, en el caso de los entrevistados de la SOFOFA es menor y discursivamente menos elocuente. Esto puede estar relacionado con la *intensidad* del “*trauma sociopolítico*”, ya que hay que recordar que la gran mayoría de las familias de los entrevistados de la SOFOFA, no vivió experiencias directas de “violencia política”, por lo que su memoria colectiva está más bien cruzada por vivencias “directas” y “transmitidas” de “polarización”, “caos social” e “incertidumbre”, siendo estas más significativas que aquellas asociadas a la *defensa familiar del patrimonio*.

Y, efectivamente, esto se manifiesta en los discursos de los entrevistados ante un eventual cambio en las reglas institucionales, ya que este escenario hipotético provoca sensaciones de “temor”, de “incertidumbre” y de “caos social”, tal cual se percibía en sus respectivas familias durante el gobierno popular (Valenzuela, 1978; Huneeus, 1987). Así, la *aversión al cambio* está marcada por la naturaleza *traumática de la memoria colectiva*, definiendo una taxativa postura de rechazo a la transición hacia un nuevo orden.

“Y este proceso partió con un discurso que dice: “mire, hay que cambiar la Constitución, porque la gente no está contenta”, y yo creo que sería bueno identificar, y en ninguna parte se identifica a ver cuáles son las cosas que hay que cambiar, porque esto de decir, “lo que hay no es bueno, entonces, *incendiamos todo y construyamos un mundo feliz*”, es como una cosa absurda, son como las utopías del pasado que ya mostraron que no funcionan” (E25, 58 años, SOFOFA, centroderecha)

“Si a mí me hablan de cambio de la Constitución, *yo me cago de miedo porque así me lo dice la historia*, y se lo digo de verdad” (E7, 46 años, SOFOFA, apolítica).

“Pero sí soy, a diferencia de otros, que encuentro que es importante lo que diga la Constitución, muy importante, *porque soy constitucionalista en el sentido de que me gusta el apego a la ley, me gusta el apego a la constitución, por orden, razones de orden* y no sé si es necesario realmente cambiarla... no, no lo sé realmente” (E6, 77 años, SOFOFA, derecha).

Otro aspecto que vuelve a corroborar estas sensaciones de inseguridad, miedo, incerteza o amenaza hacia los derechos fundamentales (las creencias más arraigadas que tienen ambos grupos sociales), es el *mecanismo de cambio constitucional* que se debería utilizar en la eventualidad de un cambio de la Constitución. Ante esta pregunta, la gran mayoría de los entrevistados, sin ser relevante la posición política ni la cámara de origen, señaló preferir el *Congreso Nacional*, descartando absolutamente la posibilidad de una “asamblea constituyente”.

Las razones de esta preferencia tienen que ver un conjunto de amenazas que los entrevistados asocian a situaciones de *intensa participación política*, de acuerdo con su “experiencia traumática” pasada y con la formación cívica recibida a través de la familia y la escuela. En esta formación republicana, el modelo de democracia “representativa” al que adhieren los participantes, no es un objeto extraño o ajeno, sino que viene siendo alimentado desde la socialización política en sus “años impresionables”, sobre todo en los más mayores, que crecieron en un contexto democrático en expansión. No obstante, incluso los más jóvenes que crecieron en dictadura, también optan por la vía representativa, independientemente de la ubicación que estos tienen en el entorno ideológico.

Así se refieren al mecanismo de cambio constitucional los entrevistados:

“A ver, la asamblea constituyente, siempre he reconocido que los más trabajólicos políticamente ha sido la extrema izquierda de este país; *nosotros, la gente de derecha, descansa en sus representantes*. La gente de izquierda vibra con sus dirigentes y participa con órdenes de partido que dicen que vayan a trabajar. Por lo tanto, las asambleas constituyentes no son lo que uno podría pensar en la medida en que no participa un universo muy grande” (E29, 63 años, SNA, derecha).

“Efectivamente, es el Congreso, ni asamblea constituyente ni más inventos, el Congreso” (E30, 62 años, SNA, derecha).

“El sistema democrático que tenemos donde uno elige personas que toman decisiones, ¿por qué? porque no todas las personas están informadas, entonces, uno delega la responsabilidad en ciertas personas, eso parece sensato, en el fondo, en el modelo de democracia” (E18, 41 años, SOFOFA, derecha).

Como es posible apreciar, los fragmentos seleccionados muestran un decantamiento por la *opción representativa* como mecanismo de cambio constitucional. No obstante, esta preferencia tampoco es al azar, y se sostiene que también está relacionada con el *contenido* de una eventual Nueva Constitución, lo que confirma este consenso de que “mecanismo” y “contenido” de la Constitución son indisolubles (Fuentes & Joignant, 2015; Atria, 2013; Cordero, 2015; Rojas, 2013).

Bajo esta tesitura, una “asamblea constituyente” es percibida negativamente como una amenaza hacia el orden establecido. Se trata, nuevamente, de una imagen de “caos social”, de riesgo de las instituciones vigentes, de informalidad, que en el caso de funcionar, podría como bien lo indica un entrevistado “salir con cualquier cosa”.

“Para mí la asamblea constituyente es una institucionalidad inmanejable, que puede salir con cualquier cosa. Yo creo en una institucionalidad exigente, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial y que ellos amplíen la discusión lo más posible con los distintos actores” (E13, 71 años, SNA, centro).

“Por eso, *“lo quemamos todo y nos vamos a juntar en una gran asamblea, sin reglas, siempre levantando la mano”*... yo creo que es exponer al país a los asambleísmos, yo creo que no es un proceso democrático, no es una cosa democrática. Yo creo que es una cosa muy populista, pero no democrática. No democrática, porque tú puedes tomar al final basado en pasiones, en problemas puntuales, puedes terminar haciendo cosas que le generas un daño enorme a la gente” (E25, 58 años, SOFOFA, derecha).

Cabe añadir que esto no significa que la élite empresarial niegue la participación de la ciudadanía de la posibilidad de ser incluida en un cambio de las reglas institucionales, ya que muchos de los entrevistados fueron enfáticos en señalar la posibilidad de plebiscitar luego la Nueva Carta Fundamental o bien incluir mecanismos mixtos, siempre y cuando estos no reemplacen al Congreso Nacional.

Para terminar este trabajo, se sostiene que lo anterior vuelve a poner de manifiesto la relevancia de la socialización política de los entrevistados (Lane, 1959; Almond & Verba, 1970), marcada por la memoria colectiva y la memoria histórica (Trafimow & Wyer, 1993), ya que la posibilidad de una participación por fuera de la institucionalidad, y más si ello ocurre en un entorno de participación política intensiva, podría desencadenar un escenario imprevisible, incierto, que podría retrotraer a lo que se ha tratado de evitar desde el 12 de septiembre de 1973 hasta la fecha.

## CAPÍTULO X

### CONCLUSIONES

Esta tesis constituye un estudio *inédito* de la cultura política de la élite empresarial en el país andino. No existen estudios anteriores que hayan indagado en el proceso de “socialización política” y la “cultura política” de los grandes empresarios en Chile. Mucho menos desde la perspectiva empírica de la entrevista en profundidad, ya que ello implicaba, en palabras de Robert Putnam (1973), “*sentarse a conversar con ellas, escuchándolas atentamente*” (pág. 8), lo que en sí ya es una tarea difícil de concretar, ya que las posibilidades de acceso a los dirigentes empresariales eran casi tan reducidas como la probabilidad de que éstos aceptaran ser entrevistados. Y, aunque es verdad que ante este escenario se presentaban otras alternativas como la revisión de fuentes secundarias (análisis de prensa, de revistas, o incluso, de la propia producción académica que hace la élite empresarial a través de *think tanks* u otros dispositivos culturales) (Ariztía, 2011), lo cierto es que la promesa de profundidad y abundancia de evidencias que proporcionaría un número significativo de entrevistas se impuso sobre otras consideraciones.

Existe dificultad en acceder al estudio de la “cultura política de las élites”. Se trata de una tarea necesaria en el campo de la investigación, no sólo por la ausencia de trabajos en esta línea, sino también, porque hablamos de un grupo social que la literatura retrata como fundamental en la lucha por la distribución del poder, y con gran capacidad de influencia en el resto de las esferas de la sociedad, condiciones que se dan, especialmente, por sus propias características “excepcionales” y también por su posición en la estructura de poder (Milner, 2016; Winters, 2011; Rothkopf, 2008; Moyser & Wagstaffe, 1987; Atria y otros, 2017).

Así, tomando en consideración estos postulados de la “sociología de las élites”, los esfuerzos de investigación fueron enfocados en un actor que ha sido clave sobre el rendimiento del régimen político chileno, particularmente, por su activa participación en el proceso de modernización socioeconómica, pero también, por su capacidad de influencia en el campo político, sobre todo en lo que se refiere a la mantención de las reglas institucionales que han permitido consolidar la democracia sobre la base del *crecimiento económico* como principal recurso.

Es ésta una de las razones más profundas que ha motivado *conocer y desentrañar* cómo se ha formado la cultura política de la élite empresarial. En esa búsqueda, lo que se intentaba producir era una interpretación “culturalista” de la dimensión discursiva de uno de los actores más influyentes del proceso político, sobre todo en un contexto de baja confianza ciudadana en el gran empresariado. Parte de esta situación se produce, por casos de corrupción que han contribuido a minar el apoyo que habían adquirido estos actores, pero también puede influir la “exacerbada desigualdad” que existe en el país, lo que es sabido que conlleva a una destrucción de la confianza interpersonal, que atañe a todos quienes componen parte de la sociedad chilena, incluidas las propias élites que dirigen el país.

Es en este contexto cultural en el que se fue prescindiendo de algunas interpretaciones, mediáticas y también académicas, influidas por lecturas simplistas del

“racionalismo” y el “marxismo” (Almond, 1980), que buscan interpretar el sentido mentado de la acción bajo una mirada “economicista”. La “sospecha analítica” era que, dejarse influir por estas lecturas, llevaba automáticamente a una clausura del entendimiento de una dimensión de la vida política del país, y en particular, de “*los que mandan*”, ya que la imposibilidad de la transformación social estaría limitada únicamente por “intereses económicos” del gran empresariado. Así, en el momento en que estos intereses se transgreden, se produce un golpe militar, tal cual ocurrió el 11 de septiembre de 1973.

Desde la perspectiva de análisis de esta investigación, la lectura “economicista” parece insuficiente y reduccionista. Si bien, es cierto, la dimensión económica es importante a considerar para entender lo que está en juego en los asuntos públicos del país, ella no explica por sí misma las razones más profundas por las que un actor colectivo como el empresarial, rechaza transitar a un nuevo orden sin fisuras y completamente democrático (Garretón & Garretón, 2010; Democracy Index, The Economist, 2018). Así, los hallazgos encontrados en este trabajo, logran, a nuestro juicio, *matizar* la mirada economicista, y dar a entender que las razones son bastante más trascendentes y complejas que el mero cálculo de “costos” y “beneficios” como base de las decisiones políticas del empresariado.

Para avanzar en esta tarea, entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, se realizaron 38 entrevistas a 32 dirigentes empresariales de dos de las organizaciones patronales más importantes y antiguas del país: la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). En el contexto en que fue realizado el “trabajo de campo” de la investigación, la gran mayoría de las personas entrevistadas ocupaban cargos de presidente y vicepresidente de sus respectivos rubros económicos, por lo que se trata, de los más altos cargos de representación y conducción del sector empresarial.

A partir del análisis de la información producida por la herramienta metodológica mencionada, se buscó conocer y analizar las principales diferencias y similitudes de la cultura política entre los dirigentes empresariales del sector agrícola y el sector industrial. Para cumplir este propósito, se elaboró una caracterización sociocultural del grupo entrevistado, un análisis del proceso de “socialización política” y un examen de las “actitudes políticas” de los dirigentes empresariales en el contexto del proceso de “consolidación democrática” que ha tenido el país desde 1990 hasta la fecha.

Las evidencias obtenidas en las entrevistas, permiten confirmar que, efectivamente, la élite empresarial manifiesta tener una *amalgama de componentes singulares que nutren su cultura política*. Entre éstos, como se suponía en un principio de la investigación, un sustrato democrático, expresado en diversas orientaciones hacia el sistema político, como apoyo a la democracia, confianza en los partidos y el Congreso Nacional, “compromiso cívico”, “eficacia política”, entre otros aspectos de legitimidad democrática, que son característicos de los grupos de “centro social” o élites, muy en la línea de lo planteado por la literatura que se ha ocupado sobre este tema (Díez, 2006 y 2011; Inglehart & Welzel, 2006; Lipset & Solari, 1967; Arriagada, 2004). Incluso, de manera sorprendente, y *contrariamente* a nuestros supuestos, manifestando un conjunto de actitudes “favorables” sobre varios cambios institucionales relevantes en la

consolidación democrática del país. Es el caso, por ejemplo, de la posición mayoritariamente favorable a la eliminación de la preeminencia política de las Fuerzas Armadas y la designación de senadores, o también, por ejemplo, su valoración positiva del cambio de sistema electoral. Dos dispositivos relevantes de lo que el mismo General Pinochet llamó como “democracia autoritaria y protegida”.

También es verdad que estas actitudes favorables hacia una profundización de la democracia, encuentran su *límite* en la postura “inflexible” que tiene la élite empresarial en torno a un cambio total de las reglas institucionales, particularmente, ante un eventual cambio de la Constitución. Sobre este asunto, este grupo no presenta divisiones y manifiesta una actitud homogénea de rechazo, que pone de manifiesto su *aversión al cambio*, siendo éste hallazgo consistente con lo planteado al comienzo de la investigación.

Es así como se puede corroborar en la élite empresarial, la presencia de una cultura política *democrática* con rasgos “*progresistas*” y “*conservadores*”, cuya singularidad no es para nada espontánea (Verba, Nie & Kim, 1987; Tormos, 2012; Pye, 1977; Morán & Benedicto, 1995). Por el contrario, ella se explica, sobre todo, por el carácter profundo de su *socialización política* en los “años impresionables” de sus vidas, aunque también, por la “resocialización” democrática que se comienza a producir a partir de la transición (Mishler & Rose, 2007; Tormos, 2012; Morán, 1995; Almond, 1993). Así, la investigación comprueba que la intensa “socialización política” (Lane, 1959) de los entrevistados, es complementaria con la visionaria idea de Lucian Pye que señala, que la cultura política también es, en gran medida, la “*historia colectiva de un sistema político y de las biografías de los miembros de dicho sistema*” (1977, pág. 323). De esta manera, se puede concluir que esto es exactamente lo que ocurre con nuestros entrevistados, ya que la evolución del sistema político hacia una alta “polarización”, y la naturaleza “traumática” de las transformaciones ocurridas bajo el gobierno de la Unidad Popular, *marcan en forma profunda* la “memoria colectiva” (experiencias vividas) y la “memoria histórica” (vivencias transmitidas) de los miembros de la élite empresarial. De ahí se desprenden sus actuales posturas *inflexibles* hacia cambios que pudieran conducir a revivir ese “acontecimiento” que cambió sus vidas para siempre (Mannheim, 1958; Halbwachs, 1995)

En efecto, el impacto del “trauma sociopolítico” no solamente está dado por su propia singularidad “agresiva”, sino también, y sobre todo, porque atenta contra valores fundamentales de los entrevistados. De hecho, es posible aseverar que las “aberraciones” que experimentan los participantes y sus familias, son *significadas* de este modo, a raíz, justamente, de creencias políticas arraigadas ya aprendidas con anterioridad en los *early years*. Esto último, aunque parezca sorprendente, tampoco difiere de otros hallazgos de la literatura científica en Chile, la que señala que la “configuración ideológica” subyace a la formación de la propia memoria histórica y colectiva (Haye y otros, 2003; Manzi y otros, 2013).

En la generación más joven, el asunto fue más difícil de distinguir aún, constituyendo por sí mismo un verdadero “problema analítico” para este investigador, ya que puede haber ocurrido que la entrega familiar de valores y posiciones políticas, haya sido contemporánea de la transmisión del “trauma sociopolítico”, también familiar, por lo que *ambas se amalgaman* de manera compleja en la *formación* de su cultura política.

Ésta incorpora, la dimensión negativa de las experiencias familiares bajo el gobierno popular, pero además, *valores liberales y de autoexpresión* propios de los *grupos de alta posición social*.

Ciertamente, el examen de las entrevistas prueba la significación que tiene la “dimensión social” en el *tipo* de socialización política de los entrevistados. Se trata de familias “tradicionales”, la mayoría de derecha y ubicadas en una posición alta de la sociedad chilena desde mediados del siglo pasado, en las que con mucha similitud a las descripciones que hace la bibliografía, se promueve una socialización política marcada por valores liberales, como son las “libertades individuales” (libertad de elección, libertades cívicas, políticas, económicas), aunque en este caso, producto de sus holgados recursos materiales, con especial énfasis en el aprendizaje del “derecho de propiedad”. Así, se puede confirmar que estos valores y principios característicos del acervo cultural del liberalismo (Morlino, 2009), son aprendidos a temprana edad en toda la élite empresarial, y ratifica la veracidad de la “ley de Mendel” (*mendelian law*) de Robert Lane (1959), ya que estos principios son desarrollados familiarmente desde la infancia y adolescencia, y mantenidos hasta el día de hoy en quienes participaron en esta investigación, incluso sobreviviendo a la “experiencia autoritaria” entre 1973 y 1990.

Esto muestra que el sustrato “democrático liberal” que tienen los entrevistados, no es efímero, improvisado o performático, sino que fue cultivado, fundamentalmente, en sus “años impresionables”, a través de enseñanzas *deliberadas* entregadas por sus padres y también por la escuela, en las que se transmitía una formación “republicana” que, en general, fue “acumulativa” respecto de lo que se recibía en el hogar.

En definitiva, así es como se produce una *amalgama* que combina la formación de una cultura democrática, liberal y de derechas, con experiencias “vividas” y “transmitidas” de un acontecimiento histórico adverso y traumático, lo que, en suma, lleva a este grupo en su momento más álgido a *radicalizarse* hacia la derecha y a abandonar o a poner en interregno sus creencias democráticas naturalizadas, reclamando así la intervención militar que culmina con el golpe militar de 1973. Este hallazgo de la investigación comprueba la hipótesis esbozada por Genaro Arriagada (2004), para quien “*La clase alta y dentro de ella el empresariado abandonaron la democracia para apostar a una dictadura que viniera a poner fin a un proceso de inseguridad jurídica respecto de la propiedad, a disciplinar al movimiento social, a terminar con la “dictadura del número” y con una democracia que no hacía sino atropellar, en nombre del sufragio universal, libertades para ellos esenciales que se referían a ser dueños para producir, crear, ahorrar*” (pág. 135).

Por cierto, de esta “radicalización” hacia la posición política de derecha, se desprende una importante *diferencia* entre los entrevistados de ambas organizaciones empresariales, lo que lleva a *matizar* esta idea central de una cultura política *homogénea* en la élite empresarial.

Este “abandono de la democracia” es mucho más evidente en el caso de la *generación mayor de la SNA*, ya que el análisis de las entrevistas demuestra que son estos entrevistados los que se ven enfrentados directamente a situaciones de “violencia política”, que amenazan su seguridad física y existencial, pero también la de sus familias. Así, en concordancia con la intensidad afectiva del “trauma” experimentado, el vínculo



con el golpe militar es mayor en este segmento de la élite empresarial, lo que hace que se produzca un apoyo cívico irrestricto al gobierno militar, subordinándose en forma “irreflexiva” a los discursos de orden y autoridad del régimen, incluida la violencia política que trae la dictadura hacia los Derechos Humanos de miles de compatriotas. Así, la percepción experimentada de haber vivido una “guerra civil” durante el gobierno del presidente Allende, lleva a algunos entrevistados a asimilar que la violencia de los militares es para terminar con estos enfrentamientos de lado y lado, por lo que se justifica en forma poco crítica su utilización como recurso.

Es así como se manifiesta la presencia de un rasgo “autoritario”, que distinguirá a este segmento respecto del resto de la élite empresarial, ya que la sumisión a un orden fuerte e impersonal, sin considerar la relación entre medios y fines, es definido por la literatura como un rasgo típico de “autoritarismo” (Altemeyer, 1981; Manzi y otros, 2013). El resto de los entrevistados, a pesar de haber apoyado cívicamente el golpe, y en el caso de los más jóvenes, que tienen una valoración favorable de la “modernización autoritaria”, todos ellos, sin excepción, expresan hoy en la actualidad una postura de reprobación inexcusable hacia la violencia ejercida por los militares. Esto también a lo largo de la investigación fue dando “luces” sobre la presencia de elementos democráticos en su cultura política, ya que la relación entre Derechos Humanos y “pensamiento democrático” es indisoluble (Habermas, 1994).

Pero, la información producida por las entrevistas muestra que estos sentimientos negativos, recuerdos y memorias traumáticas que tienen los entrevistados se van morigerando con la “experiencia democrática”, aunque *no desaparecen*. Así, la “resocialización democrática” que se comienza a desarrollar en Chile desde la transición hasta nuestros días, produce un *impacto* considerable en la cultura política de *toda* la élite empresarial, incluidos aquellos que se subordinaron “irreflexivamente” a los discursos de autoridad. En ese sentido, y en concordancia con la hipótesis planteada, se puede corroborar que los entrevistados de esta investigación han tenido un conjunto de re-interpretaciones y re-aprendizajes políticos que han sido promovidos por la “experiencia democrática”, ya que este contexto hace posible la propagación y revitalización de valores de democráticos que habían sido adquiridos a temprana edad, pero que habían sido *soterrados* por la dictadura militar: el “compromiso cívico”, la “eficacia política”, el apoyo a la democracia y la confianza en sus instituciones...etc.; actitudes “difusas” al decir Montero, Gunther & Torcal (1998), pero que, en definitiva, dan cuenta de la legitimidad que tiene para la élite empresarial la democracia liberal “representativa” que promueve la actual ingeniería institucional.

De este modo se explica, al día de hoy, las posturas más *proclives* a la *supresión* paulatina de los “*enclaves autoritarios*” que manifiesta gran parte de los entrevistados; valoraciones políticas que tal vez en el contexto de la “transición” o incluso hace algunos años atrás, pueden haber sido más “conservadoras” o “inflexibles”, pero que con el aprendizaje político que trae la consolidación democrática, se le ha perdido el “miedo”, ya que pareciera que ésta no pone en riesgo sus creencias más íntimas: las “libertades individuales”, que son derechos fundamentales protegidos por la actual Constitución.

En definitiva, lo anterior aclara, en buena medida, la postura “conservadora” que tiene la élite empresarial frente a un cambio profundo de las reglas institucionales. Así,

las evidencias obtenidas en las entrevistas, apuntan a una revalorización del peso que tiene la socialización familiar primaria. Pero el peso de la memoria colectiva e histórica también es relevante en su explicación, y muestra los límites de los re-aprendizajes políticos, ya que un posible cambio de la Constitución, retrotrae automáticamente a los entrevistados a revivir los momentos previos a la intervención militar: *La Constitución, evita volver al 10 de septiembre de 1973*.

Como se intentó mostrar a lo largo de la investigación, estos hallazgos no son contradictorios con los postulados clásicos de la cultura política, ya que los “códigos de significación” de la élite empresarial son “multidimensionales” (Morán & Benedicto, 1995), y en ellos interactúan no *sólo* los intereses económicos, sino también otros factores: educativos, determinantes sociales, convicciones políticas e ideológicas (Verba, Nie & Kim, 1987; Almond & Verba, 1970; Lipset, 1970), el peso de la memoria colectiva e histórica (Pye, 1977; Trafimow & Wyer, 1993), entre otras unidades que se hace necesario investigar con rigor para desentrañar esta “caja negra” y comprender con mayor precisión de qué se compone y cómo se ha instalado el “*contenido de las mentes de los ciudadanos*” (Almond, 1988, pág. 77).

Así, lo que se buscaba probar era justamente que la “aversión al cambio” que tiene la élite empresarial, no solamente se produce por *el* factor económico, sino que también por *otros* elementos que influyen en forma mucho más decisiva en su cultura política, como son los políticos e ideológicos junto al peso la “memoria”.

Esto hace del contenido de la cultura política de la élite empresarial algo bastante “singular”, siendo éste otro de los empeños de la presente investigación, ya que a lo largo del trabajo se ha intentado mostrar las diferencias y similitudes que tiene el grupo analizado respecto de lo que pasa con el mundo por fuera de las élites. Así, se puede decir que, contra lo que quizá suele creerse, se trata de una cultura cívica con “implicación política”, con “compromiso cívico” y que estima que la democracia es el mejor régimen político por sobre cualquier otro existente (Linz, 1978; Montero, Gunther & Torcal, 1998). Esto difiere enormemente de lo que pasa con el resto de los chilenos, que tienen un bajo interés en la política, un escaso compromiso cívico, una declinante confianza en las instituciones (pese a estar “relativamente satisfechos” con la democracia), una baja participación electoral, entre otros indicadores que muestran el alicaído panorama de la cultura política a nivel de la ciudadanía.

### *Problemas de la investigación y desafíos futuros*

La presente investigación, pese a los hallazgos interesantes y novedosos, no estuvo exenta de algunos problemas o dificultades que vale la pena reconocer de cara a mejorar futuros trabajos en lo que sigue. Se trata, en verdad, de problemas de “forma” que, en realidad y en honor a la verdad, no sólo son de forma, sino también de “contenido”, puesto que influyen en los resultados de la investigación.

Una de estas dificultades estuvo relacionada con el concepto mismo de “cultura política”. Hablamos, de un concepto inscrito en un campo de investigación de larga data, de frecuentes discusiones y desacuerdos, muy inherente de lo que Imre Lakatos denominó como un “programa de investigación”. En efecto, se puede decir que es un concepto

“flexible” y que no es fácil de operacionalizar, ya que éste a lo largo de su historia ha sido desarrollado bajo diferentes perspectivas, lo que da cuenta de un campo epistemológicamente complejo. De hecho, hay autores que señalan que tanto las actitudes políticas como los valores y/o el comportamiento político, muchas veces son utilizados como sinónimos, lo que hace arriesgado distinguir cuál de estos factores tiene preeminencia de uno sobre otro.

En ese marco, y teniendo a la vista las dificultades mencionadas, se optó por una estrategia exploratoria un tanto “al azar”, que en verdad, le trató de dar más énfasis a la dimensión empírica que a la propia teorización. En ese sentido, la apuesta consistió en dejar que la propia producción de datos pusiera en evidencia cómo interaccionaban estos factores. En otras palabras, se dejó “hablar a los datos”, lo que, finalmente, tal vez con un poco de suerte, resultó ser apropiado, ya que ello permitió mostrar la importancia de los valores y creencias como elementos fundamentales del discurso y comportamiento político, algo que fue manifiesto en los resultados de esta investigación.

Por otra parte, otra dificultad fue el excesivo reduccionismo del concepto de “la política” que se utilizó a lo largo del trabajo, asociado muy “weberianamente” a la política formal. Sin duda, hablamos de una estrategia que está abierta a cuestionamientos, sobre todo porque su uso clausura otras comprensiones de “la política” y de lo “lo político”, y que no necesariamente se relacionan con aspectos institucionales, sino más bien, con formas “extrainstitucionales” de hacer política, más propias de las relaciones de poder en el mundo cotidiano e incluso “microfísicas” al decir de Michel Foucault. Pero pese a lo interesante de estas concepciones de la política, ello parecía un tanto excesivo de incluir en esta investigación, ya que el objetivo estaba más bien puesto en el estudio de las valoraciones de la política asociadas a la “distribución de poder en el Estado”, ya que es, precisamente, ésta visión de la política la que se relaciona con aquellas deliberaciones colectivas que influyen en la vida de toda la comunidad política. He ahí la razón de centrarse únicamente en una visión de la política desde sus aspectos “institucionales”, que pese a las objeciones legítimas que se puedan hacer, resultó en este caso particular ser la estrategia más acertada para lograr el objetivo propuesto.

Otro aspecto largamente discutido fue el tamaño de la muestra, ya que esta permite acotar los resultados de la investigación sólo al grupo de dirigentes entrevistados en este trabajo, pudiendo ser distinta la “cultura política” y la “socialización política” en otros miembros del gran empresariado, como, por ejemplo, en líderes de otras cámaras o incluso en mujeres que ocupen cargos directivos. Efectivamente, esta es una de las limitaciones que tiene este trabajo doctoral, que está dada, sobre todo, por la naturaleza inherente a los trabajos cualitativos, ya que, de por sí, el enfoque metodológico no persigue abarcar una muestra representativa de todo el universo que interesa investigar. Aun así, en orden a minimizar esa dificultad, se intentó entrevistar a los cargos superiores de todos los rubros económicos, algo que se consiguió parcialmente, faltando sólo unos pocos sectores por cubrir. Este es un aspecto del trabajo que no nos deja satisfechos, ya que hubiese sido más interesante para la investigación haber podido abarcar en el estudio a otras organizaciones empresariales, como la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) o la Asociación de Bancos (ABIF), entre otras instituciones que también ejercen labores de conducción de los grandes empresarios. En verdad, esta fue una decisión

bastante meditada en su minuto, que fue desestimada, sobre todo, porque ello habría implicado haber obtenido un número de entrevistas similar al que se había conseguido, haciendo más difícil la tarea de conseguirlas si se incluía el criterio “generacional”. Aun así, pese a que la relevancia de este trabajo no es estadística, se considera que igual es importante en términos del *tipo de sujeto de estudio*, ya que son muy pocos los dirigentes que tienen cargos de representación y conducción de otros empresarios.

Por cierto, la limitación metodológica mencionada, también influyó en la exploración de otras posibilidades dentro de la investigación, como podría haber sido el análisis de más casos de mujeres dentro la élite empresarial. En realidad, esta tarea era difícil de conseguir, ya que de por sí el género femenino tiene una presencia minoritaria en los cargos de representación y conducción empresarial en el país estudiado, no obstante, éste definitivamente es un aspecto sobre el que insistir en futuras investigaciones, ya que probablemente una inclusión mayor del género femenino podría conducir a resultados diferentes en la investigación. Esta intuición también se produce, porque el único caso de socialización política femenina detectado en este trabajo, fue distinto al del resto de los entrevistados, cuya socialización fue muy masculinizada.

Las dificultades e intuiciones mencionadas, bien pueden capitalizarse en otras rutas de investigación. Una de ellas podría ser el estudio de *otros empresarios*, como bien podrían ser los sectores más pequeños y medianos, ya que este trabajo estuvo centrado en dos organizaciones que lideran, en general, a grandes empresarios. Así, no es posible decir que en ellas se incluye a *todos* los empresarios, sino más bien, sólo aquellos que conducen y representan a quienes poseen empresas significativas y con capacidad de influencia dentro del mundo económico en el país.

Lo anterior, abre una “puerta” a una línea de investigación pendiente de ser desarrollada. De hecho, el estudio de la cultura política de los empresarios medianos y pequeños puede ser relevante de examinar, ya que recordará el lector/a, que este actor fue fundamental en la movilización social contra el gobierno de la Unidad Popular. Como bien indicaba un entrevistado mayor, la SOFOFA no podría haber movilizado por sí sola a cientos de empresarios, como sí lo hicieron los pequeños comerciantes, transportistas, artesanos, pescadores...etc. Este fue un actor relevante de oposición al gobierno popular y con capacidad de movilización, que es mayoritario en el país, y que también puede ser fundamental para comprender cabalmente cómo se va estructurando el proceso político chileno a partir de la cultura política de quienes participan en la vida pública del país.

Lo mismo vale para el análisis de otros grupos sociales y políticos, como bien podrían ser, por ejemplo, los dirigentes de partidos políticos, los dirigentes estudiantiles u otro tipo de subcultura o “cultura de rol” de élites que tengan capacidad de influencia sobre el sistema político chileno. Este podría constituir un interesante desafío intelectual, que, además de aportar a una mejor comprensión de la *singularidad* de las culturas políticas de actores que son decisivos en los asuntos públicos, también podría serlo para contribuir a un mejor conocimiento sobre las “peculiaridades” del desarrollo político chileno, algo en lo que, definitivamente, se encuentra al debe la sociología y ciencia política chilena.

## Referencia bibliográfica

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Por qué fracasan los países: orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*. Barcelona: Deusto.
- Aguilar, O. (2012). Dinero, educación y moral: el cierre social de la élite tradicional chilena. En A. Joignant, & P. Güell (ed.), *Notables, tecnócratas y mandarines: elementos de sociología de las élites*. Santiago: UDP.
- Aguilar, P. (2007). Los debates sobre la memoria histórica. *Claves de razón práctica*, núm. 20, 2–6.
- Aguilera, C., & Fuentes, C. (2012). Elites y asesoría experta en Chile: comisiones y políticas públicas en el gobierno de Bachelet. En A. Joignant, & P. Güell (ed.), *Notables, tecnócratas y mandarines: elementos de sociología de las élites en Chile (1990–2010)* (págs. 127–152). Santiago: UDP ediciones.
- Alcántara, M. (1992). Las transiciones a la democracia en España, América Latina y Europa Oriental. Elementos de una aproximación a un estudio comparativo. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales* 11.
- Alcántara, M. (2014). *La calidad de las democracias en América Latina*. Estocolmo: Instituto internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA internacional).
- Alexander, J. (2016). Trauma cultural, moralidad y solidaridad. La construcción social del holocausto y otros asesinatos en masa. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, Vol. 61, núm. 228, 191–210.
- Allende, S. (2003). El pueblo entrará conmigo a La Moneda. En *Los discursos del poder: palabras que cambiaron el curso de la historia* (págs. 273–277). Barcelona: Belacqva.
- Almond, G. (1980). The Intellectual History of the Civic Culture Concept. En G. Almond, & S. Verba (ed.), *The Civic Culture Revisited*. London: Sage Publishing.
- Almond, G. (1988). El estudio de la cultura política. *Revista de Ciencia Política* Vol 10, núm. 2, 77–89.
- Almond, G. (1993). The Study of Political Culture. En D. Berg-Schlosser, & R. Rytlewski (ed.), *Political Culture in Germany*. London: MacMillan.
- Almond, G., & Verba, S. (1970). *Cultura Cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones*. Madrid: Euramérica S.A.
- Alonso, E. (1998). *La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa*. Madrid: Fundamentos.
- Altemeyer, B. (1981). *Right-Wing Authoritarianism*. Michigan: University of Manitoba Press.
- Altman, S. (2007). Nuevos desafíos. En VV.AA., *Institucionalidad para el desarrollo: los nuevos desafíos*. Santiago: CEP y Expansiva.
- Alvarado, E. (2015). Exclusión, oligarquización y desafección política. Los efectos del sistema binominal en la democracia chilena. *Revista Enfoques*, 13(22), 11–37.
- Álvarez, R. (2015). *Los gremios empresariales, política y neoliberalismo*. Santiago: Lom.
- Andreani, L. (2010). *Reforma agraria: relatos, memorias e identidades de líderes históricos campesinos*. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
- Angell, A. (1974). *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. México D.F.: Ediciones Era.
- Angell, A. (1993). *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*. Santiago: Andrés Bello & CERC.

- Arancibia, P. (2001). *Los orígenes de la violencia política en Chile: 1960–1973*. Santiago: Universidad Finis Terrae CIDOC & Libertad y Desarrollo.
- Archer, M. (2009). *Teoría social realista: el enfoque morfogenético*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Ariño, A. & Romero, J. (2016). *La secesión de los ricos*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Arnosó, M., Cárdenas, M., & Paez, D. (2012). Diferencias intergeneracionales en la mirada hacia el pasado represivo chileno. *Psicología Política*, núm. 45, , 7–26.
- Aron, R. (1972). Clase social, clase política y clase gobernante. En R. Bendix, & S. Lipset (ed.), *Clase, status y poder, tomo II*. Madrid: Editorial Euramérica.
- Arrate, J. (1985). *La fuerza democrática de la idea socialista*. Santiago: Ediciones del ornitorrinco.
- Arriagada, G. (1970). *La oligarquía patronal chilena*. Santiago: Editorial Nueva Universidad.
- Arriagada, G. (2004). *Los empresarios y la política*. Santiago: Lom.
- Asún, R. (2004). A contracorriente: la participación política juvenil en los tiempos de la despolitización. *Revista Observatorio de Juventud INJUV*.
- Atria, F., Larrain, G., Benavente, J., Couso, J., & Joignant, A. (2013). *El otro modelo: Del orden neoliberal al régimen de lo público*. Santiago: Random House Mondadori.
- Atria, J., Amenabar, J., Sánchez, J., Castillo, J., & Cociña, M. (2017). Investigando a la élite económica: lecciones y desafíos a partir del caso de Chile. *CUHSO–Cultura–Hombre–Sociedad*, Vol.27, núm. 2, 5–36.
- Avendaño, O. (2013). Las reformas políticas en el gobierno de Sebastián Piñera, Chile, 2010–2013. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*(218), 167–191.
- Avendaño, O., & Cuevas, R. (2018). Gremios empresariales y sindicatos. En C. Huneeus, & O. Avendaño (ed.), *El sistema político chileno* (págs. 333–378). Santiago: Lom.
- Avendaño, O., & Escudero, M. (2016). Elitismo y poder gremial en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). *Revista CS*, núm. 20, 37–74.
- Aylwin, P. (1998). *El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del No*. Santiago: Ediciones B.
- Bahr, H., Dechaux, J. –h., & Stiehr, K. (1995). Evolución de los vínculos familiares: padres e hijos adultos. En S. Langlois, & S. de Campo (ed.), *¿Convergencia o divergencia? Comparación de tendencias sociales recientes en las sociedades industriales* (págs. 153–220). Bilbao: Fundación BBVA.
- Balzano, S. (2002). Las construcciones culturales sobre el éxito y el fracaso escolar y sus implicaciones sobre los modelos educativos en la Argentina. *Cultura y Educación*, número 3, 283–296.
- Baño, R. (1993). *Inexistencia y debilidad de actitudes políticas: serie de estudios políticos* núm. 27. Santiago: FLACSO Chile.
- Baño, R. (1995). *El nuevo carácter del apoliticismo*. Santiago: Serie de estudios políticos núm. 33, FLACSO.
- Bardin, L. (1986). *Análisis de contenido*. Madrid: Akal.
- Bargsted, N., & Somma, M. (2018). La cultura política: diagnóstico y evolución. En C. Huneeus, & O. Avendaño (ed.), *El sistema político de Chile* (págs. 193–224). Santiago: Lom.
- Barry, B. (1974). *Los sociólogos, los economistas y la democracia*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Bauman, Z. (2006). *Modernidad y Holocausto*. Buenos Aires: Sequitur.

- Benedicto, J. (1995). La construcción de los universos políticos de los ciudadanos. En J. Benedicto, & M. Morán, *Sociedad y política: temas de sociología política* (págs. 227–267). Madrid: Alianza.
- Bernete, F. (2013). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo. En A. Marin, & A. Noboa (ed.), *Conocer lo social: estrategias y técnicas de construcción y análisis de datos*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Beyer, H. (1997). Distribución del ingreso: antecedentes para la discusión. *Estudios Públicos* 65.
- Beyer, H. (2000). Educación y desigualdad de ingreso: una nueva mirada. *Estudios Públicos* 77, 97–130.
- Biblioteca del Congreso Nacional. (2016). *De la formación cívica a la educación ciudadana: hitos, distinciones, desafíos y propuestas*. Valparaíso: Biblioteca del Congreso Nacional.
- Bobbio, N. (1995). *Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política*. Madrid: Taurus.
- Boeninger, E. (2009). La visión política del sistema electoral chileno. En C. Larroulet, J. Navarrete, & I. Walker (ed.), *Reforma del sistema electoral chileno* (págs. 167–176). Santiago: CIEPLAN.
- Boeninger, E. (1997). *Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad*. Santiago: Andrés Bello.
- Botella, J. (1997). En torno al concepto de cultura política: dificultades y recursos. En P. del Castillo, & I. Crespo (ed.), *Cultura política* (págs. 17–38). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bottomore, T. (1965). *Minorías selectas y sociedad*. Madrid: Editorial Gredos.
- Bourdieu, P. (2000a). *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Bourdieu, P. (2000b). *La dominación masculina*. Buenos Aires: Anagrama.
- Bourdieu, P. (2001b). *Poder, derecho y clases sociales*. Bilbao, España: Desclée de Brouwer, S.A.
- Bourdieu, P. (2001c). *El campo político*. La Paz: Plural editores.
- Bourdieu, P. (2003). *Los herederos. Los estudiantes y la cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Bourdieu, P. (2004). *El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Bourdieu, P. (2012). *Las estrategias de la reproducción social*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2001a). *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Braungart, R. (1971). Family Status, Socialization, and Student Politics: A Multivariate Analysis. *American Journal of Sociology*, Vol. 77, núm. 1, 108–130.
- Briones, G. (1963). *El empresario industrial en América Latina*. Mar de Plata: CEPAL.
- Briones, G. (2000). La estructura social y la participación política. En H. Godoy (ed.), *Estructura social de Chile* (págs. 476–488). Santiago: Universitaria.
- Brown, A., & Gray, J. (1979). *Political Culture and Political Change in Communist States*. New York: Holmes & Meier.
- Brunner, J. (1986). *Informe sobre la educación superior en Chile*. Santiago: FLACSO.
- Brunner, J. (1990). Chile: claves de una transición pactada. *Nueva Sociedad* (106), 6–12.
- Cáis, J., Folguera, L., & Formoso, C. (2014). *La investigación cualitativa longitudinal*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas CIS.
- CADEM. (2019). *El Chile que viene: emociones de los chilenos febrero 2019*. Santiago: CADEM.

- Campero, G. (1984). *Los gremios empresariales en el período 1970–1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas*. Santiago: Instituto Latinoamericano de estudios transnacionales.
- Campero, G. (2003). La relación entre el gobierno y los grupos de presión: el proceso de la acción de bloques a la acción segmentada. *Revista de Ciencia Política*, Vol. 23, núm. 2, 159–176.
- Campero, G., & Cortázar, R. (1988). Actores sociales y la transición a la democracia en Chile. *Colección estudios CIEPLAN*, núm. 25, diciembre, 115–158.
- Campos Harriet, F. (1983). *Historia constitucional de Chile*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- Cárdenas, J. (2016). Enredando a las élites empresariales en América Latina: análisis de redes de *Interlocking Directorates* y propiedad en México, Chile, Perú y Brasil. *América Latina Hoy*, 73, 15–44.
- Carey, J. (2006). Las Virtudes del Sistema Binominal. *Revista de Ciencia Política* Vol. 21, núm. 1, 226–235.
- Carmona, C. (2014). Las reformas constitucionales entre 1989 y 2013. *Revista de Derecho Público*, 57–81.
- Carvacho, H., Manzi, J., Haye, A., González, R., & Cornejo, M. (2013). Consenso y disenso en la memoria histórica y en las actitudes hacia la reparación en tres generaciones de chilenos. *Psyke* Vol. 22, núm. 2, 33–47.
- Casillas, M., Chain, R., & Jacome, N. (2007). Origen social de los estudiantes y trayectorias estudiantiles en la Universidad veracruzana. *Revista de educación superior*, XXXVI(142), 7–29.
- Casillas, M., Ragueb Chain, & Jacome, N. (2007). Origen social de los estudiantes y trayectorias estudiantiles en la Universidad Veracruzana. *Revista de la educación superior*, XXXVI(142), 7–29.
- Castillo, A. (2005). *La república masculina y la promesa igualitaria*. Santiago: ARCIS.
- Centro de Estudios Públicos. (1987a). *Estudio social y de opinión pública en la población de Santiago diciembre 1986 – enero 1987*, Documento de trabajo núm. 83. Santiago: CEP.
- Centro de Estudios Públicos. (1987b). *Estudio social y de opinión pública en el estrato alto de Santiago Diciembre 1986 – enero 1987*. Santiago: CEP.
- Centro de Estudios Públicos. (1988). *Estudio social y de opinión pública diciembre 1988*. Santiago: CEP.
- Centro de Estudios Públicos. (1989). *Estudio Nacional de Opinión Pública Septiembre 1988*, Documento de trabajo n°111. Santiago: CEP.
- Centro de Estudios Públicos. (2006). *Estudio Nacional de Opinión Pública núm. 54, diciembre*. Santiago: CEP.
- Centro de Estudios Públicos. (2015). *Estudio Nacional de Opinión Pública núm. 73, abril*. Santiago: CEP.
- Centro de Estudios Públicos. (2017a). *Informe encuesta CEP 2016: ¿Malestar en Chile?* Santiago: CEP.
- Centro de Estudios Públicos. (2017b). *Encuesta Nacional de Opinión Pública julio–agosto 2018*. Santiago: CEP.
- Centro de Investigaciones Sociológicas. (2003). *Actitudes y opiniones de los pequeños empresarios sobre la Constitución y la política*. Madrid: CIS.
- CEPAL. (1988). *Chile: transformaciones económicas y grupos sociales (1973–1986)*. Santiago: CEPAL.
- CEPAL. (2018). *Panorama social de América Latina*. Santiago: CEPAL.
- CERC–MORI. (2011). *Barómetro de la Política mayo 2011*. Santiago: CERC–MORI.



- CERC–MORI. (2015). *La imagen de Pinochet y la dictadura*. Santiago: CERC–MORI.
- CERC–MORI. (2017). *Barómetro de la Política septiembre 2017*. Santiago: CERC–MORI.
- CERC–MORI. (2018). *Barómetro de la política abril 2018*. Santiago: CERC–MORI.
- CERC–MORI. (2019). *Barómetro de la política mayo 2019*. Santiago: CERC–MORI.
- Cerda, C. (1998). *Historia y desarrollo de la clase media en Chile*. Santiago: Universidad Tecnológica Metropolitana.
- Chalmers, D., Vilas, C., Hite, K., Martin, S., Piester, K., & Segarra, M. (1997). *The New Politics of Inequality in Latin America: Rethinking Participation and Representation*. Oxford: Oxford University Press.
- Collier, R., & Collier, D. (2002). *Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*. Indiana: University of Notre Dame Press.
- Colomer, J., & Escatel, L. (2005). La dimensión izquierda y derecha en América Latina. *Desarrollo económico*, vol. 44, núm. 177, 123–136.
- Comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones. (2015). *Informe final*. Santiago: Comisión presidencial de pensiones.
- Comisión nacional de verdad y reconciliación (Chile). (1991). *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*. Santiago: Ercilla.
- Comuna de Recoleta. (2017). *Reportes comunales*. Santiago: Comuna de Recoleta.
- Conde, F. (2010). *Análisis sociológico del sistema de discursos*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas CIS.
- Constitución Política de Chile*. (1925). Santiago.
- Cordero, G. (2015). La solución no es constitucional. En C. Fuentes, & A. Joignant (ed.), *La solución constitucional: plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos* (págs. 83–96). Santiago: Catalonia.
- Cordero, R. (2003). *La socialización de la élite parlamentaria en Chile. Sitios de interacción social en la formación de los diputados de la antigua (1961–1973) y la nueva democracia (1990–2002)*. Tesis para optar al grado de Magíster en Sociología, PUC. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Cornejo, M., Reyes, M., Cruz, M., Villaroel, N., Vivanco, A., Caceres, E., & Rocha, C. (2013). Historias de la dictadura militar chilena. *PSYKHE*, Vol.22, núm. 2, 49–65.
- Correa, S. (2005). *Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: Sudamericana.
- Correa, S. (2015). Los procesos constituyentes en la historia de Chile: lecciones para el presente. *Estudios Públicos* 137, 43–85.
- Cortés Terzi, A. (2000). *El circuito extrainstitucional del poder*. Santiago: CESOC.
- Corvalán, A. (2012). Sistema Binominal: un desincentivo a la participación electoral. *Claves de políticas Públicas*(6).
- Cristi, R. (2011). *El pensamiento político de Jaime Guzmán*. Santiago: Lom.
- Cristi, R., & Ruiz–Tagle, P. (2014). *El constitucionalismo del miedo: propiedad, bien común y poder constituyente*. Santiago: Lom.
- Criteria–Laboratorio Constitucional UDP. (2019). *Informe especial Brechas en la representación: Congresistas y opinión pública Liberalismo económico y social, marzo*. Santiago: Laboratorio Constitucional UDP.
- Cross, W., & Young, L. (2008). Factors Influencing the Decision of the Young Politically Engaged To Join a Political Party: An investigation of the Canadian Case. *Party Politics* 14, 345–369.

- Cruz–Coke, C. (1986). Análisis de sistema binominal para la elección de diputados del futuro Congreso Nacional. *Centro de Estudios Públicos, Documento de Trabajo, núm. 63*.
- Dahl, R. (2011). *¿Quién gobierna? Democracia y poder en una ciudad estadounidense*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.
- Dahl, R. (2017). *La democracia*. Barcelona: Planeta.
- Dahse, F. (1979). *El mapa de la extrema riqueza: los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*. Santiago: Aconcagua.
- Dazarola, G. (2018). *Efecto de la Ley de Cuotas en elecciones parlamentarias de 2017*. Valparaíso: Biblioteca del Congreso Nacional.
- De Gregorio, J. (2005). Crecimiento económico en Chile: evidencia, fuentes y perspectivas. *Estudios Públicos* (98), 1–86.
- de Imaz, J. (1977). *Los que mandan*. Buenos Aires: Eudeba.
- de Miguel, J., Castilla, E., & Cäis, J. (1994). *La sociedad transversal*. Barcelona: Fundación La Caixa.
- Declaración Universal de Derechos Humanos. (1948). *Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948*.
- Del Campo, E. (1991) Unas notas sobre el sistema de partidos en Chile y Argentina en tiempos de crisis. *Revista de estudios políticos (Nueva época)*, núm. 74, 177–210.
- Del Campo, E. (2007) Democracia y desarrollo en Chile: el aprendizaje institucional de las reformas. *Pensamiento Iberoamericano*, 237–263.
- Dexter, L. (2006). *Elite and Specialized Interviewing*. Oxford: Oxford University Press.
- Dezalay, Y., & Garth, B. (2002). *La internalización de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados Latinoamericanos*. Bogotá, Colombia: ILSA–Instituto de investigaciones jurídicas.
- Diamond, L. (2003). ¿Puede el mundo entero ser democrático? Democracia, desarrollo y factores internacionales. *Revista española de Ciencia política*, núm.9, 9–38.
- Diamond, L., Hartlyn, J., & Linz, J. (1999). Introduction: Politics, Society, and Democracy in Latin America. En L. Diamond, J. Hartlyn, J. Linz, & S. Martin (ed.), *Democracy in Developing Countries: Latin America* (págs. 1–70). Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Diario El Mostrador & Universidad Mayor. (2012). Encuesta . *El Mostrador*.
- Díez, J. (2011). ¿Regreso a los valores materialistas? El dilema entre seguridad y libertad en los países desarrollados. *REIS*, núm.15, 9–46.
- Díez, N. (1992). Posición social, información y postmaterialismo. *REIS* 57, 21–35.
- Díez, N. (2006). Prólogo. En R. Inglehart, & C. Welzel, *Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia del desarrollo humano*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas CIS.
- Domínguez, J. (1997). *Technopols: Freeing Politics and Markets in Latin America in the 1990s*. Philadelphia: Penn State Press.
- Domínguez, J. (2005). Construcción de gobernabilidad democrática en América Latina. Una evaluación de la década de 1990. En J. Domínguez, & M. Shifter (ed.), *Construcción de gobernabilidad democrática en América Latina* (págs. 387–490). Bogotá: Fondo de cultura económica.
- Downs, A. (2001). Teoría económica de la acción política en una democracia. En VV.AA., *Diez textos básicos de ciencia política* (págs. 93–113). Barcelona: Ariel.
- Easton, D., & Dennis, J. (1970). *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*. New York: McGraw–Hill.
- Edwards, A. (2005). *La fronda aristocrática*. Santiago: Universitaria.

- El País. (4 de julio de 2002). Pinochet renuncia a su cargo de senador vitalicio por "el bien del país". *El País*.
- El País. (19 de octubre de 2011). La marcha multitudinaria en Santiago acaba con más de 300 detenidos. *El País*.
- Esping-Andersen, G. (2015). *Los tres grandes retos del Estado del bienestar*. Barcelona: Ariel.
- Espinoza, V., & Madrid, S. (2010). *Trayectoria y eficacia política de los militantes en juventudes políticas: estudio de la élite política emergente*. Santiago: Instituto de estudios avanzados Universidad de Santiago de Chile.
- Eurobarometer Survey. (2018). *Parlemeter 2018 Taking Up the Challenge: From (silent) Support to Actual Vote. Eurobarometer Survey 90.1 of the European Parliament A Public Opinion Monitoring Study*. European Parliament.
- Fazio, H. (2005). *Mapa de la extrema riqueza al año 2005*. Santiago: Lom.
- Fernandois, J. (2013). *La revolución inconclusa: la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- Fernández, L., & Morán, M. (2014). Encontrar la cultura: estrategias de indagación para el análisis sociopolítico. *Revista de Estudios Sociales* núm. 50, 43–56.
- Ffrench-Davis, R. (2003). *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile*. Santiago, Chile: Comunicaciones Noreste Ltda.
- Flisfisch, A. (1987). *La política como compromiso democrático*. Santiago: FLACSO.
- Flores, M., & Selios, L. (2013). Dictaduras y generaciones en Chile y Uruguay: un análisis de las preferencias políticas de los ciudadanos nacidos entre 1930 y 1991. *Postdata, Vol. 18, núm. 2*, 365–402.
- Fontaine, A. (1988). *Los economistas y el presidente Pinochet*. Santiago: Zig-Zag.
- Froud, J., Savage, M., Tampubolon, G., & Williams, K. (2006). Rethinking Elite Research. *Journal of Management and Social Sciences* Vol. 2, núm.1 , 25–41.
- Fuentes, C. (2010). Elites, opinión pública y cambio constitucional. En C. Fuentes (ed.), *En el nombre del pueblo: debate sobre el cambio constitucional en Chile* (págs. 45–84). Santiago: ICSO y Fundación Böll.
- Fuentes, C. (2012). *El Pacto: Poder, Constitución y prácticas políticas en Chile (1990–2010)*. Santiago: UDP ediciones.
- Fuentes, C. (7 de enero de 2019). Voto voluntario y la ilusión de la representación (o como la democracia se fue vaciando de electores). *CIPERCHILE*.
- Fuentes, C., & Joignant, A. (2015). La solución constitucional: rutas de salida del antiguo orden y estrategias de entrada a una Nueva Constitución. En C. Fuentes, & A. Joignant (ed.), *La solución constitucional: plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos* (págs. 13–40). Santiago: Catalonia.
- Fundación Alternativas. (2019). *Informe sobre la democracia en España 2018*. Madrid: Fundación Alternativas.
- Fundación Sol. (2019). *Los bajos salarios en Chile*. Santiago: Fundación Sol.
- Fundación Sol. (2019). *Los verdaderos sueldos de Chile. Panorama actual del valor de la fuerza de trabajo usando la ESI 2017*. Santiago: Fundación Sol.
- Gabriel, O. (1990). *Cambio social y cultura política: el caso de la República Federal de Alemania*. Barcelona: Gedisa.
- Gajardo, M. (2013). ¿Revolución con vino tinto y empanadas? Historia y memoria del fenómeno del desabastecimiento en la Unidad Popular (1970–1973). *Historia en perspectiva*.

- Galaskiewicz, J. (1987). The Study of Business Elite and Corporate Philanthropy in a United States Metropolitan Area. En G. Moyser, & M. Wagstaffe (ed.), *Research Methods for Studies Elites*. London: Allen & Unwin.
- Galbraith, J. (1959). *American Capitalism: the Concept of Countervailing Power*. London: Penguin Books.
- Galbraith, K. (2012). *La sociedad opulenta*. Barcelona: Planeta.
- Gangas, P. (2003). Desigualdad y pobreza: América Latina y Europa desde 1950. *Política y Cultura* (20), 29–51.
- Garcés, A. (2011). *Los rostros de la protesta: actores sociales y políticos de las jornadas de protesta contra la dictadura militar (1983–1986). Tesis para optar al grado de licenciatura en historia*. Santiago: Universidad Santiago de Chile.
- García García, J. (2014). Minimalismo e incrementalismo constitucional. *Revista chilena de derecho*, 41(1), 267–302.
- García García, J., & Verdugo, S. (2015). Un camino a la Constitución de 2020: un proceso constituyente que una y no divida a los chilenos. En C. Fuentes, & A. Joignant (ed.), *La solución constitucional: plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos* (págs. 127–146). Santiago: Catalonia.
- García González, C. (2006). El peso de la memoria en los inicios de la transición a la democracia en Chile (1987–1988). *PUC, Historia*, Vol. 2, núm. 39, 431–475.
- Gargarella, R. (1995). Crisis de representación y constituciones contramayoritarias. *Isonomía. Revista de teoría y filosofía del derecho* (núm. 2, abril).
- Garretón, M. A. (1983). *El proceso político chileno*. Santiago: FLACSO.
- Garretón, M. A. (1993). La crisis de la democracia, el golpe militar y el proyecto contrarrevolucionario. *Documento de trabajo FLACSO, Serie de Estudios Políticos* núm. 30, 1–26.
- Garretón, M. A. (1999). Balance y perspectivas de la democratización política chilena. En A. Menéndez–Carrión, & A. Joignant (ed.), *La caja de pandora. El retorno de la transición chilena*. Santiago: Planeta/ Ariel.
- Garretón, M.A. (2010). La problemática de América Latina y sus respuestas en juego. En M. Salazar & A. Osorio Rauld (ed.), *Democracia y antagonismos en el Chile contemporáneo. Perspectivas postransicionales*. Santiago: Akhilleus.
- Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación (1990–2010)*. Santiago: ARCIS–CLACSO.
- Garretón, M. A. (2015). *Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina. Estudios sobre transformaciones sociopolíticas y movimiento social*. Santiago: LOM.
- Garretón, M. A. (2016). Crisis de representación, movilizaciones sociales y elecciones presidenciales 2013 en Chile. En F. Mayorga (ed.), *Elecciones y legitimidad democrática en América Latina*. La Paz: CESU–UMSS, CLACSO, IESE y Plural editores.
- Garretón, M. A. (2017). El proyecto de transformación y la crisis político–institucional de la sociedad chilena. El gobierno de Bachelet entre 2014–2016. En C. Arqueros, & Á. Iriarte (ed.), *Chile y América Latina: crisis de las izquierdas del siglo XXI*. Santiago: UDD e IRP.
- Garretón, M. A., & Garretón, R. (2010). La democracia incompleta en Chile: la realidad tras los rankings internacionales. *Revista de Ciencia Política*, vol. 30, núm. 1, 115–148.
- Garretón, M., & Moulian, T. (1985). *La unidad popular y el conflicto político*. Santiago: La Minga.
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.

- Gil, J. (1997). *La segunda república*. Madrid: Biblioteca de historia núm. 6.
- Girard, R. (1972). *La violencia y lo sagrado*. Barcelona: Anagrama.
- Gobierno de Chile. (2011). *Segunda Encuesta de Participación y Consumo Cultural*. Santiago: DIBAM.
- Godoy, F. (2016). *Significaciones de lo político entre jóvenes de La Florida post 2011. Memoria de titulación para optar al grado de Antropólogo Social*. Santiago: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
- Godoy, L., Diaz, X., & Mauro, A. (2009). Imágenes sobre el trabajo femenino en Chile, 1880–2000. *Revista Universum*, Vol. 2, núm. 24, II semestre, 74–93.
- Godoy, O. (1999). La transición chilena a la democracia: pactada. *Estudios Públicos* 74, 79–106.
- Godoy, O. (2003). Parlamento, presidencialismo y democracia protegida. *Revista de Ciencias Políticas*, Vol. 23, núm. 2, 7–42.
- Gómez Leyton, J.C. (2003). *La frontera de la democracia: el derecho de propiedad 1925– 1973*. Santiago: Lom
- Gómez, S., & Echeñique, J. (1988). *La agricultura chilena: las dos caras de la modernización*. Santiago: FLACSO .
- Góngora, M. (1986). *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago: Editorial Universitaria.
- González, R., Manzi, J., Cortes, F., Torres, D., de Tezanos, P., Aldunate, N., Saiz, J. (2005). Identidad y actitudes políticas en jóvenes universitarios: el desencanto de los que no se identifican políticamente. *Revista de Ciencia Política*, 25(2), 65–90.
- González–Bustamante, B., & Cisternas, C. (2016). Elites políticas en el poder legislativo chileno: la Cámara de Diputados (1990–2014). *Política, Revista de Ciencia Política* vol. 54, núm. 1, 19–52.
- González–Bustamante, B., & Garrido–Vergara, L. (2016). Cambios de gabinete y supervivencia de los ministros en Chile durante los gobiernos de la Concertación (1990–2010). *Colombia internacional*, 87, 81–108.
- Greenstein, F. (1977). Socialización política. En E. Shils (ed.), *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales* Vol. 10. Madrid: Aguilar.
- Gronemeyer, M., & Porath, W. (2017). Tendencias de la posición editorial en diarios de referencia en Chile. el arte de dosificar la crítica frente a la actuación de los actores políticos. *Revista de Ciencia política*, Vol. 37, núm.1, , 177–202.
- Grossi, M. (1970). *Burguesía industrial e ideología de desarrollo en Chile*. Santiago: FLACSO.
- Gruenberg, C. (2007). *El costo de la democracia: poder económico y partidos políticos*. Buenos Aires: Capital intelectual.
- Grupo de los 24. (1981). *El grupo de los 24 y el reencuentro con la democracia*. Santiago.
- Guichard, E., & Henríquez, G. (2011). Memoria histórica en Chile: una perspectiva intergeneracional desde Concepción. *REIS* 135, 3–26.
- Guzmán, E. (1993). Reflexiones sobre el sistema binominal. *Estudios Públicos* 51.
- Guzmán, E., & Oppliguer, M. (2012). *El malestar en Chile: ¿teoría o diagnóstico?* Santiago: Ril editores.
- Guzmán, J. (1991). *El miedo y otros escritos (Arturo Fontaine compilador)*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- Habermas, J. (1994). Derechos Humanos y soberanía popular: las concepciones liberal y republicana. *Human Rights and Popular Sovereignty—their Liberal and Republican Versions* pronunciada el 23 de septiembre de 1992 en el Departamento de Filosofía de la North–Western University (págs. 215–230). *Ratio iuris* vol. 7, núm.1, marzo.

- Habermas, J. (1999). *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*. Madrid: Teorema.
- Halbwachs, M. (1995). Memoria colectiva y memoria histórica. *REIS*, vol. 69, 209–219.
- Halbwachs, M. (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Presas universitarias de Zaragoza.
- Hamuy, E. (2000). El proceso de democratización fundamental. En H. Godoy (ed.), *Estructura social de Chile* (págs. 489–501). Santiago: Universitaria.
- Haye, A., Carvacho, H., Manzi, R., & Segovia, C. (2009). Relación entre orientación política y condición socioeconómica en la cultura política chilena: una aproximación desde la psicología política. *Polis: Revista de la Universidad Bolivariana*, núm. 23, 351–384.
- Haye, A., Manzi, J., & Gonzáles, R. (2013). Teorías infantiles del golpe de Estado 25 años después. *Psykhé Vol. 22*, núm. 2, 67–81.
- Heiss, C. (2016). Soberanía popular y momento constituyente en el debate sobre cambio constitucional en Chile. *Revista Anales séptima serie*, núm. 10, Universidad de Chile.
- Heiss, C., & Szmulewicz, E. (2018). La Constitución Política de 1980. En C. Huneeus, & O. Avendaño (ed.), *El sistema político de Chile* (págs. 57–83). Santiago: Lom.
- Heras, L. (2002). Cultura política: el estado del arte contemporáneo. *Convergencia. Revista de ciencias sociales*, Vol. 9, núm. 30, 275–291.
- Hertz, R., & Imber, J. (1995). *Studying Elites Using Qualitative Methods*. London: Sage Publications, Inc.
- Huneeus, C. (1987). *Los chilenos y la política: cambio y continuidad bajo el autoritarismo*. Santiago: CERC.
- Huneeus, C. (2001). El comportamiento político de los empresarios en Chile. *Perspectivas*, Vol.4, núm.2, 315–337.
- Huneeus, C. (2003). *Chile un país dividido. La actualidad del pasado*. Santiago: Catalonia.
- Huneeus, C. (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Santiago: Taurus.
- Huneeus, C., & Morales, M. (2003). Chile después del autoritarismo. *Quórum, Revista de Pensamiento Iberoamericano* 2, 41–57.
- Ibáñez, J. (2006). Introducción. En M. Canales (compilador), *Metodologías de investigación social: introducción a los oficios* (págs. 11–30). Santiago: Lom.
- ICCS. (2016). *Opiniones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina. Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana 2016 de la IEA*. Amsterdam: IEA.
- IDD–LAT. (2016). *Resultados del desarrollo regional democrático*. Konrad Adenauer Stiftung y Polilat.
- Inglehart, R. (1988). Cultura política y democracia estable. *REIS*, vol. 42, 45–65.
- Inglehart, R. (1991). *El cambio cultural en las sociedades industriales*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas CIS.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2006). *Modernización, cambio cultural y democratización: la secuencia del desarrollo humano*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas CIS.
- INJUV. (2009). *Sexta Encuesta Nacional de Juventud. Principales Resultados*. Santiago: INJUV.
- Jackman, R., & Miller, R. (1998). Social Capital and Politics. *Annual Review of Political Science* 1, 44–73.

- Jaime, A. (2000). Familia y socialización política. La transmisión de orientaciones ideológicas en el seno de la familia española. *REIS*, vol. 92, 71–92.
- Jara, R. (2009). *La transitología como ciencia de gobierno: anatomía de la cristalización de un saber en la acción gubernamental*. Tesis de magíster. Santiago: Universidad de Chile.
- Jennings, M. (2007). Political Socialization. En R. Dalton, & H. –D. Klingemann (ed.), *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press.
- Jeréz, M. (1995). *Corporaciones e intereses en la España actual*. Granada: Universidad de Granada.
- Joignant, A. (2012). Tecnócratas, Technopols y dirigentes de partido: tipos de agentes y especies de capital en las élites gubernamentales de la Concertación (1990–2010). En A. Joignant, & P. Güell (ed.), *Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de sociología de las élites en Chile (1990–2010)*. Santiago: UDP ediciones.
- Jost, J. (2006). The End of the End of Ideology. *American Psychologist* Vol. 6, núm. 7, 651–670.
- Jost, J., Glaser, J., Kruglanski, A., & Sulloway, F. (2003). Political Conservatism as Motivated Social Cognition. *Psychological Bulletin* Vol. 129, núm. 3, 339–375.
- Kalyvas, A. (2005). Soberanía popular, democracia y poder constituyente. *Política y gobierno*, 12(1), 91–124.
- Katz, C. (2017). Desenlace del ciclo progresista. *Estudios críticos del desarrollo, Primer semestre 2017*, vol. 7, número 12, 87–122.
- Keller, S. (1971). *Más allá de la clase dirigente: élites estratégicas en la sociedad moderna*. Madrid: Tecnos.
- Kelsen, H. (1991). *Teoría pura del derecho*. México D.F.: Porrúa–UNAM.
- Kruger, M., & Dukuen, J. (2012). Clases sociales, capital cultural y participación política en jóvenes escolarizados. Una mirada desde Bourdieu. *Question*, Vol. 1, núm. 35, 317–327.
- Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Laboratorio Constitucional. (2016). *¿Cambiar la Constitución afecta el crecimiento económico y las inversiones? Mayo 2016*. Santiago: UDP.
- Lagos, M. (14 de noviembre de 2017). La peor de las elecciones presidenciales desde 1990. *El Mostrador*.
- Lagos, R. (28 de septiembre de 2016). "Esta es la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile". (La Tercera, Entrevistador)
- Lagroye, J. (1994). *Sociología política*. Buenos Aires: FCE.
- Lambrecht, K. (2011). *La Distribución del Ingreso en Chile: 1960–2000 Análisis del entorno*. Santiago: Facultad de economía y negocios, Universidad de Chile.
- Lane, R. (1959). Fathers and Sons. The Foundations of Political Beliefs. *American Sociological Review*, núm. 24, 502–511.
- LAPOP. (2006). *Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas*. Vanderbilt University.
- LAPOP. (2012). *Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2012*. Vanderbilt University .
- LAPOP. (2014). *Cultura política de la democracia en Chile y las Américas*. Vanderbilt University.
- LAPOP. (2016). *Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas*. Vanderbilt University.
- Larrañaga, O. (2001). *Distribución de ingresos en Chile: 1958–2001. Documento de trabajo*, Departamento de economía. Santiago: Universidad de Chile.

- Larrañaga, O. (2016). La desigualdad a lo largo de la historia de Chile. *Serie documentos de trabajo PNUD-Desigualdad* núm. 2016/09.
- Latinobarómetro. (2017). *Informe 2017*. Buenos Aires: Latinobarómetro.
- Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*. Buenos Aires: Latinobarómetro.
- Leca, J. (1986). individualisme et citoyenneté. En P. Birnbaum, & J. Leca (eds), *Sur l'individualisme* (págs. 159–209). Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- Linz, J. (1978). *La quiebra de las democracias*. Madrid: Alianza Universidad.
- Linz, J., & De Miguel, A. (1963). El empresario español como factor humano en el desarrollo económico. *Revista de estudios políticos*, 6–33.
- Linz, J., & de Miguel, A. (1966). *Los empresarios ante el poder público*. Madrid: Instituto de estudios políticos.
- Linz, J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Linz, J., & Valenzuela, A. (2016). *Mesa redonda: Presidencialismo, semipresidencialismo y parlamentarismo*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.
- Lipovetsky, G. (2006). *La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo*. Barcelona: Anagrama.
- Lipset, S. & Solari, A. (1967). Elites, educación y función empresarial en América Latina. En Lipset, S. & Solari, A. (ed.), *Élites y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.
- Lipset, S. (1970). *El hombre político: las bases sociales de la política*. Madrid: Tecnos.
- Lipset, S., & Rokkan, S. (2001). Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales. En A. Batlle (ed.), *Diez textos básicos de ciencia política* (págs. 231–266). Barcelona: Editorial Ariel S.A.
- Llera, F. (1997). Enfoques en el estudio de la cultura política. En P. del Castillo, & I. Crespo (ed.), *Cultura política*. Valencia: Tirant lo blanch.
- López, R., Figueroa, E., & Gutierrez, P. (2013). *La parte del león. Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile. Serie documentos de trabajo* núm. 379. Santiago: Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
- López-Aranguren, E. (1986). El análisis de contenido. En M. Garcia, J. Ibañez, & F. Alvira (ed.), *El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación* (págs. 2–35). Madrid: Alianza.
- Luna, J., & Altman, D. (2011). Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. *Latin American Politics and Society*, Vol. 53, núm. 2, 1–28.
- Luna, J., & Fernando Rosenblatt. (2012). ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. En F. Díaz, & L. Sierra (ed.), *Democracia con partidos* (págs. 1–115). Santiago: CEP & CIEPLAN.
- Macpherson, C. (1997). *La democracia liberal y su época*. Madrid: Alianza .
- Maddison, A. (1989). *The World economy in the 20th Century*. OECD: Development Centre Studies.
- Mannheim, K. (1958). *El hombre y la sociedad en la época de crisis*. Buenos Aires: Leviatán.
- Manzi, J., Helsper, E., Ruiz, S., Mariane Krause, & Kronmüller, E. (2003). El pasado que nos pesa: la memoria colectiva del 11 de septiembre de 1973. *Revista de Ciencia Política*, Vol. 23, núm. 2, 177–214.



- Manzi, J., Ruiz, S., Krause, M., Meneses, A., Haye, A., & Kronmüller, E. (2004). Memoria colectiva del golpe de Estado de 1973 en Chile. *Revista interamericana de Psicología*, Vol. 38, núm.2, 153–169.
- Maravall, J. (1978). *El disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*. Madrid: Alfaguara.
- Mardones, R. (2018). Educación cívica y construcción de la ciudadanía en el Chile de la pos dictadura, ¿en qué estamos y para dónde vamos? *Revista Austral de Ciencias Sociales* 35, 63–82.
- Margheritis, A. (2003). Las élites políticas y económicas frente al proceso de privatización y regulación de servicios públicos en la Argentina. Una encuesta de 1999. *Desarrollo económico*, Vol.43, núm.169, 103–134.
- Marí-Klose et al. (2009). *Informe de la inclusión social en España*. La Caixa Catalunya. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya.
- Martinez, J., & Tironi, E. (1985). *Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación 1970–1980*. Santiago: Ediciones Sur.
- Matamala, D. (2015). *Poderoso caballero: el peso del dinero en la política chilena*. Santiago: Catalonia.
- Mayol, A. (2013). *El derrumbe del modelo: la crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo*. Santiago: Lom.
- Mayol, A. (2016). *Autopsia: ¿de qué se murió la élite?* Santiago: Catalonia.
- McDevitt, M., & Chaffee, S. (2002). From Top–Down to Trickle–Up Influence: Revisiting Assumptions About the Family in Political Socialization. *Political Communication*, Vol.19, núm.3, 281–301.
- Medina Echavarría, J. (1969). *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico*. Santiago: Solar–Hachette.
- Meller, P. (1998). *Un siglo de economía política en Chile*. Santiago, Chile: CIEPLAN–Andrés Bello.
- Memoria Chilena . (1977). *Nueva institucionalidad en Chile: Discursos S.E. el Presidente de la República General del Ejército D. Augusto Pinochet Ugarte* . Santiago: Memoria Chilena.
- Menéndez–Carrión, A., & Joignant, A. (1999). De la "democracia de los acuerdos" a los dilemas de la polis: ¿transición incompleta o ciudadanía pendiente? En A. Menendez–Carrión, & A. Joignant (ed.), *La caja de pandora. El retorno de la transición chilena*. Santiago: Planeta/Ariel.
- Meynaud, J. (1962). *Los grupos de presión*. Buenos Aires: Eudeba .
- MIDEPLAN. (1991). *Manual Encuesta Casen 1990*. Santiago : Gobierno de Chile.
- Mills, W. (2007). *La élite del poder*. D.F. México: Fondo de cultura económica.
- Milner, M. (2015). *Elites. A General Model*. Cambridge: Polity Press.
- Milos, P. (2008). *El Frente Popular: su configuración (1935–1938)*. Santiago: Lom.
- Mineduc. (2011). *Gran Acuerdo Nacional por la Educación*. Santiago : Gobierno de Chile.
- Ministerio de Desarrollo Social. (2017). *Informe de Desarrollo Social 2017*. Santiago: Gobierno de Chile.
- Mishler, W., & Rose, R. (2007). Generation, Age, and Time: The Dynamics of Political Learning during Russia's Transformation. *American Journal of Political Science*, Vol. 51, núm. 4, 822–834.
- Montero, C. (1993). El actor empresarial en transición. *Colección estudios CIEPLAN*, núm.37, junio, 37–68.
- Montero, C. (1996). Los empresarios en el desarrollo chileno. *Ensaïos FEE, Porto Alegre*, Vol.17, núm. 2, 152–181.

- Montero, C. (1997). *La revolución empresarial chilena*. Santiago: CIEPLAN.
- Montero, J., Richard Gunther, & Torcal, M. (1998). Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección. *REIS*, vol. 83, 9–49.
- Morán, M. (1995). La cultura política y la interpretación de las transiciones a la democracias (notas sobre el caso español). *Política y Sociedad* 20, 97–110.
- Morán, M., & Benedicto, J. (1995). *La cultura política de los españoles: un ensayo de interpretación*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas.
- Morán, M. (1997). Elites y cultura política en la España democrática. En P. del Castillo, & I. Crespo (ed.), *Cultura política* (págs. 185–222). Valencia: Tirant lo blanch.
- Morán, M., & Benedicto, J. (2000) *Propuestas para el análisis de las culturas de la juventud*. Madrid: INJUV.
- Morán, M. (2011). La cultura política de las mujeres: un campo de estudio todavía por explorar. *Psicología Política*, núm. 42, 45–68.
- Morán, M., & Benedicto, J. (2015). Culturas políticas y ciudadanía en el marco de una crisis institucional. En C. Torres (Ed.), *España 2015. Situación social* (págs. 1115–1125). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Morlino, L. (2009). *Democracia y democratizaciones*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas CIS.
- Morris, J. (1967). *Las élites, los intelectuales y el consenso: Estudio de la cuestión social y del sistema de relaciones industriales en Chile*. Santiago: Del Pacífico.
- Mosca, G. (2006). *La clase política*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Moulian, T. (1982). Desarrollo político y Estado de compromiso. Desajuste y crisis estatal en Chile. *Colección CIEPLAN*, núm. 8, 105–158.
- Moulian, T. (1983). *Democracia y socialismo en Chile*. Santiago: FLACSO.
- Moulian, T. (1994). *La forja de ilusiones: el sistema de partidos 1932–1973*. Santiago: ARCIS–FLACSO.
- Moulian, T. (1997). *Chile actual: Anatomía de un mito*. Santiago: ARCIS–LOM.
- Moulian, T. (2000). *El consumo me consume*. Santiago: Lom.
- Moulian, T. (2002). *En la brecha: Derechos Humanos, críticas y alternativas*. Santiago: Lom.
- Moulian, T., & Osorio, A. (2014). *Tiempos modernos: Fragmentos de historia del Chile contemporáneo (1891–1990)*. Santiago: Ayun.
- Moya, E., & Hernandez, J. (2014). El rol de los colegios de élite en la reproducción intergeneracional de la élite chilena. *Revista Austral de Ciencias Sociales* 26, 59–82.
- Moyser, G., & Wagstaffe, M. (1987). *Research Methods for Elite Studies*. London: Unwin Hyman Ltd.
- Navarro, E. (2014). Reformas a la Constitución chilena. *Revista de Derecho Público, edición especial*, 13–23.
- Navarro, P., & Diaz, C. (1994). Análisis de contenido. En J. Delgado, & J. Gutierrez (ed.), *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales* (págs. 177–224). Madrid: Síntesis.
- Navia, P., & Garrido, C. (2005). Candidatos fuertes en la Concertación: ¿Seguro para subcampeones o prevelecia de los dos tercios? *Estudios Públicos* 99.
- Navia, P., & Osorio, R. (2015). Las encuestas de opinión pública en Chile antes de 1973. *Latin American Research Review*, Vol.50, núm.1, 117–139.
- Negretto, G. (2015). Los procesos constituyentes en América Latina. Una visión comparada. *Revista Argentina de Teoría Jurídica*, Vol.16, 2–23.

- Nieto, N. (2010). *Generación Postpinochetista: estudiantes secundarios y cultura política. Un estudio de caso en la comuna de Santa Cruz*. Santiago: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
- Observatorio de Juventud. (2004). A contracorriente: la participación política juvenil en los tiempos de la politización. En VV.AA., *Participación política juvenil: dilemas y tensiones*. Santiago: INJUV.
- OCDE. (2018). *Estudios económicos de la OCDE: Chile*. OECD, Better Policies for Better Lives.
- OECD. (2015a). *Education at a Glance: OECD Indicators: Chile*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2015b). *In it Together. Why Less Inequality Benefits all*. México D.F.: OECD Publishing.
- OECD. (2016). *PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD*. OECD. Paris: OECD Publishing.
- Offerlé, M. (2004). *Los Partidos Políticos*. Santiago: Lom.
- Osorio, A. (2010). Clase política, Estado y racionalización en Chile (1924–1990). En M. Salazar, & A. Osorio (ed.), *Democracia y antagonismos en el Chile contemporáneo: perspectivas postransicionales*. Santiago: Akhilleus.
- Osorio, A. (2014). *Hacia una sociología de las élites. Una revisión crítica del elitismo clásico de Mosca, Pareto y Michels. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales*. Santiago: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
- Osorio, A. (2015). Dominación y reproducción de las élites. Lectura sociológica del proceso de estructuración de las minorías selectas en el elitismo clásico. *Revista de investigaciones políticas y sociológicas*, Vol. 14, núm. 2, 113–130.
- Osorio, A. (2018). El campo de los estudios teóricos de las élites. Notas de investigación en torno a la noción de élite en las escuelas elitistas del siglo XX. *Revista Juris Poiesis: Rio de Janeiro*, Vol. 21, núm. 25, 21–49.
- Ossandón, J. (2012). Hacia una cartografía de la élite corporativa en Chile. En J. Ossandón, & E. Tironi (ed.), *Adaptación: la empresa chilena después de Friedman* (págs. 11–28). Santiago: UDP ediciones.
- Páez, D., & Basabe, N. (1993). Trauma político y memoria colectiva: Freud, Halbwachs y la psicología política contemporánea. *Psicología Política*, núm. 6, 7–34.
- Pardo, L. (1988). Una revisión histórica a la participación de la población femenina en la fuerza de trabajo. Tendencias y características de la participación de la mujer. *Estudios de economía*, Vol. 15, núm. 1, 28–82.
- Pareto, V. (1967). *Forma y equilibrios sociales*. Madrid: Editorial Revista de Occidente.
- Pateman, C. (1980). The Civic Culture: A Philosophic Critique. En G. Almond, & S. Verba, *The Civic Culture Revisited* (págs. 57–102). Boston: Little, Brown and Company.
- Pateman, C. (2014). *Participación y teoría democrática*. Buenos Aires: Prometeo.
- Peña, C. (28 de mayo de 2019). Morir a gusto en Chile. *New York Times*.
- Percheron, A. (1985). La socialisation politique. Defense e illustration. En M. Grawitz, & J. Leca (ed.), *Traité de Science Politique*. Paris: PUF.
- Percheron, A., & Jennings, M. (1981). Political continuities in French families. *Comparative Politics*, núm. 13, 421–436.
- Petrás, J. (1967). *Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Piketty, T. (2015). *El capital en el siglo XX*. Barcelona: RBA.

- Pinto, A. (1973). *Chile, un caso de desarrollo frustrado*. Santiago, Chile: Editorial Sudamericana.
- Pinto, A. (2000). Crítica de una tesis tradicional. En H. G. compilador, *Estructura social de Chile* (págs. 459–475). Santiago: Universitaria.
- Piñera, S. (1978). *Evolución de la pobreza en Chile: periodos (1940–1954; 1954–1958)*. Santiago: proyecto interinstitucional de pobreza en América Latina.
- Piñera, S. (2 de junio de 2019). En Chile tenemos una crisis de la política. (D. Matamala, & M. Ricon, Entrevistadores)
- Piper, I. (2005). *Obstinaciones de la memoria: la dictadura militar chilena en las tramas del recuerdo. Tesis doctoral*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- PNUD. (2004). *Informe de Desarrollo Humano. El poder: ¿para qué y para quién?* Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2012). *Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo*. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2014). *Auditoría a la democracia: más y mejor democracia para un Chile inclusivo*. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2015a). *Los tiempos de la politización*. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2015b). *Opinión ciudadana y cambio constitucional: análisis desde la opinión pública núm. 1*. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2016). *IV Encuesta nacional Auditoría a la Democracia: más y mejor democracia para un Chile inclusivo*. Santiago: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2017). *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*. Santiago: Programa de las Naciones Unidas.
- Portales. (2000). *Chile: una democracia tutelada*. Santiago: Sudamericana
- Przeworski, A. (1994). *Democracia y mercado: reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. (1973). *The Beliefs of Politicians: Ideology, Conflicts and Democracy in Britain and Italy*. New Haven C.T.: Yale University Press.
- Pye, L. (1977). Cultura política. En E. Shils (ed.), *Enciclopedia internacional de las ciencias sociales, Vol. 3*. Madrid: Aguilar.
- Pye, L., & Verba, S. (1965). *Political Culture and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Ramos, C. (2009). *La transformación de la empresa chilena. Una modernización desbalanceada*. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado.
- Rehren, A. (1995). Empresarios, transición y consolidación democrática en Chile. *Revista de Ciencia Política, Vol. 17, núm. 1–2*, 5–61.
- Rodríguez, J. (2014). *La economía política de la desigualdad de ingreso en Chile, 1850–2009*. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales.
- Rojas, G. (2000). *Historia del gremialismo empresarial*. Santiago: Confederación de la producción y el comercio CPC.
- Rojas, G. (2013). Asamblea constituyente: ¿golpe de Estado? Una evaluación política y jurídica. *Derecho Público Iberoamericano*(2), 289–299.
- Rojas, J. (2009). Los estudiantes secundarios durante la Unidad Popular, 1970–1973. *Historia, Vol. 42, núm. 2*, 471–503.
- Rojas, J. (2012). *La sociedad bloqueada: movimiento estudiantil, desigualdad y despertar de la sociedad chilena*. Concepción: RIL editores.
- Rothkopf, D. (2008). *Superclass: How the Rich Ruined Our World*. New York: Abacus.
- Rousseau, J. (2007). *El contrato social*. Buenos Aires: Libres pensadores.

- Rozas, P., & Marin, G. (1989). 1988: *El mapa de la extrema riqueza 10 años después*. Santiago: Chile América CESOC.
- Ruiz, A. (2004). Texto, testimonio y metatexto: el análisis de contenido en la investigación en educación. En CLACSO, *La práctica investigativa en ciencias sociales* (págs. 44–59). Bogotá: CLACSO.
- Ruiz, L. (2005). Polarization in the Chilean Party System: Changes and Continuities, 1990–1999. *WP, núm. 236, Institut de Ciències Politiques i Socials*, 1–67.
- Ruiz, L. (2011). Chile: a Model Case? En D. Levine, & J. Molina (Edits.), *The Quality of Democracy in Latin America*. Boulder, Co: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Ruiz–Tagle, P. (2016). *Cinco repúblicas y una tradición: constitucionalismo chileno comparado*. Santiago: Lom.
- Rustow, D. (1987). Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. En C. Huneeus (compilador), *Para vivir la democracia* (págs. 351–392). Santiago: CERC–Editorial Andante.
- Salamanca, A., & Martin–Crespo, C. (2007). El muestreo en la investigación cualitativa. *Nure investigación, núm. 27*, 1–4.
- Salazar, G. (2001). *Historia de la acumulación capitalista: apuntes de clase*. Santiago: Lom.
- Salazar, G. (2015). La “solución constituyente” como proceso histórico–social. En C. Fuentes, & A. Joignant (ed.), *La solución constitucional: plebiscitos, asambleas, congresos, sorteos y mecanismos híbridos* (págs. 97–112). Santiago: Catalonia.
- Salazar, G., & Pinto, J. (2000). *Historia contemporánea de Chile: tomo I*. Santiago: Lom.
- Salazar, M., & Osorio, A. (2010). ¿Modernización con legitimidad? En M. Salazar, & A. Osorio (ed.), *Democracia y antagonismos en el Chile contemporáneo: perspectivas postransicionales*. Santiago: Akhilleus.
- Salvaj, E. (2012). Cohesión y homogeneidad. Evolución de la red de directorios de las grandes empresas en Chile, 1969–2005. En J. Ossandón, & E. Tironi (ed.), *Adaptación: la empresa chilena después de Friedman* (págs. 55–84). Santiago: UDP ediciones.
- Sánchez Agesta, L. (1966). *Lecciones de derecho político*. Madrid: Editora Nacional.
- Sartori, G. (1976). *Party and Party Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scapini, J. (2006). *Los gremios empresariales en Chile*. Santiago: Tajamar editores.
- Schaeffer, C., Segura, P., & Valencia, L. (11 de junio de 2014). Democrática desigualdad: Diputados chilenos son los mejor pagados en los países de la OCDE. *CIPER CHILE*.
- Schmidt–Hebbel, K. (2006). *El crecimiento económico de Chile. Documento de trabajo del Banco Central núm. 365*. Santiago: Banco Central.
- Schmidt–Hebbel, K. (diciembre de 2018). Perfeccionamientos al sistema previsional en voz de los expertos núm. 301.
- Schmitt, C. (1996). *Teoría de la Constitución*. Madrid: Alianza.
- Schumpeter, J. (1983) *Capitalismo, socialismo y democracia*. Buenos Aires: Ediciones Orbis
- Schwartz, S., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S., & Harris, M. (2001). Extending the Cross–cultural Validity of the Theory of Basic Human Values with a Different Method of Measurement. *Journal of Cross Cultural Psychology, Vol. 32, núm. 5*, 519–542.
- Scott, J. (1990). *Corporate Business and Capitalist Classes*. Oxford: Oxford University Press.

- Sears, D. (1990). Whither Political Socialization Research? The Question of Persistence. En O. Ichilov (ed.), *Political Socialization Citizenship Education and Democracy* (págs. 69–97). New York: Teachers College Press.
- Segovia, C. (2009). ¿Crisis de la política en Chile? Percepciones y valoraciones sobre los partidos. En E. Cordero (ed.), *La sociedad de la opinión: reflexiones sobre encuestas y cambio político en democracia*. Santiago: UDP.
- Segovia, C., & Gamboa, R. (2015). Imágenes de desigualdad en Chile: el impacto de factores económicos y políticos. *Papel político Vol. 20, núm. 2*.
- SERVEL. (2017). *Elecciones presidencial, parlamentarias y de consejeros regionales 2017*. Santiago: Servicio Electoral.
- Siavelis, P. (2009). Enclaves de la transición y la democracia chilena. *Revista de Ciencia Política Vol. 29, núm. 1*, 3–21.
- Silva, P. (2010). *En el nombre de la razón: tecnócratas y política en Chile*. Santiago: UDP ediciones.
- Smend, R. (1985). *Constitución y derecho constitucional*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Solimano, A. (2013). *Capitalismo a la chilena: y la prosperidad de las élites*. Santiago: Catalonia: Centro internacional de globalización y desarrollo.
- Solimano, A. (2015). *Elites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI: la alternativa a la democracia económica*. Santiago: Fondo de cultura económica.
- Stiglitz, J. (2012). *El precio de la desigualdad*. Madrid: Taurus.
- Stuven, A. (1997). Una aproximación a la cultura política de la élite chilena: Concepto y valoración del orden social (1830–1860). *Estudios Públicos* 66.
- Sunkel, O. (1965). *Cambio social y frustración en Chile*. Santiago: Naciones Unidas e Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 13 de abril.
- Svampa, M. (2017). Cuatro claves para leer América Latina. *Revista Nueva Sociedad, núm. 268, marzo–abril*, 50–64.
- Swidler, A. (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies. *American Sociological Review* 51, 273–286.
- Taylor, S., & Bodgan, R. (1995). *Introducción a los métodos cualitativos*. Barcelona: Paidós.
- Tezanos, J. (1994). Clases sociales y desigualdad en las sociedades tecnológicas avanzadas. *Revista internacional de sociología, Madrid, tomo 8*, 89–135.
- Thomas, R. (1995). Interviewing Important People in Big Companies. En R. Hertz, & J. Imber (ed.), *Studyng Elites Using Qualitative Methods* (págs. 3–17). London: Sage Publications, Inc.
- Thumala, M. (2007). *Riqueza y piedad. El catolicismo de la élite económica chilena*. Santiago: Debate–Random House Mondadori.
- Tironi, E. (1987). Marginalidad, movimientos sociales y democracia. *Proposiciones núm. 14*.
- Tironi, E. (1990). *Autoritarismo, modernización y marginalidad (1973–1989)*. Santiago: Ediciones Sur.
- Tironi, E. (1999). *La irrupción de las masas y el malestar de las elites*. Santiago: Grijalbo S.A.
- Tironi, E. (2005). *El sueño chileno: comunidad, familia y nacion en el Bicentenario*. Santiago: Taurus.
- Tironi, E., & Agüero, F. (1999). ¿Sobrevivirá el nuevo paisaje político chileno? *Estudios Públicos, 74*, 151–168.
- Torcal, M., & Chhibber, P. (1995). Élite, cleavages y sistema de partidos en una democracia consolidada: España (1986–1992). *Reis* 69.

- Torche, F., & Wormald, G. (2004). Estratificación y movilidad social en Chile: entre la adscripción y el logro. *CEPAL, Serie Políticas sociales*, Santiago.
- Tormos, R. (2012). Valores postmaterialistas y aprendizaje político adulto. El cambio de valores intracohorte en Europa occidental. *REIS 140*, 89–120.
- Trafimow, D., & Wyer, R. (1993). Cognitive Representation of Mundane Social Events. *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 64, 365–376.
- Transparency International. (2019). *Corruptions Perceptions Index 2018*. Santiago: Transparency International.
- UDP. (2013). *Encuesta UDP Segundo semestre*. Santiago: UDP.
- UDP–Feedback. (2017). *Encuesta de opinión pública*. Santiago : Feedback y Escuela de Periodismo UDP.
- Undurraga, T. (2011). Rearticulación de grupos económicos y renovación ideológica del empresariado en Chile 1980–2010. *Serie Working Papers ICSO–UDP*, 1–33.
- Urzúa, S. (2018). *Serie informe social: la batalla de la desigualdad en Chile, mayo 2018*. Santiago: Libertad y Desarrollo.
- Useem, M. (1984). *The Inner Circle: Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the U.S. and U.K.* New York–Oxford: Oxford University Press.
- Valdés, A. (2016). *Serie infore económico. A 50 años: Balance de la reforma agraria chilena*. Santiago: Libertad y Desarrollo.
- Valdés, J. (1995). *Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Valdivia, V. (2010). Estabilidad y constitucionalismo: las sombras de la excepcionalidad chilena. En C. Fuentes (ed.), *En el nombre del pueblo: debate sobre el cambio constitucional en Chile*. Santiago: ICSO–Heinrich Böll Stiftung.
- Valenzuela, A. (1978). *El quiebre de la democracia en Chile*. Santiago: FLACSO.
- Valenzuela, A., & Siavelis, P. (1991). Ley electoral y estabilidad democrática: un ejercicio de simulación para el caso chileno. *Estudios Públicos 43*.
- Valles, M. (2014). *La entrevista cualitativa*. Madrid: Centro de investigaciones sociológicas CIS.
- Van de Wyngard, J. (2013). Los aportes fundamentales de la Constitución de 1980 al sistema jurídico–político y social chileno. *Derecho Público Iberoamericano*, 2, 277–288.
- Van Deth, J., & Scarbrough, E. (1995). *The Impact of values*. Oxford: Oxford University Press.
- Varela, J. (1978). El individuo en la organización. *Revista Latinoamericana de Psicología*, Vol.10, núm. 1, 11–16.
- Vargas–Salfate, S., Oyanedel, J., & Torres–Vallejos, J. (2015). Socialización e interés en la política en jóvenes de Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* vol. 13, núm. 2 , 781–794.
- Verba, S., Norman, N., & Kim, J. –o. (1987). *Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparison*. Chicago: University of Chicago Press.
- Weber, M. (1985). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Barcelona: Ediciones Orbis.
- Weber, M. (2001). *El político y el científico*. Madrid: Alianza.
- Welch, S. (2013). *The Theory of Political Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Wetsby, D., & Braungart, R. (1966). Class and Politics in the Family Background of Student Political Activist. *American Sociological Review*, núm. 31, 690–692.

- Whitefield, S., & Evans, G. (1999). Political Culture Versus Rational Choice: Explaining Responses to Transition in the Czech Republic and Slovakia. *British Journal of Political Science* 29, 129–155.
- Winters, J. (2011). *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- WVS–MORI. (2018). *Informe World Values Survey séptima ola enero 2018*. Santiago: WVS–MORI.

## Recursos electronicos

- 20.840, H. d. (2019). *www.bcn.cl*. Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: <https://www.bcn.cl/historiadela-ley/nc/historia-de-la-ley/3997/>
- 20minutos.es. (6 de diciembre de 2018). *20 Minutos.es*. Obtenido de <https://www.20minutos.es/noticia/3508991/0/encuesta-metroscopia-constitucion-partidos-politicos-democracia/>
- Banco Central de Chile. (2001). *Indicadores económicos y sociales de Chile: 1960 – 2000*. Santiago: Banco Central de Chile.
- Banco Central de Chile. (2019). *Cuentas nacionales por sector institucional: evolución del ahorro, la inversión y el financiamiento sectorial en el año 2018*. Santiago: Banco central de Chile.
- Banco Mundial. (3 de octubre de 2018). *www.datos.bancomundial.org*. Obtenido de Banco Mundial: [https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL&year\\_high\\_desc=false](https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CL&year_high_desc=false)
- BCN. (2016). *Biblioteca del Congreso Nacional*. Obtenido de *www.bcn.cl*.
- BCN. (2017). *Biblioteca del Congreso Nacional*. Obtenido de *www.bcn.cl*: <https://www.bcn.cl/formacioncivica/constituciones.html>
- Candidaturas.cl. (2017). *Composición del Congreso Nacional 2018-2022*. Santiago: [www.candidaturas.cl](http://www.candidaturas.cl).
- CERC. (s.f.). *Banco de datos del CERC*. Obtenido de: [http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES\\_COL=138&Idioma=E&S\\_Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas seccionCol=05&ESID=491](http://www.jdsurvey.net/jds/jdsurveyAnalisis.jsp?ES_COL=138&Idioma=E&S_Cultura_politica_de_la_democracia_en_Chile_y_en_las_AmericaseccionCol=05&ESID=491)
- Educación 2020. (27 de enero de 2015). *Cómo cambia el sistema educativo con la ley de inclusión*. [www.educacion2020.cl](http://www.educacion2020.cl): <http://educacion2020.cl/noticias/como-cambia-el-sistema-educativo-con-la-ley-de-inclusion/>
- EMOL. (23 de noviembre de 2017). Presidente de la Sofofa: "Si Guillier abraza las ideas del Frente Amplio, se alejará de un Chile moderno" Fuente: Emol.com - <https://www.emol.com/noticias/Economia/2017/11/23/884589/Larrain-Matte-Si-Guillier-abraza-las-ideas-del-Frente-Amplio-se-alejara->
- EMOL. (23 de enero de 2018). Promedio de edad de 55 del nuevo gabinete es el más viejo de 1990. [www.emol.com](http://www.emol.com).
- La Vanguardia. (5 de mayo de 2018). Albert Rivera elogia la política de consensos de la transición chilena. *La Vanguardia*.
- Ley 20.840 Sustituye el Sistema Electoral Binominal por uno de carácter Proporcional Inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional.
- Libertad y Desarrollo. (19 de noviembre de 2013). *4 razones de por qué el voto voluntario es beneficioso para nuestra democracia*. Obtenido de *www.lyd.cl*:



<https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2013/11/4-razones-de-por-que-el-voto-voluntario-es-beneficioso-para-nuestra-democracia/>

No + AFP. (2019). *www.nomasafp.cl*. Recuperado el 2 de enero de 2019, de [http://www.nomasafp.cl/inicio/?page\\_id=8](http://www.nomasafp.cl/inicio/?page_id=8)

Ranking Forbes. (26 de diciembre de 2015). *Forbes*.

<http://forbes.es/listas/3326/los-paises-con-las-universidades-mas-caras-del-mundo/7/>

Real Academia Española. (s.f.). *Real Academia Española*. Obtenido de [www.rae.es](http://www.rae.es)

Revista Capital. (12 de febrero de 2014). *www.capital.cl*.

## Anexos

### 1. Cuadro de códigos producido a partir del uso del ATLAS.ti

Código	Comentario
Act. política, ideas y otros general	Actitudes hacia la política e ideas políticas en general
Actitud Fuerzas Armadas	Creencias, valoraciones y sentimientos frente a la institución pública de carabineros y el ejército de Chile. También incorpora la descripción de actitudes frente a la participación de los militares en el sistema político en dictadura o democracia.
Actitud gobierno de Bachelet	Evaluación gobierno de Bachelet
Actitud hacia "los políticos"	Descripción de actitud hacia la clase política y los políticos sin especificar a qué políticos se refiere.
Actitud reforma AFP	Posicionamiento frente al cambio del sistema de AFP, modificaciones parciales o reemplazo
Actitud reforma educación	Posicionamiento frente a cambios en sistema educacional, modificaciones parciales o reemplazo
Actitud voto voluntario	Actitud frente a la inscripción automática y el voto obligatorio
Actitudes frente a la desigualdad y pobreza	Concepciones, creencias y sentimientos frente al problema de la desigualdad y pobreza en Chile
Actitudes frente movilización social	Descripción de actitudes positivas o negativas frente a los movimientos sociales
Actitudes sobre el Congreso Nacional	Descripción de actitudes positivas o negativas frente a instituciones políticas
Actitudes sobre la Administración Pública	Descripción de actitudes positivas o negativas frente a instituciones políticas
Actitudes sobre Partidos Políticos	Descripción de actitudes positivas o negativas frente a instituciones políticas, particularmente los partidos y las coaliciones de partidos.
Actitudes sobre Tribunal Constitucional	Descripción de actitudes positivas o negativas frente al TC
apolítico	Se define como lejano a la política, de ninguna ideología ni partido político.
Aprendizaje cívico en colegio/universidad	Descripción de conjunto de saberes formales e informales transmitidos por y en la escuela y la universidad. También dentro de los saberes están las experiencias sociales de voluntariado a través del colegio y universidad

Cambio Sistema Electoral	Descripción de la valoración del cambio del sistema electoral Binominal al Proporcional Inclusivo
Centro político	Se identifica con el centro político por sobre izquierda o derecha
Centroizquierda	identificación con la Concertación o sectores de centroizquierda
Comisiones investigadoras	Descripción de la valoración en torno a las nuevas atribuciones del Congreso Nacional que además de representar debe fiscalizar
Derecha	Descripción de sentimientos de identificación política con derecha
Empresarios y empresarios y política	Descripción de las actitudes negativas o positivas sobre la relación entre el empresariado, el financiamiento de la política y los partidos políticos
Estado y Mercado	Descripción respecto del papel que tiene y debe tener el sector privado en la sociedad
Experiencia dirigente institución educativa	Descripción de cargos y de experiencia de participación vivida como dirigente en el ámbito educacional
Financiamiento de la política	Descripción de las actitudes frente a las reformas del financiamiento público de la actividad política
Identificación política con líderes	Valoración, opinión y mención a líderes políticos e intelectuales como Pinochet, Salvador Allende, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Jaime Guzmán, etcétera.
Interpelación a ministros de gobierno	Descripción de la valoración en torno a la facultad del Congreso de interpelar a ministros de gobierno
Ley de cuotas	Actitudes sobre la incorporación obligatoria y legal de las mujeres como candidatas a cargos políticos representativos
Mecanismo de cambio constitucional	Creencias en torno al “deber ser” de ejecutar un cambio constitucional
Militancia y simpatía partidista	Descripción de afiliación y pertenencia a partido político o simpatizante de un partido político
Motivaciones dirigenciales	Descripción de las razones y sentimientos que han motivado su participación como dirigente empresarial
Origen social	Situación socioeconómica en la infancia y adolescencia
Percepción del clima social y político	Sentimientos y evaluaciones sobre las grupos políticos y las tendencias ideológicamente predominantes de la época (Pre-Unidad Popular, Unidad Popular, Régimen militar)
Percepción evolución sociedad	Percepciones sobre el orden social y su evolución. Percepciones sobre procesos de individualización en detrimento de la solidaridad o viceversa.
Proceso Constituyente	Actitudes en torno al Proceso Constituyente para la Nueva Constitución
Propiedad privada	Creencias en torno a una amenaza de un nuevo orden constitucional y el derecho de propiedad
Razones de abstención	Descripción de las razones del dirigente sobre por qué se produce la abstención electoral

Reforma agraria	posicionamiento frente a reforma agraria
Reforma o nueva constitución	Creencias en torno a la posibilidad de hacer una Nueva Constitución
Rol de los gremios en política institucional	Descripción del papel de los gremios en el sistema político (democracia representativa y/o democracia orgánica)
Rol, implicación y competencia ciudadana	Descripción de implicancia asignada a los ciudadanos en la construcción del orden sociopolítico
Senadores designados	Descripción de la valoración sobre la reforma constitucional que elimina a los senadores designados del régimen político
Sentimientos lealtad política familiar	Descripción de tendencia política de los padres y si existe transmisión y lealtad política entre entorno familia e individuos (Izquierda, centro, derecha, apolítico)
Trayectoria dirigencial	Descripción de los lugares, cargos y actividades que han desempeñado en su vida como dirigentes empresariales
Valor: apertura al cambio	Aprobación del cambio y estimulación hacia la búsqueda de nuevas ideas y experiencias
Valor: Conservador	Énfasis en el mantenimiento del status quo y evitación de la amenaza
Valoración modernización autoritaria	Descripción de la valorización de las transformaciones estructurales durante el régimen militar (económicas, políticas y sociales). También se hacen referencia a la experiencia de la UP para destacar la valoración del régimen militar y los cambios provocados
Valoración y vivencia de la transición	Descripción de la valorización del proceso de transición a la democracia (1988–1990). También en este código se incluyen algunas vivencias del proceso de transición (dónde estaban, qué hacían, etcétera).
Valores políticos	Adhesión a valores como libertad, democracia e igualdad
Valores sociales	Individualismo y solidaridad, asociados a la concepción de sociedad del entrevistado.
Valores: materiales y postmateriales	Predominancia de valores materiales o postmateriales
Violación Derechos Humanos	Sentimientos y evaluaciones en torno a la violación de los DD.HH durante el período autoritario
Vivencias personal y/o familiar dictadura	Descripción de vivencia persona y familiar durante el régimen militar
Vivencias personal y/o familiar Unidad Popular	Descripción de vivencia personal y familiar durante la Unidad Popular

## 2. Carta formal de invitación para participar en el estudio



Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  
Campus Somosaguas. –29223 Pozuela de Alarcón, Madrid, España

Somosaguas, 4 de Diciembre de 2017

A quien corresponda.,

### **Presente,**

El Sr. Nelson Alejandro Osorio Rauld, Becario de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) e investigador del Doctorado en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, le invita a participar en una investigación que se propone como principal objetivo rescatar desde una perspectiva científica las trayectorias empresariales, las experiencias de los dirigentes y las valoraciones políticas de los empresarios en torno a algunos de los temas más relevantes del país.

Por tal razón, muy comedidamente quisiera invitarlo a ser parte de este proyecto, facilitando la oportunidad de hacerle una entrevista, teniendo en consideración que su opinión es muy valiosa para este estudio, la que será utilizada únicamente con fines académicos.

De antemano agradezco su atención y la colaboración,

Le saluda cordialmente,

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir "Nelson Alejandro Osorio Rauld".

Nelson Alejandro Osorio Rauld  
Universidad Complutense de Madrid  
Correo: [nelsonos@ucm.es](mailto:nelsonos@ucm.es)  
Móvil: (+34) 661 513 264